







Historia Argentina Contemporánea

Pasados presentes de la política,
la economía y el conflicto social



Historia Argentina Contemporánea

Pasados presentes de la política,
la economía y el conflicto social

Susana de Luque - Ariel Filadoro - Alejandra Giuliani
Elena Marcaida - Miguel Mazzeo - Sergio Nicanoff
Fernando Pita - Alejandra Rodríguez - Sebastián Rodríguez
Mabel Scaltritti - Elena Scirica - Ezequiel Sirlin



dialektik

historia y sociedad

Dirección editorial: Daniel Campione y Darío Stukalsky
Corrección: Gabriela Ventureira
Fotografía de tapa: Alejandro Elías. Gentileza de *Página/12*

© 2008, de los autores
© 2008, Dialektik Editora
Gral. Juan Lavalle 1087,
(1638) Vicente López, Buenos Aires, Argentina
ediciones@dialektik.com.ar / www.dialektik.com.ar

Primera edición, segunda reimpresión agosto de 2013
978-987-22769-3-5
Hecho el depósito que indica la ley 11.723
Editado en Argentina

Historia argentina contemporánea : pasados presentes de la política,
la economía y el conflicto social / Mabel Susana Scaltritti...[et.al]. -
1a ed. 2a reimp. - Vicente López : Dialektik Editora, 2013.
512 p. ; 22x16 cm. (Historia y sociedad)

ISBN 978-987-22769-3-5

1. Historia Argentina.
CDD 982

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, mecánico, óptico, químico, de grabación o de fotocopia, sin el permiso del editor.

Índice

Prefacio	9
Introducción.....	11
Estado y sociedad, régimen político y régimen de acumulación. Algunos conceptos para la comprensión de la historia argentina <i>Susana de Luque y Miguel Mazzeo</i>	17
Afianzamiento y expansión del capitalismo. Un nuevo orden internacional (1850-1930) <i>Elena Marcaida y Mabel Scaltritti</i>	37
La construcción del Estado nacional argentino. (1852-1880) <i>Elena Marcaida y Mabel Scaltritti</i>	49
Los cambios en el Estado y la sociedad. Argentina (1880-1930) <i>Elena Marcaida, Alejandra Rodríguez y Mabel Scaltritti</i>	61
La crisis de 1929 y las transformaciones en la situación internacional <i>Susana de Luque y Mabel Scaltritti</i>	105
Una década de transición: el Estado y la sociedad argentinos durante los años 30 <i>Susana de Luque y Mabel Scaltritti</i>	117
Conformación y límites de la alianza peronista (1943-1955) <i>Alejandra Giuliani</i>	161
El ciclo de la economía mixta en el capitalismo central (1945-1973) <i>Ezequiel Sirlin</i>	199

Proscripción, modernización capitalista y crisis. Argentina (1955-1966) <i>Elena Scirica</i>	213
La “Revolución Argentina” y la crisis de la sociedad posperonista (1966-1973) <i>Sergio Nicanoff y Sebastián Rodríguez</i>	251
Regreso y fracaso en tres actos: el peronismo (1973-1976) <i>Sergio Nicanoff y Fernando Pita</i>	319
La globalización neoliberal. Algunas definiciones generales <i>Miguel Mazzucco</i>	353
La última dictadura: genocidio, desindustrialización y el recurso a la guerra (1976-1983) <i>Ezequiel Sirlin</i>	369
El retorno a la democracia: la herencia de la dictadura y las ilusiones frustradas (1983-1989) <i>Ariel Filadoro, Alejandra Giuliani y Miguel Mazzucco</i>	415
Los noventa: del éxito al fracaso... ¿de quién? <i>Ariel Filadoro</i>	437
A modo de epílogo: la crisis de 2001 en el espejo de la historia	501

Prefacio

Este libro es el fruto del esfuerzo de un grupo de docentes interesados en las ciencias sociales que, desde hace veinte años, compartimos la pasión de enseñar Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires.

La inserción en este peculiar proceso de enseñanza-aprendizaje nos condujo a la elaboración de este trabajo, que tiene como destinatarios tanto a alumnos y docentes como a lectores interesados en reflexionar sobre el pasado y el presente de nuestro país. El objetivo es presentar, de manera introductoria, algunos de los problemas que consideramos centrales en la historia de la sociedad y el Estado argentinos. Con ese criterio enmarcamos en enfoques generales estudios puntuales que —nacidos en centros o institutos de investigación— requieren, muchas veces, de conocimientos especializados para su comprensión.

No pretendemos, por lo tanto, conclusiones originales sino una síntesis que despierte el interés, proponga, aun en forma de hipótesis, algunas reflexiones y posibilite entender el devenir de una sociedad no como el producto de azares o voluntades unívocas, sino como el resultado las acciones colectivas, en un tiempo y espacio determinados.

El libro es producto de un reto. Hacia 1989, al publicar nuestro primer trabajo sobre la historia argentina entre 1880 y 1943, nos autoimpusimos continuarlo hasta la actualidad. Abrevando en la experiencia de esa obra inaugural, este libro trata de una historia común, la de los argentinos. Una historia apasionante, a la vez que compleja y dramática, que se extiende desde la construcción del Estado nacional hasta el presente. Larga etapa, en que las representaciones dominantes sobre un futuro opulento para Argentina y los argentinos fueron reemplazadas por un hoy ominoso, donde la ansiada grandeza se trocó en pobreza, exclusión, dependencia y brutal endeudamiento.

La obra comparte con otras producciones historiográficas un marco temporal y espacial, así como ciertos principios explicativos y conceptos estructurantes que, más allá de la diversidad de teorías y enfoques existentes, gozan de extendida aceptación en las ciencias sociales.

Dado que aceptamos que el conocimiento social es problemático, provisorio y que está en constante discusión, enriquecimiento y reelaboración, incorporamos en nuestros análisis los debates académicos considerados más relevantes para la comprensión del pasado y el presente de Argentina.

La obra está articulada en torno a ejes que intentan promover la comprensión de los procesos y hechos más significativos de la historia argentina contemporánea y alentar el establecimiento de relaciones con otras escalas geográficas, así como entre pasado y presente. Desplegamos conceptos que consideramos clave para los objetivos expuestos, tales como Estado, régimen político, gobierno, ideología, hegemonía, legitimidad, régimen de acumulación, estructuración social y acción colectiva, todos ellos incluidos en una red de relaciones significativas que intenta captar a la realidad social como un todo dinámico y coherente.

Finalmente, si bien situamos en la génesis de la formación del Estado muchos de los problemas estructurales actuales, en el libro enfatizamos el tratamiento de temas correspondientes a la segunda mitad del siglo XX y el presente. Tal decisión se apoya en el interés que las problemáticas del período despiertan en la sociedad y que, por lo general, son desatendidas o abordadas fragmentariamente, tanto en la educación secundaria como en los institutos de formación docente. Un grave déficit, por cierto, que desde aquí, humildemente, intentamos saldar.

Agradecemos en especial a Carola Davicino y Juan Carlos Cáceres sus aportes y críticas, a compañeros, colegas y amigos su aliento y estímulo, y a nuestras familias su colaboración y compromiso. Una mención final para Daniel Campione, que realizó una lectura crítica, aportando valiosos comentarios, y especialmente para Darío Stukalsky, por su acompañamiento y apasionada tarea de editor.

Los autores
Febrero de 2006

Introducción

Nuestro país transita un camino de profundas transformaciones. Muchos de esos cambios responden a las modificaciones que se han producido y se producen en el mundo. En medio de la mudanza, el presente y el futuro se nos presentan problemáticos, críticos y confusos.

Creemos que la mirada histórica ayuda a despejar estas incertidumbres: nos remite al pasado para encontrar las claves que permitan descifrar el presente y vislumbrar el futuro. De allí la utilidad de explayarnos en el conflictivo y simultáneo proceso de constitución del Estado nacional, de incorporación de Argentina al mundo y conformación, hacia fines del siglo XIX, de una nueva sociedad.

Argentina fue entonces un país en crecimiento. En forma rápida y exitosa se incorporó al mundo. Pobló su territorio, desarrolló su economía, construyó caminos y puertos. De pastoril y desértica se transformó en moderna. En esos días, sin embargo, adquirió las características y modalidades que están en la base de su deterioro posterior. En una compleja relación articuló su Estado, su economía y su sociedad de una manera que a largo plazo la condujo al atraso material y a una gran desigualdad social.

Llegó tarde al desarrollo de un capitalismo que, iniciado en Europa occidental, tenía allí no sólo la posibilidad de controlar el ritmo del proceso, sino también la originalidad de producir sus crisis. Si la hora de arribo fue importante, aun más lo fue la manera de llegar. Argentina lo hizo a partir de un capitalismo agrario de exportación, facilitado por la ampliación de la demanda internacional y por sus tierras extraordinariamente fértiles, además del aporte del capital y la mano de obra extranjeros.

El Estado se transformó en un agente esencial de la modernización. Central antes que nacional, creó los mecanismos de recaudación, el sistema monetario, el aparato coercitivo y la simbología de una nación que encontraba el motor del crecimiento en la región pampeana y, excepcionalmente, en algunas economías regionales, creando una dependencia del interior respecto del litoral pampeano. El control del Estado se hizo vital para los grupos dominantes en su afán de garantizar el ritmo, el modo y los beneficios de la modernización, y generó esa

realidad paradójica de la historia argentina en que los principios del liberalismo económico coexistían con un régimen político conservador.

La economía, fluctuante al compás de las coyunturas internacionales, creó un tipo de empresario que, atento a los ciclos a los que éstas lo sometían y a las ventajas que otorgaba un bien natural como la extensa y fértil región pampeana, orientó sus capitales hacia el beneficio inmediato, fácil y seguro antes que a la inversión de riesgo y a largo plazo, a la especulación antes que a la reinversión. El empresariado argentino multiplicó sus actividades en la producción de bienes agrarios, negocios inmobiliarios, inversiones financieras, construcción de puertos y ramales ferroviarios, elaboración de productos manufacturados y en otras de las innumerables oportunidades económicas que ofrecía un país en expansión. Su crecimiento se vinculó, por lo tanto, más al aprovechamiento de las coyunturas antes que a diseñar estrategias de largo plazo.

La sociedad creció al ritmo de la economía agroganadera-exportadora. Llegaron los inmigrantes, en cantidades que no tenían y no tendrían igual en la historia argentina. Atraídos por las muy proclamadas riquezas de los campos, su destino final fue a menudo el regreso a sus países de origen o el asentamiento en las ciudades del litoral pampeano. Éstas crecieron significativamente como en la Europa de los siglos XVIII y XIX, aunque, a diferencia de lo que allí había sucedido, en Argentina no hubo una revolución industrial en la génesis del fenómeno de urbanización.

Nacieron nuevas formas de conflicto que ya no enfrentaban a las oligarquías porteñas con las del interior o a los comerciantes con los terratenientes sino a nativos con inmigrantes y a trabajadores con patrones. Se desarrollaron algunas instancias representativas y cobraron vida los primeros partidos políticos modernos. Las posibilidades de integración, sin embargo, fueron condicionadas por los factores de exclusión. Los trabajadores extranjeros fueron reconocidos como habitantes pero no como ciudadanos, condición que tampoco ostentaban los nativos, en la medida en que la oligarquía cerraba los caminos de participación y de acceso al poder. La “argentinidad”, forjada desde instancias tanto de control como de integración social como la educación pública o el servicio militar, se combinó con un régimen económico y político excluyente.

Con el tiempo nació la impugnación política como centro del reclamo, insinuando la que sería otra característica de nuestra historia: el control del Estado como instrumento necesario en la distribución de la riqueza.

En 1912, la reforma electoral que la oposición arrancó al régimen oligárquico (a la vez “autorreforma” impulsada por el sector modernizador de la élite) condujo a la ampliación del espacio político y modificó el criterio de construcción del poder para acceder al Estado. El radicalismo incorporó un principio de legitimidad basado en la extensión de la base social sufragante. Fundamentalmen-

te expandió el voto, lo transformó en secreto y obligatorio, instalando la idea de que el poder emana de las voluntades individuales y de la actividad política, antes que del acuerdo con las corporaciones.

El golpe militar de septiembre de 1930 inauguró una nueva era en que la clase dominante, en el marco de una crisis profunda del capitalismo mundial, recuperó el manejo del Estado a través de la intervención del Ejército. Éste había ido adquiriendo centralidad en el control social interno en los conflictos de la década anterior. Desde 1930, sería protagonista privilegiado de la historia política argentina.

A partir de la década de 1930, la relación entre crisis económica e inestabilidad política quedó inaugurada. La fuerza como recurso se reinstaló como parte constitutiva y predominante del régimen político, legitimando la interrupción de la normalidad institucional y el avasallamiento de los derechos políticos.

La crisis obligó a redefinir el rol del Estado y el intervencionismo estatal fue, durante varias décadas, parte de la vida económica y social del país. Urgidos por la situación internacional, los mismos intereses que habían hecho de Argentina el granero del mundo introdujeron la industrialización, giraron la dependencia hacia Estados Unidos y fueron creando las condiciones para el nacimiento de otra sociedad.

El proceso de industrialización se caracterizó por nacer muy asociado al capital extranjero y por centrarse en la producción de bienes de consumo final. La industria que se consolidó fue liviana y débilmente integrada. Además, creó las condiciones para que se afanzara la urbanización y se transitara hacia una sociedad de masas. Las ciudades se poblaron de migrantes internos que, aceptados como mano de obra, fueron marginados en lo político y social.

La industrialización, la presencia del Ejército como “actor político legítimo” y la exclusión política de grandes masas fueron los rasgos más característicos de esta nueva etapa en Argentina.

Cuando a mediados de la década del 40 una coyuntura interna e internacional lo facilitó, los nuevos actores sociopolíticos que se constituyeron en los años 30 concretaron una alianza de poder que brindó las condiciones para el surgimiento del peronismo.

La “independencia económica” y la “justicia social”, premisas fundamentales de la doctrina de Juan Domingo Perón, fueron propiciadas a través de un esquema de desarrollo industrial y de una distribución más equitativa de la riqueza nacional que permitieran hacer frente a un doble desafío: la vulnerabilidad económica y la expansión del socialismo. Para garantizarlo, el Estado peronista profundizó y redefinió la intervención del Estado en un intento por influir, con más eficacia y equidad que el mercado, sobre el rumbo del desarrollo económico.

Rechazado y hostigado por los grupos más concentrados del capital y por las clases medias, Perón sentó sus bases de apoyo en fracciones de la burguesía industrial y, sobre todo, en los trabajadores y el movimiento sindical, transformando radicalmente la intervención del Estado en los conflictos laborales. Su gobierno estará signado por la dificultad de controlar, bajo tal coalición, la crisis económica de principios de la década de 1950, primer cuello de botella del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) que el peronismo expandió hasta sus límites.

El golpe de Estado de 1955 inauguró un período complejo. Mientras que el núcleo de las instituciones socioeconómicas intervencionistas fue conservado, los gobiernos que se sucedieron hasta 1966 intentaron recrear un régimen político liberal-democrático sin peronismo. Los mismos se caracterizaron por su debilidad e inestabilidad, derivada en parte por la ilegitimidad que entrañaba la proscripción del peronismo y, de modo más profundo, por una crisis de hegemonía causada por las contradicciones internas entre las distintas fracciones de la burguesía y el desfase que, recurrentemente, se producía entre el acceso al control del Estado de alguna de ellas y las tendencias de una economía sumida en reiterados ciclos de auge y depresión.

Las Fuerzas Armadas, que, en una escalada de violencia creciente, tomaron una vez más el control del Estado en 1966, tampoco pudieron establecer un control político viable sobre una sociedad civil donde los conflictos distributivos se agravaban a medida que la economía recaía en sus crisis cíclicas.

La dictadura de 1966-1973 intentó resolver “el empate hegemónico” a través de la proscripción total de la política, en tanto se abocaba intensamente a recorrer el “tiempo económico”, profundizando el esquema de desarrollo anterior (ISI) pero ahora con un predominio marcado del capital monopólico transnacional. El Cordobazo inauguró un ciclo inédito de luchas populares e hizo trizas la ilusión de maniatar a la sociedad para alcanzar una modernización que beneficiaba, sobre todo, a la burguesía industrial transnacional. A partir de 1970, la aceleración y profundización de las luchas sociales, apoyadas en el surgimiento de distintas organizaciones populares, incluso armadas, develó una crisis orgánica que obligó a la dictadura a pactar con Perón la salida electoral, restableciendo la legitimidad constitucional.

Sin embargo, ni la presencia de Perón, ni su acceso a la presidencia pudo contener las tensiones políticas, sociales y económicas acumuladas. Ni siquiera saldar el enfrentamiento político dentro del peronismo, adonde se había trasladado el núcleo de la crisis orgánica provocada por la confrontación de dos proyectos antagónicos: uno socialista, el otro capitalista.

En el escenario de una crisis del capitalismo mundial que ponía en entredicho las bondades del Estado de bienestar-keynesiano y al fordismo como régimen

de acumulación, la muerte de Perón desencadenó finalmente la pura violencia, como medio legitimado de resolución de los conflictos.

La continuidad de la trama estuvo una vez más a cargo de los militares. La dictadura que instalaron en 1976 fue la embestida más terrorífica de cuanto se oponía al orden dominante que se produjo en nuestra historia. Su objetivo, la refundación del capitalismo liberal, fue instrumentado a través de una violencia sólo equiparable al avance de la frontera blanca en la segunda mitad del siglo XIX.

En el país del golpe de Estado intermitente, la última dictadura se diferenció de las anteriores por sus acciones extremas no contempladas siquiera por la dictadura de 1966. Desarticuló buena parte de las redes sociales y la capacidad de contestación de la sociedad; transformó la economía sobre nuevas bases de acumulación y arrastró los fundamentos del Estado interventor. Su impronta fueron las “constantes destructivas”: desindustrialización relativa, desocupación estructural, descenso integral de las clases subalternas, desguace del patrimonio estatal, decadencia de las prestaciones sociales, endeudamiento extremo, fuga de capitales, primacía de las ganancias financieras, concentración del ingreso.

En 1983 la restauración de la legitimidad constitucional no pudo modificar estas tendencias destructivas sino que las ahondó. En un proceso que Eduardo Basualdo —tomando a Antonio Gramsci— denominó como transformismo, asistimos a la reconfiguración de los distintos actores políticos y sociales: los sectores dominantes se convirtieron en sufragistas populares, los políticos en gestores de la ingeniería institucional que impuso al mercado como depositario de poder y constructor de políticas, transformando a todo el sistema político y a la sociedad en mercancías; los dirigentes sindicales en propulsores de la flexibilidad laboral y la apertura neoliberal. La exclusión social de los sectores populares fue considerada el resultado no deseado del ingreso al “Primer Mundo”.

La crisis de 2001 irrumpió como un volcán activado, derramando su lava de frustración e impotencia sobre el país. Nuevamente funcionó la constante respuesta: represión y violencia sobre los sectores populares.

Aún en medio de la destrucción de las redes sociales y de una fragmentación social y política inédita, la sociedad emerge, resistiendo y luchando por alcanzar protagonismo y participación en el proceso histórico.

*Elena Victoria Marcaida
Febrero de 2006*



Estado y sociedad, régimen político y régimen de acumulación. Algunos conceptos para la comprensión de la historia argentina

Susana de Luque y Miguel Mazzeo

1. Ciencias sociales y marcos teóricos

Las disciplinas científicas reclaman para sí el poder de determinar cuál es la verdad científica. Una verdad “objetiva” que se caracteriza, en principio, por establecer una relación de correspondencia entre hechos empíricos y teorías abstractas que los interpretan y los explican a través de determinadas categorías y relaciones entre categorías. Esto implica la construcción de marcos teóricos que otorguen sentido a los hechos y permitan comprenderlos.

En el caso de las disciplinas sociales (historia, sociología, economía, psicología, antropología, derecho y lingüística, entre otras), éstas recortan su objeto de estudio y reflexionan sobre algún aspecto de la vida de los hombres en sociedad. El estudio del hombre y su actividad social presenta particularidades que lo diferencian profundamente del resto de los objetos de estudio científico. Entre tales particularidades se encuentran su capacidad de pensamiento racional, sus valores, su lenguaje, la impredecibilidad de la conducta humana, la dificultad de experimentación y la conflictividad ética que supone, la historicidad del hombre, su sociabilidad, su cultura, las manifestaciones de su inconsciente, la vinculación entre la ciencia social y la política. Por estas razones, mucho más que en las ciencias físicas y naturales, en las disciplinas sociales son diversas las corrientes teóricas que rivalizan y pretenden que sus enunciados sean verdad científica.

Cada una de tales corrientes parte de unos presupuestos teóricos que involucran una concepción determinada del hombre, la sociedad, el Estado, el mercado. Cada una de ellas define los conceptos con los que trabaja y establece las relaciones que existen entre ellos (por ejemplo, ¿qué relación existe entre la economía y la sociedad?, ¿qué rol juega lo político?, ¿cuál es el rol deseable para el Estado?, etc.). Cada una de ellas define y construye un modelo interpretativo

de la realidad histórica que es inseparable de un conjunto de valores y presupuestos.

Esta introducción pretende dejar en claro algunos lineamientos conceptuales que rigen la perspectiva teórica desde donde analizaremos la historia argentina contemporánea. Ello implica definir las principales categorías que serán utilizadas y que fundamentan la periodización histórica que será planteada.

1.1 Un modelo de interpretación: las relaciones entre la sociedad y el Estado

Partimos de la idea de que la sociedad y el Estado son el resultado de la actividad humana y de que esta actividad se desarrolla siempre en un contexto histórico delimitado por condiciones materiales que son independientes de la voluntad de los hombres. Esta afirmación implica entender (junto con el marxismo) que el estudio de la historia debe partir del análisis de las condiciones materiales de vida de los hombres. Qué producen y con qué recursos (fuerzas productivas), cómo lo producen y lo distribuyen (relaciones sociales de producción). El hombre se relaciona con la naturaleza transformándola a partir de la energía que le imprime con su trabajo y con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Este trabajo no lo realiza un hombre solo ni aislado sino relacionado con un conjunto social del cual forma parte.

Las fuerzas productivas están constituidas por la articulación de los recursos con los que cuenta una sociedad y que se ponen en juego en la realización del trabajo social. Éstos pueden ser naturales –pampa húmeda, petróleo, riqueza ictícola, riqueza forestal, animal, etc.–, sociales –división social de la población (sexos, formación, salud)– y tecnológicos.

En la explotación de estos recursos y la realización del trabajo social, el hombre establece relaciones sociales con otros hombres que dan lugar a la formación de distintos grupos o clases sociales y a diversas formas de conflicto por la apropiación de los recursos y los excedentes generados.

El protagonismo que tienen las relaciones económicas y sociales sólo es comprensible si junto con ellas se analizan las relaciones de dominación o políticas. Éstas instituyen un modo de relación entre dominantes y dominados, son acordes a un discurso y una cultura que es hegemónica, predominante.

Sostenemos la existencia de una articulación imprescindible entre las relaciones económico-sociales y las de orden político que incluyen al Estado. Ambos modos de relación son momentos diferentes de una misma totalidad histórico-social particular.

Generalmente se hace referencia a la *sociedad civil* para designar al conjunto de las relaciones entre individuos, grupos y clases sociales desarrolladas por fuera de las relaciones de poder del Estado. Nosotros consideramos que la sociedad y el Estado no pueden verse como entidades escindidas; por el contrario, creemos que constituyen una totalidad compleja, antagónica y contradictoria, en la cual los conflictos entre las clases sociales (consecuencia de su posición desigual en la estructura de poder económico, en el acceso a los bienes sociales y en la participación en la estructura de poder político) ocupan un lugar central. Estos conflictos remiten a las variadas formas de tensión, oposiciones y contradicciones en las relaciones sociales y pueden derivar en acciones colectivas que impliquen modificaciones más o menos profundas del orden establecido.

Marx acuñó el concepto de modo de producción para definir totalidades históricas que, como el capitalismo, el esclavismo o el modo productivo feudal, entre otros, representaron configuraciones histórico-sociales particulares. En un modo de producción se articulan las relaciones económico-sociales con las relaciones de dominación bajo determinadas condiciones históricas. Las relaciones de dominación tienen un rol clave en la reproducción del sistema en su conjunto ya que tienden a legalizar y legitimar un orden social desigual.

En el caso del modo de producción capitalista puede decirse que surgió a mediados del siglo XVIII y representó transformaciones muy profundas en todos los órdenes de la vida humana (económicos, sociales, culturales y políticos). El capitalismo se organizó alrededor de instituciones tales como la propiedad privada, el trabajo asalariado, la producción industrial para el mercado y el nuevo Estado Nacional. Nuevas leyes, instituciones y organizaciones políticas se constituyeron articulándose con la nueva economía y la renovada sociedad. El nuevo orden político liberal que venía a reemplazar a la monarquía acarrió la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), la defensa de los derechos individuales (civiles en general: de propiedad, tránsito, educación, trabajo, religión, etc.) y la independencia del poder judicial, clave para garantizar el cumplimiento de tales derechos. Más tarde, y producto de diversas luchas, se desarrollaron instituciones y prácticas democráticas que tendieron a incorporar a la población en términos de sus derechos políticos (primero) y sociales (después). Las diversas crisis internacionales sufridas por el modo de producción capitalista a lo largo de su historia dieron lugar al surgimiento de nuevas modalidades de acumulación que, sin alterar los pilares básicos capitalistas (como la propiedad privada o el salario), incluyeron distintos modos de producir un excedente, de organizar el trabajo, de regular la moneda y la economía internacional. Estas modalidades constituyen los distintos regímenes o patrones de acumulación. Del mismo modo, las crisis produjeron reformulaciones históricas del rol del

Estado y de su articulación con la sociedad. Estas modificaciones y reformulaciones tanto del Estado como de la sociedad pueden ser consideradas como estrategias de supervivencia del orden global.

La historia argentina debe ser leída en relación con el orden económico internacional del cual forma parte y al que se integra definitivamente a fines del siglo XIX. Por esta razón, las crisis globales del sistema capitalista y las modalidades que éste adquiere tras las crisis, han sido el marco de reformulaciones y readaptaciones locales.

Identificamos tres momentos históricos decisivos que, a partir de la consolidación del capitalismo en Argentina a fines del siglo XIX, han conformado en nuestro país totalidades complejas que implicaron la interrelación de un régimen de acumulación, una estructura social determinada —clases hegemónicas y subordinadas o subalternas—, una forma particular de Estado, una ideología dominante y una lógica de acción colectiva. Estas totalidades reconocen regímenes políticos diferentes que también serán analizados en esta introducción.

2. Formas de Estado. Ideología y hegemonía. Régimen político

El concepto de Estado ha generado importantes debates en el campo específico de las ciencias sociales. Hace tiempo que se habla, por ejemplo, de una “teoría del Estado”. El Estado ha sido objeto de tantas definiciones que sería harto difícil dar cuenta de todas ellas. Ésa, por otra parte, no es nuestra intención. Sencillamente proponemos delimitar una idea de Estado “capitalista” clara (aunque discutible) y apta para la comprensión del esquema interpretativo propuesto. Como primera definición podemos decir que el Estado es esencialmente una instancia de concentración y organización del poder que permite ejercer la dominación. Según Max Weber, “dominio de hombres sobre hombres basado en el medio de la coacción legítima (es decir: considerada legítima)”¹. En términos de Guillermo O’Donnell, el Estado es “el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorial delimitada...”².

Consideraremos al Estado en tres dimensiones entrelazadas y complementarias: la instrumental, la estructural y la política. Desde el punto de vista de la

1 Y agrega Weber que para que el Estado subsista: “es menester que los hombres dominados se sometan a la autoridad de los que dominan en cada caso”. Max Weber: *Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 1057.

2 Guillermo O’Donnell: “Apuntes para una teoría del Estado”, *Revista de Sociología Mexicana*, N° 4, diciembre de 1978, p. 1158.

dimensión instrumental, el Estado puede verse como la instancia que encarna un poder generado en ciertas clases o fracciones de clase. El Estado respondería, en última instancia, a los intereses de esas clases. Sería una “herramienta” de coerción y consenso que los sectores dominantes utilizarían para mantener su poder³. El Estado no obedecería a la clase sino que articularía intereses en función de una determinada estrategia de acumulación impuesta por los sectores “más dinámicos” y con mayor poder. Desde el punto de vista de la *dimensión estructural*, el Estado aparece como la instancia encargada de reproducir a la sociedad como un todo, garantizando la asimetría, asegurando la acumulación de capital y neutralizando por diversos medios a los movimientos sociales antisistémicos. El Estado sería básicamente una relación social específica vinculada con la sociedad por determinaciones estructurales: “El Estado garantiza y organiza la reproducción de la sociedad *qua* capitalista porque se halla respecto de ello en una relación de ‘complicidad estructural’...”⁴. Desde el punto de vista de la *dimensión política*, el Estado aparece como la expresión de la lucha de clases y se considera que las políticas estatales constituyen un objeto de esas luchas, o sea que como mecanismo reproductor de la sociedad capitalista no es “perfecto” y es susceptible de expresar, en distintos grados, los intereses de los sectores subordinados. El hecho de tener en cuenta esta dimensión no debería llevarnos a sostener que el poder es un fenómeno eminentemente político, negando su carácter social.

Las dimensiones identificadas, aunque algunas más que otras, evidencian la función de dominación del Estado (la dominación es una forma de relación social basada en la asimetría y la desigualdad), y esta función remite al ejercicio del poder sobre un conjunto extenso de personas. Este poder implica la capacidad de ciertos individuos y/o grupos para imponer su voluntad sobre otros que pueden resistirse o no. Por lo tanto, para comprender el funcionamiento de un Estado capitalista no es suficiente limitarse a las funciones que ponen el acento en los mecanismos de coerción. Aquí se hace necesario incorporar la noción de *hegemonía* que se relaciona con la organización del consentimiento. En este sentido, para ser hegemónicas, las clases dominantes deben superar los marcos estrechos de sus intereses particulares y aspirar a ejercer un liderazgo moral e intelectual que les permita organizar un amplio bloque social de fuerzas. Una clase hegemónica ejerce un liderazgo político que le permite construir un consenso amplio sobre la legitimidad del modelo u orden impuesto.

3 Una versión más matizada de esta dimensión considera al Estado como “capitalista colectivo ideal”, es decir, como organizador de los “intereses comunes” de la clase dominante.

4 Guillermo O'Donnell: *op. cit.*, p. 1176.

En realidad, siguiendo a Antonio Gramsci, la hegemonía es una combinación entre dirección y dominación, entre consentimiento y fuerza. En el proceso de construcción de la hegemonía y en la búsqueda de legitimidad y aceptación de determinadas formas de distribución y acumulación, los discursos juegan un papel fundamental. Tales discursos tienen la capacidad de definir e instalar los ejes temáticos que son considerados relevantes. En este punto es interesante tener en cuenta que la lucha social se libra tanto en el plano de los símbolos, los discursos y la construcción de subjetividades como en el plano económico. Ambos planos son parte de la misma realidad.

La función hegemónica es ejercida en el nivel ideológico y cultural. A través de esta función las clases dominantes obtienen el *consentimiento* de las clases subalternas, lo que implica que la visión del mundo de las clases dominantes no puede imponerse a las clases subalternas a través de variables meramente coercitivas. Sin dudas, existieron y existen formas autoritarias para imponer una determinada visión del mundo, pero estas formas dependen del grado de desarrollo de la sociedad civil. Para Gramsci la constitución de una capa de intelectuales es la condición para que una clase devenga autónoma; esto quiere decir que son los intelectuales quienes hacen que una clase social tome conciencia de su lugar y de su función en el marco de una determinada sociedad. La función hegemónica en regímenes liberales está asegurada en gran medida por organismos privados, por instituciones impulsadas por la libre iniciativa de la clase dominante. Estos organismos son los encargados de elaborar y difundir ideología. Como ejemplo, podríamos mencionar el rol del periodismo y la prensa en general, de las universidades privadas y, más recientemente, de fundaciones como FIEL o Mediterránea.

En determinados períodos históricos la hegemonía puede entrar en crisis, se produce un “desplazamiento” de la base histórica del Estado y se abre un período de *crisis orgánica*. Según Juan Carlos Portantiero, “la crisis orgánica es ‘una crisis del Estado en su conjunto’; esto es una crisis de los modos habituales con que se había constituido hasta entonces el compromiso entre dominadores y dominados (...) En esas condiciones lo que se ha producido es una ‘separación de la sociedad civil y la sociedad política’...”⁵. La construcción de la hegemonía plantea problemas que varían según el contexto histórico. Por ejemplo, en la actualidad, los desafíos se relacionan con la existencia de un capitalismo massmediático y de un poder global estructurado por símbolos e imágenes.

El concepto de hegemonía también puede ser relacionado con la noción de *capital simbólico*. Pierre Bourdieu llama capital simbólico “a cualquier especie de capital (económico, cultural, escolar o social) cuando es percibida según

5 Juan Carlos Portantiero: *Los usos de Gramsci*, Buenos Aires, Grijalbo, 1999, p. 59.

unas categorías de percepción, unos principios de visión y de división, unos sistemas de clasificación, unos esquemas clasificadores, unos esquemas cognitivos que son, por lo menos en parte, fruto de la incorporación de las estructuras de los campos considerados”⁶. Este autor sostiene que todas las teorías del Estado han ignorado el proceso de concentración de capital simbólico que caracteriza todo momento de génesis y consolidación del Estado. Para Bourdieu la concentración de capital simbólico debe ser vista como la condición de todas las formas de concentración de capital (político, cultural, material, social, etc.) o por lo menos como uno de sus momentos fundamentales, tanto o más importante que el monopolio de los mecanismos coercitivos. Ahora bien, para que este capital simbólico, en cualquiera de sus formas, pueda ser reconocido y valorado como tal, se tornan necesarias determinadas categorías de percepción social. Esto significa que el Estado construye sus propias condiciones de legitimidad, crea el campo que hace posible el ejercicio del poder. La hegemonía, desde esta perspectiva, aparece relacionada con determinadas estructuras incorporadas inconscientemente por los sujetos.

Para Bourdieu existe una “construcción estatal de las mentalidades”; dice: “la construcción del Estado va pareja con la construcción de una especie de trascendencia histórica común a todos sus ‘súbditos’. A través del marco que impone a las prácticas, el Estado instaura e inculca unas formas y unas categorías de percepción y de pensamiento comunes, unos marcos sociales de percepción, del entendimiento o de la memoria, unas estructuras mentales, unas formas estatales de clasificación”⁷.

En síntesis, desde la perspectiva propuesta por Bourdieu, podemos ver al Estado como “el resultado de un proceso de concentración de los diferentes tipos de capital, capital de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército, policía), capital económico, capital cultural o, mejor dicho, informacional, capital simbólico...”⁸. Esta concentración convertiría al Estado en dueño de una especie de “metacapital” o de un “capital específico” propio del Estado.

La construcción de la hegemonía exige que la dominación sea considerada legítima. La *legitimidad* puede considerarse como la capacidad del sistema para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad. El proceso de engendrar y mantener estas creencias implica la creación de determinados valores y valoraciones.

Como puede verse, el Estado integra un complejo sistema ideológico que exce-

6 Pierre Bourdieu: *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Barcelona, Anagrama, Colección Argumentos, 1997, p. 151.

7 Pierre Bourdieu: *op. cit.*, p. 117.

8 Pierre Bourdieu: *op. cit.*, p. 99.

de con creces sus funciones represivas. Este sistema apunta a consolidar los mecanismos de sometimiento social y las relaciones de dominación a través de las cuales se produce la apropiación de la voluntad del otro. Siguiendo a Göran Therborn⁹ podemos identificar distintas formas de dominación ideológica: adaptación (conformidad de los dominados, obediencia a los dominadores), inevitabilidad (obediencia por ignorancia de alternativas), deferencia (los dominadores son concebidos por los dominados como una casta aparte), resignación (que lleva a pensar que las alternativas son inviables), miedo, etc. Estas formas generan resistencias que también se expresan en formas ideológicas, o sea que la lucha de clases también se expresa en formas ideológicas.

Finalmente vale aclarar que, en contraposición al modelo liberal tradicional, consideramos que el Estado no es un “sujeto autónomo”, no es el “gestor de un supuesto equilibrio social” y es mucho más que un “vigilante nocturno”. El Estado no está por fuera ni por encima de la sociedad, no es un árbitro neutral, no representa el “interés general” aunque su esencia “mistificadora” y su necesidad de ser considerado legítimo y aceptado por el pueblo lo lleve a presentarse como tal.

El Estado tiene, desde nuestra perspectiva, un “carácter dual”. Ello implica considerar, por un lado, que goza de cierta autonomía¹⁰ y parece ocupar un lugar de neutralidad frente a las distintas clases sociales. Pero, por el otro, expresa los intereses de las clases dominantes y es funcional a ellas y a la reproducción de un sistema social basado en la desigualdad.

En el orden capitalista, el Estado aparece separado de la sociedad aunque en realidad es imprescindible para su reproducción. Es abstrayéndose de los antagonismos de clase y apareciendo frente a la sociedad como garante del bien común que el Estado contribuye a la reproducción de las relaciones sociales globales y de un orden desigual. Su “neutralidad aparente” permite, mediante una operación ideológica, legitimar frente a la sociedad sus principales acciones e instituciones. Sin embargo, a pesar de su autonomía relativa, el Estado no es una fuerza neutral que representa al interés general sino que encarna los intereses de la clase dominante y las reglas que produce sirven a los intereses de algunos grupos y no de todo el pueblo.

Para completar nuestra caracterización sobre el Estado, es importante considerar los atributos que confieren la “estatidad” (es decir, las características que

9 Göran Therborn: *La ideología del poder y el poder de la ideología*, México, Siglo XXI, 1989.

10 Podemos identificar un nivel de intereses y objetivos propios del Estado aunque articulados con los intereses y objetivos de la clase dominante.

hacen que una instancia de poder sea Estado). Siguiendo a Oscar Oszlak¹¹, en primer lugar, se encuentra la disponibilidad que tiene éste de ejercer el monopolio de la violencia física legítima. Esto significa que es sólo el Estado quien está legitimado por la sociedad para la utilización de la fuerza, tanto a través de las Fuerzas Armadas (seguridad externa) como del poder de policía (seguridad interna).

En segundo lugar, para la existencia de un Estado, es imprescindible que éste sea capaz de externalizar su poder, es decir, que sea reconocido por otros Estados que forman parte del sistema internacional. En tercer lugar, el Estado está habilitado para obtener recursos de la sociedad civil (mediante impuestos). Por último, el Estado también suele hacerse cargo de la difusión ideológica de los elementos que hacen a la nacionalidad, en los que pretende socializar a los ciudadanos. En este sentido, cuenta con instrumentos para la difusión de símbolos e ideas que vinculen a la población como nación (educación, medios de comunicación, etc.).

Como hemos mencionado, a partir de las distintas crisis del orden internacional y local, se producen reacomodaciones y reformulaciones en las “formas” que adquiere el rol del Estado. Tales formas no implican una modificación de los atributos principales que hemos desarrollado. Sin embargo, hacen referencia a los modos de intervención políticos y económicos de los grupos que detentan el poder y a los modos particulares de relación de esos grupos con la sociedad en cada época histórica. Las formas históricas del Estado en Argentina que analizaremos son las siguientes:

Estado liberal oligárquico (1880-1912) y Estado liberal democrático (1912-1930)

Corresponde al período de vigencia del modelo agroexportador que se conforma en nuestro país a partir de la integración de Argentina al mercado internacional y a la división internacional del trabajo.

Se caracteriza por colocar el eje en su rol de garante de los derechos individuales. Esta forma histórica planteó una clara separación entre el Estado y la sociedad. Durante esta etapa el Estado jugó un rol clave en la articulación de los intereses relacionados con las actividades primario-exportadoras y financieras. Los cambios políticos favorecidos por la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, que posibilitaron el ascenso del radicalismo al gobier-

11 Oscar Oszlak: “Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina”, *Desarrollo Económico* N° 47, vol. 21, enero-marzo, 1982.

no, no fueron acompañados por proyectos de redefinición del país en términos socioeconómicos. Esto significó que, a pesar de los cambios dentro del régimen político y la ampliación de la participación a los sectores medios, el Estado no alteró sustancialmente la base económica en la que se apoyaban los privilegios de los sectores agroexportadores diversificados. En este sentido cabe mencionar la caracterización de hegemonía compartida propuesta por Pucciarelli¹² para el período en que gobernó el radicalismo. Al margen del significado acotado que Pucciarelli le asigna al concepto de hegemonía, la caracterización refiere a que, si bien el gobierno estaba en manos de un partido que no representaba orgánicamente a la clase dominante, el esquema básico de relación entre la sociedad y el Estado no se modificó ya que los verdaderos resortes del poder político y las bases de dominación económica continuaban en manos de sectores de la burguesía multisectorial.

Estado intervencionista (1930-1943) e intervencionista benefactor (1943-1976)

Corresponde al período de desarrollo de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones y de surgimiento de nuevos sectores sociales vinculados a tal modelo. Las crisis económicas internacionales de 1929 y 1973 son, sin duda, dos acontecimientos fundamentales que alteraron el orden económico internacional y contribuyeron a delimitar un nuevo período en la historia nacional.

Durante la década del 30 se desarrolla un proceso de transformación económica, social y política vinculado con la necesidad de readecuar las estructuras vigentes —predominio del modelo agroexportador— a la nueva coyuntura internacional. El nuevo modelo incluía una orientación industrializadora que transformaba la estructura de clases sociales, realineaba las relaciones en el interior de los sectores dominantes locales y del capital extranjero y hacía surgir un nuevo sector social, el proletariado industrial. El rol del Estado también fue sufriendo modificaciones y se conformó un Estado intervencionista, regulador del proceso económico y también de las relaciones sociales. Frente a la complejización de la estructura social, el Estado fue desarrollando y ejerciendo en este período un carácter más autónomo que le permitía erigirse como árbitro de los conflictos entre los distintos

12 Alfredo Pucciarelli: “Conservadores, radicales, yrigoyenistas, un modelo (hipotético) de hegemonía compartida 1916-1930”. En Waldo Ansaldi, Alfredo Pucciarelli y José C. Villarruel: *Argentina en la paz de dos guerras 1914-1945*, Buenos Aires, Biblos, 1993.

sectores sociales. En los años 30 se consolidaron las bases de un modelo de crecimiento “hacia adentro” y en los primeros años de la década del 40 la industria superó al agro en el Producto Bruto Interno (PBI), lo que generó importantes cambios estructurales¹³. Con el ascenso del peronismo se desarrolló una nueva articulación del Estado con los nuevos actores sociales surgidos o consolidados al calor de los cambios estructurales de la década anterior. Esta articulación se basaba en un importante grado de participación de los sectores populares en organizaciones de la sociedad civil, en la producción y el consumo. El modelo económico se caracterizaba por un modelo industrializador que privilegiaba el mercado interno y el pleno empleo y que recurría al ahorro interno y a los recursos de las exportaciones para destinarlos a la inversión; por una fuerte tendencia a consolidar las posiciones del Estado y a colocar el eje en su rol de garante de los derechos sociales, y por favorecer el desarrollo de una cultura política igualitaria, orientada a lo público, a las ideologías globales y las identidades de clase –y/o nacional popular. Esta forma histórica se caracterizó por la interpenetración muy marcada del Estado en la sociedad¹⁴.

El período posperonista estuvo caracterizado por la inestabilidad política, producto de la proscripción del peronismo y por la presencia creciente de las Fuerzas Armadas en la vida política. Sin embargo, la industrialización y el desarrollo seguían siendo los ejes de un Estado que, si bien recortaba el poder sindical del peronismo, lo seguía reconociendo en sus negociaciones. Un régimen de acumulación basado en el desarrollo de la industria y cierto grado de incorporación de los sectores obreros siguieron presentes –si bien con no pocos intentos de debilitar a las organizaciones sindicales– en el ideario de los militares y los principales sectores de poder en Argentina.

Estado neoliberal (desde 1976)

Esta forma histórica que adquirió el Estado durante el proceso autoritario primero y democrático después, puede denominarse neoliberal en la medida en que se caracteriza por colocar el eje en su rol de garante de las reglas del juego económico, por favorecer una redistribución a favor de los sectores no asalariados y la apropiación de los recursos por los grupos empresarios dominantes; por

13 De todos modos, Argentina siguió dependiendo de las exportaciones de productos primarios para financiar el desarrollo industrial.

14 Principalmente la segunda de estas formas, la primera debe considerarse como de transición.

reivindicar la prevalencia del mercado, el individualismo competitivo, orientado a lo privado y al consumo, a la indeterminación ideológica y a las identidades de “usuario”, “espectador” y las derivadas del “éxito” individual. Esta forma histórica se basa en la diferenciación entre el Estado y la sociedad y es consecuente con la implementación de un nuevo régimen de acumulación, distinto al industrialista, en el cual la apropiación del excedente estará en manos de sectores financieros del capital internacional y sus socios locales.

2.1 Régimen político

La forma de Estado debe ser distinguida del concepto de régimen político. Un régimen político remite al “conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y los valores que animan la vida de tales instituciones. [Estas instituciones] constituyen la estructura organizativa del poder político que selecciona a la clase dirigente y asigna a los diversos individuos comprometidos en la lucha política su papel”¹⁵. Entonces, cuando hablamos de régimen político nos remitimos a un conjunto de normas y procedimientos, a una serie de comportamientos relativamente rutinizados y a formas de mediación política y de intereses cuyo objetivo es regular, ordenar y encauzar la lucha por el poder y la selección y organización de las clases dirigentes, como también la formación de una voluntad política¹⁶.

El concepto de régimen político incluye además la forma de relación entre los distintos poderes del Estado (poder judicial, ejecutivo y legislativo), entre el Estado y los partidos políticos, y un equilibrio determinado entre las clases sociales y entre las distintas clases y el poder político¹⁷.

No debemos confundir las formas de Estado o los tipos de régimen político con las formas de gobierno; éstas remiten al conjunto de personas que ejercen el poder político y a la acción misma de conducir el Estado o una institución (ejercicio de roles gubernamentales). El régimen político refiere a las rutas de

15 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino: *Diccionario de Política*, tomo I, México, Siglo XXI, 1997, p. 1362.

16 En relación con las *formas de mediación política* podemos mencionar para el caso argentino las siguientes: partido de notables, partidos de masas programáticos, modelo movimientista, partidos *catch all*. En relación con las *formas de mediación de intereses* debemos considerar: el patrimonialismo, el neocorporativismo, el pluralismo y el “lobbismo”.

17 Véase Nicos Poulantzas: *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*, México, Siglo XXI, 1997, pp. 417-421.

acceso a los roles gubernamentales, mientras que el conjunto de tales roles define el concepto de gobierno.

Los tipos de regímenes políticos que analizaremos son los siguientes: democracia restringida (1880-1916, 1932-1943, 1958-1966, 1974-1976), democracia ampliada (1916-1930, 1946-1955, 1973-1974, 1983 en adelante), dictadura militar (1930-1932, 1943-1946, 1955-1958, 1966-1973, 1976-1983). En la primera etapa (1880-1916) las posibilidades de acceso al poder (a los roles gubernamentales) estaban vedadas para la mayoría de la población. Mediante el fraude se mantenía excluidas del sistema político a las mayorías. Eran unos pocos quienes participaban del gobierno y existía una gran homogeneidad entre la dirigencia política y los sectores económicamente dominantes. De este modo, se construyó un régimen político oligárquico que garantizaba que los más altos niveles decisionales del Estado estuvieran controlados y ocupados por sectores clave en lo económico. A pesar de la existencia constitucional del voto, esta herramienta de participación política existía sólo formalmente ya que en la práctica los funcionarios salientes designaban a los entrantes y legalizaban esta elección mediante el fraude.

Hacia 1890 estas formas de acceso al poder fueron cuestionadas por sectores dominantes excluidos y por incipientes sectores medios que reclamaban la ampliación de la participación política. De tales cuestionamientos surgió un nuevo partido político, la Unión Cívica Radical (UCR), que sería el principal portavoz de la necesidad de ampliación del sistema de participación política. La creación de la UCR y del Partido Socialista (1896) —ambos con criterios democráticos de acceso a los cargos partidarios— contribuyó a modificar la fisonomía de la política argentina. La sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 (voto universal secreto y obligatorio) fue un triunfo de estos sectores.

Entre 1916 y 1930, el régimen político se amplía. Fundamentalmente son los sectores medios los incorporados mediante el voto al nuevo sistema político. Los sectores populares, sin embargo, seguirían excluidos ya que en su mayoría eran extranjeros y no votaban.

Un mecanismo similar al régimen político oligárquico se utilizó en el período conocido como Década Infame (1930-1943). Frente a la ruptura del orden económico internacional provocado por la crisis de 1929, y la situación de zozobra que esto generaba en los sectores dominantes, el gobierno de Hipólito Yrigoyen no constituía una garantía de protección de sus intereses. Las nuevas medidas que era necesario tomar frente a la coyuntura podían poner en riesgo sus intereses y afectar su privilegiada situación. Así, apoyaron un golpe militar que terminó con la primera experiencia de democracia ampliada en nuestro país, e inauguró, tras un breve período donde los militares ocuparon los roles gubernamentales, una nueva modalidad de democracia restringida o gobierno de unos

pocos (restauración oligárquica), también basada en el fraude y en la exclusión política de las mayorías.

Este período concluye con un nuevo golpe militar que significó el ascenso de una ideología que proponía la inclusión de las masas en el sistema político y social, en lugar de la exclusión propiciada por el régimen de los años 30.

Con el ascenso del peronismo (1946-1955), mediante elecciones sin fraude, la participación política se extiende a los sectores populares y, a partir de 1952, también a las mujeres. El régimen político es democrático, aunque la toma de decisiones políticas no se da sólo dentro del Parlamento sino que las distintas corporaciones adquieren un peso político propio y fundamental en su relación con el Estado y los otros actores. En 1955, con un nuevo golpe militar, se inaugura un período de gobierno *de facto*, hasta que en 1958 asume el poder un nuevo gobierno constitucional presidido por Arturo Frondizi. El lapso que abarca desde 1955 hasta 1966 puede considerarse un período de democracia restringida ya que el partido peronista estuvo proscrito. Tal proscripción dejó fuera del “juego de las instituciones democráticas” al peronismo y con él a los sectores populares. El sindicalismo (actor corporativo) fue el encargado de representar los intereses de los trabajadores desde afuera de un régimen político semi-democrático que excluía a los peronistas.

Entre 1966 y 1973 y desde 1976 hasta 1983, los regímenes políticos fueron *de dictadura militar*. Es decir que los roles gubernamentales fueron cubiertos (con distinto grado de extensión) por los miembros de las Fuerzas Armadas. Los canales de acceso al gobierno quedaron totalmente cerrados a los partidos políticos democráticos y la ciudadanía en general quedó excluida de la toma de decisiones políticas. Durante estos períodos la separación entre el Estado y la sociedad fue muy profunda. La represión y la persecución ideológica fueron herramientas fundamentales para estos regímenes que se basaron en el ejercicio de la coacción restando importancia a la búsqueda de consenso.

En el período 1973-1976 y desde 1983 en adelante los regímenes políticos argentinos han sido democráticos y han permitido, mediante el voto y la movilización, la participación política de las mayorías populares. Sin embargo, las dirigencias de los partidos políticos tradicionales y sus propuestas parecen enfrentar hoy una crisis derivada del agotamiento del populismo. Las ideas de inclusión social que éste sostuvo (y que fueron levantadas en los discursos por Raúl Alfonsín y Carlos Menem) chocaron contra la consolidación de un nuevo régimen de acumulación y una nueva forma de Estado que excluye a amplios sectores de la población. La democracia política no parece hoy incluir la preocupación por el pleno empleo y la inclusión social de vastos sectores de la población.

3. Un régimen de acumulación de capital y una estructura de clases sociales

Dentro del concepto más abarcador de modo de producción u orden capitalista pueden distinguirse diversos regímenes de acumulación.

El régimen de acumulación explica cómo una parte del producto social se convierte en nuevas fuerzas productivas, lo que permite incrementar la producción y los beneficios. La articulación de los elementos del proceso económico, las formas de organizar la fuerza de trabajo y las formas de explotación de la misma permiten que una parte de la riqueza generada pueda orientarse a la inversión. Un régimen de acumulación se corresponde con una forma principal de excedente económico (plusvalía, renta agropecuaria diferencial, renta financiera) y con las modalidades impuestas por los sectores más dinámicos del capital, e influye, junto con otras variables, en la conformación de una determinada *estructura de clases*. Por lo tanto, cuando cambia el modelo de acumulación de capital, también cambian las formas de explotación de la fuerza de trabajo y las formas de acción colectiva. La “lucha de clases” es un conflicto inherente a la relación de explotación capital-trabajo que rige la acumulación capitalista y resulta de la separación entre productores y medios de producción.

Para caracterizar un proceso de acumulación debemos tener en cuenta la forma en la que se genera el excedente económico, cómo se crea la riqueza, quiénes y a través de qué mecanismos se quedan con ella y cómo se invierten los excedentes.

La acumulación es la fuerza impulsora de las sociedades capitalistas y su lógica es inherente al capital más allá de cualquier opción subjetiva. La acumulación expresa relaciones de producción, pero no debe considerarse un proceso puramente económico; por el contrario, se vincula con el desarrollo de las relaciones sociales y con las distintas formas de Estado. Por lo tanto, dista de remitir a un proceso armonioso y puede ser interrumpida por crisis, conflictos y recesiones. De esta manera, en un sistema capitalista en el que la actividad industrial sea la predominante, la plusvalía¹⁸ es la principal fuente de acumulación. Sin embar-

18 El obrero asalariado genera con su trabajo un valor superior al valor que recibe con su salario. Ese valor “excedente” o plusvalía es apropiado por el propietario de los medios de producción. De este modo, en las sociedades industriales, la posibilidad de acumulación y reproducción del sistema dependerá de la capacidad del sistema o régimen de acumulación de producir tal excedente a través de la explotación de los trabajadores. La plusvalía absoluta es aquella que puede aumentar con la extensión de la jornada de trabajo, en tanto que la plusvalía relativa refiere al nivel de productividad de todo el sistema (aumenta, por ejemplo, a partir de la incorporación de tecnología).

go, en Argentina durante el período 1880-1930 (y en otros casos en que la modalidad más dinámica de capital estuvo constituida por el capitalismo agrario), la acumulación se basó en la renta diferencial a escala internacional como principal forma del excedente económico y, en menor medida, en la plusvalía. En esta etapa fueron los productores agropecuarios y las empresas extranjeras los que captaron la mayor porción de esta renta y destinaron una parte importante al financiamiento de la infraestructura física del país.

A partir del período iniciado en 1930 el Estado comenzó a captar una parte de la renta agropecuaria y la utilizó para financiar el desarrollo industrial. Con tal desarrollo, la plusvalía se constituyó en el principal modo de producir el excedente y, junto con la renta agropecuaria, permitió el desarrollo de un proceso de acumulación distinto al del período anterior. La estructura social se complejizó, dando lugar a la formación de nuevos sectores sociales y nuevas relaciones entre las clases. Dentro de los sectores dominantes se produjeron diferenciaciones a partir de la incorporación de los intereses industriales y de capitales extranjeros; el proletariado se expandió, consolidó sus organizaciones y obtuvo participación en el Estado.

A partir de 1976, con la dictadura militar, el modelo de acumulación se basó en el desmantelamiento de sectores enteros del Estado, en el disciplinamiento de la fuerza de trabajo a través de la flexibilización laboral y el desempleo, en el aumento de la productividad y la transferencia de ingresos de las clases populares y medias a las altas. El nuevo esquema económico trajo, junto con el deterioro de la actividad industrial y el consecuente debilitamiento del movimiento obrero, el desarrollo y predominio creciente de la actividad financiera y del sector de servicios en general (esto último, sobre todo durante el menemismo, con los procesos de privatización y “modernización” de los servicios públicos). Vale aclarar que, una vez iniciados los procesos de industrialización en los países centrales, la acumulación de capital se caracterizó por articular el sector terciario con el sector secundario. En la periferia la articulación se produjo entre el sector primario exportador y el sector productor de bienes suntuarios. En el caso de los modelos económicos “abiertos”, “agroexportadores” o de crecimiento “hacia fuera”, como en la Argentina de 1880-1930, la acumulación se vio limitada porque el sector exportador respondía a las necesidades del centro, por los límites planteados por el intercambio desigual, y además porque los capitales invertidos obtenían condiciones monopólicas (esto último también se advierte claramente durante el período iniciado en 1976).

En síntesis, los países periféricos como Argentina se han caracterizado por una baja capacidad de acumulación pese a haber pasado por etapas de industrialización sustitutiva, como la que va de 1930 a 1976, en la que la ganancia industrial era la principal forma de excedente y la modalidad más dinámica del capi-

tal. A partir de 1976 veremos cómo se combinan las formas y modalidades anteriores con una creciente preponderancia del capital financiero. Finalmente hay que tener en cuenta que la acumulación es cada vez más una función del sistema capitalista garantizada por el Estado.

4. Una lógica de acción colectiva de las clases subalternas

A lo largo de nuestra historia y en estrecha vinculación con las modalidades de acumulación, las formas de Estado y los tipos de régimen político y mediación de intereses, las clases subalternas desarrollaron distintas formas de acción colectiva. En sus luchas, tanto las materiales (económicas) como las que apuntan a obtener un reconocimiento social o político, los sectores populares ponen en juego distintos contenidos y estrategias. Estas formas de acción colectiva de los sectores populares, más allá de los condicionamientos históricos que las tornan irrepetibles, remiten a una trayectoria y a una experiencia siempre susceptible de ser resignificada y utilizada.

En este sentido, cobra importancia la memoria de esas luchas y los procesos de aprendizaje colectivo que refuerzan la identidad de las víctimas y colaboran con la eficacia de las acciones. No casualmente, desde el poder, siempre se trata de “borrar” esa memoria. Los momentos de transición de una forma de acción a otra remiten siempre a la “salida” de viejos contendientes y a la “entrada” de los nuevos en un campo de lucha. La acción colectiva puede estar encuadrada en una organización o ser espontánea. En relación con la espontaneidad, vale aclarar que en realidad no existe en estado “puro”; por otra parte los movimientos espontáneos son necesarios porque constituyen uno de los medios a través de los cuales los sectores populares viven sus experiencias históricas.

En cuanto a las modalidades de la acción colectiva durante el período 1880-1930 debemos tener en cuenta que ésta se sostenía en identidades tanto ciudadanas y étnicas como doctrinarias. Las luchas por el sufragio y por la participación política, las huelgas protagonizadas por los trabajadores (inmigrantes en su mayoría), los gremios organizados por oficio orientados por el anarquismo, el socialismo y la corriente sindicalista caracterizan esta etapa. Durante el período 1930-1976 la acción colectiva se sostuvo en identidades masivas y en ideologías globales tales como el nacionalismo populista o el socialismo (del lado del poder, la contraparte eran el desarrollismo y la doctrina de la seguridad nacional); se expresó, básicamente, a través del sindicalismo de masas y las grandes huelgas generales como herramientas privilegiadas de la acción de clase. Con la dictadura militar se produce un cambio radical en la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo. La acción colectiva en tiempos del neoliberalismo, de 1976 a la actualidad, remite al

surgimiento de nuevos actores sociales que, en general, terminan de consolidar sus rasgos más característicos hacia mediados de la década del 90. Genéricamente denominados como movimientos sociales (vecinales, culturales, de género, derechos humanos, campesinos, indígenas, desocupados, entre otros) buscan fundar nuevas identidades populares frente a identidades en crisis, relacionadas con la ciudadanía política o con la lucha obrera tradicional. La huelga, si bien se mantiene, deja de ser el recurso de acción exclusivo de los trabajadores. Su efectividad queda cuestionada, tanto en lo que se refiere a lograr una reivindicación concreta (económica; por ejemplo, aumento salarial) como a la posibilidad de constituirse en una instancia generadora de saldos subjetivos positivos. Es decir, a la posibilidad de lograr un resultado vinculado más con la construcción de una identidad colectiva que con la obtención de una reivindicación concreta.

Entre las nuevas formas de acción colectiva cabe destacar el recurso al *piquete*, al corte de rutas o puentes. En el período anterior, los trabajadores industriales podían recurrir a la huelga para presionar al sistema de producción. La desocupación, la exclusión social afectaron en los años 90 la capacidad de ejercer presión sobre el ámbito de la producción. Por lo tanto, los trabajadores —ahora desocupados— perciben que la posibilidad de hacerse visibles y de vehicularizar sus reclamos pasa por afectar la circulación de bienes y personas a través de un corte. A partir de 1996 hay cambios en los paros, que se combinan por ejemplo con cortes de ruta y ollas populares. La protesta social se complejiza y sus formas también¹⁹.

Las luchas encabezadas por los trabajadores desocupados son particularmente significativas en la Argentina de los últimos años. Representaron más de un cuarto del total de la conflictividad nacional en la primera parte del año 2001. Las formas dominantes dejaron de ser la marcha o el gran acto centralizado en un único espacio, lo que refleja la heterogeneidad de los actores, de sus espacios y de sus formas de lucha. Se ha diluido el control sindical de la movilización. Sus principales referentes atraviesan una crisis de representatividad muy profunda —con algunas excepciones— y se ven desbordados constantemente por la acción múltiple y simultánea de los sectores populares.

Finalmente, en esta última etapa, desde las instancias de poder, existe una creciente interpelación a los sujetos como usuarios y consumidores más que como ciudadanos.

19 Además de los métodos señalados hay que agregar: sentadas, cacerolazos, apagones, escraches, etcétera.

5. Consideraciones finales

La sociedad y el Estado no pueden concebirse como entidades estáticas; por el contrario, están sujetos a procesos dinámicos, procesos objetivos que generan cambios en los regímenes de acumulación de capital, en la estratificación social, en los regímenes políticos, en los modelos culturales, etc. Por supuesto que también debemos considerar la influencia de los procesos subjetivos, es decir, las formas en que se interpretan las transformaciones.

Trataremos de analizar la relación entre las distintas fases de la estructuración social y la estructura del régimen político teniendo en cuenta la autonomía relativa del poder político. El estudio de la estructura social, si bien es fundamental, no es suficiente para comprender los factores que influyen en el funcionamiento de los regímenes políticos.

Como una forma de detectar las articulaciones entre los elementos propuestos en el contexto histórico correspondiente a los períodos 1880-1930, 1930-1976 y de 1976 a la actualidad, sugerimos determinar:

- ¿Cuáles son las clases dominantes de cada período?
- ¿De dónde obtienen el predominio económico?
- ¿Cómo este predominio se convierte en hegemonía política?
- ¿Qué tipo de régimen se consolida?
- ¿Cuáles son las clases subalternas? ¿Cuáles son los conflictos más importantes de cada período?
- ¿Cuáles son las principales formas de acción colectiva?

Bibliografía

- Bobbio, Norberto, *Estado, Gobierno y Sociedad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
- Bobbio, Norberto, *Sociedad y Estado en la filosofía moderna*, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
- Bobbio, Norberto, Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco, *Diccionario de Política*, México, Siglo XXI, 1997.
- Bourdieu, Pierre, Chamboredon, Jean-Claude y Passeron, Jean-Claude, *El oficio del sociólogo*, México, Siglo XXI, 1994.
- Bourdieu, Pierre, *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Barcelona, Anagrama, 1997.
- García Delgado, Daniel, *Estado y Sociedad*, Buenos Aires, Flacso, 1996.
- Giddens, Anthony, *El capitalismo y la moderna teoría social*, Barcelona, Labor, 1994.
- Hobsbawm, Eric, *Historia del siglo XX*, Buenos Aires, Crítica, 1998.

- O'Donnell, Guillermo, "Apuntes para una teoría del Estado", *Revista de Sociología Mexicana*, N° 4, diciembre de 1978.
- Oszlak, Oscar, *La formación del Estado argentino*, Buenos Aires, Ediciones de Belgrano, 1985.
- Oszlak, Oscar, "Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina", *Desarrollo Económico*, N° 47, vol. 21, enero-marzo de 1982.
- Portantiero, Juan Carlos, *Los usos de Gramsci*, Buenos Aires, Grijalbo, 1999.
- Poulantzas, Nicos, *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*, México, Siglo XXI, 1997.
- Pucciarelli, Alfredo, "Conservadores, radicales e yrigoyenistas, un modelo (hipotético) de hegemonía compartida", en Ansaldi, Waldo, Pucciarelli, Alfredo y Villarruel, José C., *Argentina en la paz de dos guerras, 1914-1945*, Buenos Aires, Biblos, 1993.
- Tarcus, Horacio, "La crisis del Estado populista. Argentina 1976-1990", *Realidad Económica*, N° 107, 1 de abril al 15 de mayo de 1992.
- Therborn, Göran, *La ideología del poder y el poder de la ideología*, México, Siglo XXI, 1989.
- Weber, Max, *Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

Afianzamiento y expansión del capitalismo. Un nuevo orden internacional (1850-1930)

Elena Marcaida y Mabel Scaltritti

Desde mediados del siglo XIX Argentina comenzó a transitar un proceso de profundos y variados cambios. Durante esos años cobró forma su Estado, se consolidó una economía capitalista agraria y se conformó una sociedad compleja y heterogénea.

Tales transformaciones, si bien se vinculan con una dinámica local, no pueden explicarse sin entender los grandes cambios que, simultáneamente, experimentaban Inglaterra, otros países de Europa occidental y Estados Unidos. El sistema capitalista, que en ellos se consolidó, terminó incorporando a su lógica a la mayor parte del planeta, a través de la dominación colonial y de la división internacional del trabajo.

1. La Revolución Industrial

El proceso de afirmación y expansión del capitalismo se inició en Inglaterra, a fines del siglo XVIII, con la Revolución Industrial.

Esta Revolución marcó una profunda ruptura con el pasado, un cambio drástico y fundamental en las formas y métodos de trabajo y en las relaciones que establecieron los hombres en el proceso de producción. Rompió con formas productivas vigentes desde hacía siglos y permitió el pasaje de una producción limitada, que sometía a las sociedades a frecuentes hambrunas, a la producción de una cantidad tan abundante de bienes como nunca antes había conocido la humanidad. Las transformaciones fueron tan radicales y múltiples que muchos investigadores no dudaron en definirla como una de las revoluciones más auténticas de la historia de la humanidad¹.

1 La Revolución Industrial dio lugar a diferentes controversias. Una de ellas reside en si realmente se trató de una revolución. Mientras muchos historiadores la consideran como

Una larga serie de cambios económicos, sociales, políticos y culturales sentaron las bases para el desarrollo en Inglaterra de la primera economía industrial del planeta. El gran despegue se produjo a fines del siglo XVIII, cuando el aumento de la demanda colonial de telas de algodón impulsó sobre todo a mercaderes y maestros-artesanos a realizar cambios en la organización de la producción textil².

La necesidad de aumentar la oferta de productos y de elevar la productividad de los trabajadores llevó a reemplazar la producción artesanal por la organización fabril. El establecimiento del sistema de fábrica implicó, entre otras cosas, la organización de los procesos de producción en grandes establecimientos urbanos, la mecanización, la extensión del trabajo asalariado, así como el uso del vapor como nueva fuente de energía.

La máquina de vapor, puesta a punto por James Watt hacia 1770, fue la primera fuente de energía sistemática, dirigida por la voluntad del hombre, que se pudo dominar y concentrar en un punto en el tiempo y el espacio. La producción contó desde entonces con una potencia formidable, infinitamente mayor a todas las conocidas hasta entonces³.

Estas transformaciones aumentaron significativamente la producción de telas de algodón al tiempo que alentaban el desarrollo de otras actividades. Por ejemplo, el uso del vapor requirió la expansión de la producción carbonífera. Tam-

un quiebre mayor en la historia de Inglaterra y de la humanidad, otros la entienden como una aceleración del crecimiento económico en el marco de una evolución. Otra polémica interesante gira en torno al rol jugado por las innovaciones tecnológicas. Véase Alejandra Giuliani: "La Revolución Industrial en Gran Bretaña (1780-1850)", en Elena Marcaida (coord.), *Estudios de Historia Económica y Social. De la Revolución Industrial a la globalización neoliberal*, Buenos Aires, Biblos, 2002.

- 2 La escasa complejidad tecnológica, los bajos salarios y los precarios locales en donde se establecieron las primeras fábricas permitieron que el impulso original de la industrialización británica no estuviera a cargo de las grandes compañías de importación-exportación, sino de otros actores con menores recursos económicos. El mundo de las finanzas se interesaba, por el momento, por el gran comercio colonial.
- 3 Durante milenios, la energía que requería la producción fue provista por el esfuerzo humano. Luego comenzó a utilizarse la energía animal de caballos, bueyes o elefantes. Más tarde, hace aproximadamente unos mil años, se comenzó a utilizar además, la energía del viento y del agua. El vapor superó totalmente a estas fuentes de energía, revolucionando la producción. Más tarde se desarrollaron nuevas formas de energía, desde la eléctrica hasta la nuclear. Cada avance cambió el sistema de producción y la evolución de la humanidad, pero todo comenzó en ese primer paso que consistió en descubrir que la energía podía ser captada, regulada y dominada por el hombre. Véase Jorge Schvarzer: *La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina*, Buenos Aires, Planeta, 1996.

bién alentó el aumento de la producción de hierro, ya que las máquinas de hilar, tradicionalmente construidas en madera, comenzaron a fabricarse con este metal para poder resistir, sin romperse, a la nueva potencia que les imprimía el vapor. Además, como consecuencia de las necesidades que experimentaba la rama textil, se industrializó la química con la producción de tinturas.

Los cambios no se detuvieron allí. La necesidad de colocar una producción en constante crecimiento, de aprovisionarse de materias primas y de invertir la enorme masa de capitales que generaba la expansión de la industria textil, alentó innovaciones en el campo de los transportes y comunicaciones, dando lugar a una nueva revolución dentro de la revolución: el ferrocarril.

Desde fines de la década de 1820 y hasta 1850 Inglaterra construyó una importante red ferroviaria que expandió la producción de hierro y carbón y generó eslabonamientos productivos vinculados, por un lado, con la fabricación de rieles, vagones, locomotoras, terraplenes y estaciones y, por el otro, con el desarrollo de toda una serie de actividades impulsadas por la conexión de áreas hasta entonces aisladas. El ferrocarril permitió, además, la expansión del empleo asalariado, el acortamiento de las distancias, el abaratamiento de los fletes y la integración del mercado nacional.

De este modo, el ferrocarril —expandiéndose desde Inglaterra por toda Europa y el resto de los países del planeta— impulsó el pasaje a una nueva fase de la Revolución Industrial. Durante la segunda mitad del siglo XIX, se transformó, junto con la siderurgia, en el núcleo dinámico del proceso de industrialización⁴.

Todas estas transformaciones repercutieron en el sector rural: el campo inglés, que ya venía siendo revolucionado desde el siglo XVII por la inversión de capitales y por una organización de tipo capitalista, recibió un nuevo impulso, entre otras cosas, por la aplicación de abonos químicos y la utilización de nuevas herramientas y maquinarias que elevaron la productividad y el volumen global de la producción agraria.

Los cambios no se limitaron a la tecnología, la producción y el comercio. En un proceso simultáneo, la sociedad se transformó profundamente. En el campo y en la ciudad, las formas tradicionales de relación social fueron reemplazadas

4 Tiempo después, hacia fines del siglo XIX, el descubrimiento de la electricidad creó un nuevo núcleo dinámico, cuyo impacto en la producción fue tan grande que se lo dio en llamar Segunda Revolución Industrial. Las revoluciones no cesaron desde entonces. Poco después, el motor a explosión reemplazó a la máquina de vapor, generó el automóvil y creó un complejo mecánico-petrolero que fue una de las bases del desarrollo productivo del siglo XX. Otras revoluciones conoció este siglo: la del transporte (avión, nave espacial), la nuclear, la de las comunicaciones y la informática. Véase Jorge Schwarzer, *op. cit.*

progresivamente por nuevos vínculos que dieron lugar a la conformación de las dos clases básicas del capitalismo: la burguesía y el proletariado.

A la vez, se produjeron cambios en la visión que hombres y mujeres tenían de sí mismos y de su medio. El creciente dominio humano sobre la naturaleza puso en cuestión la noción tradicional de un mundo inmutable regido por la voluntad divina. De la incuestionabilidad del dogma y la tradición se fue pasando a la hegemonía creciente del pensamiento racional y científico y al cuestionamiento de las concepciones religiosas. Nuevos principios, como el utilitarismo, el individualismo y la fe en el progreso sin fin, se fueron constituyendo en hábitos mentales y en un nuevo credo moral.

La urbanización, las migraciones internacionales y el poblamiento de regiones casi desiertas del planeta fueron también rasgos distintivos del proceso desatado por la Revolución Industrial. La instalación de las industrias en las urbes y el simultáneo avance del capitalismo en el agro, así como el crecimiento demográfico, alentaron un intenso éxodo de las poblaciones del campo a las ciudades. Muchos de estos migrantes se instalaron en las ciudades industriales, formando, junto a oficiales y aprendices de los gremios artesanales, el naciente proletariado. Otros no encontraron ocupación, pues la industria, crecientemente mecanizada, no alcanzaba a emplear a toda la mano de obra que el campo expulsaba. Para estos trabajadores, así como para otros, procedentes de distintas regiones de Europa, la emigración fue la válvula de escape ante una realidad que rápidamente y radicalmente se transformaba y los excluía.

A principios del siglo XIX, el crecimiento de la economía y de las ciudades, la riqueza y el esplendor de los sectores burgueses que lideraban las transformaciones, tenían su contracara de explotación, desarraigo y pauperización en el naciente proletariado.

La mecanización de las actividades permitió la explotación de los trabajadores en niveles nunca antes observados en la historia de la humanidad. Los trabajadores se vieron obligados a abandonar sus tradicionales modos de vida: en las fábricas, tuvieron que adaptarse a un ritmo de trabajo que ya no era marcado como hasta entonces por la naturaleza sino por “la tiranía del reloj” y por la máquina; también debieron soportar extensísimas jornadas de trabajo, en el marco de una férrea y muchas veces feroz disciplina laboral. Tuvieron, además, que acostumbrarse a vivir de un salario, descubrir el temor por el desempleo y habitar, hacinados, barrios sucios y pobres, a merced de nuevas enfermedades y frecuentes epidemias.

Por todo lo descrito, desde casi los inicios de la Revolución Industrial, los trabajadores comenzaron a participar en movimientos de protesta, así como a organizarse en sindicatos y partidos políticos para luchar por aumentos salariales y por mejoras en las condiciones de trabajo y de vida. Entre muchos de ellos,

fue creciendo un pensamiento que no sólo cuestionaba las interminables jornadas de trabajo o el nivel de los salarios, sino que impugnaba al sistema capitalista en su totalidad.

2. El sistema de división internacional del trabajo

Inglaterra tenía desde el siglo XVII una posición hegemónica en el mercado mundial que derivaba, entre otras cosas, de la posesión de un vasto imperio colonial que se extendía por América, Asia y África. La Revolución Industrial fortaleció ese liderazgo internacional y, bajo el impulso de su burguesía industrial, desde mediados del siglo XIX, impuso en el mundo un nuevo ordenamiento económico, conocido con el nombre de división internacional del trabajo.

De acuerdo con este sistema, cada país debía especializarse en la producción de los bienes que podía realizar con “ventajas comparativas”, para luego intercambiarlos en el mercado externo. Dicho de otro modo, cada país tenía que dedicarse a producir y vender aquello que hacía mejor y más barato: el resto debía adquirirlo en el mercado internacional.

El librecomercio constituía una herramienta fundamental para el funcionamiento de esta división de tareas a escala internacional⁵. La burguesía industrial inglesa no sólo lo impuso dentro de sus fronteras derribando las oposiciones de la hasta entonces protegida burguesía agraria, sino que también logró que otros países del Occidente europeo, que estaban en pleno proceso de industrialización, lo adoptaran.

5 El proteccionismo aduanero —es decir, la serie de reparos a la importación de productos que un Estado impone con el fin de proteger las producciones nacionales— fue una de las características de la política económica de los Estados modernos durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Fue apoyado por los jóvenes sectores burgueses de esos Estados y convenía, a la vez, a los intereses de los monarcas, guiados por otro de los principios de la política mercantilista en curso: la posesión de metales preciosos como fundamento de la riqueza de un Estado, y el uso de la balanza comercial como medio para procurarla. Esta política económica predominó en los países europeos hasta que las transformaciones económicas generaron, durante el siglo XVIII, las doctrinas fisiocráticas y más tarde la economía clásica inglesa. Éstas pregonaban las bondades de la libertad comercial y de la competencia ilimitada al tiempo que combatían las reglamentaciones impuestas por el Estado, pues ellas —de acuerdo con esta teoría liberal— se oponían a las leyes naturales que rigen la circulación y la distribución de la riqueza. Fue en este marco que comenzó a prosperar el librecomercio: la eliminación de todo tipo de restricciones en el comercio con otros países. Véase José Carlos Chiaramonte: *Nacionalismo y liberalismo en la Argentina, 1860-1880*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

Muchas eran las ventajas que este sistema de especialización internacional entrañaba para Inglaterra: la concentración dentro de sus fronteras de las actividades ligadas al progreso tecnológico; la aceleración del proceso de acumulación a través de la importación de alimentos y materias primas más baratas que las producidas localmente; la apertura de nuevos mercados –los de los países de producción primaria– para su producción industrial excedentaria y la exportación hacia esos países de una importante masa de sus capitales, con el doble objetivo de obtener altos rendimientos y de ajustar sus economías a las necesidades de la especialización.

Para los países de producción primaria, como Argentina, el sistema implicaba, en cambio, serias limitaciones, ya que los tornaría muy dependientes de la demanda y de las inversiones de los países industriales, quedarían relegados del desarrollo científico y tecnológico y organizarían toda su economía en torno a la producción de uno o de unos pocos productos primarios⁶. No obstante todo ello, los principios del librecambio y de la división de tareas a nivel internacional fueron adoptados y abrazados entusiastamente por sus élites modernizantes, ya que además de traducirse en beneficios económicos concretos para ellas, contaban con la legitimación que brindaban los principales exponentes del pensamiento económico de la época. Dos grandes teóricos, como Adam Smith en *La riqueza de las naciones* (1776) y David Ricardo en *Principios de economía política* (1817), argumentaban en favor de la liberalización del comercio internacional. Según ellos y otros pensadores liberales, la apertura de las fronteras nacionales y la integración creciente de la economía mundial crearían la armonía internacional, la riqueza y la felicidad de todas las naciones. Los “países jóvenes” (como se llamaba entonces a los países de producción primaria) podrían transitar, explotando sus ventajas comparativas, el camino que los conduciría hasta el nivel alcanzado por los países más avanzados de la época.

Además de la aplicación del librecambio, el proyecto de especialización económica internacional pudo concretarse por los avances tecnológicos que se produjeron simultáneamente en los medios de transporte y comunicación. El ferroca-

6 Para Jorge Schvarzer, quien piensa que el poder de las naciones se basa desde esta época en su capacidad productiva y no en la cantidad de población y en las dimensiones del territorio, los países que son razonablemente ricos sin ser fabriles es porque gozan de un recurso natural o tienen la suerte de captar parte de la riqueza que desborda de las naciones industriales desarrolladas. Esos pueblos, dice Schvarzer, no son ricos por su poder productivo sino porque reciben una parte de la riqueza que generan los países desarrollados; son en realidad rentistas, no productores y viven un presente sin futuro a la sombra de los otros. Reflexiones sin duda polémicas e interesantes para pensar la historia contemporánea de Argentina. Véase Jorge Schvarzer, *op. cit.*

rril no sólo se extendió por Gran Bretaña sino que, en poco tiempo, conectó a toda Europa. El telégrafo, que comenzó a utilizarse en la década de 1830, se difundió desde mediados del siglo XIX, revolucionando el campo de las informaciones y las comunicaciones. Por la misma época, las transformaciones en la navegación marítima (vapor, bodegas en hierro, introducción de la hélice) produjeron un acortamiento temporal de los viajes, un aumento de los volúmenes de mercaderías transportadas, así como una disminución muy significativa en los costos de los fletes.

Las transformaciones técnicas no sólo permitieron la ampliación del volumen físico del intercambio, sino también un cambio en la composición del comercio internacional y de su localización geográfica: los tradicionales cargamentos de especias, metales preciosos y productos tropicales fueron desplazados de los primeros planos por los productos agropecuarios de los países de clima templado, demandados crecientemente por las poblaciones urbanas de los países industrializados o en proceso de industrialización.

La integración de la economía mundial que estas innovaciones alentaban, fue además posible porque ellas coincidieron con otros dos procesos de suma importancia: las grandes corrientes migratorias y los movimientos internacionales de capitales.

Como ya lo señalamos, los procesos de modernización que se operaban en los países del Occidente europeo expulsaban grandes cantidades de trabajadores, que eran a la vez atraídos por las posibilidades de empleo y de ascenso social que parecían ofrecer “países nuevos”, como Argentina, el sur de Brasil o Estados Unidos. Como resultado de la combinación de estos factores (expulsión y atracción) se produjeron grandes migraciones internacionales. Ellas se explican, sobre todo, por causas económicas, pero hay que tener en cuenta que, en algunos casos, influyeron sobre los migrantes otras motivaciones, como las políticas y/o las religiosas.

El movimiento internacional de población fue favorecido por el desarrollo de los transportes marítimos y la reducción operada en sus costos. En un principio, predominó la emigración desde los lugares que primero transitaron las innovaciones, es decir, los países europeos atlánticos. Luego fueron los países mediterráneos los que expulsaron mayor cantidad de población. Se calcula que entre 1850 y 1930 migraron, desde Europa hacia otros continentes, entre cincuenta y sesenta millones de trabajadores. Ellos resolvieron las necesidades de mano de obra que tenían muchos países, como por ejemplo Argentina, para adaptar sus economías a los crecientes requerimientos del mercado mundial.

Un vasto caudal de capitales también fluía desde los países industriales hacia los países de producción primaria. En Europa y también en Estados Unidos, en las postrimerías del siglo XIX, el capitalismo entraba en su fase monopólica,

caracterizándose por la conformación de empresas industriales de gran talla que integraban sus producciones horizontal y/o verticalmente. La alta concentración en la industria, en el comercio, en los transportes y en las actividades bancarias engendró los *trusts* y los oligopolios; el capital financiero se fusionó con el capital industrial e, impulsado por la liquidez generada en Europa por la terminación de la red ferroviaria, se lanzó hacia otros continentes para acrecentar sus beneficios, en un movimiento que Lenin –retomando los estudios de Hobson y Hilferding– denominó imperialismo⁷.

Los capitales ingleses fueron el motor del complejo proceso que condujo a la integración creciente de la economía mundial. Se orientaron principalmente hacia los llamados “países nuevos”, con baja densidad de población y grandes recursos naturales, como Canadá, Brasil, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y África del Sur. Otros países, como Francia, Suiza, Bélgica o Alemania, participaron también activamente del movimiento internacional de capitales.

Las inversiones, procedentes de Europa occidental, tendieron a localizarse en aquellos servicios y actividades que, como los ferrocarriles, las finanzas, los frigoríficos o la minería, promovían el desarrollo de las economías primario-exportadoras.

A fines del siglo XIX, como consecuencia de los procesos descriptos, la economía internacional terminó cristalizando en un sistema de división de tareas que funcionó prácticamente hasta 1930. Inglaterra y otros pocos países industrializados exportaban bienes industriales, servicios y capitales al resto de los países e importaban –desde estos últimos– productos primarios.

Con el funcionamiento del sistema, salvo en ciertas coyunturas críticas, la producción y el comercio internacional aumentaron de manera espectacular al tiempo que crecía la brecha (tecnológica, científica, económica) entre los países industrializados y el resto del mundo.

Además, en el marco de transformaciones tan profundas, fueron agudizándose las rivalidades y tensiones entre las potencias industriales, alentadas sobre todo por la sobreoferta de bienes que producía la expansión de la industrialización a varios países del continente europeo, Estados Unidos y Japón. Como consecuencia de ello, muchos de estos países retornaron al proteccionismo, rechazaron el reparto internacional de tareas propuesto por Inglaterra y, reivindicando la independen-

7 Vladimir Ilich Lenin: *El imperialismo, fase superior del capitalismo*, Moscú, Lenguas Extranjeras, 1966. Para analizar otras interpretaciones sobre imperialismo, Marcela Lippi, “Las principales teorías interpretativas del imperialismo” y Paula I. Sofía, “La conformación del mercado mundial capitalista (1850-1914)”, en Elena V. Marcaida (coord.), *op. cit.*

cia y el nacionalismo económico⁸, se lanzaron a la conquista de mercados y al reparto del mundo.

El continente africano y gran parte de Asia y el Pacífico fueron sometidos a la dominación colonial o semicolonial de los países industriales. Hacia 1914, casi el 85 por ciento de la superficie terrestre y el 70 por ciento de la población mundial estaba bajo el control colonial de las grandes potencias. Sólo el continente americano (con las excepciones de Canadá y algunas zonas del Caribe) quedó fuera de este reparto territorial a escala planetaria. En América Latina, la dominación económica por parte del mundo industrial se realizaba sin la necesidad de una conquista formal, con el acuerdo de los sectores dirigentes vernáculos⁹.

Hacia principios del siglo XX, la situación que atravesaba el mundo distaba mucho de asemejarse a la anunciada armonía internacional y a la equiparación entre países que pronosticaron los teóricos del liberalismo. Muy lejos de ello, podía distinguirse una acentuada dicotomía entre países poderosos y débiles, así como un aumento de las tensiones que, agudizadas por la rivalidad económica existente entre las potencias industriales, desembocarían pocos años después, en 1914, en la Primera Guerra Mundial.

3. Las transformaciones políticas: del absolutismo monárquico al Estado liberal

La generalización de la producción industrial transformó radicalmente el conjunto de relaciones económicas y sociales y el capitalismo se estableció como sistema productivo dominante que expandió su lógica a todo el planeta. Este modo productivo se organizó alrededor de instituciones tales como la propiedad privada, el trabajo asalariado, la producción para el mercado y una nueva organización política: el Estado nacional.

8 En Alemania, el economista Friedrich List, en su obra *Sistema nacional de economía política* (1841), observó que el liberalismo, tan útil para Inglaterra, no era reproducible para el caso alemán. Según List, las naciones más jóvenes, como Estados Unidos y Alemania, necesitaban proteger su desarrollo, especialmente su industria. Enrique Carlos Carey fue un continuador en Estados Unidos de las concepciones proteccionistas de List. Sostenía que no sólo debía protegerse la producción industrial, sino también la producción agrícola. En lugar de la división internacional del trabajo, proponía la existencia de naciones independientes, donde se desarrollaran todas las actividades económicas.

9 Véase Eric Hobsbawm: *La era del imperio 1875-1914*, Buenos Aires, Crítica, 1998. También Paula I. Sofía, *op. cit.*, p. 114.

La construcción de esa nueva organización jurídico-política estuvo surcada de prolongados conflictos. Salvo en Gran Bretaña y algunos otros países, como Holanda y Suiza, donde regían instituciones políticas liberales, en el resto de Europa, reyes y nobles siguieron controlando el Estado, trabando las aspiraciones y necesidades de la burguesía. Ello lanzó a esta última, con un poder económico acrecentado por el desarrollo industrial, a la conquista del poder político. En el largo período que se inició con la Revolución Francesa (1789) y culminó tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918), en un proceso complejo y violento, las burguesías protagonizaron revoluciones contra el absolutismo real y los privilegios de monarcas, nobles y clérigos, que trababan su expansión y la del sistema capitalista en general. Con ritmos y duraciones diversas –según los países–, lograron hacer retroceder las instituciones absolutistas e implantar su concepción política del Estado, consistente en la vigencia de las libertades individuales (libertad de expresión, de asociación, de reunión), la existencia de una Constitución inviolable (garante de los derechos y deberes de ciudadanos y gobernantes y de la propiedad privada), la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y el derecho al voto¹⁰.

Durante estos años, también se fueron edificando las estructuras de una administración pública centralizada y uniforme, que otorgaba mayor eficacia y posibilidad de control al Estado. Se consolidó, además, un nuevo principio de legitimidad estatal y una nueva idea de soberanía: el poder del Estado ya no residiría en un monarca sino en un colectivo denominado “nación”, término con el que comenzó a definirse no sólo a una comunidad política sino también a un grupo humano que compartía una identidad, sustentada en una cultura, una lengua y un largo pasado en común.

Desde entonces, la cuestión de la homogeneización cultural ocupó el primer lugar en la agenda de los Estados. De allí, la preocupación por imponer una lengua nacional, por alentar la invención de un pasado –también nacional– y por establecer una serie de rituales para honrar la patria y su pasado. La escuela fue uno de los instrumentos privilegiados para crear y fortalecer los sentimientos de nacionalidad.

El territorio, junto con la lengua y la historia, también pasó a definir la pertenencia a una nación. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los Estados se

10 Durante mucho tiempo, el sufragio estuvo limitado a ciudadanos que poseían un cierto nivel de ingresos. Su ampliación a otros sectores sociales siguió distintos ritmos y vicisitudes según los países. Por ejemplo, mientras en Inglaterra se amplió gradualmente a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, en Francia recorrió caminos más abruptos y variables. Allí se vivió en una especie de vaivén entre la expansión universal del voto (para los varones adultos) y su restricción temporal.

preocuparon por dar forma compacta a sus territorios y fijar claramente los límites. Los conflictos limítrofes devinieron causas nacionales. Pronto se pasó de la defensa del territorio a la conquista militar, generalizándose la idea de que era válido entregar la vida y morir en estas “gestas”.

Estos cambios políticos no quedaron restringidos al continente europeo. Europa no sólo difundió a escala universal el sistema de relaciones económicas capitalistas y los principios y valores de la sociedad burguesa, sino también sus patrones políticos. Revolución, república, democracia, sufragio, igualdad ante la ley, Estado-nación, voluntad popular son conceptos e instituciones que se originaron hace más de dos siglos en Europa, con la Ilustración y la Revolución Francesa, y que continúan hasta hoy vigentes en muchos países del globo.

Bibliografía

- Bergeron, Louis, Furet, François y Koselleck, Reinhart, *La época de las revoluciones europeas (1780-1848)*, México, Siglo XXI, 1976.
- Cameron, Rondo, *Historia económica mundial. Desde el Paleolítico hasta el presente*, Madrid, Alianza, 1990.
- Fieldhouse, David, *Economía e imperio. La expansión de Europa (1830-1914)*, México, Siglo XXI, 1978.
- Hobsbawm, Eric, *La era del Imperio (1875-1914)*, Buenos Aires, Crítica, 1989.
- Hobsbawm, Eric, *La era de la Revolución (1789-1848)*, Buenos Aires, Crítica, 1997.
- Hobsbawm, Eric, *Historia del siglo XX*, Buenos Aires, Crítica, 1998.
- Landes, David, *Progreso tecnológico y Revolución Industrial*, Madrid, Tecnos, 1979.
- Marcaida, Elena, (coord.), *Estudios de Historia Económica y Social. De la Revolución Industrial a la globalización neoliberal*, Buenos Aires, Biblos, 2002.
- Mommsen, Wolfgang, *La época del imperialismo. Europa (1885-1918)*, México, Siglo XXI, 1983.
- Mori, Giorgio, *La Revolución Industrial*, Barcelona, Crítica, 1987.
- Niveau, Maurice, *Historia de los hechos económicos contemporáneos*, Barcelona, Ariel, 1985.
- Schvarzer, Jorge, *La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina*, Buenos Aires, Planeta, 1996.



La construcción del Estado nacional argentino (1852-1880)

Elena Marcaida y Mabel Scaltritti

Luego de la Revolución de Mayo de 1810, los intentos de sustitución del poder colonial por un Estado nacional bajo hegemonía porteña fracasaron. Los distintos gobiernos que se sucedieron durante la primera década revolucionaria no pudieron constituirse en la autoridad suprema de las poblaciones asentadas en el territorio del ex virreinato. En 1820 comenzó un nuevo ciclo, caracterizado por el triunfo de las tendencias secesionistas, la dispersión del poder, las guerras civiles y la polarización política entre unitarios y federales.

Un nuevo intento de organización nacional se inició en 1852, pero fracasó por las desinteligencias entre los sectores dominantes de Buenos Aires y Entre Ríos, las dos provincias que habían logrado mayor desarrollo económico-social. El conflicto se resolvió en 1861 y, desde entonces, bajo la dirección de las élites porteñas, comenzó la construcción del Estado nacional. Veinte años después, luego de un proceso complejo, el Estado nacional había adquirido sus principales atributos.

1. Un largo período de fragmentación política y económica

A mediados del siglo XIX, mientras Europa se colmaba de chimeneas, máquinas y rieles y el mundo tendía a una integración económica cada vez mayor, en el espacio rioplatense todavía no se había logrado construir una unidad política. En su lugar, había un conjunto de provincias organizadas autónomamente, gobernadas por caudillos, unidas formalmente en una Confederación y enfrentadas en luchas facciosas.

La economía –fundamentalmente ganadera– era rudimentaria, atrasada y marginal para el mercado mundial. El territorio estaba despoblado y la precaria infraestructura de caminos y transportes se mantenía prácticamente como en la época colonial. El predominio de los sentimientos localistas y la fragmentación

política se correspondían con una desarticulación de las economías regionales, que presentaban, en muchos casos, mayor vinculación con otros mercados que entre sí.

Entre los obstáculos que, desde 1810, conspiraban contra la unidad y la centralización del poder, pesaban –según Oscar Oszlak– más que las diferencias en cuanto a proyectos políticos, una serie de factores como el aislamiento geográfico, la heterogeneidad cultural y los diferentes intereses económicos locales, que impedían el desarrollo de vínculos materiales entre las distintas regiones de la Confederación¹.

Precisamente, uno de los obstáculos mayores para la construcción de una unidad política y de un Estado nacional lo constituían los intereses de los sectores dominantes de Buenos Aires, encarnados en la figura de su gobernador, Juan Manuel de Rosas.

Rosas mantenía desde 1829 un poder omnímodo sobre Buenos Aires y había logrado extender su influencia sobre el resto de las provincias. Representante de los intereses de los terratenientes y saladeristas de la provincia de Buenos Aires, Rosas se oponía a toda forma de unidad política. Temía que esa búsqueda condujera a la reaparición de los conflictos y luchas civiles que habían caracterizado las dos primeras décadas de vida independiente y que, a la vez, frenara la expansión que la economía bonaerense venía manifestando desde 1820. La oposición a la unidad, tanto de Rosas como del sector terrateniente-saladerista que él representaba, respondía también al interés de mantener, bajo la égida de Buenos Aires, el monopolio portuario y de la Aduana porteña, así como las riquezas y privilegios que de ello derivaban.

Pero esta política de Rosas y de los grandes terratenientes bonaerenses comenzó a ser cuestionada por muchos sectores y sobre todo por intelectuales que, teniendo una conciencia clara sobre los cambios que estaban atravesando Europa y Estados Unidos, comenzaron a considerar que Rosas era una traba para la modernización económica, la inserción de la región en la economía internacional y la institucionalización del orden. Es por eso que, desde fines de la década de 1840, se fue formando una amplia y compleja coalición antirrosista que

1 Esta interpretación de Oscar Oszlak complejiza una visión muy extendida en la historiografía argentina, que explica las décadas de desunión como consecuencia del enfrentamiento entre dos concepciones políticas, la unitaria y la federal. Véase Oscar Oszlak: *La formación del Estado argentino*, Buenos Aires, Ediciones de Belgrano, 1985. Por su parte, José Luis Romero, en su obra *Las ideas políticas en la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1987, analiza el conflicto no sólo en términos políticos sino también culturales.

incluía desde viejos unitarios y miembros de la Generación del 37² hasta federales que no compartían el centralismo del federalismo rosista. A tal coalición se agregó en 1851, además de tropas brasileñas y de la Banda Oriental, una figura determinante: la del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Justo José de Urquiza.

Urquiza rompió su alianza con Rosas a raíz de las contradicciones que su provincia y, particularmente, los terratenientes y saladeristas entrerrianos comenzaron a tener con las políticas exclusivistas de Buenos Aires. Si bien éstos compartían con los sectores dominantes porteños el interés por el desarrollo de la ganadería y por el intercambio con los países industriales, reclamaban la libre navegabilidad de los ríos para comerciar directamente con ingleses y otros europeos sin la intermediación porteña. Hacia 1850, los pujantes ganaderos entrerrianos, con un líder progresista y activo, emprendieron el camino de la rebelión.

2. La década de desunión. La conformación de dos unidades políticas

En 1852, en la batalla de Caseros, Rosas fue vencido y su derrocamiento pareció dejar libre el camino para la construcción de un Estado nacional, es decir, un poder centralizado capaz de ejercer monopólicamente la violencia, el control político y administrativo; apto para difundir los elementos simbólicos de la nacionalidad y para generar y garantizar las condiciones para el desarrollo de una economía capitalista, integrada al mundo y centrada en la agroexportación. Sobre todo ello, existía un extendido consenso que abarcaba no sólo a prestigiosos intelectuales y a los sectores dominantes del Litoral, sino también a los terratenientes de Buenos Aires, pronto pasados al campo de los vencedores.

-
- 2 La “Generación del 37” estaba formada por hombres como Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría y Domingo Faustino Sarmiento. Conformaron un grupo preocupado por entender los enfrentamientos que, desde la Revolución de Mayo, habían impedido la organización del país. A diferencia de los unitarios, el problema para ellos no radicaba en la persona de Rosas. El verdadero problema residía en desentrañar el secreto de esa sociedad que los unitarios habían ignorado y que Rosas parecía interpretar fielmente. Movidos por esa convicción, los hombres de la Generación de 1837 se lanzaron a indagar los caracteres de la realidad social rioplatense: los ámbitos en los que residían la “civilización” y la “barbarie”, el despoblamiento del país, la herencia hispana, etc. En principio, trataron de influir sobre Rosas, aspirando a transformarse en su guía intelectual, pero no tuvieron éxito, sufriendo persecuciones, muerte y exilio.

Para todos estos actores, la construcción del Estado era una condición indispensable para atraer los capitales y la mano de obra necesarios para expandir la ganadería, impulsar las actividades agrícolas y lograr una modernización de la infraestructura que permitiera incorporar más tierras a la producción e integrar los dispersos mercados regionales en un mercado nacional.

El Estado debería además poner fin a la presencia indígena en la pampa y en vastos territorios de la Patagonia y el Chaco, una presencia inquietante que limitaba la ocupación productiva de tierras fértiles y creaba –por sus incursiones violentas– condiciones poco seguras para la producción.

Paradójicamente, esos consensos básicos –que comenzaron a concretarse en 1853 con la sanción de la Constitución nacional– no impidieron que muy pronto volvieran a estallar los conflictos y las guerras civiles. Como consecuencia de ello, el “país” quedó dividido en dos unidades políticas: por un lado Buenos Aires y, por el otro, la Confederación, en la cual confluían el resto de las provincias bajo el liderazgo de Justo José de Urquiza.

Durante casi una década, Buenos Aires y la Confederación lucharon por hegemonizar los rumbos del proceso de modernización, creando un clima político inestable que hacía peligrar el desarrollo de las actividades económicas, la iniciativa privada y hasta la misma vida.

3. La construcción del Estado nacional

Con la reiniciación de las luchas parecía que, una vez más, los intereses localistas se impondrían y que se perpetuaría una situación de empate entre las provincias, sin que ninguno de los sectores en pugna pudiera imponerse al conjunto.

Pero las cosas habían comenzado a cambiar. Desde los últimos años del rosismo y sobre todo durante la década de 1850, se fueron gestando condiciones distintas a las prevalecientes desde 1810-1820. La creciente integración de Buenos Aires y el Litoral al mercado mundial (con la exportación de lanas, cueros y otros productos pecuarios), las posibilidades que creaba la apertura al mundo y el aumento de los lazos económicos entre las regiones, fueron creando un consenso antes inexistente sobre las necesidades de la unión.

No obstante ello, Buenos Aires y la Confederación trataron de constituirse, cada una por su lado, en Estados modernos. Los resultados fueron muy disímiles. La Confederación fracasó en sus intentos de construir el aparato institucional estatal, fundamentalmente por la insuficiencia de sus recursos económicos. Sin el concurso de Buenos Aires, cuyas instituciones prosperaban estimuladas por el crecimiento espectacular de su economía y por los lazos que la provincia

había logrado tejer con las finanzas y el comercio internacionales, no se podría concretar el proyecto de unidad nacional.

Ésa es la conclusión a la que aparentemente llegó Justo José de Urquiza, líder político y militar de la Confederación, quien en Pavón, en 1861, se enfrentó a los ejércitos porteños y se retiró del campo de batalla prácticamente sin dar lucha. Entendió, quizá, que la lucha debía darse en otros ámbitos y por otros medios, como los parlamentarios, ya que en virtud de las prescripciones constitucionales, las provincias podrían tener mayoría en el Senado de la Nación y lograr —a través de negociaciones y consensos— lo que no se había podido alcanzar por otras vías.

Luego de Pavón, los sectores dominantes porteños, encabezados por Bartolomé Mitre, iniciaron un nuevo intento organizador, que paulatinamente logró incluir a diversas fracciones burguesas del litoral fluvial y el interior del país.

Bajo el impulso de esta compleja e inestable alianza y sobre la base de ciertas instituciones bonaerenses y de los recursos financieros procedentes de Buenos Aires y de Londres, el Estado nacional comenzó a afirmar lentamente su presencia institucional y a ejercer una dominación creciente sobre la sociedad. El proceso no fue simple ni armónico. Siguiendo los análisis de Oscar Oszlak³, podríamos decir que el proceso de construcción del Estado nacional se caracterizó por una gran complejidad y por la magnitud de los recursos violentos puestos en juego. Ello fue así por distintas razones:

- Por un lado, el extendido consenso existente entre los sectores dirigentes sobre la necesidad de organizar el país no se tradujo en la eliminación o el aquietamiento de sus enfrentamientos políticos. Sus luchas facciosas sólo declinaron en 1880, cuando lograron sellar un pacto de dominación estable.
- Por otra parte, la construcción del Estado nacional, es decir, la instancia suprema de poder en una sociedad, suponía expropiar a variados actores sociales de poderes y funciones que tradicionalmente ejercían. Las tareas de construir un ejército nacional y un aparato recaudador de alcances nacionales, de lograr el monopolio de la emisión monetaria o el establecimiento de una justicia en última instancia enfrentaron al naciente Estado nacional con los gobiernos provinciales. Además, la necesidad de conocer y controlar a la sociedad que se estaba constituyendo, de regular las relaciones entre los individuos, de asegurar la previsibilidad en las transacciones, de uniformar ciertas prácticas, de imponer y legitimar la dominación y conformar una identidad nacional obligó al Estado a legislar, establecer códigos, registrar a

3 Oscar Oszlak, *op. cit.*

los habitantes desde el nacimiento hasta la muerte y a tomar un rol decisivo en la educación. Todo esto implicaba avances del Estado sobre normas establecidas por la costumbre y la tradición, y produjo enfrentamientos con la Iglesia y otras instituciones civiles.

- La construcción del Estado implicaba además incursionar en áreas novedosas (como el relevamiento estadístico, la colonización, la instalación de ferrocarriles, la promoción de otras obras de infraestructura y comunicaciones) para responder a las necesidades regulatorias y de servicios de una sociedad y una economía en creciente expansión.

Esta labor expropiadora, que intentaba legitimarse desde una pretendida identificación entre el Estado y el interés general, fue llevada a cabo entre 1862 y 1880, durante las presidencias de Bartolomé Mitre (1862-1868), Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880). Requirió poner en juego estrategias represivas, pero también un complejo haz de recursos consensuales, ya que la experiencia acumulada desde 1810 demostraba que esta nueva construcción no podía fundarse sólo en la fuerza o en pactos endeble y efímeros. Si la fuerza era necesaria para asegurar el monopolio de la violencia y el control territorial, la creación del consenso aparecía como un factor esencial en la consolidación del ensayo iniciado en 1862.

La fuerza represiva del Ejército nacional fue utilizada en principio contra algunos caudillos del Interior y del Litoral. Durante la década de 1860 y la siguiente, el Ejército nacional en formación ahogó en sangre la resistencia de algunas provincias al proyecto de organización nacional. Es el caso de las sublevaciones de los caudillos Chacho Peñaloza en La Rioja, de Felipe Varela en la zona cuyana, La Rioja y Catamarca, de Ricardo López Jordán en Entre Ríos y de decenas de rebeliones más. Para dominar esta situación e intervenir en favor de sus aliados locales, durante la década de 1870, el Estado nacional fue asentando regimien-
tos en las distintas provincias.

El instrumento represivo también fue ampliamente empleado contra los indígenas. Para la época en que se estaba construyendo el Estado nacional, casi la mitad del territorio sobre el que Argentina reclamaba soberanía estaba en manos indígenas: la región del Chaco, la Patagonia y una franja central que, de este a oeste, incluía el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la actual provincia de La Pampa y zonas del sur de las provincias de Córdoba y Mendoza. En 1879 el Ejército nacional emprendió la conquista de las tierras indias de la pampa y la Patagonia. En sólo dos años salió victorioso, aprovechando las ventajas que le otorgaban la posesión de rifles de repetición, el ferrocarril y el telégrafo. La “conquista del desierto”, nombre dado a esta campaña por los vencedores, permitió el reparto de vastísimos territorios entre unos pocos y

ricos terratenientes, provocó el exterminio de la mayor parte de la población indígena y condenó a la marginalidad a los sobrevivientes. Muchos investigadores e intelectuales no dudan en caracterizarla como un genocidio.

En la década de 1880 fueron sometidos los indígenas del Chaco. Una vez más, los indígenas fueron expropiados y muertos en nombre de la “civilización”. Los que sobrevivieron aportaron mano de obra barata para los ingenios y los obrajes madereros. Para la élite dirigente, el indígena –así como el gaucho– era un sujeto no integrable al nuevo orden que se pretendía construir.

Además de estas estrategias represivas, simultánea y combinadamente, fueron impulsadas otras estrategias consensuales, como la cooptación de ciertos sectores dirigentes del interior a través del otorgamiento de subsidios a los gobiernos provinciales, el acceso a puestos de dirección del Estado nacional, el empleo público o la intervención federal. Todos estos recursos fueron utilizados selectivamente para favorecer a los aliados locales de los grupos que ejercían el gobierno nacional.

Es de notar que muchas de esas élites locales, al aceptar la cooptación, se consolidaron a nivel local e incursionaron en la política nacional, pero al precio, en muchos casos, de condenar a su provincia al atraso y la marginación, ya que las políticas económicas impulsadas por el Estado nacional beneficiaban sobre todo al área pampeana.

También el Estado ganó un creciente consenso entre diversos sectores sociales a través, por ejemplo, del establecimiento de normas que introducían regularidad y previsibilidad en las actividades económicas, y la puesta en marcha de obras y servicios como los ferrocarriles y los telégrafos, que estimulaban la expansión de la economía y un aumento de la riqueza que no sólo beneficiaba a los sectores terratenientes.

Por medio de recursos ideológicos vehiculizados sobre todo a través del aparato educativo, el Estado trató asimismo de afianzar un sistema de creencias, valores y normas de conducta que, a la vez que creaba sentimientos de pertenencia a la Nación, generaba consenso para el nuevo sistema de relaciones sociales y el esquema de dominación en vigencia. La “penetración ideológica” se operó sobre todo a partir de la década de 1880, cuando el Estado dirimió en su favor la lucha contra la Iglesia, y puso bajo su dirección el área educativa. En 1884 se sancionó la ley 1420 de Educación común, que estableció la enseñanza gratuita, laica y obligatoria.⁴

4 Hacia la misma época se privó a la Iglesia del manejo del registro de nacimientos y muertes, y se legisló el matrimonio civil, con lo que el Estado incorporó importantes áreas de la vida cotidiana que se hallaban bajo jurisdicción eclesial.

Es importante insistir en dos aspectos centrales de este proceso: uno se relaciona con la nacionalización de una población compuesta ya en ese tiempo por una buena proporción de inmigrantes, y el otro tiene que ver con el control social, es decir, con la construcción de la legitimidad del propio Estado nacional. El Estado en formación necesitaba construir su legitimidad, es decir, las condiciones para ser aceptado por la sociedad como autoridad suprema, indiscutida, legítima. La acción de la escuela pública y luego la del servicio militar obligatorio fueron fundamentales en la creación de sentimientos de pertenencia a la Nación y en la imposición de normas y valores que hicieran posible el acatamiento de la autoridad estatal.

En el transcurso de este proceso largo y conflictivo se constituyeron progresivamente las instituciones que fueron asegurando un ejercicio cada vez más efectivo de la autoridad, así como la reproducción material del Estado. Ejemplos de ello son la construcción del Ejército nacional; la creación de la Corte Suprema de Justicia, de la Contaduría General de la Nación y de la Dirección General de Aduanas; la sanción de los códigos civil, penal y comercial y la creación del Registro Nacional de las Personas, de la administración central de cementerios, así como de los ministerios, de las secretarías de Estado y de los poderes legislativo y judicial.

El proceso de construcción del Estado nacional argentino concluyó en 1880. Para esos años, ya habían sido doblegadas las montoneras del Chacho Peñaloza, de Felipe Varela y Ricardo López Jordán, últimos exponentes –y quizá los más paradigmáticos– de la lucha del Interior y el Litoral contra el centralismo porteño. También habían sucumbido los indígenas del Sur y, en el año 1880 precisamente, el Estado nacional logró vencer a los más acérrimos defensores de la autonomía porteña, dando fin a la última y más difícil resistencia a su autoridad.

En una situación aparentemente paradójica, la provincia que había alentado y defendido el centralismo, fue la que resistió más tenazmente los avances del Estado nacional, para terminar siendo sometida al poder que había contribuido a engendrar. Efectivamente, la construcción del Estado nacional había sido impulsada por los sectores dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Ese Estado en formación fue afirmando su autoridad en un proceso simultáneo de concentración del poder y de expropiación de los poderes provinciales. Pero, mientras el Estado iba concentrando poder, afirmaba su autoridad sobre sectores crecientes de la sociedad y crecían sus ámbitos de actuación, ciertas fracciones dirigentes de Buenos Aires, celosas de la autonomía porteña, comenzaron a resistir la pérdida de funciones y atribuciones de su provincia en manos de su retoño, el Estado nacional. En 1880 tuvieron lugar los combates decisivos en los que el Ejército nacional venció a las tropas de Buenos Aires. Como resultado de ello, la provincia de

Buenos Aires tuvo que disolver sus cuerpos militares y aceptar la federalización de su capital, la ciudad de Buenos Aires.

En 1880, entonces, el Estado nacional estaba constituido: en un doble proceso de centralización del poder y descentralización del control, había logrado afianzar su aparato institucional, ejercer una soberanía indisputada a nivel internacional e imponer su autoridad en todo el territorio nacional, respaldado en el monopolio de la violencia y en la posibilidad de crear consenso, en tanto se erigía en garante del “progreso” y aseguraba el desarrollo capitalista argentino.

4. Una construcción particular

El Estado que se había consolidado en 1880, a diferencia de los arquetípicos casos inglés y francés, fue construido “de arriba hacia abajo”, siendo el artífice tanto de las clases y de la estructura social cuanto de la modernización económica.

Distintos autores han reflexionado sobre este tópico. Por ejemplo, Jorge Federico Sábato sostuvo que el Estado argentino fue más un elemento de un proyecto de sociedad futura que el producto de una sociedad existente⁵. Waldo Ansaldi —adaptando un concepto utilizado por Antonio Gramsci para la Italia del *Risorgimento*— caracterizó el proceso abierto con la Organización Nacional como una revolución pasiva. Sostuvo que, en este tipo de revoluciones, el tránsito hacia la modernidad se realizó “desde arriba” y, por lo tanto, fue elitista y antipopular. El Estado asumió un rol central en la dirección de las transformaciones, sustituyendo la acción de clases o fracciones de clase⁶.

Daniel García Delgado sostuvo que una característica central de la relación Estado y sociedad en Argentina es que el Estado determinó fuertemente a la sociedad, apareciendo como modernizador, revolucionario, transformador o garante de un orden represivo, pero en todos los casos con una gran influencia sobre la sociedad. Extendiendo tales consideraciones para el conjunto de América Latina, dijo que, a diferencia de otras situaciones consideradas paradigmáticas en las que una sociedad civil relativamente fuerte y homogénea se organizó en Estado nacional, en diversos países de la región, este último ha cumplido o cumple el papel de agente aglutinante de la sociedad civil. La estructuración

5 Jorge F. Sábato: *La formación de la clase dominante en la Argentina*, Buenos Aires, CISEA-GEL, 1988.

6 Waldo Ansaldi: “Soñar con Rousseau y despertar con Hobbes: una introducción al estudio de la formación del Estado nacional argentino”, en Waldo Ansaldi y José Luis Moreno: *Estado y sociedad en el pensamiento nacional*, Buenos Aires, Cántaro, 1989.

social y política relativamente precaria de diversos países latinoamericanos encontró un apoyo indispensable en el Estado, que pasó a constituirse así en referente y participante obligado de una vasta gama de transacciones económicas, políticas y sociales, y en piedra de toque de las ideologías, posiciones políticas y estrategias de desarrollo⁷. En esta misma línea de razonamiento, Enzo Faletto sostuvo que, en América Latina, el Estado es no sólo la expresión política de la sociedad y del poder en ella existente, sino que además organiza al conjunto de la sociedad⁸.

Barrington Moore, en sus análisis sobre la transición al capitalismo, observó que los países habían recorrido, básicamente, tres grandes vías en tal proceso. La primera vía era la que habían recorrido países como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, donde, con características propias en cada caso, habían tenido lugar revoluciones burguesas. En estos procesos, un grupo social con base económica independiente destruyó los obstáculos que se oponían a la versión democrática del capitalismo. Desarrollándose desde la dinámica social, pudo contar o no con el apoyo de las clases altas rurales según los casos, pero modificó profundamente las estructuras económicas anteriores. La segunda vía también desarrolló el capitalismo, pero dio en lo político formas autoritarias. Los casos alemán y japonés fueron los más obvios. Representaron ambos (el Imperio alemán a fines del siglo XIX y el Japón de los Meiji luego de 1873) revoluciones “desde arriba”. El Estado, manejado por las clases propietarias tradicionales, introdujo las reformas, fundamentalmente porque no existían allí los sectores burgueses capaces de generarlas. No se modificaba en tales situaciones la propiedad de la tierra. Finalmente, la tercera vía fue aquella que, como en los casos de Rusia y China, condujo al “comunismo”. La importancia del trabajo de Barrington Moore se funda, entre otras cosas, en la relación que el autor estableció entre la profundidad y el carácter de los cambios sociales y económicos y la construcción de la democracia política⁹.

En Argentina, las consecuencias de una construcción realizada “desde arriba” fueron de fundamental importancia tanto en el nivel de la política como en el de la estructura y el funcionamiento que el mismo Estado fue adquiriendo. Según Daniel García Delgado, el Estado nacional argentino mostró escasa autonomía respecto de la clase que le dio origen. El gobierno se estructuraba y

7 Daniel R. García Delgado: *Estado & Sociedad, la nueva relación a partir del cambio estructural*, Buenos Aires, Tesis-Norma, 1996.

8 Enzo Faletto: “Especificidad del Estado en América Latina”, Santiago, División de Desarrollo Social de CEPAL, mimeo, p. 18, en Daniel García Delgado, *op. cit.*

9 Barrington Moore: *Los orígenes de la dictadura y la democracia*, Barcelona, Península, 1976.

operaba como coto de caza cerrado y los asuntos nacionales eran tratados como problemas de redes de relación familiares para servir y satisfacer a un círculo restringido de intereses y de individuos privilegiados de la oligarquía. El Estado –cautivo de esta clase– adoptó el rol de modernizador y portador de un progreso que se identificaba con el mundo cultural europeo occidental. Los cambios alentados no eran tanto producto de un consenso nacional como del proyecto y voluntad de la élite, direccionizados verticalmente y como negación de lo anterior, ya que pretendieron construir una Nación contra su pasado, más bien que a partir de él¹⁰.

Bibliografía

- Allub, Leopoldo, *Orígenes del autoritarismo en América Latina*, México, Katún, 1983.
- Ansaldi, Waldo, “Frívola y casquivana, mano de hierro en guante de seda. Una propuesta para conceptualizar el término de oligarquía en América Latina”, Terceras Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia de Universidades Nacionales, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, septiembre de 1991.
- Ansaldi, Waldo y Moreno, José Luis, *Estado y sociedad en el pensamiento nacional*, Buenos Aires, Cántaro, 1989.
- Bobbio, Norberto, *Estado, Gobierno y Sociedad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
- Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola, *Diccionario de Política*, México, Siglo XXI, 5a. ed., 1987.
- Botana, Natalio, “El federalismo liberal en Argentina: 1852-1930”, en Carmagnani, Marcelo (comp.), *Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
- Botana, Natalio, *El orden conservador*, Buenos Aires, Sudamericana, 1985.
- De Sagastizábal, Leandro, Marcaida, Elena, Scaltritti, Mabel y De Luque, Susana, *Argentina 1880-1943. Sociedad y Estado. Aproximaciones a su estudio*, Buenos Aires, C.E.L., 1995.
- García Delgado, Daniel, *Estado y Sociedad*, Buenos Aires, Flacso, 1996.
- García Delgado, Daniel, *Estado & Sociedad, la nueva relación a partir del cambio estructural*, Buenos Aires, Tesis-Norma, 1996.
- Gorostiegui de Torres, Haydeé, *Argentina. La organización nacional*, Buenos Aires, Paidós, 1972.
- Moore, Barrington, *Los orígenes de la dictadura y la democracia*, Barcelona, Península, 1976.
- Oszlak, Oscar, *La formación del Estado argentino*, Buenos Aires, Ediciones de Belgrano, 1985.

10 Daniel García Delgado, *op. cit.*, p. 45

- Oszlak, Oscar, “Reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina”, *Desarrollo Económico*, N° 47, vol. 21, enero-marzo de 1982.
- Romero, José Luis, *El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1983.
- Romero, José Luis, *Las ideas políticas en la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1987.
- Sábato, Jorge Federico, *La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características*, Buenos Aires, CISEA-GEL, 1988.
- Sábato, Jorge Federico y Roulet, Jorge Esteban, “Estado y administración pública en la Argentina, ¿frenos o motores del proceso de cambio social?”, *Historia Integral Argentina*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1972.

Los cambios en el Estado y la sociedad. Argentina (1880-1930)

Elena Marcaida, Alejandra Rodríguez y Mabel Scaltritti

Entre 1880 y 1930, el Estado nacional se consolidó y se transformó en garante del mantenimiento y reproducción de un régimen de acumulación capitalista basado en las actividades agrarias y en la complementación con las economías industriales.

Desde 1880, un sistema que otorgaba amplias libertades en el ámbito civil coexistió con un régimen político que limitaba a unos pocos el acceso a los más altos niveles de decisión del Estado. Esta particular combinatoria entre liberalismo económico y conservadurismo político hace que denominemos al período que se extiende 1880 y 1916 como el ciclo del liberalismo oligárquico.

Desde 1916, fruto de las luchas de los sectores sociales emergentes de la modernización capitalista, al lado de las libertades civiles comenzaron a regir las libertades políticas, inaugurándose otro período que concluyó en 1930: el ciclo del liberalismo democrático¹.

El ciclo del liberalismo-oligárquico (1880-1916)

1. El régimen político oligárquico

La etapa de construcción del Estado nacional estuvo surcada por frecuentes luchas y enfrentamientos políticos entre los distintos grupos e individuos que integraban la coalición dominante. El motivo de los conflictos no radicaba en los rumbos que debía seguir el proceso de modernización –tópico sobre el que

1 En esta periodización de la etapa 1880-1930 seguimos a Horacio Tarcus, “La crisis del Estado populista. Argentina 1976-1990”, *Realidad Económica*, N° 107, 1° de abril al 15 de mayo de 1992.

existía un extendido consenso— sino en las disputas por el acceso a distintas posiciones de gobierno.

Recién hacia 1880, los sectores dominantes de distintas provincias, nucleados en el Partido Autonomista Nacional (PAN), sentaron las bases de la estabilización política al llegar a una serie de acuerdos básicos acerca de las formas de organización y distribución del poder y sobre las reglas de sucesión que regularían la elección de los gobernantes.

El general Julio Argentino Roca fue uno de los principales artífices de este acuerdo. Roca participó de todas las acciones (aplastamiento de insurrecciones provinciales, guerra del Paraguay y campañas contra los indígenas del Sur) que contribuyeron a la consolidación del poder central. Ello le permitió establecer contactos políticos con los sectores dirigentes del interior del país. A fines de la década de 1870, gobernadores vinculados a Roca, como los de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta y Tucumán, organizaron una alianza que derivó en la consolidación del Partido Autonomista Nacional: el partido que monopolizó el poder hasta 1916. El PAN estaba conformado por un conjunto de figuras unidas por relaciones e intereses políticos y económicos. Roca desempeñó en el PAN un fuerte liderazgo, definiendo la mayor parte de los conflictos e influyendo decisivamente en la elección de los candidatos. Fue presidente de la República entre 1880 y 1886 y entre 1898 y 1904.

El pacto de dominación logrado en el 80 puso fin a los constantes episodios de insurrecciones y guerras civiles, permitió al Estado desembarazarse de su matriz porteña y cristalizó en un tipo particular de régimen político que pervivió hasta 1916. Tal régimen puede ser definido como *oligárquico* porque el poder político fue monopolizado por un grupo minoritario, depositario a la vez del poder económico y social. Natalio Botana lo caracterizó como un régimen de *hegemonía gubernamental* o de *gobiernos electores*. En este régimen, los funcionarios salientes designaban a los entrantes, produciéndose un fenómeno de *inversión del principio de la representación política* ya que se “logró invertir, gracias al mecanismo de los gobiernos electores, el clásico concepto republicano de representación política. En lugar de ciudadanos autónomos que, aun en el marco del sufragio restringido, tomaban parte en la elección de sus representantes, el régimen del ochenta colocó en el centro del escenario a las instituciones (presidencia, gobernaciones, municipios y cuerpos legislativos) que producían a sus propios representantes: el ciudadano no elegía, elegían los gobiernos”.²

2 Natalio Botana: “El federalismo liberal en Argentina: 1852-1930”, en Marcelo Carmagnani (comp.), *Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Para monopolizar las vías de acceso al gobierno y al Estado en general, el grupo que detentaba el poder construyó y puso en ejecución distintos mecanismos, como el fraude o la cooptación. El fraude y las intervenciones federales sirvieron para excluir a las oposiciones consideradas peligrosas y a las mayorías populares. La oferta de cargos y candidaturas se utilizaba para cooptar a las oposiciones moderadas.

En este régimen político el poder se concentraba y circulaba entre unas pocas familias. El control del gobierno (nacional y provincial) dependía de los múltiples vínculos y acuerdos tejidos entre las mismas. Los aristocráticos clubes del Progreso y el Jockey Club, y sobre todo las facultades de Derecho de Buenos Aires y Córdoba, a las que sus miembros asistían, fueron las instituciones básicas en las que se realizaba el reclutamiento de la élite política³.

Respecto de la relación de esta élite con las fracciones dominantes de la burguesía, Jorge Federico Sábato observó que la relativa autonomía de los políticos respecto de los grupos económicos más poderosos —característica de la etapa 1860-1880— fue diluyéndose a medida que el proceso de modernización capitalista se afianzaba. Hacia 1880 era visible la compenetración entre élite política y clase dominante: los negocios públicos y privados se interpenetraban; ricos empresarios incursionaban en la política, funcionarios y políticos lo hacían en los negocios. El proceso adquirió tal dinamismo que, en sólo una generación, la élite política diluyó su especificidad, fundiéndose con los grupos más poderosos de la burguesía argentina⁴.

1.1 “Orden y progreso”

En la Argentina de esta época, el conservadurismo político de los grupos dirigentes —expresado en la institucionalización de un régimen oligárquico— coexistió con posiciones liberales y progresistas en las esferas económica y social. Una doctrina en auge en los países industriales y entre las élites de los países periféricos, el *positivismo*, permitía conciliar esos dos términos aparentemente contradictorios. Justamente, el lema del positivismo, *Orden y progreso*, expresaba el deseo de construir sociedades pujantes y dinámicas en el marco de un ordenamiento férreo desde el poder. La estática del orden, que se entendía imprescindible para mantener la unidad de la sociedad, se combinaba con la diná-

3 Natalio Botana: *El orden conservador*, Buenos Aires, Sudamericana, 1985.

4 Jorge F. Sábato: *La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características*, Buenos Aires, CISEA-GEL, 1988.

mica del progreso, identificado con el avance sostenido de la ciencia y de la técnica, el desarrollo de las fuerzas productivas y las posibilidades de superación social.

La utopía positivista de conformar sociedades ordenadas y previsibles se expresó además en la Argentina de los 80 en la idea de suprimir la “política” y reemplazarla por la “administración”. La élite dirigente asociaba la política al caudillismo, a los enfrentamientos violentos y a la eventual emergencia de grupos cuestionadores del poder detentado por las clases dominantes. La “administración”, en cambio, era considerada una actividad con rasgos científicos, capaz de encauzar a las sociedades por la senda del progreso indefinido. “Burócratas serenos, imbuidos de soluciones a-valorativas, tomadas después de un estudio desapasionado de cada cuestión de la agenda pública, eran el modelo de administradores que debían reemplazar a los políticos de una época superada”⁵.

Además de la política, la herencia hispano-colonial y la religión católica eran —para los positivistas argentinos— símbolos de un pasado que trababa el proceso modernizador. Es por ello que apoyaron el laicismo, alentaron con la inmigración europea un trasplante cultural y vieron en la integración al mercado mundial y en la imitación de los países del Occidente europeo los caminos más adecuados para transitar desde la *barbarie* hacia la *civilización*.

Desde la década de 1880, impulsadas por intelectuales prestigiosos, como Eduardo Wilde, Miguel Cané y José María Ramos Mejía, estas y otras ideas propias del paradigma positivista lograron consolidarse en nuestro país, cohesionando a los grupos dominantes y permeando —desde el Estado y otras instituciones civiles— hacia las clases subalternas.

2. El Estado y la modernización económica y social

Una vez alcanzados el monopolio estatal de la violencia y la estabilidad política, el “progreso” —ese valor tan apreciado por los positivistas— tomó un lugar prioritario dentro de las tareas a cumplir por el Estado nacional.

La integración de Argentina al mercado mundial como país agroexportador requería alcanzar el pleno despliegue de las fuerzas productivas. Para ello, el Estado nacional profundizó las políticas tendientes a crear y ensamblar los distintos factores que concurren en la producción (tierra, trabajo y capital), al tiempo que brindó las bases jurídicas imprescindibles para el funcionamiento

5 Daniel Campione y Miguel Mazzeo: *Estado y administración pública en la Argentina. Análisis de su desarrollo en el período 1880-1916*, Buenos Aires, Ediciones FISyP, 1999.

de una economía capitalista. En lo relacionado con el factor tierra, el Estado nacional logró el desplazamiento de la frontera productiva a través de la conquista de los territorios indígenas de la pampa, la Patagonia y el Chaco. La adquisición de estos territorios no fue, por lo tanto, el resultado de un movimiento de población desplazándose desde tierras agotadas hacia tierras fértiles, sino de un hecho militar protagonizado por el Ejército nacional. Como consecuencia de ello, no existió una oferta abierta de tierras a bajo costo, susceptibles de ser adquiridas por los colonos extranjeros que, en número cada vez mayor, llegaban a nuestro país, sino que los territorios conquistados fueron distribuidos en enormes extensiones entre antiguos latifundistas, grandes financistas o especuladores. La incorporación de tierras redundó así en la consolidación del poder económico, social y político de un grupo terrateniente ya arraigado⁶.

El Estado argentino tuvo también un rol central en la conformación de un mercado de trabajo, condición esencial para el funcionamiento de una economía capitalista. En la medida en que crecía la integración de la región pampeana con el mercado mundial, las necesidades de mano de obra se tornaron acuciantes. El país contaba en 1869 con menos de dos millones de habitantes. En la pampa, la densidad de población era bajísima (menos de un habitante por km²). No podía esperarse que el crecimiento vegetativo de la población (que era además lentísimo) diera solución al problema. A través de una decidida política de atracción y promoción de la inmigración europea, el Estado nacional contribuyó a crear una oferta de mano de obra abundante al tiempo que operaba un trasplante cultural, congruente con los proyectos diseñados por intelectuales como Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento.

Entre mediados del siglo XIX y 1930 más de seis millones de extranjeros ingresaron a nuestro país. Expulsados de sus lugares de origen por problemas fundamentalmente económicos, llegaron a Argentina atraídos por las posibilidades de trabajo y con expectativas de rápido progreso. Aunque cerca de la mitad retornó a sus países de origen o buscó otros destinos, hacia 1914, la proporción de extranjeros respecto de la población nativa registró en Argentina los índices más altos del mundo (aun mayores que los de Estados Unidos, los más importantes receptores —en términos absolutos— de población extranjera en el período).

El aporte de la inmigración europea constituye una de las causas fundamentales para entender el fuerte aumento de la población argentina en el período. El número de habitantes se incrementó cuatro veces en el corto lapso comprendi-

6 Véase Roberto Cortés Conde y Ezequiel Gallo: *La formación de la Argentina moderna*, Buenos Aires, Paidós, 1973.

do entre 1869 y 1914. Los cerca de 2 millones de habitantes que registró el Censo Nacional de Población de 1869 se habían casi duplicado en 1895 y, en 1914, llegaban a 8 millones aproximadamente. Mientras tanto, la población de la ciudad de Buenos Aires crecía a ritmo vertiginoso: de los 286.000 habitantes con que contaba en 1880 pasó a algo más de 660.000 en 1895 y a aproximadamente 1.576.000 en 1914.

Los inmigrantes procedían sobre todo de Italia y de España, pero también llegaron franceses, portugueses, rusos, sirios, judíos y eslavos. En 1914 constituían el 30 por ciento de la población, aunque en el área pampeana, donde de preferencia se asentaron, superaron ese porcentaje. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hacia 1914, casi la mitad de la población era extranjera.

La inserción de la economía local en el mercado mundial requería además una masiva inversión de capitales. La acción del Estado fue también decisiva en este aspecto, garantizando al capital altos niveles de ganancias a través de una variedad de medidas, como desgravaciones, transferencias de recursos, garantías de ciertos niveles de beneficios, créditos de la banca oficial, participación en las obras públicas, compra de bienes e insumos de variado tipo y transferencias de ingresos vía políticas monetarias e impositivas.

Estimulados por estas ventajas, los capitales comenzaron a fluir hacia los años de 1860 y se incrementaron durante las décadas de 1880 y 1900. Procedían sobre todo de Gran Bretaña, y también —aunque en menor medida— de otros países de Europa occidental y de Estados Unidos.

Los capitales extranjeros permitieron superar muchos de los obstáculos que trababan la articulación entre producción y circulación. Si en el período 1862-1880 habían resultado clave para la construcción del Estado argentino, desde 1880 fueron fundamentales para desarrollar la infraestructura del país agroexportador.

Entre 1860 y 1910, con el aporte del capital extranjero, se construyó una extensa red ferroviaria de casi 28.000 kilómetros de extensión. Comunicaba a distintas localidades del área pampeana y a las capitales de provincia con la ciudad de Buenos Aires, capital de la República y principal centro portuario, comercial y administrativo del país. Las líneas más rentables, las que recorrían las pampas, quedaron casi todas en poder de los británicos. Las restantes fueron fundamentalmente estatales, ya que el volumen comparativamente reducido de la actividad comercial las hacía poco atractivas para la inversión privada.

El ferrocarril, extendido en forma radial, aseguró el enlace entre las áreas de producción agroganadera y los mercados urbanos del litoral pampeano y del extranjero. Permitió además, la llegada de mercaderías importadas a los más remotos lugares del país, eliminando la última barrera —el aislamiento— que había mantenido eficazmente protegidas, durante mucho tiempo, a algunas

artesanías locales de la competencia externa. Por lo tanto, el ferrocarril, si bien cumplió un papel fundamental para la integración del mercado nacional y su articulación con el mercado externo, trajo aparejado un tipo de desarrollo fundado sobre todo en el estímulo de las actividades de exportación.

Los capitales extranjeros facilitaron también la extensión de la red telegráfica, la construcción de puertos y la instalación de servicios públicos (aguas corrientes, cloacas, alumbrado, transportes urbanos) en las principales ciudades del país. No faltaron inversiones extranjeras en tierras, en algunas actividades industriales muy rentables (frigoríficos, alimentación) y en un sistema financiero que, constituido principalmente por una importante red bancaria, fue adquiriendo una gran complejidad y diferenciación.

3. La expansión de la economía agroexportadora

Desde mediados del siglo XIX, los grupos dirigentes de Argentina pusieron en marcha un *modelo agroexportador*, es decir, un régimen de acumulación basado en la producción de alimentos y materias primas para la exportación y en la importación de manufacturas, capitales y trabajadores. El modelo implicaba una fuerte complementación entre la economía argentina y las de los países industrializados en el marco del sistema de división internacional del trabajo. Comenzó a implementarse hacia 1850, con la expansión de la ganadería ovina y la exportación de lana, para alcanzar su apogeo entre 1880 y 1914.

Durante este último período, la incorporación masiva de tierras y de trabajadores, la modernización de las técnicas productivas y de la infraestructura de transportes y comunicaciones permitieron un gran crecimiento y diversificación de la economía argentina, basada ahora en el desarrollo agrícola y en la producción de carnes finas para la exportación.

La agricultura moderna comenzó a desarrollarse hacia 1850-1860 en las colonias de chacareros extranjeros que se establecieron en el Litoral. En 1876 generó los primeros excedentes para la exportación y, a partir de allí, creció de modo espectacular. La superficie cultivada pasó de 840.000 hectáreas en 1876 a 20 millones en 1913 y, ya para estos años de principios del siglo XX, las exportaciones agrícolas igualaron y hasta superaron a las ganaderas⁷.

7 Durante todo el siglo XIX distintos productos ganaderos tuvieron la supremacía del comercio exterior. Primero fueron los cueros y el tasajo (carne salada); luego, entre 1850 y 1880, la lana. Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las carnes vacunas compartieron los primeros rangos de exportación con la producción agrícola.

La extraordinaria expansión de la agricultura se relaciona con cambios en las formas productivas inducidos por las necesidades de expansión de la ganadería. La instalación del frigorífico en los últimos años del siglo XIX permitía la exportación de carnes congeladas. Pero, para adaptar el ganado criollo a los requerimientos de los mercados externos, que reclamaban carnes vacunas tiernas y de muy buena calidad, hubo que refinarlo a través de la cruce con reproductores importados y asegurarle buena alimentación todo el año mediante el cultivo de alfalfa. La solución que se encontró fue el sistema de estancia mixta, una modalidad productiva que permitió satisfacer, simultáneamente, la demanda externa de bienes agrícolas y la producción de alfalfa requerida por la ganadería.

En las estancias mixtas, grandes explotaciones ubicadas sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero también en el sur santafecino y el sudeste cordobés, una parte de las tierras era reservada a la agricultura y otra a la ganadería. La parte asignada a la agricultura era, por lo general, arrendada en pequeñas parcelas a chacareros extranjeros por un plazo no mayor de tres años. Cuando finalizaba el contrato, el agricultor debía dejar el potrero cultivado con alfalfa, y alquilar otro, ya sea en la misma estancia o en otra. Las tierras agrícolas pasaban así a ser ocupadas por la ganadería y viceversa.

El sistema de estancia mixta, articulado con el arrendamiento y/o la aparcería⁸, presentaba varias aristas de interés para el ganadero terrateniente: limitaba los costos de producción de alfalfa a los que derivaban de la compra de semillas; permitía a través del sistema de cultivos combinados no sólo la expansión de la agricultura sino también la preparación de las pasturas artificiales necesarias para la cría del ganado refinado; hacía posible la apropiación por el ganadero terrateniente de una parte del excedente generado por el agricultor; tornaba factible el ausentismo de los grandes propietarios, quienes, de este modo, podían diversificar sus actividades en los lucrativos negocios de comercialización, finanzas e industrias; permitía, finalmente, el mantenimiento de la gran propiedad, base fundamental para acceder al mercado crediticio.

8 El aparcero —a diferencia del arrendatario— no contaba con capital líquido para arrendar la tierra, pero sí con conocimientos sobre la producción agropecuaria. El aparcero recibía del estanciero-terrateniente una parcela para sembrar. Cuando se cosechaba el cereal, el aparcero pagaba un canon por la tierra explotada que —de acuerdo al contrato sustanciado con el estanciero— podía consistir en la mitad, el cuarto o el tercio del producto realizado. Los aparceros tuvieron, por lo general, menores márgenes de independencia que los arrendatarios para tomar decisiones autónomas en las tierras que trabajaban. También hubo contratos de arrendamiento y de aparcería para el desarrollo de la producción ganadera, sobre todo en la época de oro del lanar.

Respecto de la gran propiedad pampeana, puede afirmarse que la misma, contra lo que se ha sostenido tradicionalmente, fue funcional a la expansión, ya que permitió, a partir del desarrollo de explotaciones mixtas, adecuar la producción a las cambiantes condiciones de la demanda internacional, brindando una solución más eficiente que la ofrecida por el régimen de colonias⁹.

El proceso de crecimiento y diversificación de las actividades agrarias se complementó con un fuerte proceso de urbanización. Fue éste quizás uno de los fenómenos más paradójicos del período. En un país agroexportador, donde la inmigración se había convocado para poblar los campos “desiertos”, la mayor parte de los extranjeros y de la población en general tendió a concentrarse en las urbes de Buenos Aires y el Litoral.

El fenómeno puede explicarse por la confluencia de distintos factores. Por una parte, las formas predominantes de organización de la producción agropecuaria, centradas en la gran propiedad latifundista y el arrendamiento, no favorecieron el arraigo de gran cantidad de habitantes en las zonas rurales. Por otra parte, las ciudades del este, y sobre todo Buenos Aires y Rosario, ofrecían mayores posibilidades de trabajo y de ascenso social que las brindadas por el campo. En tales ciudades, el comercio, las obras públicas, la provisión de servicios, la industria y las actividades artesanales se intensificaron, atrayendo a una gran cantidad de población.

Por todo ello, el crecimiento de la sociedad urbana en estos años fue, en muchos sentidos, un proceso tan espectacular y revolucionario como el que tuvo lugar en la producción agropecuaria. Si en 1869, el 39,5 por ciento de la población de la región pampeana vivía en ciudades de más de 2.000 habitantes, en 1914 la proporción había crecido al 62,1 por ciento.

Argentina logró además en estos años un importante desarrollo industrial. Por supuesto que, dadas las características del modelo económico adoptado, el crecimiento se dio con mayor fuerza en ramas vinculadas con las actividades de exportación, como los frigoríficos. Fuera de ellas, la industria sólo se desarrolló en los casos en que los costos internos eran lo suficientemente bajos como para afrontar con éxito la competencia de los artículos importados. Fue por ello que adquirieron mayor desarrollo las industrias procesadoras de productos ganaderos, las alimentarias, las de la construcción, confección, vestimenta y calzado. Sólo más tarde prosperará la actividad textil y se instalarán algunas metalúrgicas. Se trataba de una industria complementaria al modelo agroexportador, en la que primaban las técnicas primitivas y las formas de producción intensivas en mano de obra. Los establecimientos, en su mayoría, estaban organi-

9 Para conocer los términos de este debate, véase Jorge F. Sábato, *op. cit.*

zados en pequeña escala y no eran más que reminiscencias del taller artesanal. Se radicaron fundamentalmente en las urbes del litoral pampeano, contribuyendo de este modo a profundizar las desigualdades regionales generadas por el modelo agroexportador.

Las limitaciones y debilidades del desarrollo industrial, así como la ausencia de demandas en pos de su profundización, pueden explicarse porque los empresarios industriales –sobre todo los que se dedicaban a la elaboración de productos primarios– tenían sus intereses muy confundidos con la explotación agropecuaria. Este factor impidió percibir el problema de la industrialización como el de un cambio de estructuras y limitó su desarrollo sólo al de aquellas ramas que no cuestionaran el modelo de especialización primaria adoptado. Mal podían estos sectores agropecuarios diversificados –principales beneficiarios internos de tal esquema– impulsar un crecimiento industrial integrado, centrado en la expansión de las industrias básicas y el desarrollo tecnológico¹⁰.

3.1 Los factores de desarrollo del modelo agroexportador

A principios del siglo XX, Argentina era considerada el “granero del mundo”. El país ocupaba uno de los primeros lugares en las exportaciones mundiales de cereales, lino, lana y carne.

Bajo el impulso de las exportaciones, no sólo crecieron las áreas y sectores vinculados a la producción agropecuaria, sino que también se desarrolló un sector urbano, comercial e incipientemente industrial, significativamente más rico y diversificado que el de otras economías latinoamericanas.

¿Cuál fue la clave de este desarrollo? A diferencia del capitalismo británico que basaba la acumulación y reproducción ampliada del capital en la producción industrial, con relaciones capitalistas típicas entre capital y trabajo, el capitalismo argentino sentó sus bases en torno a la riqueza natural del suelo.

La gran fertilidad de la llanura pampeana permitió que Argentina contara durante décadas con una fuente de ingresos extraordinarios¹¹. La posesión del recurso natural tierra le permitió captar parte de la riqueza que se generaba en las naciones industriales. Dados los buenos precios internacionales para los productos agropecuarios vigentes en la mayor parte del período, con una cantidad de trabajo considerablemente menor en comparación con el resto del mundo, Argentina producía cereales y carne a cambio de bienes industriales.

10 Véase Roberto Cortés Conde y Ezequiel Gallo, *op. cit.*

11 En la literatura económica a estos ingresos extraordinarios se los conoce como “renta diferencial de la tierra a escala internacional”.

¿Quiénes y cómo se apropiaron de esta riqueza, basada en la condición natural del suelo? En primer lugar, los dueños de las tierras pampeanas. El monopolio de estas tierras les brindaba la posibilidad de imponer condiciones a los arrendatarios y percibir una renta que era notablemente mayor —dada la extraordinaria fertilidad del suelo— que en otras partes de Argentina y del mundo.

Los capitalistas ingleses también estaban en una condición privilegiada: contaban con el monopolio del transporte —ferrocarriles y buques—, parte del aparato financiero y el control del comercio exterior, sin los cuales era imposible realizar las mercaderías en Europa. Estos dos grupos, los terratenientes pampeanos y los inversores ingleses, eran sobre todo los beneficiarios directos del modelo agroexportador y sobre ellos reposaría durante todo el período el poder político. En cuanto a los que efectuaban el trabajo productivo en el campo, los pequeños productores familiares y los peones rurales, eran los que menor capacidad poseían para apropiarse de la riqueza que de allí fluía. Los pequeños productores pagaban altísimas rentas por hacer uso de la tierra, o bien, en caso de ser propietarios de una pequeña parcela, las cantidades producidas no les resultaban suficientes como para ejercer poder en la negociación, por lo que vendían la producción a un valor insuficiente para convertirse en capitalistas típicos. En el caso de los peones rurales, eran trabajadores que vendían su fuerza de trabajo y recibían un salario que apenas alcanzaba para su reproducción.

Fuera del ámbito rural, en las ciudades, se desarrollaban básicamente el comercio, los servicios y, en menor medida, manufacturas precarias. De todas estas actividades, las que tenían mayor posibilidad de apropiación de riqueza eran los servicios vinculados a la exportación y los financieros, muchas veces en manos de empresas pertenecientes a la burguesía agraria pampeana.

En conclusión, fue la burguesía agraria local la que al detentar el control del principal recurso productivo de esta economía (la tierra) se apropió de una parte importante de la riqueza a través de la percepción de renta.

Esta burguesía agraria, y sobre todo las fracciones que dentro de ella se consolidarían como dominantes, habría ampliado sus posibilidades de captación de riqueza al canalizar buena parte de ese excedente en el desarrollo de actividades no sólo agropecuarias sino también, y sobre todo, comerciales, financieras e incluso industriales.

Esta tendencia a la diversificación de inversiones (multisectorialidad), así como el uso extensivo de la tierra y el mantenimiento de la gran propiedad, que permitía el desarrollo simultáneo o alternativo de distintas actividades agrarias, se explicaría —en la interpretación de Jorge Federico Sábato— por específicas condiciones de producción y de mercado. Dado que en Argentina se

consolidó un capitalismo agrario dependiente, la economía en su conjunto estuvo sujeta a fuertes riesgos y pronunciadas fluctuaciones que derivaban de problemas ambientales (sequías, inundaciones, plagas), de las crisis cíclicas del capitalismo mundial y/o de las variaciones bruscas en los volúmenes o en los precios de la demanda internacional. En ese contexto, la estrategia empresarial se habría orientado a maximizar beneficios diversificando riesgos, a través de una combinación de actividades económicas que hiciera viable el aprovechamiento rápido de toda coyuntura favorable. Para gozar de tanta ductilidad, el secreto residía en desestimar inversiones muy especializadas y favorecer el mantenimiento de activos líquidos o semilíquidos que podían ser utilizados alternativamente en la actividad más rentable. Así, se habría consolidado en los sectores dominantes un peculiar comportamiento económico que tendía a privilegiar el aprovechamiento de oportunidades antes que el incremento de la eficiencia.

Este comportamiento, más próximo al de los comerciantes y financistas que al de los productores, y bastante distinto al de los empresarios de las economías capitalistas clásicas, explicaría –según Jorge F. Sábato– la extraordinaria expansión de la economía agroexportadora, así como su estancamiento posterior¹².

4. Los cambios sociales

La sociedad que fue configurándose en este proceso de fuertes cambios y de acentuado –aunque no constante– crecimiento económico barrió con casi todos los moldes y características de la sociedad preexistente. En un proceso dinámico y hasta caótico, atravesado por una intensa movilidad social, se constituyeron no sólo los sectores dominantes, sino también los sectores populares y nutridas capas medias.

La clase dominante, cuyo principal soporte de poder fue la propiedad de la tierra pampeana, presentaba una implantación económica multisectorial. Se caracterizó además por utilizar al Estado como fuente de oportunidades de diversos y lucrativos negocios, y por desarrollar comportamientos fuertemente especulativos. En lugar de las características precapitalistas e incluso “feudales” que le asignan muchos historiadores, estos sectores terratenientes habrían mostrado la racionalidad en la búsqueda de lucro y el comportamiento empresarial dinámico que son típicos en las burguesías.

12 Jorge F. Sábato, *op. cit.*

Fundamentalmente en las ciudades, y también en las zonas agrarias más prósperas y de acceso relativamente amplio a la propiedad de la tierra, se configuraron importantes sectores medios, vinculados sobre todo a las actividades terciarias, y con un alto componente inmigratorio. Estos sectores fueron incrementando su nivel de consumo y educación y comenzaron a vincularse con organizaciones que reclamaban una ampliación del sistema político, es decir, con el Partido Socialista en la Capital, con el Partido Demócrata Progresista en Rosario y sur de Santa Fe, y sobre todo con la Unión Cívica Radical, a nivel nacional.

También alcanzó una importante expansión la clase trabajadora (de composición predominantemente extranjera) gracias al desarrollo de las industrias alimentarias, los transportes, los pequeños talleres industriales y las actividades artesanales y de servicios. Menor visibilidad social, pero gravitación numérica no desdeñable, tuvieron los obreros rurales, ocupados tanto en las grandes estancias como en establecimientos de menor tamaño.

Esta *sociedad compleja y móvil*, conformada al calor de la expansión económica, presentaba nuevas líneas de conflictos. Como consecuencia de las malas condiciones de vida, de los bajos salarios, de las extensas jornadas laborales, y ante la falta de protección estatal frente a la desocupación, las enfermedades, los accidentes de trabajo y distintas formas de arbitrariedad patronal, comenzaron a aparecer crecientes signos de organización y movilización obrera. En este período, predominaron los sindicatos de oficio, dirigidos preponderantemente por corrientes anarquistas, que fueron las que a comienzos del siglo XX vertebraron la primera central importante del proletariado argentino, la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Por definición rechazaban la integración al sistema político y la organización partidaria tradicional, por más radical que fuera, y en algunos casos apelaron a la acción directa. El socialismo alcanzó influencia en sindicatos más especializados, como la Fraternidad Ferroviaria, y en general entre obreros de mayor nivel de vida y educación. Su política fue, en lo predominante, de abierto reformismo, incluso en las condiciones de la “república restrictiva” del régimen oligárquico. Una tercera corriente fue el sindicalismo revolucionario, también contrario a las prácticas parlamentarias, pero a su vez refractario a toda forma de organización extrasindical, y por lo tanto con una marcada tendencia a derivar en el economicismo¹³.

13 Daniel Campione y Miguel Mazzeo, *op. cit.*

5. El Estado oligárquico y los nuevos desafíos

5.1 La cuestión social

La modernización económica y social no tardó en presentar nuevos desafíos al mismo Estado que tan activamente la impulsó. Hacia principios del siglo XX, el problema del “orden” volvió a reabrirse. Sólo que ahora se presentaba con un contenido renovado respecto de la etapa 1860-1880. Ya no se trataba de los levantamientos de los caudillos o de las incursiones indígenas. La amenaza al orden procedía de problemas como el crecimiento demográfico, la integración del inmigrante, la urbanización y la “cuestión social”, es decir, la alta conflictividad social y la emergencia del movimiento obrero.

De todos estos problemas, la “cuestión social” estaría destinada a ocupar, durante un buen tiempo, el primer lugar en la agenda pública. Entre 1890 y 1910 los movimientos huelguísticos adquirieron una gran intensidad. Particularmente, en la década de 1900, se produjeron siete huelgas generales e importantes movilizaciones callejeras. El anarquismo, que hegemonizaba las luchas y la organización de los trabajadores, vivió en estos años su etapa de mayor esplendor. Con sus cuestionamientos profundos al orden social capitalista, el emotivo discurso anarquista prendió firmemente en la masa de trabajadores, en su mayoría extranjeros, analfabetos y escasamente integrados. Ello fue así porque supo expresar tanto el desarraigo de los trabajadores así como ciertas tendencias que los volvían poco receptivos a la acción política parlamentaria preconizada por los socialistas, y muy propensos al enfrentamiento social violento.

Desde el Estado, la conflictividad obrera se relacionaba con la enorme incidencia que tenía la inmigración entre los trabajadores asalariados. Durante un tiempo, predominó una respuesta puramente represiva, registrándose algunos enfrentamientos resonantes y sangrientos y promulgándose normas destinadas a “eliminar” a los elementos perturbadores, sobre todo por vía de la expulsión de los extranjeros. La Ley de Residencia de 1902 abrió las puertas a la deportación de inmigrantes que fueran activistas gremiales y políticos. Fue consolidada, en 1910, con la Ley de Defensa Social que reforzó el mecanismo de la deportación e inauguró un conjunto de figuras penales y sanciones aplicables a los luchadores sociales. Estableció la pena de muerte para quienes cometieran atentados en los que murieran personas y prodigó penas de prisión, incluso para actividades no violentas, como la asociación para propagar “ideas contrarias al orden social”.

Poco a poco, junto a las respuestas represivas, fueron surgiendo iniciativas de carácter consensual. En esa línea pueden inscribirse los intentos del Ministerio

del Interior, en especial durante la gestión del ministro Joaquín V. González, por entender mejor la realidad de las clases trabajadoras y por el reconocimiento de ciertos derechos obreros, como medio para solucionar los conflictos y controlar a las organizaciones sindicales. La primera iniciativa se concretó en un informe elaborado por Juan Bialet Massé¹⁴. La segunda se expresó en un proyecto de Ley Nacional del Trabajo que no logró aprobación parlamentaria. Otras iniciativas del mismo tipo fueron: la creación de una oficina estatal encargada del tema laboral, con funciones estadísticas y regulatorias, primero llamada Dirección Nacional y luego Departamento Nacional del Trabajo; los primeros esbozos de políticas sociales, especialmente en el campo de la vivienda económica; y las primeras leyes laborales que reglamentaron el trabajo de mujeres y menores y establecieron indemnizaciones por accidentes de trabajo¹⁵.

5.2 La cuestión nacional

Dado que la gran conflictividad social se consideraba muy relacionada con el problema de la inmigración, las estrategias estatales dirigidas al sometimiento de la clase obrera se articularon con otras políticas que perseguían la nacionalización e integración de los extranjeros y la imposición de una visión de la realidad, la de los sectores dominantes, a los trabajadores y al conjunto de la sociedad.

Desde la escuela, el servicio militar obligatorio, la higiene pública y otras instituciones, el Estado puso en juego mecanismos de control social, a través de los cuales intentó socializar una forma de concebir y entender la realidad que justificaba el orden y las jerarquías sociales vigentes y otorgaba legitimidad a la dominación.

La escuela pública, y en particular la enseñanza primaria, fue pensada como un instrumento para la construcción de una identidad nacional que, fundada en una cultura y un pasado compartidos y en un destino grandioso y promisorio, contribuyera a velar las diferencias sociales y amortiguar los conflictos.

Fue por ello que el Estado consideró a la acción educativa como un ámbito de su competencia exclusiva y entró en litigio con la Iglesia y algunos sectores privados, como las colectividades extranjeras. La disputa se selló a favor del

14 Juan Bialet Massé: *Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República*, Buenos Aires, 1904.

15 Véase Ricardo González: *Los obreros y el trabajo*. Buenos Aires, 1901, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984.

Estado con la sanción, en el año 1884, de la ley 1420 de educación obligatoria, gratuita y laica. Por la misma, el Poder Ejecutivo Nacional centralizó las decisiones educativas y expandió su control sobre cada distrito escolar y en definitiva sobre cada escuela, a través de un sistema burocrático verticalizado. Junto a este tipo de control administrativo, la ley permitió una relativa uniformación de los contenidos de la enseñanza en las escuelas primarias de toda la República. En tales contenidos se hacía visible el objetivo nacionalizador otorgado a la educación ya que además de la lectura, la escritura y las matemáticas elementales, se prescribía la enseñanza de la Constitución nacional y de la historia y la geografía, priorizando las “particulares de la República” sobre la historia y la geografía generales, de las que sólo se requerían “nociones”.

La campaña de educación nacionalista lanzada en 1908 por el presidente del Consejo Nacional de Educación, José María Ramos Mejía, procuró reforzar la uniformación cultural del alumnado y apuntó, en primer lugar, a los alumnos de origen inmigratorio y a los más humildes. Estaba centrada en el establecimiento de un minucioso ritual patriótico que ponía énfasis en lo corporal y gestual, es decir, en una reverencia profundamente internalizada y acrítica hacia la nación y el Estado.

Un objetivo similar se persiguió a través del establecimiento del Servicio Militar Obligatorio. La ley 4031 de Organización del Ejército de 1901, además de otras medidas que tendían a la conformación de un ejército nacional moderno, estableció un servicio militar de seis meses a cumplir por los ciudadanos de veinte años, que se extendió a un año por ley de 1905¹⁶.

En los fundamentos de la ley que institucionalizaba el servicio militar obligatorio se combinaban la lógica de la soberanía territorial efectiva y el componente represivo interno, con un claro componente de control social y penetración ideológica que excedía largamente las finalidades castrenses. En este sentido, resultan esclarecedoras las expectativas del general Pablo Riccheri, entonces ministro de Guerra, sobre el servicio militar obligatorio, así resumidas por uno de sus biógrafos: “Con él, esperaba borrar en gran parte de la masa popular las huellas del analfabetismo, difundir hábitos de orden, de disciplina, de trabajo, de higiene, etc.; procurar para muchos el bautismo de argentinidad en los cuarteles, a la sombra de la bandera que aún desconocían; proporcionar el estímulo

16 La ley 4707 de 1905 hizo menos extenso el servicio militar para los estudiantes secundarios y universitarios y eximió a los ciudadanos que tuvieran habilidades en el uso de armas y en tiro. De esta manera demostraba su matriz elitista, ya que restringía de hecho el cumplimiento de la conscripción a los jóvenes procedentes de los sectores humildes y a los menos acomodados dentro de las capas medias.

y los beneficios de la fraternidad y de la igualdad (...) Finalmente consideró que este sistema podría ser de gran utilidad para romper, por siempre, las vetustas barreras localistas que separaban en aquel entonces a los hijos de la República; que su implantación daría lugar a la fusión de nativos y extranjeros (...) haría llegar su influencia a los centros de opinión, alejando sugestiones malsanas y frenando agitaciones esporádicas”¹⁷.

El servicio militar obligatorio se convirtió efectivamente, como lo deseaba Riccheri, en un factor de “ciudadanización” y a la vez de disciplinamiento de las clases populares, que complementó la acción desarrollada por la escuela. Por añadidura, tendió a transformar a los ciudadanos en fieles servidores del Estado, haciendo prevalecer el poder militar sobre el civil.

La educación y el servicio militar obligatorio sirvieron para ordenar cuerpos y conciencias y para hacer previsibles (y controlables) determinadas conductas sociales. Tuvieron, como otras instituciones del Estado liberal-oligárquico, un sesgo marcadamente autoritario y voluntarista¹⁸.

6. La expansión y consolidación del Estado oligárquico

El pasaje a la jurisdicción nacional de los territorios conquistados a los indígenas y de la ciudad de Buenos Aires (federalizada a partir de 1880) dotó al Estado nacional de un poder avasallador frente a los poderes provinciales.

La mayor complejidad de la vida económica, el creciente peso de ciertas problemáticas derivadas del aumento demográfico y el proceso de inmigración, la “expropiación” por el Estado de actividades antes impulsadas por entidades privadas o por los estados provinciales, sumadas a otras motivaciones como la búsqueda de espacios de poder y/o la posibilidad de ejercer clientelismo político a partir del empleo público, generaron una expansión sostenida del aparato estatal, que se reflejó, entre otras cosas, en un aumento significativo de su plantel de empleados¹⁹.

En tal proceso de expansión estatal, habría existido –según Jorge F. Sábato– una relación de circularidad entre Estado y clase dominante. El Estado creaba condiciones que aseguraban el funcionamiento global de la economía, fomen-

17 Rodolfo Martínez Pita: *Riccheri*, Buenos Aires, Círculo Militar-Biblioteca del Oficial, segunda edición, 1995.

18 Daniel Campione y Miguel Mazzeo, *op. cit.*

19 La cantidad de empleados del Estado nacional pasó de 12.800 en 1876 a más de 46.000 en 1903, superando los 150.000 en 1922.

taba las actividades económicas estratégicas y promovía a una nueva clase privilegiada que se formaba en torno de aquéllas; recíprocamente, el éxito de esa clase en la creación, estructuración y expansión del sistema productivo habría permitido tanto el afianzamiento cuanto la expansión del Estado nacional. Esta génesis simultánea, esta interpenetración en los procesos de construcción y consolidación del Estado y la clase dominante, habrían tenido como consecuencia una muy fuerte dependencia de esta última respecto del primero. Es por eso que el control político del Estado pasó a ser una herramienta decisiva para mantener los privilegios adquiridos y garantizar su perdurabilidad²⁰.

7. A modo de balance o conclusión

La aplicación de políticas que favorecieron el desarrollo de una economía agroexportadora permitió un gran crecimiento del área pampeana, la conformación de una sociedad compleja con un ingreso per cápita muy elevado y de un sector urbano diversificado. Sin embargo, el despliegue del modelo agroexportador presentó también una serie de problemas y limitaciones. Entre otras cosas:

- Alentó un desarrollo desigual de Argentina ya que el interior no se vio beneficiado del mismo modo que la región pampeana. En algunas provincias del interior prosperaron ciertas producciones (azúcar tucumano, vinos cuyanos, yerba mate y maderas del nordeste) que pudieron ser colocadas en los populosos mercados de Buenos Aires y el Litoral. Pero en el resto de las provincias no se generaron bienes que fueran de interés para el mercado interno e internacional. Muchas producciones regionales quebraron, sobre todo cuando debieron competir con las extranjeras que el ferrocarril transportaba. Como consecuencia de ello, la economía productiva se estancó y el empleo público pasó a transformarse en la principal fuente de subsistencia para sus habitantes, fortaleciendo los lazos de clientelismo político y las migraciones internas.
- El desarrollo económico desigual tuvo como consecuencia una concentración de la población en las áreas más dinámicas. Ya en 1914, aproximadamente el 70 por ciento de la población argentina estaba radicado en las provincias pampeanas.

20 Jorge F. Sabato, *op. cit.*

- La concentración de la propiedad territorial alentó un proceso de alta urbanización que llevó a la conformación de metrópolis densamente pobladas, mientras la mayor parte del país permanecía “desierto”.
- La economía agroexportadora se caracterizó por una fuerte dependencia externa, al estar condicionada por variables que escapaban absolutamente a su control, como la posibilidad de colocar materias primas y alimentos en el mercado mundial y el flujo sostenido de capitales extranjeros. Asimismo, la aplicación de un modelo especializado en la producción primaria en el marco de la división internacional del trabajo implicó, entre otras cosas, un fuerte retraso tecnológico respecto de las economías industriales.
- La utilización predominante del factor tierra y el desaliento a un empleo más intensivo del capital; la conveniencia de mantener el latifundio, frenando una especialización agrícola que favoreciese su fraccionamiento; la tendencia a adecuarse a las fluctuaciones de precios y ofertas de distintos tipos de productos, reorientando las inversiones hacia diversas actividades, permitieron una adaptación de la economía argentina a las condiciones de producción y mercado de la época, así como una fuerte expansión. Sin embargo, se trataba de un sistema que privilegiaba el aprovechamiento de oportunidades antes que la especialización, y la especulación por sobre los aumentos en la productividad. Cuando las circunstancias externas se tornaron desfavorables, los sectores dominantes de la sociedad argentina, animados por un comportamiento más comercial y especulativo que productivo, tuvieron dificultad para adaptarse a la nueva situación y conducir al país hacia un crecimiento más autónomo y sostenido.

Distintas visiones acerca de las características, ventajas y límites del régimen de acumulación

La perspectiva adoptada en este artículo se nutre de una visión crítica sobre la “Argentina agroexportadora” que abrevia en los análisis e interpretaciones realizados, entre otros, por Ernesto Laclau, Jorge Federico Sábato, Alfredo Pucciarelli y Waldo Ansaldi²¹.

21 Véanse Ernesto Laclau: “Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. Aproximación histórica a los casos argentino y chileno”, *Revista Latinoamericana de Sociología*, vol. 5, 1969; Jorge F. Sábato, *op. cit.*; Alfredo Pucciarelli: *El capitalismo agrario pampeano 1880-1930*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986; Waldo Ansaldi y José Luis Moreno: *Estado y sociedad en el pensamiento nacional*, Buenos Aires, Cántaro, 1989.

Desde esta perspectiva se intenta explicar tanto el crecimiento económico y las transformaciones sociales, culturales y territoriales de las que es fecunda el período, así como los límites del modelo adoptado.

Existe, sin embargo, otra versión que exalta el crecimiento de la economía argentina bajo el modelo agroexportador y que intenta demostrar que, dentro del esquema adoptado, Argentina hizo un uso óptimo de los recursos y de sus ventajas naturales, logrando maximizar los factores de producción en el marco de una economía libre, sólo regulada por las leyes del mercado. Carlos Díaz Alejandro y Roberto Cortés Conde podrían citarse como dos de los exponentes paradigmáticos de esta corriente de interpretación.

Carlos Díaz Alejandro sostiene que el crecimiento anterior a 1930 fue generado por las exportaciones y por la entrada de capitales. Estos dos elementos originaron una asignación de recursos mucho más eficiente que la que hubiese resultado de la aplicación de políticas autárquicas.

Respecto de la concentración de la tierra en pocas manos, característica en la época, Díaz Alejandro considera que el mercado de tierras estuvo afectado por la imperfección del mercado de capitales que fue incapaz de ofrecer créditos a largo plazo, accesibles para los inmigrantes.

En relación con la industria, este autor considera que los empresarios rurales del país manifestaron poco interés por esta actividad, y que por esa razón, la misma quedó tanto en manos del capital extranjero como en las de capitalistas argentinos urbanos, la mayoría de ellos de origen inmigrante. Según su análisis, es el mercado externo el que golpea y estimula a las fuerzas locales para que produzcan. Cualquier dificultad en incrementar la oferta nacional de las exportaciones o retracción de la demanda provoca una expansión del sector sustitutivo de importaciones en el marco del libre juego de la oferta y la demanda.

Díaz Alejandro pondera el régimen de acumulación vigente en la época desde el punto de vista de la eficiencia económica y sostiene que el principal problema estriba en que las políticas económicas que son más eficaces desde el punto de vista económico (por ejemplo, el libre comercio o casi libre) determinan una distribución del ingreso que favorece a los propietarios rurales²².

Por su parte, Roberto Cortés Conde discute con interpretaciones que sostienen que la oligarquía terrateniente habría monopolizado la tierra por razones de poder y prestigio e impedido el acceso a la propiedad de los inmigrantes²³. Trata de

22 Carlos Díaz Alejandro: *Ensayos sobre la historia económica argentina*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1970.

23 Véase, por ejemplo, Jacinto Oddone: *La burguesía terrateniente argentina*, Buenos Aires, Libera, 1954.

demostrar que se pasa de un mercado de tierras inexistente a principios del siglo XIX a otro cada vez más perfecto a fines de siglo, y que son las circunstancias las que determinaron un uso específico de los recursos y un tipo de explotación económica. El tipo de propiedad fue el resultado más de una realidad geográfica (aspectos físicos, características de los recursos, etc.) que del accionar de un sector de la sociedad. Sostiene que el hecho de que las relaciones de propiedad de las tierras nuevas se definieran al tiempo de la expansión de la frontera ganadera, cuando la agricultura aún no era viable, puede ser una de las razones de las características que luego tuvo la propiedad agraria. A su entender, el sistema de arrendamiento no obstaculizaba el acceso a la propiedad de la tierra y que, en muchos casos en cambio, constituía un paso intermedio hacia ella. Agrega además que, si durante la primera década del siglo XX el precio de la tierra subió, la causa no fue la especulación sino un incremento de su rentabilidad.

Roberto Cortés Conde considera que la demanda de los productos agropecuarios motivó el desarrollo de industrias nacionales con utilización más intensiva de mano de obra a la vez que permitió mejorar la distribución de la renta e incrementar la demanda, convirtiéndose en incentivo para invertir en otras actividades del mercado nacional.

El autor resalta además el esfuerzo realizado por el sector privado en el desarrollo económico alcanzado. Sostiene que en un período en el que se perfeccionaron los mercados de tierra, de capital y mano de obra, la economía necesitó de la inversión en bienes públicos, tales como puertos y medios de transportes, y que tales aportes provinieron básicamente del sector privado, que abrió nuevas tierras, introdujo mejoras y maquinarias agrícolas. Concluye que los cambios producidos desde el lado de la oferta permitieron que Argentina alcanzase elevadas tasas de desarrollo económico²⁴.

Algunas discusiones acerca de las estrategias empresariales de los sectores dominantes y de los arrendatarios rurales en la Argentina agroexportadora

La clase económicamente dominante, consolidada a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ha sido estudiada por numerosos historiadores. Terratenientes e industriales fueron puestos bajo la lupa para encontrar en su forma de actuar alguna de las causas del atraso de la economía argentina.

24 Roberto Cortés Conde: *El progreso argentino, 1880-1914*, Buenos Aires, Sudamericana, 1979.

Tradicionalmente, la clase terrateniente latifundista ha sido pensada como parasitaria, estática, y ausentista²⁵ y, por lo tanto, contrapuesta al sector de los industriales, más moderno pero más débil en tanto carente de poder político. Milcíades Peña, en la década de 1950 y primeros años de la siguiente, discute estas ideas y sostiene que no existe tal burguesía nacional modernizadora, sino que se trata de una misma burguesía que se diversifica en actividades ligadas al agro, la industria, las finanzas y el comercio y que se halla íntimamente ligada al capital extranjero. Es decir, la burguesía industrial local no ha evolucionado del pequeño taller a la gran fábrica, oponiéndose a los intereses rurales, sino que nació estrechamente ligada a la burguesía terrateniente, compartiendo sus intereses²⁶.

Jorge F. Sábato retoma estas ideas y plantea la existencia de una clase dominante multisectorial desde los comienzos de la Argentina moderna, que desarrolló un comportamiento económico altamente especulativo para adaptarse a las fluctuantes condiciones económicas del mercado mundial. Esta conducta especulativa la lleva a maximizar sus ganancias y minimizar los riesgos, combinando diversas actividades productivas de bajo capital fijo, logrando liquidez y una respuesta rápida ante los cambios en la demanda del mercado internacional. Desde esta perspectiva, entonces, el mantenimiento de grandes propiedades, algunas sin uso inmediato, fue la estrategia elegida para operar en la región pampeana, ya que ampliaba las posibilidades de usos alternativos del suelo y, por lo tanto, de aprovechar una demanda mundial siempre variable²⁷.

A partir de estas hipótesis de Jorge F. Sábato, cambia la caracterización de los terratenientes pampeanos, vistos hasta entonces como feudales y atrasados, para presentarlos como empresarios modernos que maximizan sus ganancias combinando diversas actividades: agrícolas, ganaderas, financieras y hasta industriales.

Juan Manuel Palacio coincide en líneas generales con el planteo de Sábato, pero le cuestiona su visión demasiado optimista del período y de la clase dominante. Según Palacio, Sábato no logra advertir muchas de las tensiones sociales que se desatan en el espacio pampeano como consecuencia del auge de la estancia mixta y de la lógica especulativa vigente en la época. Palacio critica la caracterización que hace Sábato de los arrendatarios rurales. No piensa, como lo hace Sábato, a estos arrendatarios casi como socios menores de los terratenientes, ni considera que hayan adoptado un comportamiento empresarial que siguiendo la racional-

25 Véase Jacinto Oddone, *op. cit.*

26 Milcíades Peña: *Industria, burguesía industrial y liberación nacional*, Buenos Aires, Editorial Fichas, 1974.

27 Jorge F. Sábato, *op. cit.*

dad económica de la clase dominante los haya llevado a optar por la liquidez antes que por la inversión en capital fijo.

A partir de nuevos estudios de caso en la región pampeana, Palacio sostiene una visión más conflictiva del período. Según la misma, los arrendatarios, a quienes no se les asignaba tierra fija por más de una cosecha, constituían la variable que permitía redimensionar en el corto plazo a la empresa agrícola. Ésta se tornaba versátil frente a la variación de los mercados gracias al mantenimiento de una buena cantidad de arrendatarios chicos (que alquilaban generalmente menos de 100 hectáreas) en condiciones de precariedad, con desalojos y desplazamientos constantes. Esta inestabilidad y precariedad a la que se sometía a los arrendatarios rurales es clave —según Palacio— para entender la diversificación exitosa de los grandes propietarios rurales.

Palacio sostiene que, si bien no hay conflictos sociales que expresen abiertamente las tensiones provocadas por estas situaciones, rastreando periódicos y fuentes judiciales se advierte el uso cotidiano de herramientas legales para los permanentes desalojos. La quietud no se debe, según Palacio, a la falta de conflicto sino a un efectivo control social paternalista que ejercían los terratenientes dentro de sus estancias. Palacio afirma que no siempre fue fácil para un arrendatario elevar un petitorio, hacer una huelga y mucho menos rebelarse contra quien, además de ser el dueño de la tierra que él trabajaba, era a la vez el financista, el proveedor, el protector, el asesor espiritual, el patrón político y hasta el padrino de su boda y de sus hijos, que había venido dando empleo y oportunidades a miembros nuevos y viejos de su familia.

El autor enuncia que hay indicios para creer que las estrategias especulativas de la clase dominante no pueden hacerse extensivas a los chacareros arrendatarios ya que éstos no rehuyeron ni la adquisición de máquinas ni la contracción de deudas para obtener los elementos de producción y que, además, siempre que la situación económica se los permitió, tendieron a comprar tierras, movidos no sólo por el cálculo económico sino como parte de una estrategia de reproducción familiar que tenía su origen en sus largas tradiciones campesinas. El autor invita al estudio de conflictos más silenciosos, observando la dinámica de las relaciones sociales y también la naturaleza y el origen de muchos delitos que se observan en la época, como resistencia o impugnación al orden establecido, en una sociedad que podría caracterizarse como de frontera²⁸.

Por su parte, Eduardo Sartelli propone un cuestionamiento más general de las tesis de Sábato que el realizado por Palacio. En relación con la clase dominante,

28 Juan Manuel Palacio: “Jorge Sábato y la historiografía rural pampeana: el problema del otro”, *Entrepassados*, año V, N° 10, 1996.

Sartelli refuta la caracterización que hace Sábato de la misma como altamente diversificada, pues sostiene que esta afirmación se basa en el estudio del sector de los invernadores, que para Sábato representan la orientación comercial de la clase dominante, queriendo demostrar que el invernador es un comerciante más que un productor, porque su actividad es especulativa y de intermediación. Sin embargo, según Sartelli, a Sábato se le escapa el hecho de que la invernada no es una simple intermediación sino un paso necesario en la creación del producto “carne de exportación”. Por lo tanto, para Sartelli, la clase dominante sería claramente burguesa terrateniente, porque obtenía renta y ganancia en el agro.

A su vez, Sartelli sostiene que aun cuando se probase la diversificación de las actividades de la clase dominante, ello no sería una característica específica de Argentina, pues el desarrollo capitalista en cualquier lugar del mundo lleva a una conformación multisectorial y a su organización desde la cúspide financiera. ¿Cómo se explicaría entonces que sólo en el caso argentino el resultado fuese la no inversión en capital fijo y el estancamiento? Es decir que, para Sartelli, esta implantación diversificada no sería una clave interpretativa válida.

Respecto a otra de las hipótesis de Sábato, en la que subraya la necesidad de la clase dominante de disponer de capital circulante para aprovechar las oportunidades que propone el mercado mundial, Sartelli afirma que la posesión de capital líquido no siempre fue la respuesta necesaria ya que, para aprovechar los booms internacionales, en muchos casos fue necesario invertir grandes sumas en capital fijo. Sostiene que si bien hay cambios continuos de precios en el mercado internacional, también hubo tendencias a largo plazo, como el ciclo de la ganadería y/o los veinte años siguientes de predominio agrícola. Además, la renta diferencial que percibe la burguesía terrateniente actuaría como colchón de la variabilidad de precios, lo que de hecho disminuiría la incertidumbre.

Es decir, Sartelli no encuentra una particular lógica especulativa en la clase dominante argentina que explique el estancamiento o el atraso posterior. Es más, sostiene que el capitalismo argentino no sólo no se estanca sino que crece en profundidad, aumentando la división social del trabajo y generalizando las relaciones asalariadas. Postula que el desarrollo económico de la Argentina de esos años no es nada despreciable, y que sólo adoptando una perspectiva más general se podría percibir que estos problemas se plantean simultáneamente en todo el mundo. Según este autor, el problema que eluden Sábato y la mayoría de los autores que analizan el “atraso argentino” es que el verdadero problema no es que el capitalismo argentino se atrase o avance sino que es capitalismo²⁹. En recientes trabajos, Roy Hora se acerca a una línea que ha sido tradicional en

29 Eduardo Sartelli, “A propósito de Jorge Sábato y Larry Sawers y el estancamiento de la economía argentina”, *Círculos*, año VI, vol. VI, N° 10, 1996.

la historiografía, en tanto sostiene que los grandes terratenientes son el núcleo de la élite socioeconómica del país. Además, considera errónea la idea de la existencia de una élite económicamente diversificada, ya que la alta rentabilidad que garantizaban las actividades rurales operaba como incentivo para concentrarse en ellas.

En oposición a interpretaciones que gozan de gran aceptación en la sociedad y entre los historiadores, Hora afirma también que la hegemonía terrateniente no se fundó en ninguna relación especial con el Estado sino en la fortaleza del sector en la esfera económico-social. La especial consideración que recibía del poder político, derivaba de la conciencia que este último tenía sobre la importancia estratégica de la producción rural pampeana en la economía de la época. En definitiva, la renta diferencial de la tierra, derivada de la fertilidad del suelo y no un orden político favorable, explicaría –según Hora– la clave del éxito del sector terrateniente y del agro pampeano.³⁰

El ciclo del liberalismo democrático (1916-1930)

1. La impugnación al régimen político oligárquico

En 1889, tras casi diez años de protagonismo excluyente del Partido Autonomista Nacional (PAN), estalló una crisis política protagonizada por un conjunto de sectores opositores que impugnó –por vías revolucionarias– la legitimidad y las modalidades del régimen oligárquico.

La crisis política fue precedida por una profunda crisis económica. Durante muchos años la economía argentina había crecido a buen ritmo dando lugar a pronunciados cambios sociales. Pero la prosperidad era frágil, ya que dependía en última instancia del aporte de capitales extranjeros y de la demanda externa de productos agropecuarios. Hacia 1889 esas debilidades salieron a la luz. El país estaba fuertemente endeudado; las importaciones crecían a un ritmo mayor que las exportaciones, los precios internacionales de los productos agropecuarios bajaban y el aporte de capitales extranjeros comenzó a decaer. La crisis de la balanza de pagos resultante derivó en una fuerte inflación y en una crisis financiera imparable que concluyó en 1890 en la declaración de la cesación de pagos.

Una sensación de cataclismo se instaló en el país, barriendo con el optimismo y la fe hasta entonces dominantes. La responsabilidad recayó sobre el gobierno de

30 Roy Hora, *Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política 1860-1945*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

Miguel Juárez Celman, que había contraído cuantiosas deudas, expandido extraordinariamente el crédito, alentado la especulación y privatizado obras y servicios públicos bajo el argumento de que el Estado era un mal administrador.

Juárez Celman pertenecía a una élite política, nucleada en torno al PAN, que desde hacía casi una década mantenía en sus manos los resortes fundamentales del poder gracias a una combinación de violencia, fraude y cooptación. Había accedido al gobierno en 1886, bendecido por su conculado y gran elector, el general Julio Argentino Roca.

Juárez Celman no sólo mantuvo las prácticas restrictivas de su antecesor, sino que las exacerbó: intentó aislar a Roca y a distintas oligarquías provinciales, copó la dirección del PAN y se rodeó de un grupo de adictos e incondicionales. Mientras duró la prosperidad económica, el Unicato, sistema político creado por Juárez Celman y cuya denominación aludía a la forma personalista de ejercer el poder, parecía invencible. Pocos se animaban a cuestionarlo y los que lo hacían navegaban en la incomprensión general.

Pero, hacia mediados de 1889, todo comenzó a cambiar. El malestar por la situación económica alentó un movimiento opositor que no sólo sacó a relucir la impericia del gobierno en términos económicos, sino también su ilegitimidad de origen y su vinculación con corruptelas y negocios poco claros. También le fue cuestionada una voluntad modernizadora que, ostentada autoritariamente, arrasaba con convicciones de fuerte arraigo en vastos sectores de la sociedad.

El movimiento opositor conformó la Unión Cívica (UC) y sus demandas, centradas fundamentalmente en un cambio ético y político —la finalización del fraude y la corrupción—, se canalizaron mediante la organización de clubes políticos, actos cívicos y, finalmente, a través de una insurrección cívico-militar, la Revolución del Parque, que estalló el 26 de julio de 1890 con el objetivo de destituir al gobierno de Juárez Celman y reemplazarlo por otro, provisorio, que llamaría inmediatamente a elecciones limpias.

La UC no constituía un grupo homogéneo. Estaba conformada por distintos grupos: un núcleo central proveniente de la Unión Cívica de la Juventud, organizada en 1889 e integrada por jóvenes universitarios, hijos de familias patricias; un grupo liderado por Bartolomé Mitre, relacionado con los exportadores y comerciantes porteños, preocupados particularmente por la exclusión política a la que Juárez Celman los había condenado; estaban también los católicos, irritados con Roca y con el Presidente de la Nación por las esferas de acción que, como en el caso de la educación o el matrimonio civil, el Estado había enajenado a la Iglesia; y finalmente, estaba Leandro N. Alem, líder de los sectores populares urbanos y de los propietarios rurales medios, que levantaba los contenidos tradicionales del viejo federalismo y buscaba una dignificación de la vida cívica nacional.

Eran grupos distintos, con objetivos diferentes, cuya unidad ya se rompió en la misma Revolución del Parque, cuando los mitristas no dieron batalla y pactaron con Roca, con el objetivo de debilitar a Juárez Celman y desprestigiar a Leandro Alem, un hombre difícilmente controlable y nada afecto a la negociación.

En este contexto, la revolución fue sofocada, pero el gobierno salió debilitado y el presidente tuvo que renunciar. Roca fue el gran triunfador: se deshizo de su pariente y aseguró la presencia en el Ejecutivo de uno de sus amigos, el vicepresidente Carlos Pellegrini, quien además de poner en orden las cuentas públicas y asegurar el pago de la deuda externa, intentó captar a los sectores insurgentes. Su política de cooptación tuvo éxito con el mitrismo y con los sectores católicos, no así con Alem y sus seguidores, quienes en 1891 fundaron la Unión Cívica Radical (UCR).

La UCR, liderada hasta 1896 por Leandro N. Alem y luego por su sobrino, Hipólito Yrigoyen, no aceptó incorporarse al juego de cambiantes coaliciones y acuerdos que le propusieron Carlos Pellegrini y sus sucesores³¹. Prefirió adoptar una postura intransigente y con el apoyo de sectores del Ejército intentó, en dos oportunidades (1893 y 1905), presionar y debilitar al “Régimen” a través de levantamientos cívico-militares.

1.1 La sanción de una nueva ley electoral

La lucha del radicalismo por la ampliación del sistema político se intensificó durante los primeros años del siglo XX. Tras un período de relativo estancamiento y de diversas escisiones, Hipólito Yrigoyen logró reorganizar los órganos partidarios y transformarse en la figura más importante de la oposición política. En estos años, bajo su dirección, el radicalismo dejó de ser el partido pequeño que congregaba a sectores de élite desplazados del poder, para crecer gracias al apoyo creciente de diversos sectores sociales: la burguesía media, los sectores medios, parte de los sectores populares y una ínfima fracción de la gran burguesía terrateniente.

Frente a la creciente gravitación política que alcanzaba la Unión Cívica Radical y ante la agudización de los conflictos políticos y el aumento simultáneo de la

31 En 1897 hubo personalidades del partido radical que apoyaron una política acuerdista con Mitre. Ello desató un conflicto con Yrigoyen, quien se opuso a dejar de lado los principios rectores del radicalismo. La pugna entre acuerdistas e intransigentes llevó al partido a su virtual desaparición. La crisis partidaria se superó unos años después, bajo la dirección de Yrigoyen.

conflictividad obrera, algunas fracciones de los sectores dirigentes comenzaron a reconocer las flaquezas del sistema político imperante. El mejoramiento institucional, a través de la promoción de un gobierno representativo, comenzó a aparecer como la vía más adecuada para la solución de los problemas nacionales. La ampliación de la participación política permitiría canalizar las demandas de los nuevos grupos sociales dentro del sistema y alejar con ello la posibilidad de una revuelta armada que pusiera en peligro la continuidad del poder político y el control del aparato del Estado por los sectores dominantes.

La ley de reforma electoral o Ley Sáenz Peña, que se sancionó en 1912, constituyó la respuesta central para estas renovadas preocupaciones. Estableció el voto secreto y obligatorio para todos los varones nativos mayores de dieciocho años, la utilización del padrón militar y la representación de las minorías, aunque no permitió el voto de los extranjeros ni de las mujeres. La ley fue pensada como un mecanismo de “saneamiento” del sistema político y de neutralización de las corrientes más revolucionarias (como el anarquismo), vía integración de la oposición radical y socialista.

Las primeras elecciones presidenciales celebradas bajo el imperio de esta nueva ley dieron en 1916 el triunfo a los radicales, iniciándose un nuevo ciclo histórico, el del *Estado liberal-democrático*, que se prolongó hasta 1930. El triunfo radical no significó, sin embargo, una pérdida de influencia de los sectores dominantes, quienes siguieron detentando el poder económico, la dirección intelectual y una fuerte capacidad de presión sobre las políticas y decisiones del Estado.

Con la llegada de los radicales al gobierno, se habría producido lo que Alfredo Pucciarelli caracterizó como *hegemonía compartida*, es decir, una situación en la que las clases dominantes tradicionales, frente al riesgo de una crisis, ceden una porción de su poder, el relativo a la dirección política, pero continúan con el ejercicio de su hegemonía económica, cultural e ideológica³².

2. El radicalismo: bases sociales, programa y doctrina

En 1916, en las primeras elecciones presidenciales que se celebraron desde la entrada en vigencia de la reforma electoral, la fórmula radical Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna se impuso con algo más del cuarenta y cinco por ciento de los votos.

32 Alfredo Pucciarelli: “Conservadores, radicales e yrigoyenistas, un modelo (hipotético) de hegemonía compartida (1916-1930)”, en Waldo Ansaldi y otros, *Argentina en la paz de dos guerras, 1914-1945*, Buenos Aires, Biblos, 1993.

Una impresionante manifestación popular saludó el triunfo del radicalismo. Lo habían votado desde empleados, maestros, chacareros, comerciantes y otros representantes de las clases medias urbanas y rurales hasta algunos terratenientes y ciertos grupos de obreros. Un conjunto social heterogéneo, sin duda, que representaba un corte vertical de la sociedad³³, unido por una sensibilidad nacionalista y republicana y por los deseos de ampliación del sistema político, moralización de la vida pública y una mejor distribución de la renta en el marco del modelo agroexportador.

Todos estos sectores subordinados se habían visto beneficiados por las oportunidades laborales y las posibilidades de ascenso social abiertas por el crecimiento y expansión de la economía agroexportadora. Por lo tanto, no cuestionaron el predominio económico de la clase dominante ni el modelo de acumulación vigente, aunque sí su hegemonía política y la legitimidad de un régimen que se apoyaba en mecanismos de exclusión y que cerraba u obstruía ciertos canales de movilidad social: fundamentalmente, la educación y el acceso a los cargos estatales.

Precisamente, las aspiraciones de estos amplios y diversos sectores se enlazaban perfectamente con las proposiciones de la UCR, que no propugnaba cambios profundos sino reformas del esquema vigente. Efectivamente, además de las acciones concretas que desarrollaban en sus comités (consistentes sobre todo en el otorgamiento de favores, en la resolución de problemas legales y de vivienda, en la distribución de víveres y medicamentos)³⁴, los radicales no proponían un programa alternativo al modelo agroexportador, ni una modificación del sistema de tenencia de la tierra. Sus propuestas carecían de definiciones en las esferas económica y social y se limitaban a la puesta en vigencia de la Constitución de 1853. Eran expresadas en un discurso ambiguo que, nutrido ideológicamente por el krausismo³⁵, adquiría un tono fundamentalmente ético: a los valores de la *Causa* (honradez administrativa, moralidad, democracia), encarnada en la

33 Véase Alain Rouquié: *Radicales y desarrollistas*, Buenos Aires, Schapire, 1975.

34 Para profundizar en estos aspectos de la práctica política de la UCR, véanse David Rock: *El radicalismo argentino, 1890-1930*, Buenos Aires, Amorrurtu, 1977, y Aníbal Viguera: "Participación electoral y prácticas políticas en los sectores populares en Buenos Aires, 1912/1922", *Entrepasados*, año 1, 1991.

35 El radicalismo se nutría ideológicamente en el krausismo, una filosofía espiritualista surgida como oposición al positivismo materialista y cuyo creador fue el filósofo alemán Carlos Krause. Estas ideas tuvieron gran expansión en España y América Latina, donde el krausismo influyó tanto en lo literario, en corrientes como el Arielismo de José Enrique Rodó, como en el pensamiento político de personalidades, como José Batlle y Ordóñez en Uruguay, Alfredo González Prada en Perú e Hipólito Yrigoyen en Argentina.

UCR, se le contraponían los vicios del *Régimen* (venalidad, violencia, fraude)³⁶. Los objetivos y las metas planteadas por los radicales eran globales, de modo que ningún sector podía sentirse excluido de ellos. Se presentaban como la alternativa de unión de todos los ciudadanos, como un movimiento que podía ser identificado con la Nación y que, por lo tanto, hablaba en nombre de todos. El rol de la UCR superaba así al de simple partido político para transformarse en un movimiento nacional encaminado al logro de la equidad y la solidaridad nacional. La doctrina radical, aunque vaga y confusamente formulada, pregona la defensa del bienestar general y la búsqueda de la unidad nacional. Respecto del conflicto social, comenzaba a pensar al Estado con un rol de armonizador de los distintos intereses en juego. También incorporaba, aunque aún muy tíbicamente, la idea de un Estado intervencionista en lo económico y capaz de desarrollar una política nacionalista orientada al logro de una mayor independencia económica.

3. El yrigoyenismo en el gobierno

Estos postulados reformistas que no implicaban modificaciones estructurales de la sociedad y la economía, cuando intentaron traducirse en políticas concretas encontraron generalmente la férrea oposición de los sectores dominantes. Esto se tornó particularmente manifiesto durante la primera y la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930 respectivamente). Yrigoyen asumió el gobierno en 1916 en un momento de recesión económica, inflación, desequilibrios en la balanza de pagos y en las cuentas fiscales. Todo ello era consecuencia del estallido y desarrollo de la Primera Guerra Mundial que desestabilizó las corrientes internacionales de intercambio, provocó una reducción de la demanda de materias primas y la interrupción del flujo de inversiones extranjeras y de nuevos contingentes inmigratorios.

En este marco de dificultades, el gobierno radical tampoco gozaba de una gran solidez política: había logrado el acceso a la Presidencia, pero tenía minoría en ambas cámaras del Parlamento, la mayoría de las gobernaciones seguía en manos

36 Distintos historiadores han relacionado la vaguedad discursiva y la indefinición programática del radicalismo con una estrategia electoralista diseñada para captar los votos de vastos y heterogéneos sectores sociales, con diferentes intereses socioeconómicos. En cuanto a la crítica al modelo agroexportador, el radicalismo sólo denunciaba los excesos de los terratenientes y los inversores extranjeros. Los discursos contra la gran propiedad latifundista, a pesar de su virulencia, no se tradujeron en la aplicación de una reforma agraria.

de los grupos tradicionales y, en el caso de la Justicia, sus jerarquías más notorias estaban emparentadas, por sangre y por ideología, a las familias que tradicionalmente habían detentado el poder en Argentina. El nuevo gobierno no contaba tampoco con el apoyo de la gran prensa, ni de los grandes empresarios y corporaciones. Mostraba, además, una gran heterogeneidad interna, que se traducían en una unidad partidaria frágil.

No obstante las dificultades señaladas, el gobierno de Yrigoyen intentó dar respuestas a los problemas más acuciantes del momento, a saber:

- asegurar mercados externos para los productos agrícolas y eliminar los abusos de las grandes compañías comercializadoras de cereales mediante la firma de tratados de comercio bilaterales, en los que el Estado argentino actuaría como vendedor único;
- facilitar la exportación de cereales a través de la creación de una marina mercante nacional que supliera la falta de bodegas producida por la guerra y tendiera a liberar a los productores rurales de la pesada intermediación de las compañías extranjeras de transporte marítimo;
- favorecer el acceso a la tierra de los pequeños productores agrícolas a través de créditos hipotecarios, programas de colonización agrícola-ganadera y revisión de las concesiones de tierras fiscales;
- desarrollar una política de autoabastecimiento energético, que reemplazara al carbón importado por el petróleo nacional y otras energías de origen hídrico;
- construir nuevos puertos y ferrocarriles con el objetivo de descentralizar las actividades económicas y limitar la expansión futura de los intereses británicos;
- controlar las cuentas de capital de las empresas ferroviarias para eliminar sus abusos en materia tarifaria.

La obstrucción ejercida por los terratenientes y los parlamentarios conservadores esterilizaron muchas de estas iniciativas y dificultaron la resolución de los problemas. Una de las consecuencias fue el estallido de graves conflictos agrarios a los que el gobierno respondió contradictoriamente, combinando represión con la sanción de medidas favorables a los intereses de los pequeños y medianos productores, como la Ley Contractual Agraria de 1921³⁷.

37 La Ley Contractual Agraria protegió a los arrendatarios de extensiones no mayores de 300 hectáreas, reconociéndoles, por ejemplo, el derecho de trillar y emparvar con cualquier máquina, cuatro años de plazo mínimo para los contratos, así como posibilidades de reno-

Pero donde el gobierno tuvo que enfrentar las situaciones más conflictivas fue en las grandes ciudades, como Buenos Aires, donde la industria comenzó a crecer desde 1917 alentada por la restricción de las importaciones. Entre los trabajadores el influjo del anarquismo se debilitaba y cobraba fuerza una línea sindical más reformista y negociadora, la corriente sindicalista.

El aumento del nivel de empleo y la nueva actitud del gobierno –protectora y paternalista– hacia estos sectores sindicales, alentó las luchas obreras por el mejoramiento de los salarios, estancados desde hacía tiempo y limados por la persistente inflación.

El paternalismo desplegado por Yrigoyen, quien intervino favoreciendo a los trabajadores en algunos de los numerosos conflictos que estallaron en los primeros años de su gobierno, condujo a un cambio de relaciones, a un acercamiento notable y novedoso entre el gobierno y la FORA sindicalista. Ante la actitud del gobierno, que administraba su poder de policía a favor de los obreros o permitía a los dirigentes sindicales un acceso y comunicación preferenciales con el Ejecutivo nacional, las huelgas exitosas fueron, por primera vez, mayores que las fracasadas. Distinta era la actitud del gobierno frente a las huelgas de sindicatos liderados por anarquistas, socialistas o cuando el Estado actuaba en calidad de patrón. En esos casos, su actitud era francamente hostil a las demandas de los trabajadores. También favorecía los conflictos obreros que estallaban en empresas extranjeras y no obraba del mismo modo con las que se desarrollaban en empresas de capital nacional.

En este contexto, las huelgas protagonizadas por los trabajadores, particularmente intensas entre 1917 y 1919, al tocar puntos neurálgicos de la economía agroexportadora, como puertos, frigoríficos o ferrocarriles, provocaron la contundente reacción de los sectores empresariales más poderosos, que temían que las huelgas fueran el preludio de una revolución social, semejante a la que recientemente había estallado en Rusia.

Entre octubre de 1917 y febrero de 1918 las manifestaciones de la oposición patronal a la política laboral del radicalismo se hicieron muy ostensibles: amenazas de *lockout* patronal de las empresas ferroviarias, anuncios de traslado de frigoríficos a Uruguay, presiones de la Sociedad Rural Argentina, denuncias del diario *La Prensa* sobre un presunto peligro anarquista, amenazas británicas de rescisión de los contratos cerealeros y de boicot a nuestros puertos, creación de

vacación contractual por otro período igual. Esta ley que intentaba eliminar los abusos de los terratenientes fue frecuentemente burlada con el aumento del precio de los arriendos o alquilando extensiones mayores a 300 hectáreas, para dejar a los productores fuera de las protecciones de la ley. Yrigoyen procuró reformar la ley para solucionar sus defectos, pero el Congreso trabó sus iniciativas.

la Asociación Nacional del Trabajo para contratar rompehuelgas y combatir tanto al movimiento obrero como al gobierno (acusado de alentar las huelgas y del desarrollo alcanzado por los gremios), fueron algunos ejemplos del malestar patronal existente.

En enero de 1919, en la recordada Semana Trágica, el conflicto llegó a su punto culminante. Los choques entre policías y trabajadores, iniciados en los barrios de Pompeya y Parque de los Patricios, se generalizaron a toda la ciudad de Buenos Aires. A ello se sumó la acción de bandas paramilitares que, constituidas en especial por jóvenes de los sectores altos y adiestradas en el Centro Naval, focalizaron sus acciones contra judíos y catalanes, por identificarlos con los promotores de la revolución social.

El gobierno de Hipólito Yrigoyen perdió el control de la situación y vivió la más aguda crisis política de su mandato. Con el apoyo del Ejército, logró restablecer el orden, pero, a cambio, tuvo que adoptar severas medidas represivas contra los huelguistas. Desde entonces, sus acciones estuvieron fuertemente condicionadas por el temor a un levantamiento militar o por la acción de los grupos patronales y paramilitares, nucleados —desde 1919— en la poderosa Liga Patriótica³⁸.

Para evitar un golpe de Estado y mantener la limitada cuota de poder que conservaba, el gobierno adoptó duras medidas para sofocar las luchas obreras —a las que ahora caracterizaba como conspiración revolucionaria— en la huelga general de 1921 y en los conflictos de la Patagonia. Al mismo tiempo, otorgó al Ejército un rol político novedoso y cargado de consecuencias futuras, al encargarle la represión del conflicto social antes confiada a la policía.

Mientras que con sus cambiantes acciones perdía el apoyo de vastos sectores de la clase trabajadora, Yrigoyen abandonó paulatinamente los aspectos auténticamente progresistas de su política, perdió iniciativa y dinamismo y

38 Aún no se habían apagado los ecos de la Semana Trágica, cuando se pudo observar la institucionalización de los grupos paramilitares que intervinieron durante esos días sangrientos. De tales grupos, nació la Liga Patriótica Argentina con el propósito de continuar la guerra contra “las ideologías y los agitadores foráneos” y estimular los sentimientos de nacionalidad. Sustentada por los sectores dominantes y algunas destacadas asociaciones militares, la Liga se transformaría en los tres años siguientes en una poderosa agrupación política. Si bien constituía una continuación de los movimientos nativistas que nacieron a fines del siglo XIX como reacción de los grupos tradicionales a la inmigración masiva y el anarquismo, la Liga introducía novedades, como su minuciosa organización paramilitar y un fuerte clasismo. Su rescate de lo nativo y la exaltación de la “argentinidad” se constituyeron en una ideología de clase que penetraba con fuerza entre los hijos de inmigrantes que habían logrado posiciones destacadas en la clase media urbana. Véase David Rock, *op. cit.*, pp.187 y ss.

recurrió cada vez con mayor frecuencia a prácticas tradicionales para mantener la limitada cuota de poder que conservaba. Ejemplos de tales prácticas son la casi excluyente apelación al patronazgo (otorgamiento de cargos públicos con fines electoralistas) y a las intervenciones federales para asegurar gobiernos adictos en las provincias.

Las consideraciones electoralistas tampoco habrían estado ausentes, según algunos autores, de la posición adoptada por el radicalismo en torno a los conflictos que estallaron en 1918 en las universidades nacionales³⁹. En ellas, el proceso de democratización política abierto en 1912-1916 inició un ciclo de movilizaciones estudiantiles contra el dogmatismo, el autoritarismo y la falta de actualización académica reinantes. El radicalismo satisfizo los reclamos de los estudiantes a través de la sanción de la Reforma Universitaria en 1918, que democratizó el gobierno de la Universidad e introdujo cambios en los contenidos y en las prácticas de la enseñanza.

4. Los tiempos de Alvear: prosperidad económica y ruptura del partido radical

El conflicto entre los yrigoyenistas y los sectores dominantes se atenuó bajo el gobierno que ejerció otro radical, Marcelo Torcuato de Alvear, entre 1922 y 1928. Durante esos años, se vivió un nuevo ciclo de acelerada expansión de la economía mundial capitalista. En Argentina, el modelo agroexportador volvió a dar muestras de vitalidad y la industria, luego de unos años difíciles en la posguerra, creció favorecida por las inversiones norteamericanas y por el aumento de los aforos aduaneros aplicados por Alvear con fines fiscales.

Estos años de prosperidad económica también se caracterizaron por el aquietamiento de las tensiones y de las luchas sociales. No sucedió lo mismo con los conflictos políticos, pero éstos, a diferencia del período anterior, tuvieron como contrincantes a los propios radicales. Las históricas diferencias existentes dentro de la UCR entre un ala popular, liderada por Yrigoyen, y un sector aristocrático, encabezado por Alvear, estallaron en conflicto abierto en 1924 y llevaron a la división del partido en la UCR yrigoyenista y la UCR antipersonalista. Yrigoyen era apoyado por los dirigentes menores del partido, por los caudillos de barrio y de comité que le brindaban una adhesión incondicional. La élite radical, que conformó el antipersonalismo, sostenía que Yrigoyen dirigía el

39 José Luis Romero: *El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 138.

país y el partido con un excesivo personalismo y hacía un uso abusivo de las intervenciones federales con el único objetivo de cambiar a su favor situaciones políticas provinciales. También le cuestionaban la expansión del gasto público sin contralor parlamentario.

A la mayoría de los antipersonalistas no los guiaba, sin embargo, un apego principista a las normas republicanas, sino el afán de destruir dos de los pilares básicos sobre los que se asentaba el liderazgo de Yrigoyen en el partido: la intervención federal y el patronazgo. Una prueba de ello, y quizá la más contundente de entre las muchas existentes, es el modo en que llegó Alvear a la Presidencia de la Nación. Su candidatura para las elecciones de 1922 partió de una decisión de Yrigoyen, que el partido aceptó obedientemente. El candidato, quien una vez en la Presidencia cuestionó el presidencialismo, el personalismo y el caudillismo de Yrigoyen, vivió las vicisitudes de la campaña electoral desde su mansión en París, lugar en el que residía bastante regularmente desde principios de siglo. Su participación en este proceso eleccionario se limitó al envío de un cable aceptando la candidatura que le ofrecía el partido, al envío de algún mensaje escrito y alguna declaración periodística. Después de triunfar en las elecciones, Alvear regresó al país en septiembre de 1922 y se hizo cargo de la Presidencia el 12 de octubre del mismo año.

El episodio ilustra sobre la continuidad de ciertas prácticas tradicionales en la joven democracia argentina. El personalismo conservaba toda su fuerza y pesaba tanto dentro como fuera de la UCR. No sólo los convencionales del radicalismo aceptaron la decisión de Yrigoyen, sino que la mayoría de la ciudadanía demostró de inmediato su disposición a secundarla. Ilustra también sobre el alcance de las convicciones republicanas de los antipersonalistas, quienes —hacia mediados de los años 20— no dudaron en aliarse a los distintos grupos políticos que expresaban a los sectores conservadores y a un ala derecha que se escindió del Partido Socialista (los socialistas independientes), para frenar el meteórico ascenso de Yrigoyen en las intenciones de voto de la ciudadanía, en vistas de las elecciones de 1928.

En estas nuevas circunstancias, junto a sus tradicionales apelaciones al patronazgo, el yrigoyenismo planteó cuestiones novedosas que enlazaban con sentimientos extendidos en la sociedad. Sobre todo el nacionalismo económico y un antinorteamericanismo, que se focalizaba en la lucha por la nacionalización del petróleo⁴⁰.

40 David Rock señaló que el viraje de los yrigoyenistas hacia el nacionalismo económico nunca se completó ni se tornó definitivo. No había en tales apelaciones una demanda de cambios económicos estructurales sino un énfasis en un desarrollo industrial limitado que buscaba beneficiar a los grupos dependientes de clase media a través de la generación de

5. Crisis económica y golpe de Estado

La conspiración de los sectores más poderosos de la sociedad, expresados políticamente en los grupos conservadores, en los radicales antipersonalistas y en los socialistas independientes y que encontraban eco en vastas fracciones del Ejército, no se detuvo con el triunfo electoral del yrigoyenismo en 1928. Desde entonces, distintas soluciones se discutieron en el seno de estos grupos: desde una salida institucional forzando la renuncia del presidente hasta un golpe de Estado que quebrara el orden institucional. Finalmente se impuso la segunda opción, encabezada por el general José Félix Uriburu. La solución autoritaria aprovechó para imponerse el extendido malestar social provocado por las repercusiones locales de la crisis internacional de 1929, para las cuales el gobierno de Yrigoyen no encontró las respuestas adecuadas.

El golpe terminó con la primera experiencia democrática de la historia argentina contemporánea y condujo a la restauración de un régimen político oligárquico. Las transformaciones no se limitaron al campo de lo político. El cambio de orientaciones de las economías industrializadas y de las relaciones económicas internacionales que tuvieron lugar durante los primeros años de la década de 1930, alentó en nuestro país la conformación de un nuevo régimen de acumulación y de una nueva estructuración social, el intervencionismo creciente del Estado y cambios en el sistema de ideas dominante.

En síntesis, todos los planos de la realidad social sintieron el impacto del cambio y se transformaron en escenarios de importantes rupturas, poniendo fin al ciclo del liberalismo, iniciado en Argentina allá por las décadas de 1860-1880.

empleo que del mismo resultara. Por otra parte, para Rock, el antinorteamericanismo de los yrigoyenistas se vinculaba con los intereses de los grandes productores agropecuarios argentinos, quienes frente a las dificultades por colocar sus bienes en Estados Unidos e interesados en mantener sus mercados de exportación tradicionales, querían favorecer a Inglaterra. Ésta podría sustituir sus tradicionales ventas de carbón por las de equipos técnicos para el desarrollo de la industria petrolera. Además, la explotación estatal del petróleo permitiría expandir el gasto público y el patronazgo oficial sin tener que recurrir al empleo improductivo. En suma, para Rock, el petróleo brindaba a los yrigoyenistas la posibilidad de mantener su meta de armonía de clases sin someter a sacrificios de ninguna clase a los exportadores de productos primarios. La compatibilización de intereses entre exportadores y sectores urbanos era además realizable por la relativa debilidad de las empresas petroleras norteamericanas instaladas en el país, en términos de influencia económica y política. Véase David Rock, *op. cit.*, pp. 237-242.

6. Reflexiones finales

El análisis de los años de gestión radical invita a reflexionar sobre las causas del fracaso de muchos de los intentos reformistas del yrigoyenismo y sobre la falta de respuesta popular frente al golpe de Estado que en 1930 restituyó en el poder político a los grupos tradicionales de Argentina.

Por un lado, el yrigoyenismo —cuando accedió por primera vez a la Presidencia— tuvo que afrontar una correlación de fuerzas políticas absolutamente desfavorable. Sus intentos de realizar reformas parciales frente a la coyuntura de la guerra o de establecer una novedosa relación con algunos sectores del sindicalismo no contaron con el apoyo de organizaciones o factores de poder capaces de sostener al gobierno frente a los embates del poder económico, social, político y cultural de la oligarquía. Dicho de otro modo, sus intentos de transformar al Estado en mediador de la conflictividad social fracasaron porque el radicalismo carecía de bases de sustentación sociopolítica como para enfrentar con éxito las presiones a las que era sometido por los grupos de poder tradicionales.

Al respecto, resultan interesantes las reflexiones de Darío Cantón, quien sostuvo que si bien puede decirse que la fuerza del radicalismo derivaba de la adhesión que le brindaban las mayorías populares, justo es advertir que en tal fuerza se escondía una real debilidad, ya que el partido “consolida(ba) su posición sólo en términos de votos individuales, no de organizaciones o factores de poder que contaran con medios regulares de acción o expresión”⁴¹.

Vale la pena subrayar además el comportamiento francamente antidemocrático de los sectores dominantes que no dudaron en hacer tambalear la institucionalidad por ellos mismos forjada, cuando en 1919 consideraron que el gobierno radical no podía asegurar la paz social o cuando en 1929-1930 entendieron que no les garantizaría una gestión de la crisis en su favor. Ese comportamiento se fortaleció en 1918-1919, ante el pánico que les produjo —como a otras burguesías nacionales— la ola revolucionaria que parecía expandirse por el mundo desde la lejana Rusia.

Habría que sumar a este análisis el rechazo de los sectores dominantes al estilo político populista de Yrigoyen, un líder que, a diferencia de Marcelo T. de Alvear, no procedía de su seno y no compartía muchos de sus ideales y formas de vida. También es visible un rechazo cultural hacia la integración de sectores sociales subordinados que promovía el radicalismo, y sobre todo su vertiente yrigoyenista, a través de la expansión de la matrícula de la escuela primaria y

41 Darío Cantón y otros: *La democracia constitucional y su crisis*, Buenos Aires, Paidós, 1980, p. 17.

media, de la democratización de la Universidad y del acceso al Estado de miembros de los sectores medios.

Además de todas estas cuestiones relacionadas con las acciones de los sectores dominantes, es de interés preguntarse sobre las posibilidades reales de aplicar políticas reformistas en el marco de coyunturas económicas difíciles, como las de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929. También habría que profundizar en el análisis de las debilidades del radicalismo mismo. La UCR era un desprendimiento de sectores de la élite tradicional que realizó una alianza con los sectores medios. A pesar de que muchos de sus dirigentes estaban imbuidos de nociones de progreso social y adherían a posturas que otorgaban al Estado un rol nivelador frente a las desigualdades creadas por el mercado, lo que se observa es que cuando los conflictos llegaban a su máxima tensión, la UCR no asumía una posición firme y concluía cediendo a las presiones y condicionamientos de los factores de poder. Quizá la respuesta habría que buscarla en la procedencia social de sus máximos dirigentes y en el prestigio que conservaba entre ellos la opinión y visión del mundo de los sectores dominantes. Habría que hurgar, por lo tanto, en las debilidades de la ideología radical, que cuestionó sólo algunos aspectos de la hegemonía oligárquica: los vinculados a la hegemonía política.

La UCR también manifestó dificultades para establecer alianzas con organizaciones sociales populares —como sectores del movimiento obrero— que lo fortalecieran frente a los distintos mecanismos de desestabilización aplicados por la oligarquía. También tuvo problemas para establecer acercamientos con el Partido Socialista, partido con el que a pesar de compartir planteos reformistas, estaba fuertemente enfrentado por sus diferentes estilos políticos y también porque disputaban —por lo menos en Capital— la misma franja del electorado. Por otra parte, si bien el radicalismo expresó cambios en la cultura política, como lo demuestran la forma de organización de su partido⁴², la llegada al gobierno por la voluntad libremente expresada de la mayoría de los ciudadanos y la reivindicación de un principio de legitimidad democrática que cuestionaba la dinámica y los principios del régimen oligárquico, es de observar que el radicalismo no significó un cambio profundo de algunas prácticas políticas vigentes. Al lado de las novedades señaladas, podían observarse —como se lo criticaban los socialistas— la persistencia de métodos y principios tradicionales, como el clientelismo, las lealtades personales y los fuertes liderazgos.

42 Los partidos políticos anteriores a la UCR constituían coaliciones circunstanciales conformadas en épocas de elecciones. La UCR fue el primer partido político provisto de organización nacional y estructurado con vistas a conseguir el poder. Actuando en forma independiente de los recursos del Estado, se estructuró en torno a comités de base, convenciones (nacionales y de distrito) y a afiliaciones individuales.

Habría que preguntarse de qué modo tales prácticas influyeron sobre una sociedad que, impregnada por los ideales y las posibilidades de movilidad socioeconómica, muchas veces se desentendió de la política y no comprendió las relaciones existentes entre su vida cotidiana y los avatares de la política general. Al respecto, sería fértil continuar la línea de análisis trazada por Natalio Botana para observar si la falta de estímulo del Estado para la participación política de la sociedad civil que él constata en la etapa conservadora u oligárquica, se continuó y de qué modo durante la etapa democrática. El Estado oligárquico —siguiendo principios ya establecidos en la Constitución de 1853—, al no establecer ninguna diferencia entre nativos e inmigrantes o entre ciudadanos y habitantes para el goce pleno de los derechos civiles, habría estimulado en los inmigrantes una tendencia a privilegiar la actividad económica por sobre el involucramiento político. En la mirada de éstos, el éxito económico se ligaba casi exclusivamente a cualidades y esfuerzos personales y, en tal contexto, el ejercicio de la ciudadanía carecía de relevancia. Estas tendencias habrían sido fortalecidas por las características de un régimen que, como el oligárquico, impedía la participación amplia y libre de los ciudadanos en la elección de sus representantes y la maquinaria del Estado al servicio de unos pocos poderosos⁴³. ¿Qué pasó con estas tendencias durante el período 1916-1930 en que gobernaron los radicales? La pasividad con que la mayoría de la ciudadanía recibió en 1930 la noticia del derrocamiento del gobierno que había plebiscitado en 1928, permite pensar en que no se produjeron en este lapso modificaciones sustanciales en la cultura política de los argentinos, en pos de la defensa de las instituciones democráticas.

Distintas interpretaciones sobre el período

El análisis de ese ciclo, en que el radicalismo tuvo la dirección del Estado, ha dado lugar a interpretaciones encontradas. Mientras para algunos estudiosos, basados sobre todo en el carácter que adquirió el conflicto social y en el mantenimiento de la estructura productiva anterior, el radicalismo no representó más que una continuidad respecto de la etapa oligárquica, para otros se trató de un ciclo revolucionario abruptamente abortado por el golpe de 1930⁴⁴.

43 Natalio Botana, “¿Habitantes o ciudadanos? La Argentina del ochenta y el problema de la identidad política”, en Peter Waldmann y E. Garzón Valdés (comps.), *El poder militar en Argentina*, Buenos Aires, Galerna, 1983.

44 David Rock, *op. cit.*, y Gabriel del Mazo, *La primera presidencia de Yrigoyen*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983, sostienen respectivamente estas posiciones.

Entre ambos extremos de interpretación, existen análisis como los realizados por Jorge F. Sábato y Jorge E. Roulet, quienes, aun reconociendo que el proyecto del radicalismo era de corto vuelo ya que no se proponía cambios importantes sino solamente el cumplimiento de la Constitución nacional, observaron que la ampliación de la participación política y el ingreso al aparato estatal de nuevos grupos subordinados sirvieron para modificar algunas de las orientaciones tradicionales del Estado, siendo tal vez las más dignas de mención: el cambio de la actitud favorable hacia los monopolios y grandes corporaciones por otra más neutral y hasta hostil; el estímulo –sobre todo durante los primeros años de gestión– a la movilización de fuerzas sociales hasta entonces excluidas de la escena pública; las políticas educativa, internacional y energética⁴⁵.

Daniel García Delgado considera que bajo las administraciones radicales, si bien no se logró una modificación institucional significativa, se produjo un cambio importante en el rol del Estado: de exclusivo protector de los derechos civiles como lo fue en la etapa liberal-oligárquica, el Estado pasó a tener un rol de mediador de la conflictividad social. Dado que los radicales no consideraban –como sí lo hacían los conservadores– que la equidad fuera sólo el resultado del equilibrio espontáneo de las fuerzas económicas, propusieron un funcionamiento estatal diferente al de la etapa anterior erigiendo al Estado en armonizador de los intereses en juego. Y si bien no fueron cuestionadas las bases reales de la desigualdad ni del poder de los sectores terratenientes, se pretendió corregir sus excesos. Esto no significó una ruptura con la clase dominante que siguió ejerciendo la hegemonía, en la medida en que se mantenía inalterable el consenso sobre las bondades del modelo de acumulación agroexportador y de la división internacional del trabajo en que se apoyaba⁴⁶.

Como ya se ha señalado, el acceso del radicalismo a la dirección política del país fue interpretado por Alfredo Pucciarelli como un caso de hegemonía compartida, ya que los dos planos de la hegemonía, la hegemonía sociocultural y la política, aparecen en esta época disociados, encarnándose la primera en los sectores dominantes y la segunda en el radicalismo. No obstante ello, Pucciarelli considera que, con el advenimiento del yrigoyenismo al poder, el Estado absorbió las demandas sociales postergadas y se fue convirtiendo en un agente voluntario de la redistribución progresiva del ingreso nacional, de la movilidad ocupacional horizontal y vertical, del aumento de la profesionalización y por ende de la movilidad social ascendente,

45 Jorge F. Sábato y Jorge E. Roulet: “Estado y administración pública en la Argentina, ¿frenos o motores del cambio social?”, en *Historia Integral Argentina*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1972.

46 Daniel García Delgado, *Estado & Sociedad, la nueva relación a partir del cambio estructural*, Buenos Aires, Tesis-Norma, 1996.

de la ampliación de la difusión y el usufructo de bienes culturales, de la movilización y participación político-electoral. Fue, por lo tanto, un agente activo en la promoción y el ascenso de los sectores sociales menos favorecidos.

En el Estado re-formado durante el período yrigoyenista pueden observarse, según Pucciarelli, cuatro grandes transformaciones: se modificó la composición del bloque social y de la convergencia de fuerzas sociales que sustentaban el poder gubernamental; se incorporaron nuevas funciones para incidir más efectivamente sobre los procesos de circulación y redistribución de ciertos bienes económicos, sociales y culturales; el Estado se transformó en garantía efectiva de funcionamiento del sistema democrático y de respeto de la soberanía popular y se propuso como instancia arbitral y ámbito de resolución de los conflictos sociales y de las luchas sectoriales. Ese movimiento nacional que representó el radicalismo —agrega Pucciarelli— ubicó su causa reparadora en la oposición al sistema de intereses de una clase social, la oligarquía, y a los métodos políticos de un adversario tradicional, el partido conservador. Sin embargo, la lucha entre radicales y conservadores no llegó a trascender, en general, los límites de la lucha política y de las disputas generadas por las nuevas iniciativas democratizadoras del Estado. Más allá de eso, hubo una amplia gama de coincidencias ideológicas que tenía una base común de intereses compartidos: la necesidad de potenciar el crecimiento y expansión de un mismo tipo de orden económico y social⁴⁷.

Leandro de Sagastizábal considera que, entre 1916 y 1930, se fue conformando una tibia posición ideológica antiliberal visible en el surgimiento de un embrionario Estado intervencionista que intentó una acción tutelar y regulatoria de la economía y la sociedad. Desde esta nueva actitud, el radicalismo yrigoyenista persiguió —sobre todo en sus años iniciales— la morigeración del poder de los sectores económicamente dominantes, una más justa distribución de las riquezas, mayor independencia nacional y democratización política. Los límites de los cambios ensayados estuvieron dados por un conjunto de razones interrelacionadas que iban desde los instrumentos de poder que se reservaron los sectores dominantes hasta las ambigüedades y contradicciones propias del radicalismo, las dificultades que planteaba la coyuntura internacional y los intereses del capital extranjero y de los sectores dominantes nativos⁴⁸.

En relación con el régimen político, en un estudio reciente, Ana V. Persello sostiene que en 1916 comenzó una etapa donde se combinaron nuevas prácticas con viejos modos de hacer política. La incorporación de nuevos sectores al su-

47 Alfredo Pucciarelli, *op. cit.*

48 Leandro de Sagastizábal y otros: *Argentina 1880-1943. Sociedad y Estado. Aproximaciones a su estudio*, Buenos Aires, Centro de Estudios del Libro, 1995.

fragio modificó la estructura de los partidos que debieron empezar a competir por la conquista del voto. En relación con el período precedente, la participación se amplió, las garantías individuales y libertades se respetaron, el Parlamento funcionó con normalidad y las elecciones fueron periódicas. A la vez, persistieron prácticas facciosas, confusión entre partido y gobierno, clientelismo, ejecutivismo e irreductibilidad en las posiciones políticas.⁴⁹

Bibliografía

- Allub, Leopoldo, *Orígenes del autoritarismo en América Latina*, México, Katún, 1983.
- Ansaldo, Waldo, “Frívola y casquivana, mano de hierro en guante de seda. Una propuesta para conceptualizar el término de oligarquía en América Latina”, Terceras Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia de Universidades Nacionales, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, septiembre de 1991.
- Botana, Natalio, *El orden conservador*, Buenos Aires, Sudamericana, 1985.
- Botana, Natalio, “¿Habitantes o ciudadanos? La Argentina del ochenta y el problema de la identidad política”, en Waldmann, P. y Garzón Valdés, E. (comps.), *El poder militar en Argentina*, Buenos Aires, Galerna, 1983.
- Campione, Daniel y Mazzeo, Miguel, *Estado y administración pública en la Argentina. Análisis de su desarrollo en el período 1880-1916*, Buenos Aires, Ediciones FIS yP, 1999.
- Cantón, Darío, Moreno, José Luis y Círia, Alberto, *La democracia constitucional y su crisis*, Buenos Aires, Paidós, 1980.
- Chiaromonte, José Carlos, *Nacionalismo y liberalismo en la Argentina, 1860-1880*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- Cortés Conde, Roberto y Gallo, Ezequiel, *La formación de la Argentina moderna*, Buenos Aires, Paidós, 1973.
- Cortés Conde, Roberto, *El progreso argentino 1880-1914*, Buenos Aires, Sudamericana, 1979.
- Cortés Conde, Roberto, *La república conservadora*, Buenos Aires, Paidós, 1972.
- De Sagastizábal, Leandro, Marcaida, Elena, Scaltritti, Mabel y De Luque, Susana, *Argentina 1880-1943. Sociedad y Estado. Aproximaciones a su estudio*, Buenos Aires, Centro de Estudios del Libro, 1995.

49 Ana, V. Persello, “Los gobiernos radicales: debate institucional y práctica política”, en Ricardo Falcón (dir. tomo), *Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930)*, Nueva Historia Argentina, Tomo VI, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.

- Del Mazo, Gabriel, *El radicalismo. Ensayo sobre su historia y doctrina*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.
- Del Mazo, Gabriel, *La primera presidencia de Yrigoyen*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.
- Díaz Alejandro, Carlos, *Ensayos sobre la historia económica argentina*, Buenos Aires, Amorrurtu, 1983.
- Di Tella, Torcuato y Zymelman, Manuel, *Las etapas del desarrollo económico argentino*, Buenos Aires, Eudeba, 1967.
- Falcón, Ricardo, *Los orígenes del movimiento obrero 1857-1899*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984.
- Falcón, Ricardo (dir. tomo), *Democracia, conflicto social y renovación de ideas, 1916-1930*, *Nueva Historia Argentina*, tomo VI, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.
- Ferrer, Aldo, *La economía argentina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1963.
- Flichman, Guillermo, *La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1982.
- García Delgado, Daniel, *Estado y Sociedad*, Buenos Aires, Flacso, 1996.
- García Delgado, Daniel, *Estado & Sociedad, la nueva relación a partir del cambio estructural*, Buenos Aires, Tesis-Norma, 1996.
- Germani, Gino, *Estructura social de la Argentina*, Buenos Aires, Raigal, 1955.
- Germani, Gino, *Política y sociedad en una época de transición*, Buenos Aires, Paidós, 1968.
- Giberti, Horacio, *Historia económica de la ganadería argentina*, Buenos Aires, Solar, 1981.
- González, Ricardo, *Los obreros y el trabajo, Buenos Aires, 1901*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984.
- Gorostiegui de Torres, Haydecé, *Argentina. La organización nacional*, Buenos Aires, Paidós, 1972.
- Grosso, Juan Carlos, “Los problemas económicos y sociales y la respuesta radical en el gobierno (1916-1930)”, en Grosso, J. C. y otros, *El radicalismo*, Buenos Aires, Carlos Pérez Editor, 1968.
- Hobsbawm, Eric, *La era del Imperio (1875-1914)*, Buenos Aires, Crítica, 1989.
- Hobsbawm, Eric, *Historia del siglo XX*, Buenos Aires, Crítica, 1998.
- Hora, Roy, *Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política. 1860-1945*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.
- Laclau, Ernesto, “Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. Aproximación histórica a los casos argentino y chileno”, en Giménez Zapiola, Marcos (comp.), *El régimen oligárquico*, Buenos Aires, Amorrurtu, 1975.
- Lobato, Mirta Zaida (dir. tomo), *El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo V, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.
- Oddone, Jacinto, *La burguesía terrateniente argentina*, Buenos Aires, Libera, 1954.
- Ortiz, Ricardo M., *Historia económica argentina*, Buenos Aires, Plus Ultra, varias ediciones.
- Palacio, Juan Manuel, “Jorge Sábato y la historiografía rural pampeana: el problema del otro”, *Entre pasados, revista de Historia*, año V, N° 10, 1996.
- Peña, Milciades, *Industria, burguesía industrial y liberación nacional*, Buenos Aires, Editorial Fichas, 1974.
- Persello, Ana V., “Los gobiernos radicales: debate institucional y práctica política”, en Falcón, R. (dir. tomo), *op. cit.*

- Pucciarelli, Alfredo, “Conservadores, radicales e yrigoyenistas, un modelo (hipotético) de hegemonía compartida”, en Ansaldi, Waldo, Pucciarelli, Alfredo y Villarruel, José C., *Argentina en la paz de dos guerras, 1914-1945*, Buenos Aires, Biblos, 1993.
- Pucciarelli, Alfredo, *El capitalismo agrario pampeano, 1880-1930*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- Puiggrós, Rodolfo, *El yrigoyenismo*, Buenos Aires, Corregidor, 1974.
- Rock, David, *El radicalismo argentino*, Buenos Aires, Amorrortu, 1977.
- Romero, José Luis, *El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1983.
- Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- Rouquié, Alain, *Radicales y desarrollistas*, Buenos Aires, Schapire, 1975.
- Rouquié, Alain, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, dos tomos, Buenos Aires, Emecé, 1981.
- Sábato, Hilda, *Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar, 1850-1890*, Buenos Aires, Sudamericana, 1989.
- Sábato, Jorge Federico y Schvarzer, Jorge, “Funcionamiento de la economía y poder político en la Argentina: trabas para la democracia”, en Rouquié, Alain y Schvarzer, Jorge (comps.), *¿Cómo renacen las democracias?*, Buenos Aires, Emecé, 1985.
- Sábato, Jorge Federico, *La clase dominante en la Argentina moderna. Formación y características*, Buenos Aires, CISEA-GEL, 1988.
- Sábato, Jorge Federico y Roulet, Jorge Esteban, “Estado y administración pública en la Argentina, ¿frenos o motores del proceso de cambio social?”, *Historia Integral Argentina*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1972.
- Sartelli, Eduardo, “A propósito de Jorge Sábato y Larry Sawers y el estancamiento de la economía argentina”, *Ciclos*, año VI, vol. VI, N° 10, 1996.
- Viguera, Anibal, “Participación electoral y prácticas políticas en los sectores populares en Buenos Aires, 1912/1922”, *Entrepassados, revista de Historia*, año I, 1991.

La crisis de 1929 y las transformaciones en la situación internacional

Susana de Luque y Mabel Scaltritti

La crisis financiera que estalló en Estados Unidos en 1929 conmocionó al sistema capitalista mundial. La crisis se expandió por casi todo el planeta, obligando a rediseñar el funcionamiento de las economías nacionales y las relaciones económicas internacionales. Como consecuencia de la crisis, se cuestionaron las concepciones fuertemente arraigadas del liberalismo. Junto a una creciente intervención de los Estados en la economía y la sociedad, se exacerbaban los nacionalismos y fueron creciendo las tensiones que conducirían a la Segunda Guerra Mundial.

1. La euforia de los años 20

Al concluir la Primera Guerra Mundial, las economías de los países de Europa occidental estaban al borde de la quiebra. Las relaciones internacionales se desenvolvían en un clima de tensión y hostilidad.

Tal situación se modificó en poco tiempo. Desde 1923-1924, la economía internacional inició una nueva fase de prosperidad que barrió con los sentimientos de tristeza, impotencia e incertidumbre sembrados por la guerra, para reemplazarlos por la euforia y el optimismo.

Ése fue el clima dominante en los “dorados años 20”. Desde Europa y particularmente desde Estados Unidos, se expandió una gran confianza acerca de las posibilidades que ofrecían el crecimiento económico y el capitalismo para lograr el desarrollo de los países y de la humanidad toda. Las certezas sobre las posibilidades del éxito individual y las bondades de la libre empresa se fortalecieron. Algunos hombres de negocios, como Henry Ford o David Rockefeller, no dudaron en exaltar las ventajas del sistema capitalista y en anunciar el fin de los ciclos expansivo-depresivos que venían caracterizándolo, profetizando la entrada a una etapa de crecimiento y progreso indefinidos.

¿De dónde derivaban estas convicciones? Eran, sin duda, la consecuencia palpable de la prosperidad que comenzó a vivir la economía norteamericana durante y luego de la Primera Guerra Mundial y que, pasados los primeros años de la posguerra, se expandió hacia algunas economías y sociedades europeas en pleno proceso de reconstrucción.

Estados Unidos no sufrió las consecuencias negativas de la Primera Guerra Mundial. Muy por el contrario, se benefició con ella. El país del norte intervino tardíamente en la contienda bélica y no fue escenario de la misma, como sí lo fue Europa. La guerra alentó las innovaciones tecnológicas y favoreció el aumento de las exportaciones, transformando a Estados Unidos en líder de la economía internacional.

Una vez concluida la guerra, Estados Unidos consolidó su liderazgo. No sólo exportó una gran cantidad de bienes para apoyar la reconstrucción europea, sino que se transformó en el principal acreedor de capitales a nivel mundial. Las tecnologías novedosas que se utilizaron en tiempos bélicos fueron puestas al servicio de la industria de paz. La productividad del trabajo aumentó significativamente, en parte por la aplicación de esas nuevas tecnologías, pero también por otras novedades que, simultáneamente, se introdujeron en la organización del trabajo. Nos referimos específicamente al fordismo, que se expandió en las industrias estadounidenses más importantes.¹

1 En las últimas décadas del siglo XIX, el ingeniero estadounidense Frederick W. Taylor diseñó un método para lograr una administración “científica” en la organización del trabajo que permitiera optimizar el uso de los recursos, aumentar la productividad y quebrar el control que, sobre los procesos de trabajo, ejercían los trabajadores. Después de 1870, la depresión en que se sumió el sistema capitalista mundial, creó el clima propicio para que los postulados de Taylor (taylorismo) se convirtieran en una nueva ideología empresarial y en una estrategia económica del capital. De ahí en más, y fundamentalmente en las grandes empresas de los países industriales, siguiendo los planteos de Taylor, el trabajo de cada obrero fue fragmentado en tareas lo más específicas y simples precisas, cronometradas y diseñadas por la dirección de la empresa. El proceso productivo pasó a ser controlado por la gerencia, sector que monopolizó el conocimiento.

La aplicación del taylorismo permitió incrementar la intensidad del trabajo y, en consecuencia, bajar los costos y aumentar los beneficios; permitió también la descomposición y simplificación de cada tarea produciendo una baja en la calificación de los obreros, a los que tornó fácilmente reemplazables y, por lo tanto, menos costosos.

A principios del siglo XX y, fundamentalmente en los años 20, en Estados Unidos y Alemania, el fordismo continuó y profundizó los principios de gestión del taylorismo, mediante la aplicación de ciertas innovaciones tecnológicas. Entre ellas, la línea de montaje, cuyo principio consistía en que los obreros ensamblaran partes a una pieza principal

Las transformaciones en los procesos de trabajo fueron acompañadas por un aumento del consumo de productos durables, como los automóviles, lo que a la vez permitió que muchas familias trasladaran su lugar de residencia desde los centros urbanos hacia los suburbios. Consecuentemente, creció la construcción, al extenderse las carreteras y edificarse muchos nuevos edificios y casas en las ciudades y sus entornos.

El clima de prosperidad y optimismo que se vivía en Estados Unidos presentaba, no obstante, importantes sombras. El aumento de la productividad del trabajo, la incorporación de nuevas tecnologías a la producción, el cambio en los hábitos de consumo y el crecimiento de algunas actividades económicas beneficiaban sólo a una parte de los norteamericanos, y muy particularmente a las grandes empresas monopólicas, dedicadas a la producción y a la comercialización. Amplios sectores de la economía y de la sociedad estadounidense no compartían esta situación de euforia, sino que se debatían en una profunda crisis.

Es, por ejemplo, el caso del sector agrícola que, durante los años 20, sufrió una crisis de sobreproducción. Los precios agrícolas cayeron y la respuesta de los agricultores fue producir más, agravando sus dificultades ya que el incremento de la producción no hizo otra cosa que alentar una nueva caída de los precios. Muchos agricultores —endeudados y sin asistencia estatal— tuvieron que vender sus propiedades, transformándose en aparceros o asalariados rurales. Una gran cantidad de ellos migró desde el campo hacia las ciudades, aumentando la oferta de mano de obra y contribuyendo, consecuentemente, a la disminución de los salarios de los obreros industriales.

Estos últimos, los obreros industriales, constituyeron otro sector que no se vio favorecido por la prosperidad reinante. Hay estudios que nos indican que “algo más del 40 por ciento del total de las familias (norteamericanas) recibían el 13 por ciento de la renta total. Siguiendo en esta línea de observación (...) casi el

transportada por una cinta. El ritmo de trabajo era regulado mecánicamente, de manera totalmente externa al trabajador, por la velocidad que la gerencia daba a la cinta o transportador. De esta manera, los tiempos muertos fueron reducidos a la mínima expresión, con el consecuente aumento de la productividad de la mano de obra. El fordismo también profundizó la división y simplificación de tareas puesto que, para que la utilización de la línea de montaje fuera posible, las piezas a montar debían ser idénticas e intercambiables, es decir, producidas de manera estandarizada. La estandarización puso fin a los resabios de la producción artesanal, permitiendo la producción en serie. Véase: Paula I. Sofía, “La conformación del mercado mundial capitalista (1850-1914)”, en Elena Marcaida (coord.), *Estudios de Historia Económica y Social. De la Revolución Industrial a la globalización neoliberal*, Buenos Aires, Biblos, 2002.

60 por ciento del pueblo norteamericano obtenía anualmente un promedio de ingresos menor a dos mil dólares al año, en tanto una estrecha franja de la población percibía una alta proporción del total de la renta nacional”.²

En la euforia producida por un proceso de crecimiento económico aparentemente ilimitado y con acceso a nuevos y revolucionarios productos, los problemas de los agricultores y la concentración de la riqueza en un sector minoritario de la sociedad pasaron inadvertidos. Pero, de todos modos, por la confluencia de estos diferentes procesos, se fue produciendo un desfase creciente entre la altísima capacidad de producción de las empresas y las posibilidades de consumo de una gran parte de la población de los Estados Unidos. Tal desfase o falta de correspondencia entre oferta y demanda de productos comenzó a hacerse evidente, ya desde 1926-1927. En 1928, los signos recesivos, tales como la contracción de la construcción o la acumulación de stocks en distintas actividades industriales, eran manifiestos.

Estos problemas permanecieron velados durante un tiempo por la euforia que se desató hacia esos años en el ámbito financiero. Los excedentes generados por las empresas monopólicas, así como el dinero procedente de créditos baratos con los que las benefició el gobierno de Estados Unidos, se dirigieron a la Bolsa, para valorizarse a través de la especulación financiera.

De este modo, las grandes empresas, generadoras de la mayor parte de la producción del país, en lugar de distribuir más equitativamente la riqueza para aumentar la capacidad de compra de sus trabajadores o en lugar de colocar sus capitales en nuevos emprendimientos productivos, invirtieron parte de sus excedentes en el ámbito financiero, desatándose un juego especulativo de compra y venta de valores y acciones. En este contexto, los valores y acciones de algunas empresas fueron subiendo y su precio se fue autonomizando de la situación real que éstas vivían en la esfera de la producción y el consumo.

El precio de las acciones de las empresas tienden por lo general a reflejar las ganancias o niveles de beneficios de las mismas. Pero, en virtud de juegos especulativos como los que estamos describiendo, esas acciones y valores por momentos pueden distanciarse de la rentabilidad real de las empresas. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos. La economía parecía desenvolverse sin tropiezos y las acciones subían, lo cual llevaba a comprar más acciones y valores, alentando, en virtud del aumento de la demanda, una loca carrera hacia la suba. Sin embargo, esta situación no reflejaba la realidad de la economía norteamericana y la “burbuja” financiera demostraría, en breve, su carácter efímero.

2 Elena Scirica: “Estados Unidos en la crisis. Depresión y New Deal”, en Elena Marcaida (coord.), *op. cit.*, p. 132.

2. De la euforia al cataclismo. La propagación de la crisis

La “burbuja” financiera finalmente estalló en octubre de 1929, con consecuencias muy graves para toda la humanidad. El elemento desencadenante del crac fue el descenso de los precios del acero y el cobre, y la reducción de los beneficios de algunas empresas que se reflejaron en una leve tendencia a la baja de las acciones en la Bolsa durante el mes de septiembre de 1929. En la última semana de octubre comenzaron a acumularse órdenes de venta de títulos a bajo precio y se inició un proceso de desvalorización progresiva. La gran oferta aceleró el descenso de las cotizaciones y comenzó a instalarse una situación de pánico. Miles de empresarios y de particulares iniciaron una corrida sobre la Bolsa y sobre los bancos, queriendo vender acciones y retirar sus ahorros, antes de que se produjera la hecatombe final del sistema. Pese a la acción compradora de algunos grandes grupos económicos, la situación no pudo ser controlada, produciéndose la caída de la Bolsa y la quiebra financiera generalizada.

Algunas explicaciones sobre la crisis se centran exclusivamente en sus aspectos financieros; otros estudios la caracterizan como una crisis de sobreproducción. Sin embargo, para muchos estudiosos a cuyas explicaciones adherimos, la crisis financiera que se desató en ese *jueves negro* de octubre de 1929, en el centro financiero mundial de Wall Street, fue sólo un síntoma, trágico, pero síntoma al fin, de una economía que venía arrastrando una serie de problemas profundos. La crisis financiera sería la consecuencia de la superposición y entrelazamiento de varias crisis: de la crisis de sobreproducción y de la crisis de subconsumo, producida a su vez por una crisis de distribución³.

La crisis implicaba también el agotamiento de un patrón de acumulación, es decir, de una determinada organización económica y social que, hasta ese momento, permitía el crecimiento y la generación de riqueza y que se caracterizaba por un consumo concentrado en sectores sociales con gran poder adquisitivo. El nuevo patrón de acumulación requerirá invariablemente, dada la gran expansión de la capacidad productora de la moderna sociedad industrial, la expansión del consumo hacia el resto de los sectores sociales.

Por lo pronto, en lo inmediato, la crisis hizo temblar a la sociedad norteamericana que pareció de repente sacudida por un cataclismo. Fortunas que se esfumaban en pocos segundos, quiebra de diez mil bancos, caída abrupta de las importaciones, de las exportaciones y de toda la actividad económica. Ése era el panorama desolador a fines del año 1929. La crisis financiera,

3 Para analizar distintas interpretaciones sobre las causas de la crisis de 1929, véase Elena Scirica, *op. cit.*

fruto de problemas acumulados en otras esferas, rebotaba y producía una fuerte baja de los volúmenes y precios de la producción industrial. También caían los ya deprimidos precios agrarios, así como el comercio y el consumo. En tal contexto, lo único que subía era el número de los desempleados, que en lo peor de la crisis, durante los primeros años de la década de 1930, alcanzó, según algunas estimaciones, la cifra de 12 millones.

La tremenda crisis no quedó circunscripta al país del norte. El alto nivel de integración de la economía internacional y el rol protagónico que en ella desempeñaba Estados Unidos, principal país exportador de capitales, hicieron que la crisis se propagara rápidamente por todo el mundo, afectando tanto a los países de producción primaria como a los países industriales⁴.

La quiebra generalizada del sistema bancario norteamericano arrastró a la crisis a la banca europea, ya que, en muy poco tiempo, dos tercios de las inversiones norteamericanas en el extranjero fueron repatriadas a Estados Unidos. Se trataba de dinero que, durante la década de 1920, había sido colocado en muchos lugares y, sobre todo, en los países europeos, con el objetivo de facilitar la reconstrucción de posguerra. Especialmente, habían tomado el camino hacia Alemania, país que, luego de su derrota en la Primera Guerra Mundial, se había vuelto muy dependiente de los préstamos y de las inversiones norteamericanas. Como sucedió en Estados Unidos, en los países de la Europa industrial, con mayor o menor intensidad según los casos, la crisis financiera repercutió sobre las demás áreas de actividad productiva y sobre el comercio y el consumo. Cayeron notablemente las ventas y los precios de los bienes en los mercados locales e internacional, y la acumulación de stocks resultante generó una marcada recesión industrial, el estancamiento de la producción agrícola y una abrupta y sensible disminución de los niveles de ingreso y de empleo de amplias franjas de población. En algunos de estos países, este último fenómeno adquirió dimensiones catastróficas: en Alemania, por ejemplo, la desocupación afectó entre 6 y 8 millones de personas. Inglaterra y Francia no quedaron tampoco a salvo de este flagelo social.

La expansión del desempleo y el empobrecimiento acelerado de amplios sectores de la población europea y norteamericana generaron una sensación de angustia, desconcierto e impotencia frente a fenómenos incomprensibles, como la destrucción voluntaria de alimentos en medio del hambre y la miseria o la proliferación de villas de emergencia y de ollas populares, donde obreros,

4 La excepción fue la Unión Soviética, que estaba desarrollando, bajo una vía no capitalista y encerrada dentro de sus extensas fronteras, una industrialización acelerada y la colectivización forzada del campo.

empleados y funcionarios desocupados formaban largas filas a la espera de una ración de comida.

En este contexto, en los países industriales, los antagonismos sociales se agudizaron y se registró un notable crecimiento de los conflictos. La movilización obrera y los partidos políticos de base proletaria se fortalecieron al canalizar la protesta de importantes sectores de la sociedad perjudicados por la crisis. También crecieron las luchas de pobres contra pobres y, en países donde coexistían grupos étnicos distintos, la tensión racial aumentó. Así sucedió en Estados Unidos con el viejo enfrentamiento entre blancos y negros, y así ocurrió en Europa, donde los sectores medios, bruscamente empobrecidos, se mostraron en muchos casos sensibles a la prédica de un nacionalismo exacerbado, que no vacilaba en alentar, como en el caso alemán, el odio entre las razas y el genocidio de los judíos.

La situación de catástrofe, como la denomina el historiador Eric Hobsbawm⁵, llevó a los países industriales a impulsar políticas autárquicas, en virtud de las cuales cada país trató de desarrollar dentro de sus fronteras la mayor parte de las producciones necesarias para su desenvolvimiento. Enfrentados al problema de la carencia de divisas, muchos gobiernos europeos aplicaron medidas proteccionistas y alentaron una política de sustitución de importaciones primarias⁶. La producción local de estos bienes permitía generar nuevas fuentes de empleo y restituir el nivel de la deprimida actividad económica interna. Como consecuencia de ello, los países especializados en la producción agropecuaria vieron caer la demanda internacional de sus principales bienes exportables a la vez que caían bruscamente sus precios⁷.

Todas estas transformaciones afectaron profundamente el sistema económico mundial y las relaciones entre los países. Por un lado, se produjo el colapso del sistema financiero internacional, que, basado hasta entonces en el patrón oro, había posibilitado un aceitado funcionamiento del mercado internacional de capitales y favorecido el flujo del comercio mundial. Tam-

5 Eric Hobsbawm: *Historia del siglo XX*, Buenos Aires, Crítica, 1998.

6 En algunos casos, se trató de la profundización de medidas que ya habían comenzado a aplicarse en años anteriores a la gran crisis. Véase Aldo Ferrer, *La economía argentina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1963.

7 Los precios industriales comenzaron pronto a recuperarse, mientras que los precios de los productos primarios lo hicieron mucho más lentamente e incluso no alcanzaron a recuperar los niveles anteriores a la crisis. Esta nueva relación entre precios industriales y agrarios agudizó las dificultades de los países “jóvenes”, que no recuperaron su capacidad de compra en el mercado internacional sino en circunstancias excepcionales.

bién se desequilibró este último, que sufrió una notable reducción en los volúmenes y en los montos de los productos traficados. Se modificó además el flujo de capitales, ya que, ante los problemas serios que atravesaban los países más desarrollados, la corriente de capitales invirtió su dirección. Por un tiempo, los capitales fluyeron desde los países de producción primaria hacia los países industriales, en pago de las fuertes deudas contraídas por los primeros, durante la época de auge del sistema de división internacional del trabajo.

Es importante subrayar que este sistema entró en una crisis terminal. En lugar de la especialización, cada país trató de desarrollarse autárquicamente y, así como en muchas naciones industriales europeas se tendió a sustituir las importaciones primarias con producción propia, en algunos países productores de bienes primarios se desarrollaron procesos de industrialización.

Las relaciones comerciales multilaterales fueron abandonadas y, en su lugar, se tendió a la firma de acuerdos bilaterales y a la formación de bloques comerciales entre las grandes potencias y sus colonias o ex colonias. Ejemplo de ello es el Tratado de Ottawa, firmado en 1932, por el cual Gran Bretaña otorgaba preferencia a la compra de carnes procedentes de sus dominios (Commonwealth).

3. La crisis del liberalismo: auge de los nacionalismos y de los regímenes autoritarios. Creciente intervencionismo estatal

La crisis impactó también fuertemente en la dimensión de las ideas. El paradigma liberal dominante fue fuertemente cuestionado, tanto en sus aspectos políticos como en los económicos. En este último plano, el liberalismo asignaba al Estado un rol limitado a garantizar el cumplimiento de las reglas de juego, es decir, a asegurar el cumplimiento de la legislación vigente. Otorgaba, en cambio, primacía a la iniciativa privada y al mercado, que tenía —en virtud del libre juego de la oferta y la demanda— un rol equilibrador en la asignación de los recursos.

La realidad de la crisis y la depresión pusieron en entredicho estas “verdades” o proposiciones. La no intervención del Estado en la regulación de los asuntos económicos y sociales había llevado a un desfasaje entre la producción y el consumo, a un divorcio entre la esfera financiera y la productiva, a una profunda brecha entre ricos y pobres y a una depresión económica internacional de una profundidad sin antecedentes.

Ante la gravedad de la situación económico-social, y en medio de la crisis de las

ideas liberales, los Estados de los distintos países, sin una teoría previa, tomaron medidas para evitar que sus sociedades se fragmentaran y entraran en una fase de disgregación.

Los Estados pasaron a ser protagonistas fundamentales en la resolución de la crisis. Presionados por la situación, en los países industrializados, adoptaron una serie de medidas tendientes a proteger sus economías, tales como la elevación general de tarifas aduaneras, la aplicación de controles de cambio y de restricciones monetarias y crediticias, el establecimiento de cuotas de importación y el otorgamiento de subsidios para alentar sus exportaciones.

Estas medidas pronto se revelaron insuficientes. La evolución de la situación imponía políticas aun más activas; requería que el Estado adoptara una postura plenamente intervencionista, tanto en lo económico como en lo social. El *New Deal*, aplicado por el presidente demócrata norteamericano Franklin Delano Roosevelt desde 1933, constituye un ejemplo y un antecedente de la forma en que los Estados fueron interviniendo en una cantidad creciente de ámbitos, haciéndose cargo, por ejemplo, del diseño de políticas de reactivación destinadas a acabar con el problema de la desocupación y con la tensión social consecuente. Además, la responsabilidad del Estado se extendió a la reglamentación de los precios de los productos y a la fijación de cuotas de producción, de los salarios y de la duración de la jornada laboral. En síntesis, la crisis implicó la creación de un conjunto de instituciones que permitieron asegurar una progresión continua de los salarios y de la capacidad de compra de los trabajadores. Los instrumentos utilizados para lograrlo fueron la generalización de la negociación colectiva, la expansión del crédito y el desarrollo de organismos de protección social. El que posteriormente fuera denominado Estado benefactor, de marcado carácter redistribucionista, comenzó a diseñarse en estos años, contribuyendo fundamentalmente a crear una demanda solvente que garantizara la rentabilidad de las inversiones.

Los años 30 pueden caracterizarse, por lo tanto, como años de transición desde el capitalismo liberal hacia un capitalismo caracterizado por una intervención creciente del Estado en la economía y la sociedad. Estas tendencias cobrarán mayor fuerza o se profundizarán después de la Segunda Guerra Mundial, pero los años 30 constituyen un antecedente.

La transformación del Estado en árbitro y organizador de la economía y su creciente intervención en lo social generó importantes polémicas. El liberalismo conservaba adeptos que planteaban el retorno a la libre competencia, pero la mayoría de los economistas se inclinaba por la necesidad de adaptar el capitalismo a la nueva coyuntura internacional. Entre ellos, se destacó el inglés

John Maynard Keynes, cuya obra *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*, publicada en 1936, tendría una influencia decisiva en la historia mundial, durante casi cuatro décadas⁸.

Keynes trató de demostrar la posibilidad de acabar con las crisis cíclicas del capitalismo y con la desocupación crónica que sufrían las economías centrales. Para ello, el Estado debería ejercer una acción decisiva sobre el desenvolvimiento del proceso económico. Sólo a través de su intervención, sería posible salir de la crisis y alcanzar la reactivación deseada. El desarrollo de un plan de inversiones masivas en obras públicas constituía una de las acciones centrales que debía llevar a cabo. Esto generaría inmediatamente un aumento del nivel de empleo e iniciaría el proceso de reactivación. Los salarios abonados a los trabajadores serían gastados por éstos en el mercado local, estimulando la demanda de bienes de consumo. Ésta a su vez estimularía la demanda de bienes intermedios y por último la demanda de bienes de capital, logrando de este modo la recuperación de la economía en su conjunto. El Estado además facilitaría la acción de aquellas industrias más dinámicas a través del otorgamiento de créditos accesibles⁹.

La crisis de 1929 y sus consecuencias económicas y sociales exigieron por lo tanto una revisión del pensamiento económico liberal y con ello el abandono de uno de sus principales postulados: la no intervención del Estado en la actividad económica. El pasaje del *laissez-faire* al *intervencionismo estatal* no fue, sin embargo, su única consecuencia. La crisis estalló en un momento crucial de la historia contemporánea en la que se enfrentaban distintas concepciones ideológico-políticas. ¿*Dictadura o democracia?*, tales los términos de otro debate esencial que tuvo lugar en los años 30, afectando profundamente la evolución interior de los Estados, las relaciones internacionales y los principios mismos de la civilización occidental.

El cuestionamiento a los regímenes liberales y democráticos se había iniciado antes, durante la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, a partir de la Revolución Rusa de 1917. Ante el aumento de la organización y de las luchas obreras,

8 Las ideas de Keynes vuelven a ser revalorizadas, después de que la aplicación de políticas neoliberales, durante las últimas décadas del siglo XX, dejaron un tendal de desocupados, fragmentaron las sociedades y sometieron a una crisis casi terminal a muchos Estados nacionales.

9 Para ampliar la información sobre la teoría keynesiana, véase John M. Keynes, *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*, México, Fondo de Cultura Económica, 1997; también pueden consultarse: Ariel Filadoro, “Economía, política, ideología e historia. Breve reseña crítica de la historia del pensamiento económico”, en Elena V. Marcaida (coord.), *op. cit.*

que estimularon en el mundo entero la revolución soviética y la construcción del primer Estado socialista, las clases dominantes de distintos países capitalistas comenzaron a dudar de las bondades de los regímenes políticos liberales. En algunos países, la solución autoritaria apareció como el instrumento más adecuado para contener las luchas sociales y detener la temida oleada revolucionaria. El fascismo italiano, liderado por Benito Mussolini e instalado en Italia desde 1922, es el ejemplo más clásico de este tipo de respuestas.

Durante los años 30, el autoritarismo recibió un nuevo impulso. Las sociedades se enfrentaban a grandes y difíciles desafíos y, para muchos, las instituciones políticas del liberalismo (partidos políticos, parlamento) no eran las herramientas más idóneas para la negociación política y la toma rápida de decisiones. En su lugar, promovían, tomando el modelo italiano, regímenes corporativistas, en los que las corporaciones (organizaciones representativas de intereses sectoriales, como los sindicatos, las asociaciones empresariales o las Fuerzas Armadas), y no los partidos políticos, fueran las encargadas de canalizar las demandas sociales.

Estas soluciones nacionalistas y corporativistas, fuertemente autoritarias, lograron imponerse en muchos países del mundo. Es el caso del Japón y de Portugal; de Alemania, donde el nazismo llega al poder, o de España, donde los sectores más conservadores y tradicionalistas ahogaron en sangre a la República Española para establecer una dictadura —el franquismo— que se perpetuaría en el poder hasta mediados de la década de 1970.

Hay que resaltar que estos movimientos autoritarios y nacionalistas, si bien nacieron antes de la crisis del 29, se fortalecen y crecen como consecuencia de esa misma crisis. Al respecto, resultan impactantes las afirmaciones del historiador Eric Hobsbawm quien, en su obra sobre la historia del siglo XX, sostiene que sin la crisis no hubiera existido Hitler y que, sin ella, tal vez tampoco habría existido la Segunda Guerra Mundial¹⁰.

A favor de tales afirmaciones, es posible observar que, durante los años 30, las relaciones internacionales sufrieron después de la crisis, un proceso de reacomodamiento y reorganización. Los países centrales adoptaron una postura nacionalista y se replegaron hacia el interior de sus fronteras, salvaguardando sus propios intereses. El consiguiente desentendimiento de los problemas internacionales y el abandono generalizado de las reglas de juego hasta entonces vigentes inauguraron un nuevo período de hostilidad entre las grandes potencias que desembocaría en 1939 en la Segunda Guerra Mundial.

10 Eric Hobsbawm, *op. cit.*

Bibliografía

- Adams, Willi Paul, *Los Estados Unidos de América*, México, Siglo XXI, 1998.
- Aldcroft, Derek, *Historia económica mundial del siglo XX*, Barcelona, Crítica, 1985.
- Baines, Dudley, “Los Estados Unidos entre las dos guerras, 1919-1941”, en Adams, Willi Paul, *Los Estados Unidos de América*, México, Siglo XXI, 1998.
- Barán, Paul y Sweezy, Paul, *El capital monopolista*, México, Siglo XXI, 1988.
- Cantón, Darío, Moreno, José Luis y Círia, Alberto, *La democracia constitucional y su crisis*, Buenos Aires, Paidós, 1980.
- Coriat, Benjamín, *El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa*, México, Siglo XXI, 1994.
- De Sagastizábal, Leandro, Marcaida, Elena, Scaltritti, Mabel y De Luque, Susana, *Argentina 1880-1943. Sociedad y Estado. Aproximaciones a su estudio*, Buenos Aires, C.E.L., 1995.
- Ferrer, Aldo, *La economía argentina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1963.
- Galbraith, John Kenneth, *El crac del 29*, Madrid, Ariel, 1979.
- Hobsbawm, Eric, *Historia del siglo XX*, Buenos Aires, Crítica, 1998.
- Marcaida, Elena (coord.), *Estudios de Historia Económica y Social. De la Revolución Industrial a la globalización neoliberal*, Buenos Aires, Biblos, 2002.

Una década de transición: el Estado y la sociedad argentinos durante los años 30

Susana de Luque y Mabel Scaltritti

1. Introducción

Los años que transcurrieron entre 1930 y 1943 constituyen un punto de inflexión en la historia argentina. El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 dio fin a un período histórico y marcó el comienzo de otro, en el que se produjo la restauración del régimen oligárquico y donde una extendida corrupción institucional corroyó desde temprano las bases del sistema político.

La larga década del 30 fue también un tiempo de transición hacia un creciente intervencionismo estatal y hacia el reemplazo del modelo agroexportador por otro régimen de acumulación basado en la industrialización sustitutiva de importaciones. Consecuentemente, se constituyeron nuevas fracciones burguesas y se expandió la clase obrera industrial. Cambiaron además las lógicas de acción colectiva y, en el marco del avance de las ideas nacionalistas, se deterioraron las representaciones del país que, edificadas por los sectores dominantes, habían sido por lo general aceptadas por las clases medias. La vulnerabilidad del país y el carácter dependiente, incompleto y escasamente integrado de su desarrollo capitalista se hicieron evidentes, poniendo en crisis la imagen de una Argentina granero del mundo, próspera, abierta y en marcha hacia un progreso indefinido.

Viejos actores, como el Ejército y la Iglesia, se fortalecieron. Pero, principalmente, lo que se produjo en estos años fue un cambio de relación entre la sociedad y el Estado. El vínculo que se fue configurando tuvo características radicalmente diferentes a las del período previo, observándose una paulatina “autonomización” del aparato del Estado que tendió a alejarse de los intereses más inmediatos de los sectores dominantes.

Por supuesto que cambios de tal magnitud no se dieron de manera abrupta, sino que fueron produciéndose en el transcurso de la década. Los años treinta fueron, por lo tanto, tiempos de transición, donde lo viejo convivió con lo nuevo, y en los que diversas crisis afloraron en múltiples planos.

¿Por qué se produjeron estas transformaciones? ¿Qué es lo que explica el reemplazo de un modelo de acumulación que permitió –con sus límites y desigual-

dades— niveles importantes de crecimiento y desarrollo? ¿Por qué los sectores dominantes apoyaron el retorno a un régimen restrictivo y aceptaron el cambio de orientaciones del Estado? ¿Cómo el Ejército se transformó en un actor de relevancia, destinado a influir decisiva y perdurablemente en la vida política de Argentina?

Estos y muchos otros interrogantes guían la indagación sobre una época que un periodista de ese tiempo calificó con el perdurable término de “década infame”. Las respuestas surgen del análisis e interpretación de una extensa bibliografía. Muchas cuestiones permanecen aún abiertas, pues los debates continúan enriqueciendo las perspectivas de abordaje de un pasado muy complejo y problemático. Un pasado que, aunque relativamente lejano, brinda claves para acercarnos a la comprensión del presente y estimula discusiones sobre temas que, como el de las relaciones entre el Estado y el mercado, hoy —en otro contexto— han recuperado notable vigencia.

2. Los cambios en el régimen político: de la dictadura de Uriburu a la restauración oligárquica

La crisis que estalló en Wall Street en 1929 repercutió de inmediato en Argentina, provocando el estancamiento de la economía, el aumento de la desocupación y una crisis muy grave en las finanzas del Estado, que entró en virtual cesación de pagos.

Las dificultades económico-sociales no tardaron en proyectarse a la esfera de la política. Los grupos dominantes, al acecho desde su derrota electoral en 1928, aprovecharon el malestar social existente para aliarse con sectores militares y dar un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Para los protagonistas del golpe, el viejo caudillo radical no sólo carecía de la destreza necesaria para enfrentar la crisis, sino que tampoco era un aliado seguro para defender sus intereses en la coyuntura. Sobre todo, teniendo en cuenta que el yrigoyenismo contaba con un apoyo popular mayor que durante su primer gobierno, luego de la ruptura con los “antipersonalistas” y del distanciamiento con Alvear y con el grupo de representantes de la “oligarquía” que lo rodeaba.¹

1 El derrocamiento de Yrigoyen dio lugar a diversas interpretaciones. Mientras para ciertos investigadores el golpe fue la respuesta de la vieja oligarquía para retomar el control político en una coyuntura que auguraba grandes dificultades económicas y sociales, para otros hay razones que van desde lo conspirativo (la injerencia del capital extranjero ligado a la producción petrolera) hasta lo político (el malestar de las Fuerzas Armadas con el

El golpe de Estado de 1930 puso fin a un período de “hegemonía compartida”² y abrió el camino hacia otra etapa en que el manejo del gobierno y del Estado quedó en manos de los grupos dominantes tradicionales. Como en los años de la república oligárquica, en la década de 1930, la comunión entre el poder económico y el poder político quedó asegurada.

Para ello, la acción del Ejército fue decisiva, no sólo por su participación en el golpe, sino también porque sostuvo, con su presencia guardiana, a regímenes y gobiernos carentes de legalidad y legitimidad. La intervención del Ejército no quedó limitada, sin embargo, a tal función coercitiva. Con el golpe de Estado de 1930, el Ejército irrumpió en el escenario político y se constituyó en un actor de relevancia. De allí en más, y durante cinco décadas, sus incursiones, ya sea derrocando gobiernos constitucionales o ejerciendo su poder de veto, se transformarían en una constante de la política argentina.

En lo inmediato, el golpe cívico-militar de 1930 abrió el camino a dos opciones políticas: el establecimiento de un régimen corporativo o la restauración democrática. Ninguna de estas opciones fue la que finalmente prosperó. La variante corporativa pronto naufragó y la restauración democrática no corrió mejor suerte. Aunque esta última contaba con importantes apoyos dentro de los grupos golpistas, demostró rápidamente su inviabilidad. La respuesta fue el retorno a las prácticas e instituciones del régimen oligárquico.

2.1 La opción corporativa

El golpe de 1930 fue encabezado por José Félix Uriburu, un general retirado, admirador de Benito Mussolini, que actuó secundado por un pequeño grupo de oficiales del Ejército y por civiles pertenecientes a grupos de la derecha nacionalista que se habían ido conformando en los años precedentes. El golpe también contó con la aprobación de los sectores dominantes y

gobierno radical, ante un horizonte de crecientes conflictos sociales). También hay puntos de vista que mencionan motivos más anecdóticos, como la senilidad de Yrigoyen, su manejo personalista del poder y la dinámica lenta de la administración gubernamental. Véanse, respectivamente, David Rock, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, Buenos Aires, Amorrortu, 1977; Rodolfo Puiggrós, *El yrigoyenismo*, Buenos Aires, Corregidor, 1974; Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, tomo I, Buenos Aires, Emecé, 1981; *Diario Crítica*, ediciones contemporáneas al golpe de Estado.

2 Alfredo Pucciarelli, “Conservadores, radicales e yrigoyenistas, un modelo (hipotético) de hegemonía compartida (1916-1930)”, en Waldo Ansaldi y otros, *Argentina en la paz de dos guerras, 1914-1945*, Buenos Aires, Biblos, 1993.

de una mayoría dentro del Ejército que respondía al liderazgo del general Agustín P. Justo.

El golpe abrió el camino para la instauración de una dictadura que, liderada por el mismo general Uriburu, rápidamente cesanteó a un buen número de empleados públicos, implantó el Estado de sitio y la ley marcial, disolvió el Congreso, intervino las provincias y las universidades y persiguió a militantes radicales y a sindicalistas comunistas y anarquistas.

Aunque deportaciones, encarcelamientos, torturas y fusilamientos estuvieron a la orden del día³, la misión que Uriburu se proponía cumplir no se agotaba en esta política represiva contra dirigentes y militantes populares. En sintonía con la experiencia del fascismo italiano y con las ideas de pensadores como Leopoldo Lugones, Carlos Ibarguren, José Antonio Primo de Rivera y Charles Maurras⁴, el nuevo gobierno se proponía un cambio institucional profundo que permitiera la implantación de un régimen corporativista. Pocos días después del golpe, Uriburu afirmaba: “Si el Gobierno surgido de la Revolución se limitara a sustituir hombres en el poder, es seguro que recogería el aplauso de los partidos beneficiados, pero la Revolución no se ha hecho para cambiar personas. Es necesario que la Constitución sea reformada, y también el régimen electoral, de modo que las fuerzas vivas de la Nación y los intereses sociales graviten de una manera efectiva en el Gobierno. Cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente agentes de los comités políticos, y ocupen las bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales (...), la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra”⁵.

Uriburu y sus acólitos soñaban con la instauración de una sociedad ordenada y jerárquica, donde la cruz y la espada recobraran los espacios perdidos durante el auge del liberalismo⁶ y los partidos políticos fueran reemplazados por otro sistema de representación, basado en las corporaciones. En línea con sus ideas

3 El gobierno de Uriburu creó la Sección Especial de la Policía Federal que torturó a radicales, anarquistas y otros presos políticos. De estos años, data el comienzo de la utilización de la “picana eléctrica” en Argentina.

4 Leopoldo Lugones y Carlos Ibarguren constituían expresiones del nacionalismo de derecha vernáculo. José Antonio Primo de Rivera fue ideólogo del franquismo y Charles Maurras fue un destacado exponente de la derecha francesa, monárquico y tradicionalista.

5 Manifiesto del general José Félix Uriburu, 1º de octubre de 1930, en José F. Uriburu, *La palabra del general Uriburu*, Buenos Aires, Roldán, 1933, p. 24.

6 Estas proposiciones se enlazaron con el surgimiento de una nueva corriente historiográfica, la del revisionismo histórico, que, al tiempo que denunciaba la larga dependencia económica de Argentina respecto de Inglaterra, reivindicaba el pasado colonial y el rosismo, invirtiendo la valoración de héroes y réprobos que había realizado la historiografía liberal.

conservadoras y restrictivas, propusieron una reforma constitucional que derogara la Ley Sáenz Peña en favor de un sistema de voto calificado.

Pero el proyecto de Uriburu no contaba con el apoyo de la mayoría de los oficiales del Ejército ni de los sectores dominantes que habían prosperado bajo el esquema agroexportador. Aunque ambos grupos habían prestado su consentimiento al golpe de Estado, ninguno de ellos se comprometió con la ideología que lo animaba ni con el proyecto totalitario que contenía. Aglutinados en torno al general Justo, muy rápidamente, luego del golpe de Estado, comenzaron a presionar en favor de un retorno a la institucionalidad democrática.

2.2 De la opción democrática a la restauración oligárquica

Fue en el marco de estas disensiones entre los sectores golpistas que, a principios de 1931, el gobierno de Uriburu llamó a elecciones para la renovación de gobernadores en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

La realidad demostró ser más compleja de lo que creían los dos contendientes. En abril de 1931, el candidato radical triunfó en las elecciones bonaerenses. El resultado, inesperado, derribó el mito de la popularidad del golpe y enfrentó al gobierno y a las restantes fuerzas políticas con nuevos y complejos desafíos: precipitó una crisis ministerial, implicó la muerte política de Uriburu y de su proyecto corporativista y obligó a las fuerzas coaligadas en torno al general Justo a repensar sus estrategias.

Los resultados de abril pusieron claramente al descubierto que, en elecciones libres, era imposible vencer al radicalismo. Es por ello que uriburistas y justistas coincidieron en volver a prácticas de gran arraigo entre el sector social al que representaban. En el transcurso de los meses subsiguientes, fueron anulados los resultados de los comicios de la provincia de Buenos Aires, suspendidas las elecciones en Santa Fe y Córdoba y vetada la candidatura de Marcelo Torcuato de Alvear para las elecciones presidenciales que se habían convocado para 1932.

Alvear era para entonces el candidato de un radicalismo que estaba intentando reunificarse y reorganizarse, luego de la represión propinada por los golpistas y la crisis partidaria consiguiente. No sin dificultades, Alvear estaba logrando consolidarse como líder de la UCR. Había justificado el golpe de 1930, pero, al constatar el carácter represivo y antipopular del gobierno de Uriburu y considerando inaceptables las condiciones que le proponía Justo para una alianza (eliminar del partido radical a los yrigoyenistas), se reconcilió con Yrigoyen, preso en la isla Martín García. El veto gubernamental a su candidatura presidencial, justificado en que no se habían cumplido los plazos constitucionales

para que eventualmente volviera a la primera magistratura, originó el abstencionismo electoral de la UCR.

En estas condiciones, el general Justo, líder y candidato presidencial de la Concordancia, una alianza política donde confluyeron grupos conservadores provinciales, algunos radicales antipersonalistas y el Partido Socialista Independiente⁷, se impuso en las elecciones presidenciales de 1932, sin tener que hacer un uso escandaloso del fraude. Muchos de los votos radicales se volcaron a la Alianza Civil, una coalición formada por el Partido Socialista y el Partido Demócrata-Progresista, que realizó una muy buena elección.

El Ejército avaló los resultados surgidos de la aplicación del fraude y de la abstención del radicalismo. Suplía con su presencia coercitiva la falta de consenso que afectaba a los sectores dominantes, quienes, de este modo, pudieron imponer sus candidatos y fortalecer su predominio.

De ahí en más y hasta 1943, la Concordancia rigió los destinos del país. El proyecto fascista cedió paso a otro, republicano en las formas pero oligárquico en la esencia. En el pasado se había acumulado suficiente experiencia para excluir a las mayorías de las decisiones políticas y reservar la dirección del Estado a los sectores más poderosos de la sociedad. Como antes de la Ley Sáenz Peña, los métodos utilizados para la manipulación de las elecciones fueron la selección de los candidatos, el control de los preparativos de los comicios y del acto electoral, la falsificación de los resultados de la votación, todo ello combinado con viejas y nuevas formas de clientelismo patrimonialista propias del populismo conservador y con el liderazgo del presidente, tanto en el seno de la coalición política como en las Fuerzas Armadas.

La exclusión política de las mayorías se justificó ideológicamente en una concepción del fraude que en los años 30 adquirió estatura de “patriótico”. Para sus mentores, hacer fraude era patriótico porque el pueblo vivía en una suerte de minoría de edad que no le permitía discernir. El pueblo, en su búsqueda permanente de tutela, era fácilmente arrastrado por demagogos inescrupulosos, como Hipólito Yrigoyen. Para Leopoldo Lugones, un intelectual que se inició en el anarquismo y que viró en los años 20 a las posiciones de la derecha nacionalista, había llegado “la hora de la espada”: en manos del Ejército estaba combatir la debilidad y la pequeñez de las apetencias populares, correspondiéndole decidir sobre los contenidos a ofrecer y las acciones a impulsar. Rodolfo Moreno, defensor del “fraude patriótico”, argumentaba a favor del voto calificado como expresión de los distintos grados de madurez cívica existentes en la sociedad.

7 El ala derecha del socialismo se escindió del Partido Socialista en 1927 para conformar el Partido Socialista Independiente (PSI).

Manuel Fresco, líder conservador y gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940, prefería el voto cantado del que serían incapaces las masas educadas en el liberalismo y la demagogia.

Estas concepciones, si bien no llegaron a concretarse legalmente, fueron impregnando las prácticas políticas, institucionalizándose. Sólo en apariencia el andamiaje liberal quedó preservado. En la realidad, por medio del fraude se marginaba de los procesos políticos fundamentales a importantes sectores de la sociedad. La peculiar combinación de liberalismo económico y conservadurismo político, ya practicada por el régimen del 80, y sólo interrumpida por los años de gobierno radical, volvía a instalarse.

La práctica del fraude permitió mantener una “legalidad democrática”, pero el ejercicio de la política se transformó en el modo de garantizar la supremacía y los privilegios de un reducido grupo de la sociedad frente a una mayoría excluida del acontecer político y de los beneficios de la recuperación económica, que comenzó a producirse hacia mediados de la década. Los sectores dominantes fueron perdiendo prestigio y poder social. El clima político se fue enrareciendo en medio de una agudización del control social del Estado. El escepticismo y la desconfianza en la política y en sus instituciones fueron impregnando la sociedad y socavando la legitimidad del sistema político vigente.

3. Repercusiones económicas de la crisis de 1929 y del nuevo ordenamiento internacional de los años 30

La crisis de 1929 no sólo alentó cambios en el régimen político, sino que también produjo transformaciones en otros planos de la realidad argentina.

La crisis se expandió por el mundo sembrando quiebras financieras, recesión e inusitados niveles de desocupación⁸. La respuesta de los países industriales fue la adopción de políticas autárquicas que rompieron con la división internacional del trabajo. En el comercio internacional, bajaron notoriamente el nivel de los precios y los volúmenes de productos intercambiados. Nuevas prácticas comerciales, centradas en el bilateralismo y en la formación de bloques económicos, reemplazaron a las hasta entonces fluidas y multilaterales relaciones económicas internacionales.

En un contexto absolutamente desfavorable, los factores fundamentales que

8 Hacia 1932-1933 en Estados Unidos había 12 millones de desocupados, lo cual representaba el 30 por ciento de su población. Mientras tanto, en Alemania, el desempleo afectaba a 6 millones de personas, el 45 por ciento de su población.

desde mediados del siglo XIX habían impulsado el desarrollo económico argentino —expansión de la demanda internacional de productos agropecuarios, flujo sostenido y abundante de capitales y mano de obra extranjeros e incorporación de nuevas tierras fértiles a la producción— dejaron de tener un rol dinámico en el proceso de crecimiento⁹.

Desde 1930, efectivamente, se frenó el flujo de mano de obra extranjera y alcanzó su límite la expansión de la frontera agrícola en las tierras pampeanas. En cuanto a la demanda externa, desde la Primera Guerra Mundial se observaba un lento crecimiento del comercio mundial de productos agropecuarios, que se agravó con la crisis de 1929 como consecuencia de las políticas de sustitución de importaciones primarias que impulsaron los países europeos.

La notable reducción del volumen y de los precios de las exportaciones agropecuarias así como de las divisas disponibles limitó la capacidad de compra de productos industriales. Al mismo tiempo, el empeoramiento de los términos de intercambio para los productos primarios respecto de los industriales en el mercado internacional resintió aun más las posibilidades de Argentina para importar.

Los cambios que simultáneamente se producían en la corriente internacional de capitales agravaron la situación. Durante los primeros años de la década, el flujo mundial de capitales invirtió su dirección. La corriente de capitales dejó de fluir desde los países centrales hacia la periferia para comenzar a recorrer el camino inverso como consecuencia del cese de inversiones extranjeras, la repatriación de algunas de éstas y el pago por parte de Argentina y de otros países productores de bienes primarios de los servicios y amortizaciones de las deudas contraídas en el período anterior.

Según el economista Aldo Ferrer, en Argentina, “el poder de compra de las exportaciones se redujo de un promedio anual de 2.000 millones de dólares en 1925-1929 a 1.200 millones en 1930-34. Esto es una contracción del 40%. Por otro lado, también disminuyó entre ambos quinquenios la entrada neta de capitales del exterior y, además, las utilidades e intereses sobre el capital extran-

9 Ya durante la década del 20 distintos indicadores (población, extensión de la red ferroviaria y del área sembrada, producción, etc.) señalaban una disminución del ritmo de crecimiento de la economía. Esta situación generó importantes polémicas respecto de la percepción que de ella tuvieron las clases dominantes, así como sobre las causas de su resistencia a abandonar el modelo agroexportador. Véanse Torcuato Di Tella y Miguel Zymelman, *Las etapas del desarrollo económico argentino*, Buenos Aires, Eudeba, 1967; Juan José Llach (comp.), *La Argentina que no fue*, tomo I: *Las fragilidades de la Argentina agroexportadora*, Buenos Aires, IDES, 1985, y Carlos Díaz Alejandro, *Ensayos sobre la historia económica argentina*, Buenos Aires, Amorrortu, 1970.

jero invertido en el país superaron los altos niveles del quinquenio anterior a la crisis. Como consecuencia del efecto concurrente de estos factores, en el quinquenio 1930-34, la capacidad de importar del país fue sólo del 46% de lo que había sido en 1925-29¹⁰.

Para trazar un cuadro más completo de las tensiones y dificultades que la economía argentina sufrió en esta época, es necesario incorporar al análisis el progresivo desplazamiento del centro de gravedad de la economía internacional desde Inglaterra hacia Estados Unidos.

Este cambio de liderazgo comenzó a manifestarse antes de la Primera Guerra Mundial, y tuvo enormes repercusiones en el funcionamiento de la economía internacional, modificando en profundidad las relaciones existentes entre centro y periferia. A diferencia de la economía británica, que se complementaba con la de los países periféricos, la norteamericana era una economía competitiva para los países agroexportadores: Estados Unidos no sólo era el líder mundial en la producción industrial, figuraba también como uno de los más importantes productores y exportadores de materias primas y alimentos.

En el caso concreto de Argentina, hacia 1930, nuestra economía dependía mucho más de Inglaterra que de Estados Unidos. Inglaterra constituía el principal mercado para la colocación de los productos agropecuarios y, además, las cuantiosas inversiones inglesas en Argentina habían cimentado fuertes vínculos entre los agentes económicos de ambas naciones. Estados Unidos era, por el contrario, un poderoso competidor de Argentina en el mercado internacional de productos agropecuarios.

No obstante, desde principios del siglo XX, la presencia norteamericana en la economía argentina fue tornándose cada vez más notoria: los capitales estadounidenses se instalaron en un área clave, los frigoríficos, y, en unos pocos años, desplazaron a los ingleses de su posición de liderazgo. En el transcurso de los años 20, las inversiones directas norteamericanas en otras ramas industriales crecieron significativamente, provocando, por su poder financiero y agresividad comercial, fuertes recelos en la comunidad inglesa con intereses en Argentina.

Ingleses y norteamericanos competían además por nuestras divisas disponibles: mientras en el esquema tradicional de intercambio se importaban desde Inglaterra bienes terminados, las nuevas inversiones norteamericanas requerían para sus fábricas de armado final, equipos, partes, materias primas y patentes, que eran importadas, por lo general, en su país de origen.

En los años 30 la rivalidad anglo-norteamericana por nuestro mercado se profundizó, incorporando nuevos frentes de conflicto, fundamentalmente en torno

10 Aldo Ferrer, *La economía argentina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1963, p. 187.

a los combustibles y los medios de transporte. Estados Unidos, país al que Argentina compraba más de lo que podía ofrecerle a cambio, estaba interesado en la explotación del petróleo y en el desarrollo de la industria automotriz. Para Argentina, alentar la producción petrolera abría no sólo la perspectiva de percibir cuantiosas ganancias sino también la posibilidad de contar con un bien exportable que sirviera de valor de cambio para sus crecientes importaciones en Estados Unidos, equilibrando la balanza comercial entre los dos países. Sin embargo, si Argentina lograba sustituir el carbón inglés por petróleo local, no sólo acentuaría el desequilibrio comercial con Inglaterra, sino que también correría el riesgo de que esta última, como medio de presión, disminuyera su demanda tradicional de productos agropecuarios.

La rivalidad anglo-norteamericana por nuestro mercado, al articularse con los intereses de los grupos de poder locales, constituyó un importante factor de tensión y conflicto durante esta etapa.

4. El intervencionismo estatal como respuesta a la crisis

Otra consecuencia de las transformaciones que se producían en la economía internacional fue un cambio en los roles y orientaciones del Estado. Como sucedía en el resto de los países del mundo, el Estado liberal entró aquí en crisis y, muy a pesar de las convicciones de los grupos que habían asaltado el poder, inició un derrotero intervencionista, que se fue afianzando a medida que transcurría la década.

Los años treinta son en Argentina tiempos de transición desde el Estado liberal al Estado interventor. Si bien el Estado nunca había dejado de intervenir, como lo demuestran sus políticas para asegurar el despliegue del modelo agroexportador, desde los años treinta su intervención en la economía y en la sociedad llegó a niveles hasta entonces nunca practicados. Durante la presidencia del general José Félix Uriburu (1930-1932), pero mucho más con su sucesor el general Agustín P. Justo (1932-1938), el Estado fue ampliando sus ámbitos de actuación y su aparato institucional. Esta tendencia se fortaleció aun más durante la gestión del presidente Ramón S. Castillo (1940-1943), para llegar a su cenit ya bajo otro régimen, el peronista (1943-1955).

El gobierno del general Uriburu intentó equilibrar las finanzas y cumplir con el pago de las obligaciones externas a través de la disminución del gasto público y el aumento de los recursos del fisco. La reducción de las obras públicas, la rebaja de los salarios y planteles estatales, el incremento de la presión impositiva, la elevación general de las tarifas aduaneras y la creación de un sistema de control de cambios estuvieron orientadas al cumplimiento de ese doble objetivo.

Sin embargo, esta intervención del Estado en la economía no incluía disposiciones que compensaran la caída de la actividad interna provocada por la disminución de las exportaciones agropecuarias. Las medidas impulsadas respondían a una política recesiva, que tenía un fuerte matiz defensivo. Considerada excepcional por sus ejecutores, respondía a la convicción de nuestros grupos dirigentes acerca del carácter coyuntural de la crisis internacional y el pronto restablecimiento del antiguo esquema de producción e intercambio.

Como resultado de su aplicación, al retroceso sensible que ya se percibía en las actividades agrarias, se agregó una fuerte caída de la actividad industrial, el aumento del desempleo (en 1932 había entre 335.000 y 500.000 desocupados)¹¹, la emergencia, en las puertas de Buenos Aires y Rosario, de las primeras “villas miseria” y la multiplicación de las ollas populares.

Recién durante el mandato del general Justo, y seguramente como respuesta a esta crisis sin precedentes, comenzó a perfilarse un nuevo esquema de crecimiento económico. Para entender el contexto de su aplicación, así como sus alcances, es necesario incorporar al análisis un tratado comercial que Argentina selló con Inglaterra: el Pacto Roca-Runciman.

Dada la declinación acelerada de las exportaciones ganaderas hacia Gran Bretaña que se produce desde 1932 en virtud de la aplicación del Tratado de Ottawa¹², los estancieros pampeanos vieron peligrar su fuente de recursos más importantes. Resultado de sus presiones sobre el Estado argentino para que garantizara mercados externos y de las ejercidas por los ingleses para proteger a sus capitales de la avasallante competencia norteamericana, fue la firma, en mayo de 1933, del Pacto Roca-Runciman.

El acuerdo comercial despertó apasionadas polémicas. Tanto para los nacionalistas como para muchos argentinos de otras tendencias ideológicas, el pacto se transformó en el símbolo de la “entrega” del país al capital extranjero. Garantizaba para los dos sectores más ligados al comercio exterior (invernadores y frigoríficos)¹³ una cuota estable de exportación y, al mismo tiempo, incluía una

11 Hugo del Campo, *Sindicalismo y peronismo*, Buenos Aires, CLACSO, 1983.

12 En 1932, en el marco de los nuevos rasgos que iban adquiriendo las relaciones económicas internacionales, Inglaterra firmó con sus dominios (Commonwealth) el Tratado de Ottawa. Por el mismo, Inglaterra otorgaba privilegios a las carnes australianas y canadienses y se comprometía a no reducir las tarifas aduaneras que regían para carnes de otra procedencia.

13 La ganadería bovina no era una actividad unitaria. Había empresarios que se dedicaban a la cría del ganado (criadores) y otros que se ocupaban del engorde final y de abastecer a los sectores que se encargaban de la faena y/o la exportación (invernadores).

Si bien el engorde final fue importante en la etapa del saladero y también posteriormente, por el aumento del consumo interno, la exportación de ganado en pie y el frigorífico, es

gran cantidad de cláusulas favorables a los ingleses, como la reducción de derechos aduaneros sobre los productos que Inglaterra exportaba hacia Argentina; la exención de derechos sobre el carbón y otras mercaderías inglesas; el compromiso de no reducir las tarifas ferroviarias y de destinar para compras en Gran Bretaña la totalidad de las divisas provenientes de las compras inglesas en Argentina. Nuestro país se obligaba además a dispensar un tratamiento benévolo a las empresas británicas de servicios públicos aquí establecidas, así como la protección de sus intereses¹⁴.

Sólo después de satisfacer los intereses de los grupos más poderosos de la economía (invernadores y grandes capitalistas ingleses), se abrió la posibilidad para intentar un cambio de orientación en la política económica. Desde diciembre de 1933, con Federico Pinedo y Luis Duhau, en los ministerios de Hacienda y Agricultura respectivamente, se puso en marcha un Plan de Reestructuración Económica, cuya característica más sobresaliente fue la profundización del intervencionismo estatal en el campo económico. No sólo se mantuvieron altas

en la década de 1910 y, mucho más en la siguiente, cuando adquiere enorme relevancia. El desplazamiento que se produce por esos años, en los frigoríficos, del congelado (*freezer*) por la técnica del enfriado (*chilled*), plantea a los ganaderos requerimientos estrictos: el abastecimiento regular de reses con un peso óptimo que debían ser sacrificadas, procesadas y vendidas en el mercado europeo en un plazo no mayor de cuarenta días.

La invernada pasó entonces a constituirse en una pieza vital de todo el proceso de producción-comercialización ya que permitía evitar variaciones estacionales asegurando un abastecimiento regular de animales en las condiciones demandadas por el frigorífico. Dos categorías sociales con intereses particulares dentro de la clase ganadera terminan por definirse: los invernadores, dueños de campos de pastoreo sembrados con forrajes, muy identificados con el frigorífico y con el mercado exterior, y los criadores, vinculados con el mercado interno y dependientes de los invernadores y del frigorífico. Los primeros pertenecían a un tipo social cuya actividad era en parte productiva y en parte especulativa, mientras que la de los segundos era netamente productiva, en la medida en que no sólo dependía de ella la reproducción y cría, sino también el mejoramiento de los planteles y las condiciones tecnológicas. Ante las cíclicas variaciones del mercado —disminución en los precios o en la demanda— los invernadores reducían las compras, perjudicándose mucho menos que el criador, que debía planificar a más largo plazo, y con estas variaciones veía, muchas veces, destruidas sus expectativas de ganancias.

El frigorífico y en especial la producción del enfriado introdujeron, por lo tanto, una cuña en la clase ganadera que tuvo en distintos momentos derivaciones no sólo económicas sino también políticas. Véase Darío Cantón, José L. Moreno y Alberto Ciria, “Argentina. La democracia constitucional y su crisis”, en Tulio Halperín Donghi (dir.), *Historia Argentina*, vol. VI, Buenos Aires, Paidós, 1980.

- 14 Véase Alberto Ciria, “Crisis económica y restauración política, 1930-1943”, en Darío Cantón, José L. Moreno y Alberto Ciria, *op.cit.*, p. 125.

las tarifas aduaneras. El nuevo plan observaba, entre otras cuestiones, una redefinición del sistema de control de cambios, la creación de juntas reguladoras de la producción, el desarrollo de un vasto plan de obras públicas, la creación del Banco Central y una reorganización del sistema impositivo que permitiera ampliar la capacidad de obtención de recursos por parte del Estado. La reformulación del sistema de control de cambios permitió la regulación de las importaciones a la vez que la captación de una importante masa de recursos. Para llevarlo adelante, la autoridad económica decidió el desdoblamiento del mercado cambiario en libre y en oficial. El Estado compraba las divisas a los exportadores de bienes tradicionales y luego las revendía a los importadores de mercaderías favorecidas. Estas operaciones se llevaban a cabo en el mercado oficial y dejaban al fisco importantes ganancias, producto de la diferencia entre los valores de compra y venta de divisas. Existía, además, un mercado libre de cambios que operaba con divisas de exportaciones no tradicionales y otras transferencias de capital, en el cual el Estado podía intervenir comprando o vendiendo divisas para regular la tasa cambiaria.

El “margen de cambios” resultante de estas políticas constituyó una importante fuente de recursos que el Estado utilizó para extender su intervencionismo hacia otras áreas. Por ejemplo, fue muy importante para moderar los efectos negativos de la crisis sobre los productores primarios y para reabsorber el desempleo.

El descenso de los precios y de la demanda internacional de productos agropecuarios tuvo un fuerte impacto sobre los precios internos, manifestándose una considerable tendencia a la baja. Presionado por los grandes productores primarios y a efectos de defender los precios en el mercado local, el Estado intervino en el ámbito productivo a través de la creación de numerosas juntas reguladoras, como la Junta Nacional de Carnes, la Junta Reguladora de Granos, la Junta Nacional de la Yerba Mate, la de la Industria Lechera, la del Algodón o la Junta Nacional de las Patatas.

Estas juntas tenían como objetivo regular la producción primaria, reglamentando y controlando cada rama específica de este sector productivo. Esencialmente, la función de las juntas consistía en el establecimiento de cupos de producción y precios sostén (precios mínimos). De este modo, el Estado limitaba la oferta de bienes (fijación de cupos), a la vez que compraba la producción a un precio suficientemente alto como para que el productor cubriera sus costos y pudiera continuar con su actividad (precio sostén). Incluso, hubo casos en que se destruyó la producción excedentaria y se establecieron impuestos que gravaban cada nueva planta cultivada. De esta manera, el Estado, controlando, regulando y premiando a través de subsidios a los productores primarios, impidió que una excesiva oferta o una demanda con tendencia a la baja hiciera descender aun más los precios.

Los recursos obtenidos por el “margen de cambios” sirvieron también para paliar el problema de la desocupación. Al mejor estilo keynesiano, el Estado argentino implementó un plan de obras públicas orientado sobre todo a la extensión de la red vial. Como consecuencia del mismo, se construyeron miles de kilómetros de caminos que corrían paralelos a las vías del ferrocarril, consolidando la vinculación de todo el país con Buenos Aires y la región pampeana, desalentando las comunicaciones interregionales así como la creación de nuevos circuitos económicos. Desde otro punto de vista, la política vial constituyó un nuevo campo de enfrentamiento entre Estados Unidos, promotor del desarrollo del automotor y el petróleo, e Inglaterra, vinculada a la tradicional dupla carbón/ferrocarril.

En sintonía con las nuevas tendencias mundiales que alentaban un rol cada vez más activo del Estado y la necesidad de intervención en los mercados, el nuevo plan económico también contempló la creación del Banco Central. El nuevo organismo se encargó de regular el mercado financiero, de marcar el rumbo de las políticas financieras globales y de implementar políticas monetarias y crediticias, a través, por ejemplo, del establecimiento de encajes, la regulación de las tasas de interés y/o la aplicación de devaluaciones. Pero, si bien el Estado retuvo para sí una parte del capital y la capacidad de nombrar al presidente y al síndico del Banco Central, se reservó una parcial fiscalización de las políticas que se implementaban desde este organismo. Entre los accionistas del Banco Central había una gran cantidad de representantes de la banca extranjera que ejercían gran influencia sobre la política financiera nacional¹⁵.

A modo de síntesis, podemos afirmar que, mientras avanzaba la década, el Estado fue ampliando sus ámbitos de actuación y su aparato institucional. La intervención del Estado comenzó a manifestarse claramente en múltiples campos, como por ejemplo, en la limitación de las importaciones, la reasignación de recursos entre los distintos agentes económicos, la regulación de la producción primaria y del mercado de trabajo, el control y regulación de la emisión monetaria, de las finanzas y el crédito, en la apertura de mercados para las carnes así como en una mayor capacidad extractiva.

15 Al mismo tiempo, se creó el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias que, concebido como transitorio, perduró hasta 1946. Su función consistió en socorrer a la banca privada, en situación delicada por haber otorgado créditos que, en medio de la crisis, se habían vuelto incobrables. El Estado, a través de este instituto, se erigió en garante del equilibrio financiero, evitando la quiebra de los bancos en problemas y el colapso general del sistema.

4.1 Distintas interpretaciones sobre los objetivos y alcances del intervencionismo estatal

El plan económico elaborado por Pinedo-Duhau no ha merecido un juicio unánime entre los estudiosos del período. Mientras algunos autores subrayan la continuidad entre ese plan y el impulsado desde 1930, otros sostienen que las medidas anunciadas en diciembre de 1933 marcaron un punto de inflexión hacia la definición de una nueva política económica que se expresó orgánicamente hacia fines de la década y cuyo rasgo esencial fue el rol otorgado al crecimiento industrial.

Para quienes sostienen la idea de la continuidad, una versión que tuvo larga aceptación dentro de nuestra historiografía, el nuevo plan estaba dirigido a contrarrestar los efectos más negativos de la crisis –desequilibrio de la balanza comercial y de pagos, deuda externa, desocupación, caída de los ingresos de los productores primarios– preservando inalterable el esquema de “crecimiento hacia fuera”. Según estos autores, la élite política que controlaba el aparato estatal expresaba sin fisuras los intereses económicos de los terratenientes pampeanos ligados al modelo agroexportador. Fueron, entonces, la crisis internacional y los cambios en el comercio mundial las causas que obligaron a dichos actores a tomar medidas en muchos casos contradictorias con su ideología. Según esta versión, la industrialización que se desarrolló en este período surgió espontáneamente, al conjugarse el cambio de circunstancias externas con condiciones internas favorables, pero fue la consecuencia imprevista de medidas tomadas con otros fines. El desarrollo industrial no fue más que un efecto no deseado, y su consolidación se dio “a pesar del Estado”¹⁶.

Javier Villanueva, así como Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, propusieron un análisis y una interpretación diferentes. Para estos investigadores, a partir de 1933 y muy claramente desde 1940, la élite política conservadora redefinió una nueva estrategia de crecimiento que, sin impugnar el rol director de la actividad agraria en nuestra economía, consideró funcional compatibilizarla con un limitado desarrollo industrial. La industrialización emergió como un elemento clave para compensar los desajustes provocados por el quiebre del modelo agroexportador, porque, ante la caída de la rentabilidad agraria, ofrecía

16 Véanse, entre otros, Alberto Ciria, *op. cit.*; Aldo Ferrer, *op. cit.*; Walter M. Beveraggi-Allende, *El servicio del capital extranjero y el control de cambios*, México, Fondo de Cultura Económica, 1954. También puede asimilarse a esta postura el trabajo de Graciela Malgesini y Norberto Álvarez, *El Estado y la Economía, 1930-1955 (I)*, *Historia Testimonial Argentina*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.

campos alternativos para la inversión de capitales al tiempo que se transformaba en herramienta idónea para restablecer el nivel de actividad económica y generar empleo¹⁷.

Desde nuestra perspectiva, Argentina inició durante los años 30 el desarrollo de un modelo de acumulación basado en una matriz de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), mucho más como respuesta práctica a una coyuntura externa desfavorable que como expresión de una visión y una vocación de sus clases dominantes (incluyendo dentro de esta categoría no sólo a las élites económicas sino también a las intelectuales y políticas). Para la élite dirigente de la época, orgánicamente vinculada a las clases dominantes, los distintos planes y medidas económicas que se fueron tomando desde el Estado revestían un carácter coyuntural, a la espera de un regreso a la “normalidad” primario-exportadora. Las políticas implementadas tenían limitaciones evidentes. Por ejemplo, por todos los medios se trató de no afectar el vínculo privilegiado con el socio británico, como lo demuestran los términos del Pacto Roca-Runciman. El impulso a la industrialización se limitó a las industrias “naturales”, es decir a aquellas que procesaban insumos locales, y ello a pesar de que el contexto internacional permitía el desarrollo de otras que, por requerir componentes importados, se tildaban de “artificiales”. El Plan de Reactivación Económica presentado en 1940 por Federico Pinedo, y que nunca llegó a aprobarse, presentaba limitaciones similares. Lo novedoso del plan era la estrategia de acercamiento a Estados Unidos. Pero allí residía precisamente su carácter limitado, desde la perspectiva de un plan sistemático de desarrollo industrial.

5. Una nueva modalidad de acumulación: la industrialización por sustitución de importaciones (ISI)

Considerado espontáneo por algunos autores e inducido por otros, y aun con las limitaciones señaladas, el proceso de industrialización avanzó desde 1933-1935 y cobró nuevos impulsos durante los años de la Segunda Guerra Mundial. La adecuación a las nuevas tendencias de la economía internacional provocó, cualesquiera hayan sido los objetivos de la dirigencia política de la época, una transformación de nuestra economía y su rasgo esencial fue el rol cada vez más preponderante de la industria.

17 Véanse Javier Villanueva, “El origen de la industrialización argentina”, *Desarrollo Económico* N° 47, oct./dic. 1972; Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, *Estudio sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

Argentina inició durante los años 30 el desarrollo de un modelo de acumulación basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). La economía tendió paulatinamente a la autarquía, cambiando su orientación “hacia afuera” por otra “hacia adentro”. Consecuentemente, el mercado interno cobró una importancia creciente, puesto que buena parte de la producción industrial local estaba destinada a satisfacerlo. Ello no impidió que, en circunstancias excepcionales, como las creadas por la Segunda Guerra Mundial, creciera la participación de productos manufacturados no tradicionales en las exportaciones argentinas. Hacia 1945, Argentina tenía una economía cada vez más industrializada. Mientras el tradicional sector agrario seguía constituyendo la principal fuente de divisas, el centro dinámico de acumulación de capital se hallaba en la manufactura.

5.1 Factores que favorecieron la industrialización y características de la misma

La conjunción de una serie de factores externos e internos favorecieron el proceso industrializador de los años 30. En principio, cuando estalló la crisis de 1929 y comenzaron los cambios que condujeron a la quiebra del sistema de división internacional del trabajo, Argentina contaba con un importante desarrollo industrial, así como con recursos humanos que le permitieron adaptarse a la nueva coyuntura con ciertas ventajas respecto de otros países de América Latina.

Otro factor que favoreció el desarrollo industrial fue la existencia de un mercado insatisfecho. A pesar de que la crisis mundial produjo depresión económica, desocupación y pérdida del poder adquisitivo del salario, pronto se hizo visible que la brutal y brusca disminución de las importaciones dejaba un margen importante de necesidades insatisfechas, que tornó atractiva la producción local de bienes industriales para el abastecimiento del mercado interno.

La restricción de las importaciones y los recargos aduaneros implementados por el Estado a partir de la presidencia de Uriburu contribuyeron a favorecer el desarrollo industrial al crear un mercado protegido que reducía la competencia externa.

La industrialización fue además favorecida por la existencia de una abundante oferta de mano de obra. La contracción de las actividades agrícolas dejó sin empleo a una importante cantidad de trabajadores del campo y de provincias con escaso desarrollo relativo. Muchos de ellos emigraron hacia las ciudades del litoral pampeano, tentados por las oportunidades laborales que en ellas se abrían. El aporte de capitales constituye otro elemento fundamental para comprender el desarrollo industrial logrado en estos años. La disminución de los elevados

beneficios que habían obtenido en años anteriores, indujo a los sectores agrarios a buscar una actividad sustitutiva para sus negocios, produciéndose transferencias de capital desde el agro hacia la industria.

También fue decisivo el aporte de capitales extranjeros. Ante los importantes descensos en los niveles de producción y productividad que la crisis causaba en los países centrales, se verificó, una vez pasados los primeros años de grandes dificultades, un importante flujo de capitales del centro a la periferia, en búsqueda de mercados donde lograr mayor rentabilidad. Como había sucedido en la segunda mitad de la década de 1920, estas inversiones se destinaron fundamentalmente a la instalación de plantas fabriles de armado final que garantizaban la demanda de equipos y partes a las casas matrices, localizadas en los países centrales. Operando de este modo, estas empresas, además de competir “desde adentro” con el tradicional aprovisionamiento de productos manufacturados ingleses, generaban un cliente cautivo, ya que Argentina, como otros países de América Latina, estaba imposibilitada de cubrir localmente una gran cantidad de sus requerimientos industriales, a la vez que la carencia de divisas la obligaba a abandonar la importación de productos terminados como modo preponderante de satisfacción de sus necesidades.

Finalmente, la existencia de un mercado protegido aumentó los atractivos para la inversión directa, produciéndose la radicación de importantes empresas holandesas, suizas, francesas, alemanas y sobre todo norteamericanas¹⁸.

Favorecido por todas estas circunstancias, el crecimiento de la industria fue muy rápido. Entre 1935 y 1946, el número de establecimientos industriales pasó de 38.456 a 86.400. En su mayoría eran empresas pequeñas, cuasi talleres, pero el avance de la gran industria, sobre todo de la mano de la inversión extranjera, fue considerable¹⁹.

Las ramas industriales que más se desarrollaron fueron la textil, la del cemento y la de la alimentación, beneficiadas por los bajos precios de la materia prima nacional. En algunos casos pronto se logró el autoabastecimiento, como por ejemplo, en las industrias de aceites comestibles y del cemento, que hacia

18 De estos años data la instalación de importantes firmas extranjeras como las fábricas de neumáticos Good Year, Pirelli, Firestone, Michelin y Dunlop; las alimenticias Nestlé, Suchard, Bols y Quaker Oats; las farmacéuticas Johnson y Johnson, Abbot, Pond's y Coty; fábricas de artefactos eléctricos, como Philips, Osram y Eveready; metalúrgicas como Santa Rosa, Olivetti y National Lead y textiles como Rhodiaseta, Sudamtex o el complejo industrial Ducilo que desde 1937 contribuyó a modificar la estructura de la industria textil al incorporar los sintéticos (nailon y rayón).

19 Hugo del Campo, *op. cit.*, y Daniel James, *Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana. 1990.

1930 cubrían el 50 por ciento de la demanda local, y en 1935 ya satisfacían el 97 por ciento. Otras ramas que crecieron notablemente fueron las de maquinarias y artefactos eléctricos, automóviles, refinación del petróleo, caucho y derivados y la de equipos industriales²⁰.

Cabe señalar que el esquema de crecimiento adoptado no implicó una modificación profunda de las estructuras económicas vigentes. La estructura agraria permaneció inmodificada, y si bien las condiciones internas y externas favorecieron el desarrollo industrial, éste fue esencialmente limitado y su resultado fue una industria no integrada, con escasas posibilidades de generar su propio crecimiento. Las industrias que se desarrollaron fueron fundamentalmente livianas, con segura rentabilidad y escaso riesgo, ya que atendían a una demanda previa insatisfecha, y requerían comparativamente poca inversión de capital.

Además, el desarrollo industrial argentino consolidó el proceso de concentración geográfica y propietaria característico de la estructura productiva y social anterior a 1930. Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el Litoral concentraron el 59 por ciento de los establecimientos industriales, el 71 por ciento de los obreros ocupados y el 70 por ciento de la fuerza motriz generada en el país. Según el Censo Industrial de 1935, sólo 61 sociedades anónimas controlaban 2.300 establecimientos que generaban más del 50 por ciento de la producción total. Este considerable grado de concentración empresarial permitía que un grupo relativamente reducido de grandes industriales tuviera acceso al crédito y a la atención de las autoridades. En gran medida, la industrialización fue llevada a cabo por empresas oligopólicas que tomaron la delantera en el control del mercado interno. Algunas habían nacido a principios del siglo XX, en virtud de un modelo económico que estimulaba la concentración; otras eran grandes empresas de capitales extranjeros que se instalaron en este período²¹.

La conformación de un mercado oligopólico generó fuertes distorsiones en la formación de precios. La mayoría de las veces, los precios internos no guardaban relación con los internacionales y se basaban más en la exclusividad de la oferta que en la relación costo-beneficio.

20 El crecimiento de la industria sustitutiva de importaciones se reflejó también en la estructura del comercio exterior. Si los productos importados representaban en 1925-1929 un 35 por ciento del consumo total, hacia 1935-1940 ese porcentaje se había reducido a un 24 por ciento y en el quinquenio siguiente descendería a menos del 20 por ciento. Paralelamente, si en 1925-1929 se exportaba un 39 por ciento de la producción nacional, después de 1940 la proporción sería inferior al 25 por ciento. Véase Hugo del Campo, *op. cit.*

21 En 1935, las empresas extranjeras eran responsables del 50 por ciento de la producción industrial nacional.

Además, Jorge Sábato y Jorge Schvarzer sostienen que los grandes empresarios habrían afianzado un comportamiento tendiente a mantener altas tasas de liquidez, para desplazarse rápidamente hacia las actividades coyunturalmente más rentables. Así habrían descubierto en los años 30 la conveniencia de invertir en la industria. Pero, como contrapartida y siguiendo una tendencia histórica consolidada, no habrían realizado inversiones estables. Cuando la demanda de un determinado producto se satisfacía y bajaban los márgenes de rentabilidad, abandonaban esa actividad para desplazarse a una nueva, que les proporcionara mayores ganancias. Reforzada por la existencia de un mercado protegido, esta actitud impidió –según estos investigadores– la realización de inversiones que aumentaran la productividad y profundizaran el desarrollo industrial. En cierta forma, tal actitud repetía el modelo de empresario multisectorial del período agroexportador, cuyo comportamiento especulativo primaba sobre la búsqueda de eficiencia, el aumento de la productividad y el fomento de las innovaciones²².

6. La sociedad en la década de 1930

La crisis agraria y la reactivación económica impulsada por la expansión industrial fueron acompañadas por importantes cambios en la estructura social. Una sociedad más compleja se fue definiendo, quedando diseñado el perfil de la moderna sociedad de masas. Nuevas y poderosas fracciones burguesas surgieron y se consolidaron como resultado del peso creciente de la industria y del capital norteamericano en la economía argentina²³. Al respecto, Miguel Khavisse, Eduardo Basualdo y Daniel Aspiazu afirman que, durante esta etapa, se fueron delineando dos fracciones diferenciadas dentro de los sectores dominantes. La primera, integrada por grandes productores pampeanos, vinculada por sus negocios e intereses a los capitales ingleses; la segunda, conformada por grupos económicamente diversificados que volcaron parte de la renta agropecuaria a la inversión industrial, más vinculada a las empresas e inversores norteamericanos²⁴.

Además de estas modificaciones dentro de los sectores dominantes y de la burguesía en general, crecieron los sectores medios como consecuencia del desarro-

22 Jorge F. Sábato y Jorge Schvarzer, “Funcionamiento de la economía y poder político en la Argentina: trabas para la democracia”, en Alain Rouquié y Jorge Schvarzer (comps.), *¿Cómo renacen las democracias?*, Buenos Aires, Emecé, 1985.

23 Javier Villanueva, *op. cit.*

24 Miguel Khavisse, Eduardo M. Basualdo y Daniel Aspiazu: *El nuevo poder económico en la Argentina de los ochenta*, Buenos Aires, Legasa, 1986.

llo industrial y la expansión del aparato estatal. Pero, donde los cambios fueron más notables, fue en el seno de los sectores trabajadores. Durante estos años, una clase trabajadora en su mayoría extranjera y predominantemente vinculada a los servicios, que fue característica del modelo agroexportador, fue dejando paso a otra, en la que el proletariado industrial, integrado mayoritariamente por mano de obra nativa, se fue transformando en el sector cuantitativa y cualitativamente más importante.

En pocos años, el número de obreros industriales se duplicó, pasando de aproximadamente 400.000 en 1935 a casi 900.000 en 1946. Al mismo tiempo, fue cambiando la composición étnica y social de la clase trabajadora, aumentando notoriamente el porcentaje de obreros argentinos. Mientras en 1914 los extranjeros representaban un 47 por ciento de la población ocupada, en 1947 sólo constituían el 22 por ciento. Aunque no hay cifras intermedias, todo indica que la mayor parte de la sustitución de mano de obra extranjera por nativa se produjo a partir de 1930²⁵.

Los trabajadores pasaron, por lo tanto, a representar como ciudadanos una parte importante del electorado. Por el momento, este cambio y su impacto potencial sobre la vida política pasaron inadvertidos para la mayor parte de la sociedad. El retardo en percibirlo se debió, fundamentalmente, a la práctica de mecanismos fraudulentos, y habría de revelarse con contundencia, en las primeras elecciones libres que se celebraron en 1946.

6.1 Las migraciones internas

El cambio en la composición étnica de los trabajadores o lo que ha dado en llamarse proceso de argentinización de los sectores populares se debió a la confluencia de dos procesos. Mientras la inmigración ultramarina se redujo desde 1930 a cifras insignificantes, las migraciones internas alcanzaron por entonces una magnitud considerable, transformándose en proveedoras de mano de obra del proceso económico.

Las migraciones internas fueron consecuencia de una importante contracción del empleo rural, pero también de un incremento significativo y simultáneo de las actividades industriales en las ciudades del este del país. A partir de 1933, y con mayor intensidad desde 1935, comenzaron a expresarse signos de recuperación económica. La industria no sólo absorbió a los desocupados de las ciudades, sino que además se convirtió en un polo de

25 Hugo del Campo, *op. cit.*

atracción para las poblaciones del campo, alentando un verdadero éxodo rural-urbano.

La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, donde terminó concentrándose casi el 60 por ciento de los establecimientos industriales de Argentina, se transformó en el principal foco de atracción de mano de obra procedente de distintos puntos del país. El fenómeno adquirió en algunos momentos dimensiones semejantes, y aun mayores, que en los años de auge de la inmigración ultramarina. En el período 1936-1947, se calcula que anualmente llegaban entre 70.000 y 120.000 migrantes a las estaciones ferroviarias de Retiro y Constitución, para instalarse en la ciudad y en partidos recientemente industrializados del conurbano, como San Martín, Avellaneda y Lanús²⁶.

Otras áreas receptoras de migrantes (aunque también expulsoras de población) fueron ciertas economías regionales que, aun en el marco de la crisis, continuaron desarrollando sus producciones tradicionales. Es el caso de Tucumán con el azúcar, de Misiones con la yerba mate, de la zona de Cuyo con los viñedos, y del Chaco con una creciente producción algodonera destinada a la industria textil en expansión.

La mayor parte de los migrantes procedía de las zonas cerealeras de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Pero, salvo esta última, el resto de estas provincias recibieron migrantes de otras zonas del país. En realidad, fueron las provincias más pobres, como Santiago del Estero, Corrientes, San Luis, La Rioja y Catamarca, las que sufrieron un fuerte despoblamiento, al perder entre el 30 y el 40 por ciento de sus habitantes.

Las migraciones internas representaron un fenómeno de movilidad social horizontal que contribuyó a consolidar ciertos aspectos de la estructura demográfica existente. Efectivamente, el proceso de industrialización-urbanización en el que estas migraciones se inscribieron, acentuó los desequilibrios regionales producidos por el modelo agroexportador, al profundizar la concentración económica y demográfica en el litoral pampeano, alentar el despoblamiento del interior y fortalecer a la ciudad de Buenos Aires como núcleo dinámico y absorbente del desarrollo económico y social de Argentina.

26 Dado que el 56 por ciento del total de los migrantes se estableció en la ciudad capital y en el naciente Gran Buenos Aires, no resulta extraño que el porcentaje de nativos del interior del país sobre el total de la población subiera en la Buenos Aires de 9 en 1914 a 15 en 1936 y 32 en 1947. En el Gran Buenos Aires los migrantes internos constituían un 28 por ciento de la población en 1943 y un 37 por ciento en 1947. Además, su incidencia en la composición de los sectores populares fue aun mayor que sobre la población en general, pues la mayoría de los migrantes era de esa procedencia social. Véase Hugo del Campo, *op. cit.*

En esta última, la expansión urbana resultante de la industrialización se expresó en la proliferación de “villas miseria” y en la consolidación de los barrios como unidades urbanas clave. En ellos, los sectores populares desarrollaron una nueva identidad y construyeron o profundizaron una importante red asociativa (sociedades de fomento, mutuales, clubes deportivos, bibliotecas populares) que reemplazó al Estado en una serie de funciones a la vez que demandaba insistentemente su intervención²⁷.

6.2 Situación de la clase obrera y de los sectores populares

Miseria y discriminación

Provenientes del campo o de pequeñas ciudades y sin experiencia en el trabajo industrial, los migrantes internos se incorporaron al proceso industrializador como mano de obra no calificada.

Su ingreso a la vida urbana no estuvo exento de dificultades. Los migrantes afluyeron a ciudades, en las que, como ya había sucedido en los tiempos de la gran inmigración ultramarina, el Estado no dio respuestas a las necesidades de vivienda e infraestructura que planteaba la nueva situación. En su reemplazo, los migrantes construyeron espontáneamente sus casas de cartón y lata y sus barrios precarios, las “villas miseria”, en terrenos bajos, anegadizos, próximos o con fácil acceso a las industrias que prosperaban en la ciudad.

Las “villas miseria” de Buenos Aires, si bien originadas en 1930 como producto de la crisis, proliferaron con la masiva llegada de los migrantes internos. Los asentamientos villeros —formas intermedias entre la sociedad rural y la urbana— se expandieron en las nuevas zonas industriales de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, conviviendo con una geografía rica y moderna.

El déficit habitacional y la falta de una estructura adecuada para la recepción de las poblaciones migrantes constituyeron algunas de las causas de la expansión de las “villas miseria”, pero resultan insuficientes —según algunos investigadores— para explicar el fenómeno en su totalidad. Las “villas” habrían significado también una respuesta al desarraigo cultural, un modo de preservar pautas propias frente a una sociedad que no proponía mecanismos de

27 Véase Ricardo González Leandri, “La nueva identidad de los sectores populares”, en Alejandro Cataruzza (dir.), *Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo 7, Buenos Aires, Sudamericana, 2001, p. 70.

integración social²⁸. Las interacciones sociales de los migrantes se dieron casi exclusivamente con otros de su misma condición, constituyendo la provincia de origen un importante núcleo aglutinador. Fundamentalmente, por el automarginamiento que originaba un medio social hostil, sus vínculos con la sociedad receptora tuvieron lugar casi exclusivamente a través de las relaciones laborales que entablaron en la fábrica, en el servicio doméstico y en otras actividades²⁹.

Esta situación favoreció en la sociedad establecida una percepción atomizada de los migrantes que le impidió tomar real conciencia acerca de la magnitud del fenómeno migratorio y de las modificaciones que estaban ocurriendo en la estructura social. De todos modos, los sectores medios y altos reaccionaron con desconfianza y una tendencia a la descalificación y al racismo que se expresó en la aparición del mote “cabecita negra”.

El término “negro” ya había sido utilizado despectivamente por la élite tradicional para designar a quienes respaldaban a Yrigoyen. Durante la década del 30, con la afluencia masiva de los migrantes del interior a Buenos Aires, el mote fue usado como sinónimo de trabajador manual y “negrada” fue un equivalente genérico de proletariado³⁰.

Arbitrariedad y desprotección

Pero la discriminación y la miseria no sólo recayeron sobre estos nuevos miembros de la clase obrera. Para los sectores trabajadores en su conjunto –nuevos, viejos, obreros industriales, trabajadores en general– fue éste un tiempo de soledad y de impotencia frente a la injusticia, la desprotección estatal y la arbitrariedad patronal.

Desocupación, reducción de los salarios reales y represión de sus líderes sindicales fueron algunas de las consecuencias de la crisis que, durante los primeros años de la década, impactaron sobre los trabajadores. Su situación no mejoró con la reactivación económica que comenzó a anunciarse desde 1933. Si bien la desocupación fue reabsorbida rápidamente por la actividad industrial³¹, el sa-

28 Véase Mario Margulis, *Migración y marginalidad en la sociedad argentina*, Buenos Aires, Paidós, 1972.

29 Mario Margulis, *op. cit.*

30 Véase Daniel James, *op. cit.*

31 Según Hugo del Campo, *op. cit.*, en 1934 la ocupación volvió a los niveles anteriores a la crisis. En 1944 sólo se registraban 11.195 desempleados. Eran, en su mayoría, peones de la pampa húmeda.

lario real —con la excepción de dos años— quedó por debajo del de 1929 hasta 1942.

La insuficiencia de los salarios —reconocida tanto por organismos oficiales como por grupos empresariales— se traducía en un déficit del presupuesto familiar que sólo podía ser cubierto por el trabajo de mujeres y niños. Éstos representaban un alto porcentaje del personal en varias ramas de la industria y un 21 por ciento del total de la mano de obra industrial.

Las dificultades económicas también se manifestaban a nivel de la vivienda. Casi el 60 por ciento de las familias obreras de la ciudad de Buenos Aires vivía en 1937 en una sola pieza, habitualmente de conventillo. Si bien sus condiciones de habitabilidad pueden estimarse superiores a las existentes en las casas de cartón y lata de las villas, en estas piezas habitaban por lo general más de 4 personas, compartiendo baño y cocina con otras familias y no disponiendo, muchas veces, de agua corriente.

Las condiciones de trabajo eran fijadas, en la mayoría de los casos, por la parte patronal. La falta de convenios colectivos de trabajo dejaba un amplio margen para la arbitrariedad y aun en el caso de que existiera un convenio, no era raro el incumplimiento de sus cláusulas por parte de los empresarios. Lo mismo ocurría frecuentemente con la legislación laboral, ya que el Estado no se mostraba muy interesado ni eficaz en asegurar su cumplimiento.

Otro factor que afectaba a los trabajadores era la falta de seguridad y de protección. Sólo muy lentamente fue extendiéndose a lo largo de la década el derecho a la indemnización por despido y a la licencia por enfermedad. Las vacaciones y las jubilaciones y pensiones sólo eran percibidas por los trabajadores de unos pocos gremios, como los ferroviarios y los municipales. Las indemnizaciones por accidentes de trabajo eran insuficientes y de cobro dificultoso. En suma, la defensa de los trabajadores frente a la incapacidad, la enfermedad o la vejez estaba lejos de quedar asegurada³².

7. Los desafíos al régimen

Esta sociedad renovada y en su mayoría postergada de las decisiones políticas y de los beneficios del crecimiento económico, desde mediados de la década comenzó a plantear nuevos desafíos al sistema político.

El régimen de minorías —restaurado a partir de 1930— tenía un vicio de ori-

32 Para profundizar sobre las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores en la época, véase Hugo del Campo, *op. cit.*

gen: carecía de legitimidad y sólo podía mantenerse por la fuerza, la violencia y la opresión. Las clases dominantes insistieron en retornar a un sistema que, ya desde fines del siglo XIX, y sobre todo durante los primeros años del siglo XX, había sido cuestionado no sólo por los sectores emergentes de la modernización, sino también por los grupos reformistas de la élite cuando mostró su inadecuación para resolver los problemas de una sociedad cada vez más compleja.

La insistencia en restaurar el régimen oligárquico no hacía más que reflejar la escasa adhesión de los sectores dominantes a los principios del liberalismo político que decían abrazar (y mucho menos en su vertiente democrática). Liberalismo económico y conservadurismo político era la fórmula que siempre habían aplicado, más allá de las palabras y de las adhesiones discursivas. Y tal conservadurismo se hizo más militante y cerrado cuando se vieron obligados a confrontar con lo que ellos percibían como una amenaza “desde abajo”. La incorporación de las masas a la política que se produjo a partir de la sanción de la Ley Sáenz Peña y el triunfo del radicalismo, les resultó intolerable. Y ello, a pesar de que la Ley Sáenz Peña implicaba una aplicación más amplia y precisa de los principios liberales que defendían. Ya desde las convulsiones sociales de 1917-1919, se hizo evidente que no dudarían en la interrupción del sistema institucional que ellos mismos habían edificado, si no encontraban mecanismos alternativos para condicionar y limitar a los representantes elegidos por el pueblo. Y en 1930, ante las primeras consecuencias de la crisis internacional, no dudaron en retomar por la fuerza el poder político, aferrándose a principios tradicionales que les permitían asegurar sus privilegios frente a cambios que sentían amenazantes³³.

Pero si a principios del siglo XX, el régimen ya había mostrado su inadecuación, mucho más lo demostraría en la tercera década del siglo. Se trataba de una sociedad que presentaba rasgos cada vez más pluralistas, en la que los sectores dominantes si bien mantenían sus tradicionales privilegios no gozaban de una posición hegemónica indiscutida. El fraude, la violencia, las persecuciones y otras prácticas con las que procuraron monopolizar el poder político y consolidar su encumbrada posición social, terminaron de desprestigiarlos³⁴.

Fue por ello que, a partir de 1935, a pesar de la reactivación de la economía y de los éxitos del justismo para maniobrar en una situación difícil, el régimen y sus sostenedores crecieron en ilegitimidad. Es que la restauración conservadora no

33 Véase Mariano Plotkin, *Mañana es San Perón*, Buenos Aires, Ariel Historia Argentina, 1994.

34 Véase Peter Waldmann, *El peronismo 1943-1955*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

sólo excluía a las mayorías de las decisiones políticas sino que –vinculado con ello– ponía al Estado al servicio de intereses minoritarios e incurría en escandalosos hechos de corrupción. Mientras gobernó Uriburu y luego, durante la gestión de Justo, el Estado tomó un papel activo en la regulación de la economía, en general para beneficio de las clases acomodadas. El pacto Roca-Runciman quizá fue el paradigma de tales orientaciones, ya que a cambio de la compra de una cuota de carnes similar a la vigente en 1929, Inglaterra se beneficiaba con una serie de cláusulas, que iban desde asegurarle menores tasas y aforos aduaneros para sus productos de exportación hasta comprometerse a utilizar las divisas generadas por la venta de carnes en la compra de productos ingleses, cuando éstos habían perdido competitividad en el mercado internacional³⁵.

Entremezclados con estos acuerdos, sólo beneficiosos para una fracción de los sectores dominantes y sus socios externos, una serie de negociados resonantes conmovieron a la sociedad. En 1935, la complicidad de funcionarios de primer orden con los frigoríficos extranjeros que evadían impuestos, fue denunciada casi en soledad por el senador demócrata-progresista Lisandro de la Torre. El caso terminó de modo aun más ignominioso cuando un disparo que iba dirigido al cuerpo de De la Torre, segó la vida de su correligionario y senador electo por Santa Fe, Enzo Bordabehere, en el mismo recinto del Senado nacional.

No había cesado la tempestad de protestas que generó el Pacto Roca-Runciman, denunciado por leonino y contrario a los intereses nacionales por distintos sectores de opinión, ni se había despejado aún la sensación de perplejidad por el “asesinato en el Senado de la Nación”, cuando –en virtud de una de las cláusulas del pacto celebrado con Inglaterra– el gobierno emitió una ley en favor de la Compañía de Tranvías Anglo-Argentina. Por la misma, se otorgaba a la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo principal accionista era la empresa de tranvías inglesa, la coordinación y la concesión del monopolio de los transportes de la ciudad. La medida buscaba proteger a la compañía de la naciente e inquietante competencia de los colectivos. Los propietarios de estos últimos tuvieron que entregar obligatoriamente sus vehículos a la Corporación

35 Algunas manifestaciones de excesiva cortesía diplomática y los argumentos desarrollados públicamente por los negociadores argentinos en Londres para convencer a las autoridades británicas de dar el mismo trato a la República Argentina que a sus dominios, impresionaron por su inquietante servilismo. El vicepresidente Roca habría dicho en un discurso oficial: “La Argentina es, por su interdependencia recíproca, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Reino Unido”. Y su colaborador, Guillermo Leguizamón, habría agregado: “La Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de Su Graciosa Majestad”. Véase Alain Rouquié, *op. cit.*, p. 257.

a cambio de acciones. La expropiación forzosa tuvo como principal efecto frenar el desarrollo del transporte automotor y deteriorar la calidad del servicio.

Fue, quizás, una de las medidas más impopulares del gobierno de Justo, pues desnudó palmariamente ante toda la sociedad la naturaleza del régimen. No fue, sin embargo, la última. Le siguieron los contratos de ampliación del puerto de Rosario, la compra de voluntades de algunos ediles porteños por parte de la Compañía Argentina de Electricidad (también inglesa) para prorrogar las concesiones, la venta de terrenos en El Palomar en la que se vieron implicados algunos diputados y generales, y el escándalo de la Lotería Nacional.

Todos estos episodios dieron sustento para que el periodista nacionalista José Luis Torre acuñara un término, “la década infame”, que designó perdurablemente a la época. En este marco de corrupción, de mercantilismo exacerbado y de favores a los capitalistas extranjeros, crecieron los cuestionamientos de la sociedad. Por un lado, los de la oposición que reclamó cada vez con más vehemencia la democratización del sistema político. Por otro lado, los de los nacionalistas que denunciaban al justismo como pro-británico y enemigo de los intereses del país. Y además, por las mismas Fuerzas Armadas, que no habían logrado ser totalmente embretadas en la política profesionalista de Justo y se mostraban cada vez más receptivas a las prédicas de los nacionalismos. También crecían los conflictos, protagonizados por una clase obrera renovada y en constante expansión, en la que aumentaba la influencia de socialistas y comunistas.

7.1 Las luchas de los trabajadores y la intervención del Estado

El golpe militar de 1930 y los efectos de la crisis económica inauguraron un período de repliegue para el movimiento obrero argentino. A pesar de la unificación, en 1930, de las distintas federaciones sindicales en una central única, la Confederación General del Trabajo (CGT), los altos índices de desocupación, la caída de los salarios y el predominio de una actitud represiva por parte del Estado privaron de fuerza al sindicalismo.

Desde 1930 hasta 1935, los conflictos laborales alcanzaron los niveles más bajos de toda la historia del movimiento obrero argentino. Contribuía a tal situación, una dirección “sindicalista” que asumió una actitud puramente defensiva, y en buena medida ambigua, frente a los gobiernos de Uriburu y Justo. La tibieza de sus reclamos contrastaba con la difícil situación que atravesaba la mayoría de los trabajadores.

Desde 1935, la reactivación económica creó condiciones favorables para abrir un nuevo ciclo en las luchas obreras: el aumento progresivo de los niveles de

ocupación y el crecimiento sin redistribución alentaron las luchas reivindicativas al tiempo que se fortalecía la capacidad negociadora de los sindicatos³⁶.

La situación también favoreció la creación de nuevos sindicatos, organizados a nivel nacional y por ramas de actividad, verificándose un fuerte crecimiento de organizaciones sindicales comunistas que, ligadas a las nuevas ramas industriales, constituyeron el objetivo principal de las políticas represivas de los gobiernos conservadores.

Junto a la influencia de los comunistas, que cobraron fuerza entre los metalúrgicos, los textiles, los madereros, la carne y, sobre todo, la construcción, creció la importancia de los socialistas. Éstos, por primera vez, pasaron a ser hegemónicos en el movimiento obrero argentino, desplazando a los “sindicalistas”.

A pesar de estos cambios y del crecimiento del número de las huelgas y de la movilización de los trabajadores en el período 1935-1939, desde una perspectiva de más larga duración, los conflictos de estos años no alcanzaron en ningún caso los niveles de períodos anteriores (1910-1914, 1915-1919, 1920-1924). La tendencia decreciente está vinculada a la declinación del anarquismo y al ascenso de un sindicalismo moderado y de un socialismo más propenso a la negociación que a la huelga.

La tendencia se relaciona además con la actitud que asumió el Estado frente al aumento de las luchas reivindicativas. Tras un período de relativa indiferencia, la situación posterior a 1935 indujo a una creciente intervención estatal en la problemática social. Los gobiernos conservadores, aunque abrigaban pocas simpatías por las reivindicaciones obreras, se mostraron cada vez más preocupados por controlar el movimiento obrero, intervenir en los conflictos laborales y solucionarlos antes que los mismos desembocaran en huelgas.

Esto se tradujo, por ejemplo, en un rol cada vez más activo del Departamento Nacional de Trabajo (DNT), que comenzó a intermediar y arbitrar en los conflictos, extendiendo gradualmente la práctica del convenio colectivo³⁷. Sus de-

36 Además de huelgas y movilizaciones, hacia fines de la década de 1930, aún se encontraba presente la característica militante de la cultura de la clase trabajadora. Esa cultura se centraba no sólo en la existencia de sindicatos sino también en la organización de ateneos y bibliotecas; en la distribución de volantes, periódicos, diarios, revistas, folletos y libros; en la organización de grupos teatrales, de cooperativas y de comunidades o ensayos de vida solidaria. También en las campañas contra el alcohol y el tabaco, en la realización de picnics y de conferencias seguidas de debate, desde donde se inculcaba el espíritu de ayuda mutua. Véase Daniel James, *op. cit.*

37 Donde estas tendencias intervencionistas se llevaron a la práctica en forma más coherente y compleja fue en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Manuel A. Fresco (1936-1940). Fresco pretendía armonizar el capital y el trabajo. Al tiempo que

cisiones, aunque carecían de fuerza legal, eran normalmente acatadas por las partes, impidiendo la profundización de los conflictos.

La actividad desplegada por el DNT se puede apreciar en la cantidad de huelgas resueltas por algún tipo de transacción: si durante 1934 predominaron las huelgas perdidas (56 por ciento de los huelguistas) y en 1935 las ganadas (algo más del 50 por ciento), en los años subsiguientes, sobresalieron notablemente las huelgas transigidas (78 por ciento entre 1936 y 1939). Ya en 1942, más del 90 por ciento de los huelguistas habían solucionado sus conflictos con la intervención de organismos o funcionarios estatales.

“En el Estado anterior a 1943 –sostienen Gaudio y Pilone– ya se manifestaban formas de intervencionismo social, algunas sorprendentemente afines (y otras menos) con lo que resultó típico en la década siguiente. La descripción y el análisis de tales formas de intervención en la década del 30 muestran ya un Estado que comienza a desempeñar y a arrogarse como legítimamente propias funciones tales como la de intermediario en el conflicto social y la de normatizador de un tipo de relaciones hasta entonces consideradas como ‘privadas’ y, por consiguiente, pertenecientes a la esfera de la sociedad civil.”³⁸

“La clase obrera –agregan Gaudio y Pilone– no fue ajena a [este] proceso (...). Por un lado, intentó beneficiarse con este primer esbozo de política social emprendido desde el Estado y, en parte, lo logró; por el otro, lo estimuló y secundó con interés, de una manera que no resultó contradictoria con las orientaciones del movimiento obrero de la época.”³⁹

Efectivamente, la dirigencia sindical estimuló la participación estatal en la problemática obrera. A pesar de los cambios en la dirección de la CGT, la tendencia hegemónica dentro de un movimiento obrero compuesto por grupos ideológicamente heterogéneos era la que reconocía sus orígenes en el “sindicalismo”. Prescidentes en lo político, la dirigencia obrera restringía su accionar a la presión e intermediación con la patronal y el Estado, del que reclamaba su intervención y arbitraje en el conflicto social.

buscaba mantener al movimiento sindical bajo el más estricto control y reprimía duramente a los comunistas, legalizaba los sindicatos y utilizaba el poder del Estado para proteger a los trabajadores, estableciendo procedimientos de conciliación y de arbitraje obligatorio, estimulando la firma de convenios colectivos, extendiendo y haciendo cumplir la legislación social.

38 Ricardo Gaudio y Jorge Pilone: “El desarrollo de la negociación colectiva durante la etapa de modernización industrial 1935-1943”, *Desarrollo Económico* N° 90, julio-septiembre de 1983.

39 Ricardo Gaudio y Jorge Pilone, *op. cit.*

El movimiento obrero organizado atravesó simultáneamente, en estos años, un proceso de elitización por el cual sus organizaciones se tornaron rígidas y anquilosadas y sus prácticas se burocratizaron. Aun así, los dirigentes sindicales gozaban del respeto y la consideración de otras fuerzas sociales y de los funcionarios estatales. La burocratización no iba acompañada por actitudes y prácticas corruptas, como fue posible ver posteriormente.

La situación de los trabajadores a comienzos de los años 40 y su grado de satisfacción frente a los resultados de la creciente intervención del Estado en la esfera social son objetos de debate. Gaudio y Pilone le discuten a Miguel Murmis y a Juan Carlos Portantiero que el gran número de huelgas transigidas durante el período 1936-1939 haya producido —como sostienen estos últimos— un aumento de las aspiraciones insatisfechas y de las tensiones consecuentes. Para Gaudio y Pilone, la categoría de huelgas transadas no debe asimilarse a la de fracasadas, sino a la de parcialmente exitosas, debiéndose el incremento de esa categoría al desarrollo de la negociación colectiva y al creciente intervencionismo del Estado. Finalmente, señalan que la imposición de un estándar salarial mínimo (o, al menos, el establecimiento de un principio afín) con el cual se logró defender un determinado nivel de vida fue un hecho, para no pocos gremios, ya en la segunda parte de la década del 30.

Por su parte, Hugo del Campo sostiene que el hecho de que el nivel de vida de los trabajadores no mejorara ni empeorara sustancialmente durante la década puede considerarse como un éxito o como un fracaso, según el punto de vista. Pero —agrega— “si tenemos en cuenta cuál era ese nivel de vida que se logró ‘defender’ y que el estancamiento del salario real durante esta década contrasta con su permanente y considerable ascenso durante la anterior, podemos suponer que la mayoría de los trabajadores no se sentirían demasiado satisfechos con este éxito”⁴⁰.

Daniel James sostiene que la “década infame” fue experimentada por muchos trabajadores como un tiempo de frustración y de humillación profundas, sentidas colectiva e individualmente. La dureza de las condiciones de trabajo y de la disciplina laboral, testimoniada por la mayoría de los observadores de aquel período, tuvo impacto sin duda alguna sobre la clase trabajadora en general⁴¹.

40 Este estado del debate puede consultarse en Hugo del Campo, *op. cit.*

41 Daniel James, *op. cit.*

7.2 Las luchas por la democratización y las respuestas del régimen

El gobierno de Justo no sólo tuvo que lidiar con una clase obrera y un sindicalismo revitalizados, sino que también hubo de afrontar crecientes reclamos por la democratización del sistema político. La UCR, vuelta a las lides electorales desde 1935, junto al PDP, al socialismo y al comunismo formaban un amplio coro opositor que demandaba el fin de las prácticas fraudulentas, la convocatoria a elecciones libres y el respeto de la Constitución. En el marco de la Guerra Civil Española (1936-1939), vivida muy intensamente en nuestro país, y en el contexto de la formación en Europa de frentes populares para frenar el avance del fascismo, el acercamiento que comenzó a darse entre los partidos de oposición y los sindicatos obreros fue considerado un peligro para la coalición dominante. Algunos de sus miembros advirtieron sobre el retorno de las masas peligrosas y aconsejaron aceitar los mecanismos del fraude.

Así lo entendió Justo, quien en las elecciones de 1937 puso en juego variados instrumentos para impedir el triunfo de Alvear y asegurar el ascenso del radical antipersonalista Roberto M. Ortiz, en comicios particularmente violentos y fraudulentos. También entendió Justo que debía acercarse a otros actores políticos para contrabalancear el desafío que le planteaba la posible formación de un Frente Popular, liderado por la UCR. Mientras incrementaba la persecución a los militantes comunistas, estrechó más fuertemente los vínculos que él y su clase venían tejiendo desde la Semana Trágica con la Iglesia. Desde entonces, los sectores dominantes y la jerarquía católica comprendieron que era hora de reconciliarse frente al peligro común de la “delincuencia roja”. Tal alianza terminó de consolidarse en 1934, cuando la realización en Buenos Aires del Congreso Eucarístico Internacional demostró, por la cantidad de fieles que logró convocar, el prestigio ganado por la Iglesia católica en la sociedad argentina.⁴² También buscó Justo apoyarse en los grupos nacionalistas de derecha, cuyo ascendiente venía creciendo con el correr de la década. Pero no tuvo suerte en este caso, pues los nacionalistas prefirieron seguir denunciando el carácter entreguista y antinacional de la “oligarquía” en el poder. Y sus denuncias, así como su prédica elitista, antiliberal y antidemocrática, no sólo se hacía oír en las calles sino que penetraba eficazmente en sectores de la Iglesia, y lo que es quizá más importante, entre la oficialidad del Ejército.

Pero la demanda de democratización tuvo un eco inesperado, al impactar en algunos miembros de la coalición gobernante que vieron en esa opción una

42 Véase Loris Zanatta, *Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. 1930-1943*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.

oportunidad para legitimar al régimen. Paradójicamente, el Dr. Roberto M. Ortiz, que llegó, en 1938, a la Presidencia de la Nación gracias a unas de las elecciones más amañadas y corruptas de la historia argentina, fue quien se comprometió en un esfuerzo de apertura política. En poco tiempo, Ortiz intentó horadar el largo reinado de los conservadores, interviniendo las provincias de Catamarca, La Rioja y nada menos que la de Buenos Aires, gobernada por el líder ultraconservador, Manuel Fresco.

Pero la obra de Ortiz, si bien iniciada con decisión y coraje, tuvo corta vida. La oposición de la fuerza política que lo encumbró, el abandono del papel de árbitro dentro de la coalición, el carácter exclusivamente civil de su liderazgo y su enfermedad lo evitaron. Afectado por problemas serios de salud, en 1940, el presidente se vio primero obligado a tomar licencia y luego a renunciar. La primera magistratura recayó en el vicepresidente, el Dr. Ramón S. Castillo, representante del Partido Demócrata Nacional (PDN), el ala más conservadora de la Concordancia.

Castillo hizo añicos la obra de su predecesor para volver a las prácticas más remanidas del régimen oligárquico. La situación internacional, con los triunfos aparentemente imparables del eje nazi-fascista en la Segunda Guerra Mundial, lo favorecían, al brindar un contexto favorable para regímenes autoritarios como el que presidía.

8. La Segunda Guerra Mundial: nuevas oportunidades, desafíos y antagonismos

Pero la Segunda Guerra Mundial también implicaba una serie variada de desafíos, de redefiniciones de rumbos y reacomodamientos para los cuales ni el gobierno de Castillo ni los partidos de la oposición ni los grandes empresarios parecían estar preparados. El clima de discordia y de polarización se profundizó y a las discusiones entre democracia y autoritarismo (en su doble vertiente, oligárquico y corporativista) se sumaron los debates entre rupturistas y neutralistas, enfrentando a civiles con militares.

La coalición sabiamente articulada por Justo se desarmaba. El general Justo había sabido combinar elementos heterogéneos en una alianza o “Concordancia” que sustentó las reformas necesarias para proteger los intereses de la clase dominante de las consecuencias de la crisis y la depresión. Pero los cambios que se habían producido durante la década y las consecuencias económico-políticas de la guerra creaban tensiones y alineamientos confusos y cambiantes. En una posición rupturista-proaliada y en defensa de la restauración democrática no sólo podía encontrarse a los políticos de la oposición o a muchos sindicalistas,

sino también a conspicuos conservadores, como el general Justo o Federico Pinedo.

La adaptación a las nuevas condiciones fue dificultosa e incompleta para toda la dirigencia, política, sindical, empresarial y no sólo para la élite conservadora. En tal contexto, cada vez más aislado de sus aliados de la Concordancia por sus posturas neutralistas y autoritarias, Castillo buscó el apoyo de los militares, mayoritariamente neutrales y, en algunos casos, simpatizantes del Eje.

No fue el único. Las Fuerzas Armadas, consideradas un interlocutor político válido, fueron cada vez más consultadas por otros actores (políticos, empresarios, nacionalistas) acerca de temas como la defensa, la industrialización y la intervención del Estado en la economía. Porque la guerra, si bien daba un nuevo impulso al desarrollo industrial e incrementaba la demanda externa de ciertos productos agropecuarios, al poner en evidencia los límites y debilidades de la economía argentina, agregaba nuevos tópicos de debate y de confrontación entre las élites dirigentes del país. A los señalados anteriormente, en torno al régimen político y a los posicionamientos internacionales de Argentina, se incorporaban la discusión acerca del rumbo económico a seguir, el rol a asumir por el Estado y, algo muy caro a los militares, la defensa nacional.

8.1 Un nuevo impulso al desarrollo industrial

La guerra puso otra vez en evidencia un problema estructural argentino, consistente en la extrema dependencia de nuestra economía respecto del mercado internacional. Ésta se manifestaba invariablemente ante cada situación crítica vivida por los países centrales o el sistema capitalista en general, y la Segunda Guerra Mundial no fue una excepción.

Con la guerra, las importaciones de equipos y de otros bienes comenzaron a no depender del saldo de la balanza comercial, sino de las posibilidades de exportación de los países en guerra, que ahora concentraban sus esfuerzos en la producción bélica. Además, siendo el mar uno de los escenarios del conflicto, el transporte de mercaderías presentaba serios riesgos y dificultades.

La guerra creó una situación de algún modo paradójal o contradictoria. Si bien daba nuevos bríos a la industria local, ya que otra vez quedaba un margen de necesidades insatisfechas antes cubiertas por la importación, este estímulo se veía limitado por la imposibilidad de importar los equipos necesarios para lograr una producción capaz de abastecer al mercado interno e, incluso, exportar a países con un grado de desarrollo industrial menor que el nuestro. Sucedió entonces que, en algunos casos, los equipos se desgastaban en virtud de su mayor utilización y, en otros, como en la siderurgia o en las ramas mecánicas, la

producción se hacía dificultosa por la falta de equipamiento adecuado. Muchas industrias que, durante la guerra, surgieron para sustituir importaciones se caracterizaban por su improvisación. La perspectiva de que no pudieran sobrevivir a la coyuntura bélica, desestimulaba las inversiones de mediano y largo plazo. El abastecimiento de combustibles fue otro problema grave. Argentina importaba el 60 por ciento de sus requerimientos energéticos. La escasez fue compensada con una decisiva acción estatal en favor de la producción local de petróleo y carbón y con la utilización de combustibles no convencionales como la leña y los cereales.

Todas estas situaciones dejaban en evidencia los inconvenientes generados por el desarrollo de una industria no integrada y orientada principalmente hacia la producción de bienes de consumo. De todos modos, como sostiene Jorge Schvarzer, “la industria nacional se expandió considerablemente: las exigencias de la producción incentivaron el uso del ingenio nacional y del esfuerzo humano de grupos de obreros cada vez más numerosos a costa de la productividad del sistema. Entre 1939 y 1946 la producción industrial se incrementó un 45%, una cifra realmente formidable, pero sin que mejorara el equipamiento. En ese mismo período, los obreros ocupados ascendieron un 66%, con un descenso de la productividad por persona ocupada del 13%”⁴³.

Las limitaciones y los obstáculos para el desarrollo industrial fueron advertidos en la época. La guerra favoreció la reflexión sobre las características y los rumbos de la industrialización. Cada vez fueron más los sectores que consideraron importante la integración industrial como modo de prevención de futuras crisis y de generación de empleo. Entre ellos había muchos militares y algunos empresarios, como Di Tella (Siam) o Tornquist (Tamet), quienes insistían en la necesidad de desarrollar una industria básica del acero y de impulsar la explotación de los yacimientos de hierro de Jujuy.

8.2 Creciente intervencionismo y autonomización del Estado

Así como había reaccionado frente al auge de las luchas obreras, el Estado no permaneció ajeno a las nuevas circunstancias creadas por la guerra. A los problemas de abastecimiento de importaciones se agregaban obstáculos para colo-

43 Jorge Schvarzer, “1925-1955 Argentina, expansión y crisis”, *Todo es Historia* N° 124, Buenos Aires, septiembre de 1975, p. 68. Véase además, del mismo autor, *La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina*, Buenos Aires, Planeta, 1996.

car exportaciones y amenazas de un importante proceso inflacionario. Frente a estas dificultades, y dado el influjo cada vez mayor que los militares ejercían sobre el Estado, el intervencionismo estatal se profundizó.

El Programa de Reactivación de la Economía Nacional, diseñado en 1940 por el nuevamente ministro de Hacienda Federico Pinedo, constituyó un capítulo de esta acción estatal. Sus medidas más importantes se centraban en el estímulo a una industria productora de bienes exportables –limitada al procesamiento de materias primas locales, en la que el capital extranjero pudiera expandirse– y a la construcción. Por otra parte, en un claro intento de establecer alianzas con los sectores netamente agroexportadores, este plan proponía la adquisición de los excedentes agrícolas por parte del Estado, en un momento en que, a causa de la Segunda Guerra Mundial, la demanda externa tendía a la baja.

Su fracaso al no ser aprobado en el Congreso por el rechazo de la bancada de diputados del radicalismo⁴⁴, no detuvo la acción del Estado, que participó en algunas empresas industriales, ligadas a la solución de problemas creados por la guerra y al incremento de la producción de cultivos regionales no tradicionales. Se trataba de organizaciones productivas, con carácter autárquico, tales como la Corporación del Carbón Vegetal, la fábrica de envases textiles del Chaco o la Corporación de Tejeduría doméstica. También habría que mencionar algunas nacionalizaciones del período, como la de los elevadores de granos, la de la Compañía Primitiva de Gas y varias empresas de obras sanitarias privadas.

Estas iniciativas tenían pocos antecedentes en el aparato estatal, a diferencia de los emprendimientos de tipo militar que, en este nuevo contexto, tendieron a crecer. Desde 1937 las Fuerzas Armadas contaban con la fábrica de Aceros Especiales. En 1941, para resolver la carencia de bodegas y facilitar el comercio exterior, fue creada la Flota Mercante del Estado, dependiente del Ministerio de Marina. También se produjo la agrupación de las fábricas militares ya existentes en la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), que se puso bajo el control del Ministerio de Guerra. La DGFM debía producir armamentos y municiones pero también bienes de consumo general cuando no fueran producidos o lo fueran insuficientemente por la industria privada. Poco tiempo después, se pusieron los cimientos

44 En su oposición al Plan Pinedo de 1940, los radicales privilegiaron su rechazo a las prácticas del fraude estimuladas por el gobierno de Castillo antes que sus acercamientos a los norteamericanos en la política mundial. El caso constituye una muestra de los confusos alineamientos que generaban la guerra y la situación interna del país.

de Altos Hornos Zapla en Jujuy y se creó el Instituto Geográfico Militar. La producción de hierro en Zapla era considerada por el primer director de la DGFM, el general Savio, el pilar fundamental para el desarrollo de una industria siderúrgica nacional. El Instituto Geográfico Militar concurría a la transformación económica en curso y aumentaba las responsabilidades del Ejército, al encargársele un relevamiento topográfico de todo el territorio nacional.

También el Estado concertó un nuevo tratado comercial con Estados Unidos y se fundó la Corporación para la Promoción del Intercambio, con el propósito de abrir nuevos mercados externos donde colocar bienes exportables no tradicionales⁴⁵.

El creciente intervencionismo estatal, que no se dio sin disputas, ya que generaba una oposición activa de importantes sectores del empresariado, marcó una modificación cuantitativa y cualitativa en las orientaciones del Estado. Desde 1940 se produjo una ruptura más abierta con el liberalismo económico y con el modelo agroexportador, a la vez que una progresiva autonomización del aparato estatal que tendió a alejarse de los intereses más inmediatos de los capitalistas, e incluso a enfrentarse con ellos, para resolver las necesidades del proceso de acumulación.

8.3 La autonomización de las Fuerzas Armadas

Con un poder redoblado por los emprendimientos productivos y estratégicos que cayeron bajo su órbita, y favorecidas por la situación de quiebre del bloque oficial, las Fuerzas Armadas profundizaron, desde principios de la década de 1940, su autonomización respecto del sistema político⁴⁶.

Es evidente que la presencia y el grado de intervención del Ejército en la vida política de Argentina fue incrementándose a lo largo de la década. Su rol fue activo en el derrocamiento de Yrigoyen y en la restauración conservadora. Luego, aceptó el papel de gendarme de un régimen restrictivo, cerrando los ojos ante el fraude y la corrupción. En tal actitud, influyó quizás el prestigio de que aún gozaban los sectores dominantes en las filas castrenses. También

45 Véase Daniel Campione: "Del intervencionismo conservador al intervencionismo populista. Los cambios en el aparato del Estado: 1940-1946", *Revista Taller*, vol. 2, N° 4, agosto de 1997.

46 Darío Marcor: "Partidos, coaliciones y sistema de poder", en Alejandro Cataruzza (dir.), *op. cit.*

pudo haber influido, la política de “profesionalización” impulsada por el presidente Justo, quien, para desvincular a las Fuerzas Armadas del acontecer político, las modernizó y las reequipó, en momentos en que Europa y Asia se rearmaban y América del Sur se transformaba en escenario de una lucha cada vez más encarnizada entre Estados Unidos e Inglaterra⁴⁷.

La actitud del Ejército respecto del régimen oligárquico comenzó a cambiar en la segunda mitad de la década.

Hacia esa época, en medio de los nuevos desafíos internacionales y de los “negociados” que conmovían a la opinión pública, las ideas nacionalistas fueron ganando terreno entre diversos actores políticos y en buena parte de la sociedad⁴⁸. Contra el imperialismo y la “oligarquía entreguista”, no sólo se alzaban las voces de los grupos nacionalistas de derecha. El antiimperialismo se imponía en los discursos y en los análisis de los problemas políticos de radicales, comunistas, socialistas, demócrata-progresistas, sindicalistas, intelectuales y

47 Entre 1932 y 1938 tuvo lugar la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Detrás de los contendientes, estaban involucrados los intereses petroleros de Estados Unidos e Inglaterra. La guerra en las fronteras acrecentó las exigencias profesionales de las Fuerzas Armadas argentinas, que fueron atendidas por el presidente Justo a través de un aumento sustancial de los efectivos, la creación de nuevas escuelas de armas, la capacitación de ingenieros navales y aeronáuticos en Europa y la construcción de imponentes y lujosos edificios militares. En 1936 más del 24 por ciento del presupuesto nacional se dedicó a Defensa. Véase Alain Rouquié, *op. cit.*

48 Sostiene Luis A. Romero que esa difusa pero cada vez más pujante sensibilidad nacional enlazaba un conjunto de sentimientos, actitudes e ideas que estaban presentes en vastos sectores de la sociedad. Las raíces de ese sentimiento nacional eran antiguas, pero en los años 30 los enemigos de la nacionalidad no eran como en el pasado los inmigrantes, ni la “chusma democrática”, ni los “rojos”, sino Gran Bretaña y la oligarquía “entreguista”. Este antiimperialismo resultó un arma retórica y política formidable, capaz de convocar apoyos a derecha e izquierda. La preocupación por los temas nacionales se manifestó de múltiples maneras. En la literatura –sobre todo la difundida a través de publicaciones periódicas de amplia circulación– los temas rurales o camperos solían traer la contraposición entre el interior nacional y el litoral gringo, o entre el mundo rural y criollo y el mundo urbano y extranjero. Los temas históricos, donde la presencia de Rosas, el Restaurador, era frecuente, abundaban en los folletines, y también en exitosos radioteatros, como *Chispazos de tradición*, ávidamente consumidos. Véase Luis A. Romero, *Breve Historia Contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001. Es interesante agregar que el antiimperialismo y la prédica contra la “oligarquía” se imbricaba frecuentemente con posiciones muy reaccionarias. Por ejemplo, la popularización de una visión no denostativa de Rosas tuvo una punta de lanza en la novelística de Manuel Gálvez, católico ultramontano, opuesto a cualquier signo de “liberalismo” no sólo en la vida pública sino también en la privada.

también de otros nacionalistas, democráticos y populares, como los del grupo FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina)⁴⁹.

Los militares no escaparon al influjo de este nuevo clima de ideas, cuestionando las políticas económicas y sociales de los gobiernos conservadores, así como sus métodos fraudulentos. Y tal cuestionamiento fue en aumento, en la medida en que la situación internacional ponía a la orden del día el tema de la defensa nacional.

Ya hacia fines de los años 30, en medio de un mundo en guerra, los militares observaban con preocupación las limitaciones del desarrollo industrial y las dificultades consecuentes para autoabastecerse de armas, municiones y equipos. También eran conscientes del desequilibrio militar que se estaba produciendo en América del Sur, en favor de Brasil. Estados Unidos, que no proveía de armas a Argentina como modo de presión para que rompiera sus relaciones con el Eje, favorecía a Brasil, no sólo vendiéndole armas sino también facilitando créditos para el desarrollo de aeropuertos, trabajos de infraestructura, medios de transporte, así como para la puesta en marcha del complejo siderúrgico de Volta Redonda.

Otro motivo de preocupación era la situación de los trabajadores. Los militares no ignoraban la insuficiencia de los salarios obreros y magnificaban la influencia que comunistas y socialistas ejercían sobre los trabajadores. Temían que, en la posguerra, se reeditara una situación “revolucionaria” como la de 1919. Además, el deficiente estado físico de muchos jóvenes de los sectores populares, que constataban al intentar reclutarlos para el servicio militar, conspiraba contra su idea de preparación militar integral.

La noción que los militares fueron construyendo sobre la defensa nacional era amplia, integral. Se basaba en el concepto clásico de la “Nación en armas” y en la hipótesis de guerra provocada por un enemigo externo. Incluía el estado socioeconómico de la nación, así como factores sociopolíticos, todos ellos im-

49 FORJA se formó en 1935. Era un nucleamiento de jóvenes radicales, enfrentado con la dirección de su partido, que pretendía insuflar a la oposición radical de un contenido antiimperialista, democrático y popular. Su nacionalismo fundamental insistía en la solidaridad latinoamericana en nombre de un “antiimperialismo” fogoso, que identificaba a Gran Bretaña como el enemigo número uno. Muchos de sus fundadores se inspiraban en la mística yrigoyenista y en la ideología continental de la reforma universitaria. En 1945 se disolvió. Algunos de sus integrantes se mantuvieron en las filas del radicalismo; otros, como Arturo Jauretche, Homero Manzi o Raúl Scalabrini Ortiz, se integraron o apoyaron al peronismo naciente porque creyeron que expresaba las aspiraciones que habían dado nacimiento a FORJA. Véase Alain Rouquié, *Radicales y desarrollistas*, Buenos Aires, Schapire, 1975.

portantes a la hora de pensar en una capacidad defensiva real. La sociedad civil era considerada retaguardia del Ejército: si había descontento o conmociones sociales, ello conspiraría contra el éxito militar. Además un Estado fuerte era condición de posibilidad de un esfuerzo de guerra total. De estas concepciones sobre la defensa derivaban sus preocupaciones por lograr una mayor autarquía económica, sobre todo a partir de un impulso a la industrialización, que redujera la dependencia de los abastecimientos exteriores. También se preocupaban por la salud y la calidad de vida de la población, así como por garantizar un mínimo de orden y paz social como reaseguro para la retaguardia⁵⁰.

9. Una Argentina a la deriva

A principios de los años 40, Argentina vivía una crisis política profunda. Los sectores que habían detentado el poder a lo largo de esta extensa década mostraban disensiones y posicionamientos confusos en los variados temas que presentaba la agenda nacional e internacional.

Por un lado, los cambios que se fueron produciendo a lo largo de la década en el régimen de acumulación, condujeron –según Khavisse, Basualdo y Aspiazú– a un fraccionamiento de los sectores dominantes y a conflictos irresueltos en torno a dos posturas o proyectos: uno de ellos consistía en el retorno al modelo agroexportador y era sostenido por la fracción de estancieros multisectoriales vinculados por sus negocios a los capitales británicos; el otro, sistematizado en el Plan Pinedo de 1940, constituía el primer proyecto alternativo de la fracción de los sectores dominantes con intereses diversificados en la industria y próximos a los inversores norteamericanos⁵¹.

Por otro lado, las luchas que se libraban en el plano internacional por la hegemonía mundial y en torno a distintos modelos político-ideológicos, dividieron a los sectores dominantes y a la coalición que los expresaba políticamente, en torno al posicionamiento de Argentina en la guerra y respecto del mantenimiento o liberalización del régimen oligárquico.

A sus divisiones agregaban un profundo desprestigio. Las prácticas desleales, con las que buscaron consolidar sus privilegios y su dominio político-social, hicieron que el resto de la sociedad no les reconociera su rol dirigente y los

50 Véanse Daniel Campione, *op. cit.*, y Juan Carlos Portantiero, “Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973”, *Revista Mexicana de Sociología*, N° 2, México, 1977.

51 Miguel Khavisse, Eduardo M. Basualdo y Daniel Aspiazú, *op. cit.*

considerara una oligarquía, que utilizaba el poder en provecho propio, desinteresándose de los destinos de la sociedad.

Los partidos de la oposición no escapaban al descrédito general en que había caído la política. Socialistas y demócrata-progresistas, aunque incrementaron su participación en el Parlamento e incluso, en el caso de los segundos, llegaron a acceder a la gobernación de Santa Fe, fueron cuestionados por legitimar con su participación a un régimen antipopular y opresivo. La UCR, que, luego de algunos fracasos insurreccionales, volvió al ruedo electoral en 1935, ganando una importante cantidad de bancas en el Congreso y varias gobernaciones, también se vio erosionada por el clima de escepticismo, impotencia y desconfianza imperante. Desconfianza que se profundizó desde que ciertos dirigentes radicales —y hasta el mismo Alvear— se vieron salpicados en algunas de las corruptelas de las que fue tan pródiga la década, como en el caso de la prórroga de la concesión a la Compañía Argentina de Electricidad por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires o en la venta de las tierras del Palomar. Radicales, socialistas y demócrata-progresistas mostraban además una dificultad para leer los profundos cambios socioeconómicos que se habían producido en la década y que la Segunda Guerra Mundial profundizaba. Ninguno de ellos parecía advertir la emergencia de una nueva clase obrera y de nuevas fracciones burguesas industriales, que quedaron sin representación.

La crisis de representatividad también golpeaba a las organizaciones sociales. En el caso del movimiento obrero, a pesar del peso alcanzado por algunos sindicatos (ferroviarios, municipales, comercio y otros) y de los progresos en la organización que se produjeron en la segunda mitad de la década, en 1943 estaba dividido en cuatro centrales gremiales. Sólo alrededor del 20 por ciento de la fuerza laboral urbana estaba sindicalizado. La fragmentación, la todavía débil sindicalización, así como el aún reducido peso de los obreros industriales en el conjunto de los trabajadores, limitaban las posibilidades de éstos para modificar una situación que, según muchos testimonios, era angustiante.

En lo referente a las organizaciones representativas de los grupos empresariales, las dos de mayor influencia, la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural, concentraban su accionar en la defensa de los intereses de los grandes empresarios de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, dejando de lado los intereses de los menos poderosos.

La crisis de representatividad que recaía sobre todas las dirigencias retrajo la participación de la ciudadanía y alimentó un vasto cinismo público, un malestar político y moral que fue expresado cruda y poéticamente por Roberto Arlt, José Portogalo y Enrique González Tuñón. Y también por Enrique Santos Discépolo, desde el género popular más importante de la época: el tango. Éste se transformó, muchas veces, en portavoz de la amargura, la resignación, la

crisis de valores, el descreimiento y la frustración que invadían a la sociedad. Tales sentimientos y las variadas crisis que estallaron en la época encontraron también eco en la obra de intelectuales como Raúl Scalabrini Ortiz, Eduardo Mallea y Ezequiel Martínez Estrada. Los tres se interpelaron sobre los problemas de Argentina y acerca de las características del “ser nacional”, elaborando tres ensayos que estimularon la reflexión colectiva. ¿Destino fatal para Argentina como lo pensaba Martínez Estrada o esperanza en la conformación de una élite superadora de la que, en los años 30, Eduardo Mallea veía ganada por el facilismo, la apariencia y una escasa preocupación por los destinos de la comunidad?⁵²

Incertidumbre, pesimismo, resignación alcanzaron también una manifestación desesperada en el suicidio de muchos seres anónimos, así como de algunos notables, como Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Alfonsina Storni o Lisandro de la Torre.

Evidentemente, para muchos, como sostiene Beatriz Sarlo, Argentina era en los treinta un problema que admitía pocas soluciones optimistas⁵³. Hacia 1943 la crisis de legitimidad que se venía incubando y que se extendía a todas las instituciones políticas establecidas, derivó en un vacío político que sólo parecía poder resolverse por la intervención del Ejército, un actor cuyo grado de autonomía había crecido a la par del descrédito y las fracturas de la coalición gobernante.

52 Raúl Scalabrini Ortiz escribió *El hombre que está solo y espera* (1931). Era el hombre de Corrientes y Esmeralda, amalgama de un país de inmigración que anteponía sus impulsos, intuiciones y sentimientos a cualquier elaboración o cálculo racional; era el hombre que construía una imagen de sí mismo y de lo que podía llegar a ser, más valiosa que su propia realidad. Eduardo Mallea, en *Historia de una pasión argentina* (1935), se interroga sobre las causas de la crisis del sentido de argentinidad y encuentra la respuesta en los comportamientos de las élites dirigentes. Ezequiel Martínez Estrada, en *Radiografía de la pampa* (1933), señaló el divorcio entre las multitudes y ciertas élites europeizantes, incapaces de comprender esta sociedad y de elaborar un sistema de normas y principios sustentado en creencias colectivas. Véase Luis A. Romero, *op. cit.*, p. 94

53 Beatriz Sarlo: *Una modernidad periférica. Buenos Aires 1920 y 1930*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.

Bibliografía

- Allub, Leopoldo, *Orígenes del autoritarismo en América Latina*, México, Katún, 1983.
- Ansaldi, Waldo, Pucciarelli, Alfredo y Villarruel, José C., *Argentina en la paz de dos guerras, 1914-1945*, Buenos Aires, Biblos, 1993.
- Aspiázu, Daniel, Basualdo, Eduardo Marcelo y Khavisse, Miguel, *El nuevo poder económico de los ochenta*, Buenos Aires, Legasa, 1988.
- Buchrucker, Christian, *Nacionalismo y peronismo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1985.
- Campione, Daniel, “Del intervencionismo conservador al intervencionismo populista. Los cambios en el aparato del Estado: 1940-1946”, *Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política*, vol. 2, N° 4, agosto de 1997.
- Cantón, Darío, Moreno, José Luis y Ciria, Alberto, *La democracia constitucional y su crisis*, Buenos Aires, Paidós, 1980.
- Cataruzza, Alejandro (dir. tomo), *Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo VII, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.
- De Sagastizábal, Leandro, Marcaida, Elena, Scaltritti, Mabel y De Luque, Susana, *Argentina 1880-1943. Sociedad y Estado. Aproximaciones a su estudio*, Buenos Aires, C.E.L., 1995.
- Del Campo, Hugo, *Sindicalismo y peronismo*, Buenos Aires, Clacso, 1983.
- Díaz Alejandro, Carlos, *Ensayos sobre la historia económica argentina*, Buenos Aires, Amorrurto, 1983.
- Di Tella, Torcuato y Zymelman, Manuel, *Las etapas del desarrollo económico argentino*, Buenos Aires, Eudeba, 1967.
- Dorfman, Adolfo, *Historia de la industria argentina*, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1983.
- Ferrer, Aldo, *La economía argentina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1963.
- García Delgado, Daniel, *Estado y Sociedad*, Buenos Aires, Flacso, 1996.
- Gaudio, Ricardo y Pilone, Jorge, “Estado y relaciones laborales en el período previo al surgimiento del peronismo 1935-1943”, *Desarrollo Económico*, vol. 23, N° 90, julio-septiembre de 1983.
- Gaudio, Ricardo y Pilone, Jorge, “El desarrollo de la negociación colectiva durante la etapa de la modernización industrial 1935-1943”, *Desarrollo Económico*, vol. 24, N° 24, julio-septiembre de 1983.
- Germani, Gino, *Estructura social de la Argentina*, Buenos Aires, Raigal, 1955.
- Germani, Gino, *Política y sociedad en una época de transición*, Buenos Aires, Paidós, 1968.
- Giberti, Horacio, *Historia económica de la ganadería argentina*, Buenos Aires, Solar, 1981.
- González Leandri, Ricardo, “La nueva identidad de los sectores populares”, en Cataruzza, Alejandro (dir. de tomo), *Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo VII, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.
- Hobsbawm, Eric, *Historia del siglo XX*, Buenos Aires, Crítica, 1998.
- James, Daniel, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Llach, Juan José, “La Argentina que no fue”, en *Las fragilidades de la Argentina agroexportadora (1918-1930)*, Buenos Aires, IDES, 1985.
- Malgesini, Graciela y Álvarez, Norberto, *El Estado y la economía, 1930-1955 (I)*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.

- Marcor, Darío, “Partidos, coaliciones y sistemas de poder”, en Cataruzza, Alejandro (dir. de tomo), *Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943)*, Nueva Historia Argentina, tomo VII, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.
- Margulis, Mario, *Migración y marginalidad en la sociedad argentina*, Buenos Aires, Paidós, 1972.
- Matsushita, Hiroshi, *Movimiento obrero argentino, 1930-1945, sus proyecciones en los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XX, 1983.
- Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos, *Estudio sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1981.
- Ortiz, Ricardo M., *Historia económica argentina*, Buenos Aires, Plus Ultra, varias ediciones.
- Plotkin, Mariano, *Mañana es San Perón*, Buenos Aires, Ariel Historia Argentina, 1994.
- Portantiero, Juan Carlos, “La crisis de un régimen, una mirada retrospectiva”, en Nun, José y Portantiero, Juan Carlos (comps.), *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*, Buenos Aires, Puntosur, 1987.
- Romero, José Luis, *El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1983.
- Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- Rouquié, Alain, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, dos tomos, Buenos Aires, Emecé, 1981.
- Sábato, Jorge Federico y Schvarzer, Jorge, “Funcionamiento de la economía y poder político en la Argentina: trabas para la democracia”, en Rouquié, Alain y Schvarzer, Jorge (comps.), *¿Cómo renacen las democracias?*, Buenos Aires, Emecé, 1985.
- Sábato, Jorge Federico y Roulet, Jorge Esteban, “Estado y administración pública en la Argentina, ¿frenos o motores del proceso de cambio social?”, *Historia Integral Argentina*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1972.
- Sarlo, Beatriz, *Una modernidad periférica. Buenos Aires 1920 y 1930*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.
- Schvarzer, Jorge, *La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina*, Buenos Aires, Planeta, 1996.
- Schvarzer, Jorge, “1925-1955, Argentina, expansión y crisis”, *Todo es Historia*, N° 124, septiembre de 1975.
- Tarcus, Horacio, “La crisis del Estado populista. Argentina 1976-1990”, *Realidad Económica*, N° 107, 1 de abril al 15 de mayo de 1992.
- Torre, Juan Carlos, “La ciudad y los obreros”, en Romero, José Luis y Romero, Luis Alberto (comps.), *Buenos Aires, historia de cuatro siglos*, tomo II, Buenos Aires, Abril, 1982.
- Villanueva, Javier, “El origen de la industrialización argentina”, *Desarrollo Económico*, N° 47, octubre-diciembre de 1972.
- Waldmann, Peter, *El peronismo 1943-1955*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- Zannatta, Loris, *Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo, 1930-1943*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.

Conformación y límites de la alianza peronista (1943-1955)

Alejandra Giuliani

1. Introducción

En junio de 1943 un golpe de Estado derrocó al presidente Ramón Castillo y clausuró el poder legislativo, dando fin al gobierno de la Concordancia, coalición política que gobernaba el país desde 1932.

Así, las Fuerzas Armadas instauraron una dictadura que se prolongó hasta febrero de 1946, cuando se realizaron elecciones generales. En ellas se presentaron sólo dos fuerzas políticas. Por un lado, la Unión Democrática, coalición heterogénea de los partidos políticos tradicionales que contaba con el apoyo de la mayoría del empresariado, de las conducciones de la Unión Industrial Argentina, de la Sociedad Rural Argentina y del Departamento de Estado norteamericano. Por el otro, el Partido Laborista y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, expresión de una alianza entre sectores mayoritarios del movimiento obrero, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y un grupo de empresarios industriales. Esta fuerza política, cuyo candidato a la Presidencia era el coronel Juan Domingo Perón, triunfó con el 52 por ciento de los votos. Se iniciaba de ese modo el primer gobierno peronista.

¿Qué había cambiado en Argentina entre 1943 y 1946? ¿Cómo fue posible que en menos de tres años se organizara una nueva fuerza política capaz de derrotar a los partidos políticos tradicionales unidos? ¿Cómo logró aquel primer peronismo desplazar del control del Estado a la burguesía terrateniente? La parte inicial de este trabajo se preguntará por los orígenes del peronismo, por su composición como alianza política y social, por las razones de su arribo al gobierno. Para ello debemos remontarnos a la Argentina de 1943, a los cambios que venían produciéndose desde la década previa y sobre los que actuó el grupo de Perón, definiendo su proyecto y articulando su fuerza política.

Sólo entonces abordaremos las transformaciones sociales, económicas y políticas del período 1946-1955: el proyecto económico impulsado por el gobierno

peronista, los cambios en el régimen de acumulación y en las funciones del Estado, los límites que se plantearon a partir de las relaciones entre las políticas de gobierno y los sectores de la sociedad a las que éstas respondían. Además, destacaremos la centralidad que el proceso de transformación del Estado tuvo en aquellos años. De allí surgirán la dinámica y las contradicciones del peronismo como alianza policlasista, así como la polarización peronismo-antiperonismo característica del período.

A su vez, intentaremos caracterizar el régimen político durante los años peronistas. Señalaremos, principalmente, las formas de integración de los sectores trabajadores a la vida política y sus prácticas políticas distintivas del período. En este sentido, prestaremos especial atención a la incorporación política de los trabajadores a través del desarrollo del movimiento obrero peronista y de sus luchas. Nuevamente, marcaremos las tensiones dentro de la alianza peronista, el impacto en los sectores antiperonistas, y la posición del gobierno, provocados por el fortalecimiento del movimiento obrero.

En la parte final del trabajo abordaremos el proceso político que llevó a la crisis de la alianza peronista y a su caída, provocada por el golpe de Estado cívico-militar de septiembre de 1955. Para el análisis de las causas del derrocamiento del peronismo, partiremos de las modalidades de control social que ejerció el Estado, el proceso de “peronización” y el abandono de la alianza peronista por parte de sectores que habían sido sus bases de sostén.

Resulta evidente que este trabajo no pretende abarcar toda la riqueza del período en cuestión, sino acercar una propuesta de interpretación del primer peronismo, entendiéndolo como fuerza política que expresó una alianza social. Y proponer el análisis de aquellos años desde categorías teóricas relevantes: el régimen de acumulación, el Estado y el sistema político.

Al mismo tiempo nos proponemos presentar algunos elementos de las diferentes líneas historiográficas que interpretaron los orígenes del peronismo y las primeras presidencias de Perón. Se pretende así confrontar distintas visiones, deudoras de largos debates y de profundos conflictos sociales que produjo la sociedad argentina desde la irrupción del peronismo.

2. 1943: la sociedad en la que se formó el peronismo

Hacia 1943 la sociedad argentina atravesaba procesos significativos de cambio. En primer lugar, las relaciones entre los beneficiarios del capitalismo dependiente argentino y los centros capitalistas mundiales se habían tornado críticas. La crisis internacional de 1930 había impactado sobre la economía local y había

llevado a que la burguesía agraria redefiniese el régimen de acumulación agroexportador, vigente hasta ese entonces. Ante la imposibilidad de retornar al “librecambio” con altos márgenes de rentabilidad, desde 1933 se fomentó un proceso de industrialización por sustitución de importaciones con carácter limitado. A la vez, el desplazamiento del predominio económico de Gran Bretaña por Estados Unidos había colocado a los sectores locales de poder en una situación de indefinición acerca de cómo reinsertar al país en el mercado mundial y cómo replantear las relaciones internacionales. Desde 1939 el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial generó nuevas dificultades –y nuevas posibilidades– a la tradicional clase dominante argentina, y profundizó aquellas indefiniciones.

En una coyuntura con crecientes dificultades para generar beneficios, los intentos por mantener la agroexportación sumados al fomento de las oportunidades industriales complejizaron los intereses de la clase dominante local y la conflictividad entre sus sectores. Existen diversas interpretaciones acerca del grado de diferenciación y de contradicciones entre los intereses agrarios e industriales en aquella época. Algunos autores han afirmado que existía un definido antagonismo entre la burguesía industrial y la burguesía agraria. Otros, como Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, analizaron la composición de la clase dominante de la década del 30 y visualizaron una diferenciación marcada entre agrarios e industriales, si bien ambos sectores sostenían una “alianza de clases propietarias”. Alianza en la cual el sector de la burguesía agraria más concentrado conservaba el control hegemónico y lideraba el proceso de industrialización¹. Aquí tendremos en cuenta las interpretaciones que afirman que a principios de la década del 40 la clase dominante continuaba su tradicional proceso de diversificación y se mantenía relativamente homogénea². De modo que consideraremos que a principios de la década del 40 la burguesía argentina no se encontraba fracturada en sectores antagónicos (agrarios-industriales), situación más acorde a los casos de países de industrialización “con revolución industrial”. Es decir que el peronismo no se originó sobre la base de una burguesía industrial enfrentada a los intereses de la burguesía agraria, sino que se formó a partir de la existencia de conflictos y acuerdos entre sectores internos de la clase dominante. Sí es importante tener en cuenta que las oportunidades

1 Véase Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero: *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

2 Véase Daniel Campione: “Del intervencionismo conservador al intervencionismo populista. Los cambios en el aparato del Estado: 1940-1946”, *Revista Taller*, vol. 2, N° 4, agosto de 1997.

generadas por la Segunda Guerra Mundial profundizaron aquella conflictividad, al crecer un grupo de empresarios industriales, desvinculado de los tradicionales intereses que ligaban a la burguesía agraria con las actividades industriales y con las empresas extranjeras. Aunque incipiente y sin representaciones corporativas, algunos de esos empresarios formaron parte de los apoyos iniciales con que contó el primer gobierno de Perón.

En estrecha relación con estos procesos, en la década del 30 también se habían iniciado transformaciones en los roles del Estado. Los cambios en el capitalismo mundial acentuaron la vulnerabilidad de la economía argentina y llevaron a que el gobierno de la Concordancia implementase un “intervencionismo defensivo”, en protección de los intereses agroexportadores. Frente a la perdurabilidad de condiciones que en un principio aparecían como transitorias, el Estado reorientó sus mecanismos de intervención para sostener la acumulación ligada a la agroexportación a la vez que fomentar el crecimiento industrial, articulando, así, intereses cada vez más complejos. Ello redundó en una progresiva “autonomización” del aparato estatal³, que adquirió capacidades para exceder su dimensión instrumental y desarrollar sus dimensiones estructural y política⁴.

El carácter intervencionista del Estado se acentuó ante el nuevo escenario planteado con la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el Estado fue llamado a enfrentar los problemas coyunturales de abastecimiento de insumos importados, de colocación de los productos exportables y de desajustes monetarios. Pero por otro lado, desde el Estado se discutió una reorientación más profunda del rumbo económico, se buscaron “respuestas ordenadoras”, se elaboraron proyectos que cuestionaban el lugar que tenía asignado el mercado interno y la industrialización⁵. De modo que, ante la necesidad de articular intereses cada vez más complejos dentro de la clase dominante, el Estado que tomaron los golpistas de 1943 –y desde el cual Perón articularía su alianza– había adquirido ya una progresiva autonomía. Asimismo, había desplegado mecanismos de intervención variados, como las juntas reguladoras, el Banco Central mixto, y algunas empresas productivas ligadas al poder militar.

En los años 30, la sustitución de importaciones industriales había provocado cambios en la composición de la clase obrera. Junto al aumento en la cantidad

3 Véase Daniel Campione, *op. cit.*

4 Véase Susana De Luque y Miguel Mazzeo: “Estado y sociedad, régimen político y régimen de acumulación. Algunos conceptos para la comprensión de la historia argentina”, que integra esta misma obra.

5 Un ejemplo de ello fue el Plan Pinedo de 1940. El hecho de no aprobarse en el Congreso marcaba la complejidad de intereses dentro de la clase dominante. Véase Daniel Campione, *op. cit.*, p. 133, y Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, *op. cit.*, pp. 33-42.

de obreros se había acelerado el proceso de urbanización con las migraciones internas. Una característica esencial de la industrialización de la época consistió en que la creciente incorporación de mano de obra industrial no había sido acompañada por un proceso de redistribución de ingresos hacia los trabajadores. Así, los obreros habían permanecido excluidos de los beneficios de la industrialización y no habían logrado aumentar su baja capacidad de consumo. Sin la preocupación ni la necesidad por legitimarse en el control del Estado ante las mayorías, los dirigentes de la Concordancia limitaron la instrumentación de los mecanismos de intervención estatal a la articulación de intereses entre sectores de la clase dominante. El Estado de los años 30 en general no reconoció —y menos aun garantizó— los derechos por los que luchaba el movimiento obrero. Si bien se implementó cierta legislación laboral, no se solía imponer su cumplimiento y la norma en la política hacia el movimiento obrero era la represión concertada entre empresarios y Estado⁶. Ese Estado que no reconocía los derechos sociales de las mayorías tampoco garantizaba los derechos políticos puestos en juego desde 1916. Por el contrario, el régimen político que sostenía en el poder a la clase dominante se regía por el fraude y excluía de la participación y de la representación política a la mayoría de la sociedad. De ello surge otro elemento importante para explicar el golpe de Estado de 1943 y el inicio del proyecto de Perón: a lo largo de la década se fue profundizando la pérdida de legitimidad del sistema político y la crisis de representación política, procesos que se acentuaron desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, debido principalmente a tres factores.

En primer lugar, hacia 1943 algunos integrantes de la clase dominante local y de las Fuerzas Armadas interpretaban el desarrollo de la guerra como un “avance comunista”; una clase obrera excluida del sistema político y del modelo económico se les presentaba como una potencial amenaza.

Por otro lado, sectores civiles de poder jerarquizaron las ideas militares e incorporaron a cargos estatales a algunos de sus integrantes. Para ciertos grupos militares las condiciones de éxito militar ante una guerra eventual dependían de que la sociedad adquiriera “independencia económica” sostenida por un “Estado fuerte” y de que se limitaran al máximo los conflictos sociales y el descontento de la población⁷. Claro está que la relación de fuerzas políticas vigente hacia 1943 hacía inviable la puesta en marcha de tal proyecto.

6 Véase Daniel James: *Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990, p. 21.

7 Daniel Campione, *op. cit.*, p. 135.

Por último, la pérdida de legitimidad del sistema político se profundizó frente a las posiciones del gobierno ante los bandos que libraban la Guerra Mundial. El presidente Castillo había seguido una política de neutralidad, y persistió en esa posición aun cuando Estados Unidos entró en el conflicto. En ese nuevo contexto, la neutralidad oficial fue interpretada por la mayoría de los partidos políticos tradicionales como un apoyo al Eje nazi-fascista. Sectores cada vez más amplios de la opinión pública generaron un clima de descontento social y presionaron al gobierno por una definición pro-aliados, que en términos de la política interna significaba una denuncia contra la pérdida de derechos políticos, las prácticas de fraude y el alejamiento de los “valores democráticos”. Por su parte, las Fuerzas Armadas también se hallaban inmersas en la controversia por la definición del país ante la guerra. Mientras los altos oficiales del Ejército se inclinaban por la declaración de guerra al Eje, entre la oficialidad intermedia primaba la opinión de mantener la neutralidad⁸.

En este contexto conflictivo, el presidente Castillo designó como candidato oficial a las elecciones presidenciales convocadas para septiembre de 1943 al senador conservador Robustiano Patrón Costas, partidario de la continuación del fraude que adhería a la posición de los Estados Unidos en la guerra. De modo que la decisión de Castillo terminó por unir a distintos sectores militares y precipitó el golpe que éstos venían gestando: el 4 de junio de 1943 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de la Concordancia e impusieron una dictadura que se mantuvo hasta 1946.

3. 1943-1946: los orígenes del peronismo

Las pujas entre los diversos sectores militares que confluyeron en el golpe de Estado marcaron el tono de conflictividad de los primeros meses de la “Revolución de Junio”. Inicialmente se mantuvo el rumbo económico del gobierno de Castillo, pero en octubre de 1943 se produjo un “golpe dentro del golpe” y adquirieron mayor preponderancia los militares pertenecientes al Grupo de Oficiales Unidos (GOU), entre los cuales se encontraba el entonces coronel Juan Domingo Perón⁹. Desde ese momento Perón fue abriéndose espacios de decisión dentro del Estado. Hacia julio de 1944 era ya el hombre fuerte del gobierno: acumulaba los cargos de secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente. ¿A qué se

8 Juan Carlos Torre: “Introducción a los años peronistas”, en Juan Carlos Torre (dirección de tomo), *Los años peronistas (1943-1955)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, p. 15.

9 *Idem*, p. 17.

debía el ascenso vertiginoso de Perón? Mucho se ha escrito sobre sus “verdaderos” objetivos. Como veremos más adelante, la interpretación del ascenso político de Perón se relaciona estrechamente con las diferentes visiones acerca de por qué la mayoría de los trabajadores se hicieron peronistas. Y como nuestro estudio no pretende abordar el análisis de las aspiraciones *personales* de los líderes políticos, centraremos la atención en los procesos de cambio que explican el ascenso político de Perón. En todo caso, coincidimos con Juan Carlos Torre, cuando afirma que “fue él quien supo ofrecer en esos momentos difíciles dos cosas de las que carecía la Revolución de Junio: un programa social y económico y una apertura hacia grupos estratégicos de la sociedad”¹⁰.

La afirmación de Torre señala dos de los tres procesos de cambio que tendremos en cuenta para comprender cómo se originó el peronismo. En efecto, entre 1943 y 1946, desde sus cargos de gobierno, Perón comenzó a desplegar un proyecto económico que, valiéndose de las nuevas condiciones del capitalismo mundial, iniciaría un cambio dentro del régimen de acumulación industrial.

En el mismo período se articularon nuevas relaciones entre el Estado y los diferentes sectores de la sociedad –fundamentalmente entre el Estado y la clase obrera– y también una “apertura” del Estado hacia empresarios industriales desplazados de la alianza de poder de los años previos.

Pero, además, entre 1943 y 1946 se construyó la fuerza política que llevó a Perón a la Presidencia en 1946. Fueron los años del “trabajo por la legitimidad”¹¹. Es decir que, desde el control de espacios estatales, Perón fue organizando alianzas políticas para arribar al gobierno mediante mecanismos constitucionales. Así, desplegó estrategias que le permitieron construir una base amplia de consenso social.

Esta distinción de tres procesos simultáneos, pero diferenciados en el análisis, nos permite complejizar los momentos fundantes del peronismo, alejándonos de las interpretaciones lineales. Por ejemplo, la legislación social del período ha sido interpretada por la historiografía antiperonista como un paquete de medidas demagógicas en pos del encumbramiento político de Perón. Esa interpretación, en el mejor de los casos, restringe lo ocurrido en aquellos años centrándose exclusivamente en las aspiraciones políticas de Perón, y soslaya que el aumento de la capacidad de consumo de los asalariados era un punto central del proyecto económico y favorecía, además, la acumulación de capital industrial. El “programa económico” del coronel Perón consistía básicamente en el fomento estatal a la industria teniendo en cuenta el mercado interno de consumo

10 Juan Carlos Torre: *op. cit.*, p. 24.

11 Daniel Campione, *op. cit.*

como potencial espacio de demanda en la posguerra, en el marco del “orden y la paz social”. Los mecanismos estatales privilegiados para llevar adelante el proyecto debían aún ser organizados, ya que, como vimos, hasta el momento el Estado sólo había desplegado un tipo de intervencionismo “defensivo”. De modo que, para tales fines, se crearon organismos tales como el Banco Industrial, la Secretaría de Industria y Comercio y, principalmente, la Secretaría de Trabajo y Previsión (1943) y el Consejo Nacional de Posguerra (1944).

A fines de 1943, Perón fue designado secretario de la flamante Secretaría de Trabajo y Previsión (STP). La STP abrió nuevas áreas de acción estatal, jerarquizaba las políticas sociales y concentraba la gestión de las relaciones laborales, las políticas de vivienda y de jubilaciones. Al mismo tiempo aseguraba la protección de los pequeños productores rurales e indígenas¹².

La política de legislación social seguida por la STP implicó una ruptura en las relaciones de trabajo y, a la vez, significativos cambios tanto en la intervención del Estado en las relaciones entre empresarios y trabajadores, como en las del propio Estado con cada una de esas clases sociales. La STP, a través de variados decretos, estableció aumentos salariales, el derecho de todo trabajador a un período anual de vacaciones pagas, a percibir una indemnización proporcional a su antigüedad al ser despedido sin causa (Ley de Despidos), al sueldo anual complementario (aguinaldo) y al seguro social y la jubilación para un importante sector de los asalariados. Además, la STP garantizó el cumplimiento de legislación previa que, en general, el empresariado evadía, como la de jornada de trabajo de ocho horas diarias y cuarenta y cuatro semanales y la de indemnizaciones por accidentes laborales. Asimismo, estableció un conjunto de estatutos particulares para distintos sectores de trabajadores. El principal de ellos fue el Estatuto del Peón Rural: fijó por primera vez un sistema de salarios mínimos para diferentes trabajos rurales, estabilidad laboral, descanso dominical obligatorio y mejoras en las condiciones de trabajo, alimentación y vivienda de los peones.

La legislación social implicó el reconocimiento estatal de derechos por los que luchaba el movimiento obrero desde principios del siglo XX. Era también una señal concreta de un espacio estatal que buscaba colocarse como “protector” de los trabajadores frente al empresariado. Con ella comenzó a aumentar la capacidad de consumo de los asalariados al tiempo que alarmaba a las cámaras empresariales, ya que consideraban la labor de la STP -que con su intervención limitaba la acción de los empresarios- como una injerencia “antinatural” y ajena a las relaciones de trabajo. En especial, la Sociedad Rural Argentina rechazó la intervención del Estado en la vida de las estancias, espacio que tradicionalmen-

12 Daniel Campione, *op. cit.*, p. 143.

te controlaban los terratenientes con exclusividad, y sostenía, con razón, que el Estatuto del Peón afectaba directamente sus ganancias. De modo que, entre 1943 y 1946, la política social de Perón fue delimitando los sectores que formarían parte de su fuerza política, y los que se excluirían. Ello no implica que Perón no haya buscado apoyo empresarial en esos años.

Al mismo tiempo, desde la STP, Perón profundizó el intervencionismo estatal en las relaciones laborales a través de un firme fomento a la sindicalización y mediante los primeros convenios colectivos de trabajo.

En tiempos del golpe de 1943, aproximadamente un 20 por ciento de los trabajadores se hallaba sindicalizado. La organización gremial era mayor en los sectores de servicios y más incipiente en las actividades industriales. En los primeros, la mayoría constituía un gremialismo “reformista y negociador”¹³ liderado por socialistas y, en menor medida, por sindicalistas. En cambio, en la organización gremial de las industrias primaba una dirigencia comunista. El liderazgo sindical compartido entre socialistas y comunistas había llevado a la formación de centrales sindicales rivales. En ese contexto, durante los primeros meses de la Revolución de Junio se desplegó una política represiva, que continuaba las implementadas durante la “Década Infame”. El corte anticomunista del nuevo régimen se manifestó con rapidez: días después del golpe los principales dirigentes y militantes comunistas habían sido puestos en prisión. A la vez, la política de control sobre el movimiento obrero abarcó un decreto por el cual el gobierno se arrogó el derecho de determinar qué organizaciones podían representar a los trabajadores.

La injerencia del Estado en la organización del movimiento obrero se complejizó cuando Perón se hizo cargo del área laboral a fines de 1943. La política se volvió “selectiva”, ya que mantuvo un carácter represivo hacia los comunistas, mientras se iniciaban contactos con dirigentes gremiales sindicalistas y socialistas, que ocuparían espacios dejados por los comunistas. A la vez, se elaboraron decretos para promover las negociaciones colectivas bajo la tutela estatal y la STP facilitó la sindicalización. En suma, se socavaba la influencia de las fuerzas comunistas a la vez que se transformaba al Estado en una instancia política a la que podían recurrir muchos de los trabajadores para nivelar las relaciones de fuerza en las empresas¹⁴.

En diversos y conocidos discursos del período 1943-1946, Perón justificaba sus políticas al tiempo que difundía lo que Daniel James llamó “elementos ideológicos del peronismo”¹⁵. El Estado, sostenía Perón, debía ser el artífice y el

13 Véase Louise Doyon, “La formación del sindicalismo peronista”, en Juan Carlos Torre (dirección de tomo), *Los años peronistas (1943-1955)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, p. 360.

14 *Idem*, pp. 362-363.

15 Daniel James, *op. cit.*, primera parte: “Los antecedentes”, pp. 19-65.

garante de la “armonía de clases” y de la “justicia social”. Ante el empresariado, Perón argumentaba que si el Estado no tutelaba las relaciones entre el capital y el trabajo, continuaría una situación injusta para los trabajadores y avanzaría entre los obreros la difusión de ideas comunistas, poniéndose en peligro el orden social y la misma “Nación”. Por el contrario, afirmaba que una clase obrera organizada junto a un Estado atento a la “cuestión social” constituía la garantía de la cohesión social, la finalización de la “lucha de clases” y, en consecuencia, el clima adecuado para la inversión y la ganancia empresarial. Como ocurría en otros países por la misma época, en la política social convergían los objetivos de control social, de generación de instrumentos para aumentar la demanda y la búsqueda de consenso.

De ese modo, como sostiene Daniel Campione, “se le asignaba al Estado el rol de tercero indispensable en todas las relaciones entre capital y trabajo”¹⁶. Se provocaba un aumento en la autonomía del aparato estatal con respecto a los intereses inmediatos de los sectores dominantes: cada vez más, el Estado se colocaría “por arriba” de las clases sociales.

En su trabajo *Resistencia e integración...*, Daniel James analizó las implicancias que la “armonía de clases”, considerada un elemento formal de la ideología peronista, ejerció en las relaciones entre el Estado peronista y el movimiento obrero. Para James, la preocupación de Perón por los peligros de la “masa desorganizada” debía cristalizar en que los sindicatos actuaran como “instrumentos del Estado para movilizar y controlar a los trabajadores”. Y sostiene que actuó como elemento cooptativo del peronismo, reflejado en exhortaciones oficiales a los trabajadores para conducirse pacíficamente, tales como el conocido “de casa al trabajo y del trabajo a casa”.¹⁷

Sin embargo, en el período de formación del peronismo, la difusión de la idea de “armonía de clases” habría actuado más bien como elemento constructivo de la identidad peronista, como “atractivo ideológico”. Habría colaborado con la estructuración de un sentimiento de pertenencia de los trabajadores a un proyecto de país, a la industrialización como “empresa nacional”, y de unión con empresarios también nacionales, portadores de un “capital progresista”, diferenciado, en el discurso peronista, del capital extranjero, de carácter “explotador e inhumano”¹⁸. Desde luego, Perón también ponía en juego así parte de su estrategia en la búsqueda de un consenso con amplias bases sociales para construir su fuerza política. En este sentido, y más allá de los sentimientos de los

16 Daniel Campione, *op. cit.*, p. 138.

17 Daniel James, *op. cit.*, p. 51.

18 *Idem.*

trabajadores, la mayoría de los dirigentes sindicales, por lo menos hasta mediados de 1945, aprovecharon las oportunidades que les ofrecía la STP al tiempo que se mantenían distantes y críticos del gobierno militar.

En la concepción del Estado que difundió Perón entre 1943 y 1946, se desplegaron también rasgos de planificación económica. En mayo de 1944 fue creado el Consejo Nacional de Posguerra, que reunió a militares, empresarios y sindicalistas. Entre sus objetivos se destacaban el estudio de la situación económica y social del país, el establecimiento de los “posibles desequilibrios” que ocasionaría el fin de la Guerra Mundial y la preparación de un programa económico a adoptar en función de sus diagnósticos. El Consejo Nacional de Posguerra propuso un programa industrialista sostenido por el Estado y por el aumento de la demanda interna. Además, instrumentó buena parte de las medidas que adoptaron el gobierno militar primero y luego el peronismo entre 1946 y 1949. Pero el hecho mismo de la creación del Consejo expresaba la nueva concepción planificadora, ya que era el Estado el que convocaba y sometía la iniciativa privada a sus orientaciones¹⁹.

4. 1945: polarización social y política

Hacia 1945, la profundización de la política social y el avance del Estado en ámbitos de decisión tradicionalmente exclusivos de los empresarios, enfrentaron a las organizaciones patronales con los sindicatos y con el sector del gobierno liderado por Perón. La oposición de la Sociedad Rural Argentina se centraba en el Estatuto del Peón y se extendía a la consideración de que un desarrollo industrial más profundo que el que había liderado la burguesía agraria en la década del 30 era contrario a sus intereses. Más heterogénea, pero no menos conflictiva, era la posición de los integrantes de la Unión Industrial Argentina. Si bien la UIA oficialmente asumió un papel opositor destacado, la política industrialista del gobierno generaba tensiones entre sus miembros. Finalmente, sólo una minoría de ellos adhirió inicialmente al proyecto del coronel Perón²⁰. Lo que atemorizaba a la mayoría de los empresarios no era una inminente revolución comunista, sino la organización del movimiento obrero promovida desde la STP, la garantía estatal de los derechos de la clase obrera y el rol de “árbitro de la paz social” que Perón se asignaba. Sólo industriales que habían crecido con las oportunidades abiertas por la guerra y que se orientaban principalmen-

19 Daniel Campione, *op. cit.*, p. 145.

20 Véase Ricardo Sidicaro: *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55 / 1973-1976 / 1989-99*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, p. 58.

te al mercado interno apoyaban a un posible gobierno peronista. Lo expuesto no excluye que, hasta mediados de 1945, Perón haya buscado adhesiones dentro de las corporaciones empresarias y de los partidos políticos tradicionales. Es que, en función de construir una fuerza política capaz de llegar al control del Estado, desplegó estrategias basadas en incorporar fuerzas de casi todo el espectro político y luego en promover una polarización política. Como afirmó Horacio Pereyra, “Perón, en su primera instancia previa a la Presidencia, dialogó con todos los sectores, en un esfuerzo por la suma, hasta que desató el conflicto y polarizó”²¹.

Así, hacia mediados de 1945, al calor de las políticas de Perón, se agudizaron las tensiones entre capital y trabajo, se frustraron los intentos de alianza del coronel con líderes políticos tradicionales y se desató una polarización política. El inminente triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial unió a una heterogénea oposición a Perón conformada por los partidos políticos tradicionales de los obreros, de la clase media y de la burguesía —enfrentados además con el régimen por su trayectoria antiliberal y neutralista—, las corporaciones empresarias, estudiantes universitarios y sectores de las Fuerzas Armadas. Este polo exigía la entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia, para que fueran sus ministros quienes convocaran a elecciones.

Por su parte, los sindicatos abandonaron su distancia con el régimen y se alinearon con la STP. Simultáneamente, Perón forzó la confrontación profundizando las medidas sociales y asumiendo un discurso marcadamente obrerista. Así, alejaba al Estado del papel conciliador que antes le había dado.

En octubre el conflicto se extendió al interior del gobierno militar: los sectores de las Fuerzas Armadas ligados a la oposición desplazaron de sus cargos a Perón y lo detuvieron. En este contexto se abrió un intenso período de lucha política protagonizado por los trabajadores, que culminaría con el triunfo del peronismo en las elecciones de febrero de 1946. Su momento más álgido fue la movilización popular del 17 de octubre: un día antes de la huelga general convocada por los dirigentes sindicales para el 18 de ese mes, numerosos grupos de trabajadores manifestaron su adhesión a Perón en las principales ciudades del país.

En Buenos Aires, desde los suburbios industriales los manifestantes confluyeron en Plaza de Mayo y exigieron la libertad de Perón. Mientras, el gobierno debatía las medidas a tomar y dialogaba con dirigentes cercanos al coronel. Por su parte, las fuerzas policiales y militares no estuvieron dispuestas a reprimir la manifestación. El desenlace, hacia la noche, fue la liberación de Perón, su dis-

21 Horacio Pereyra: “Algunas hipótesis para el análisis del peronismo (1945-1955)”, *Cuadernos de Historia Argentina* 1, Buenos Aires, Biblos, 1988, p. 5.

curso en los balcones de la Casa de Gobierno, y el inicio oficial de su carrera a la presidencia.

El 17 de octubre concentra una alta significación. Para el movimiento peronista simbolizó la lealtad del pueblo al líder. Para la sociedad tradicional fue la sorpresa y el temor ante la evidencia de que los trabajadores habían demostrado capacidad para generar un hecho político que logró torcer la coyuntura a su favor.

Daniel James sostiene que el peronismo tuvo un “significado social herético”, y que buena parte de tal carga simbólica se evidenció públicamente por primera vez en aquel 17 de octubre. La manifestación popular y las formas que asumió rechazaron “las formas aceptadas de jerarquía social y los símbolos de autoridad”²². El sitio elegido, la Plaza de Mayo, significó una transgresión de los criterios tradicionales de jerarquía espacial. La conducta de los manifestantes, irreverente y hasta festiva a los ojos de la sociedad tradicional, subvertía la autoridad cultural de los sectores dominantes y de la clase media.

El 17 de octubre inició entonces la campaña electoral, signada por una fuerte polarización social y política. Las fuerzas de la oposición se nuclearon en la Unión Democrática, conformada por la UCR, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista, a la cual adhirieron las organizaciones empresarias.

Dirigentes sindicales de diferentes vertientes ideológicas –socialistas, sindicalistas, radicales e independientes–, y en su mayoría con amplia experiencia sindical, crearon el Partido Laborista. Su fundación, su programa, su discurso clasista y su objetivo de participar de manera autónoma en las elecciones demostraban el importante grado de organización alcanzado por sectores de la clase obrera antes de 1943²³. Sin embargo, su pretensión de autonomía era problemática porque los dirigentes reconocían el liderazgo de Perón entre los trabajadores y le ofrecieron la candidatura a la Presidencia.

La alianza política que llevaba a Perón como candidato a presidente contaba además con el apoyo de la Iglesia. La dictadura de junio había perseguido a los comunistas y había establecido la enseñanza religiosa. En la campaña electoral la Unión Democrática se oponía a la orientación clerical del régimen y agitaba la bandera de la enseñanza laica. Estas razones prevalecieron en la decisión de la jerarquía eclesiástica por sobre su rechazo al discurso y a la política obrerista de Perón. También buena parte de las Fuerzas Armadas se encolumnaron tras él, luego del apoyo popular demostrado hacia la labor del régimen el 17 de octu-

22 Daniel James, *op. cit.*, p. 48.

23 Murmis y Portantiero, *op. cit.*

bre. Completaban los apoyos pequeños y medianos empresarios sin representación corporativa y sectores minoritarios de partidos políticos tradicionales.

La campaña electoral ofreció a Perón la oportunidad para desplegar un discurso “nacionalista-antiimperialista”, otro elemento ideológico de la identidad del movimiento peronista de aquellos tiempos. El ex embajador norteamericano Spruille Braden, entonces subsecretario de Estado en Estados Unidos, hizo público su apoyo a la Unión Democrática y dio a conocer un informe donde denunciaba conexiones de militares argentinos con el régimen nazi. La intromisión de Braden fue aprovechada por Perón: a su discurso de tono obrerista agregó una apelación a la unidad nacional contra el imperialismo norteamericano. Perón denunciaba que el enemigo externo tenía colaboradores dentro de la sociedad argentina: la “oligarquía vendepatria”. Su idea quedó sintetizada cuando afirmó: “Sepan quienes votan el 24 la fórmula del contubernio oligárquico-comunista, que con este acto entregan su voto al señor Braden. La disyuntiva en esta hora trascendental es ésta: ¡Braden o Perón!”²⁴.

En las elecciones de febrero de 1946 la fórmula Perón-Quijano se impuso a la de la Unión Democrática obteniendo el 52 por ciento de los votos.

5. Los obreros y los orígenes del peronismo

¿Por qué los trabajadores se hicieron peronistas? La pregunta ha recorrido la historiografía, ha sido respondida desde variadas posiciones ideológicas y ha generado debates. Nos interesa presentar tres visiones que sobresalieron en el campo académico: la “visión clásica”, la “visión revisionista” y la interpretación del historiador británico Daniel James. Estos enfoques presentan diferentes categorías de análisis para estudiar la adhesión al peronismo de buena parte de la sociedad argentina de mediados de siglo XX. Además, las dos primeras visiones reflejan en el campo historiográfico la polarización política peronismo-antiperonismo que siguió signando a la sociedad argentina luego de 1955.

La visión clásica fue configurada por el sociólogo italiano Gino Germani pocos años después del derrocamiento de Perón, imbuida por el proceso de desperonización dominante en el país. Más que preguntarse por qué los trabajadores se hicieron peronistas, a Germani le interesó responder a la pregunta de por qué los obreros fueron engañados y “siguieron” a Perón. Su abordaje se centró en la relación líder-masa: sostenía que el crecimiento industrial de la

²⁴ Citado por Juan Carlos Torre, *op. cit.*, p. 38.

década del 30 y las migraciones internas habían generado un proletariado industrial que no tenía experiencia sindical ni política. Esos trabajadores “nuevos”, recién llegados a las ciudades, estaban “disponibles” para ser manipulados por un líder paternalista y autoritario. Según Germani, la relación entre Perón y la “masa” estaba signada por la heteronomía. Es decir, que los obreros perdieron su autonomía al no formar un partido político clasista, y estaban dominados por un poder carismático y demagógico.

Según esta visión, Perón manipulaba a los obreros, fundamentalmente al “darles” beneficios económicos concretos a cambio de adhesión política. La adhesión no era racional, sino basada en la incapacidad de las mayorías para “reconocer las verdaderas intenciones” de los dirigentes, y en su predisposición para ser engañados y sometidos por la propaganda oficial. De este modo, a tono con las críticas académicas de su época, Germani afirmaba demostrar el carácter antidemocrático del régimen peronista²⁵.

La “visión revisionista” se formuló a fines de la década del 60, en el contexto de las luchas contra la dictadura de la Revolución Argentina y frente a la posibilidad de conformar una fuerza política popular alternativa y viable. En el ya citado trabajo, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero abordaron la peronización de los trabajadores a partir de constatar que en la conformación del peronismo jugaron un papel protagónico no sólo los obreros “nuevos” sino principalmente la vieja dirigencia y militancia sindical. El peronismo se había originado como una alianza policlasista integrada por los obreros de modo racional y pragmático. Su participación activa y autónoma en la alianza implicaba formar parte de un proyecto social que reconociera los reclamos y las luchas tradicionales del movimiento obrero. Para Murmis y Portantiero era erróneo caracterizar de pasiva, heterónoma e irracional a la participación obrera en los orígenes del peronismo. Por el contrario, destacaron la experiencia sindical de la clase obrera y su grado de autonomía, plasmada en la organización del Partido Laborista²⁶.

El aporte de Daniel James²⁷ consistió en abordar esta problemática estudiando la conformación de la *identidad peronista*. James entiende que esa identidad se estructuró como una red de elementos subjetivos que unía a los trabajadores. Los elementos que conformaron los sentimientos de pertenencia al peronismo fueron valores, pensamientos, prácticas y símbolos compartidos por los obreros. En buena parte, esos sentimientos fueron producto de sus experiencias individuales y colectivas de la década previa a 1943.

25 Gino Germani: *Política y sociedad en una época de transición*, Buenos Aires, Paidós, 1966.

26 Murmis y Portantiero, *op. cit.*

27 Daniel James, *op. cit.*

James abordó la relación entre Perón y los peronistas desde un plano simbólico, discursivo. Analizó el discurso de Perón en sus formas y en sus contenidos, y en cómo fue decodificado por los trabajadores. En sus formas —el tono, el vocabulario, los gestos— generó credibilidad e identificación. Sus contenidos actuaron como “atractivos ideológicos”: la “justicia social”, la “independencia económica” y, fundamentalmente, la “dimensión social de la ciudadanía”.

Así, James considera que el éxito del discurso de Perón se debió en buena parte a su capacidad para redefinir la idea de ciudadanía. La ciudadanía entendida como ejercicio pleno de los derechos políticos, frente a la exclusión política, fue un aspecto importante del discurso peronista. Sin embargo, la “ciudadanía política” era un elemento compartido con la tradición radical —y bandera de la Unión Democrática— y claramente desacreditado en el contexto de la crisis de legitimidad de la década del 30. La novedad del discurso peronista consistió en otorgarle una dimensión económico-social a la noción de ciudadanía: los trabajadores tenían derecho a una inclusión en el proyecto económico, a una participación en los beneficios y a organizarse y luchar para que se les reconociesen esos derechos. De modo que la verdadera democracia había de ser construida con “justicia social” y la industrialización ya no podía ser concebida con la “extrema explotación” de los obreros. Ello implicaba, afirmó James, una visión distinta y nueva tanto del rol de los trabajadores en la sociedad como de la relación entre los trabajadores y el Estado.

Sin negar la existencia de elementos paternalistas en el discurso de Perón, James privilegia como atractivo ideológico la apelación a una clase social autónoma, que debía seguir organizándose y requerir al Estado la garantía de sus derechos. Y si bien sostiene que durante sus gobiernos la figura de Perón se identificó con el Estado, la “ciudadanía social” perduraría en el tiempo como elemento ideológico de la clase obrera y explicaría, en parte, sus posteriores luchas.

El logro de Perón en el despliegue de sus diversas formas discursivas habría consistido, entonces, en articular y en resignificar elementos ideológicos del pensamiento de los trabajadores, conformándose así la ideología peronista. En palabras de Ezequiel Sirlin: “Sin menospreciar la importancia que tuvieron las reformas sociales llevadas a cabo por Perón desde 1943, James entiende que la fortaleza y perdurabilidad del vínculo se deben a cómo el discurso peronista llegó a tocar las ‘fibras más sensibles’ de esos trabajadores, transformando el escepticismo en optimismo, la desunión en unión, el miedo vivido solitariamente en coraje colectivo, los estigmas raciales en motivo de orgullo fraterno y nacional, la derrota en triunfo, la inclinación en actitudes heréticas, la humillación en dignidad”²⁸.

28 Ezequiel Sirlin: “Daniel James, introducción a su perspectiva”, Buenos Aires, *M/C*, mayo de 2004, p. 3.

6. 1946-1955: el régimen de acumulación y el Estado

El objetivo central de la política económica del primer gobierno peronista fue profundizar el proceso de acumulación de capital industrial por sustitución de importaciones que había comenzado en la década del 30 y que se había intensificado durante la Segunda Guerra Mundial. La forma específica de esa profundización consistió en revertir el carácter no distributivo que la industrialización había tenido hasta 1943 mediante una firme política de redistribución de ingresos. En otras palabras, se trataba de expandir el proceso de acumulación industrial con la ampliación del mercado interno²⁹: de estimular la producción industrial local expandiendo la demanda interna de bienes masivos industrializados e incluyendo, así, como consumidores, a la mayoría de los trabajadores³⁰.

Esos objetivos provenían, por un lado, de los intereses de parte de los empresarios industriales temerosos de que el fin de la guerra mundial revirtiera el carácter expansivo de sus ventas, generara una crisis de subconsumo y disminuyera el proceso de capitalización. Por otro lado, la inclusión de los trabajadores no sólo como fuerza de trabajo sino también como consumidores expansivos proveía al proyecto político de Perón de una base social mayoritaria. Además, buena parte de los empresarios y de las Fuerzas Armadas consideraba que una mayoría obrera excluida de los beneficios del sistema económico constituía un peligro para la “paz social”, es decir, la exclusión y la mera explotación eran vistas como condición para la expansión de las ideas comunistas en la sociedad argentina³¹.

El modelo económico del primer gobierno de Perón era entonces expresión de una coincidencia *coyuntural* de intereses de la clase obrera y de fracciones de la burguesía industrial, ligados en el peronismo³². Dado su carácter distribucionista, el modelo requería de una nueva articulación del Estado con aquellos sectores sociales y con el resto de la sociedad. Dicha articulación se plasmó en un Estado que actuó como garantía de ese tipo de desarrollo capitalista al desplegar y consolidar nuevas formas de intervencionismo, algunas de

29 Mónica Peralta Ramos: *Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, p. 97.

30 Cabe agregar que el salario comenzó a ser considerado no sólo como un costo sino también como componente de la demanda.

31 Daniel Campione, *op. cit.*, p. 144.

32 Véase Rafael Bitrán: *El Congreso de la Productividad. La reconversión económica durante el segundo gobierno peronista*, Buenos Aires, El Bloque Editorial, 1994, capítulo 1: “Política económica del peronismo”, pp. 19 y ss.

ellas ya instrumentadas desde 1943. Así, el Estado peronista adquirió el carácter de Estado intervencionista redistributivo.

En los años peronistas, el Estado intervino de muy variadas formas en pos de asegurar la reproducción del capital industrial y de distribuir ingresos hacia los asalariados. La intervención del Estado se desarrolló a través de una compleja red de mecanismos e instituciones, adjudicándose un lugar central como “guía”, “organizador” y “regulador” del ciclo de la producción, la distribución y el consumo³³.

Esas intenciones planificadoras de la economía quedaron plasmadas en el Primer Plan Quinquenal de 1947. En él se enunciaban los ejes centrales de la política económica: fomento de la expansión industrial y de un importante mercado de consumo interno mediante la elevación del nivel de vida de la población. Sus objetivos incluían un amplio plan de *nacionalizaciones* de los servicios públicos (transporte urbano, ferrocarriles, gas, agua y teléfonos), y de obras en las áreas de salud, vivienda y educación, la llamada “política social”. Además, el Estado se propuso el rescate de la deuda pública externa y una reforma financiera. Asimismo, el plan establecía la instrumentación de mecanismos para la financiación del programa³⁴.

De modo que el Estado peronista promovió activamente una redistribución de ingresos en favor de los asalariados. Con ella expandió el consumo interno y actuó como impulsor de la producción industrial. El gobierno trató de garantizar el pleno empleo ampliando significativamente el empleo público y desplegó una serie de regulaciones para elevar los salarios reales. El Parlamento convirtió en leyes los decretos de política social implementados por la STP en el período 1943-1946. Como resultado, durante el trienio 1946-1948 los salarios reales aumentaron un 40 por ciento. La participación de los asalariados en el ingreso total creció del 37 por ciento a casi el 40 por ciento y continuó incrementándose hasta llegar al 47 por ciento en 1951³⁵.

El intervencionismo estatal del peronismo se caracterizó también por promover una vasta “política de gasto social”. El gobierno emprendió planes de construcción de establecimientos educativos, hospitales y viviendas. Además, garantizó la satisfacción de necesidades básicas de la población implementando planes de bienestar social a través de instituciones benéficas (tal el caso de la Fundación Eva Perón, que cubría carencias sociales y cuyo presupuesto provenía en parte de fondos públicos).

33 Daniel Campione, *op. cit.*, p. 148.

34 Véase Graciela Malgesini y Norberto Álvarez: *El Estado y la economía, 1930-1955 (II), Historia Testimonial Argentina*, Buenos Aires, CEAL, 1983.

35 Véase Pablo Gerchunoff y Damián Antúnez: “De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo”, en Juan Carlos Torre (dirección de tomo), *Los años peronistas (1943-1955)*, Nueva Historia Argentina, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, p. 145.

Si en el discurso peronista “realizar la justicia social” era una reivindicación histórica de los desposeídos, en relación con el desarrollo del régimen de acumulación la política social implicaba una expansión significativa de la capacidad de compra de los asalariados y del universo de consumidores. En efecto, la cobertura estatal de necesidades básicas redundaba en que los asalariados dispusieran de una mayor proporción de sus ingresos para consumir productos industriales. Además, con la “política social”, el gobierno generaba espacios de rentabilidad para el empresariado local. De ese modo, el Estado se transformaba en un importante comprador de insumos de la industria para sostener el abastecimiento de la red educativa y sanitaria, a la vez que generaba inversiones con la contratación de empresas privadas para la construcción de las obras públicas. En ese sentido, es significativo constatar que en 1947 Agostino Rocca fundó Techint, y que en 1948 Franco y Antonio Macri comenzaron a participar en el “Plan Eva Perón de Viviendas”³⁶.

Otro eje del programa implementado en 1946 fue el despliegue del intervencionismo estatal a un grado de “Estado empresario”³⁷. El Estado asumió el control directo de los servicios públicos y de algunas empresas productivas. Las estatizaciones —*nacionalizaciones*, en el discurso peronista— y la creación de nuevas empresas de propiedad estatal implicaron una deliberada política de expansión del gasto público en pos de que el Estado ocupase un rol “regulador” de la economía. En esos años se crearon, entre las más importantes, las empresas estatales Gas del Estado, Agua y Energía, Teléfonos del Estado y Aerolíneas Argentinas. En 1948 culminaron conflictivas y polémicas negociaciones entre el gobierno argentino y el británico en torno a libras bloqueadas durante la guerra y la compra de los ferrocarriles³⁸. Como resultado de ellas, el gobierno creó Ferrocarriles Argentinos, símbolo del nacionalismo peronista. En el área de la inversión industrial, el gobierno expandió empresas estatales preexistentes y creó otras, tales como el conjunto de Fabricaciones Militares, SOMISA e Industrias Químicas ATANOR. En 1947 se creó la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE), para el control estatal de un complejo industrial integrado por empresas farmacéuticas, químicas, eléctricas, metalúrgicas, constructoras y textiles.

De mayor envergadura que la voluntad puesta en industrias estatales, fue la instrumentación de mecanismos de intervención para el fomento de la industria privada local, algunos de ellos creados durante la dictadura del período 1943-

36 Gerchunoff y Antúnez, *op. cit.*, p. 150.

37 Malgesini y Álvarez, *op. cit.*, pp. 12-13.

38 Existe una vasta bibliografía sobre el tema. Para una breve explicación del problema, véase Malgesini y Álvarez, *op. cit.*, p. 11.

1946. Esos mecanismos se basaban en una redistribución de ingresos desde el sector agrícola hacia el industrial. Principalmente, el Estado controlaba el comercio exterior obteniendo de él beneficios que desviaba hacia créditos industriales otorgados por bancos estatales. Las principales herramientas eran el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) y el Banco Central.

En esencia, se trataba de aprovechar la favorable situación de los términos de intercambio del comercio exterior provocada por la recomposición de la demanda mundial de productos alimenticios en los primeros años de la posguerra. El Primer Plan Quinquenal ya enunciaba que el Estado emplearía en la financiación del modelo económico parte de las ganancias generadas por los términos de intercambio muy favorables en vigencia.

A través del IAPI el Estado ejercía un virtual monopolio de las exportaciones agrícolas: compraba a los productores a precios fijados por el Estado y revendía a precios internacionales, obteniendo así un margen de ganancia. De modo que buena parte de la política económica del primer gobierno peronista se basó en que el tradicional sector agropecuario continuase siendo la principal fuente de divisas. Ello redundó en una permanente situación de conflictos y de tensiones entre el gobierno y la burguesía agraria. Tal situación se expresó, principalmente, en la oposición de la Sociedad Rural Argentina, cuya posición incluyó recriminaciones formales, demandas puntuales en “reparación” de la política hacia el sector e intervención en “conspiraciones desestabilizadoras”. Sin embargo, entre 1945 y 1949 los ingresos de los terratenientes mejoraron con respecto a los del período de la guerra, aun con la intervención del IAPI, con la vigencia del Estatuto del Peón y con la aplicación de una ley de arrendamientos beneficiosa a los arrendatarios. Además, es importante destacar que el peronismo no socavó las bases del poder terrateniente, por cuanto no realizó reformas radicales en el régimen de propiedad de la tierra. Si bien el proyecto de “reforma agraria” fue enunciado por la fuerza política de Perón en la campaña electoral de 1946, una vez en el gobierno la propuesta fue desechada.

Volviendo al fomento industrial, los mecanismos de redistribución se instrumentaron además con una reforma financiera que estatizó el Banco Central —transformando su relación con la banca privada— y con el accionar de otros bancos estatales como el Banco de Crédito Industrial. El Banco Central, además de controlar la emisión monetaria, tomó a su cargo la orientación y los precios de los créditos. De ese modo el Estado desplegó una política crediticia que limitó las de los bancos privados. Se trató de una política de crédito abundante y barato a los sectores industriales alimenticio, textil, de manufacturas de la madera, los metales y a las inversiones privadas y estatales en energía, transporte, construcción y comunicaciones.

7. Los límites del modelo económico y las contradicciones de la alianza peronista

Al calor de esas políticas, hacia 1949 la producción industrial de bienes livianos se encontraba en pleno desarrollo. El consumo interno de manufacturas se había incrementado notablemente y el salario real había subido un promedio del 40 por ciento. En aquellos primeros años del gobierno peronista las ventas de heladeras, cocinas, lavarropas, radios, discos e indumentarias habían crecido, en general, más del 100 por ciento y en algunos productos más del 200 por ciento³⁹.

Sin embargo, la industrialización tenía un carácter *no integrado*, seguía dependiendo de importaciones esenciales. A medida que aumentaba la producción, crecía la importación de bienes de capital, tecnología y petróleo. Ello significaba que para sostener la industrialización sin cambiar el modelo económico se debía continuar importando, y para ello era necesario disponer de un gran volumen de divisas. Y esas divisas provenían, esencialmente, de las exportaciones agropecuarias tradicionales. De modo que la capitalización del empresariado industrial y la redistribución de ingresos, ejes de la política económica peronista, permanecían atadas a la disponibilidad de productos primarios para exportar y a los precios internacionales de dichos productos, dos variables que el gobierno no controlaba. Estos límites del modelo se hicieron visibles hacia comienzos de 1949, cuando cayeron los precios internacionales de los bienes primarios y, a la vez, descendieron la producción y el saldo exportable de bienes agropecuarios. Tal situación se expresó en una reducción de divisas disponibles, en un déficit de las cuentas fiscales y de la balanza de pagos y en una consecuente presión inflacionaria. En suma, en una crisis financiera, que se prolongaría hasta 1951. Ahora bien, en este momento cabe preguntarnos cuáles fueron las causas por las que las “debilidades estructurales” del modelo se manifestaron en 1949. Las respuestas incluyen factores internacionales y locales. A fines de la década del 40 comenzó a implementarse el Plan Marshall, por el cual los países europeos alineados con Estados Unidos dirigieron la mayor parte de sus adquisiciones alimenticias al mercado estadounidense. En consecuencia, los términos de intercambio se tornaron desfavorables para Argentina⁴⁰.

39 Gerchunoff y Antúnez, *op. cit.*, p. 146.

40 A ello se sumaba la continuación de un boicot de Estados Unidos a Argentina que había comenzado en 1942. La medida incluía restricciones de venta al país de insumos básicos industriales, como maquinaria de acero, equipos petrolíferos y repuestos. El boicot formaba parte de una política de enfrentamiento del gobierno de Estados Unidos con el peronismo. A su vez, el discurso nacionalista del peronismo había adoptado un tinte claramente antinorteamericano.

Asimismo, dentro del país se fue reduciendo el volumen de los productos exportables: la mejora en la capacidad de consumo de los sectores populares redundaba en un aumento de la demanda interna de productos agropecuarios (principales rubros de exportación). A ello se sumaron fuertes sequías en 1949-1950 y 1951-1952. Desde luego que en este contexto la burguesía agraria, fuera de la alianza de clases peronista, no estuvo dispuesta a realizar nuevas inversiones para incrementar la producción de bienes exportables.

En suma, el desarrollo industrial requería cada vez más divisas, mientras que la producción agropecuaria generaba cada vez menos. La escasez de divisas, por otro lado, hacía tambalear las políticas de gasto social del Estado y, a la vez, profundizaba una puja distributiva dentro de la “alianza policlasista” peronista. Ante la llamada “crisis de 1949” el gobierno peronista respondió a tono con los intereses de una de sus bases de poder, los empresarios industriales. Sin embargo, no optó por “soluciones” que hubiesen deteriorado profundamente el nivel de vida de los asalariados⁴¹, sino que se inclinó por “ir hacia delante” con la industrialización. Es decir, su proyecto consistió en profundizar la integración de la industrialización, creando algunas de las condiciones necesarias para una futura producción de insumos industriales básicos en el país. Esta idea subyacía en el Segundo Plan Quinquenal, de 1952.

Mientras tanto, entre 1949 y 1952, el gobierno se abocó a detener la inflación con un Plan de Emergencia: desarrolló un programa de austeridad fiscal reduciendo el gasto público y congeló precios y salarios. Además, comenzó a tomar medidas para aumentar los saldos exportables, que se mantendrían en el Segundo Plan Quinquenal. En función de ello desplegó una campaña pública tendiente a que los sectores populares bajasen el consumo de bienes exportables. Paralelamente realizó un viraje “hacia el campo”: el IAPI comenzó a redistribuir ingresos hacia los productores rurales y se abrieron líneas de crédito favorables a ese sector.

Hacia 1952 el gobierno había logrado frenar la inflación, pero no se habían incrementado los saldos exportables. A los ojos del equipo económico el problema de la escasez de divisas para adquirir insumos industriales debía resol-

41 Algunos autores, imbuidos del clima neoliberal actual, se han preguntado por qué el gobierno de entonces no devaluó, lo que hubiese implicado por un lado más divisas provenientes de la exportación pero, por otro lado, un aumento de los precios de los productos industriales que utilizaban insumos importados. La devaluación hubiera generado una carrera por mantener el valor de las ganancias y de los salarios, profundizando aun más la puja distributiva entre empresarios, comerciantes y asalariados, con un muy probable proceso inflacionario en el que los asalariados tenían más que perder.

verse de otro modo: el gobierno debía apostar a las inversiones extranjeras, aun al costo de renunciar a su discurso nacionalista y de traicionar la “independencia económica”, una de las bases de la doctrina justicialista. En ese contexto, en 1952 Perón presentó al Congreso un proyecto de ley de inversiones extranjeras, que se sancionó en 1953. Se trataba así de alentar la inversión de capitales internacionales en la industria y en la minería, otorgándoles un trato similar al de las empresas nacionales. A partir de la ley se concretó la inversión de empresas europeas y estadounidenses para la producción de camiones, automóviles y tractores. Lejos de enfrentar al capital nacional con el extranjero, la ley evidenciaba una creciente coincidencia de intereses entre la burguesía industrial local y el capital internacional⁴².

En ese marco también el Ejecutivo envió al Congreso un contrato con la Standard Oil de California para la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos en el sur del país. Tanto los legisladores oficialistas como los de la oposición radical mostraron poco interés en aprobar una iniciativa que ponía en cuestión la cláusula nacionalista de la Constitución de 1949⁴³, y la ratificación en ley se postergó indefinidamente.

Otro objetivo central de la política económica a partir de 1952 consistió en propulsar una mayor “racionalización” de las empresas estatales y privadas con un aumento de la productividad del trabajo. Bajo el lema “consumir menos y producir más”, el gobierno exhortaba a los trabajadores a intensificar sus esfuerzos en el logro de mejoras productivas. Al mismo tiempo, los trabajadores debían comprometerse a emprender una “tregua social”: frenar sus luchas por aumentos salariales y esperar incrementos en sus haberes sólo si se incrementaba la productividad. El nuevo rumbo económico expresaba una creciente presión empresarial, que eclosionó ante los cambios en la situación internacional desde 1949⁴⁴.

En un primer momento, la política distributiva había permitido ampliar la acumulación de capital. Luego, ese crecimiento extensivo reflejó sus límites⁴⁵ y el gobierno, junto a los empresarios, inició una ofensiva a favor de una mayor productividad, que implicaba transformaciones en la organización del trabajo.

42 Véase Rafael Bitrán, *op. cit.*, pp. 28-29.

43 A instancias del gobierno, en 1949 se reformó la Constitución nacional. Buena parte de los cambios introducidos reflejaban las transformaciones estatales y socioeconómicas que había impulsado el peronismo.

44 *Idem*, pp. 32-33

45 Para un análisis de la naturaleza de esos límites, véase Mónica Peralta Ramos, *op. cit.*, p. 119.

Se trataba de lograr mayor eficiencia por parte de los obreros y de sustituir mano de obra por capital. En teoría, el objetivo podía en parte alcanzarse introduciendo maquinaria y tecnología industrial más modernas. Pero en una coyuntura signada por términos de intercambio desfavorables, la política implementada se propuso disminuir ese tipo de importaciones, fomentar su producción local e intensificar la productividad de la fuerza de trabajo. Como la fabricación en el país era aún un proyecto, los aumentos de la productividad quedaron reducidos al logro de mayor rendimiento por obrero con los equipos existentes.

El problema de la productividad pronto mostró las contradicciones y los límites de la alianza peronista. A fines de 1954 el gobierno convocó a una asamblea para tratar la cuestión y para institucionalizar la presión del empresariado. Se conformó entonces el Congreso de la Productividad (1955), con funcionarios del gobierno, las organizaciones empresariales y delegados de la CGT. Durante las deliberaciones, la postura empresarial quedó muy clara. Los dirigentes de la CGE proponían que se reformularan las relaciones laborales en las fábricas, en función de obtener una mayor capitalización. Tal logro debía basarse en que los empresarios retomaran el control del proceso productivo en pos de una mayor intensidad del trabajo obrero, y sólo en un futuro mediano en la incorporación de tecnología⁴⁶. Los delegados de la CGT aceptaron las ideas de los empresarios y del gobierno acerca de la implementación de nuevos métodos y tecnología. Pero al mismo tiempo rechazaron todo cambio de la legislación laboral incorporada en los años peronistas. Tal posición ambigua de los dirigentes de la CGT respondía a la presión que sobre ellos ejercían las bases obreras, ya que para llevar a cabo las transformaciones propuestas por los empresarios, el sindicalismo debía renunciar a hacer cumplir la reciente legislación laboral que impedía aumentos en la productividad. Además, en los años peronistas, los trabajadores se habían organizado en comisiones internas en los lugares de trabajo y habían logrado compartir el control del proceso productivo. Los sindicalistas de la CGT no desconocían que de aceptar el proyecto empresarial se enfrentarían a la resistencia de los delegados y obreros de las fábricas, toda vez que el objetivo de “racionalización” implicaba poner fin al poder de las comisiones obreras dentro de las empresas.

De modo que la propia dirigencia sindical señaló implícitamente la inviabilidad de una resolución acordada acerca de la flexibilización laboral que propusieron los empresarios y basaron su discurso en la defensa del *statu quo* laboral. En consecuencia, del Congreso de la Productividad no resultó ningún acuerdo de

46 Rafael Bitrán, *op. cit.*, p. 267.

productividad entre obreros y empresarios independiente de las cláusulas de los convenios colectivos vigentes, y el gobierno, por su parte, no hizo esfuerzos por menguar la resistencia sindical. El Congreso de la Productividad resultó sí un escenario en el que quedaron visibles tanto las contradicciones dentro de la alianza peronista como los límites del régimen de acumulación basado en la industrialización extensiva. En síntesis, como afirmó Rafael Bitrán, “el Acuerdo Nacional de la Productividad sustanció el consenso de lo irreconciliable. Las limitaciones y ambigüedades de los puntos acordados, la omisión forzada de las problemáticas clave y, principalmente, la inviabilidad práctica de lo resuelto no hicieron más que expresar los ejes de las contradicciones entre capital y trabajo en una coyuntura histórica signada por la crisis de un modelo de acumulación”⁴⁷.

8. 1946-1955: la democracia ampliada

Entre 1946 y 1955 se sucedieron los dos primeros gobiernos peronistas bajo la presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1952 y 1952-1955). En ese período, la alianza peronista se aseguró el control del Estado por medios constitucionales: se llevaron a cabo sucesivas elecciones sin fraude y funcionaron los tres poderes de gobierno (si bien, como veremos, el Ejecutivo fue concentrando buena parte de las decisiones).

El régimen político bajo el cual gobernó el peronismo se caracterizó por la integración de los sectores populares a la vida política y por el desarrollo de nuevas formas de participación popular.

Desde luego, la participación electoral plena fue una de esas formas de integración de los sectores populares al sistema político, y actuó como elemento de legitimación de los gobiernos peronistas. Así como la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 había permitido la inclusión y la representatividad política de los sectores medios, durante el período peronista fueron los obreros (con un porcentaje mucho menor de extranjeros que en la época radical), y los sectores populares en general, los que se integraron al sistema político y lograron representación. En este sentido, junto a la periodicidad de elecciones sin fraude, un hecho fundamental fue la sanción de la ley de voto femenino en 1947, por la cual las mujeres lograron el reconocimiento de los mismos derechos políticos que los varones. Desde ese momento comenzó un proceso de movilización política de las mujeres, que incluyó desde tareas de empadronamiento femenino y la organización de la

47 Rafael Bitrán, *op. cit.*, p. 254.

rama femenina del Partido Peronista hasta la preparación de candidaturas de mujeres al Poder Legislativo. Este proceso cristalizó en las elecciones de noviembre de 1951: el Partido Peronista obtuvo más del 60 por ciento de los votos femeninos y al Congreso de la Nación ingresaron más de 20 diputadas y seis senadoras. Aquí es importante destacar que la participación política de la clase obrera durante el peronismo no se limitó al hecho de votar. También hubo la posibilidad –si bien centrada en un grupo de militantes entre los que se destacaban dirigentes sindicales– de ocupar espacios de gobierno y formar parte de la clase dirigente. En esos años, otras prácticas políticas distintivas de los sectores populares fueron la militancia en las diferentes ramas del Partido Peronista y la participación directa en grandes manifestaciones públicas.

8.1 El Estado peronista y el movimiento obrero

Pero además, y principalmente, los trabajadores se incorporaron a la vida política a través del desarrollo y el fortalecimiento de sus organizaciones y sus luchas sindicales. En especial, el trabajo de comisiones internas de fábrica implicaron el ejercicio de prácticas políticas cotidianas y autónomas. Como vimos, el reconocimiento estatal de la “ciudadanía política” iba estrechamente ligado a la integración de los trabajadores al sistema político y a la inclusión de los trabajadores en el modelo económico peronista. La “justicia social” implicaba tanto una redistribución de ingresos hacia los obreros como una dignificación de las prácticas políticas reivindicativas de los propios trabajadores. Así, el Estado garantizaba la “ciudadanía social” y se legitimaban las luchas políticas por los derechos laborales y sociales, dentro de los límites del capitalismo, y con las tensiones y conflictos que ello implica. Quienes habían ingresado a la vida política definiéndose por su exclusión como los “descamisados”, pasaron a identificarse como “los trabajadores”, identificación que, además, iba profundamente asociada a su condición de peronistas.

En el período 1946-1955 se produjo un intenso proceso de sindicalización. En 1948 el 30,5 por ciento de los asalariados estaba afiliado a un sindicato, mientras que hacia 1954 el porcentaje se había elevado al 42,5 por ciento⁴⁸. Tal crecimiento del movimiento obrero era resultado tanto del fomento estatal a la sindicalización como de una progresiva capacidad de organización de los propios trabajadores.

Los estudios de las relaciones entre el Estado y el movimiento obrero durante el peronismo están atravesados por una polémica en torno al grado de autonomía

48 Daniel James, *op. cit.*, p. 22.

y/o de sometimiento del segundo respecto del primero. La “visión clásica”, expresión de la historiografía antiperonista, interpretó que el movimiento sindical carecía de autonomía y se hallaba sometido al control estatal. Además, consideró que los obreros no tenían una clara conciencia de clase, por lo que habrían establecido relaciones políticas paternalistas. Es decir, que lejos de haber luchado por sus derechos, los trabajadores se habrían limitado a aceptar pasivamente los beneficios sociales y a esperar de las autoridades la implementación de mejoras laborales. Tal visión subrayó la disolución del Partido Laborista en 1946 y el desplazamiento de dirigentes sindicales “combativos” de la CGT como hechos clave que probaban sus argumentos. Sin embargo, otras interpretaciones han complejizado las relaciones entre el Estado peronista y el movimiento obrero. En este sentido, Louise Doyon afirmó que “Perón logró ciertamente sofocar la posibilidad de que los sindicatos tuvieran una voz políticamente independiente. Sin embargo, no quiso o no pudo limitar su función como agentes de la lucha económica. Según se desprende de la reconstrucción histórica, los sindicatos consiguieron retener la capacidad de promover los intereses sectoriales de los trabajadores”⁴⁹. Es importante destacar que si bien la legislación que garantizaba los derechos laborales se sancionó principalmente por impulso de la STP entre 1943 y 1946, su cumplimiento efectivo fue resultado de las luchas del movimiento obrero durante las presidencias peronistas. Por su parte, Daniel James consideró que el Estado peronista presionó constantemente para limitar la autonomía sindical y que tal política quedó reflejada en la estructura legal de organización gremial. El Estado reconocía legalmente a un único sindicato por actividad económica y lo facultaba para negociar con los empleadores bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo. En octubre de 1945 se aprobó el decreto 23.852, conocido como Ley de Asociaciones Profesionales, que estableció ese sistema. La normativa “aseguraba a los sindicatos muchas ventajas: derechos de negociación, protección de los funcionarios sindicales contra la adopción de medidas punitivas que los afectaran, estructura sindical centralizada y unificada, deducción automática de los sueldos y salarios de las cuotas sindicales y aplicación de éstas a vastos planes de bienestar social. Pero al mismo tiempo otorgó al Estado las funciones de garante y supervisor final de este proceso y de los beneficios derivados de él”⁵⁰.

Para comprender esta problemática es importante, en principio, diferenciar los objetivos del gobierno peronista de los del movimiento obrero. Mientras que el primero ejerció variadas y evidentes estrategias para ejercer un control tutelar sobre el movimiento obrero, los trabajadores emprendieron numerosas luchas

49 Louise Doyon, *op. cit.*, p. 369.

50 Daniel James, *op. cit.*, p. 23.

en defensa de sus intereses, muchas de las cuales sobrepasaron las pretensiones de “armonía” del gobierno. Además, debe distinguirse la postura oficialista de la CGT tanto de las conducciones de los sindicatos como de las acciones de las comisiones internas por fábrica. De modo que, más bien, las relaciones entre el Estado peronista y el movimiento obrero se caracterizaron por permanentes tensiones entre el logro de la autonomía de las organizaciones de los trabajadores y su subordinación a decisiones del gobierno.

Entre 1946 y 1949 los sindicatos emprendieron numerosas huelgas, la mayoría de ellas durante la negociación colectiva con las empresas. Los sindicatos solían comenzar el paro cuando las negociaciones se estancaban, como una forma de presión a las autoridades para que se involucrasen a favor de las demandas de los trabajadores. Además de intentar hacer cumplir la legislación laboral, las luchas obreras tenían como objetivo limitar la autoridad de la patronal en los ámbitos de trabajo. En esos años, se limitó el poder de decisión de los empresarios en cuanto a despidos, transferencia y contratación de obreros, así como sus competencias para asignar remuneraciones y para establecer niveles de productividad del trabajo. En el control de las relaciones laborales cumplieron un rol destacado las organizaciones de los obreros en comisiones internas de fábrica, independientes del poder sindical y nunca legalizadas, sino toleradas y criticadas por el gobierno. Como resultado, durante aquel primer período del gobierno peronista se produjo una redistribución del poder al interior de las empresas.

A partir del giro de la política económica en 1949, el gobierno procuró intensificar el control del movimiento obrero. Desde el punto de vista oficial había llegado el momento de poner punto final a las huelgas, dado que los trabajadores ya habían logrado mejoras económicas, el reconocimiento de sus sindicatos y una legislación laboral protectora. Finalizaba, entonces, para el gobierno, el tiempo del antagonismo obrero-patronal y comenzaba el de la “armonía social”, bajo la guía del Estado. Así, el derecho de huelga no fue incluido en los Derechos del Trabajador incorporados a la Constitución de 1949. La conducción de la CGT asumió como propio ese llamado al orden, y actuó cada vez más como un agente estatal para disciplinar y controlar sindicatos afiliados. Para ello contó con dirigentes sindicales burocratizados, que ocuparon los cargos directivos de la central sindical.

En abierta confrontación con el gobierno y con la CGT, y ante el viraje económico que comenzó en 1949, numerosos sindicatos emprendieron huelgas. Entre ese año y 1951 se destacaron las de los trabajadores azucareros de Tucumán, nucleados en la FOTIA, los ferroviarios, los frigoríficos, los bancarios y los gráficos. Todas ellas fueron declaradas ilegales, los sindicatos fueron intervenidos por la CGT y en algu-

nos casos los conflictos se agravaron con la orden de represión estatal y despidos de trabajadores.

Con el plan económico de 1952 el gobierno dispuso por decreto la suspensión de las negociaciones colectivas por dos años y el congelamiento de precios y salarios. A pesar de la vigencia de la llamada “tregua social”, se produjeron casos de aumentos salariales extraoficiales obtenidos por los delegados de fábrica, ante lo cual el propio Perón hizo públicas fuertes críticas al comportamiento autónomo de las comisiones internas. Cuando en 1953 concluía el período de tregua, se reabrieron las negociaciones laborales y se sancionó la Ley de Convenios Colectivos. La ley desalentaba la negociación por empresa y reforzaba tanto la centralización por rama de actividad como el control del Estado.

A partir de 1954 se intensificaron los conflictos obreros por el logro de acuerdos colectivos favorables. Las luchas de este último período no se caracterizaron tanto por recurrir a la huelga sino por el trabajo a reglamento y el trabajo a desgano, modalidades de lucha que limitaban el riesgo a la suspensión de sueldos y a la represión oficial.

Como vimos anteriormente, en aquellos últimos años, el gobierno emprendió junto al empresariado una campaña a favor del aumento de la productividad del trabajo. Si bien la posición de la CGT en el Congreso de la Productividad fue tímida y ambigua, tras ella subyacía la presión de un movimiento obrero organizado y capaz de limitar la ofensiva empresarial.

De todos modos, es importante tener en cuenta que la mayoría de las luchas obreras del período no deben interpretarse como señales de ruptura de los trabajadores con el gobierno peronista. Por el contrario, los trabajadores conformaron el único sector de la alianza peronista que mantuvo su adhesión a Perón hasta su caída. Tras ella, fue evidente que el movimiento obrero había logrado una sólida organización y una influencia central en las relaciones políticas del país. Daniel James destacó que el sindicalismo emergió del período 1943-1955 imbuido de un “espíritu reformista”. Éste se basaba en la convicción de que era preciso lograr una conciliación con los empresarios y a la vez satisfacer las necesidades de los afiliados estableciendo una estrecha relación con el Estado. Sin embargo, en términos no de dirigencia sindical sino de clase obrera, las luchas y el proceso de constitución de diferentes niveles de organizaciones alcanzados durante la era peronista signarían la época posterior, como fuerza social dentro del capitalismo.

Además, la profunda identificación de los trabajadores con el peronismo llevó a que, a partir de 1955, el movimiento obrero se consolidara como actor protagónico en las luchas contra la desperonización y en un interlocutor inevitable para los sucesivos gobiernos.

9. Los controles estatales sobre la sociedad y la caída del peronismo

Si los trabajadores se mantuvieron dentro de la alianza peronista hasta la caída de Perón, no ocurrió lo mismo con el empresariado. La burguesía industrial “nacional” tuvo una posición mucho más conflictiva y terminó prácticamente saliéndose de la coalición. En ello influyeron variados factores. Por un lado, el empresariado industrial consideró poco exitoso el viraje económico de 1952 en cuanto a logros de mayor capitalización; por otro lado, dudó en ocupar un espacio diferenciado del resto de los capitalistas (la Confederación General Económica –CGE– se formó recién en 1953). Pero, además, fue enfrentándose a un movimiento obrero que había logrado un poder evidente. En última instancia, el peronismo terminó siendo un límite para la acumulación de capital industrial, y el grado de integración de la burguesía “nacional” al bloque de poder fue, cuando menos, débil. De modo que el peronismo, preso de sus contradicciones internas, no logró consolidar en el tiempo un poder hegemónico. En este sentido, Horacio Pereyra consideró que entre 1945 y 1955 se constituyó un “bloque no integrado de poder” y que, a falta de un amplio consenso entre el empresariado y los sectores medios, el Estado peronista optó por ejercer funciones coercitivas, que afectaron las libertades públicas de la sociedad civil⁵¹.

La hipótesis que estamos comentando difiere de los argumentos que sostiene la “visión clásica” en cuanto a la identificación de causas de los controles que efectivamente el Estado peronista ejerció sobre la sociedad. Los estudios “clásicos”, imbuidos de ideas liberales, se basaron en asignar al peronismo una “esencia autoritaria”. Tales interpretaciones identificaron al peronismo con el fascismo y lo consideraron una “desviación” de la vida democrática que habría comenzado en Argentina con la formación del Estado nacional y se habría consolidado bajo la Generación del 80. En coherencia con esta perspectiva, Perón fue presentado como un líder tiránico que avasalló los derechos civiles y políticos, y que durante su gobierno hizo imperar la “barbarie” por sobre la “civilización” y la “libertad individual”.

Si bien esta visión fue ampliamente difundida tras la caída de Perón –en principio como justificación del golpe de Estado de 1955 y de la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”–, sus argumentos fueron los sostenidos por la oposición al peronismo durante el período 1943-1955.

Juan Carlos Torre, al analizar la dinámica política del período 1946-1955, resaltó el culto al personalismo y el autoritarismo como rasgos decisivos que marcaron las relaciones políticas dentro del movimiento peronista y las que

51 Horacio Pereyra, *op. cit.*, pp. 15 y 17.

éste estableció con la oposición. Torre afirma que Perón se propuso reforzar su poder a través de mecanismos de control burocráticos y represivos. Además, considera que se trató de “peronizar” las instituciones, y que ese intento era innecesario, ya que el gobierno contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia y con la adhesión de los sectores populares⁵². Los mecanismos de control político e ideológico que ejerció el Estado peronista tendían a reforzar el poder del Ejecutivo y a difundir la doctrina peronista, y comenzaron a desplegarse desde la asunción al gobierno en 1946. En ese año comenzó la “peronización” del Poder Judicial con el inicio de juicios políticos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y su posterior destitución. Además se restringió la autonomía de la Universidad y se acotó la libertad de prensa. En 1947 se prohibieron periódicos opositores, y empresarios ligados al peronismo comenzaron a comprar el sistema de radiodifusión nacional.

Por otro lado, aquel primer triunfo electoral había otorgado al peronismo amplia mayoría en el Parlamento. En la cámara baja contaba con 109 de los 158 diputados. También había obtenido 13 de los 14 gobiernos provinciales, lo que significaba el control del Senado. La labor del Poder Legislativo en el período se caracterizó por el acatamiento a las iniciativas del Ejecutivo y por actuar como espacio clave de los políticos opositores para ejercer sus críticas al oficialismo.

En materia de cambios legales, la transformación más importante fue sin duda la reforma de la Constitución en 1949. A ella se incorporaron los derechos sociales, las formas de intervencionismo estatal desplegadas por el peronismo y se consagró la propiedad del Estado sobre los recursos energéticos. La Constitución de 1949, además, suprimió la cláusula que prohibía la reelección presidencial inmediata, instauró el voto directo para presidente y vicepresidente y amplió el mandato de diputados y senadores. Elementos ideológicos centrales del peronismo quedaban inscriptos en el preámbulo de la nueva Constitución, que establecía una “nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. El nuevo texto constitucional fue resistido por el antiperonismo, y en buena medida la resistencia se basó en la interpretación de que el objetivo primordial del oficialismo era posibilitar la reelección de Perón.

Perón fue efectivamente reelegido en 1951, previa sanción de una ley electoral que favorecía claramente al partido mayoritario en cada nuevo distrito delimitado. En las elecciones nacionales de ese año el Partido Peronista triunfó en todas las provincias y obtuvo el 62 por ciento de los votos, frente al 32 por ciento de la UCR.

52 Juan Carlos Torre, *op. cit.*, pp. 42 y 56.

En la segunda presidencia de Perón, como vimos, se reafirmó el viraje de la política económica y se manifestó el carácter contradictorio de la alianza peronista. Es también la época en la que el Estado extendió sus controles sobre la sociedad, sus intentos de “peronización”. Se producirían, entonces, nuevos frentes de conflicto, ahora con las Fuerzas Armadas y con la Iglesia, sectores que eran bases de sostén del gobierno.

Las Fuerzas Armadas atravesaron un proceso de expansión y de modernización durante el gobierno peronista. Obtuvieron aumentos del presupuesto militar —aunque selectivos por armas—, y mejoras en la situación económica del cuerpo de oficiales. Buena parte de éstos, en especial los sectores del Ejército, se habían identificado con la industrialización “nacional” y con las ideas anticomunistas, desde los orígenes del peronismo. Además, hubo una clara participación de oficiales en funciones estratégicas de gobierno y la jerarquía militar mantuvo su influencia en decisiones institucionales centrales, como el veto a la candidatura de Eva Perón a la Vicepresidencia de la Nación para las elecciones de 1951. De modo que, si bien la Marina se mantuvo siempre en las filas del antiperonismo, el grueso del Ejército permaneció peronista, al igual que la Aeronáutica, arma creada por el gobierno de Perón.

En los inicios de la década de 1950 el gobierno expandió sus intentos de peronización dentro de las Fuerzas Armadas. En los colegios militares se impuso la obligatoriedad de la materia “Doctrina peronista” y se generó así un fuerte rechazo por parte de la oficialidad, que gradualmente se fue distanciando del gobierno. En 1951 el general Benjamín Menéndez encabezó un intento golpista. El gobierno logró sofocarlo ya que la mayoría de los oficiales aún se mantenía leal a la cadena de mandos, y porque la oposición civil todavía estaba dispersa. Sin embargo, el episodio fue para el gobierno una señal de la oposición que comenzaba a manifestarse por parte de sectores de las Fuerzas Armadas.

Esa oposición no era consecuencia exclusivamente de la injerencia del gobierno en la formación ideológica de los futuros militares. El peronismo extendía sus intentos de peronización a la educación pública, a los medios de comunicación y a la producción cultural. Ello provocó el rechazo de los sectores medios y de otros sectores tradicionales de poder simbólico, como la Iglesia, con los cuales los integrantes de las Fuerzas Armadas tenían vínculos estrechos.

El análisis de la evolución de las relaciones entre el Estado peronista y la Iglesia durante el período 1946-1955 permite acercarnos a las formas que asumieron las tentativas de peronización de la sociedad, así como al tipo de conflictos que éstas generaron. En el contexto de la polarización política de 1945-1946, la candidatura de Perón expresó los anhelos de la Iglesia en cuanto a la inclusión de contenidos religiosos en la educación pública. Frente a ella, los heterogéneos partidos integrantes de la Unión Democrática coincidieron en su defensa de la

enseñanza laica y en considerar a Perón como el candidato heredero de los valores católicos desplegados durante la dictadura de 1943-1946. Ese diagnóstico permaneció durante los primeros años de gobierno peronista, toda vez que la relación Estado-Iglesia se estrechaba. Uno de los principales elementos de este acercamiento fue el debate parlamentario y la posterior aprobación de la ley de enseñanza religiosa en la educación estatal. La Acción Católica se movilizó para presionar a la oposición en el Congreso y el aparato de prensa del gobierno hizo una fervorosa campaña a favor de la posición eclesiástica. Los lazos cordiales se asentaban, además, en una significativa transferencia de gastos de la Iglesia al Estado: se duplicó la cantidad de puestos eclesiásticos mantenidos por el Estado y éste se hizo cargo de numerosas erogaciones eclesiásticas, tales como subsidios para compra y reparación de parroquias y residencias parroquiales, peregrinaciones a Europa, pasajes oficiales para delegaciones católicas y aumentos en los salarios de personal eclesiástico pagados por el Estado⁵³.

Sin embargo, a la vez, el gobierno fue desplegando políticas que crearon tensiones, aunque recién se manifestarían en los últimos años de la segunda presidencia de Perón. Desde su creación, la Fundación Eva Perón –junto a organismos estatales– desarrolló actividades de acción social que fueron interpretadas por parte de la Iglesia como una competencia y un desplazamiento de sus tradicionales tareas de caridad. Además, hacia 1950, el gobierno comenzó a difundir la Doctrina peronista y un nuevo discurso religioso, en un intento por peronizar los ámbitos católicos. El “cristianismo peronista” se basaba en la prédica por un retorno a valores espirituales, de humildad, honestidad y sencillez. E interpretaba que la jerarquía eclesiástica estaba cada vez más dominada por intereses materiales y concentrada en los aspectos formales de la liturgia, de modo que había abandonado aquellos valores. El Estado pretendía erigirse así en unificador espiritual de la nación y en difusor de un cristianismo popular de la vida cotidiana⁵⁴. El “cristianismo de Estado” quedó plasmado en los libros de lectura para las escuelas que comenzaron a circular en 1953, en los que además se exaltaban la simbología peronista y las figuras de Perón y de Eva Perón. En ese año también se creó, patrocinada por el Estado, la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) con el objetivo de organizar las actividades de los estudiantes secundarios fuera del horario de clases. Con la UES el gobierno pretendía contrarrestar la labor de la Acción Católica sobre la vida cotidiana y las creencias de los jóvenes, especialmente los de clase media. El evidente intento de control

53 Lila Caimari, “El peronismo y la Iglesia Católica”, en Juan Carlos Torre (dir. de tomo), *op. cit.*, p. 452.

54 Para un desarrollo de esta temática, véase Lila Caimari, *op. cit.*

estatal de la formación moral, ética e intelectual de los niños y los jóvenes implicaba, para la Iglesia, un desplazamiento progresivo de espacios que tradicionalmente había dominado.

Además, es importante destacar que las diferentes formas que adoptó la peronización deben interpretarse en el contexto de la redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad que provocó el peronismo desde sus orígenes. La autonomización del Estado implicó la apertura de nuevos ámbitos de decisión estatal que reformularon lo público y lo privado. Ello generó una fuente permanente de tensiones que atravesaron las presidencias de Perón y que influyeron en la crisis de la alianza peronista y en su caída, en 1955.

Definimos como crisis de la alianza peronista al gradual distanciamiento y pasaje al antiperonismo de sectores que fueron bases de sostén del gobierno: grupos de la burguesía “nacional”, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Esa crisis no se expresó en términos electorales ya que, como antes dijimos, la enorme mayoría de los obreros permaneció en el peronismo. En las elecciones legislativas de 1954 el oficialismo obtuvo dos tercios de los votos. Se demostraba así la solidez electoral del peronismo y la debilidad de los partidos de oposición. Hasta ese momento el antiperonismo se encontraba disperso. Desde fines de ese año se desataron violentos conflictos entre el gobierno y la Iglesia, y en torno a ella comenzó a aglutinarse la oposición. Se reeditó entonces una creciente polarización política. En este caso, la particularidad consistió en que la Iglesia fue el eje articulador del antiperonismo.

El conflicto se fue desencadenando a partir de iniciativas “provocadoras” del gobierno: la sanción de leyes de divorcio vincular, de profilaxis (que autorizaba la reapertura de prostíbulos), la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y la igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos. Esas iniciativas evidentemente buscaban confrontar con la jerarquía eclesiástica pero provocaron, además, el rechazo de muchos católicos de aquella época. Ello llevó a un fuerte enfrentamiento con los sectores medios, sobre los cuales la Iglesia ejercía una influencia ideológica importante. Se sucedieron entonces diversos episodios en los que “peronistas” de un lado y “católicos” del otro medían sus fuerzas: campañas de prensa, manifestaciones y templos transformados en tribunas de los partidos políticos opositores (aun los de orientación anticlerical, que privilegiaron su alineamiento antiperonista).

Los meses previos al golpe de Estado de septiembre de 1955 estuvieron impregnados por violentos enfrentamientos entre el gobierno y la Iglesia. Bajo ellos subyacía el hecho de que el Estado venía pujando, desde el inicio de las presidencias de Perón, por controlar ámbitos tradicionales de poder eclesiástico sobre la sociedad civil, como lo eran la educación, la vida cotidiana y la formación de la conciencia de niños y jóvenes. Un momento clave en aquella coyun-

tura fue el 8 de junio, cuando la Iglesia y los partidos antiperonistas confluyeron en la procesión católica de Corpus Christi y la transformaron en una protesta política por el centro de la ciudad de Buenos Aires. El 16 de junio sectores antiperonistas de las Fuerzas Armadas atacaron a la población civil: aviones de la Marina ametrallaron y bombardearon la Casa de Gobierno y sus alrededores. A Plaza de Mayo habían ido peronistas para manifestar su apoyo al gobierno: los resultados del levantamiento militar fueron alrededor de 300 civiles muertos y otros 600, heridos. En respuesta a este gravísimo hecho de violencia política, grupos peronistas incendiaron iglesias de la Capital Federal. A la vez Perón endureció su discurso frente a los opositores y escindió aun más una sociedad en la que ya se evidenciaban claramente dos polos antagónicos. El 31 de agosto la CGT convocó a los trabajadores a manifestarse en Plaza de Mayo para defender al gobierno. Perón arengó a los manifestantes: “La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de ellos”. Si bien también intentó una conciliación ofreciendo espacios en los medios de comunicación a diversos políticos, el grueso de las Fuerzas Armadas ya había cerrado filas con el antiperonismo y el golpe estaba en marcha. El 16 de septiembre comenzó el levantamiento militar y luego de cinco días de enfrentamientos se rindieron las tropas leales al gobierno. Perón presentó su renuncia. Comenzaba así la dictadura que se autodenominó Revolución Libertadora.

10. Conclusiones

Entre 1943 y 1946 se construyó la fuerza política que llevó a Perón a la Presidencia y que lo sostuvo durante sus gobiernos. Perón fue armando su alianza política y social en el contexto de una sociedad atravesada por transformaciones en el régimen de acumulación, por nuevos condicionamientos del capitalismo mundial y gobernada por un régimen político fraudulento que excluía a las mayorías. Durante la dictadura militar (1943-1946) y desde el control de áreas estatales estratégicas, Perón construyó su base de apoyo social y, a la vez, promovió una polarización política cuya mayor expresión fue el período iniciado el 17 de octubre de 1945 y concluido con el triunfo electoral de febrero de 1946. El peronismo de los años 1946-1955 fue expresión de una alianza policlasista caracterizada por constantes tensiones y conflictos entre las clases, fracciones de clase y corporaciones que la conformaban. Fue una alianza entre sectores de la burguesía industrial, sectores mayoritarios de la clase obrera, sectores de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia. El peronismo ligó coyunturalmente los intere-

ses de aquellos sectores y tal esencia signó los límites internos de la alianza, sus tensiones, sus conflictos.

La alianza política peronista se estructuró y se sostuvo desde el Estado. Un Estado que había adquirido ya cierto grado de autonomización en la década del 30. El Estado actuó como promotor de importantes transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales y de cambios dentro del propio Estado, que resignificó y expandió su carácter intervencionista. A la vez el Estado, con un liderazgo fuerte de Perón, reguló, “armonizó” y por momentos promovió los conflictos sociales.

El peronismo supo ver y aprovechar el contexto favorable –la coyuntura internacional y el desarrollo interno de la sociedad y la economía– para la realización de un viraje en el régimen de acumulación industrial. En sus orígenes (1943-1946) confluyeron los intereses de sectores de la burguesía industrial y de los obreros. Esa confluencia quedó plasmada en el primer plan económico-social de gobierno: fomento a la producción industrial liviana y distribución de la riqueza a favor de los asalariados, lo que implicaba una expansión del mercado interno y el despliegue de un Estado intervencionista-benefactor.

Hacia fines de la década del 40 se manifestaron los límites del plan y las contradicciones de intereses de los sectores que conformaban la alianza peronista, así como los límites que imponía el capitalismo mundial a los países dependientes. El viraje en la política económica de 1949, y especialmente de 1952, fue expresión de los intereses de la burguesía industrial. Sin embargo, la fuerza lograda por el movimiento obrero en aquellos años puso límites al plan. El gobierno exhibió ambivalencias, dada la necesidad de preservar las bases populares de su poder. Así, se manifestó el conflicto estructural dentro del bloque de poder, cuya expresión fue clara en el Congreso de la Productividad.

El régimen político peronista fue una democracia ampliada, en la que se expandió el sufragio al voto femenino, funcionaron los mecanismos constitucionales de gobierno y los trabajadores accedieron plenamente a la vida política a través de su participación en organizaciones propias. Esa democracia reconoció y garantizó los derechos sociales de las mayorías y amplió la ciudadanía política a la ciudadanía social. En significativas interpretaciones, allí residió uno de los elementos centrales para comprender la adhesión al peronismo por parte de las mayorías. Sin embargo, el Estado ejerció fuertes controles ideológicos sobre la sociedad. En su intento por “peronizar” espacios culturales importantes, como la educación y la religión, el gobierno difundió “elementos ideológicos” peronistas, que se habían estructurado desde 1943. El control ideológico y político dio lugar a interpretaciones que relativizaron el carácter democrático del régimen político peronista.

Las contradicciones económicas internas de la alianza de clases peronista en buena parte explican la caída del gobierno peronista. A ellas debe sumarse una creciente polarización política, en términos peronismo-antiperonismo, provocada por diversos tipos de conflictos. Entre ellos se destacan los generados por los alcances del plan económico, que restringió los beneficios tradicionales de la burguesía agraria, y los provocados por el control ideológico estatal. Estos últimos marcaron la dinámica que adquirió la coyuntura política en los tramos finales de la segunda presidencia de Perón.

Bibliografía

- Bitrán, Rafael, *El Congreso de la Productividad. La reconversión económica durante el segundo gobierno peronista*, Buenos Aires, El Bloque Editorial, 1994.
- Caimari, Lila, “El peronismo y la Iglesia Católica”, en Torre, Juan Carlos (dirección de tomo), *Los años peronistas (1943-1955)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.
- Campione, Daniel, “Del intervencionismo conservador al intervencionismo populista. Los cambios en el aparato del Estado: 1940-1946”, *Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política*, vol. 2, N° 4, agosto de 1997.
- Doyon, Louise, “La formación del sindicalismo peronista”, en Torre, Juan Carlos (dirección de tomo), *Los años peronistas (1943-1955)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.
- Gerchunoff, Pablo y Antúnez, Damián, “De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo”, en Torre, Juan Carlos (dirección de tomo), *Los años peronistas (1943-1955)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.
- Germani, Gino, *Política y Sociedad en una época de transición*, Buenos Aires, Paidós, 1966.
- James, Daniel, *Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Malgesini, Graciela y Álvarez, Norberto, *El Estado y la Economía, 1930-1955 (II)*, *Historia Testimonial Argentina*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.
- Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.
- Peralta Ramos, Mónica, *Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.
- Pereyra, Horacio, “Algunas hipótesis para el análisis del peronismo (1945-1955)”, *Cuadernos de Historia Argentina 1*, Buenos Aires, Biblos, 1988.
- Portantiero, Juan Carlos, “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”, en Braun, Oscar (comp.), *El capitalismo argentino en crisis*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.
- Sidicaro, Ricardo, *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-1976/1989-99*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

Sirlin, Ezequiel, “Daniel James, introducción a su perspectiva”, Buenos Aires, mimeo, mayo de 2004.

Torre, Juan Carlos, “Introducción a los años peronistas”, en Torre, Juan Carlos (dirección de tomo), *Los años peronistas (1943-1955)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002.

El ciclo de la economía mixta en el capitalismo central (1945-1973)

Ezequiel Sirlin

1. Introducción

En el período comprendido entre 1950 y 1973 la economía mundial creció a un ritmo extraordinario. Tanto los países del capitalismo central como los subdesarrollados del Tercer Mundo y los socialistas del Este europeo registraron avances notorios en sus industrializaciones. Con mayor aceleración, el mundo se hizo más urbano y menos rural, más internacional en la composición de capitales, las pautas de consumo, las formas de producir y de contaminar el planeta. El sistema de explotación centro-periferia que había surgido con el origen de la “economía mundo” durante el siglo XVI, desde luego mutó otra vez en sus mecanismos y actores involucrados en cada lugar. Pero, a pesar de la descolonización que acompañó a este período, no se modificó lo más básico de la relación entre regiones ricas y pobres: el desarrollo desigual con exportación de contradicciones del mundo desarrollado al subdesarrollado.

Ateniéndonos al capitalismo central, la fase expansiva de posguerra no fue más duradera que el “gran boom” comprendido entre 1850 y 1873; sin embargo, se destacó de cualquier otro período de prosperidad por una novedad contundente: nunca antes una bonanza económica había producido una mejora tan visible en el nivel de vida de los trabajadores y sectores medios.

En contraste con los años 30, las economías centrales ingresaron en un período de expansión caracterizado por el pleno empleo, el incremento del consumo y la intervención del Estado para cubrir necesidades de sus poblaciones en vivienda y salud. Ello era posible por la magnitud del crecimiento económico que a su vez descansaba en variables menos ligadas a la institucionalidad política como los avances tecnológicos heredados de la industria bélica o el espacio de crecimiento adicional que implicaba la reconstrucción de Europa. Sin embargo, en el momento de analizar por qué la prosperidad de posguerra resultó tan efectiva en términos de bienestar social debemos centrar la atención en el papel de los Estados.

Más allá del grado de incidencia que se les adjudique con respecto a lo estable que

resultó el crecimiento, lo cierto es que promediando el siglo, esos Estados comenzaron a intervenir en la regulación de las economías nacionales como nunca lo habían hecho. Casi todas las medidas que implementaron en ese sentido habían sido concebidas en los años 30 como respuesta a la Gran Depresión, y más aun durante la Segunda Guerra debido a la necesidad que los gobiernos habían tenido de comandar la plena utilización de los recursos. Sin embargo, en el período que se abre en 1945, las intervenciones fueron cada vez más sistemáticas y audaces, considerando que se implementaban en tiempos de paz. En países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón o la República Federal de Alemania, los gobiernos de posguerra impulsaron planes que en mayor o menor medida contemplaban avances en la planificación estatal sobre áreas que antes regulaban los mecanismos del mercado basados en la competencia económica. Nacionalizaban servicios públicos e industrias de base, aprobaban elevados déficits presupuestarios para suavizar las recesiones cíclicas y garantizaban servicios nacionales de salud como jamás lo habían hecho. Los parlamentos sancionaron impuestos a la riqueza y un arsenal de medidas tendientes a mejorar la situación de los trabajadores dentro y fuera del ámbito laboral. El objetivo prioritario era garantizar que el crecimiento fuera todo lo constante que debía ser para evitar el desempleo, y allí donde la dinámica natural del mercado no aseguraba ninguna de las dos cosas, se profundizaba la intervención correctiva del Estado avalada por las teorías de John Maynard Keynes (1883-1946).

El abanico de nuevas instituciones económicas y sociales se hizo tan amplio que surgieron una serie de términos para referirlas. “Estado de bienestar”, “Estado interventor” y “Estado keynesiano” aludían parcialmente a los programas económicos y sociales que implementaron los gobiernos de posguerra. Por ello, los términos “economía mixta” o “Estado de bienestar keynesiano” resultan más eficaces para designar a los sistemas económicos que emergieron en los centros del capitalismo a partir de 1945. El primero alude a la coexistencia de dos instancias de regulación económica: el Estado y el Mercado como esferas complementarias que intervendrían en la dinamización de la oferta y la demanda macroeconómicas asegurando el crecimiento y el pleno empleo. El segundo refiere tanto a los programas sociales de redistribución por fuera del circuito productivo (Estado de bienestar) como a los planes de intervención económica anticíclica (Estado keynesiano) y permite identificar dos conjuntos de instituciones cuyo desarrollo sería dispar luego de la crisis de la economía mixta en los años 70.¹

1 Véase Isuani, Ernesto, “Bismarck o Keynes: ¿Quién es el culpable? Notas sobre la crisis de acumulación”, en *El Estado benefactor. Un paradigma en crisis*, Buenos Aires, Miño y Dávila, 1995.

Más allá de las denominaciones, lo que interesa explicar sobre estos programas es por qué fueron implementados al mismo tiempo por casi todos los gobiernos de posguerra que regían en sociedades capitalistas. Y, más aun, ¿cómo se explica que, perteneciendo muchos de ellos a la tradición política conservadora (Dwight Eisenhower [1890-1969], Charles de Gaulle [1890-1970], Winston Churchill [1874-1967], Konrad Adenauer [1876-1967]), aceptaran estos avances del control del Estado sobre la actividad económica por ellos canonizada como el ámbito natural de la libre empresa? ¿Por qué priorizaron el pleno empleo y el bienestar de sus poblaciones mediante políticas redistributivas? ¿Cuáles eran los objetivos y los instrumentos principales de una economía mixta funcionando en plenitud? ¿Cuáles eran los presupuestos keynesianos que los avalaban desde la teoría económica? ¿Por qué la economía mixta fue exitosa durante las décadas del 50 y el 60, y por qué entró en crisis a comienzos de los 70? A continuación, procuraremos demostrar que tanto el advenimiento de los Estados de bienestar keynesianos como la crisis posterior se debieron a una multiplicidad de factores económicos, políticos, sociales e ideológicos que interactuaron en cada momento de un modo distinto.

2. El advenimiento de la economía mixta

Vista en perspectiva histórica, la preocupación por el bienestar social que caracterizó a los gobiernos de posguerra resulta excepcional. Comparada con la indiferencia que frente al desempleo habían tenido los gobiernos anteriores a la crisis del 30 y que en cierta forma volverían a tener los equipos neoliberales de los años 80 y 90, resulta inevitable que nos preguntemos por las circunstancias históricas que durante el período que nos ocupa llevaron a que incluso los gobiernos conservadores de tradición económica liberal priorizaran el pleno empleo tolerando el avance de los controles gubernamentales. Para ello es necesario que analicemos la situación inmediatamente posterior a la guerra, comenzando por las enseñanzas históricas que había dejado.

A diferencia de la Primera Guerra Mundial, que no había deparado cambios respecto del modo beligerante con que las naciones dirimían sus conflictos desde la época del Imperialismo, la Segunda llevó a un replanteamiento. Basta comparar las cláusulas asfixiantes que el Tratado de Versalles impuso a Alemania en 1919 con la ayuda económica prevista por el Plan Marshall en 1947 con miras a lograr una rápida recuperación económica que evitara, mucho más que el resurgimiento del fascismo, el fenomenal avance del socialismo. Nadie podía ignorar que el nazismo y el no menos agresivo fascismo japonés habían surgido en sociedades desestabilizadas política, social e ideológicamente por la crisis

económica. Particularmente en Alemania, la depresión del 30 con su catastrófico desempleo del 44 por ciento había provocado un aumento del voto obrero al Partido Comunista y, de manera más decisiva, el apoyo masivo de las clases medias (urbanas y rurales) a los planes de Adolf Hitler (1889-1945) basados en el rearme y la expansión territorial. La enseñanza para los gobiernos capitalistas de posguerra era entonces ineludible: en gran medida, la guerra tenía sus orígenes en el desastre social que había generado la crisis económica, así como su consecuencia más notoria era la expansión del socialismo en Europa del Este y en China.

Allí radicó el principal temor que impulsaría a que los gobiernos capitalistas ampliaran en adelante sus políticas redistributivas. Era el comienzo de la Guerra Fría, tan estrechamente ligada al auge de la economía mixta como el colapso del sistema soviético en 1991 estaría ligado al avance de la contrarreforma neoliberal. En 1947 había quedado constituida la formación de los bloques occidental-capitalista por un lado y socialista del Este por el otro, comandados respectivamente por Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante cuatro décadas la competencia habría de desarrollarse no sólo en el terreno militar sino también en el económico, político e ideológico. En ese contexto, el objetivo principal de los gobiernos capitalistas era impedir el avance del comunismo, para lo cual no sólo contemplaban alianzas militares como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino estrategias preventivas que evitaran el crecimiento de los Partidos Comunistas en el interior de sus países. Como nunca antes, la miseria y la desocupación representaron un peligro para el centro del capitalismo. Particularmente en Alemania occidental, donde la competencia con el otro bloque era muy intensa, las políticas económicas estaban obligadas a elevar el bienestar de los sectores populares de un modo ostensiblemente superior al que pudieran gozar los alemanes del Este. Era la llamada estrategia “del imán”, en virtud de la cual se esperaba que, a largo plazo, el nivel de vida occidental ejerciera un efecto magnético sobre los habitantes del otro lado de la Cortina de Hierro en el mundo comunista. El costo de incentivar los controles estatales y dar mayor cabida a los sindicatos era alto para las fuerzas conservadoras pero siempre un mal menor comparado con la amenaza que les significaba el comunismo.

Ese era el principal temor y se combinaba con otras circunstancias heredadas de la guerra. En los países que habían participado de ella, y más aun en los que habían salido victoriosos, los gobiernos elegidos democráticamente no podían desentenderse del bienestar más igualitario que reclamaban los pueblos luego del sacrificio bélico. Paradójicamente, una guerra tan destructiva y degradante de la condición humana en la que habían tenido lugar genocidios “tecnificados” y el lanzamiento de bombas atómicas sobre poblaciones civiles, dejaba para el

interior de las naciones un conjunto de instituciones solidarias: planes de racionamiento, control de precios, impuestos a las ganancias o el reconocimiento estatal del principio “igual salario para igual trabajo”. Si bien muchas de esas medidas tendientes a uniformizar el sacrificio habían surgido sólo para tiempos de guerra, acabaron generando expectativas en las poblaciones que no se olvidarían de ellas en tiempos de paz. Como era de esperar, desde buena parte de la derecha conservadora se alzaron voces contrarias a las intervenciones redistributivas del Estado, pero en la mayoría de los casos tenían pocas chances de imponer sus criterios, dado que sus portavoces estaban desprestigiados por la actitud política que habían tenido ante el fascismo. En la República Federal de Alemania, nadie podía olvidar todo lo que la derecha tradicional había hecho para que Hitler llegara al poder, como tampoco el apoyo moral y financiero que los grandes industriales habían prestado al partido nazi. En Francia, los conservadores habían colaborado con el régimen de ocupación alemán, y en Gran Bretaña ni la figura de Churchill pudo hacer olvidar la política de entendimiento con Hitler que los conservadores habían practicado entre 1933 y 1938. En Estados Unidos, el prestigio de los republicanos no se encontraba afectado; sin embargo, con la llegada de la administración Eisenhower al gobierno en 1953 quedó claro que sólo lograrían la aprobación parlamentaria de sus proyectos militares en la medida en que aceptaran el incremento de las inversiones sociales que reclamaba el Partido Demócrata.

En cuanto a los factores económicos que explican el consenso obtenido por la economía mixta en la posguerra, nuevamente la experiencia vivida en los años 30 resultó fundamental. Por mucho que los economistas ortodoxos siguieran defendiendo el libre accionar de los mercados, la Gran Depresión había puesto de manifiesto lo insuficientes que resultaban los mecanismos “invisibles” para superar las crisis inéditas que el capitalismo avanzado estaba presentando. Ya no eran recesiones con efectos revitalizantes para el sistema económico, sino crisis de otro carácter que podían hacerlo colapsar, como muchos habían creído que estaba sucediendo en 1930. En ese sentido, la inacción del gobierno republicano de Herbert Hoover (1874-1964) —que entre 1929 y 1933 se había limitado a esperar que la crisis se resolviera por la eliminación natural de sectores ineficientes— ponía de manifiesto los mínimos recursos que el liberalismo económico tenía para afrontar el nuevo desafío. Superando esa falencia, los experimentos anticíclicos de los años 30 constituían toda una base de antecedentes para que los equipos de posguerra progresaran en su mejoramiento. El *New Deal* no sólo había aumentado las expectativas de millones de estadounidenses en cuanto a las obligaciones del Estado para con la subsistencia de los ciudadanos, sino que había implicado avances en puntos concretos como el control de la sobreproducción agrícola mediante el subsidio del Estado, el reconocimiento

estatal de los sindicatos como instancia necesaria para el funcionamiento de la economía y el aumento de los impuestos progresivos con el objeto de financiar obras públicas y asistencia a los parados. A su vez, la moderación de Franklin Roosevelt (1882-1945) con respecto a la utilización del déficit presupuestario por miedo a la inflación había quedado superada por la contundencia con que los gastos militares luego del ataque japonés a Pearl Harbor (1941) activaron la industria pesada allí donde el New Deal había fracasado relativamente. Si en tiempos de guerra el Estado podía asegurar una demanda suplementaria que reactivara la inversión y el empleo, por qué no habría de hacerlo en tiempos de paz, con mayor control de la financiación y en industrias más benéficas, como la construcción de viviendas populares. De la misma manera, servía como antecedente lo rápido que Hitler había erradicado el paro creando una demanda artificial mediante los pedidos estatales a la industria de rearme, y el éxito de la planificación soviética que en los años 30 había iniciado un despegue industrial mientras el capitalismo parecía desahuciado.

En definitiva, los antecedentes disponibles eran muchos y en algunos países como en Suecia habían implicado avances en la teoría económica, si bien a ese respecto nada sería tan influyente como el aporte de John Maynard Keynes en su *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*, publicada en 1936. Por el modo en que sus propuestas anticíclicas avalaron la economía mixta, la influencia de esta obra teórica en la vida de los hombres que habitaron el mundo capitalista posterior a la Segunda Guerra Mundial fue realmente importante, por muy poco que ellos lo supieran.

Como suele suceder en las revoluciones científicas, Keynes debió empezar refutando los postulados más elementales del paradigma anterior, que en este caso se afirmaba en los economistas clásicos. Aunque algunos de esos axiomas eran casi tan viejos como el capitalismo, todavía en 1930 seguían avalando la inacción de los gobiernos liberales frente a las crisis. Por eso en la *Teoría general...*, Keynes comenzaba rebatiendo la Ley de Say según la cual todo incremento en la oferta global de una economía generaba un aumento proporcional en la demanda. Detengámonos un momento en todo lo que esta afirmación traía aparejado. Sin duda, era particularmente relevante para el capitalismo post-30 puesto que de ella se desprendía que fenómenos causantes de la depresiones y el desempleo, como la sobreproducción, la sobreinversión o el subconsumo, no podían más que estar motivados en distorsiones episódicas susceptibles de ser rectificadas por la dinámica natural del mercado. La Ley de Say partía del axioma de que todo dinero gastado para producir bienes sería usado para el consumo de otros bienes. De ello se desprendía que si las condiciones para el crecimiento de la oferta eran normales, la demanda no tenía por qué rezagarse frenando el crecimiento. En todo caso, si por causas coyunturales la demanda

dejaba de acompañar los incrementos de la oferta, la misma crisis debía activar sus movimientos de resolución: baja de precios, salarios y costos de producción, aumento del consumo, la inversión y el empleo. De estos principios optimistas se derivaba que si el desempleo persistía era porque los trabajadores y los sindicatos se negaban a aceptar las reducciones salariales que terminarían con la recesión.

Todos estos postulados que guiaban a los gobiernos basados en liberalismo económico mucho más de lo que ellos eran conscientes serían cuestionados por Keynes al afirmar que las economías avanzadas tendían a una demanda deficiente que provocaba la mediocridad de la oferta y producía el desempleo crónico. La experiencia histórica indicaba que cuanto más ricas y evolucionadas fueran esas economías, mayor sería la tendencia de la demanda a resultar deficiente en tanto estímulo a la inversión y a la generación de empleo. En las economías más ricas —con mucha acumulación de capitales y menos necesidades insatisfechas—, la demanda tendía a rezagarse por diversos factores. En primer lugar existía lo que Keynes llamaba la “propensión marginal a consumir” motivada en el hecho de que, a diferencia de la gente de menores ingresos, las clases medias y altas de una sociedad no gastaban todos sus ingresos sino sólo una parte. Las primeras debido a sus hábitos ahorrativos enquistados en la moral puritana, las segundas porque sus ingresos llegaban a ser tan altos que no podían gastarlos. Siendo así, y no verificándose el postulado clásico según el cual el capital de los ahorristas tarde o temprano derivaba en inversiones ($A = I$), para Keynes las economías capitalistas tendían a un superahorro que, al no transformarse en inversión, generaba el desempleo de los más pobres. Para evitarlo era necesario que el Estado interviniera con instrumentos flexibles que actuaran sobre la demanda, el ahorro y la inversión de un modo distinto en cada momento del ciclo económico que se pretendía morigerar.

Los instrumentos más salientes de la propuesta keynesiana eran:

- *Déficit presupuestario.* En caso de coyuntura recesiva era conveniente que el Estado aumentara sus gastos más allá de los recursos públicos con el objetivo de reactivar la economía, siempre y cuando pudiera financiar su endeudamiento sin provocar inflación. Los gastos podían ser canalizados en el desarrollo del Estado de bienestar, en el subsidio a industrias generadoras de empleo o en la construcción de infraestructura y viviendas populares.
- *Impuestos progresivos.* Destinados a financiar al Estado de bienestar keynesiano sin grabar el consumo sino las ganancias, y sobre todo las ganancias rentistas que no generaban empleo.

- *Establecimiento de organismos de planificación.* Tendientes a socializar la inversión privada, vale decir, a incrementar los controles del Estado, lo que en modo alguno significaba socializar los medios de producción, ni las ganancias.
- *Reconocimiento del rol sindical.* Entre los diversos modos que el keynesianismo preveía para remediar la contracción de la demanda, estaba el propiciar sindicatos fuertes que pudieran negociar aumentos salariales para evitar el subconsumo, participando, junto al Estado mediador y a los empresarios capitalistas, en acuerdos tendientes a lograr la continuidad de la inversión y el empleo.
- *Manipulación de la tasa de interés.* Se procuraba su baja cuando se requería acentuar la inversión. Estaba previsto como un instrumento eficaz para combatir el superahorro (“eutanasia del rentista”) que al no transformarse en inversión provocaba el desempleo de los más pobres.

3. El esplendor de la economía mixta

Sintetizando, hemos visto cómo las experiencias y los temores de posguerra conducían a un cambio de política económica y social por parte de los Estados. Todo ello coincidía con el surgimiento de un nuevo pensamiento económico que se imponía como el más viable para salvar al capitalismo de sus tendencias autodestructivas. Para las fuerzas conservadoras implicaba resignar principios importantes del liberalismo económico, pero todo ello se haría preservando la defensa sin límites de la propiedad privada de los medios de producción por muy concentrada que fuera. Con excepción del mundo anglosajón, y particularmente de Estados Unidos, donde ideológica y académicamente fue más resistido, el keynesianismo se impuso con un alto grado de consenso.

En este marco, sólo hacía falta que ciertas variables económicas contribuyeran al crecimiento tal como sucedió. Por el lado de la oferta, la situación de posguerra era óptima para la reconversión industrial basada en una generalización del fordismo-taylorismo que se había desarrollado en Estados Unidos durante los años 20. Lo mismo sucedía con los bienes de consumo; al coche popular y los electrodomésticos, se agregaban una serie de productos derivados de la tecnología bélica como la televisión, *boeings*, antibióticos y transistores. Sin duda que la falta de mano de obra y de capitales que padecían los países europeos eran variables negativas, pero la llegada de migrantes provenientes de las zonas rurales y del Tercer Mundo, sumada a los préstamos estadounidenses previstos

por el Plan Marshall, resultarían suficientes para activar el despegue. Por el lado de la demanda, la escasez de mano de obra imponía el alza de los salarios evitando el subconsumo, así como la destrucción parcial de los países beligerantes implicaba una demanda adicional en rubros fértiles para la generación de empleo como la construcción de viviendas e infraestructura.

Todo ello contribuyó a que los objetivos principales de la economía mixta: —pleno empleo y crecimiento— se cumplieran satisfactoriamente entre 1950 y 1973. Superando en algunos casos sus marcas históricas, los países miembros de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE)² crecieron al 5,5 por ciento anual. Si bien se produjeron recesiones y recalentamientos, los Estados de bienestar keynesianos lograron morigerar los problemas. En cada país, el Estado intervenía de distinta manera. En Estados Unidos, las nacionalizaciones de servicios públicos fueron insignificantes y el poder de los sindicatos, lejos de ser ampliado, fue diezmado en 1947 por la ley Taft-Hartley, antecesora en algunos aspectos de la caza de brujas anticomunista que impulsaría el senador Joseph McCarthy (1908-1957) en la década del 50. En Francia, las nacionalizaciones fueron importantes no sólo en materia de servicios públicos que habían dejado de ser rentables sino de rubros dinámicos de última tecnología como la aviación y la telefonía. En Gran Bretaña, las instituciones del Estado de bienestar tuvieron mayor desarrollo que las keynesianas; allí donde el Plan Beveridge del gobierno laborista marcaba un hito dentro del mundo capitalista al asegurar una cobertura médica para todos los habitantes del Reino Unido, los déficits presupuestarios fueron cautos, y siempre estuvieron sujetos al objetivo monetario de mantener fuerte la libra. En Japón y la República Democrática de Alemania, la insignificancia de los gastos militares en los presupuestos contribuyeron al “milagro económico”.

También fue significativo el rol que tuvieron los Estados en la investigación científica y tecnológica con miras económicas. La invención debía ser lo suficientemente continuada para proponer artículos de consumo sin que se produjeran períodos opacados por la saturación de bienes como en la historia del capitalismo industrial había sucedido con los textiles ingleses hacia 1830, o con el Ford T, cuyo modelo sustituto, el Ford A, no había incitado al recambio. Por último, la conformación de un marco supranacional de cooperación económica que evitara los conflictos entre las naciones capitalistas resultó tan decisivo como su ausencia lo había sido en la acumulación de tensiones durante los años 30. Movidos por el clima colaboracionista y anticomunista de posguerra,

2 Denominada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) luego de 1961. Se trata de la organización integrada por los 16 países europeos receptores del Plan Marshall.

surgieron una serie de organismos especializados en cada uno de los problemas que se habían suscitado. Así, el tratado de Bretton Woods (1944) proclamaba la utilización del dólar como patrón de cambio para las monedas nacionales, con el objetivo de alcanzar una estabilidad monetaria internacional que impidiera las devaluaciones con fines proteccionistas. Complementariamente, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerciales (GATT) era un pacto comercial donde los países firmantes se comprometían a no elevar sorpresivamente los impuestos a las importaciones. Otros organismos como la Comunidad Económica del Hierro y del Acero (CECA, que luego sería absorbida por la Comunidad Económica Europea) establecían sociedades en la producción y el mercado. Finalmente, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional surgieron como instituciones crediticias de gran escala destinadas a financiar las crisis de balanza de pagos.

Los “años dorados”, “sociedad de la opulencia” (o “de la abundancia”), “onda larga”, fueron algunas de las denominaciones recibidas por la feliz experiencia del capitalismo central de posguerra. El crecimiento fue notable tanto por su aceleración y su constancia como por los cambios verificados en la producción y el consumo. Sin embargo, las novedades más salientes se registraron en las transformaciones de índole social. El grado de urbanización creció como nunca en detrimento de las poblaciones rurales. Fue notorio el crecimiento de las clases medias y la mejora del nivel de vida de las clases trabajadoras, si bien, en países bastante ricos como Estados Unidos, la marginalidad y la extrema pobreza no fueron erradicadas. Con respecto a la ocupación de las personas, el gran crecimiento del sector terciario en algunos países fue tan espectacular que a mediados de los años 60 dio lugar al surgimiento de la categoría “posindustrial” para definir a las sociedades donde los servicios acaparaban la mitad más uno de la población empleada³. La expansión de las multinacionales industriales (norteamericanas, europeas y japonesas) por distintas regiones del planeta implicó también un aumento de la plusvalía relativa en perjuicio de los trabajadores del Tercer Mundo, al mismo tiempo que un aumento de la explotación y el desarrollo desigual entre el centro y la periferia del capitalismo. Teniendo en cuenta que esta apropiación de riqueza contribuyó a financiar los progresos sociales en el centro del capitalismo, puede también representarse al período de la economía mixta como la más exitosa concreción del “imperialismo social” que promovían los Estados europeos del siglo XIX.

Otros cambios que en perspectiva histórica se destacaron especialmente por su originalidad fueron los relacionados con la profunda revolución de las costum-

3 Véase Daniel Bell: *El advenimiento de la sociedad post-industrial*, Madrid, Alianza, 1976.

bres que tuvo lugar en los años 50 y 60. En las modernas sociedades de consumo que surgían en las grandes ciudades, las mujeres avanzaron en el terreno laboral, en el derecho al voto y en diferentes cuestiones relativas a su independencia y libertades. Se produjeron cambios en la estructura familiar por el incremento de los divorcios, la apertura sexual y la baja de la natalidad que tuvo lugar luego del boom procreativo (el llamado *baby boom*) de la inmediata posguerra. Al mismo tiempo, se asistió al surgimiento de una cultura joven que, guiada por la producción discográfica de origen anglosajón, tendía a reaccionar más contra el modo de vida y los valores establecidos por sus padres que contra las injusticias sociales del sistema capitalista. En el plano cultural, el notorio desarrollo de la instrucción universitaria y de las ciencias sociales no logró neutralizar el dominio que el discurso publicitario, los medios de comunicación masiva y la industria cultural tenían sobre las mentalidades colectivas. Así, el rumbo espiritual que emprendía la civilización de Occidente era para algunos tan incierto como el futuro físico del planeta, comprometido por la contaminación y las bombas atómicas.

4. La crisis de la economía mixta

A fines de los años 60, algunos problemas comenzaron a indicar que el curso del capitalismo central no seguiría siendo tan estable. Junto al recalentamiento inflacionario de 1968, se agravaron los conflictos comerciales entre Estados Unidos y la pujante OCDE, los cuales llevaron al colapso de Bretton Woods, que se produjo con la devaluación del dólar en 1971. Todo ello, sumado a la pérdida de competitividad que venía sufriendo la industria norteamericana, era sólo el anticipo de una depresión generalizada que pasaría a la historia como la crisis del 73. La combinación de inflación y recesión (estanflación) resultó novedosa, puesto que hasta el momento ambas variables habían mantenido una relación inversamente proporcional, como indicaba la curva de Phillips. Era la primera recesión importante después de la Gran Depresión y si bien sus efectos en la población no serían catastróficos como aquélla, el desempleo terminó con la ilusión de prosperidad permanente. La carrera de precios y salarios activó el conflicto entre capital y trabajo impulsando a que muchos gobiernos ideológicamente no identificados con el neoliberalismo aplicaran restricciones en sus presupuestos buscando detener la inflación, aun a costa de generar más desempleo (ajustes monetaristas).

Como suele suceder con casi todos los fenómenos históricos, la discusión que economistas e historiadores mantienen sobre el origen de la crisis del 73 tendió a desarrollarse en torno de una multiplicidad de causas cuya incidencia relativa

cada corriente valoró de distinta manera. Los monetaristas pusieron el acento en la sobreemisión de dólares que, en perjuicio de Bretton Woods, Estados Unidos había llevado adelante para financiar sus déficits presupuestarios. Otros resaltaron los efectos recesivos e inflacionarios que tuvo la cuadruplicación del precio del petróleo llevada a cabo por los países árabes (Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP) en 1973, mientras que no faltaron quienes adjudicaron los problemas al poder que tenían los sindicatos para lograr incrementos salariales sin los correspondientes aumentos de la productividad.

La mayoría de los estudiosos aceptan que los factores mencionados tuvieron su incidencia en el desencadenamiento y agravación de la crisis. Sin embargo, para muchos de ellos las causas fueron más profundas y estuvieron ligadas directamente al sistema económico de posguerra.

Así, para Herman van der Wee (1986) la crisis del 73 fue una crisis de la economía mixta originada en distintos problemas que su funcionamiento fue generando al entrar en contradicción con los requisitos de partida que el keynesianismo había considerado imprescindibles. Allí donde Keynes había supuesto un Estado flexible en sus erogaciones, que debía intervenir de manera opuesta en cada momento del ciclo económico, los déficits presupuestarios no pudieron ser alternados con superávits debido al crecimiento de la burocracia y al carácter permanente de las instituciones del Estado de bienestar. Del mismo modo, la economía mixta descansaba en el supuesto de que la planificación macroeconómica iba a ser eficaz, lo cual se vio dificultado por el crecimiento de las multinacionales cuyos centros de decisión solían estar fuera del alcance de los gobiernos que intentaban regularlas. En tercer lugar, el keynesianismo suponía que el entendimiento entre capitalistas y trabajadores iba a ser posible en la medida en que cada parte asumiera el lugar de la otra en función de su propio beneficio. Los trabajadores aceptarían que las ganancias de los capitalistas se mantuvieran altas para que éstos siguieran invirtiendo y generando empleo, del mismo modo que los empresarios comprenderían que elevando los salarios evitarían los problemas de demanda que a corto plazo habrían de afectar la ganancia. El punto de entendimiento se fijaría en torno de la “productividad”: los aumentos salariales estarían sujetos a que los trabajadores produjeran más ganancias para sus patrones. Los keynesianos creían haber descubierto una lógica positiva que al ser internalizada por los actores conciliaría las clases en el seno de un capitalismo armónico⁴. Pero, además de las dificultades que se encontraron para medir la productividad, según Van der Wee, la cooperación no prosperó debido a que los sindicatos priorizaron la situación laboral de sus

4 Véase Claus Offe, *Contradicciones en el Estado del Bienestar*, México, Alianza, 1988.

afiliados sobre la generación de nuevos empleos, mientras que los monopolios capitalistas no resistieron la tentación de aumentar a corto plazo sus ganancias en detrimento de los salarios. Por último, si la suerte de la economía mixta estaba atada a que el Estado y el mercado siguieran siendo instancias de regulación imperturbables, su futuro no sería promisorio. El crecimiento de los monopolios formadores de precios inhibió la competencia económica, al igual que el Estado cuyas intervenciones anticíclicas (por ejemplo, mediante subsidios para industrias generadoras de empleo) mal acostumbraron a los inversores que debían disciplinar.

Los economistas encuadrables en la tradición marxista pueden dividirse entre quienes explican el declive haciendo hincapié en los conflictos “verticales” y quienes enfatizan los “horizontales”⁵. Con respecto a los primeros, para Bowles, Gordon y Wiesskopf (1989), la pérdida de rentabilidad que sufrieron las grandes empresas norteamericanas se debió no sólo al declive de la dominación internacional que Estados Unidos había gozado en la posguerra, sino fundamentalmente a un deterioro del acuerdo entre capital y trabajo visible en el número de huelgas que encabezaron los trabajadores peor posicionados, cuya capacidad de protesta se vio incrementada por la abundancia del empleo. Asimismo, nuevos conflictos suscitados entre los intereses de las grandes empresas y los reclamos de la comunidad por la preservación del medio ambiente implicaron costos adicionales para las industrias, cuyo dominio sobre la sociedad era más limitado que antes. En cuanto a la tesis de los conflictos “horizontales”, para Robert Brenner (1998) las causas más profundas de la recesión deben buscarse en la competencia nociva que mantuvieron las industrias norteamericanas, alemanas y japonesas. Más que a la resistencia de los trabajadores, para Brenner la baja de la rentabilidad se habría debido a errores de sobreinversión en los que incurrieron las grandes industrias que, movidas por la competencia, afrontaron reconversiones técnicas excesivas en relación con los mercados disponibles.

Para explicar la recaída que el capitalismo central sufrió en los años 70 convergen una cantidad de factores económicos y sociales. Sin embargo, volviendo a la perspectiva histórica que sugerimos al comienzo del capítulo, no debe desestimarse el declive de los principales factores políticos que en la posguerra

5 Una visión más clásica dentro del marxismo es la de Ernest Mandel, *La crisis 1974-1980*, México, Serie Popular Era, 1980, para quien se trató de una típica crisis de sobreproducción capitalista, que en lo esencial no era muy distinta a la del 30: la onda larga de posguerra con su revolución tecnológica habría llevado a un desmedido aumento de la inversión que, al no poder ser compensada con un aumento de la plusvalía (debido al poder de los sindicatos), provocaba la declinación de la ganancia.

habían apuntalado la economía mixta. El fin de la reconstrucción europea y, más tarde, el derrumbe del socialismo fronterizo que había inducido a un capitalismo más solidario fueron decisivos para la consolidación del modelo neoliberal.

Bibliografía

- Adams, Willi Paul (comp.), *Los Estados Unidos de América*, México, Siglo XXI, 1979. (Historia Universal Siglo XXI, vol. 30).
- Benz, Wolfgang, *El siglo XX, Europa después de la Segunda Guerra Mundial 1945-1982*, México, Siglo XXI, 1986.
- Bowles, S., Gordon, D. M. y Wiesskopf, T. E., *Tras la economía del despilfarro*, Alianza, Madrid, 1989.
- Brenner, Robert, “Uneven Development and Long Downturn: The Advanced Capitalist Economies from Boom to Stagnation, 1950-1998”, editado íntegramente por *New Left Review*, N° 229, mayo/junio de 1998.
- Cipolla, Carlo, *Historia económica de Europa*, vol. 6, Barcelona, Ariel, 1980.
- Hall, Peter, *El gobierno de la economía. Implicaciones políticas de la intervención estatal en la economía en Gran Bretaña y Francia*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Bienestar, 1993.
- Hobsbawm, Eric, *Historia del siglo XX 1914-1991*, Barcelona, Crítica, 1995.
- Isuani, Ernesto, “Bismarck o Keynes: ¿Quién es el culpable? Notas sobre la crisis de acumulación”, en *El Estado benefactor. Un paradigma en crisis*, Buenos Aires, Miño y Dávila, 1995.
- Mandel, Ernest, *La crisis 1974-1980*, México, Serie Popular Era, 1980.
- Mishra, Ramesh, *El Estado de Bienestar en crisis*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Bienestar, 1992.
- Offe, Claus, *Contradicciones en el Estado del Bienestar*, México, Alianza, 1988.
- Van der Wee, Herman, *Prosperidad y crisis. Reconstrucción, crecimiento y cambio, 1945-1980*, Barcelona, Crítica, 1986.

Proscripción, modernización capitalista y crisis. Argentina (1955-1966)

Elena Scirica

1. Introducción

El golpe de Estado que derrocó al gobierno de Perón, en 1955, inauguró un nuevo capítulo en la agitada vida política argentina. Los protagonistas de la insurrección cívico-militar calificaron de totalitario al régimen depuesto y aspiraron a borrarlo de la escena política como si se hubiera tratado de una aberración pasajera. Pero las medidas proscriptivas, la exclusión y persecución de los militantes peronistas, los esfuerzos conjuntos de gobernantes y empleadores para aumentar la productividad y debilitar la fuerza social y política de los trabajadores, no lograron su cometido. Por el contrario, generaron un enorme descreimiento en el sistema político, cercenaron la legitimidad de las instituciones estatales y solidificaron la identificación de los trabajadores con el peronismo. El período que se inició en 1955, estuvo signado, pues, por la denominada “cuestión peronista”. Tras ella se avizoran una serie de dilemas, conflictos y problemas entrelazados entre sí.

En el plano político, la nota dominante fue que en nombre de la democracia y la libertad se proscribió a la principal fuerza electoral, es decir, al peronismo. Como consecuencia, los gobiernos de la etapa, surgidos de elecciones de escasa legitimidad, fueron constitutivamente inestables y estuvieron jaqueados desde distintos frentes. En particular, por las Fuerzas Armadas que asumieron un rol de “vigilancia” y “veto” sobre el sistema político. Su papel, además, adquirió un renovado vigor a la luz del impacto de la Revolución Cubana y el consecuente temor a la expansión del comunismo en el continente. Las fuerzas peronistas, en tanto, se expresaron fundamentalmente a través del movimiento sindical.

En el nivel económico, los sectores dominantes buscaron imponer un cambio en el modelo de acumulación. Intentaban establecer las bases de una política

acorde con el reordenamiento del sistema económico internacional, basado en la integración y liberalización de las relaciones del mundo capitalista. Ello incluía el ingreso al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, la eliminación de restricciones al flujo de capitales extranjeros, el desarrollo industrial y la intervención estatal anticíclica¹. En el trasfondo de esta reorientación se encontraba el agotamiento de la primera fase de sustitución de importaciones, los intentos —expresados ya en el segundo gobierno peronista— de elevar la productividad y “racionalizar” o “modernizar” el funcionamiento de las empresas privadas y estatales y la necesidad de sortear las continuas crisis de balanza de pagos. Las clases dominantes, entonces, buscaban reconvertir o superar ese modelo de acumulación impulsando una concentración de la renta nacional a favor del capital. Para ello debían minar la organización sindical, la resistencia obrera y el peso de las comisiones internas. Ardua tarea si se considera la cohesión de la clase obrera y la existencia de tensiones en el interior de la burguesía (enfrentada en función de sus intereses agroganaderos y exportadores, industrial mercadointernista o, de manera creciente, industrial transnacionalizada). En el plano social, las tensiones generadas por los intentos de promover cambios en el modelo económico y en la distribución del ingreso a costa de los derechos adquiridos por los trabajadores provocaron severos conflictos. Asimismo, la dinámica política y económica repercutió de manera directa sobre los sindicatos que, a su función como representantes de los trabajadores en el nivel gremial, sumaron su papel como voceros de las fuerzas peronistas en el sistema político. De este modo creció su poder e influencia, llegando a constituirse en un relevante “factor de poder”. Como contrapartida, su relación con las bases cobró nuevos matices y con el tiempo se desgastó.

En el plano cultural, el dato más relevante fue la emergencia de una cultura joven marcada por la impronta de la rebelión. La transformación de la vida cotidiana, los cambios en los roles de género, la ampliación de la matrícula universitaria y un mercado cultural en expansión constituyeron importantes apuestas innovadoras.

A partir de estas consideraciones, cabe preguntarse: ¿Por qué el peronismo siguió constituyendo una cuestión crucial en la agenda política del período? ¿De qué forma pretendió impulsarse el reajuste del modelo de acumulación? ¿Cuál fue su impacto en la conformación de los sectores dominantes? ¿Qué implicancias tuvo en la estructura económica y social? Estos interrogantes, entre tantos otros, se cruzan necesariamente con el análisis relativo a la actuación de los trabajadores,

1 Véase Ezequiel Sirlin, “El ciclo de la economía mixta en el capitalismo central (1945-1973)”, en el presente libro.

de identidad mayoritariamente peronista, frente a estas circunstancias, a la vez que permiten reflexionar sobre el impacto de la “modernización” en general y sobre el papel adquirido por las Fuerzas Armadas en el período.

Para abordar estos problemas se tendrán en cuenta distintos ejes. En primer lugar, el funcionamiento de un régimen político restrictivo que, al impedir la elección de los candidatos deseados por las mayorías populares (o anular ese veredicto en caso de que fueran electos), dio lugar a la instauración de lo que algunos autores denominaron “semidemocracia” o “democracia restringida” entrecruzada con intervenciones militares. En segundo lugar, se examinará la impronta de “revancha clasista” contra el reconocimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores y la consecuente “resistencia” peronista. En función de esto se indagará un tercer eje, esto es, los intentos por introducir cambios en el modelo de acumulación y el impacto del desarrollismo. A partir de aquí podrá vislumbrarse cómo repercutieron estos cambios en la sociedad, en la cultura y en el movimiento obrero en particular. Finalmente, se analizará el papel y la relevancia de las Fuerzas Armadas.

Consideramos que esta retrospectiva brinda elementos para analizar la inestabilidad política del período y las disyuntivas que enfrentaba el intento de modernización capitalista. Este ciclo, sin embargo, no se cierra en 1966. Por el contrario, las contradicciones y tensiones que implicaba se desplegarán durante otra larga década que culminará, de modo trágico, con el golpe de Estado de 1976.

2. Un régimen político excluyente

El golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 contó con el apoyo de un amplio frente político, donde confluyeron conservadores, radicales, socialistas, demócratas cristianos y grupos nacionalistas, así como también los representantes corporativos e ideológicos de la burguesía urbana y rural, el grueso de las Fuerzas Armadas y la Iglesia². Se inauguró entonces una experiencia que se extendió hasta 1958, bautizada por sus protagonistas “Revolución Libertadora”, en tanto declamaba que venía a liberar al país de la “tiranía” de

2 Véanse César Tcach, “Golpes, proscripciones y partidos políticos”, en Daniel James (dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Nueva Historia Argentina, tomo 9, Buenos Aires, Sudamericana, 2003; Daniel Rodríguez Lamas, *La Revolución Libertadora*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1985, p. 61, y Marcelo Cavarozzi, *Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del Estado al mercado en Argentina*, Buenos Aires, Ariel, 1997, p. 19.

Perón. Así, el nuevo gobierno se presentó como provisional para indicar su decisión de restaurar el orden constitucional.

Los valores defendidos por la coalición antiperonista convergían con los postulados del mundo occidental que, en el marco de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo, realizaba las banderas de la democracia liberal. Pero la intención de fundar un régimen político basado en los partidos y en el fortalecimiento de los mecanismos parlamentarios resultaba ficticia en tanto se asentaba en la proscripción de la principal fuerza electoral del país. La “democracia” restringida que se instaló en 1958 y continuó hasta 1966 de manera bastante precaria (en particular, entre 1962 y 1963, cuando el Parlamento fue cerrado y el poder civil osciló al vaivén de las presiones militares) definió, entonces, una escena política ilegítima y constitutivamente inestable.

La debilidad del sistema institucional se verifica tanto en las disyuntivas que atravesaron los gobiernos de la “Libertadora” como en la fragilidad de las administraciones civiles posteriores. Nos referimos a los gobiernos de Arturo Frondizi (1958-1962), José María Guido (1962-1963) y Arturo Illia (1963-1966).

Resultaba evidente que los mecanismos parlamentarios no canalizaban “los intereses ni la orientación de los actores sociales fundamentales”. Así, la proscripción del peronismo obligó a sus bases sociales —básicamente, los trabajadores sindicalizados— a actuar por fuera del sistema parlamentario. Se estableció entonces lo que Marcelo Cavarozzi denominó “sistema político dual”, ya que los mecanismos parlamentarios coexistieron, de manera conflictiva y a veces antagónica, con modalidades extrainstitucionales de hacer política.³

Desde otro ángulo, Juan Carlos Portantiero sostuvo que la creciente inestabilidad política se debió a la incapacidad de los sectores dominantes para establecer una dominación legítima sobre la sociedad. Esta situación derivó en una crisis de hegemonía, pues el sector que devino predominante en lo económico no logró proyectar sobre la sociedad un orden político que lo expresara legítimamente. En este marco, los partidos políticos resultaron inconsistentes⁴.

3 Marcelo Cavarozzi, *op. cit.*

4 La crisis de hegemonía se expresó, sobre todo, a partir de 1958, cuando las políticas desarrollistas incidieron en la composición de las clases dominantes al fortalecer una nueva fracción burguesa, industrial, fuertemente concentrada y transnacionalizada. Véase Juan Carlos Portantiero, “Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)”, *Revista Mexicana de Sociología*, N° 2, 1977.

Con el transcurso de los años, el escepticismo respecto de los partidos contrastó, cada vez más, con la percepción del poderío que mostraban otros participantes del juego político, clasificados como “grupos de presión” y “factores de poder”⁵. Entre ellos, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, las organizaciones corporativas empresarias y la Iglesia.

2.1 La “Revolución Libertadora” y la cuestión peronista

Traspasado el umbral de acuerdo básico —el derrocamiento de Perón—, las diferencias del frente antiperonista eran evidentes y se manifestaron apenas producido el golpe de Estado. El general Eduardo Lonardi, presidente provisional vinculado con sectores clericales, nacionalistas y antiliberales, de dudosa fe democrática, intentó emprender una política de conciliación en la que no hubiera “ni vencedores ni vencidos”. En su perspectiva, era posible reeditar una suerte de peronismo sin Perón que rearticulara la alianza de militares nacionalistas con dirigentes sindicales y evitara el desplazamiento de los trabajadores al comunismo. Pero esa orientación hacía caso omiso de los postulados mayoritarios de la “Libertadora” y no tomaba en cuenta la tremenda carga de resentimiento acumulada. En efecto, tanto los partidos políticos como amplios sectores militares y aquellos que se consi-

5 Los grupos de interés y los grupos de presión, organizados con el propósito de influir en las instancias del poder para concretar sus reivindicaciones, cobraron gran interés académico y público desde fines de la década de 1950. En la perspectiva de Jean Meynaud, los grupos de presión se distinguen de los de interés porque no sólo difunden sino que ejecutan las acciones necesarias en pos de lograr su cometido. Para ello, crean vínculos de fuerza con las instituciones gubernamentales, con funcionarios o con partidos. Pueden recurrir a la persuasión (por medio de una argumentación racional para convencer a su interlocutor), a la presión económica (que puede incluir desde la corrupción de funcionarios “clave” hasta la desestabilización del gobierno mediante el retiro de inversiones), a las amenazas o a la acción directa. Meynaud diferencia, a su vez, los grupos de presión constituidos como organizaciones profesionales basadas en la especialización y el reagrupamiento laboral (tales como uniones de agricultores, sindicatos o grupos patronales), de los que se constituyen como agrupaciones de vocación ideológica que pugnan por la difusión de sus planteos y por demostrar la bondad que ellos tienen para la sociedad (por ejemplo, la Iglesia o las sociedades de defensa de la moralidad). Jean Meynaud: *Los grupos de presión*, Buenos Aires, Eudeba, 1963. En la Argentina, en 1964, José Luis de Imaz publicó la obra *Los que mandan*, en donde analizaba los principales grupos de poder de la sociedad argentina. Véase también: http://www.avizora.com/publicaciones/ciencias_politicas/textos/objeto_estudio_ciencias_politicas_0012.htm.

deraban perjudicados por la política económica y social mercadointernista-redistribucionista del peronismo, buscaban como primer objetivo la “desperonización” del país. Tras esa hostilidad hacia los denominados “enemigos de la libertad” se encubría, por lo general, un profundo odio social y ansias de desquite clasista⁶.

Las tensiones con respecto a la línea política a adoptar frente al movimiento depuesto se revelaron en la propia constitución del gabinete ministerial⁷ y en la fórmula presidencial. De hecho, el vicepresidente, el contralmirante Isaac Rojas, expresaba a los grupos más recalcitrantes del antiperonismo.

Para contrarrestar los proyectos del presidente, Rojas impulsó la formación de una Junta Consultiva Nacional con la participación de los partidos políticos opuestos al régimen derrocado. La Junta, presidida por Isaac Rojas, era una suerte de Parlamento sin poder de decisión e incluía a todas las tendencias políticas del frente civil, con excepción del Partido Comunista, excluido por el gobierno⁸. Esta instancia de participación implicaba un reconocimiento del arco político partidario y la resurrección de su vínculo con las Fuerzas Armadas. En paralelo, arremetían los ataques contra los sindicatos y militantes peronistas. Finalmente, falto de apoyos y presionado para que dejara el poder, Lonardi renunció.

La asunción del general Pedro Eugenio Aramburu como presidente —y la permanencia de Rojas en la vicepresidencia— marcó el triunfo de los sectores liberales más antiperonistas, conocidos popularmente como “gorilas”.

Aramburu derogó la Constitución de 1949 e intervino por decreto la CGT y los sindicatos, que quedaron a cargo de oficiales de las Fuerzas Armadas. También disolvió la Fundación Eva Perón y el partido peronista, inhabilitó a sus miembros para obtener empleos en la administración pública e impidió que ocuparan puestos de representación gremial quienes habían tenido cargos sindicales a partir de 1952. Asimismo, se prohibió la mención del

6 Véanse Daniel James, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990, cap. 2, y Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, tomo 2, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, pp. 122-130.

7 Lonardi nombró a figuras del arco católico y nacionalista de su entorno, pero tuvo que aceptar también la presencia de personalidades liberales vinculadas a los intereses terratenientes, como Alberto Mercier —presidente de Confederaciones Rurales Argentinas—, en el Ministerio de Agricultura y Eduardo Busso —ex directivo de la Sociedad Rural—, en el Ministerio del Interior y Justicia. Véase César Tcach, *op. cit.*, pp. 20-22.

8 Véase Luis Alberto Romero, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 137.

nombre de Perón —reemplazada por apelaciones como “tirano prófugo” o “dictador depuesto”— y de cualquier símbolo, palabra o imagen alusiva a su movimiento.

¿Cómo se justificaba esta política persecutoria? ¿Qué se buscaba con ella? Según los militares y sus aliados civiles sostenedores del “pacto de proscripción”, los resonantes triunfos de Perón habían sido posibles por el fraude, la coerción, la demagogia y la manipulación de la opinión pública. Por eso, si se desmontaban sus mecanismos publicitarios y policiales, se daban a conocer sus actos más negativos y se quitaba poder a sus principales apoyaturas, su arraigo se disolvería. Desde esta concepción, pues, era necesaria una “reeducación” de las masas peronistas. Otros iban más allá y pregonaban una negación absoluta de ese pasado reciente. Esta actitud contenía un cuestionamiento a la mayor igualdad social lograda durante el peronismo y era manifiesta, sobre todo, en la burguesía menos beneficiada por el modelo de acumulación implementado en el primer gobierno peronista. No resulta casual que la Sociedad Rural celebrara el fin de una “década de vergüenza” y ofreciera “la más amplia colaboración” a las nuevas autoridades¹⁰. En las Fuerzas Armadas, esta actitud era fuerte en la Marina —arma que nucleaba el antiperonismo más tenaz— pero suscitaba dudas y divisiones en el Ejército.

El 9 de junio de 1956, un grupo de militares retirados apoyados por civiles puso en marcha un levantamiento. Su objetivo era el fin del gobierno provisional y la restauración del régimen peronista. La conspiración, dirigida por el general retirado Juan José Valle, carecía de preparación técnica militar sólida pues, probablemente, suponía que su estallido provocaría una rebelión de las masas¹¹. Pero el gobierno, alertado de antemano por los servicios de información, aprovechó la insurrección para desplegar un inusitado accionar represivo que incluyó decenas de fusilamientos. Estos se sustentaron en una ley marcial que se difundió con posterioridad a la sublevación¹². Entre las víctimas también figuraron un grupo de obreros no comprometidos con la rebelión. Habían sido detenidos por la policía en la noche del 9 de junio y

9 El término alude a la alianza de todas las fuerzas políticas y gubernamentales coincidentes en la exclusión del peronismo. Luis Alberto Romero, *op. cit.*, p. 139.

10 Alain Rouquié, *op. cit.*, pp. 130-131.

11 Véase Daniel Rodríguez Lamas, *op. cit.*, pp. 38-43.

12 Las ejecuciones del general Valle y otros complotados constituyeron el único caso argentino del siglo XX en que se aplicó la pena máxima a militares golpistas. Alain Rouquié, *op. cit.*, p. 137.

horas después eran pasados por las armas en un basural del Gran Buenos Aires, en José León Suárez¹³.

¿Por qué motivo el gobierno actuó con tanta ferocidad? La rebelión se produjo en un contexto de constantes huelgas, sabotaje y desobediencia cívica. La respuesta gubernamental buscó “dar una lección”, imponer la disciplina en las fuerzas militares y llegar a un punto de no retorno que imposibilitara la reconciliación con los proscritos. Estos, por su parte, no olvidarían la “sed de sangre” del binomio Aramburu-Rojas.

2.2 Partidos políticos en la encrucijada

Si en las Fuerzas Armadas y particularmente en la Marina se robustecía la línea antiperonista “dura”, ¿qué pasaba mientras tanto con los partidos políticos, pilares de un régimen democrático en cuyo nombre se excluía al peronismo?

Esta problemática dividió a casi todas las fuerzas políticas. Mientras algunas aceptaron la exclusión y se limitaron a confiar que la “educación democrática” de las masas surtiría finalmente efecto, otras intentaron comprenderlas. Tampoco faltaron quienes buscaron su apoyo electoral y de esa manera “integrarlas” al sistema político¹⁴.

Los grupos de izquierda se apartaron rápidamente del frente antiperonista. La política represiva del gobierno militar y la persecución de los trabajadores llevaron a muchos jóvenes militantes a replantearse el significado de la experiencia peronista y a rescatar su carácter obrerista. Desde el otro extremo del arco político, el de la derecha tradicional, algunos viejos nacionalistas o conservadores populares optaron también por acercarse al movimiento proscrito en función de su carácter nacionalista y su postulado de armonía social.

En el caso de la Unión Cívica Radical, la cuestión peronista concluyó por dividir al partido. Mientras un sector se identificaba con el gobierno de la “Libertadora”, otro, encabezado por Arturo Frondizi, impulsaba un acercamiento al peronismo y recordaba que el verdadero adversario del radicalismo era la “oligarquía” y sus aliados democráticos “sedientos de venganza”¹⁵. Finalmente, una controversia respecto de la metodología de la designación de la futura candidatura presidencial dividió al partido. Así, a comienzos de 1957 se confor-

13 Este último episodio, no registrado por la “prensa seria”, fue divulgado por Rodolfo Walsh en su obra *Operación Masacre*.

14 Luis Alberto Romero, *op. cit.*, p. 139.

15 Alain Rouquié, *op. cit.*, p. 142.

maron la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), comandada por Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), liderada por Arturo Frondizi.

2.3 El juego imposible: exclusión, inestabilidad e ilegitimidad

Frente a este panorama, ¿cómo podrían concretarse los proyectos gubernamentales de restauración de la democracia? A la incógnita sobre qué sucedería con el electorado peronista, se sumaban las tensiones del radicalismo, visualizado por los militares como el heredero de la “Libertadora”. En las Fuerzas Armadas se escuchaban distintas voces, entre las que se discutía la permanencia del poder militar y la postergación de las elecciones. Finalmente se impuso la línea de Aramburu quien, en medio de dificultades económicas y de la creciente oposición sindical y política, se orientó por cumplir el compromiso de restablecimiento democrático.

En 1957, el gobierno convocó a una Convención Constituyente para legalizar la derogación de la Constitución justicialista y actualizar el texto de 1853. Tras este propósito declarado, le interesaba medir la correlación de fuerzas políticas y evaluar los resultados de la “desperonización”. Los resultados, en cambio, demostraron el fracaso de esa tentativa. El voto en blanco, impulsado por Perón desde el exilio, fue el más numeroso. En segundo lugar se ubicó la UCRP y cerca de ella la UCRI¹⁶. La elección evidenció que quien lograra el apoyo de Perón tendría el triunfo asegurado. En ese camino se embarcó Frondizi —un político de trayectoria democrática, antiimperialista, defensor del control estatal del petróleo y los hidrocarburos frente a la irrupción de los capitales extranjeros— quien negoció con el líder peronista su apoyo electoral. A cambio de este aval se comprometió al levantamiento de las proscripciones, el fin de las persecuciones políticas, la normalización de la CGT y la revisión de todas las medidas económicas adoptadas a partir de 1955 que hubieran afectado a los sectores populares, entre otros puntos.

Para el líder de la UCRI, este apoyo excedía la mera cuestión electoral. Formaba parte de una estrategia más amplia sintetizada en el lema “Integración y desarrollo”. El primero de estos términos refería a la concreción de un frente o movimiento nacional y popular que incorporara a la clase obrera y a la burguesía industrial con miras a profundizar el desarrollo económico del país. Pero

16 Los votos en blanco constituyeron el 24,3 por ciento del total. La UCRP obtuvo el 24,2 por ciento; la UCRI un 21,2 por ciento. Es probable que muchos votos peronistas se hayan orientado al radicalismo intransigente.

esta propuesta encerraba una contradicción, que eclosionó cuando los trabajadores se opusieron a las medidas de austeridad gubernamental, aplicadas en el marco de una severa crisis económica. Por otra parte, las Fuerzas Armadas –que si bien le entregaron el gobierno, mantuvieron su “vigilancia” sobre el presidente– no cesaron de hostigar a quien había llegado al poder con el apoyo del sector que debía ser “desterrado”. De este modo, los propios vaivenes del gobernante Frondizi, la adopción de una política económica distante de la prédica que lo caracterizara en su trayectoria previa, las medidas represivas frente a la protesta social, las fluctuaciones en materia de política internacional y su actitud vacilante frente a los militares le acarrearón un fuerte descrédito.

Frondizi tuvo los días contados en su presidencia (1958-1962) cuando los comicios de marzo de 1962 marcaron el triunfo de candidatos peronistas –habilitados para postularse, en esta ocasión, bajo otra denominación partidaria– en la mayor parte del país. Este resultado no podía ser aceptado. Presionado por los militares y sin apoyos, fue arrestado y confinado en la isla Martín García. El Ejecutivo, entonces, quedó a cargo del presidente de la Cámara de Senadores y primero en la lista de sucesión presidencial, José María Guido (1962-1963) ya que el vicepresidente, Alejandro Gómez, había renunciado en 1960 por no compartir aspectos nodales de la política de Frondizi. Pero el nuevo presidente carecía de autonomía y se movió al compás de las oscilaciones militares, reflejo de las opiniones contrastantes de los distintos sectores de las Fuerzas Armadas, dueños no asumidos del poder. Así, mientras el sector castrense más duro (el de los “colorados”) impulsaba una exclusión categórica del peronismo, otro (el de los “azules”) delineaba una nueva estrategia basada en la constitución de un amplio “frente nacional” que integrara de manera subordinada a los votantes peronistas. Pero la dificultad de los partidos para constituir ese frente, las directivas “tácticas” de Perón desde el exilio –decidido a evitar cualquier estabilización nacional que implicara su exclusión– y, sobre todo, la oposición del sector más liberal de las Fuerzas Armadas inhabilitaron esa opción. Finalmente, las elecciones de 1963 volvieron a presenciar el voto en blanco de los peronistas. El candidato de la UCRP, Arturo Illia (1963-1966), accedió a la presidencia con sólo el 25 por ciento de los votos. Legitimidad escasa que pronto sería corroída por la conjunción de intereses económicos, sociales, políticos y militares.

La “cuestión peronista”, el “hecho maldito del país burgués” según John William Cooke¹⁷, encerraba un atolladero de difícil resolución.

17 Cooke, un militante peronista convencido del potencial revolucionario de ese movimiento y de que era necesario sostener una táctica insurreccional frente a la “Libertadora”, fue delegado de Perón durante el gobierno de Aramburu. La frase aludida refiere a la contra-

3. Ofensiva empresarial y respuesta sindical: “revancha clasista” y “resistencia peronista”

El término “desperonización” acuñado durante la “Revolución Libertadora” implicaba la eliminación de la influencia política del peronismo y, sobre todo —aunque nunca explicitado—, la intención de retrotraer los derechos adquiridos por los trabajadores al período previo a 1943. Esta meta expresaba tanto los intereses de la burguesía agraria como los del empresariado en general, deseoso de disminuir la importancia alcanzada por los sindicatos. En términos de Portantiero, el período 1955-1958 constituyó un “intento provisional (y defensivo) de las clases dominantes de poner ‘orden en la casa’. Esto es recuperarse (sobre todo la gran burguesía agraria) del deterioro que le había inferido el nacionalismo popular y desarmar, en lo posible, su aparato político en su núcleo más conflictivo: el sindicalismo”¹⁸. Ello posibilitaría, a su vez, revertir la distribución del ingreso, aumentar los beneficios empresariales, restablecer la autoridad patronal y alentar nuevas inversiones de capital¹⁹. Las medidas represivas contra los obreros, las sanciones contra los delegados sindicales, la intervención de la CGT y los sindicatos —puestos a cargo de supervisores militares—, la disolución de las comisiones internas y los esfuerzos de gobernantes y empleadores para aumentar la productividad, dejaban en claro que había llegado la “hora de la revancha”. Pero ella encontraría una fuerte oposición.

Una década de gobierno peronista había producido modificaciones sustanciales en el mundo del trabajo. En su interior se había consolidado una clase obrera sólida, sustentada en un mercado de trabajo con cuasi pleno empleo, con una identidad política y social definida, en la que resonaban los valores de “dignidad del trabajo” y “responsabilidad social del empleador”. Cuestiones, todas ellas, que parecían ser arrasadas por la política de la “Libertadora”. Surgió entonces lo que la cultura peronista denominaría como la “Resistencia”. Tal como la analiza Da-

dicción irresoluble que planteaba la existencia del peronismo, cuyos sectores populares no podrían ser controlados social ni políticamente bajo el marco proscripivo, así como tampoco absorbidos por el sistema. Sobre Cooke, véase Miguel Mazzeo, *Cooke, de vuelta (El gran descartado de la historia argentina)*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1999.

18 Juan Carlos Portantiero, *op. cit.*

19 Metas comunes de los coaligados de 1955, según Juan Carlos Torre. Véase, de este autor, *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983, cap. 1.

niel James²⁰, se trataba de una respuesta defensiva, nacida de las bases, contra el hostigamiento patronal y la represión gubernamental. Sus modalidades eran muy diversas e incluían acciones que iban desde el sabotaje y el trabajo a desgano hasta las huelgas feroces.

Este accionar no respondía a una simple pelea salarial. Expresaba la lucha cotidiana en los lugares de trabajo para defender las condiciones laborales y organizativas de los obreros conquistadas durante la era de Perón. La resistencia fabril, además, se articulaba con un amplio repertorio de prácticas de confrontación en otros espacios, tanto a partir de iniciativas individuales —pintadas de consignas, incendios— como de otras clandestinas más organizadas (como la fabricación de bombas caseras o “caños” para realizar atentados en edificios militares). En la época peronista, estas prácticas quedarán asociadas con los valores de heroísmo, escaso profesionalismo, carencia de una élite burocrática, espíritu de sacrificio y abnegación. Bajo el nuevo contexto de contraofensiva patronal, represión gubernamental y hostigamiento general, la consigna última de la resistencia se sintetizaba en el lema “Perón vuelve”. De esta forma, en lugar de la ansiada “desperonización”, las prácticas revanchistas de la “Libertadora” contribuyeron a “peronizar” aun más a los sectores populares, quienes rememoraron la época justicialista como una “edad dorada” en contraposición con un presente adverso.

3.1 La reorganización sindical

A partir de las luchas defensivas de los trabajadores, surgió una nueva camada de dirigentes sindicales que cubrió el vacío generado por la proscripción de los representantes gremiales previos. Pero no todos eran nuevos. Entre los antiguos, algunos lograron reposicionarse y comenzaron a organizarse entre sí.

Por lo demás, la intervención de los sindicatos no podía prolongarse de manera indefinida. En 1957, el gobierno convocó a elecciones gremiales, aunque inhabilitó para el desempeño de cargos a quienes hubieran ocupado posiciones bajo el régimen depuesto. De allí emergió un sindicalismo que mantenía la lealtad a Perón pero gozaba de una representatividad superior a la lograda bajo su presidencia.

20 Daniel James, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, cap. 2, y Daniel James, “Sindicatos, burócratas y movilización”, en Daniel James (dir.): *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Nueva Historia Argentina, op. cit.

De hecho, bajo el marco proscripivo, el sindicalismo ganó autonomía respecto del líder exiliado y expandió su esfera de acción, que se manifestó en un doble ámbito. Por una parte, en la esfera gremial, donde actuará como representante de los intereses de los trabajadores frente a la patronal. Por otra parte, en el sistema político, en el que ocupará el lugar que los políticos peronistas habían prácticamente abandonado ante la persecución.

Perón no desaparecerá de la escena, pero verá disminuir su capacidad de controlar a los dirigentes de su movimiento y, en particular, a los sindicalistas. Con el transcurso del tiempo, éstos comenzarán a organizar su propia base de poder.

4. Dilemas económicos: hacia un reajuste en el modelo de acumulación

Si bien los sectores dominantes coincidían en la necesidad de debilitar el peso de los sindicatos y la cohesión de los trabajadores, no por ello estaban unificados en un proyecto común. Las diferencias se revelaron particularmente sensibles con respecto a la orientación económica que debía adoptar el país, sea en función de los intereses de la burguesía agroganadera exportadora o de los de la burguesía industrial. Sin embargo, el derrotero nacional ya había demostrado las limitaciones de ambos lineamientos.

La crisis de la década de 1930 había puesto sobre el tapete las consecuencias de una especialización dependiente de las oscilaciones del mercado mundial, a la vez que había generado condiciones propicias para el despliegue de un modelo de acumulación basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). El primer gobierno peronista profundizó este proceso a través de una política redistributiva que, al ampliar la capacidad de consumo de la población, favoreció la expansión del mercado interno, destinatario principal de los bienes industriales. No obstante, este modelo de acumulación contenía una serie de debilidades estructurales que se evidenciaron bajo la misma presidencia de Perón. En efecto, el propio crecimiento de la industria, volcada a la producción de bienes de consumo y bienes intermedios, generaba una mayor demanda de combustibles, equipos y bienes de capital que, en vista del carácter liviano y no integrado de la industria, era necesario importar. Para ello se requerían divisas que provenían, fundamentalmente, de las exportaciones agropecuarias tradicionales. El agro, por su parte, no había aumentado su eficiencia y productividad como para abastecer la demanda interna de alimentos (ampliada, justamente, por el pleno empleo y las políticas redistributivas) y, en forma simultánea, exportar lo requerido para cubrir

esa exigencia de divisas. Así se agotaban las reservas y estallaban crisis recurrentes en la balanza de pagos.

Frente a esta situación, fue común —una excepción se dio bajo el primer gobierno peronista— que los gobiernos aplicaran una devaluación. Ella repercutía en un aumento de los beneficios para los sectores exportadores, constituidos fundamentalmente por la gran burguesía agraria. Además, provocaba un alza del costo de vida de la población en general, expuesta al aumento de los alimentos, pues el sector agrario trasladaba los precios externos al mercado interno. También se encarecían los bienes industriales, afectados por el aumento de precios de los insumos importados. Como consecuencia, se contraía la actividad industrial, disminuía el empleo, caían los ingresos urbanos y la demanda de productos. Así aumentaban las reservas alimentarias para exportar y se reducían las importaciones industriales, lo que posibilitaba, luego, una recuperación de las reservas y el recomienzo del ciclo de crecimiento. De allí la expresión *stop and go* (freno y arranque) acuñada por los economistas para referirse a las crisis periódicas, cíclicas, de la economía argentina.

¿Qué hacer, entonces, frente a las debilidades del modelo ISI y las frecuentes crisis cíclicas? ¿Qué camino debía tomar el capitalismo argentino? ¿Qué intereses debían ser promovidos? ¿Con qué recursos? ¿Qué función debía tener el Estado en esos cambios?

Estos dilemas serán objeto de una intensa discusión en la que se insertará la temática del desarrollo. Sus tópicos formaban parte del horizonte internacional, en el que repercutían las inquietudes generadas por el contraste entre los países desarrollados y el resto de las naciones, acentuadas por el clímax de la Guerra Fría y los procesos de descolonización²¹. En Argentina, sin embargo, el término “desarrollismo” quedó asociado a la presidencia de Arturo Frondizi, a su consejero Rogelio Frigerio y al sector político e ideológico que lo sostuvo.

4.1 La propuesta desarrollista

¿En qué consistía la propuesta desarrollista? ¿A partir de qué diagnóstico de la realidad nacional elaboraba las metas y los medios para concretarlas?

21 En ese escenario, el “desarrollo” podía constituir un camino para evitar el aumento de las tensiones sociales y la radicalización política. En nuestro continente, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) constituyó un importante centro de las discusiones económicas desarrollistas. Véase Carlos Altamirano, *Bajo el signo de las masas (1943-1973)*, Buenos Aires, Ariel, 2001, cap. II.

Tal como quedó perfilado en el discurso de Frondizi tras su acercamiento a Frigerio, ocurrido en 1956, Argentina era un país subdesarrollado y dependiente. Esta caracterización se apoyaba en la evidencia de la importancia del sector primario —cuya tendencia en la economía mundial era declinante— y en las limitaciones de su capacidad exportadora, incapaz de financiar el crecimiento. Frente a esta situación, era necesario impulsar una “transformación económico-técnica” que posibilitara la producción local de insumos y bienes de capital. De allí el énfasis en el desarrollo de la industria pesada, que implicaba el crecimiento de los sectores siderúrgico, petrolero, energético, químico y automotor, así como también de la red vial y obras de infraestructura que integraran el país. Las prioridades comenzaban por el petróleo (en tanto el país contaba con reservas de crudo e importarlo demandaba altas cantidades de divisas) y el acero (base de la producción de maquinarias).

Pero, ¿cómo hacer esta transformación productiva? En una entrevista realizada en 1957, y a contramano de la prédica sostenida en su trayectoria política previa, Frondizi abrió la puerta a la llegada de capitales extranjeros. Así, afirmó que “La Argentina puede desarrollarse gracias a sus propios recursos, pero esto implicaría renunciar a un ritmo de crecimiento rápido”²². Por ende, las inversiones externas constituirían un elemento clave como dinamizador del desarrollo.

La realización de este proyecto estaba sujeta a la conformación de una alianza de clases entre obreros e industriales, quienes debían “subordinar el enfrentamiento a los objetivos comunes del desarrollo económico” como reflejo de las “fuerzas populares y nacionales”²³. De allí la fórmula “Integración y desarrollo”. Sólo la integración política, la reconciliación de todos los argentinos y la integración geográfica y económica de todos los sectores de la actividad nacional y de todas las regiones permitirían el desarrollo armonioso. Para la concreción de esta integración política, social y cultural, Frondizi también buscaría el apoyo de la Iglesia y del Ejército.

Por su parte, el Estado debía tener un rol activo en la elaboración y planificación de la estrategia general. En este sentido, tenía que crear condiciones propicias para la inversión y su canalización hacia determinadas ramas de la producción y regiones del país. Pero, de ninguna manera, debía sustituir a la empresa privada. Por el contrario, este desarrollismo prefería la gestión privada sobre la pública, a la que le achacaba su escasa flexibilidad y el mantenimiento de un empleo público superfluo²⁴.

22 Citado por Alain Rouquié, *Radicales y desarrollistas*, Buenos Aires, Schapire, 1975, p. 87.

23 Alain Rouquié, *idem*, pp. 106 y 107.

24 Véase Julio Nosiglia, *El desarrollismo*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983, en particular el cap. II.

Se presentaba, así, una tesis sistemática cuyo aspecto coherente y acabado parecía basarse tanto en una interpretación del proceso histórico como en el análisis económico, científico y técnico, sustentado en cifras y datos, con apariencia de a-valorativo. Pero como toda propuesta económica, política y social, ella se insertaba en un escenario de fuerzas, tensiones y alineamientos concretos. Por otra parte, el plan desarrollista concluyó su formulación pública recién cuando Frondizi accedió a la presidencia. Hasta ese entonces, su figura se asociaba, fundamentalmente, con los aspectos antiimperialistas y democráticos expresados en su trayectoria anterior²⁵.

4.2 El despliegue desarrollista

Frondizi llegó a la presidencia con el sustento de una coalición heterogénea, atraída por diferentes motivos. En ella confluyeron los partidarios de la UCRI, sectores provenientes del nacionalismo clerical, militantes e intelectuales de izquierda, hombres de negocios y, finalmente, los votantes peronistas. Estos últimos lo apoyaron tanto por cuestiones pragmáticas como por simpatías ideológicas hacia el aliento nacionalista, industrialista e integracionista de su discurso²⁶. Así obtuvo un triunfo resonante, aunque basado en equívocos que pronto estallarían²⁷. Además, convencido de que, en la realidad en que estaba inmerso, los grupos de presión tenían mayor importancia que los partidos políticos y las instituciones que conformaban el entramado institucional, prestó atención particular a sus relaciones con los sindicatos, el Ejército y la Iglesia, inclinándose por la negociación táctica con las grandes corporaciones.

25 Si bien había sido candidato a vicepresidente en las elecciones de 1952, lo que lo convirtió en una figura política relevante a escala nacional fue su libro *Petróleo y política*, de 1954, donde denunciaba a las empresas petroleras extranjeras y proponía el monopolio estatal de YPF. Esta obra fue *best-seller* durante los debates por los contratos petroleros impulsados por Perón. Sobre el imperativo desarrollista de Frondizi, véase Carlos Altamirano, *op. cit.*, cap. 2.

26 Los motivos “pragmáticos” referían a lo acordado en el “pacto secreto” entre Perón y el candidato presidencial de la UCRI. Sobre los motivos de aceptación a Frondizi, véase Daniel James, *Resistencia e integración*, *op. cit.* cap. 5.

27 Triunfó en todas las gobernaciones provinciales y obtuvo mayoría en el Parlamento. De todos modos, los votos “eran prestados”, no se sabía sobre la base de qué programa gobernaría y la UCRP y las Fuerzas Armadas consideraban ilegítima su victoria, basada en el apoyo peronista. Véase Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, *op. cit.*, cap. 4.

En el terreno económico, impulsó la llamada “batalla del petróleo”. Esta iniciativa, que generó fuertes polémicas, implicó la negociación (por fuera del Parlamento y en forma discrecional) con compañías extranjeras para la exploración y explotación de las reservas de crudo. Por otra parte, avaló la sanción de una serie de leyes de radicación de capitales extranjeros y de promoción industrial en áreas consideradas clave para la profundización industrial. Las disposiciones brindaban garantías a los inversores para que pudieran remitir sus ganancias e incluso repatriar el capital. Se les aseguraba, además, un trato preferencial en materia de derechos aduaneros, créditos, impuestos, suministro de energía y compras del Estado. Así se produjo un espectacular crecimiento de las inversiones que, sin embargo, pronto desembocó en una severa crisis cíclica. En efecto, el mismo crecimiento de las grandes empresas —con su demanda de insumos, repuestos y equipos a las casas matrices, así como el envío de utilidades y pago de patentes— generaba una nueva situación de dependencia expresada en el déficit de la balanza de pagos. Frente a esta situación, el presidente firmó un acuerdo con el FMI, que, a cambio de un préstamo *stand by*, pautó un programa de “estabilización” financiera presentado en diciembre de 1958. El plan incluía una reducción de tarifas aduaneras, disminución del gasto público, reducción de empresas estatales y transferencia de otras al sector privado, supresión del control de precios, paralización de los aumentos salariales y una devaluación del tipo de cambio. Este plan, sus implicancias recesivas y su impacto negativo sobre los trabajadores quebraron la ya débil concordia entre los sindicatos y Frondizi, quien no dudó en impulsar todos los dispositivos represivos a su alcance para enfrentar y derrotar la protesta obrera.

Desde otro plano, las medidas de “estabilización” reflejaron el comienzo de un giro hacia posturas afines a las sustentadas por los organismos financieros internacionales, el gobierno de Estados Unidos y la banca privada internacional²⁸. En su implementación efectiva aparecía como claramente beneficiaria la gran burguesía agraria exportadora —favorecida por la devaluación y la liberalización del comercio—, a la vez que el préstamo recibido evitaba que el gobierno declarara una cesación de pagos que hubiera perjudicado a los grandes inversores extranjeros, interesados en transferir libremente sus divisas. Justamente, las políticas desarrollistas de los primeros meses de gobierno habían fortalecido al sector más transnacionalizado en la economía argentina.

28 Véase Raúl García Heras, “El Plan de Estabilización Económica de 1958 en la Argentina”, *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, vol. 11, N° 2, julio-diciembre de 2000.

4.3 El impacto económico y social del desarrollismo

Bajo el amparo de las políticas de “atracción” de capitales extranjeros, en la década de 1960 se expandieron las empresas multinacionales, en su mayoría de origen estadounidense. Ellas se instalaron en actividades dinámicas como la química, petroquímica y derivados del petróleo en general, materiales de transporte e industria automotriz, así como en la producción de maquinaria eléctrica y no eléctrica²⁹. A pesar de que sus dimensiones eran menores a las establecidas en sus países de origen, contaban con una tecnología mucho más avanzada que la imperante en el ámbito local. Por eso su productividad era mayor y requerían comparativamente un número menor de trabajadores. Se reemplazaba, así, trabajo por capital. Su presencia, además, contribuía a la concentración e internacionalización de la estructura productiva, a la vez que abría una brecha entre un sector moderno y eficiente ligado a la inversión y al consumo de los sectores de más capacidad económica, y otro tradicional más vinculado al consumo masivo. Algunos grupos del empresariado nacional se asociaron con el primero, pero para muchos otros la experiencia fue negativa. Así, las ramas del rubro textil, el calzado y en cierta medida los electrodomésticos que habían liderado el desarrollo en etapas recientes, se estancaron.³⁰ De este modo, las inversiones extranjeras tuvieron un impacto concreto en el perfil social y productivo del país.

La mayoría de los capitales se radicaron en la Capital Federal y su periferia, en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Córdoba, que resultó ser la más impactada por estas transformaciones. Con respecto a la distribución del ingreso, se produjo una reorientación a favor de los sectores medio y medio-superior. De hecho, el crecimiento de las multinacionales –visible también en las industrias de artículos para el hogar, en bancos y en supermercados– requirió una masa de ejecutivos, profesionales y empleados especializados, con ingresos comparativamente más altos y una capacidad de consumo más selectiva que el resto. Ella se reveló en la adquisición de bienes de mayor

29 El impacto productivo fue innegable. La producción de petróleo y gas se multiplicó. El primero pasó de 5,6 millones de metros cúbicos en 1959 a casi 16 en 1962. Se inauguraron el gasoducto Campo Durán-Buenos Aires y los oleoductos Campo Durán-San Lorenzo y Challacó (Neuquén-Puerto Rosales). La producción siderúrgica se triplicó, la petroquímica –central para la fabricación de neumáticos, plásticos, abonos, fertilizantes y plaguicidas– recibió un fuerte espaldarazo y se ampliaron el parque automotor y la red vial. Véase Julio Nosiglia, *op. cit.*, cap. VI.

30 Luis Alberto Romero, *op. cit.*, cap. V.

sofisticación y en la creciente importancia de las “marcas” –sellos distintivos de cada producto– y del diseño como símbolo de prestigio. En este escenario, la demanda laboral de técnicos y profesionales, así como el deseo de participar en el proceso de modernización de la economía y de la ciencia, sostuvieron una continua expansión del sistema educativo y, en particular, de las universidades.

Por su parte, el grueso de los trabajadores concentrado en el sector no dinámico sufrió una caída de sus ingresos y un creciente estancamiento en sus niveles de empleo. En este sentido, cayó la importancia relativa de los obreros industriales, sus salarios se diferenciaron en función de la pertenencia o no a las empresas modernas y aumentaron las actividades por cuenta propia (en pequeños comercios o servicios), como modo de compensar el deterioro –relativo– del mercado de trabajo³¹.

De este modo, el proyecto desarrollista consolidó puntos de no retorno en la estructura económica y social argentina, alteró la correlación de fuerzas en el interior de la burguesía y redefinió las relaciones globales entre el conjunto de las clases dominantes y las dominadas³².

Respecto de la composición de las clases dominantes, los cambios que introdujo la política de Frondizi implicaron la irrupción brusca de una fracción de clase, la burguesía concentrada y transnacionalizada, que pasó a dominar los núcleos más dinámicos de la economía. Esta fracción será expresada por la “tecnoburocracia”, especie de capa gerencial que, tras la caída de Frondizi, comenzará a proyectarse a la función pública. La burguesía local, menos intensiva en capital y orientada aún a la producción de bienes livianos, debió amoldarse a las decisiones de la fracción dominante o convivir con ella de manera conflictiva. La gran burguesía agraria, por su parte, mantuvo un importante recurso de poder derivado de su cualidad como proveedora de divisas para la economía nacional. Esta capacidad se hará sentir, sobre todo, en los momentos de crisis de la balanza de pagos ocasionados, paradójicamente, por la misma expansión industrial.

Tras este clásico movimiento cíclico, de *stop and go*, Guillermo O'Donnell identificó una puja sectorial en la que intervenían los principales actores socioeconómicos del período: las fracciones burguesas en su orientación agraria, industrial débil e industrial concentrada, así como la presencia combativa

31 Las tasas de desempleo del período 1955-1976 oscilaron en torno al 4 por ciento. El punto más álgido se dio en 1963, cuando el desempleo alcanzó el 9 por ciento. Véase Ricardo Aroskind, “El país del desarrollo posible”, en Daniel James (dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Nueva Historia Argentina, *op. cit.*

32 Juan Carlos Portantiero, *op. cit.*

de los sectores populares³³. Sobre la base de esta situación, Portantiero reconoció una situación de “empate” de fuerzas. Es decir que los principales actores del período habrían contado con el poder suficiente como para vetar los proyectos de los otros, pero no habrían tenido los recursos necesarios para imponer de manera perdurable los propios. Este empate se ligaba, así, con la dificultad de los sectores dominantes para elaborar una coalición estable. Pero el fortalecimiento del sector más concentrado y transnacionalizado de la burguesía, sin embargo, generaría condiciones para la ruptura del empate (o, al menos, para su intento).

5. La renovación cultural y la modernización universitaria

Así como entre fines de la década de 1950 y comienzos de la de 1960 se produjeron notables transformaciones en la estructura económica y social argentina, las grandes ciudades también experimentaron cambios en las formas de vida cotidiana, en la apertura a nuevas formas artísticas, en la ampliación del mundo editorial y, específicamente, en el funcionamiento y relevancia del espacio universitario. De hecho, la autodenominada “Revolución Libertadora” había contado con el apoyo de las federaciones estudiantiles universitarias y de núcleos intelectuales críticos de la “peronización” de la enseñanza y el anquilosamiento de los planes de estudio. Tras el golpe de Estado de 1955, las universidades fueron intervenidas y se instalaron en ellas intelectuales, investigadores y científicos que se propusieron “desperonizarlas” y “modernizarlas”. Acorde con la impronta desarrollista que rápidamente cobró fuerza en las discusiones y debates del período, se promovieron las ciencias básicas, se equiparon laboratorios con equipos de avanzada y se expandió el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que impulsó la investigación básica y tecnológica.

33 O'Donnell postula que los períodos recesivos generaban condiciones para una alianza defensiva entre las fracciones débiles de la burguesía urbana y los sectores populares. Esa alianza, realizada en defensa de la reactivación económica, el aumento del consumo y del empleo, se consolidaba cuando se revertía el ciclo. Pero el correlativo aumento del consumo desequilibraba las cuentas externas y daba lugar a la aplicación de un plan de estabilización con su consecuente devaluación y aplicación de políticas recesivas. Éstas eran apoyadas por la burguesía agraria y por la urbana concentrada y transnacionalizada, interesada en levantar el techo de la balanza de pagos. Cuando ésta volvía a equilibrarse y se articulaba la alianza defensiva, la fracción más concentrada abandonaba a su suerte a la agraria y se sumaba al tren de la reactivación. Guillermo O'Donnell: “Estado y alianzas en la Argentina, 1955-1976, *Desarrollo Económico*, N° 64, vol. 16, enero-marzo de 1977.

También se ampliaron las becas para graduados que buscaran especializarse en el exterior y se instituyeron nuevas carreras y conceptos para reflexionar sobre la sociedad y la cultura. Esta “modernización” fue particularmente notoria en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde las nuevas carreras de Sociología —fundada por Gino Germani, un teórico de los estudios sobre la modernización social— y de Psicología aparecieron como las disciplinas privilegiadas para dar cuenta de las disyuntivas generadas por las transformaciones de las últimas décadas³⁴. La sociología, en particular, brindaba conceptos, técnicas de análisis social, especialistas en marketing (es decir, en estudios de mercado) o en relaciones industriales que condensaban el proyecto modernizador desarrollista. Por todas sus innovaciones, pues, la educación superior posperonista cristalizó un proyecto modernizador y reformista. En este último sentido, de la mano del rector de la UBA José Luis Romero y de sus sucesores en el cargo, la Universidad retomó los pilares de la reforma de 1918: autonomía, gobierno tripartito —autoridades elegidas por profesores, estudiantes y graduados—, concursos, libertad de cátedra y consolidación del estudiantado como fuerza ideológica y política. Se trataba de un alumnado masificado, fruto del proceso de ampliación de la enseñanza secundaria de la época peronista, y motivado por las posibilidades de insertarse en el mercado laboral, en el proceso modernizador o en las discusiones intelectuales y políticas que bullían en la vida estudiantil³⁵. En este sentido, la idea de que esta institución debía cumplir una función social puso en relación inmediata el proyecto universitario con el proyecto de país que se esperaba construir. Así se introdujo el debate relativo al compromiso que debía establecer la producción intelectual con las problemáticas culturales, sociales y políticas de la nación.

Ahora bien, dentro de este clima de optimismo y confianza en el porvenir, la Universidad participó de diversos conflictos con el poder político, a la vez que atravesó disputas en su interior. Ya en 1958, cuando el presidente Frondizi —para fortalecer sus vínculos con la Iglesia— promovió la sanción de una ley educativa que autorizaba el funcionamiento de las universidades privadas y equiparaba sus títulos con los de las estatales, la intelectualidad académica manifestó su profundo rechazo. Los defensores de la educación estatal “laica” se enfrentaron con los de la educación privada o “libre” —en su mayoría, católicos— en multitudinarias manifestaciones. La sanción definitiva de la ley marcó la ruptura entre el gobierno y los pensadores progresistas y de izquierda que lo habían apoyado, a la vez que

34 Cynthia Acuña, Julio del Cueto y Hernán Scholten, “Introducción: modernización y cultura en los años sesenta”, *Historia de la Psicología*, Cátedra I, módulo IV, 2ª. parte.

35 Luis Alberto Romero, *op. cit.*, pp.158-162.

dejó en claro que el mundo universitario constituía un polo crítico de la sociedad. En su interior, además, se desataron debates respecto de la legitimidad de aceptar subsidios de fundaciones extranjeras —tales como la Ford o la Rockefeller— pues, según advertían sus cuestionadores, esos fondos, tras una apariencia de “altruismo” o apego por el conocimiento, podían implicar una subordinación a las necesidades de los países o poderes imperialistas. Esta tendencia crítica, que se acentuó con el transcurso de los años y la simpatía que generó en la juventud universitaria la Revolución Cubana, también dio lugar a una gradual revalorización del peronismo.

5.1 Arte, lecturas y lectores: entre el “mercado cultural” y las tensiones políticas

La meta de extender las actividades universitarias a la sociedad se expresó a través de las tareas realizadas por la novedosa Secretaría de Extensión Universitaria, así como también, en el caso de la UBA, por la creación, en 1958, de una editorial propia. La Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) se destacó por la producción masiva de libros de calidad a precios accesibles. Así, gracias a su estilo y su amplia red de comercialización, entre 1959 y 1962 vendió unos tres millones de textos³⁶.

Inserto en la temática de la modernización y con un perfil claramente diferente, en 1962 apareció el semanario *Primera Plana*, que llegó a tener un tiraje de 100.000 ejemplares. Si bien esta publicación actuó como vocero de los grupos articulados en torno a la figura del general Juan Carlos Onganía (líder de los “azules”), en su estilo descollaba una vocación modernizadora en lo económico y social. En este sentido, sus páginas realzaban la necesidad de aumentar la eficiencia, la racionalidad y la productividad empresarial, a la vez que introducía notas de actualidad en las que incorporaba listas de *best-sellers* y artículos sobre la vida moderna. Entre ellas, la urbanización, el avance de las mujeres en el mercado laboral y, de manera puntual, consejos para ejecutivos. En efecto, éstos constituían, junto con la clase media intelectualizada, el destinatario principal de la revista.

Más allá de estos dos casos paradigmáticos, lo cierto es que en la década de

36 EUDEBA funcionó de esta manera hasta 1966, cuando fue intervenida por el gobierno militar encabezado por Onganía. Véase Oscar Terán, *Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual argentina, 1956-1966*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto / Imago Mundi, 1993, p. 71.

1960 la letra impresa se multiplicó. Ella acompañaba la presencia de un público —constituido, sobre todo, por lectores jóvenes de capas medias— anhelante de novedades, así como también de una serie de editores interesados en hacer circular nuevas obras³⁷. Si bien las temáticas eran variadas, algunas producciones daban cuenta de la creciente relación entre la cultura y la política. Así, por ejemplo, *La Rosa Blindada* apareció como una editorial orientada a la publicación de libros de poesías, narrativas o teatro de autores jóvenes no consagrados. Luego, en 1964, surgió también como revista que nucleaba a teóricos, escritores, pintores, poetas, actores y directores de cine. Pero pronto sus notas estéticas se desplazaron hacia otras de carácter netamente político, y en su último número predominó el análisis sobre la situación de Cuba y de Vietnam³⁸.

Estas tensiones también estuvieron presentes en el campo artístico, cuyo espacio más relevante fue el Instituto Torcuato Di Tella, creado en 1958. En su interior se fundaron, pocos años después, una serie de centros de investigación en temáticas novedosas tales como “artes visuales”, “experimentación audiovisual” e “investigaciones sociológicas”, entre otras. Si bien el Instituto pronto se convirtió en el centro de creación y experimentación artística más relevante del momento, también recibió críticas de sectores de izquierda que cuestionaron la frivolidad y falta de compromiso que encerraban sus apuestas. En contraposición, desde los sectores de la derecha clerical se impugnó su impronta “libertina” y “disoluta” de las “buenas costumbres”³⁹.

5.2 Los cambios en la vida cotidiana y la promoción de la mujer

En tanto la producción gráfica y estética innovaba sus cánones y la vida universitaria se masificaba, también se producían notables cambios en la vida cotidiana de los habitantes de las grandes ciudades. Entre ellos, tal vez el más relevante fue el cambio en el lugar ocupado por las mujeres. En efecto, a partir de la década del sesenta, ellas ampliaron su participación en el sistema educativo —hasta ese entonces, su presencia en las universidades había sido mínima—, en el mercado laboral —donde ingresaron mujeres de

37 Sergio Pujol, “Rebeldes y modernos. Una cultura de los jóvenes”, en Daniel James (dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, *Nueva Historia Argentina*, op. cit., p. 300.

38 La revista circuló hasta que se produjo el golpe de Estado de 1966. Véase Néstor Kohan, “Los intensos años sesenta”, *Clarín*, Zona, 23 de agosto de 1998.

39 Oscar Terán, op. cit., p. 80.

sectores medios con la finalidad de obtener ingresos propios y adquirir mayor autonomía— y experimentaron una creciente igualación en sus vínculos con los hombres. En este sentido, como parte de una mirada más flexible hacia las relaciones familiares y hacia el vínculo entre los sexos, los jóvenes comenzaron a manifestarse a favor de las relaciones prematrimoniales y a defender la idea del divorcio. Tras estas actitudes novedosas se hallaba el impacto del psicoanálisis, la influencia de la modernización cultural y, sobre todo, la aparición de la píldora anticonceptiva —motivo de debates y denuncias por parte de los sectores más conservadores y clericales—, que permitió disociar el sexo de la actividad reproductiva⁴⁰. Aun así, esta liberalidad no fue generalizada. Si su arco se ampliaba a medida que se ascendía en la escala sociocultural, también era cierto que las voces tradicionalistas se alzaban para impugnar la “corrupción de las costumbres” y defender los valores morales de la civilización “occidental y cristiana”.

Los cambios en el trato cotidiano —en esta época se generalizó el voseo— y en los roles de género fueron percibidos por los medios de comunicación. Así, algunos de ellos comenzaron a dirigirse hacia un nuevo tipo de mujer, menos interesada en las labores domésticas y en satisfacer los deseos de su marido que en satisfacer su propio deseo, programar racionalmente las dimensiones de su familia e integrarse de manera más activa al “mercado cultural” que las nuevas publicaciones promocionaban⁴¹. Justamente, los cambios en las formas de vida urbana se vincularon, también, con transformaciones en el consumo. La ampliación de las empresas multinacionales y la consecuente producción en masa y transnacionalización de las economías favoreció una homogeneización —relativa— de pautas culturales, incentivada a su vez por la televisión —si bien existía, su expansión fue propia de la década de 1960—, la publicidad y las técnicas de marketing. Esta tendencia a la uniformidad se manifestó en la difusión internacional de ciertas prendas de vestir, como la minifalda —cuyo uso se acomodaba bien a la liberalización de las costumbres— y el *jean*, pero tuvo su contrapartida en la fragmentación interna de las sociedades, diferenciadas por posiciones socioeconómicas y por la pertenencia a subculturas (como la juvenil).

40 Véase Karina Felitti, “El placer de elegir. Anticoncepción y liberación sexual en la década del sesenta”, en Fernanda Gil Lozano, Valeria Pita y María Gabriela Ini (dir.), *Historia de las mujeres en la Argentina, Siglo XX*, Buenos Aires, Taurus, 2000.

41 Sergio Pujol, *op. cit.*, pp. 297-299.

6. Sindicatos y trabajadores en la modernización capitalista

En el marco de estas transformaciones, ¿qué implicancias acarrearba, para los trabajadores, el proyecto de modernización capitalista activado por el desarrollismo de Frondizi? Si bien la respuesta a este interrogante tiene múltiples facetas, aquí interesa enfatizar tres aspectos.

La promoción de una industria de insumos básicos, bienes de capital y automotores, que no se sustentaba en el alza salarial para incentivar la demanda, despejaba el camino para que su financiamiento se hiciera —amén de los capitales extranjeros— a costa de los ingresos de los trabajadores⁴². Suponía, asimismo, la implantación de acuerdos de racionalización del trabajo que permitieran el uso eficaz de la maquinaria y la intensificación de la producción de las plantas. Finalmente, la intención de sustituir trabajo por capital impulsaba a un estancamiento del empleo. De más está decir que una condición necesaria para avanzar en las líneas enunciadas era el debilitamiento sindical. Pero la existencia de una clase trabajadora cohesionada dificultaba la concreción de esa meta. ¿Qué pasó en el interior del sindicalismo y en su relación con los empresarios y el gobierno?

Frondizi llegó a la presidencia con el apoyo de los trabajadores peronistas. Sin embargo, esa confianza pronto se trocó en malestar, decepción y oposición hacia lo que se consideró su “traición”. Los trabajadores le cuestionaron la firma de los contratos petroleros y las concesiones al capital extranjero en general. Pero el anuncio del plan de estabilización, a fines de 1958, quebró su ya deteriorado vínculo con el gobierno. La piedra de toque que precipitó el conflicto fue el proyecto, a comienzos de 1959, de privatización del Frigorífico Lisandro de la Torre, nacionalizado durante el primer gobierno de Perón. En repudio a esa iniciativa, los trabajadores ocuparon la planta y pronto recibieron la solidaridad de los vecinos de la zona y de los obreros enrolados en el sindicalismo peronista. Así se llegó a una huelga general. Pero el gobierno respondió con una represión inesperada —envió al frigorífico 1.500 policías respaldados por tanques, detuvo a numerosos dirigentes sindicales y ocupó muchos gremios—, con lo que los conflictos cesaron pocos días después. A pesar de la derrota, la huelga se convirtió en un símbolo del movimiento peronista que expresó la firmeza de los trabajadores y la amplia gama de iniciativas que era capaz de encarar. Entre ellas, paros, tomas de la planta de trabajo, cortes de alumbrado público y barricadas en las calles. Por su parte, la dureza gubernamental demostró la energía empeñada en el cumplimiento del

42 La parte de la renta nacional correspondiente a salarios declinó del 48,7 por ciento en 1958 al 42,1 por ciento en 1961. Daniel James: *Resistencia e integración*, *op. cit.*, p. 156.

programa desarrollista, más allá de las dificultades que se interpusieran.

El año 1959 fue analizado por James como un punto de inflexión, en el que culminó la militancia y la confianza adquirida por los trabajadores durante la “resistencia” y comenzó, por contraposición, un período de repliegue, desmoralización y reflujo de la participación de las masas. Ello se produjo en el marco de continuas derrotas laborales y sindicales, inmersas en una aguda depresión económica⁴³, una notable persecución anticomunista y una fuerte represión política y gremial. Era muy difícil sostener la lucha frente a un gobierno dispuesto a sostener su programa de modernización capitalista con el poder del Estado y el aval empresario y militar⁴⁴. De hecho, en 1960, por medio del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), las Fuerzas Armadas quedaron habilitadas para intervenir en los conflictos. Las huelgas fracasaron, muchos militantes gremiales fueron apresados y los principales sindicatos, intervenidos. Así cayó la confianza de los activistas y entre los trabajadores comenzó a primar una actitud de resignación y pasividad. Con ese telón de fondo, en los sindicatos cobró mayor fuerza la burocratización gremial. Este proceso involucró un cambio en la relación entre los dirigentes y las bases, así como también una nueva actitud por parte de los propios líderes sindicales.

6.1 La burocracia sindical

El término “burocracia sindical” fue acuñado, en un principio, por quienes criticaron las nuevas prácticas y políticas adoptadas por la dirigencia gremial. James sostiene que la burocratización fue posible por la desmoralización de los trabajadores y el reflujo de los activistas, que facilitó la erosión de la democracia interna, la corrupción de sus dirigentes y la creciente integración sindical al sistema político. En el ámbito gremial, los dirigentes ejercieron un control cada vez más estricto sobre las bases. Así, desplegaron una creciente vigilancia hacia los militantes de las plantas fabriles y se deshicieron de los activistas más combativos. La contraparte de estas medidas fue la adopción de una actitud pragmática, orientada a aprovechar las oportunidades institucionales que el gobierno les ofrecía. Entre ellas, la sanción durante el gobierno de Frondizi de

43 En junio de 1959, el liberal Álvaro Alsogaray fue nombrado ministro de Economía. Su ortodoxo programa de devaluación, congelamiento salarial y supresión de controles redundó en una pérdida de ingresos de los trabajadores y un aumento del desempleo. Véase Luis Alberto Romero, *op. cit.*, pp. 142-143.

44 Véanse Juan Carlos Torre, *op. cit.*, cap. 1, y Daniel James, *Resistencia e integración*, *op. cit.* cap. 5.

la Ley de Asociaciones Profesionales —con el reconocimiento del sindicato único que, a su vez, manejaba las cuotas sindicales y asistenciales de sus afiliados— les garantizaba la existencia de un movimiento gremial centralizado y bien financiado. En 1961, además, Frondizi devolvió a los sindicatos el control de la CGT. A cambio de estos beneficios, los dirigentes se desentendieron de los efectos de la racionalización productiva sobre los trabajadores y del ataque contra las comisiones internas en las plantas de trabajo.

Pero esta actitud pragmática —tal como señala James— presentaba nuevos desafíos. Los líderes sindicales no sólo debían representar los intereses de sus organizaciones, sino que también constituían la principal expresión de las fuerzas peronistas en la arena política. Además, negociaban dentro del peronismo con otros sectores del movimiento⁴⁵. Las elecciones para diputados y gobernadores en 1962 constituyeron una ocasión —muy singular— para que los dirigentes gremiales pusieran a prueba su capacidad en el desempeño de esos roles y confirmaran su peso en el país.

Frondizi, hostigado por los militares y distanciado del grueso de sus apoyaturas originales, había permitido la presentación de candidaturas peronistas. Si triunfaba, su poder saldría engrandecido. Los sindicalistas, por su parte, poseedores de la única estructura formal que expresaba al partido proscripto, dominaron el aparato electoral y encabezaron las listas. El resultado de los comicios marcó una resonante victoria peronista, lo que confirmó a los gremios como expresión política de la clase obrera de esa identidad⁴⁶. Frondizi anuló las elecciones e intervino las provincias, pero no logró salvar su investidura. Los militares lo depusieron y el presidente de la Cámara de Senadores, José María Guido, asumió como presidente. Más allá de este desenlace, el líder que surgió de la campaña electoral como figura dominante del sindicalismo fue Augusto Vandor, jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato industrial más grande del país.

6.1.1 El “vandorismo” en acción

La figura de Vandor ha sido objeto de fuertes polémicas. Sus críticos de la

45 Daniel James, “Sindicatos, burócratas y movilización”, *op. cit.*

46 En las elecciones, destinadas a elegir diputados y gobernadores, los candidatos peronistas —que se presentaron bajo distintos rótulos partidarios— se impusieron en la mayoría de las provincias, incluida la de Buenos Aires. Daniel Rodríguez Lamas, *La presidencia de Frondizi*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984, pp. 118-119.

izquierda peronista –vinculada al peronismo combativo– lo identificaron con la “traición” al espíritu de la “resistencia”, con la corrupción y el empleo de métodos “sucios” para imponer su fuerza y eliminar el disenso en los gremios⁴⁷.

Juan Carlos Torre señala que el dominio de Vandor expresó el liderazgo de un movimiento obrero pragmático y dispuesto a la negociación. El énfasis previo en fines a largo plazo había sido reemplazado por negociaciones de tipo sectorial –es decir, acuerdos específicos de un sector o área industrial–; el retorno del peronismo al poder, reemplazado por la búsqueda de participación en el sistema político, y la movilización de las bases, suplida por una participación de tipo instrumental sustentada en una clase obrera disciplinada que se sumaba a sus convocatorias⁴⁸.

James, a su vez, sostiene que el apogeo de Vandor simbolizó el proceso de integración del aparato sindical al sistema político argentino y su burocratización. Así, el “vandorismo” se convirtió en sinónimo de negociación y pragmatismo, e implicó el empleo de la fuerza política y la representatividad de los sindicatos para negociar con otros “factores de poder”, como las Fuerzas Armadas, la Iglesia o las corporaciones empresarias.

A su afianzamiento como grupo de presión también contribuyó la normalización de la CGT, concluida en 1963. En ese entonces los sindicalistas elaboraron un “plan de lucha”, dividido en cinco etapas diferenciadas cronológicamente, con miras a denunciar la situación regresiva en que se encontraban los trabajadores. La primera se concretó bajo el gobierno de Guido, cuya política económica –comandada por dos liberales, primero Federico Pinedo y luego Álvaro Alsogaray– se había asentado en planes de estabilización netamente regresivos⁴⁹. La “semana de protesta” dirigida por la CGT incluyó la participación de sus dirigentes en foros y encuentros con estudiantes universitarios, federaciones patronales y miembros de la jerarquía eclesiástica, de manera de fortalecer su posición como interlocutores de otros sectores de la sociedad civil.

La segunda fase del “plan de lucha” se desplegó bajo el gobierno de Illia, de la UCRP, que había llegado al poder en 1963. Si bien la política económica de este presidente radical tuvo un perfil mercadointernista, redistributivo, con

47 En este horizonte se incluye la obra de Rodolfo Walsh, *¿Quién mató a Rosendo?*

48 Juan Carlos Torre, *op. cit.*, pp. 30-31.

49 El plan, similar al aplicado por Frondizi en 1959 –devaluación, aumento de tarifas, restricción del crédito y limitación de salarios–, sólo beneficiaba a la burguesía agraria exportadora. Como su aplicación se produjo en el marco de fuertes conflictos intramilitares y debilitamiento de los trabajadores, no generó una respuesta inmediata. Véase Daniel James, *Resistencia e integración*, *op. cit.*, pp. 222-224.

protección del capital nacional y elementos de planificación keynesianos, su legitimidad política era precaria —llegó al poder con el apoyo de una cuarta parte del electorado—⁵⁰ y no gozó de apoyos sociales en los que sustentarse. La anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi, su intento de reducir las “garantías” a los capitales extranjeros y su ley de salario mínimo le granjearon la oposición neta de los sectores empresariales expresados por sus voceros frondicistas, los liberales y las grandes corporaciones. Tampoco logró el apoyo de la CGT, que en 1964 lanzó la segunda etapa del “Plan de lucha”. Su aplicación, cuidadosamente planificada y controlada, consistió en la ocupación escalonada de 11.000 fábricas. Si bien hay distintas explicaciones sobre sus móviles⁵¹, lo cierto es que su concreción evidenció la habilidad y fuerza de Vandor, interesado en que se lo reconociera como un actor crucial del escenario político. Pero su liderazgo, sin embargo, generó un tenso enfrentamiento con Perón. En su juego de intereses, el líder metalúrgico anunció un “operativo retorno” del dirigente exilado, que no sólo puso entre las cuerdas al gobierno radical —ya cuestionado por las corporaciones empresarias y vigilado por las Fuerzas Armadas— sino que forzó al mismo ex presidente a tomar una decisión. El regreso de éste se frustró cuando, al hacer escala en Brasil, sus autoridades —tras un discreto pedido de la Cancillería argentina— lo declararon persona no

50 La UCRP obtuvo el 25 por ciento de los votos, contra un 19 por ciento del voto en blanco postulado por los peronistas. Es probable que muchos peronistas hayan optado por alguna candidatura radical u otra minoritaria para debilitar la postulación del general Aramburu. Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, op. cit., p. 225.

51 Algunos analistas sostuvieron que el “plan de lucha” era una prueba del carácter “antidemocrático” del sindicalismo peronista que, aliado a los militares, en última instancia quería derrocar al gobierno radical de Illia. Para otros, los hechos se inscribieron en el marco del enfrentamiento entre Vandor y Perón por el control del movimiento obrero organizado, y otra versión sostuvo como única causa la lucha por el regreso del líder exiliado. Tampoco faltaron quienes afirmaron que se trataba de un programa propio de la “burocracia” sindical. Véase Santiago Senen González, “El movimiento sindical en Argentina: entre el justo reclamo y la política partidista”, *Instituto del Mundo del Trabajo, Revista Pistas*, N° 4, abril de 2001. Daniel James, en “Sindicatos, burócratas y movilización”, op. cit., señala que la mejora de la situación creó condiciones propicias para que los sindicalistas buscaran recuperar el “terreno perdido” por los trabajadores en los años de recesión que lo precedieron; Alain Rouquié, en su obra *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, op. cit., sostiene que si bien los dirigentes peronistas aprovecharon el descontento popular por la recesión previa, pronto dejaron de lado los objetivos sociales para lanzarse a su ofensiva política de tinte golpista, y Luis Alberto Romero en su *Breve historia contemporánea de la Argentina*, op. cit., lo vincula con el intento presidencial de limitar el poder de la “burocracia sindical” y la intención de Vandor de constituirse en una figura nuclear del juego político.

grata y lo obligaron a regresar a España. ¿Tenía entonces Vandor el juego libre para autonomizarse de Perón?

En las elecciones parlamentarias de 1965 –para las que los peronistas pudieron presentarse con otros nombres– los representantes sindicales lograron ocupar varios escaños. Para diluir su poder, Perón envió a su nueva esposa, “Isabelita”, a reorganizar el movimiento. Y si bien fracasó en su intento de ganar la conducción sindical, logró imponerse en el terreno político electoral. En efecto, para los comicios a gobernador de Mendoza compitieron un candidato respaldado por Vandor y otro apoyado por Perón que se impuso por amplitud. La lección era clara: mientras hubiera partidos y elecciones, el líder metalúrgico no podría imponerse. ¿Qué pasaría en las elecciones para gobernadores previstas para 1967? Las Fuerzas Armadas estaban alertas.

7. Fuerzas Armadas, “guerra revolucionaria” y “Doctrina de Seguridad Nacional”

Si bien la injerencia militar en la vida política argentina fue una constante a partir de 1930, en el período comprendido entre 1955 y 1966 las Fuerzas Armadas alcanzaron un protagonismo indiscutible. Así, con el propósito de impedir el retorno de Perón y de su fuerza política al gobierno, ejercieron un papel de “vigilancia” sobre el sistema político, cuyo funcionamiento interrumpieron de manera recurrente. Estas intervenciones, que repercutieron en el acrecentamiento de su autonomía respecto del poder civil, se produjeron en sintonía con la reformulación de sus funciones como baluarte de la lucha contra el comunismo. Cabe analizar, entonces, cómo se produjo esta reformulación y cuáles fueron sus implicancias.

El anticomunismo no constituía un elemento nuevo en la política nacional. Sin embargo, en la década de 1950 y, en particular, tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, se constituyó en objeto de prédica alarmada e insistente en los medios empresarios y conservadores en general, incluyendo al sector mayoritario de la Iglesia y a las Fuerzas Armadas. Este desasosiego se insertaba en un clima internacional caldeado por la confrontación entre Estados Unidos –la principal potencia política y económica del mundo capitalista, “occidental y cristiano”– y el mundo del “socialismo real” liderado por la Unión Soviética. En este escenario de bipolaridad y Guerra Fría, Estados Unidos apuntaló su preocupación por la seguridad interior y el control del “peligro comunista”. Así surgió la Doctrina de la Seguridad Nacional, que implicó una redefinición de la noción de enemigo. En este sentido, por con-

traposición a la vieja estrategia de guerra en función de la cual el rival se definía, básicamente, en términos de fronteras territoriales (un país contra otro país), la nueva doctrina definió al enemigo en términos de fronteras ideológicas (los defensores del mundo “libre” contra sus enemigos, constituidos por los comunistas y las propuestas que parecieran posibilitar su difusión). Todo aquello que generara un cuestionamiento al sistema de poder y no se alineara con la política norteamericana resultaba sospechoso. De allí que la Revolución Cubana y su posterior acercamiento al “mundo socialista” instalaron a pleno en América Latina –y por ende en Argentina– el clima de la Guerra Fría. Así, Estados Unidos afianzó sus programas de asistencia militar en la región, buscó coordinar la acción de sus ejércitos en la lucha “antisubversiva” y, bajo la presidencia de John Kennedy (1961-1963), desplegó un plan de ayuda económica –la “Alianza para el Progreso”– orientado a promover el “desarrollo” de las zonas atrasadas para robustecer la “seguridad” interna y debilitar las propuestas revolucionarias de cambio social.

En Argentina, sin embargo, las Fuerzas Armadas no “importaron” de manera directa esta doctrina. En rigor, la novedosa delimitación de la idea de enemigo fue recepcionada a partir de los aportes teóricos y las enseñanzas de entrenadores franceses que, desde fines de los años 50, capacitaron a miembros del Ejército. Patrice de Naurois, un teórico de la “guerra revolucionaria” –denominación de la “nueva forma de la guerra”–, sostenía en 1958 que “La guerra subversiva o revolucionaria tiene un origen político y proviene de la acción sobre las masas populares de elementos activos sostenidos y apoyados de varias maneras por el extranjero. Tiene por finalidad destruir el régimen político y la autoridad establecida y reemplazarlos por otro régimen político y otra autoridad. Esta acción es secreta, progresiva y se apoya en una propaganda continua y metódica, dirigida a las masas populares”⁵². El enemigo aparecía así como una figura que en forma solapada conspiraba contra el orden social. En su lucha contra este adversario –de “mil rostros y cabezas”–, las Fuerzas Armadas quedaban erigidas como garantes del orden y el principio de autoridad, lo que justificaba su intervención en la vida nacional. Pero su éxito requería que estuvieran sólidamente unificadas como institución, cuestión compleja en la Argentina de esos años.

52 La experiencia y posterior teorización del Ejército francés provino de su lucha contra los movimientos de descolonización en Indochina –Vietnam– y fundamentalmente en Argelia. El fragmento de Naurois está citado en Ernesto López, *Seguridad nacional y sedición militar*, Buenos Aires, Legasa, 1987, pp. 146-147.

7.1 Desde “azules” y “colorados” hasta la “profesionalización”

La intervención permanente de las Fuerzas Armadas en la vida política, expresada en la “vigilancia” que ejercían sobre el presidente —durante el gobierno de Frondizi, se produjeron entre 32 y 34 “planteos” militares—, había derivado en una relajación de la disciplina interna y el crecimiento de facciones dentro de las armas, en particular en el Ejército. Sus diferencias afloraron de manera abierta durante el gobierno de Guido, cuando confrontaron una tendencia “gorila” o golpista, orientada a establecer una “dictadura democrática” que terminara de una vez y para siempre con el peronismo, y otra orientación “legalista” que, con argumentos profesionales, se negaba a involucrar a las Fuerzas Armadas en la política partidaria⁵³. Finalmente, ambos grupos —conocidos luego como “colorados” y “azules” respectivamente— se enfrentaron en septiembre de 1962 y en abril de 1963.

Los “colorados” se caracterizaban por un antiperonismo visceral. Consideraban que el movimiento proscripto había constituido una aberración que debía ser desterrada de la vida argentina. Por lo tanto, eran partidarios de no transferir el gobierno e instaurar una dictadura duradera si fuera necesario. En esta visión, entonces, subyacía la línea intervencionista en la vida política. Pero como esa orientación había ocasionado múltiples planteos, resultaba poco respetuosa de las jerarquías y subordinaciones del mundo militar. En su ultraliberalismo, además, tenía mayor afinidad con los sectores agroexportadores.

Los “azules”, en cambio, consideraban que, a pesar de sus excesos, el peronismo había nacionalizado y cristianizado al proletariado. Como consecuencia, tenían una actitud más abierta hacia ese movimiento y estaban dispuestos a permitir su acceso —controlado— a posiciones de poder. De allí su intento de organizar un amplio frente político que incluyera de manera subordinada a los peronistas para llegar a una salida electoral. Pero, sobre todo, los azules auspiciaban una vuelta del Ejército a los cuarteles. Tal como lo expresaron en su Comunicado 150, redactado por Mariano Grondona después del primer conflicto de septiembre de 1962, era necesario retornar a la vigencia de la Constitución, llamar a elecciones e incorporar al peronismo a la vida política⁵⁴. Esta orientación, con la novedosa ayuda de sociólogos y expertos en comunicación social, asignó a la línea “azul” —liderada por el general Juan

53 Véanse Daniel Mazzei, *Los medios de comunicación y el golpismo. La caída de Illia (1966)*, Buenos Aires, Grupo Editor Universitario, 1997, y Daniel Rodríguez Lamas, *La presidencia de José María Guido*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1990.

54 Daniel Mazzei, *op. cit.*, p. 21.

Carlos Onganía— el sostenimiento de un Ejército legalista, democrático y al servicio del pueblo. Pero, ¿acaso era así? ¿Qué implicaba la profesionalización? Resultaba claro que la intensa politización de los oficiales y la fraccionalización que ocasionaba era netamente negativa porque “sin disciplina no hay jerarquía ni mando. Sin mando hay anarquía. La anarquía en el Ejército llevaría al caos a la Nación”⁵⁵. Es decir que las Fuerzas Armadas debían, en principio, ordenarse a sí mismas para fortalecerse como institución. De esta forma podrían erigirse con firmeza como garantes y pilar último del orden social.

Luego del segundo enfrentamiento, en abril de 1963, que consagró la derrota definitiva de los colorados —aun así, su impacto derivó en el veto a la participación peronista—, los azules avanzaron en su proceso de profesionalización. Ello implicó que consolidaron su cohesión interna, su autoidentificación corporativa y su capacidad técnica y organizativa, a la que acompañaron con nuevas modalidades de entrenamiento militar y el estudio de la tecnología moderna y de los problemas sociales contemporáneos⁵⁶.

Su alejamiento de la clase política tradicional fue seguido, además, por el aumento de contactos con los denominados “tecnócratas”⁵⁷, quienes —imbuidos de un manto de conocimientos técnicos presentados como “apolíticos”— articularon un programa desarrollista e industrialista, cercano a los intereses del sector más concentrado de la economía. Gozaban, asimismo, del visto bueno de Estados Unidos.

7.2 El consenso de terminación: el golpe de Estado de 1966 y la ruptura del “empate”

¿Qué atractivo presentaba, para estas Fuerzas Armadas cohesionadas, equipadas e imbuidas de los lineamientos doctrinarios de la “seguridad nacional”, la presidencia de Illia? Se trataba de un gobierno respetuoso del Estado de derecho y de las libertades, que no estaba alineado de manera directa con los intereses norteamericanos y —a tono con su orientación mercadointernista, sostenedora del capital y la burguesía nacional— limitaba la expansión de los capitales externos y la transnacionalización de la economía. Esta actitud se había revelado en

55 Declaración del general Juan Carlos Onganía publicada en el diario *La Nación* el 24 de junio de 1962. Citado en Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, p. 214.

56 Guillermo O'Donnell, “Modernización y golpes militares”, *Desarrollo Económico*, vol. 12, N° 47, octubre-diciembre de 1972, p. 531.

57 Guillermo O'Donnell, *idem*, p. 532 y nota 28.

la cancelación de los contratos petroleros, en la limitación a las importaciones de bienes de equipos, en los intentos por restringir las ganancias de los laboratorios farmacéuticos (en su mayoría, de origen extranjeros) y en la actitud prescindente respecto de la intervención estadounidense en la República Dominicana.

Las distintas fracciones de la burguesía, por su parte, se mostraban escandalizadas ante el congelamiento de las tarifas públicas, la fijación de precios máximos para los productos de primera necesidad, la reglamentación de las operaciones con divisas y el proyecto de ley para mejorar las indemnizaciones por despidos. Los empresarios denunciaban que tras estas medidas intervencionistas y proteccionistas se escondía un dirigismo estatal que podía develar una infiltración marxista-comunista en el gobierno⁵⁸.

Por otra parte, la administración radical no impedía ni aplastaba el “plan de lucha” de la CGT, las protestas de los trabajadores azucareros de Tucumán —donde se atravesaba una severa crisis de sobreproducción y los ingenios carecían de recursos para pagar a los trabajadores—, ni las movilizaciones estudiantiles que se sucedían por la demanda de mayor presupuesto universitario o para denunciar la intervención de *marines* estadounidenses en la República Dominicana⁵⁹.

Como si algo faltara, las contiendas electorales revelaban el creciente peso del peronismo, a la vez que había signos del surgimiento de una izquierda combativa, con simpatías por la Revolución Cubana.

Los agoreros voceros del *establishment*, opuesto a Illia casi desde el momento en que accedió al gobierno, preguntaban amargamente: ¿acaso todo esto aporta algo para la “modernización argentina”? La imagen de ineptitud gubernamental y la denuncia de infiltración comunista, propagadas por una campaña de prensa sistemática en la que participaban periódicos, publicistas y semanarios como *Primera Plana* o *Confirmado*, denostaban la supuesta ineptitud gubernamental para enfrentar los desafíos que los tiempos demandaban. A la gestión de Illia se la caratulaba de débil, lenta, ingenua o desaprensiva y, por sobre todo, ineficaz para colocar al país en el camino de la modernización⁶⁰. Así, se interro-

58 Las denuncias de infiltración marxista en el gobierno de Illia fueron recurrentes. Véase Elena Scirica, “Periodismo y política. El Príncipe, un intento fallido de modernizar a la derecha argentina”, *Historia de Revistas Argentinas*, tomo IV, Buenos Aires, Asociación Argentina de Editores de Revistas, Ed. Alloni, 2001, y Daniel Mazzei, *op. cit.*

59 Sobre la implantación de un clima propicio al golpe de Estado, véanse Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, *op. cit.*, cap. 6, y Daniel Mazzei, *op. cit.*

60 Catalina Smulovitz, “La eficacia como crítica y utopía. Notas sobre la caída de Illia”, en *Desarrollo Económico*, Vol. 33, N° 131, Octubre-Diciembre 1993.

gaban: ¿quién salvaría al país de su caída para colocarlo en la senda de grandeza? Los mismos medios tenían preparada la respuesta y contribuían a crear un clima de opinión favorable a la misma: se requería un poder firme, dado por el Ejército, y un hombre fuerte, el general Juan Carlos Onganía.

Las intervenciones militares sucedidas desde 1955 habían tenido una finalidad “ortopédica”, de reparación del sistema, imposible de lograr en tanto buscaban una respuesta estable en ese sistema político cuyo funcionamiento interrumpían. Esta vez sería diferente. Así lo ansiaban las grandes corporaciones empresarias y multinacionales que, a través de los tecnócratas devenidos en voceros, reclamaban la finalización de las políticas de tinte redistribucionista y “estatista”. Por contraposición, enfatizaban en la necesidad de instaurar un modelo económico “modernizador”, “racionalizador” y “eficiente”, favorable a la trasnacionalización de la economía, la “racionalización” productiva y la eliminación de los sectores “ineficientes” o “improductivos”. Este proyecto, pues, era el de la gran burguesía trasnacionalizada. Con una perspectiva disímil, otras fracciones burguesas ansiaban la finalización de una política que no las beneficiaba de manera directa y permitía el fluir de voces y actitudes de protesta. Desde otro ángulo, también apoyaban la interrupción constitucional: la dirigencia gremial burocratizada, conciente de sus limitaciones para proyectarse a la arena política partidaria de manera autónoma de Perón; la cúpula eclesiástica, consustanciada con la cruzada anticomunista y el realce de los valores “occidentales y cristianos”, así como también un variado arco ideológico que abarcaba a liberales, socialcristianos, nacionalistas, frondicistas y peronistas, entre otros. La Doctrina de Seguridad Nacional brindaba el sustento profesional que legitimaría a las Fuerzas Armadas desde el punto de vista castrense.

El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas depusieron al presidente Arturo Illia y a su vicepresidente. Por medio de una “junta revolucionaria” convocada para la ocasión, decretaron la destitución de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los gobernadores e intendentes electos. También disolvieron el Congreso, las legislaturas provinciales y los partidos políticos. La Asociación para la Defensa de la Libre Empresa (ACIEL), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina y las grandes organizaciones burguesas manifestaron su apoyo. No fueron las únicas. La mayoría de los partidos políticos, los sindicalistas, la cúpula eclesiástica y los grandes medios de comunicación también expresaron su respaldo. De este coro se distinguió la Universidad de Buenos Aires, que expresó su inquietud por el quiebre constitucional.

Comenzó así la autoproclamada “Revolución Argentina”. Tal como los hechos demostrarían, el golpe de Estado de 1966 venía a romper el “empate” social y político. A partir de ese momento, se intentaría imponer por vía autoritaria una

modernización capitalista en beneficio del sector más concentrado y transnacionalizado de la economía. Llegaba la hora de la burguesía industrial transnacionalizada.

Bibliografía

- Acuña, Cynthia, del Cueto, Julio y Scholten, Hernán, “Introducción: modernización y cultura en los años sesenta”, *Historia de la Psicología*, Cátedra I, módulo IV, 2ª. Parte, 2005. También en www.elseminario.com.ar/modulos/modulo04_2.rtf
- Altamirano, Carlos, *Bajo el signo de las masas (1943-1973)*, Buenos Aires, Ariel, 2001.
- Aroskind, Ricardo, “El país del desarrollo posible”, en Daniel James, *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo 9, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
- Cavarozzi, Marcelo, *Autoritarismo y democracia (1955-1996). La transición del Estado al mercado en Argentina*, Buenos Aires, Ariel, 1997.
- Felitti, Karina, “El placer de elegir. Anticoncepción y liberación sexual en la década del sesenta”, en Gil Lozano, Fernanda, Pita, Valeria e Ini, María Gabriela (dir.), *Historia de las mujeres en la Argentina, Siglo XX*, Buenos Aires, Taurus, 2000.
- García Heras, Raúl, “El Plan de Estabilización Económica de 1958 en la Argentina”, *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, vol. 11, N° 2, julio-diciembre de 2000.
- Imaz, José Luis de, *Los que mandan*. Buenos Aires, Eudeba, 1964.
- James, Daniel, “Sindicatos, burócratas y movilización”, en Daniel James (dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo 9, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
- James, Daniel, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990.
- Kohan, Néstor, “Los intensos años sesenta”, *Clarín*, Zona, 23 de agosto de 1998.
- López, Ernesto, *Seguridad nacional y sedición militar*, Buenos Aires, Legasa, 1987.
- Mazzei, Daniel, *Los medios de comunicación y el golpismo. La caída de Illia (1966)*, Buenos Aires, Grupo Editor Universitario, 1997.
- Mazzeo, Miguel, *Cooke, de vuelta (El gran descartado de la historia argentina)*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1999.
- Meynaud, Jean, *Los grupos de presión*, Buenos Aires, Eudeba, 1963.
- Nosiglia, Julio, *El desarrollismo*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.
- O'Donnell, Guillermo, “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, *Desarrollo Económico*, N° 64, vol.16, enero-marzo de 1977.
- O'Donnell, Guillermo, “Modernización y golpes militares”, *Desarrollo Económico*, vol. 12, N° 47, octubre-diciembre de 1972.
- Portantiero, Juan Carlos, “Economía y política en la crisis argentina (1958-1973)”, *Revista Mexicana de Sociología*, N° 2, 1977.

- Pujol, Sergio, "Rebeldes y modernos. Una cultura de los jóvenes", *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo 9, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
- Rodríguez Lamas, Daniel, *La presidencia de Frondizi*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984.
- Rodríguez Lamas, Daniel, *La presidencia de José María Guido*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1990.
- Rodríguez Lamas, Daniel, *La Revolución Libertadora*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1985.
- Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- Rouquié, Alain, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, tomo 2, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- Rouquié, Alain, *Radicales y desarrollistas*, Buenos Aires, Schapire, 1975.
- Scirica, Elena, "Periodismo y política. El Príncipe, un intento fallido de modernizar a la derecha argentina", *Historia de Revistas Argentinas*, tomo IV, Buenos Aires, Asociación Argentina de Editores de Revistas, Ed. Alloni, 2001.
- Senen González, Santiago, "El movimiento sindical en Argentina: entre el justo reclamo y la política partidista", *Instituto del Mundo del Trabajo, Revista Pistas*, N° 4, abril de 2001.
- Smulovitz, Catalina, "La eficacia como crítica y utopía. Notas sobre la caída de Illia", en *Desarrollo Económico*, Vol. 33, N° 131, Octubre-Diciembre 1993.
- Tcach, César, "Golpes, proscripciones y partidos políticos", en Daniel James (dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, *Nueva Historia Argentina*, tomo 9, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
- Terán, Oscar, *Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda intelectual argentina, 1956-1966*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto / Imago Mundi, 1993.
- Torre, Juan Carlos, *Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.



La “Revolución Argentina” y la crisis de la sociedad posperonista (1966-1973)

Sergio Nicanoff y Sebastián Rodríguez

Introducción

El 28 de junio de 1966 Argentina asiste por quinta vez en 36 años a una interrupción de los mecanismos institucionales previstos por el juego democrático representativo. Al igual que en las ocasiones anteriores, las Fuerzas Armadas se constituyen en el elemento coercitivo que impone por la vía de las armas el derrocamiento de un presidente electo, y como la mayor parte de esas veces, es la institución militar la que toma las riendas del nuevo gobierno¹. Sin embargo, el golpe de Estado del 66 inaugura una novedad en la dinámica de las intervenciones militares: la autodenominada “Revolución Argentina” se presenta a sí misma como fundadora de una nueva República; se trata por primera vez de un golpe de Estado que se aboca a la tarea de reconstituir la sociedad en su totalidad para librarla de los males crónicos que se le diagnostican. En este sentido, el período que aquí nos interesa sienta el precedente de su lógica y trágica continuación en la dictadura que se inicia el 24 de marzo de 1976 bajo el rótulo de “Proceso de Reorganización Nacional”.

En las siguientes páginas transitaremos por un proceso que, aunque se ciñe al período 1966-1973, nos obliga a indagar en el tiempo hasta los años del peronismo, en busca de una mirada histórica que nos permita dar cuenta de las causas y dinámicas que confluyen en la emergencia de la Revolución Argentina. En este sentido, creemos que el recorte del trabajo, que obedece a una periodización con criterios institucionales, no puede contener en su estrecho

1 Cabe aclarar que tanto los golpes de 1930, 1943 y 1955 fueron golpes de Estado que impusieron un gobierno de corte militar. No fue así en 1962, dado que, tras el derrocamiento de Arturo Frondizi por la acción de las Fuerzas Armadas, un civil —José María Guido— asumió la Presidencia, preservando al menos mediante una máscara la legalidad institucional.

marco el desenvolvimiento de la historia, por lo cual nos veremos obligados a forzar los límites de la temporalidad política, para adentrarnos en la corriente del desarrollo económico y social de largo plazo.

Por otra parte, es nuestra intención, además de traer a la memoria los principales hechos y actores de la etapa en cuestión, reflexionar críticamente sobre algunas problemáticas que se enmarcan en esos años, y que presentan al día de hoy cuestiones irresueltas, tanto en el nivel de las discusiones entre historiadores de distinta raíz política e interpretativa, como en el de la sociedad en su conjunto. Nos referimos fundamentalmente a dos cuestiones bien concretas: la primera de ellas hace referencia a los debates que se han generado en torno de la inestabilidad política en la Argentina del siglo XX. En este sentido, el golpe de Estado del 66 nos servirá como disparador para pensar sobre las categorías de análisis que distintos autores de renombre han desplegado sobre la mesa de debate, así como para dejar sentada nuestra propia postura sobre un tema tan controvertido como es el funcionamiento de las instituciones en el país.

La segunda cuestión a la que hacíamos referencia trata sobre una espina incrustada en la médula de la sociedad y principalmente sobre aquellos que han sido partícipes, directa o indirectamente, de los fenómenos de movilización social de los años sesenta y setenta. Esta cuestión, que ha sido caratulada por sus detractores como la “violencia setentista”, y reivindicada por quienes han dejado en esa lucha sus mejores años en busca de una sociedad diferente, es la que nos mueve a repensar sobre las condiciones históricas que hicieron posible un fenómeno tan particular, y que al día de hoy despierta, en uno y otro sentido, el mismo grado de pasión.

Cabe mencionar que estos dos núcleos problemáticos que nos motivan a reflexionar sobre el período no se presentan aislados uno del otro, sino que se encuentran a su vez atravesados por un eje que los articula, y que es en definitiva el que vertebra estas páginas: la crisis de hegemonía y la crisis orgánica. La idea de que la burguesía Argentina tiene dificultades para ejercer su dominación sobre las clases subalternas a lo largo la segunda mitad del siglo XX es de alguna manera el trasfondo de los procesos que en este trabajo se detallan.

Si bien el trabajo está dividido en varias secciones para facilitar su lectura, creemos que pueden delimitarse nítidamente tres núcleos temáticos. El primero abarca el proceso formativo de la alianza social que lleva a cabo el golpe de Estado de 1966, la dinámica de largo plazo que genera las condiciones para el mismo y la consolidación de la coalición gobernante. En este primer acercamiento, comenzaremos revisando críticamente algunas explicaciones sobre el proceso en cuestión, donde intentaremos dejar en claro algunas categorías que aparecerán a lo largo del trabajo y especificar el marco teórico desde el cual

partimos para abordar el período. Luego nos adentraremos con más detalle en los años de la Revolución Argentina, hurgando tanto en los detonantes inmediatos y en la estructura de la sociedad de mediados de los sesenta para tratar de comprender las causas del golpe, como en una visión de largo plazo en la cual nos preguntaremos más puntualmente acerca de la relación entre las clases sociales, la estructura económica y la alianza golpista de junio del 66. El paso siguiente en esta primera parte girará en torno de una descripción de las metas propuestas por la Revolución Argentina, en la cual nos interesa poner en relieve las intenciones de reestructuración de la sociedad en términos globales. En esa pretensión totalizadora y totalitaria, con miras a imponer una serie de valores que abarcaron todos los planos —económico, político, social, ideológico y cultural—, es en donde encontraremos algunas claves que nos permitirán acercarnos a uno de los nudos problemáticos del trabajo, el de la violencia política.

El segundo núcleo temático gira en torno de las contradicciones incubadas dentro del régimen y las fisuras que el mismo presenta en el devenir de su propio desarrollo. Por lo tanto, en esta segunda parte del trabajo, comenzaremos con un análisis de esas contradicciones y continuaremos con un abordaje del momento en que ese resquebrajamiento hace finalmente eclosión. Nos referimos por supuesto al “Cordobazo” de mayo de 1969. En este camino, nos adentraremos en algunas disquisiciones teóricas sobre lo que Antonio Gramsci ha denominado “crisis orgánica”, para poder iluminar el problema que nos ocupa desde la perspectiva de este intelectual italiano. Como corolario de las fisuras mencionadas, señalaremos la aparición de una variada gama de nuevos actores sociales, que nos aportarán la materia prima sobre la cual reflexionar, para intentar comprender desde una mirada histórica el porqué de la escalada de violencia política.

El tercero de los núcleos en los que dividimos el trabajo trata sobre el derrotero final de la Revolución Argentina, la retirada del régimen y las opciones políticas que se abren para Argentina a partir de la convocatoria a elecciones para el año 1973. Incluimos allí un breve *racconto* de los acontecimientos que determinaron la caída de Juan Carlos Onganía, el ascenso y ocaso de Roberto Marcelo Levingston y el desenlace del período en cuestión con la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse.

En síntesis, lo que intentamos a lo largo de las páginas que nos ocupan es trazar una línea de ascenso, auge y caída de la Revolución Argentina, con la intención de graficar una suerte de parábola que dé cuenta del movimiento en el cual se desarrolla la historia. En este sentido, creemos que la dinámica de las estructuras económico-sociales, en íntima interrelación con los sujetos políticos, determina que de las contradicciones incubadas por la propia lógica de los aconteci-

mientos surja el germen de lo nuevo que terminará por sepultar a lo viejo y generará a su vez, en la novedad de lo que nace, una nueva contradicción. En este camino de afirmaciones y negaciones, de tesis y antítesis es que se mueve la historia en busca de la síntesis final superadora.

Primera parte: auge y consolidación

1. Una mirada crítica sobre las distintas explicaciones del período

El proceso que nos ocupa ha merecido la atención de numerosos investigadores, tanto desde la historia como desde otras disciplinas afines, como la sociología, la ciencia política o la economía. Las miradas son múltiples y los análisis divergen sustancialmente entre sí. En las próximas líneas intentaremos, por lo tanto, dar cuenta de algunas aproximaciones que pensamos han sido las más significativas.

Creemos que es interesante partir del análisis de Juan Carlos Portantiero acerca de lo que él entiende como el “empate hegemónico” que se abre con el derrocamiento de Perón en 1955². Este autor sostiene que las contradicciones del ciclo económico generan necesariamente un desfase entre la estructura económica y la proyección política de las distintas fracciones de la burguesía³. De esta manera, cuando una de estas fracciones —ya fuere la burguesía terrateniente, la

2 Juan Carlos Portantiero: “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”, en Oscar Braun (comp.), *El capitalismo argentino en crisis*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.

3 Nos referimos al ciclo económico en el sentido de las fases sucesivas de crecimiento, crisis y retracción de la actividad económica en Argentina, la cual tiene su origen en la particular estructura económica de dos sectores (industrial y agropecuario) no integrados entre sí. Vale esta aclaración momentánea a modo de introducción, ya que volveremos sobre esta cuestión con más profundidad en el punto 2.3.

En relación con el concepto de fracción de clase —en este caso fracciones de la burguesía— nos referimos a los distintos sectores que conforman a la clase económicamente dominante en el marco del sistema capitalista. Para el caso de Argentina, éstas serían la burguesía ligada a las actividades del sector agropecuario, cuyos intereses giran en torno de la exportación de sus productos; la burguesía industrial vinculada al sector de la industria nacional, cuya mira estaría puesta en la realización de sus productos en el mercado interno; y por último, la burguesía ligada al capital más concentrado a nivel internacional, representante de los intereses de las grandes corporaciones y grupos empresarios. Cabe aclarar que, de acuerdo al momento histórico, estas tres fracciones pueden presentarse formando alianzas —ya sea entre dos de ellas, o entre las tres— o pueden asimismo verse enfrentadas por proyectos económicos divergentes.

burguesía industrial ligada al capital nacional y al mercadointernismo, o la fracción más concentrada del capital industrial transnacional— logra hacerse con el poder político a través de alguna coalición que la representa —por vías democráticas o por medio de golpes de Estado—, el cambio de rumbo de la economía a causa de las contradicciones propias del ciclo genera que la conducción política en ejercicio del poder se torne inviable, dado que representa intereses de una fracción que no es ya la dominante a nivel económico. Este “des-tiempo” entre las esferas estructural-material y la político-institucional determina, según Portantiero, una situación de “empate” en la cual todos los actores cuentan con la capacidad para vetar cualquier proyecto antagónico, pero carecen a su vez del impulso necesario para imponer el suyo propio, terminando en un juego de fuerzas de suma cero. En este esquema, Portantiero retoma las tesis de Mao Tse Tung sobre las contradicciones primarias y secundarias del sistema capitalista —las que se dan en la lucha entre capital y trabajo, y las que derivan de los diferentes intereses de las fracciones de la burguesía respectivamente— y pondera aquellas que considera más relevantes para el período analizado. En el proceso que nos ocupa, la lucha entre capital y trabajo, es decir, la lucha de clases propiamente dicha, queda para este autor relegada en un segundo plano, y el golpe del 66 viene a significar en esta dinámica el intento más acabado y contundente por parte de una de las fracciones burguesas —la de la burguesía transnacional— de romper el empate e imponerse por sobre las demás.

Es quizá paradójico que, en el contexto de producción de su trabajo, Portantiero otorgue un rol subordinado a la lucha de clases, dado que si este autor intenta rastrear el origen del fraccionamiento de la burguesía argentina entre los años 55 y 73 es porque abreva en las necesidades que le plantea su compromiso político con la clase obrera⁴. De este modo, si el problema que busca resolver lo conduce a buscar en la lucha interburguesa —que se genera por el movimiento estructural de la economía— los resquicios por los cuales pueda filtrarse la avanzada del proletariado, aun así la acción de los sujetos y la esfera de lo subjetivo quedan relegadas en su análisis. En este aspecto, podría resultar complementario el trabajo de Guillermo O'Donnell “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”⁵, en el cual estudia pormenorizadamente la influencia de los intereses de los trabajadores en ese juego pendular de alianzas entre los distintos sectores de

4 Es bueno recordar el compromiso militante de Juan Carlos Portantiero en el momento en que escribe la primera versión del trabajo que estamos mencionando y la finalidad política de las conclusiones de su análisis, realizado en el año 1973, en la coyuntura de desgaste y fracaso de la “Revolución Argentina”.

5 Guillermo O'Donnell: “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, *Desarrollo Económico* vol. 16, N° 64, enero-marzo de 1977.

la burguesía, el Estado y la clase obrera. En este sentido, aunque las motivaciones de estos dos autores difieren, podemos pensar en análisis que se sustentan mutuamente y que comparten además el apremio del momento en el cual ambos escriben.

Por su parte, O'Donnell cuenta con una prolífica producción en torno del período que nos interesa. Además del trabajo ya mencionado, podemos citar su ya clásico libro *El Estado burocrático-autoritario*⁶, en el cual, al igual que en sus estudios preliminares sobre la cuestión en *Modernización y autoritarismo*⁷, presenta un modelo que podemos sintetizar en el siguiente esquema: en un contexto de crisis de la primera fase del modelo de sustitución de importaciones y ante la activación política de las masas producto de las prácticas “populistas” de los gobiernos propios de esa fase de industrialización mercadointernista —en obvia alusión al peronismo—, se produce lo que O'Donnell llama “pretorianismo de masas”, concepto que toma prestado de Samuel Huntington. Para este autor de la extrema derecha norteamericana, el pretorianismo de masas se genera “cuando los niveles de participación y movilización políticas exceden marcadamente los de institucionalización”⁸. O'Donnell sostiene entonces que a este pretorianismo sucede otro de signo contrario por la necesidad de controlar el Estado para iniciar la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados del capital, dando por tierra con la experiencia populista⁹. De este modo, ante los excesos de las masas desbordadas que se manifiestan por fuera de los canales previstos por la democracia burguesa, la clase social dominante en la esfera económica recurre al custodio de sus intereses —las Fuerzas Armadas— poniendo fin a la participación política y a la activación de la clase trabajadora.

Este razonamiento presenta, desde nuestra óptica, algunos problemas que es bueno subrayar. ¿Por qué sostener que las demandas de las clases subalternas discurren, durante el período peronista, por fuera de los canales de participación institucional? ¿Acaso la movilización política y de masas que se desarrolla

6 Guillermo O'Donnell: *El Estado burocrático autoritario*, Buenos Aires, Ed. De Belgrano, 1982.

7 Guillermo O'Donnell: *Modernización y autoritarismo*, Buenos Aires, Paidós, 1972.

8 Samuel Huntington: *El orden político en las sociedades en cambio*, Buenos Aires, Paidós, 1972, citado en Guillermo O'Donnell: “Modernización y golpes militares”, *Desarrollo Económico*, vol. 12, N° 47, octubre-diciembre 1972, p. 526.

9 Si bien el período 1946-1955 no es inmediatamente anterior al golpe de Estado de 1966 que estamos analizando, O'Donnell considera esos años como los generadores del fenómeno del pretorianismo de masas, al cual vienen a poner fin las Fuerzas Armadas en junio de 1966.

durante el período 1946-1955 no transcurre por intermedio del aparato sindical? ¿No son estos mismos sindicatos *canales previstos* para el accionar de las masas? No hace falta abundar en ejemplos donde el mismísimo Perón incita a los trabajadores a organizarse argumentando que “las masas obreras que no han sido organizadas presentan un problema peligroso, porque la masa más peligrosa es la masa inorgánica. La experiencia moderna demuestra que las masas obreras mejor organizadas son, sin duda, las que pueden ser dirigidas y mejor conducidas en todos los órdenes”¹⁰.

Por otra parte, si la presión que ejercen las masas no es anárquica sino organizada en una corporación que representa sus intereses (el movimiento sindical), el planteo de O'Donnell lleva a pensar que sólo la incidencia de esa corporación de trabajadores genera una situación de pretorianismo. Pero ¿qué hay de las otras corporaciones como la UIA (Unión Industrial Argentina) o la SRA (Sociedad Rural Argentina)? ¿Acaso no son también corporaciones que se imponen por sobre la democracia presionando por sus intereses? Por lo tanto, o el concepto de pretorianismo se aplica a los trabajadores y análogamente a los demás actores, o debemos repensar si el concepto es válido en sí mismo y subyace en él una visión de valoración negativa en cuanto a la organización y movilización de los trabajadores. Creemos que la clase obrera durante el peronismo se encuentra más que nadie “jugando el juego democrático” y acatando todas las reglas. Incluso las luchas obreras una vez proscripto el partido que las representa luego del 55 —a excepción del período de la “Resistencia peronista” que encuentra su fin rápidamente—, se dan por medio de sus representantes sindicales, como queda demostrado con los planes de lucha de la CGT que enfrenta el gobierno de Illia entre 1963 y 1964. La burguesía es quien impone el sistema democrático con la intención de canalizar e institucionalizar el conflicto pero desde el año 46 en adelante es derrotada en sus propios términos, y es por esto que se le hace necesario interrumpir la farsa y conciliar nuevamente su dominio económico con el poder político asaltando el estado por la vía de las armas.

El “pretorianismo de masas” —concepto de por sí profundamente reaccionario— aparece en esta visión como un nuevo exceso del peronismo, y lo que O'Donnell se pregunta —entre líneas— es cómo es posible generar un crecimiento económico bajo un gobierno democrático pero precaviéndose de caer en las “deformaciones” populistas. Pervive como trasfondo de este análisis, por un lado, una inversión de las causas de la interrupción institucional que lleva a postular que

10 Discurso de Juan Domingo Perón del 25 de agosto de 1945 en la Bolsa de Comercio, citado en Hugo del Campo, *Sindicalismo y peronismo*, Buenos Aires, CLACSO, 1983, pp. 152-153.

los militares actúan motivados por los excesos anteriores del pueblo. De allí a la “teoría de los demonios” el camino parece allanarse en forma curiosa. Y por otro lado, se vislumbra en los trabajos de nuestro autor la contradicción de aquellos que ponderan la democracia como un sistema deseable y absoluto, pero no toleran la idea de un gobierno democrático de corte popular.

Esta idea de que el “pretorianismo de masas” se constituye en la clave de la inestabilidad política en el período posperonista es retomada más recientemente por Alfredo Pucciarelli¹¹, quien plantea —acercándose de alguna manera a los argumentos reseñados de Portantiero— que la debilidad institucional en Argentina en este período puede buscarse en la crisis de hegemonía de la clase dominante. Sin embargo un elemento clave diferencia a los dos autores en cuestión, ya que el primero sostiene que en momentos en que la clase social dominante accede a “compartir” el ejercicio de la política, entonces se “exacerban los mecanismos *deformantes* del funcionamiento del régimen democrático, propios del *cesarismo* democrático (...) El *mal uso* de los medios políticos de la democracia (...) invoca el fantasma de la ingobernabilidad y refuerza las posturas intolerantes y autoritarias. El marco consensual que había hecho posible el ejercicio de la hegemonía compartida se desvanece”¹². Con estos argumentos, y en forma similar a lo planteado por O'Donnell, Pucciarelli invierte la ecuación y termina postulando que la ingobernabilidad y el golpe de Estado consecuente se desprende de la incultura cívica y ciudadana del cesarismo —léase peronismo— de quienes no supieron “aprovechar” la oportunidad otorgada. El ideal de la democracia absoluta se refuerza aquí con la noción de una democracia sin excesos populistas, es decir que no se extralimite y rompa la posibilidad de “compartir” la hegemonía.

La intención de reseñar algunos de los análisis sobre el período que aquí nos ocupa, radica en poner en claro por un lado nuestra propia postura en relación con la coyuntura de 1966, pero en términos más generales lo que motiva las líneas precedentes es una reflexión crítica acerca de las formulaciones que se tejen sobre las características del sistema democrático y la incidencia de los golpes de Estado. Desde nuestro punto de vista, tanto éstos en general así como aquella coyuntura en particular, no son un problema que pueda analizarse partiendo de una visión contrafáctica y que defina la respuesta por la negativa, es decir, intentando responder cuáles fueron los factores que impidieron el funcionamiento de las instituciones democráticas en Argentina. Creemos que este

11 Alfredo Pucciarelli: “Dilemas irresueltos en la historia reciente de la sociedad argentina”, *Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política*, vol. 2, N° 5, noviembre de 1997.

12 *Ibid.*, p. 116 (cursiva nuestra).

camino nace en una visión donde aparentes “deformaciones” del sistema democrático se imponen sobre un “deber ser” de carácter normativo e ideal en el cual se naturaliza el sistema democrático como un anhelo de perfección institucional. Pensamos que el problema surge al absolutizar los conceptos partiendo de una falsa dicotomía entre autoritarismo y democracia en la cual los militares en el poder constituyen una aberración propia de sociedades que atraviesan por períodos de crisis en forma cíclica o donde las masas no supieron, por cuestiones de incultura cívica, ejercer con responsabilidad su derecho al voto y la participación. Este tipo de análisis dicotómico que, como ya señalamos, tiene peligrosas derivaciones teóricas y políticas en la visión actualmente dominante de los dos demonios¹³ es análogo a pensar que los golpes de Estado —fenómeno que aparece como sinónimo de interrupción de la democracia— son solamente producto de las intervenciones militares, lo cual nos lleva a la dificultad de entender procesos que incluyen un amplio abanico de mecanismos por los cuales se imponen gobiernos o políticas en función de intereses de determinado sector social¹⁴. En este sentido, creemos que resulta idealista una visión en la cual el autoritarismo es —única y exclusivamente— un gobierno “no democrático”, así como la visión de que cualquier gobierno que accede al poder por la vía del sufragio puede considerárselo legítimo y deseable. El hecho de romper con esa división maniquea nos permite revestir el concepto de democracia que aquí estamos considerando de una de sus principales determinaciones: su carácter burgués. Ese carácter hace que la democracia funcione, como ya mencionamos antes, también como mecanismo de dominación, canalizando los conflictos y construyendo hegemonía¹⁵. Por supuesto

13 Cabría incluir en esta tipificación los trabajos paradigmáticos en este sentido de Marcelo Cavarozzi, *Autoritarismo y democracia (1955-1983)*, Buenos Aires, CEAL, 1983, así como los escritos de Waldo Ansaldi (*et alia*), *Argentina en la paz de dos guerras*, Buenos Aires, Biblos, 1994. Nótese en el trabajo de Cavarozzi la fecha de producción y la coincidencia con el inicio de la gestión alfonsinista y los debates en la Cámara de Diputados del proyecto de la Ley Mucci sobre las prerrogativas de los sindicatos. Las conclusiones de Cavarozzi apuntan a poner de relieve el papel “destabilizador” de los sindicatos y de los trabajadores en la historia reciente de Argentina, de modo de legitimar el recorte de los poderes sindicales y cargar la responsabilidad sobre los hombros de la clase obrera de los sinsabores del gobierno radical.

14 Podemos referirnos, por ejemplo, a las elecciones que llevan a Justo al poder en 1932, o la maniobra que expulsa del gobierno a Raúl Alfonsín, ambos golpes de Estado sin la participación de los militares, ni durante ni después de los mismos.

15 Véase en cuanto a la construcción histórica de la democracia de masas los trabajos pioneros de Eric Hobsbawm, *La era del Capital, 1848-1875*, Buenos Aires, Crítica, 1999, en particular el capítulo 6 (“La fuerza de la democracia”).

que esta “herramienta” es pasible de ser resignificada por las clases subalternas¹⁶ y es entonces cuando la burguesía decide quitar de en medio las máscaras interrumpiendo momentáneamente el “juego” representativo¹⁷.

Contrariamente al tipo de análisis que acabamos de reseñar, creemos que la cuestión principal radica en la comprensión de las diferentes formas en las que la burguesía argentina aseguró las condiciones de reproducción del sistema capitalista, es decir, las distintas maneras en las que se expresó políticamente la dominación de clase existente en la estructura de relaciones de producción. En este sentido, y retomando el análisis de Portantiero, 1966 –al igual que posteriormente 1976– debe ser visto como un momento clave de recomposición de fuerzas dentro de la burguesía con la intención de eliminar cualquier tipo de conflictividad social –tanto *intra* como *inter* clases– con miras a imponer un nuevo modelo de acumulación.

Por último, y a pesar de las disidencias que oportunamente fuimos señalando con las distintas posturas, es interesante mencionar que aún cuando todos los trabajos mencionados divergen sustancialmente entre sí en cuanto a análisis y propósitos, existe un denominador común al cual obedece de alguna manera la selección de autores que realizamos, y es que todos ellos ponen particularmente en relieve la noción de una dominación sin capacidad de consolidar la hegemonía política. Por una u otra razón –ya sea por la incapacidad de la propia clase dominante o por la incidencia de la lucha de clases– en todos los análisis se hace palpable el concepto de crisis de hegemonía, crisis de la dominación para generar consenso, crisis de la clase dominante de impregnar a la sociedad en su conjunto de sus valores culturales e ideológicos, de forma tal que su dominación no se ejerza sólo a través de la coerción y del uso de la fuerza. Sobre este concepto volveremos más adelante y se constituirá en un elemento vertebrador de nuestro trabajo para pensar el período que estamos analizando.

16 Creemos que un momento en la historia argentina en que ocurre esto es en los comicios de 1973, donde las elecciones que llevan a Cámpora al gobierno se constituyen en un fenómeno netamente clasista. La maniobra de Perón para forzar la renuncia del presidente electo y el intento de poner un paño de agua fría al movimiento que se manifestaba en esas elecciones –y que era fruto sin duda de la experiencia condensada de la clase obrera desde 1955 en adelante– reafirman el carácter de ese proceso y la posibilidad que tienen las masas de invertir el sentido de las instituciones (democracia burguesa) que tienen su origen en intenciones disciplinadoras.

17 El 11 de septiembre de 1973 en Chile podría ser un ejemplo paradigmático donde el juego democrático debió ser interrumpido ante la inversión herética que de él había hecho el pueblo chileno tres años antes.

No obstante los distintos abordajes en el plano teórico, y los argumentos de análisis con respecto a la situación que nos interesa en el marco de problemas más generales como la inestabilidad institucional en Argentina, o la cuestión de la crisis hegemónica, pensamos que una comprensión más cabal de estos problemas sólo puede entenderse en el marco de una cuestión específica luego de una minuciosa mirada sobre el plano de la coyuntura. Es por eso que dedicaremos buena parte de las líneas que siguen, luego de este breve —y obviamente incompleto— estado de la cuestión, a acercarnos al tiempo de la “Revolución Argentina” para definir cuáles fueron las características de su desarrollo concreto en la sociedad de los años sesenta.

2. El golpe

2.1 Antecedentes inmediatos

Luego del derrocamiento de Perón en 1955 el sistema institucional del país no había logrado recomponerse. A la proscripción del justicialismo se agregaba la debilidad propia de los gobiernos de turno, los cuales se sucedían uno tras otro sin lograr establecer un grado de legitimidad que les permitiera terminar sus respectivos mandatos. En este marco, el gobierno de Arturo Illia no sería la excepción. Instalado en el poder luego de haber triunfado en las elecciones de 1963 representando a la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), Illia parecía tener los días contados como presidente de la República desde el momento mismo de su asunción. De este modo, los años de su gobierno fueron cargándose de tensiones que confluyeron en el desencadenamiento del golpe más preparado y anunciado de la historia argentina hasta ese momento.

En primer lugar, las elecciones para la gobernación de la provincia de Mendoza —donde en realidad se estaba dirimiendo la interna entre Perón y Vandor¹⁸, líder de los metalúrgicos y de las 62 Organizaciones peronistas— cuyos resultados ratificaban el liderazgo del General, preanunciaban ade-

18 A raíz de la disputa por la conducción del movimiento entre Perón y Vandor, el justicialismo se presentó a las elecciones para gobernador en Mendoza dividido en dos listas: una de ellas llevaba como candidato a Corvalán Nanclares, candidato de Perón, y la otra presentaba a Serú García representando al vandorismo. Aunque ninguna de las dos listas ganó la gobernación, el candidato de Perón derrotó al segundo demostrando que el General exiliado mantenía a pleno su capacidad de conducción política del movimiento.

más un triunfo del justicialismo para las elecciones nacionales de renovación de gobernadores del año entrante. Esto a su vez hacía temer a los sectores antiperonistas del Ejército y la Marina la reedición del resultado de las elecciones del 18 de marzo del 62, donde el peronismo se había alzado con un claro triunfo. En este sentido, la figura de un golpe de Estado “preventivo” aparecía como la única salida viable para esos sectores. En segundo lugar, las políticas económicas de Illia que ponían límite a las prebendas que las empresas petroleras y químicas norteamericanas habían conseguido en los anteriores gobiernos —fundamentalmente en el de Frondizi— comenzaban a incomodar peligrosamente a los grupos más poderosos de la economía. Huelga cualquier comentario acerca de la dificultad de gobernar con la oposición de la fracción más influyente de la burguesía. Por último, la postura ambigua del presidente argentino en relación con la intervención norteamericana en Santo Domingo en el año 1965, parecía indicar —a los ojos de sus detractores— una posición favorable a los gobiernos de corte comunista¹⁹. Sumado a esto y en relación con la misma cuestión, la incompetencia de la cual se acusaba al gobierno para reprimir los conflictos obreros en torno de los ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, parecía ser el disparador de la cuenta regresiva camino al golpe.

Desde los medios de prensa y comunicación se arengó a la opinión pública a aceptar y consensuar la necesidad del recambio institucional. Las revistas *Primera Plana* y *Confirmado* —dirigidas en ese entonces por Jacobo Timerman, y que contaba entre sus periodistas estrella al pro golpista Mariano Grondona— construyeron un clima de debilidad e indecisión frente a las posibles amenazas comunistas²⁰. Como contraparte, la construcción negativa de la figura de Illia se complementó con la magnificación de Juan Carlos Onganía —quien

19 Si bien el gobierno de Illia no condenó la intervención en Santo Domingo por parte de Estados Unidos, sí se negó a enviar tropas de apoyo a Norteamérica, como lo sugería la cúpula de las Fuerzas Armadas.

20 Es importante señalar que, desde 1959, la situación latinoamericana se polarizaba cada vez más por los coletazos de la Revolución Cubana. Estados Unidos, inmerso en plena Guerra Fría, estaba abocado a impedir cualquier atisbo de “contagio” de la experiencia de Cuba hacia otros países de la región, lo que llevaba a que cualquier política que no siguiera estrictamente los dictados de la potencia del norte fuera vista con malos ojos. Es claro que el gobierno de Illia no iba en la dirección de la Cuba socialista, pero detrás del fantasma del comunismo se ocultaban evidentemente los intereses de las empresas estadounidenses y de los capitales invertidos en Argentina. Así, las leyes sobre petróleo y de medicamentos fueron tildadas como leyes “socializantes”.

encabezaría el golpe de Estado— como el hombre del momento, único e irremplazable para sacar al país de su letargo²¹.

La construcción del discurso legitimador se alineaba con las políticas de la Doctrina de Seguridad Nacional formulada por Estados Unidos, y que hacía referencia a la necesidad de volcar el poder represivo de las Fuerzas Armadas locales a combatir al “enemigo interno”, agente de la subversión marxista. Quedaba de esta manera en un segundo plano el rol histórico de la defensa de las fronteras para lo cual los ejércitos habían sido concebidos. Esta redefinición del rol de los militares latinoamericanos se acompañaba además de un proyecto de desarrollo económico que la presidencia de Kennedy lanzó con el rótulo de Alianza para el Progreso. Detrás, por supuesto, se erguían los intereses de las grandes compañías transnacionales ansiosas de conquistar la plaza sudamericana para sus productos e inversiones, pero una mirada atenta sobre la máscara tras la cual se presentaban podía leer la intención de combatir la pobreza y el subdesarrollo como medida de profilaxis contra el conflicto social y el siempre latente fantasma rojo de la revolución. En otras palabras, la conjunción entre la Doctrina de la Seguridad Nacional y la Alianza para el Progreso parecía revivir aquella divisa comteana de “orden y progreso”, subsumiendo, claro está, el segundo al primero en jerarquía de importancia. La figura de Onganía aparecía entonces como la única capaz de condensar esos dos elementos, seguridad y desarrollo, e instrumentarlos desde el aparato del Estado. Como contraparte, Illia era condenado por carecer —según se decía— de las virtudes que la urgencia de la hora requería, cualidades que Onganía parecía personificar en sí mismo.

2.2 La alianza golpista: el nuevo bloque de poder

Consumado el asalto al poder el 28 de junio de 1966, el otrora líder de la facción azul llegaba al poder con el apoyo de una amplia capa de la sociedad civil; con el sustento de la cúpula de la Iglesia católica, siempre dispuesta a

21 Juan Carlos Onganía había encabezado la fracción azul del ejército, en los enfrentamientos entre azules y colorados de septiembre de 1962 y abril de 1963. A partir de allí, durante el gobierno de Illia, ocuparía la jefatura del ejército, hasta su reemplazo por el General Pistarini en 1965. El triunfo militar de los azules haría crecer su figura no solamente dentro del ejército, sino también como una posible pieza de recambio favorable al *establishment*.

negociar una cuota de poder con la institución militar²²; con el aval de la central obrera –fundamentalmente del vanderismo, quien al perder su pulseada con Perón apostaba a una alianza con los militares para impedir que el viejo caudillo pudiera hacerse con el control pleno del movimiento– y aun con el apoyo político del propio Perón, quien desde el exilio saludó con buenos augurios la asunción del gobierno militar y no podía evitar regocijarse ante la idea de que el peronismo no fuera ya el único partido proscrito, sino uno más entre sus iguales²³.

Sin embargo, a pesar de las adhesiones que consiguió el movimiento de junio, es claro que ningún régimen se sustenta sólo con apoyos políticos, por fuertes que estos puedan parecer. Como centro de la coalición que apuntaló el golpe aparecía la fracción de la burguesía ligada al capital más concentrado de la economía y a los grandes capitales extranjeros, fundamentalmente estadounidenses. Quienes personificaron estos intereses fueron el ascendente grupo de los llamados “tecnócratas”, hombres letrados en la economía, adoctrinados por las “verdades indiscutidas” de la ortodoxa Escuela de Chicago, cultores de un liberalismo acérrimo y de las visiones monetaristas del ajuste y la disciplina fiscal. Para este sector, no sólo el progreso de una sociedad se medía a través de indicadores tan relativos y engañosos como la medición del PBI y el ingreso per cápita²⁴, sino que fundamentalmente consideraban cualquier tipo de conflicto social como disfuncional, y por lo tanto causa de la ineficiencia económica,

22 Se han señalado repetidas veces los vínculos de la Iglesia católica con las Fuerzas Armadas en la Argentina a partir de una serie de coincidencias estructurales, como su compartida noción de jerarquía y verticalidad, su cadena de mandos rígida y no democrática. Además, en la coyuntura histórica posterior a 1955 ambas instituciones compartían un acérrimo antiperonismo. La Iglesia católica fue un sustento clave del régimen instaurado el 28 de junio de 1966, el cual se reconoció rápidamente como portavoz del integrismo y de la “moral” y el estilo de vida occidental y cristiano. Véase para estos temas la obra de Loris Zannatta, *Del Estado Liberal a la nación católica. Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo, 1930-1943*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.

23 La diferencia que posicionaba al peronismo en clara ventaja con respecto al resto de los partidos era sin duda ese carácter bifronte del sindicalismo que ha señalado con justeza Daniel James en *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina. 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1988, el cual colocaba al movimiento obrero organizado no sólo como representante de los trabajadores sino como cara política de un peronismo forzado a jugar desde la clandestinidad desde 1955.

24 Por ejemplo el Ingreso per cápita, al tomar en consideración sólo los valores promedio de los ingresos anuales de la población, omite la cuestión fundamental de la distribución interna de la riqueza de un país.

elemento a erradicar a como diere lugar. Más adelante retomaremos en detalle el proyecto económico del cual la tecnocracia fue sólo su portavoz. Simplemente señalamos aquí la importancia de la clase social de la cual este sector actuó como vocero, lo cual nos permite ahora indagar un poco más en profundidad sobre los móviles específicos del golpe, y principalmente sobre la vinculación entre la dinámica política de la sociedad y su estructura de clases.

2.3 El golpe de 1966: una mirada de largo plazo

La premisa de la cual partimos para rastrear las tendencias históricas que signan de alguna manera el derrotero de la institucionalidad argentina, es la imposibilidad de pensar la coyuntura política aislada de cualquier determinación de tipo clasista. En este sentido, pensamos que definir los intereses de las clases sociales —tanto de burguesía y proletariado, como de las distintas fracciones de la burguesía— enfrentadas en el marco del sistema capitalista nos permitirá entrever las relaciones entre los sujetos y la estructura económica y material, la que en última instancia nos guiará hacia las claves para desentrañar la naturaleza del golpe de Estado de 1966. Para esto es necesario abandonar momentáneamente los acontecimientos inmediatos de aquella jornada de junio y adentrarnos en una mirada histórica en busca de las tendencias de la estructura económica argentina anterior a 1966.

El modelo de acumulación basado fundamentalmente en la industrialización por sustitución de importaciones había comenzado a mostrar sus límites ya durante el primer gobierno peronista. A la crisis del año 1949 siguió una reformulación de las políticas económicas que intentaron dar respuesta al estrangulamiento de divisas y el consecuente déficit en las cuentas fiscales y en la balanza de pagos. A estos males contribuía un sector agropecuario relativamente atrasado, organizado en torno de un régimen de latifundio con escasas inversiones en capital fijo y maquinaria, incapaz de generar las divisas que el sector industrial requería para continuar funcionando. El modelo de industrialización liviano no integrado, basado en la producción de bienes de consumo e intermedios requería de periódicas y continuas importaciones de insumos y tecnología. Además, el aumento de los salarios de los sectores populares y de la clase media —como consecuencia por un lado de las políticas que se alentaban desde el Ministerio de Trabajo, pero también y fundamentalmente como producto de una economía recalentada que funcionaba con tasas de desempleo cercanas a cero— restringía sustancialmente los saldos exportables, ya que el aumento de los salarios se volcaba en un crecimiento de la demanda de bienes de consumo

procedentes de la producción agropecuaria —carne y trigo—, principales rubros de exportación. De esta manera, las divisas que el agro generaba tendían a decrecer mientras que los requerimientos de la industria iban en aumento.

Ya el segundo plan quinquenal de Perón previsto para el año 52 y lanzado finalmente en 1953 intentó dar solución a este círculo vicioso conocido en economía como de *stop and go*. La intención fue profundizar la integración del sector industrial para completar el proceso de tecnificación y producción de bienes de capital. La industria pesada y el desarrollo de tecnología cortaría los lazos de dependencia del sistema industrial con respecto a las importaciones. En forma paralela, la “vuelta al campo” del segundo gobierno de Perón buscaba mejorar la capacidad exportadora para generar las divisas necesarias que el nuevo esquema de producción requería. Para lograr estos objetivos se implementaría por un lado un incentivo a la radicación de capitales extranjeros, pero por otra parte se intentaría imponer un plan de austeridad en el cual se recortaría el consumo de los sectores obreros y se incentivaría además el aumento de la productividad de los mismos en el mundo fabril.

De más está decir que Perón no llegó a concretar este proyecto. Sin embargo, lo que nos interesa señalar aquí más que la dificultad de llevar adelante este plan a causa de la interrupción de su gobierno, es la propia contradicción generada en la alianza de clases que sustentaba al gobierno desde 1946. El régimen peronista se encontraba ante la imposibilidad de impulsar un proyecto económico que impactara directamente en su principal base de sustento político —obviamente la clase obrera— quienes por su parte, y como lo demostraron al no acatar los acuerdos firmados en la mesa de negociación durante el Congreso de la Productividad de 1955, se mostraban dispuestos a defender sus conquistas históricas aun frente a quien parecía ser su interlocutor más respetado en el gobierno. Perón no podía, aunque se lo propusiera, limar los pilares sobre los cuales descansaba su fortaleza, y esto era la alianza con los trabajadores y con el aparato sindical representado en la CGT. Hacerlo hubiera significado un deterioro de la alianza de la que no habría retorno; no hacerlo, terminaba de enfrentar al peronismo con los sectores de la burguesía más concentrada y con la fracción terrateniente de esa clase social. Esta imposibilidad de reconversión ubicaba al gobierno de Perón en un callejón en el cual ambas salidas parecían cerrarse. Paradójicamente, el viejo discurso peronista de ponerse por encima del conflicto de clases se materializaba en su faceta opuesta; la lucha entre burguesía y clase obrera se llevaba consigo a un gobierno que, al menos por un momento, había torcido la balanza en favor de los olvidados.

Años más tarde, similar intento económico se planteó el gobierno de Arturo Frondizi. Como sostiene el historiador británico Daniel James, los lineamientos del desarrollismo encuentran sin duda sus antecedentes en las proyecciones del

segundo plan quinquenal de 1953²⁵. Nuevamente la tecnología de punta, la industria pesada y el incentivo para atraer capitales aparecían como las prioridades del momento. Sin embargo, este segundo impulso también encontró límites muy precisos a la hora de su aplicación concreta. El gobierno de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente), si bien sentó un punto de no retorno en el modelo de desarrollo industrial a partir de la llegada de capitales internacionales que se instalaron en los sectores estratégicos de la economía, terminó jaqueado por todos los frentes y encontró su final en marzo del 62 luego de un nuevo golpe de Estado militar.

Y aquí se pone de relieve un elemento clave para entender la dinámica de los años que van entre 1955 y 1976, y es la lucha dentro de la propia clase burguesa. La facción “colorada” de las Fuerzas Armadas, ligada históricamente a los intereses liberales más ortodoxos de la vieja y siempre presente burguesía terrateniente, fue la que apoyó el derrocamiento de Frondizi en un último intento de revivir el ya fenecido modelo de expansión vinculado al desarrollo del campo y la apertura económica. El arribo del “elenco estable” encabezado por el viejo anfitrión del Ministerio de Economía, Federico Pinedo, parecía anunciar una vez más que la profundización de la industrialización y el desarrollo autosustentado tendrían que seguir esperando mejores condiciones políticas, mientras que la anacrónica “rueda maestra” comenzaba a girar nuevamente en la Argentina de los sesenta²⁶.

En el camino que trazamos hasta aquí, aunque no vinculado directamente con el derrotero de la estructura económica, resulta de vital importancia mencionar las jornadas de lucha facciosa entre azules y colorados de septiembre del 62 y abril del 63. La victoria del sector azul, aliado de la fracción burguesa de corte más “desarrollista”, sienta el precedente necesario que comienza a limpiar de obstáculos el camino hacia la implementación de su postergado proyecto económico. Junio del 66 aparece, desde esta perspectiva de largo plazo, como la instrumentación por la fuerza del giro en el modelo de acumulación que varias veces había encontrado límites tanto en la dinámica de la lucha entre capital y trabajo, como en el enfrentamiento entre los intereses cruzados de las distintas fracciones de la clase dominante. Las Fuerzas Armadas devienen entonces instrumento de la burguesía monopólica ligada al capital transnacional y llevan a cabo las tareas necesarias para allanar el camino a la introducción de modificaciones estructurales en la economía argentina. El juego de la democracia bur-

25 Daniel James: *op. cit.*, p. 154.

26 La mención a la “rueda maestra” hace referencia a un viejo discurso de los años cuarenta donde el entonces ministro de Economía Federico Pinedo sostenía que la rueda maestra de Argentina era y debía ser la producción agropecuaria destinada a la exportación.

guesa muestra así su verdadera faceta, la de permitir la deliberación –acotada– y la continuidad institucional en tanto no sean afectados los intereses de la clase dominante. En la coyuntura del año 66, y tras los fallidos intentos de instrumentar esos intereses a través de los mecanismos previstos por la Constitución, sonaba una vez más “la hora de la espada”.

Es necesario aclarar algunos puntos. Sostener que las Fuerzas Armadas son funcionales no impide analizar la dinámica propia que esa corporación tiene como instancia independiente²⁷. Sin embargo, para los fines que nos hemos trazado, esto es, intentar encontrar una explicación histórica de la naturaleza del golpe de Estado de 1966, nos hacemos eco de la afirmación de Marx cuando sostiene que es en la acción de los sujetos políticos antes que en su discurso, en donde debemos indagar para desentrañar los intereses que los motivan. De esta manera, es altamente probable que la propia institución militar no se haya visto a sí misma como portavoz de otro sector, sino que estuvieran en juego otras cuestiones como las que mencionamos cuando nos referimos a los puntos de tensión inmediatos al derrocamiento de Arturo Illia. Pero más allá de la conciencia declarada, o los motivos aducidos por Onganía y el elenco que asumió los distintos cargos en el gobierno, los intereses que se protegieron y se intentaron desplegar desde la autodenominada “Revolución Argentina” no fueron otros que los intereses *de clase* de la burguesía industrial monopólica. En este sentido resulta sugerente la hipótesis del sociólogo francés Alain Rouquié acerca del “partido militar”. El autor señala que en un escenario en el cual la clase dominante se ve imposibilitada de conformar un partido de masas –similar al radicalismo o al justicialismo– pero de corte y tendencias conservadoras, capaz de conquistar al electorado en sufragio abierto, ocurre que esa clase logra *dominar* en el plano económico pero sin la posibilidad de establecer una relación de *hegemonía* con el resto de la sociedad. Ante esta falencia, esa clase social recurre periódicamente a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo del gobierno en forma directa, sin intermediarios con quien deba compartir el poder político²⁸. ¿Es “funcionalidad” el concepto adecuado? Tal vez no estrictamente, o cuando menos no lo es en forma mecánica, pero insistimos: lo que nos interesa subrayar es que los militares, a través de la toma del poder político, desarrollaron un proyecto económico y social absolutamente proclive a satisfacer los intereses de la burguesía industrial ligada al capital transnacional.

27 Dicho análisis es el que realiza Guillermo O'Donnell en “Modernización y golpes militares”, *op. cit.*

28 Alain Rouquié: “Hegemonía militar, Estado y dominación social”, en Alain Rouquié (comp.), *Argentina, hoy*, México, Siglo XXI, 1982. Véase también Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, 2 vols., Buenos Aires, Emecé, 1982.

Decimos entonces que el rol que le tocó en gracia a las Fuerzas Armadas fue el de *pretor* (guardián) de la burguesía industrial, tanto en lo que respecta a la represión de la clase obrera, a los conflictos sociales que generaría necesariamente la implementación del plan Krieger Vasena —el ministro de economía estrella de la dictadura de junio—, como también, y fundamentalmente, con respecto a las otras fracciones de la burguesía. Por lo tanto, plantear que existe una esfera de acción autónoma en términos absolutos por encima de la estructura de clases de la sociedad es desconocer las tendencias de largo plazo y la lógica intrínseca que mueve a los actores. De este modo, y como hemos afirmado anteriormente, si pensamos que la acción de los sujetos se encuentra enmarcada, en principio, por las posibilidades que plantea la estructura económica —y por ende, de clases—, el golpe de Estado de 1966, más allá de sus ribetes coyunturales, se inscribe sin duda en esa dinámica.

3. El plan de la dictadura

Sin metas temporales definidas en cuanto a la duración de la intervención directa de los militares, el movimiento de junio se planteó sí un cronograma de acción delimitado en tres tiempos. El primero de ellos hacía referencia al “tiempo económico”, en el cual se llevaría adelante el programa de reformas ya mencionado, y que tenía como objetivo, como ya indicamos antes, reformular profundamente el modelo de acumulación de capital. El segundo era aquel proclamado como el “tiempo social”, en el cual de acuerdo con los gurúes de la tecnocracia y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, los beneficios del crecimiento industrial se expandirían en una suerte de derrame hacia el resto de la sociedad. Es decir, se sostenía mediante un eufemismo poco convincente que para que las necesidades del común del pueblo pudieran satisfacerse, primero debían satisfacerse estratégicamente los intereses de la burguesía. Por último, el gobierno militar anunciaba en algún futuro no cercano ni tampoco preciso la llegada del tercer tiempo, el “tiempo político”, en el que la sociedad, una vez reestructurada de raíz, podría volver a tomar en sus manos la responsabilidad de las decisiones a través del mecanismo de la democracia.

3.1 El plan económico

De este modo, y para llevar a la práctica el primero de los “tiempos”, la Revolución Argentina actuó rápido y en forma contundente. El plan económico de Krieger Vasena —la cara más visible del sector tecnocrático al que

antes aludimos— pretendía incentivar la modernización a través de la racionalización tomando como punto de partida, como vimos, la base que había establecido el primer intento desarrollista de Frondizi. Se buscaba que Argentina se abriera al mercado mundial como exportadora de productos manufacturados mediante la profundización de la industria.

El segundo pilar del plan, ligado estrechamente al anterior, proponía de acuerdo con las recetas del sector tecnocrático, erradicar los sectores de la economía considerados irracionales e improductivos, lo cual llevaría indefectiblemente al cierre de los pequeños y medianos emprendimientos, y a la concentración en manos de las empresas de capital intensivo vinculadas a los intereses extranjeros²⁹. Como muestra de fuerza, en marzo de 1967 una nueva ley daba por tierra con aquellas restricciones que Illia había intentado imponer a las compañías extranjeras de hidrocarburos, y se establecían beneficios para las empresas estadounidenses, cerrándose así un capítulo que había estado en el ojo de la tormenta desde los años de Hipólito Yrigoyen.

Los mecanismos para llevar adelante las tareas propuestas por el postergado proyecto de desarrollo industrial se basaron en una fuerte devaluación del 40 por ciento de la moneda nacional, con miras a frenar la inflación de modo de favorecer las condiciones de previsibilidad para los inversores. A diferencia de los viejos planes de estabilización en los cuales se buscaba enfriar la economía —es decir, detener de algún modo el crecimiento económico industrial para beneficiar al sector agroexportador—, esta vez se buscaba mantener el nivel de actividad evitando una transferencia de ingresos de la industria hacia el agro³⁰. Para lograr esto, en forma conjunta con la devaluación se establecieron retenciones a las exportaciones de igual magnitud que la depreciación del peso. Lo que se buscaba era que los sectores terratenientes exportadores no se vieran beneficiados especialmente por el nuevo tipo de cambio, sino que sería el Estado, a través de esas retenciones quien aumentaría sustancialmente su recaudación. El destino de esa masa

29 Daniel James, *op. cit.*, pp. 290-291.

30 Se invertía el sentido del plan económico de Federico Pinedo desarrollado en el último golpe militar de marzo de 1962. En esa ocasión, Pinedo llevó adelante una devaluación de la moneda sin ningún tipo de compensación hacia los sectores industriales, lo cual beneficiaba a los sectores exportadores de la burguesía terrateniente, dado que los mismos percibían sus ganancias en divisa extranjera a través de la venta en el mercado internacional, pero mantenían sus gastos de inversión y salarios en un peso bruscamente devaluado. Así, a lo largo de la historia argentina, el manejo de la política cambiaria se constituyó en el mecanismo por excelencia para realizar transferencias entre sectores de la economía.

dineraria sería el de invertir en la infraestructura necesaria para que el desarrollo industrial no encontrara obstáculos³¹. De este modo, el Estado cargaba sobre los hombros de la sociedad civil el gasto oneroso de las obras necesarias para el gran capital y que las empresas privadas encontraban de rentabilidad dudosa como para embarcarse en la aventura de desarrollarlas por ellas mismas. Por otra parte, las obras no estuvieron en su totalidad en las manos del sector público, sino que comenzó a generarse un mecanismo de contrataciones y adjudicaciones de obras a empresas vinculadas estrechamente con los personeros de la tecnocracia y aún de las mismas Fuerzas Armadas, algunos de cuyos miembros pasaron a formar parte del directorio de esas mismas empresas. De más está aclarar que los sobrepagos que el Estado pagó constituyeron jugosos negocios de dudosa legalidad.

En este sentido, y más allá de los turbios manejos de los fondos públicos, es interesante resaltar la lógica estructural que inauguraba el gobierno de Onganía con respecto al Estado, ya que desde nuestra perspectiva, si bien el Estado de una sociedad capitalista es siempre garante de los intereses de la burguesía aunque más no sea en el largo plazo, en este caso la relación de fuerzas establecida por la embestida militar como punta de lanza de la clase dominante en el plano económico rompía definitivamente el “empate” y tornaba a este Estado instrumento directo de la fracción transnacional del capital.

En el campo laboral, al tiempo que se deprimía marcadamente el nivel de los salarios reales, se suspendían por dos años las prerrogativas de los sindicatos de negociar en convención colectiva tripartita —obreros, empresarios y Estado— sus convenios de trabajo. Por otra parte, la introducción de tecnología de punta en las plantas de producción intensificaba por un lado las jornadas de trabajo a la vez que dejaba cesante a buena parte de la mano de obra que no lograba subir al nuevo tren del progreso.

En esta misma dinámica, la clase obrera era no sólo relegada sino reprimida con ferocidad a la hora de imponer ajustes estructurales. Así, si en las plantas fabriles consideradas de punta, la consigna era incrementar la productividad del trabajo en detrimento de las condiciones laborales conseguidas mediante años de lucha de los trabajadores en aquellos sectores —entendidos desde la óptica del capital— ineficientes o atrasados, el destino era el cierre o, con

31 De este período datan, por ejemplo, las faraónicas obras de la represa hidroeléctrica del Chocón en la provincia de Neuquén, el túnel subfluvial que une la ciudad de Santa Fe con su vecina Paraná, o la inauguración del complejo Zárate Brazo Largo que atraviesa el río Paraná.

amarga suerte, la absorción por parte de empresas transnacionales con claras tendencias monopolistas³². La nueva lógica de acumulación sustentada en la introducción de tecnología con miras a incrementar la productividad tenía su explicación en que la explotación del trabajo comenzaba a centrarse cada vez más en la extracción de “plusvalía relativa”. A diferencia de un aumento en la “plusvalía absoluta”, que supondría extender las jornadas laborales, lo que se buscaba ahora era abaratar el costo de reproducción de la fuerza de trabajo disminuyendo la cantidad de tiempo invertido en la confección de las mercancías. Así, en una misma jornada de trabajo, los ritmos de intensidad de la producción debían incrementarse de modo que el obrero lograra producir más pero en igual cantidad de tiempo.

Entre las medidas más resonantes adoptadas con respecto al mundo del trabajo y con miras a disciplinar a la mano de obra, estuvo la ya mencionada suspensión de los convenios colectivos de trabajo por dos años, y un congelamiento en el nivel de los salarios, los cuales se habían visto afectados severamente por la devaluación de la moneda. Ante el ataque directo a los trabajadores, la CGT vandonista, que poco tiempo atrás había saludado el golpe de Estado, cargó contra el gobierno decretando una serie de medidas de fuerza. La respuesta de Onganía no se hizo esperar. La central obrera fue intervenida y las huelgas fueron reprimidas con ferocidad, con lo cual para el año 67 la CGT capitulaba ante los embates del poder político y entraba en un estado de congelamiento de sus acciones que duraría hasta que el bloque hegemónico que los militares habían establecido comenzara a resquebrajarse por otros costados.

3.2 La reestructuración de la sociedad en su conjunto

En este panorama, si bien la represión a las huelgas y a los movimientos de descontento que protagonizaban los directamente perjudicados por el sistema económico y político fue la piedra angular del accionar del gobierno, no obstante este aspecto no constituyó la totalidad del régimen dictatorial. Efectivamente el “onganiato” no se limitó a utilizar al Estado para imponer las condiciones de

32 En este segundo grupo de ramas de actividad podríamos mencionar el destino de los ingenios azucareros del Tucumán, cuyos cierres determinaron niveles de desocupación y pobreza que nunca más, hasta el día de hoy, lograrían superarse, así como la clausura de diversos ramales del ferrocarril, condenando al olvido y a la desaparición a las economías de innumerables localidades cuya actividad se sostenía exclusivamente por su cercanía a las vías.

orden con miras a asegurar la rentabilidad del capital sino que se propuso también, de acuerdo a la Doctrina de Seguridad Nacional, “depurar” la sociedad y extirpar los nichos donde se incubaba la “subversión”. En este camino, se decidió por intervenir las universidades nacionales y provinciales, consideradas semillero del marxismo internacionalista y lugares donde el “exceso de pensamiento”³³ podía hacer peligrar la misión encomendada a la Revolución Argentina, terminando —una vez más— con la autonomía de las instituciones de educación superior. Tristemente célebre es el episodio del 29 de julio de 1966 en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, donde a la resistencia del cuerpo de profesores y de alumnos con motivo del desalojo, siguió una jornada represiva conocida como “la noche de los bastones largos”, símbolo de la barbarie ignorante de los detentadores del poder, y generadora además de una masiva “fuga de cerebros” del país —entre ellos el futuro premio Nobel de medicina Dr. César Milstein—, la cual, como sabemos, tampoco se detendría.

Por último, también se intentó modificar las pautas de conducta de la sociedad en su conjunto, combatiendo todas las actitudes que eran juzgadas como indecorosas y que no encajaban en el estilo de vida “occidental y cristiano”. Una campaña moralista abarcó diversos ámbitos, desde la ley de censura a los medios de comunicación y a la cinematografía, hasta las *razzías* callejeras cotidianas en las cuales se detenía a personas de actitud tan sospechosa como la de lucir el pelo más largo de lo que el pudor y las buenas costumbres aconsejaban, hasta las famosas incursiones a los hoteles alojamiento del comisario de la policía Luis Margaride, en busca de delincuentes de la talla de aquellos que habían decidido incurrir en la flagrante ilegalidad extramatrimonial.

Segunda parte: las tensiones

4. Contradicciones del régimen

Pese a la apariencia de solidez de la Revolución Argentina en todos sus aspectos, y no obstante la sistematicidad con que se habían planeado los tres tiempos —eje del proceso de reconstrucción del país— ninguno de ellos llegaría a cumplirse de acuerdo con lo estipulado. Si el tiempo económico encontraría rápidamente sus propias limitaciones, nadie creería seriamente que el tiempo social había sido previsto como realmente posible. En cuanto a la apertura política, la

33 Esta frase se haría famosa años más tarde, al ser acuñada por el ministro de Bienestar Social de la dictadura de Jorge Rafael Videla, refiriéndose a la juventud.

cerrazón del régimen y la creciente personalización en la figura de Juan Carlos Onganía hacían dudar de su posible concreción, y colocaban además al líder del golpe ante una mirada de disgusto dirigida incluso por parte de aquellos que integraban la propia coalición gobernante. No por vocación democrática, sino por temor a verse opacado por el fruto de su propia invención, el general Alejandro Agustín Lanusse³⁴, quien detentaba el poder de la institución militar como cabeza superior del Ejército, comenzó a pensar en el modo de desplazar a Onganía del puesto de Presidente de la Nación.

En cuanto al proyecto económico, si bien éste avanzaría hasta un punto de no retorno, no conseguiría establecerse de manera definitiva. Su dinámica de funcionamiento incubaría sus propias contradicciones llevando en poco tiempo a una economía estancada y con los mismos problemas cíclicos de siempre. Resulta bastante obvio para el observador atento de esos años, como para nosotros hoy, que las empresas transnacionales no iban a reinvertir sus ganancias en el país sino que las repatriarían a sus casas matrices en el exterior. Sólo los gurús del mercado y los apologistas del sector monopolista del capital podían suponer que por el solo hecho de invitar a los inversores con tentadoras ofertas de orden social, los mismos iban a fortalecer la economía del país. Por el contrario, y como era de esperar, el drenaje de divisas en concepto de remesas, sumado al hecho de no fortalecer al sector exportador a causa de las retenciones que gravaban las actividades del campo, redundó en poco tiempo en el ya conocido estrangulamiento de la balanza de pagos.

En lo que respecta a la tensión con los trabajadores, la mencionada capitulación de la CGT frente al gobierno no llevaría a la inactividad de los obreros perjudicados por el sistema económico, sino que generaría una fractura en el movimiento constituyéndose una organización paralela de carácter combativo, conocida como la CGT de los Argentinos (CGTA), encabezada por el líder de los gráficos Raimundo Ongaro. Por otra parte, otras formas de lucha obrera comenzarían a desarrollarse en los años venideros, y cristalizarían en la experiencia del clasismo. Pero no nos adelantemos, ya que luego volveremos sobre estos nuevos actores sociales. Lo que nos interesa poner en relieve aquí es que la represión no sólo no había logrado contener la protesta y el conflicto laboral, sino que la misma, ante las respuestas abstrusas y obcecadas del gobierno, se radicalizaría en escala creciente.

En este sentido, y como corolario del proceso que se había abierto en 1966, el quiebre de la situación de empate y la imposición de una frac-

34 Alejandro Agustín Lanusse alcanzó la jefatura del Ejército a partir de octubre de 1968 tras el alejamiento de Julio Alsogaray, su predecesor en el cargo.

ción de la burguesía por sobre las otras, de ninguna manera ponía fin a los conflictos inherentes al capitalismo, sino que abrían la puerta de par en par a la condensación de la contradicción principal: la lucha de clases entre capital y trabajo, que en el período que comenzaba cobraría ribetes nunca vistos en la historia de Argentina hasta el momento. Así, el cierre de todos los canales de participación política, la intervención de las universidades y de los sindicatos, sumado a la feroz represión tanto en la vida laboral como en el ámbito de la cotidianidad, llevarían indefectiblemente a que una olla a presión sin válvulas de escape previstas y sin posibilidad de darle algún tipo de cauce al conflicto, tomara la forma de un frente opositor heterogéneo pero con un mismo interés, que se constituiría de manera inevitable en una bomba de tiempo. La cuenta regresiva del onganiato se había iniciado en el mismo momento de su llegada al poder, y esa bomba tendría su primer y estruendoso estallido en la ciudad de Córdoba el 29 de mayo de 1969. De allí en más, el gobierno de la Revolución Argentina comenzaría a fraguar su retirada.

4.1 El Cordobazo

4.1.1 Estructura social y antecedentes

La insurrección popular de la ciudad de Córdoba que pasará a la historia como el Cordobazo, ha generado una infinita cantidad de materiales e investigaciones que parten de la más variada gama de opiniones y polémicas sobre sus características³⁵. Aun así puede señalarse una amplia coincidencia en el planteo de que el Cordobazo implicó, en la historia de Argentina, una verdadera divisoria de aguas marcando claramente un antes y un después.

Una de las preguntas sin duda clave para comenzar a analizar el hecho es acerca de sus disparadores inmediatos, así como las causas de su estallido en la ciudad de Córdoba, antes que en otros lugares del país. De acuerdo a lo que hemos venido planteando hasta aquí, pensamos que un comienzo posible de respuesta

35 Entre la diversidad de polémicas que se han generado sobre el Cordobazo se pueden mencionar el debate acerca del carácter espontáneo u organizado de la jornada; la discusión acerca de si en la conciencia de los actores primaron factores económicos reivindicativos, o más directamente políticos; sobre su carácter de hecho excepcional o no; acerca del papel que jugaron en su concreción los trabajadores industriales y un largo etcétera. Para una bibliografía parcial pero demostrativa de esta multiplicidad de enfoques, véase la bibliografía al final del texto.

debería partir del análisis de la estructura económica y social de esta provincia, estructura sujeta a grandes cambios a partir de la década del cincuenta. Ya desde el segundo gobierno peronista, Córdoba había ido mutando su paisaje de provincia agrícola y de centro administrativo por un perfil decididamente industrial. Desde esa época el gobierno había desarrollado en los alrededores de la capital provincial un complejo industrial, posteriormente denominado IME (Industrias Mecánicas del Estado), especializado en la fabricación de motores para la Fuerza Aérea, vehículos de uso militar y motocicletas, como la conocida Puma. Esta transformación generó por supuesto una importante demanda de mano de obra industrial y de personal técnico calificado. La instalación de la Fiat italiana en 1954 y posteriormente la empresa automovilística Kaiser³⁶ de origen norteamericano terminarían este proceso, modificando la estructura social de la región de manera definitiva.

De esta manera, aparecía un nuevo proletariado en la zona proveniente del interior de la provincia y de las alledañas, convocado por la posibilidad de conseguir trabajo en las grandes empresas y obtener salarios más altos en comparación con otros empleos. Para la década del sesenta, las empresas que se instalaban en el área se beneficiaban por tanto de la preexistencia de una mano de obra con importantes niveles de calificación. La provincia contaba además, desde los años del gobernador Amadeo Sabattini, con una decisiva infraestructura en la provisión de energía hidroeléctrica barata, además de ofrecer toda una gama de ventajas impositivas y de mecanismos proteccionistas garantizados no sólo por los gobiernos provinciales sino también por el nacional. A esto se agregaba que desde 1960, durante la presidencia de Frondizi, se había dado un aval a la estrategia empresarial de esas firmas de crear sindicatos por empresa quebrando el centralizado poder de los sindicatos únicos por industria, de modo de garantizarse direcciones sindicales fuertemente dóciles que ahorraran a las patronales cualquier posibilidad de conflictividad laboral. En ese camino la empresa Fiat sería pionera, consiguiendo durante el gobierno de Illia la personería gremial de los sindicatos de las plantas fabriles de Concord (Sitrac), el de Materfer (Sitram) y el de Grandes Motores Diesel (Sitragmd).

La provincia se transformaría así en el segundo centro industrial del país después de Buenos Aires, con una clase trabajadora altamente concentrada en las principales industrias y en los nuevos barrios obreros que surgían alrededor de las grandes empresas. Esta tardía y acelerada industrialización se estructuraba sin embargo en base a una modalidad parcial y deformada, dado que el predominio de las industrias mecánicas implicaba la existencia de un polo moderno

36 A partir de 1967 la mayoría del paquete accionario de las industrias Kaiser Argentina (IKA) fue adquirida por la empresa automotriz de origen francés Renault.

basado en capital intensivo pero no diversificado. A esto se sumaba que los apoyos estatales con los que contaba ese sector no serían extendidos a otras ramas de la industria, las que continuaron con formas mucho más atrasadas tanto en tecnología como en organización de la producción³⁷.

Junto al naciente proletariado “moderno” se encontraban por un lado un grupo de sindicatos de larga data, influenciados por el ala combativa del sindicalismo peronista y, por otro, un sindicato local del gremio de Luz y Fuerza, este último con características muy particulares. Tras la creación de la empresa provincial de energía EPEC (Empresa Pública de Energía de Córdoba) en 1948, había surgido una dirección del sindicato pluralista y claramente orientada hacia posiciones de izquierda. Su líder Agustín Tosco, un marxista independiente, llegaría a la secretaría general a la temprana edad de 27 años, y su figura alcanzaría proporciones de leyenda en la época. Tosco era el emergente más visible de un sindicato cuya excepcionalidad no sólo radicaba en su posición estratégica, dada su capacidad de paralizar la ciudad, sino fundamentalmente en las formas de organización a través de una impronta muy marcada de democracia de base. La misma se evidenciaba en la gran cantidad de delegados, a través del peso que éstos tenían en las decisiones del sindicato, en la práctica constante de asambleas de los trabajadores y en la obligación de sus dirigentes de retornar periódicamente a cumplir sus tareas laborales —empezando por el propio Tosco—, práctica que la burocracia sindical típicamente peronista había abandonado hacía ya largo tiempo³⁸.

La clase obrera cordobesa había alcanzado niveles importantes de organización y politización en los años previos al Cordobazo, aspecto que se demostraría relevante tanto en el levantamiento como en los años posteriores. A esa politización contribuía el menor peso político en la provincia de la burocracia sindical, hecho que algunos análisis atribuyen a que la tardía industrialización cordobesa habría impedido la consolidación de un aparato de control más fuerte en los gremios³⁹. Se agregaba además un clima laboral cultural donde los trabajadores de las grandes fábricas habían establecido entre ellos vínculos solidarios que excedían ampliamente a las plantas fabriles —entre otras cosas por la cercanía entre lugar de trabajo y vivienda—, lo que redundaba tanto en una mayor homogeneidad de clase como en una fuerte capacidad de influencia del proletariado sobre otros sectores sociales⁴⁰.

37 James Brennan: *El Cordobazo: las guerras obreras en Córdoba 1955-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, p. 59.

38 *Ibid.*, pp. 150-160.

39 James Petras: “Córdoba y la revolución socialista”, en Juan Carlos Cena (comp.), *El Cordobazo. Una rebelión popular*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2000, p. 255.

40 Daniel James, *op. cit.*, p. 302.

Junto a la clase trabajadora, era muy visible el peso social del movimiento estudiantil, conformado por jóvenes de Córdoba y de las provincias más cercanas en un número cercano a los treinta mil. Esa población juvenil convivía en su mayoría en el barrio Clínicas y compartían una serie de vivencias cotidianas que contribuía a darles una cultura común. Un elemento de homogeneización era sin duda el fuerte descontento con las políticas implementadas por la dictadura hacia la universidad que, en su faz represiva, ya habían provocado en septiembre de 1966 el asesinato del estudiante de ingeniería Santiago Pampillón. Este movimiento estudiantil fue estrechando lazos cada vez más acentuados con el movimiento obrero en los años anteriores al Cordobazo.

Sobre esa particular configuración social incidió una serie de acontecimientos locales y nacionales que contribuyeron a la insurrección de Mayo. La mecha había sido encendida por el gobierno al derogar el denominado “sábado inglés” (ley por la que una semana laboral de 44 horas tenía una paga para los trabajadores de 48 horas). Sumado a esto, la policía no iba a permitir la realización de una asamblea convocada por la delegación del SMATA de Córdoba (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) convocada para discutir los pasos a seguir ante la medida, asamblea que sería brutalmente reprimida. Paralelamente, gremios como la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) se encontraban involucrados en luchas alrededor de la problemática de las quitas zonales —leyes que permitían a ciertas empresas del interior del país pagar salarios más bajos que los de Buenos Aires a sus trabajadores— que, aunque habían sido derogadas recientemente por el Ministerio de Trabajo, continuaban siendo aplicadas con total impunidad por las empresas.

Menos inmediatamente visible, pero no menos sentido por los trabajadores, influía el esfuerzo persistente del capital por consolidar un régimen de acumulación basado en el incremento de la plusvalía relativa que, si bien era una ofensiva patronal de características nacionales, se expresaba con particular intensidad en las industrias de tecnología de punta en Córdoba. Allí las grandes empresas automotrices como IKA-Renault o Fiat se enfrentaban a una fuerte competencia por el mercado automotriz con otras firmas instaladas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires desde el gobierno de Frondizi, que las había llevado de tener un control casi absoluto del mercado a fines de los cincuenta, a una participación inferior al 40 por ciento para 1969. De esta manera el ataque patronal asumía un rostro aun más descarnado en Córdoba, dada la necesidad empresarial de redimensionar costos, lo que implicaba para los trabajadores un aumento de la velocidad de las líneas de montaje, presiones de todo tipo para aumentar la productividad y una jornada de trabajo, si no más larga, sí cada vez más intensa. El descontento que esta situación provocaba en los obreros de las grandes empresas es un factor subjetivo que puede rastrearse

en los actores del Cordobazo, pero que se expresaría sobre todo a partir de los acontecimientos posteriores.

Para agregar aun más temperatura a la conflictividad social, el gobernador de Córdoba Carlos Caballero, un connotado miembro de la vieja oligarquía cordobesa, había puesto en funcionamiento el denominado Consejo Consultivo Económico Social, con eje en la participación de las corporaciones provinciales, evidenciando el carácter filofascista del régimen, lo que aumentaba la irritación de los sectores populares y aun de los medios, cansados del autoritarismo dictatorial y molestos por el reciente aumento de los impuestos dispuesto por el gobernador. Además de los aspectos locales, en Córdoba se catalizaría una ola de conflictividad contra las políticas del onganiato de características nacionales. En ese sentido, como se ha señalado en otros trabajos sobre la cuestión⁴¹, el Cordobazo sería tanto culminación y síntesis de un proceso de luchas previas como punto de partida para el desarrollo de una radicalización social posterior.

Por último, y como antecedentes insoslayables, deben tenerse en cuenta algunos hechos puntuales como una seguidilla de asesinatos cometidos por las “fuerzas del orden” en los días previos al Cordobazo. Así, el 15 de mayo caía en Corrientes —a manos de la policía— el estudiante de medicina Juan José Cabral, en una movilización de protesta contra la privatización del comedor universitario de la Universidad Nacional del Nordeste, lo que había desencadenado una suba de más del 500 por ciento en sus precios. La ola represiva continuó con un nuevo asesinato en Rosario —el del estudiante de Económicas Ramón Bello— ante las marchas de repudio por la muerte de Cabral. El asesinato de Bello llevó nuevamente a una masiva movilización, donde otra vez el accionar represivo se cobró una nueva víctima, la del estudiante secundario Luis Norberto Blanco de 15 años de edad. En esta ocasión, la respuesta enfurecida de los manifestantes generó enfrentamientos que se prolongaron por horas en distintos puntos de la ciudad en los que las fuerzas de seguridad fueron desbordadas. En un verdadero antecedente de lo que sucedería en Córdoba, Rosario fue declarada zona de emergencia y las tropas del Segundo Cuerpo del Ejército ocuparon transitoriamente sus calles.

Sobre ese mapa de acontecimientos se trazarían entonces las líneas del Cordobazo.

4.1.2 Los hechos

En lo que constituía un acontecimiento inédito, tanto la CGTA como la CGT liderada por Vandor habían acordado una huelga general nacional para el 30 de mayo.

41 Mónica Gordillo: “Hacia el Cordobazo”, en Juan Carlos Cena (comp.), *op. cit.*, pp. 306-307.

Los líderes cordobeses de los dos encuadramientos sindicales no se limitaron a dar su apoyo a la medida, sino que extendían la misma por 24 horas, de manera que la protesta se iniciara el 29 de mayo y, a propuesta de Tosco, se transformara en un paro activo con abandono de tareas y movilización por el centro de la ciudad. Para garantizar la medida se integró a la organización a representantes del movimiento estudiantil y se planificó detalladamente tanto el recorrido de las diferentes columnas como la resistencia, si el gobierno intentaba disolver la manifestación.

El inicio de la jornada se tiñó rápidamente de sangre cuando la policía, intentando detener el avance de la columna de los trabajadores del SMATA, provocó la muerte del obrero Máximo Mena. La indignación por la represión comenzaba a transformar la movilización en un comienzo de insurrección. Los enfrentamientos se multiplicaban por todo el casco céntrico, y para el mediodía las hogueras se extendían por un radio de 150 cuadras mientras la policía, agotado el parque de municiones de balas de plomo y de gases lacrimógenos, iniciaba una apresurada retirada.

En el marco de la rebelión popular, donde ahora sí primaba la espontaneidad, los residentes del centro se unían a los manifestantes colaborando con todo tipo de elementos para garantizar las barricadas, mientras oficinas de empresas extranjeras como la Xerox y Citroën eran incendiadas. Pero en un hecho que dice mucho sobre el imaginario social y el tipo de sociedad de la época, prácticamente no se registraban hechos de saqueo y pillaje⁴².

Al caer la tarde, las tropas del Tercer Cuerpo del Ejército avanzaban sobre la ciudad de la que los manifestantes se habían adueñado, mientras el epicentro del conflicto se trasladaba del casco céntrico a los barrios periféricos, particularmente al Clínicas, donde los estudiantes se hacían fuertes. El general Sánchez Lahoz, comandante del Tercer Cuerpo, dijo días después en una analogía particularmente gráfica de la situación: “Me pareció ser jefe de un ejército británico durante las invasiones inglesas. La gente tiraba de todo desde sus balcones y azoteas”.⁴³

Los detenidos fueron juzgados por la justicia militar a través de un consejo de guerra especial que en sus condenas más emblemáticas condenaba a Tosco a ocho años y tres meses de prisión y a Elpidio Torres, secretario general del SMATA, a cuatro años y ocho meses de pena. Según cifras no oficiales, el Cordobazo culminaba, después de dos días, con más de sesenta muertos, centenares de heridos y alrededor de trescientos encarcelados.

42 Sobre este aspecto en particular del Cordobazo, véanse testimonios en Gordillo, *op. cit.*, p. 311.

43 Citado en Oscar Anzorena, *Tiempos de violencia y utopía*, Buenos Aires, Contrapunto, 1988, p. 68.

4.1.3 Consecuencias y derivaciones

Las implicancias de los acontecimientos fueron múltiples. En primer lugar, el mito de la “paz social” en la que los militares basaban la legitimidad de la Revolución Argentina, a partir del supuesto consenso pasivo de la mayoría de la población, se resquebrajaba en pedazos poco antes de cumplirse los tres años de su llegada al poder. De manera inmediata las repercusiones de la insurrección provocaban la renuncia del ministro de Economía Krieger Vasena y su reemplazo en la cartera por Dagnino Pastore. No obstante, el gobierno no pretendía modificar el rumbo de la política económica, aunque el mismo quedaba, luego de la insurrección, herido de muerte.

Por otro lado, el Cordobazo marcaba la masificación de una resistencia popular contra la dictadura que se alejaba de los canales institucionales para asumir niveles de violencia que comenzaban a gozar de una legitimidad creciente. En particular, la unión en las calles del movimiento obrero con la población estudiantil —que terminaba con un largo divorcio entre los dos sectores sociales— implicaba la posibilidad de una convergencia social que por su número, capacidad de movilización y potencialidad radical, aterrorizaba al poder militar y al establishment. A su vez la burocracia sindical quedaba claramente cuestionada en su política de contemporalización con el régimen mientras crecía un desafío, cada vez más evidente, a su capacidad de control sobre los trabajadores por un conjunto de experiencias sindicales que asumían nuevas metodologías y objetivos.

Por su parte, el aumento de la conflictividad social repercutía directamente sobre las Fuerzas Armadas, agudizando sus contradicciones internas. Las masivas movilizaciones profundizaban las tensiones entre un Onganía que seguiría actuando en los días venideros como si nada hubiera cambiado y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes se sentían los convidados de piedra a la hora de las decisiones clave del gobierno mientras pagaban el precio de asumir los costos políticos de la represión en las calles.

De manera aun más determinante, el Cordobazo abría una etapa donde un amplio espectro de nuevos actores sociales, que habían surgido lentamente en los años anteriores, encontraban amplias perspectivas de desarrollo. Crecientes sectores de la sociedad prestaban oídos más receptivos a las interpelaciones de dirigentes obreros antidictatoriales, antipatronales y antiburocráticos, organizaciones guerrilleras, curas tercermundistas, coordinadoras estudiantiles que no agotaban sus planteos en el enfrentamiento a la dictadura vigente sino que cuestionaban el capitalismo como sistema y se proponían, cada vez más explícitamente, construir una sociedad a la que comenzaban a definir como socialista. Si el onganiato se había propuesto finalizar con la crisis de dominación, el

Cordobazo era la prueba más contundente de que la misma se reabría en un grado de profundidad mucho mayor, desplegándose una situación de “crisis orgánica”. Evidentemente el Cordobazo señalaba un punto de inflexión no solamente en el derrotero de la Revolución Argentina, sino que el proceso que germinaba en el país comenzaba a mostrar que ya nada volvería a ser igual que antes.

4.2 La crisis orgánica y los nuevos actores sociales

Ya hemos señalado, cuando hablamos sobre la crisis de hegemonía⁴⁴, que la visión del mundo que sostienen las clases dominantes no puede imponerse a las clases subalternas solamente a través de la coerción. Para estabilizar su dominio deben jugar un rol de dirección intelectual y moral que permita “convencer” a la mayoría de la sociedad de que los valores e ideas funcionales a su reproducción como clase dominante son valores “beneficiosos” para el conjunto de la sociedad.

También hemos comentado que los distintos autores que han analizado el período que nos interesa, han acordado en que en la sociedad Argentina posterior a 1955 las clases dominantes se encontraban en una situación de incapacidad para recrear esas condiciones de dominio legítimo y consensual, lo cual nos permite hablar de crisis de dominación. Retomando nuevamente los argumentos de Portantiero, vimos que se llegaba a una situación donde los diferentes actores sociales eran capaces de vetar los proyectos antagónicos, pero sin contar con los recursos suficientes para imponer de manera perdurable los propios⁴⁵, configurándose una situación de empate fundamentalmente entre las distintas fracciones de la burguesía. Siguiendo ese análisis, si la Revolución Argentina llegaba para quebrar esa situación de paridad imponiendo la hegemonía de la fracción de la burguesía industrial más concentrada, por los diversos aspectos que reseñamos anteriormente y que se expresaron nítidamente en el Cordobazo, esos planes desembocaron en la reapertura de la crisis de hegemonía en su máximo nivel de intensidad, desplegándose una situación de “crisis orgánica”. Entendemos por tal un proceso donde las contradicciones sociales se han agudizado de tal manera que “la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es dirigente, sino sólo dominante, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual antes creían, etc. La crisis consiste

44 Al final del punto 1 de este trabajo.

45 Juan Carlos Portantiero: *op. cit.*, p. 84.

precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo...”⁴⁶ Esta crisis hegemónica se expresa en una “crisis de autoridad... o crisis del Estado en su conjunto”⁴⁷, donde el dominio es cuestionado en diversos planos por las clases subalternas y éstas comienzan a recorrer, aunque de manera embrionaria y contradictoria, un camino donde se esbozan al menos en potencia las líneas de un proyecto propio y ajeno a las estrategias y la primacía ideológica de quienes detentan el poder.

De esa manera, el campo más dinámico de la conflictividad deja de ser el plano de la lucha dentro de las clases dominantes —donde las clases subalternas asisten como espectadoras pasivas o sólo como apoyo a las fracciones burguesas en conflicto— para trasladarse a un enfrentamiento entre los dominados, que actúan con creciente autonomía, y los dominadores, que ven amenazada la totalidad del sistema de dominación que han construido.

A fines de los sesenta, la crisis de dominación de la burguesía argentina tenía su punto de partida en la convergencia de una diversidad de reclamos que, conjugados, marcaban un grado de desafío inédito al poder. Al viejo reclamo democrático de poner fin a la proscripción del peronismo y permitir el retorno de Perón al país se agregaban las demandas de amplios sectores sociales —particularmente intensas en los estratos medios— cansados del autoritarismo y que, desde la perspectiva de los trabajadores, se expresaba en sus luchas para enfrentar la ofensiva del capital en el nivel de las fábricas. Al ligarse a una situación de profundización de las contradicciones dentro de las clases dominantes y desarrollarse la acción de las clases populares a través de formas de acción no institucionales —y por lo tanto no reabsorbibles por el sistema de dominación vigente— que indicaban la búsqueda de un nuevo orden social, terminaba de esbozarse la crisis orgánica. Esta se potenciaba con la existencia de un Estado, que, al decir de Portantiero, se caracterizaba por su vulnerabilidad ante las demandas de las distintas coaliciones sociales dado que carecía estructuralmente de una organización burocrática con capacidad de generar un orden político estable, por lo que al sostenerse sólo en el autoritarismo, se vería desbordado por una sociedad civil fuertemente movilizad⁴⁸.

La crisis de dominación involucraba todos los planos de la realidad (político, social, cultural, económico) y era el trasfondo que facilitaba el desarrollo de los nuevos actores sociales impugnadores del orden establecido. Todas las estrategias que se

46 Antonio Gramsci: “Oleada de Materialismo y crisis de Autoridad”, en Mabel Thwaites Rey (*et alia*), *Gramsci Mirando al Sur*, s/d, p. 49.

47 *Ibid.*, p. 50.

48 Juan Carlos Portantiero: “Economía y Política en la crisis argentina: 1958-1973”, *Revista Mexicana de Sociología*, N° 2, 1977, p. 12.

desarrollarán en los años venideros tienen su fundamento último en su existencia y son tanto indicadores, causa y consecuencia de la crisis de dominación.

4.2.1 La rebelión obrera

La avalancha de desobediencia civil tuvo su epicentro en la aparición, como ya mencionamos, de un nuevo activismo sindical. Frecuentemente se ha analizado ese proceso separándolo básicamente en dos afluentes, en una visión que prioriza la diversidad de orígenes y las diferencias políticas por sobre las confluencias comunes. Así, se divide la actuación de la CGTA por un lado y la del denominado clasismo por el otro⁴⁹. A la central obrera nacida en 1968 se la muestra motorizada centralmente por aquellos sindicatos directamente afectados por la reestructuración económica diseñada por Krieger Vasena (ferrocarriles, empleados del Estado, gremios azucareros tucumanos, etc.), de tamaño más pequeño y provenientes de ramas de la producción cuya organización se caracterizaba por ser más “atrasada” que las industrias de punta. Se señala además la existencia de un hiato cronológico entre las dos expresiones de la resistencia obrera dado que la CGTA tiene su período de auge entre 1968 y 1969, mientras que el clasismo se expande fuertemente a partir del Cordobazo, teniendo su centro de desarrollo en el interior del país y particularmente en Córdoba.

En el segundo caso se analiza su nacimiento como un proceso surgido en el seno de las modernas plantas industriales instaladas en el país desde la década del cincuenta. La preocupación principal que motoriza las luchas del clasismo no es esencialmente la marginación, la desocupación o el conflicto salarial, sino que se encuentra en la pelea por modificar las condiciones del trabajo dentro de las fábricas. Como vimos, el origen de esta problemática se debe al desafío que el capital les plantea a los trabajadores al presionar por aumentar la productividad y los ritmos del trabajo para modificar el modelo de acumulación. Por eso, la prédica gremial del clasismo se orienta hacia los ritmos de producción, la insalubridad de ciertas tareas, las clasificaciones y categorías de los obreros, en esencia a disputarle al capital el escenario del control de la planta fabril.

Si esta clasificación en dos vertientes de la resistencia obrera se basa en señalar diferencias importantes que hacen necesaria su particularización, no es menos cierto que es necesario marcar las interrelaciones existentes para acercarnos al grado de complejidad de ese proceso social tan rico y matizado. Un ejemplo de

49 Juan Carlos Torre: *Los sindicatos en el gobierno. 1973-1976*, Buenos Aires, CEAL, 1989, pp. 40, 113 y 114.

lo que afirmamos lo ofrece el Sindicato de Luz y Fuerza cordobés liderado por Agustín Tosco. Si por prácticas y discurso se lo debe filiar, con poco lugar a dudas, en la corriente clasista, no por ello puede olvidarse el rol decisivo que jugó en la consolidación de la CGTA ni las relaciones tensas que mantuvo, en ciertas coyunturas, con sindicatos típicamente clasistas como el Sitrac-Sitram. Es útil indicar a su vez que grupos de militantes de la izquierda peronista, de peso indudable en la CGTA, tendrían poco tiempo más tarde un papel determinante en la organización del Peronismo de Base, agrupamiento que manteniendo su identidad peronista, puede ser, en razón de su discurso y sus prácticas, perfectamente asimilable al clasismo⁵⁰.

Estos señalamientos nos hablan de un cruce de experiencias cuya profundización como campo de estudio aún está pendiente. Precisemos finalmente que no es tan clara la separación mecánica que se traza –y de la que análisis sobre la CGTA como el que reseñamos parten de manera explícita o implícita– entre la mayor o menor combatividad de los sindicatos de orientación peronista a partir de una línea que filia posturas más conciliadoras a sindicatos de sectores más desarrollados y de mejores salarios por un lado, y de mayor intransigencia a los de sectores mas “atrasados” y con sueldos más bajos por otro. Como ha señalado Daniel James,⁵¹ esa división no necesariamente guarda relación con la experiencia empírica y omite la importancia de factores políticos en las posturas públicas de mayor o menor confrontación que asumían los sindicatos liderados por dirigentes peronistas.

Puntualizados estos aspectos, veamos la trayectoria de ambas vertientes. En el caso de la CGTA, es difícil imaginarse buena parte de los acontecimientos posteriores a 1968 sin su labor contestataria y su influencia ideológica. La nueva central desarrollará su accionar en un contexto de debilidad del movimiento obrero y de fortaleza de la dictadura, por lo que su rebelión ayudará a galvanizar el espíritu de lucha de sectores de la población justo en el momento en que el proyecto gubernamental aparecía como indetenible y se esparcía un sentimiento de desaliento en buena parte del activismo político-social. Su existencia dejará una herencia decisiva porque “señaló el renacimiento de dos reconciliaciones importantes y estrechamente vinculadas, la primera entre la clase obrera y la izquierda y la segunda entre la clase obrera y el movimiento estudiantil”⁵². Si su trayectoria se tornó efímera se debe, en nuestra opinión, fundamentalmente a dos factores. El primero fue indudablemente el rol de Perón. En la

50 James Brennan: *op. cit.*, p. 350.

51 Daniel James: “La izquierda peronista (1955-75)”, mimeo.

52 James Brennan: *op. cit.*, p. 164.

medida en que la preocupación principal del general exiliado pasaba, a principios de 1968, por contrarrestar el peso del vanderismo en el movimiento obrero, esa actitud lo llevó a alentar el surgimiento del ala sindical disidente. Para eso recibió a Ongaro en Madrid, envió cartas a Argentina alabando al dirigente gráfico y llamó a la disolución de las 62 organizaciones —el brazo político de los gremios peronistas— hegemónicas por Vandor. Cuando desde su perspectiva la situación política se modificó y juzgó el ascenso de la CGTA como políticamente incontrolable, tendió puentes con Vandor abogando desde España por la unificación del gremialismo en una única central obrera, terminando por desautorizar a la central combativa hasta ordenar su disolución y la reunificación en la CGT. Estos virajes tácticos no eran nuevos en Perón. Cada vez que surgía un sector que podía disputarle la dirección del movimiento, el líder recurría a los grupos más intransigentes del peronismo para dejarlos de lado una vez que el peligro había pasado y necesitaba asumir un rostro más conciliador con los factores de poder⁵³. Lo cierto es que la obediencia irrestricta de muchos sindicalistas combativos a las órdenes de Perón —aunque otros desobedecieron su llamado— debilitó a la CGTA limitando sus posibilidades de crecimiento.

El segundo factor que llevó a la desaparición de la central fue la intensidad de la represión estatal que, paralelamente, marcaba los límites estructurales que tenía el ensayo de confrontar abiertamente con el Estado desde estructuras sindicales, en un país donde las prerrogativas de injerencia del poder estatal en los gremios era decisivamente alta. Una coyuntura determinada le dio la posibilidad al gobierno de lanzar el ataque final contra la central rebelde: el asesinato de Vandor el 30 de junio de 1969 en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica. Los ejecutores —cuya procedencia recién se conocerá años más tarde— formaban parte de una organización de la izquierda peronista que finalmente confluía en “Descamisados”. Siempre quedará una franja de oscuridad sobre el grado de conocimiento y aval que Perón tuvo sobre el hecho. Lo cierto es que Onganía aprovechó la ocasión para decretar el Estado de sitio, intervenir los sindicatos ligados a la CGTA, ilegalizar de manera definitiva a la central y detener, por sexta vez consecutiva en un año, a Raimundo Ongaro bajo la falsa acusación de estar relacionado con el crimen. Los militantes, condenados a la clandestinidad total, huérfanos de mínimas estructuras y de recursos financieros que hasta ese momento provenían de los gremios, no podían sostener a largo plazo la organización y la central rebelde, finalmente, se extinguió.

Mientras eso sucedía, en las plantas automotrices de Córdoba se daban los procesos

53 Lo que aconteció con la CGTA tenía un antecedente cercano en un suceso del año 1964 cuando Perón potenció el nacimiento de una corriente combativa, el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP), para, posteriormente, desautorizarlo.

que desembocarían en la aparición del clasismo. En los primeros meses de 1970 la conducción burocrática del Sitrac de la planta Concord de Fiat fue repudiada por los trabajadores tras la firma de un convenio colectivo de trabajo con la empresa que no contenía ninguno de los reclamos más sentidos por las bases, hecho agravado por la negativa a reconocer como delegado de sección a un operario que formaba parte de la oposición a la dirigencia oficial. A partir de allí se inició una escalada del conflicto donde se trazaron claramente los campos enfrentados: los dirigentes gremiales, la empresa y los funcionarios gubernamentales por un lado y la inmensa mayoría de los trabajadores por el otro. La pulseada terminó —tras una toma de la planta de Concord por tres días— con la victoria de los reclamos obreros. Una nueva dirección sindical surgida de las bases emergía de la lucha. El ejemplo pronto se trasladó a Fiat Materfer, donde también los representantes sindicales del Sitram fueron repudiados y desplazados, tras una toma de planta que reeditaba los pasos seguidos por los empleados de Concord. Una vez que ambos sindicatos contaron con representaciones producto de masivas asambleas generales, pasaron a actuar en conjunto sembrando la semilla de una lógica sindical diferente.

Catapultados por un novedoso espíritu de lucha de los trabajadores amasado tras años de prepotencias patronales y defecciones sindicales, la nueva generación de activistas sindicales puso en marcha formas organizativas que poco tenían que ver con las adoptadas por el sindicalismo tradicional. Junto a las asambleas abiertas como principal método de decisión, se resolvió que todos los dirigentes conservaran sus puestos en la planta de manera que no existieran representantes gremiales pagos, dándoles por añadidura un inmejorable grado de contacto con las problemáticas cotidianas que afectaban a las distintas secciones⁵⁴.

Al mismo tiempo las metodologías utilizadas para sostener la lucha contra las patronales también adquirían un perfil distintivo y particularmente radicalizado. Toma de plantas con rehenes de la gerencia, paros activos con movilización recurriendo a la solidaridad de la población circundante, huelgas de hambre aunadas a un discurso frontalmente anticapitalista y antiburocrático conformaban su sello particular que, con su apego a la acción directa, recogía prácticas anteriores del movimiento obrero argentino.

La creación de sindicatos de planta motorizada por Fiat para garantizarse trabajadores dóciles se volvía paradójicamente en contra cuando, en un contexto diferente, las dirigencias sindicales mostraron su impotencia para contener la agitación de las bases al carecer de los sofisticados aparatos de control con que contaban los sindicatos nacionales⁵⁵. Los planteos y métodos del clasismo muy

54 James Brennan, *op. cit.*, p. 228.

55 Daniel James: *Resistencia e integración*, *op. cit.*, p. 301.

pronto fueron recogidos por otras expresiones de organizaciones de base en las fábricas, particularmente en Córdoba. En 1972 la dirección del SMATA era obtenida por una lista clasista liderada por René Salamanca, un trabajador mecánico miembro del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Partiendo de la problemática de las condiciones de trabajo, de la que la burocracia sindical no podía hacerse eco por su propia lógica de construcción, el clasismo reintroducía ejes que tenían larga historia en el movimiento obrero argentino⁵⁶. Ya durante el primer gobierno peronista el peso adquirido por las comisiones internas en las fábricas había encontrado la reacción del capital, que en el marco de la crisis económica del segundo gobierno peronista, intentó hacer retroceder los niveles de organización obrera, fracasando en la tentativa. El golpe de 1955 centró su furia en esos órganos obreros de base y fue finalmente durante el gobierno de Frondizi cuando su protagonismo comenzó a menguar en paralelo con la consolidación del vandorismo que se constituía en base a una práctica que era ajena a las reivindicaciones relacionadas con los reclamos diarios de las plantas que no tuvieran que ver con lo salarial. En el marco de la “Revolución Argentina”, el clasismo expresaba esas tradiciones anteriores introduciendo además un discurso de corte anticapitalista y socialista.

Algunos estudios sobre esta corriente obrera realizan una distinción dentro del clasismo, basada en la diferenciación de dos momentos. Uno de surgimiento “producto de un movimiento genuino de las bases”⁵⁷ y otro posterior, con protagonismo en su dirección de las multifacéticas expresiones de la izquierda. Esa línea de reflexión se basa en la postura de que la lucha económica y reivindicativa habría jugado un rol más preponderante que la lucha por un cambio de sistema en la conciencia de los trabajadores que adhirieron al clasismo. Ante estas aseveraciones, aunque ciertas en algunos aspectos, pueden anteponerse ciertos reparos. Al plantearse las bases obreras el cuestionamiento de los aspectos celulares del modelo de acumulación en las fábricas, su lucha llevaba necesariamente implicado el desafío a la burocracia sindical y obviamente a la dictadura militar, cuya razón de ser determinante se encontraba en la necesidad de reestructurar la acumulación capitalista. De esta manera el accionar reivindicativo asumía objetivamente —mas allá de la discusión sobre la mayor o menor conciencia de sus protagonistas— un perfil político de desafío al núcleo del sistema encarnado en la complicidad entre las empresas monopólicas transnacionales, las Fuerzas Armadas y la dirigencia sindical nacional. Al mismo tiempo pensamos que es mucho mas fructífero pensar la relación entre la

56 Juan Carlos Torre, *op. cit.*

57 James Brennan, *op. cit.*, p. 220.

subjetividad de los trabajadores y la prédica de las organizaciones de izquierda como una articulación dialéctica, y por ende con contradicciones, de influencia mutua y recíproca, en lugar de instancias separadas. No se puede entender el estado de rebelión fabril existente en las plantas automotrices de Córdoba sin reconstruir la acción de larga data de corrientes políticas de izquierda en el seno del movimiento obrero mas concentrado.

En buena medida la lucha del clasismo creció porque conjugaba con buena parte de la sociedad debido a que una lucha contra el autoritarismo en la fábrica naturalmente se vinculaba con la lucha contra el autoritarismo en la sociedad. Aunque al principio esta expresión tuvo, como indicamos, un carácter fuertemente regional con eje en Córdoba, poco a poco —pero seguramente no con la velocidad que sus protagonistas deseaban y, sobre todo, necesitaban dado el tamaño de los enemigos que enfrentaban— sus principios hallarían eco en el complejo industrial principalmente siderúrgico y petroquímico montado entre Buenos Aires y Rosario a la ribera del río Paraná y, posteriormente —alrededor de 1972—, en el conurbano bonaerense, quebrando la relativa calma en que se había mantenido la conflictividad laboral en la zona comparada con el interior del país.

Por último, es también importante señalar que las agrupaciones obreras que formaban parte del ideario clasista, nunca llegarían a conformar una estructura política gremial unificada. El intento más cercano fue probablemente el Congreso realizado en la ciudad de Córdoba en agosto de 1971 convocado por Sitrac-Sitram, pero a los efectos prácticos, no llegaría a consolidarse.

4.2.2 Los Sacerdotes del Tercer Mundo

Cuando, a fines de la década del cincuenta, el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli fue elegido Papa en un largo cónclave, para asumir como Juan XXIII, la Iglesia entraba en una etapa de cambios que para muchos resultaría inesperada. Preocupado por el alejamiento de millones de fieles de las creencias cristianas e influido por los vientos nuevos que surcaban el mundo, el Papa comenzó a impulsar una serie de medidas que buscaban generar reformas de notable importancia en la institución eclesial. Para ello en 1959 convocaba al Concilio Vaticano II —que comenzaría en 1962— iniciando un proceso interno de discusión que se reforzaría con la Encíclica⁵⁸ *Pacem in Terris* (1963) donde, además de defender la necesaria vigencia de los derechos humanos en el mundo, se oponía a la carrera armamentista característica de la Guerra Fría y abogaba por la necesidad del diálogo y el entendimiento entre marxistas y cristianos. Ese

58 Las encíclicas son documentos solemnes elaborados por los pontífices.

rumbo sería mantenido, en líneas generales, por su sucesor Pablo VI, quien prestaría particular atención a los acontecimientos de América Latina y daría luz a la encíclica *Populorum Progressio* (1967), en la cual se señalaba el carácter legítimo de las rebeliones de las poblaciones que sufrieran tiranías manifiestas y prolongadas que atentaran contra los derechos humanos, lo que sería interpretado por miles de religiosos en el mundo como una nueva visión de la institución sobre la problemática de la violencia.

Poco antes de llevarse a cabo la conferencia del episcopado latinoamericano en la ciudad de Medellín en Colombia, dieciocho obispos de Asia, África y América Latina daban a conocer públicamente un documento que alababa las virtudes del sistema socialista. “La Iglesia no puede menos que regocijarse al ver aparecer en la humanidad otro sistema social menos alejado de la moral de los profetas y el evangelio”⁵⁹.

En Argentina, a fines de 1967, tres sacerdotes tradujeron el documento enviando una copia a una lista de religiosos de todo el país para manifestar la adhesión a los postulados de los obispos del Tercer Mundo. La magnitud de la respuesta superó todas sus expectativas. Más de trescientos sacerdotes respondían positivamente y muchos hacían saber su voluntad de no reducirse solamente al apoyo formal, conminando a la organización de una reunión para discutir colectivamente los pasos a seguir. Se gestaba así el primer encuentro que se llevaría a cabo el 1° de mayo en Córdoba —en coincidencia más que simbólica, se haría en paralelo con el acto que la CGTA llevaba adelante en la misma ciudad— donde los religiosos elegirían un secretariado nacional que entre sus primeras tareas debía elaborar una carta dirigida al Papa y a los obispos reunidos en Medellín sobre un tema nodal de la época: la violencia.

De esa manera casi casual —donde incluso el nombre de Sacerdotes para el Tercer Mundo surgió de un bautismo periodístico que los protagonistas hicieron propio— nacía un movimiento social que tuvo un rol protagónico en los acontecimientos venideros. Según lo afirma uno de sus fundadores, “los movimientos no se crean, no se fundan, los movimientos históricos reales, verdaderos, nacen, cuando son auténticos, nacen. Y nacer no es lo mismo que inventar, decretar, crear; es una cosa completamente distinta y tiene que surgir de una serie de condiciones históricas que en un momento determinado hacen que eso sea viable y nazca”⁶⁰.

59 Citado en Richard Gillespie, *Montoneros. Soldados de Perón*, Buenos Aires, Grijalbo, 1987, p. 81.

60 Conferencia de Miguel Ramondetti, ex secretario general del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, citada en *Cuadernos del Centro de Estudios José Carlos Mariátegui: Los 70 en los 90*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1994.

Esas condiciones a las que se hace referencia no eran sólo un reflejo de los cambios operados en la Iglesia a nivel mundial. El movimiento expresaba la fuerte sensación de malestar de cientos de curas con el apoyo que le brindaba a la dictadura la cúpula eclesial, hecho visible en la simpatía, más o menos pública, que ésta demostraba hacia los planteos preconciarios de los voceros gubernamentales y en la llegada de cientos de cuadros provenientes de las usinas educativas eclesiales a ocupar funciones de gobierno.

Su creación se engarzaba con la subjetividad de sus integrantes potenciando un proceso que era previo. La mayoría de los sacerdotes llevaba adelante su compromiso religioso en barrios obreros —reeditando la anterior práctica de trabajo en las fábricas impulsada por los curas obreros—, en las villas miseria y barriadas más pobres del país. Al vivir de cerca y en muchos casos compartir una vida de privaciones y sacrificios, surgía un sentimiento de rebelión contra las injusticias del poder que, de manera creciente, los llevaba a la conclusión de que ninguna de las tareas de ayuda y caridad podían ser verdaderamente efectivas sin un profundo cambio de las estructuras económico-sociales que engendraban la pobreza.

Aunados los factores de experiencia cotidiana, los cambios posconciarios de la Iglesia y el rechazo al compromiso institucional con la dictadura, se articularon las condiciones que pusieron en marcha al movimiento. El impacto de las tesis católicas radicales no se agotó en la creación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) sino que se hizo extensivo a otros ámbitos. Un ejemplo de ello es la aparición de la revista *Cristianismo y Revolución*, creada a fines de 1966 y dirigida por el ex seminarista Juan García Elorrio. La publicación hizo una contribución enorme a la difusión del explosivo cóctel político que combinaba creencias cristianas, peronismo, socialismo y —particularmente en este caso— un apoyo explícito a la lucha armada. El propio Elorrio —antes de su dudosa muerte al ser atropellado por un automóvil— articuló el impulso a la publicación con la mucho más clandestina tarea de estructurar una organización guerrillera a la que denominó Comando Camilo Torres⁶¹. Aunque el agrupamiento jamás entró de hecho en acción, en él hicieron sus primeros pasos los que pocos años más tarde serían la dirección política de Montoneros⁶².

En líneas generales, la radicalización de elementos cristianos tuvo un fuerte impacto sobre la juventud. Particularmente aquellos que acompañaban las tareas religiosas y sociales de los curas tercermundistas recorrerían un camino de incorporación a la vida política que se asemejaba en mucho al tránsito realizado por sus mentores.

61 En homenaje al cura colombiano que se había incorporado públicamente a una agrupación guerrillera de ese país y que murió combatiendo en 1966.

62 Nos referimos, por ejemplo, a Fernando Abal Medina, Gustavo Ramus y Mario Firmenich.

Comenzaba como un sentimiento de rebelión ante las injusticias sociales con las que se encontraban y se consolidaba en una visión del mundo que incluía una nueva forma de concebir la doctrina cristiana. En un proceso, donde germinarían las primeras semillas de lo que luego se condensaría en la Teología de la Liberación, se articularían visiones que, a partir de una determinada lectura del evangelio y la vida de Jesús, definían que no se podía ser verdaderamente cristiano sin realizar una opción preferencial por los más pobres. Por eso la tarea central era contribuir al cambio radical de las estructuras que generaban la pobreza.

Rescatando la perspectiva de una sociedad socialista donde conciliaban las tradiciones comunitarias cristianas con la ideología marxista, los tercermundistas eran un afluente clave del torrente social que se enfrentaba a la dictadura. A través de ayunos, huelgas de hambre, proclamas y movilizaciones, tuvieron un destacado papel en el conflicto desatado alrededor de las villas miseria cuando Onganía promulgó una ley de erradicación de las mismas que se proponía el traslado compulsivo de sus habitantes a unos núcleos habitacionales transitorios que, como pronto se comprobó, eran inexistentes.

El tercermundismo influyó además en el trayecto de peronización de los sectores medios —aunque una parte de sus miembros no se identificaron jamás con el peronismo, lo que fue una fuente de tensiones dentro del movimiento y una causal de su desaparición cuando se acercó la nueva coyuntura de 1973— ya que un sector mayoritario de ellos hacía cada vez más pública su adhesión a la fuerza proscripta, abogando para que no se repitiera la situación de separación entre los trabajadores y la Iglesia vivida durante el segundo mandato de Perón.⁶³

La prédica del MSTM ayudó también a legitimar el uso de la violencia contra el gobierno militar. Aunque la mayoría de sus miembros no se integraron a las organizaciones armadas, haciéndose eco de la autoprofética frase del sacerdote Carlos Mugica: “estoy dispuesto a que me maten, pero no a matar”⁶⁴, sí proclamaban el carácter de justicia existente en todas las formas de rebelión contra el sistema, porque éstas eran un producto de los abismos sociales que desarrollaba el capitalismo con su accionar. Un documento emitido por el MSTM develaba sus concepciones de la época: “la luz de la Revelación cristiana nos permite ver con

63 Muchos de esos sacerdotes habían saltado el abismo que mediaba entre su procedencia social y familiar profundamente antiperonista y su posterior integración al peronismo, idea que abrazaron con la fe de los conversos. El caso más connotado es sin dudas el del cura Carlos Mugica.

64 Richard Gillespie, *op. cit.*, p. 82. La mención a la frase autoprofética se debe a que el sacerdote Carlos Mugica fue asesinado el 11 de mayo de 1974 por la organización paramilitar AAA (Alianza Anticomunista Argentina o Triple A) formada por el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega.

claridad que no se puede condenar a un oprimido cuando éste se ve obligado a utilizar la fuerza para liberarse, sin cometer con él una nueva injusticia (...) en la consideración del problema de la violencia en América Latina se evite por todos los medios equiparar o confundir la violencia injusta de los opresores que sostienen este nefasto sistema con la justa violencia de los oprimidos, que se ven obligados a recurrir a ella para lograr su liberación”⁶⁵.

4.2.3 Las organizaciones armadas

Es frecuente la idea de ubicar el nacimiento de las organizaciones guerrilleras en el país en la etapa de fines de los sesenta y principios de los setenta. En realidad ése fue el momento de su máxima expansión, pero no el de su génesis. La primera experiencia fallida podemos situarla en el año 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, cuando un grupo de militantes peronistas conocidos con el nombre de Uturuncos llevó adelante acciones en Tucumán y Santiago del Estero⁶⁶. Luego de este primer intento, en agosto de 1963 una escisión por izquierda del grupo de ultraderecha Tacuara protagonizó un asalto al Policlínico Bancario, llevándose su recaudación para financiar futuras acciones guerrilleras urbanas, objetivo que no se cumplió por la caída en prisión de la mayoría de sus miembros durante 1964.

El gobierno de Arturo Illia conoció otros dos intentos de desarrollar focos guerrilleros. El primero fue el del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) que se instaló en la provincia de Salta. Su líder, el periodista Jorge Massetti, estaba directamente bajo la conducción de Ernesto “Che” Guevara desde el exterior⁶⁷. A principios de 1964 un cerco militar de Gendarmería aniquiló el núcleo de la organización desbaratando el proyecto. Por último, y de manera paralela –y probablemente acordada con el EGP–, un grupo de activistas provenientes del trotskismo se acercó a la Revolución Cubana y al Che, proponiéndose la creación de una organización político-militar prontamente abortada por una explosión accidental de un arsenal donde murieron sus principales líderes en julio de 1964⁶⁸.

65 Citado en Martín Caparrós y Eduardo Anguita, *La voluntad*, tomo 1, Buenos Aires, Sudamericana, 1998, p. 192.

66 Ernesto Salas: *Uturuncos. La guerrilla olvidada de la resistencia peronista*, Buenos Aires, Biblos, 2003.

67 Gabriel Rot: *La historia de Jorge Ricardo Massetti y el Ejército Guerrillero del Pueblo*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.

68 Axel Castellano y Sergio Nicanoff: *La historia del “Vasco” Bengoechea y las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional*, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, Cuaderno de Trabajo Número 29, 2004.

Esta breve reseña –junto a la reiterada noticia aparecida en los diarios de la detención en diversas zonas del país de supuestos guerrilleros– es suficientemente indicativa de que la génesis de las organizaciones armadas data de los primeros sesenta y, por sobre todo, nos señala que la compleja gama de factores políticos, económicos, culturales y sociales que llevaron al explosivo desarrollo posterior de la vía armada estaba, al menos parcialmente, presente antes del golpe de Estado de 1966. Aun así, el fracaso de los primeros intentos nos advierte sobre el lugar todavía marginal que ocupaban los diseños guerrilleros en el escenario político del período anterior al onganato.

Ya durante la Revolución Argentina nuevamente miembros del movimiento peronista llevaron adelante la tentativa de un foco armado en Taco Ralo, provincia de Tucumán, durante 1968. Aunque la Gendarmería descubrió tempranamente el campamento y detuvo a la mayoría de sus integrantes, la reciente organización bautizada por sus integrantes como Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) sobrevivió a su tropiezo inicial y –a diferencia de los intentos anteriores, lo que nos orienta a tener en cuenta un contexto más favorable para el desarrollo de estas prácticas– comenzó una etapa de crecimiento visible para 1970.

Las condiciones sociales presentes en el país tras el Cordobazo favorecían el despegue de un amplio número de organizaciones armadas. Según nos recuerda uno de sus protagonistas, “hacia 1970, siete grupos armados claramente estructurados actuaban en la Argentina: Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), peronistas-marxistas; Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL), marxistas-leninistas; Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trotskistas-guevaristas; Guerrilla para el Ejército de Liberación (GEL), chinoístas-nacionalistas, y tres caracterizados como peronistas de izquierda: Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Descamisados y Montoneros”.⁶⁹

Provenientes de un heterogéneo arco ideológico, esa diversidad se reflejó en un conjunto de problemáticas que las diferenciaban entre sí. La más obvia se centraba en la identidad política expresamente peronista que asumían algunas de ellas, mientras que las provenientes del tronco marxista-leninista tendían a interpretar el peronismo como una expresión más del sistema que combatían. Una parte de las organizaciones preferían acentuar su carácter clasista y su opción por una sociedad socialista (caso del ERP). Otras, sin negar el socialismo como objetivo final, planteaban como contradicción principal la existente entre el imperialismo norteamericano y la nación argentina, por lo que priorizaban un discurso marcadamente nacionalista. Tal fue el caso de Montoneros. Otro elemento de disenso se encontraba entre quienes pregonaban el armado

69 Juan Gasparini: *Montoneros. Final de cuentas*, Buenos Aires, Puntosur, 1988.

de un partido revolucionario como meta principal, desde el cual dirigir la lucha armada, como la relación establecida entre el PRT y el ERP, y quienes se definían simplemente como organizaciones político-militares.

Más allá de estas disimilitudes —que para los protagonistas no eran precisamente menores—, existía un conjunto de aspectos y concepciones que las unían de hecho a partir de la opción común por la lucha armada. En primer lugar, las acercaba un análisis que enfocaba la violencia organizada como una forma superior de lucha que permitía superar el espontaneísmo de los conflictos sociales anteriores, al que ubicaban como uno de los principales déficits de las luchas populares. Si el Cordobazo era, para ellos, la demostración evidente del espíritu revolucionario existente en las clases explotadas, lo que faltaba desde su perspectiva, era dotar de organización y de estrategia a esa lucha a través de la constitución del brazo armado que dirigiera el enfrentamiento.

En segundo lugar, todas coincidían en poner en el centro de su accionar el problema del poder del Estado y en criticar las tradiciones más antiguas de la izquierda argentina —sobre todo del Partido Comunista Argentino y el Partido Socialista— por sus estrategias de cambios graduales, por etapas y centralmente electorales. Eran esas prácticas, juzgadas como reformistas, las que no habían permitido avanzar, según pensaban, en el camino de modificar las desigualdades de la sociedad capitalista. Concebían a la revolución no como una meta a largo plazo sino como una tarea a abordar de forma inmediata, por lo que el eje de discusión se centraba en cuáles eran las vías más adecuadas para acceder al poder del Estado pensado como única herramienta posible de reestructuración de la sociedad. Seguros de que las clases dominantes habían demostrado de sobra su predisposición a aniquilar tempranamente cualquier alternativa de cambio, descartaban de plano por irrealizable la posibilidad de acceder al poder por la vía pacífica y postulaban la necesidad de la destrucción de los organismos represivos del Estado y su reemplazo por un nuevo sujeto: el ejército popular.

En tercer lugar, y aunque ya señalamos que no puede reducirse la experiencia guerrillera a la influencia de un factor externo, sin duda todas ellas fueron influenciadas por la Revolución Cubana. Una de las tesis surgidas como corolario del triunfo revolucionario caribeño es la del foco guerrillero, enunciado primeramente por el Che y condensado en una teoría, con pretensiones de validez para toda América Latina, por el intelectual francés Régis Debray⁷⁰. Sus proposiciones sugerían por un lado que la experiencia cubana era la prueba viviente de que el accionar guerrillero podía vencer a

⁷⁰ Régis Debray: *Révolution dans la Révolution, et autres essais*, París, Maspero, 1969; *La crítica de las armas* (2 vols.), México, Siglo XXI, 1975; *La guerrilla del Che*, México, Siglo XXI, 1988.

un ejército regular. Además postulaba que el escenario principal del enfrentamiento sería el rural, con el campesinado como sujeto revolucionario más importante. Por último, sostenía que en América Latina estaban dadas las condiciones objetivas para un cambio revolucionario, por lo que la tarea principal consistía en generar y/o acelerar las condiciones subjetivas —conciencia de las masas— para lo que el foco guerrillero era esencial. A través de su ejemplo, de sus acciones cotidianas, éste actuaría como un irradiador de conciencia hacia las clases explotadas que, en la medida en que la guerrilla se desarrollara, irían pasando de la simpatía política a la lucha frontal al convencerse de que el triunfo era posible.

Hacia fines de los sesenta, teniendo como ejemplo cercano a los Tupamaros uruguayos, las organizaciones armadas adaptaron la teoría del foco a las condiciones sociales de Argentina. Dado que nuestro país se caracterizaba por un importante desarrollo industrial, con una clase obrera numerosa y altamente organizada, en una sociedad donde la mayoría de la población vivía en grandes centros urbanos, y teniendo en cuenta las fracasadas experiencias anteriores que ponían en tela de juicio la viabilidad de la guerrilla rural, concluyeron que el teatro principal debían ser los grandes centros urbanos. Esa readecuación dejaba en pie buena parte de los supuestos básicos de la tesis foquista, por lo que sería fuente de tensiones y contradicciones que teñirían el posterior desarrollo de las organizaciones⁷¹.

Un último elemento que hacía las veces de argamasa entre las distintas organizaciones guerrilleras era una concepción estratégica que, más allá de los matices, podemos sintetizar en la idea de “la guerra integral, popular y prolongada”. La guerra integral implicaba que desde hacía tiempo el país vivía una guerra civil declarada unilateralmente por las clases dominantes, por lo que este enfrentamiento debía llevarse adelante adoptando todos los medios posibles de lucha. Era popular porque todo el pueblo debía comprometerse en el conflicto, dejando afuera sólo a las clases sociales y fracciones comprometidas con el dominio imperialista. Y era prolongada, porque no podían fijarse límites espaciales y temporales al proceso de construcción de la herramienta clave: el

71 No está de más señalar que limitarse a caracterizar a las organizaciones armadas como foquistas llevó en más de una oportunidad a un enfoque estereotipado que quitó rigurosidad al análisis de una experiencia sumamente compleja. En muchos casos, la adaptación de la teoría del foco distó de ser acítica y no impidió una implantación social de la guerrilla más diversa de lo que muchos estudios sobre el tema señalan. Grupos armados, como las FAP, desarrollaron concepciones fuertemente cuestionadoras del ideario foquista sin por eso renunciar a la idea de violencia organizada como componente imprescindible del cambio revolucionario.

ejército popular. Se trasladaba así al país una tesis surgida en otras geografías —centralmente, pero no únicamente, Vietnam⁷²— donde el eje del enfrentamiento se focalizaba contra ejércitos de ocupación extranjeros aislados socialmente, lo que como comprobarían tardíamente, se asemejaba muy poco a la situación de las Fuerzas Armadas en Argentina.

Aunadas por similares concepciones organizativas centralizadas y celulares, por una subjetividad convergente que priorizaba como norte de la construcción revolucionaria la acción y el hacer, antes que la reflexión sobre la propia práctica, y principalmente por la experiencia cotidiana común de enfrentamiento a la dictadura, todos esos elementos favorecían al menos potencialmente el acercamiento entre sí, aunque nunca llegarían a unificarse. En este sentido, las contradicciones y orígenes diversos que hemos señalado pesaban tanto o más que los aspectos que las acercaban. De hecho —como veremos más adelante—, en el momento en que Lanusse convoque al “Gran Acuerdo Nacional” acercándose la posibilidad de elecciones y, con ello, el posible triunfo del peronismo, las divergencias entre quienes sostenían la identidad peronista y los que mantenían su filiación marxista-leninista aumentarían⁷³.

En su proceso de génesis ya se encontraban presentes aspectos que contribuirían a su posterior derrota. Sin pretender un análisis en profundidad, mencionemos que es posible, aun en su momento fundante, percibir tanto las improntas militaristas que los llevarían a subordinar permanentemente la acción política a la acción militar, como la imposibilidad de readecuar su estrategia ante posibles cambios en la etapa histórica, el vanguardismo y sectarismo que les impedía anudar alianzas —y llevaría a que se vieran a sí mismos no como una parte más de un sujeto social diverso que se enfrentaba a la dictadura sino como su núcleo y dirección política—, y la ausencia de mecanismos democráticos en su interior. Todos estos elementos recorrían en forma de tensión el cuerpo de las

72 Ante la posibilidad del triunfo de las fuerzas comunistas en ese país de la Península de Indochina, Estados Unidos intervino, a partir de la década del 60, enviando masivamente tropas y equipamientos. Esa guerra se constituiría en la única —hasta el momento— derrota militar de la potencia norteamericana.

73 Nuevamente cabe una aclaración que marca la intensidad del debate ideológico en esa etapa. Ni siquiera las organizaciones guerrilleras de raigambre peronista llegaron a unificarse plenamente. Aunque entre 1970-71 consiguieron articular un espacio común denominado OAP (Organizaciones Armadas Peronistas) que les permitía realizar acciones conjuntas, visiones diferentes sobre la caracterización del movimiento peronista los llevaron a la fractura. En 1972-73 Montoneros absorbió —a través de fusiones— a la mayoría de los grupos armados peronistas, pero nunca en su totalidad.

organizaciones armadas, anudadas, al menos en parte, en las concepciones estratégicas con las que comenzaban a avanzar.

Sin embargo, nada de esto era automáticamente visible en el lapso que mediaba entre el Cordobazo y las elecciones de marzo de 1973. Impulsadas por la crisis orgánica que cubría a Argentina, las fuerzas de las organizaciones guerrilleras se multiplicaron. Prestigiados por su nivel de entrega, los militantes que tomaban el camino de las armas eran vistos por el activismo de la época como “los mejores de nosotros”. Legitimados además por porciones crecientes de la sociedad que justificaba su lucha, aumentaron su incidencia social⁷⁴. Así, superando los límites de su primigenia base de reclutamiento, proveniente en general de la clase media y en particular del estudiantado, se insertaron crecientemente en fábricas, barriadas populares y experiencias sociales de todo tipo.

Una generación abandonaba sus proyectos individuales y se lanzaba a la tarea de cambiar el mundo con la certeza de que había llegado la hora de tomar el cielo por asalto.

4.2.4 Las Ligas Agrarias

La agitación social no se remitió exclusivamente a los centros urbanos, sino que impactó también en el campo, generándose luchas del campesinado que dieron lugar a la aparición de una nueva organización social conocidas con el nombre de Ligas Agrarias.

Nacidas originariamente en la provincia del Chaco, alrededor de las reivindicaciones de los cultivadores de algodón, después de su primer congreso realizado en 1971, su influencia se extendió a las provincias del noroeste, a los productores de tabaco de Corrientes, a los de yerba mate de Misiones y a las colonias agrícolas de Formosa⁷⁵. Agrupando sobre todo a pequeños productores rurales, las ligas canalizaron el descontento por la crisis de las economías regionales provocada por el redimensionamiento económico del país ensayado por la dictadura y, sobre todo, enfrentaron a las grandes empresas monopolistas que, al manejar todos los canales de comercialización, buscaban maximizar sus ganancias pagando precios ínfimos a los agricultores.

⁷⁴ Un estudio de la encuestadora IPSA realizado en esa época determinaba que, en zonas como la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, la simpatía de la población hacia las acciones de la guerrilla superaban el 50 por ciento de los casos relevados. Véase Martín Caparrós y Eduardo Anguita, *op. cit.*, p. 504.

⁷⁵ Oscar Anzorena, *op. cit.*, p. 208.

Voceros de un reclamo de fondo que cuestionaba la estructura latifundista de la tenencia de la tierra, impulsando medidas de acción directa que iban desde las concentraciones hasta las huelgas donde se negaban a vender la producción a los grandes acopiadores, promoviendo, como una característica de época, la elección de sus autoridades a través de asambleas, las Ligas Agrarias fueron otro de los múltiples actores de la protesta social.

En síntesis, tanto las nuevas formas de organización de los obreros –CGTA y clasismo–, como el movimiento de los Sacerdotes del Tercer Mundo, las múltiples experiencias de las organizaciones armadas como las acciones de las Ligas Agrarias, constituyeron indicadores de que la Argentina de fines de los años sesenta estaba siendo testigo privilegiada de un proceso en germen, proceso que desde el Cordobazo en adelante iría *in crescendo* hasta constituirse en una verdadera situación revolucionaria. Si la dictadura de 1966 había venido para quedarse, sus fisuras internas y, fundamentalmente, las impugnaciones a las que la sociedad desde sus diversas formas de manifestarse la sometía una y otra vez demostraban que su tiempo se estaba terminando. De este modo, las contradicciones del régimen demostraban una vez más que la crisis de hegemonía no había sido eliminada por el golpe de Estado de 1966, sino que, por el contrario, tras un brevísimo interregno en el que la imposición por la fuerza de un proyecto económico y social dejaba a los sectores perjudicados sin capacidad de reacción, había dejado el margen necesario para que las fuerzas sociales se reconstituyeran y se direccionaran en contra de un enemigo común. De allí en más, desde todas las aristas, la sociedad en su conjunto contribuiría a expulsar a los dictadores del gobierno y se iría delineando un proyecto alternativo de sociedad. Este proyecto sería amputado brutalmente en una escalada de violencia desde el Estado nunca antes vista en Argentina, inaugurando en 1976 un genocidio sistemático sólo comparable tal vez con la experiencia del nazismo alemán.

5. La violencia

Antes de continuar con el derrotero de la dictadura militar que dominó el país entre 1966 y 1973, hagamos un alto para reflexionar sobre una cuestión que creemos fundamental y que tiene, como hemos visto, su semilla en los procesos de movilización que acabamos de reseñar. Nos referimos, claro está, al problema siempre abordado y nunca resuelto de la violencia política en Argentina. Desde la óptica del poder, particularmente de la cúpula de las Fuerzas Armadas, la situación de levantamientos populares y acciones armadas con la que

tendrían que enfrentarse de manera cada vez más frecuente después del Cordobazo era interpretada a la luz de la Doctrina de Seguridad Nacional que analizamos anteriormente. A la luz de esta perspectiva, el conflicto social era entendido como el producto de una conspiración subversiva mundial que se enmarcaba en el enfrentamiento entre el mundo comunista y el Occidente cristiano, donde activistas radicalizados se montaban sobre ciertas problemáticas sociales para desviarlas hacia la destrucción de los valores básicos de la sociedad “bien entendida” (es decir, propiedad privada, familia y religión cristiana). Toda actitud crítica era visualizada como un vehículo para la infiltración marxista y, por lo tanto, susceptible de ser eliminada.

Años después, con el retorno de la democracia desde 1983, la esencia del enfrentamiento social de las décadas del sesenta y setenta se reduciría a la lucha entre dos actores en lo que se popularizó —como vimos al principio de este trabajo y se verá en el capítulo de este libro correspondiente al período 1983-1989— como la “teoría de los dos demonios”. Desde esta visión el conflicto se reducía a la disputa entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones guerrilleras. Se postulaba que los dos actores tenían en común una lógica que buscaba imponer su ideología a través del aniquilamiento del contrario, por lo que ambos, elitistas y autoritarios por naturaleza, habían introducido en el país una espiral de muerte y violencia a la que la mayoría de la población asistía como observadora impotente e inerte, transformándose en víctima de las acciones de militares y guerrilleros⁷⁶.

De esta manera, un enfrentamiento que sólo podía explicarse a través de un análisis profundo de la sociedad adquiriría un carácter extra-social ajeno a la comunidad que lo había engendrado; igualaba el genocidio del terrorismo de Estado con las acciones violentas de otros actores sociales, ocultando la relación de fuerzas totalmente asimétrica entre uno y otro. Esta visión construida *a posteriori* por la intelectualidad del retorno a la democracia contribuyó a echar un velo sobre el papel del poder económico, cúpulas eclesiales, clase política, ciertas dirigencias sindicales y embajadas extranjeras en lo que se constituiría en la mayor masacre de la historia del país producida durante la última dictadura militar (1976-1983). Por sobre todo, les facilitaba a ciertas franjas sociales la ausencia de cualquier atisbo de autocritica sobre su papel en lo sucedido y convergía —más allá de la condena a la represión ilegal desatada por el Estado— con la visión de las Fuerzas Armadas en un aspecto central: su carácter profundamente ahistórico, omitiendo y soslayando las causas de la violencia política en Argentina.

76 Para ratificar lo que afirmamos véase el prólogo de *Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional para la Investigación de la Desaparición de Personas*, Buenos Aires, Eudeba, 1984.

En la base de la construcción de esa visión estuvo la hipótesis de que la izquierda, especialmente las organizaciones armadas, y el resto de la sociedad —léase fundamentalmente clase obrera— carecieron de puntos de contacto. Por carácter transitivo, en este tipo de análisis para los cuales la violencia fue patrimonio exclusivo de esos grupos, ésta aparece también como un elemento extraño al conjunto social y, por ende, disruptivo. Partiendo de esas premisas, en un trabajo que puede ser ilustrativo de toda una corriente de pensamiento, Peter Waldmann planteó que la guerrilla constituyó una aberración del entramado social. En “Anomia social y violencia”⁷⁷ el autor sostuvo que los “terroristas” (sic) fueron rechazados no sólo por los trabajadores sino por la sociedad en su conjunto, constituyendo un germen externo a la misma. Waldmann reproduce allí la lógica del funcionalismo norteamericano, el cual recurre al elemento anómalo para explicar el desarrollo de una sociedad que no es como “debería haber sido”. En este esquema, en consecuencia, la guerrilla y la cultura de izquierda son elementos disruptores de un orden social que debería ser naturalmente homeostático⁷⁸. El modelo, entonces, es muy sencillo: todo fenómeno que no encaja en una lógica de autorreproducción cíclica y que introduce alteraciones es ajeno. Como sustento de estas ideas, el sociólogo alemán recurre a negar sistemáticamente la realidad señalando que, por ejemplo, la lucha armada no pudo ser una respuesta a la violencia “desde arriba”, dado que la dictadura de Onganía en realidad no habría sido verdaderamente represiva⁷⁹. En este modelo que se emparenta fácilmente con la necesidad, la violencia aparece no sólo en su carácter alienado, sino que también se absolutiza; la violencia es en sí misma, sin importar el contexto histórico en que se genera o sobre quién se aplica. De hecho Waldmann se anticipa a la formulación de la teoría de los dos demonios cristalizada en el citado prólogo del Informe de la Conadep señalando la idea acerca de que las organizaciones armadas generaron una suerte de “subcultura de la violencia”, construyendo un imaginario falso y justificando su accionar “subversivo”⁸⁰. El autor termina de coronar su explicación diciendo que en Argentina nunca ha habido una situación revolucionaria, por lo que la violencia de los “terroristas” ni siquiera se encuentra contenida en un contexto histórico proclive a generarla. Teniendo en cuenta su marco teórico, vemos que esa afirmación, antes de ser una conclusión es más bien la premisa desde la cual parte todo su trabajo, y que justifica en definitiva el carácter extraño de la

77 Peter Waldmann: “Anomia social y violencia”, en Alain Rouquié (comp.), *Argentina, hoy*, México, Siglo XXI, 1982.

78 Nuevamente, como cuando analizamos los conceptos de democracia y autoritarismo, nos encontramos con posturas que parten de una idealización platónica de los términos y los ubican en el mundo de lo normativo, lejos de las contradicciones propias de la vida real.

79 Peter Waldmann, *op. cit.*, p. 220.

80 *Ibid.*, p. 241.

“violencia” y de las organizaciones de izquierda en la sociedad⁸¹. La idea, por lo tanto, gira en torno de un mismo y reiterativo eje, y es que la violencia no forma parte del desarrollo de una sociedad sino que presenta una disfuncionalidad.

Para entender el contexto histórico en que se moldeó la subjetividad de la sociedad en la etapa que nos ocupa, es necesario señalar que la violencia política, aun cuando se condensa y sale a relucir en las primeras planas a partir fundamentalmente del Cordobazo y de los momentos posteriores, no nace allí sino que es un componente estructural de la experiencia social, cuando menos desde el golpe de 1955⁸². Sólo acercándonos a la comprensión de las vivencias de una generación nacida a la vida política en el marco de la proscripción del peronismo y de la violencia política *desde el Estado*, podemos comenzar a analizar los acontecimientos posteriores.

5.1 Los proscriptos

El golpe de 1955 simbolizó la expresión acabada de una revancha clasista contra el poder organizado de la clase trabajadora, cuyo carácter se evidenciaba en la proscripción del justicialismo, la intervención a los sindicatos, los fusilamientos de Lanús y José León Suárez, el secuestro del cadáver de Eva Perón, las listas negras, las detenciones y torturas, por mencionar los hechos más notorios. El retorno a la vida electoral partía de la impunidad sobre todo lo actuado por los militares –de hecho, Frondizi dictó una amnistía que impedía toda investigación sobre la represión de la autodenominada Revolución Libertadora– y articulaba un sistema semidemocrático que tenía como pilar fundamental la tutela de las Fuerzas Armadas sobre los gobiernos de turno y la exclusión de la mayoría electoral.

Desde el peronismo se habían ensayado todas las formas de lucha para quebrar ese modelo y, si bien esos diversos caminos le permitieron jaquear a los diferentes gobiernos, no lograron el objetivo de permitir la legalización plena del movimiento ilegalizado ni el retorno de Perón al país. En una somera síntesis de esas luchas podemos señalar las elecciones de 1962, momento en que Frondizi se negó a entregar la gobernación de la provincia de Buenos Aires a la fórmula peronista triunfante encabezada por Andrés Framini; el fracasado retorno pací-

81 *Ibid.*, p. 248.

82 Nicolás Iñigo Carrera: “Apuntes sobre el Cordobazo”, en Juan Carlos Cena (comp.), *op. cit.*, p. 295. Además, si planteamos la cuestión desde una perspectiva más amplia, podemos pensar que la violencia es un elemento constitutivo permanente de las relaciones entre el Estado y el conjunto de la sociedad.

fico de Perón al país en 1964 cuando el gobierno de Illia hizo detener el avión que lo traía en el aeropuerto de Río de Janeiro; la derrota de las asonadas ensayadas por los militares peronistas que permanecían residualmente dentro de las Fuerzas Armadas –Juan José Valle en 1956, Miguel Ángel Iñíguez en 1960–; la práctica masiva de acciones directas y violentas simbolizadas en la resistencia peronista con intentos insurreccionales, como la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre en enero de 1959; la notable cantidad de elecciones donde el peronismo hacía visible su repudio votando en blanco al punto de convertir esa opción en la primera fuerza; y una larga lista de etcéteras.

Si todas esas luchas no lograron sus objetivos de máxima, dos conclusiones se hacían evidentes para franjas crecientes del activismo peronista. La primera era un profundo descreimiento en los partidos políticos y en un régimen parlamentario al que se asociaba con la proscripción generándose reflexiones que iban desde “el desprecio a los partidos políticos, [hasta] pensar que las elecciones solo servían para entrapar al pueblo, y de ahí a buscar nuevas formas de enfrentamiento con el régimen, había un solo paso”⁸³.

La segunda, íntimamente relacionada con la anterior, consistía en un balance sobre la resistencia peronista que, si bien era elevada a la categoría de mito por su dosis de heroísmo y entrega, al mismo tiempo era reevaluada en lo que se entendía eran sus falencias principales: su falta de organización dado su carácter espontáneo y, por ende, la ausencia de políticas centralizadas capaces de enfrentar con éxito al poder del Estado. Muchos comenzaban a convencerse de que sólo una estrategia que generara organizaciones clandestinas revolucionarias dispuestas a asumir la vía armada podía tener alguna perspectiva de éxito. Cuando la nueva dictadura apareció en el escenario para anunciar que venía a quedarse por largos años, no hizo más que confirmar esas certezas.

5.2 Respuestas al ongiato

Fue la propia acción de la dictadura la que llevó a que distintos sectores sociales, incluso claramente antiperonistas, comenzaran a visualizar el uso de la violencia como la única alternativa posible para enfrentar la violencia del régimen. El intento de remodelar a la sociedad no se remitía –como hemos visto– solamente al plano económico y político sino que incluía también la esfera cultural. Se trataba de modificar las conductas sociales cotidianas a través de la represión directa a toda forma de expresión contestataria.

83 Oscar Anzorena, *op. cit.*, p. 81.

La búsqueda gubernamental de restablecer la autoridad del poder sobre la sociedad a un nivel celular que cruzaba la realidad de las fábricas, centros educativos y todas las relaciones sociales, públicas y privadas, puso progresivamente al descubierto el carácter estructuralmente coercitivo del régimen, generando un fuerte descontento social particularmente visible en los sectores medios que originalmente habían apoyado la llegada del nuevo gobierno.

Como lo señaló con perspicacia una figura estelar del proyecto gobernante, el intento de terminar con el funcionamiento de las instituciones políticas, en el marco de una sociedad altamente politizada, terminó provocando el efecto opuesto al buscado ya que “los jóvenes que no pudieron hacer política pretendían, infructuosamente, desarrollarla en las aulas y los locales partidarios. Terminaron atorando de política a las distintas instituciones del país, incluyendo a la Iglesia católica”⁸⁴.

La cerrazón de todos los caminos de participación y la lógica asfixiante de la vida cotidiana en la dictadura tiene un ejemplo evidente en el nivel de la universidad. Tras la eliminación de la autonomía universitaria, con “la noche de los bastones largos” ya descrita, se descargaron una serie de golpes ininterrumpidos sobre ese sector. Los planes de estudios y los planteles de profesores se readecuaron a las ideas católicas integristas vigentes; se otorgaron los comedores universitarios a concesionarios privados con su consiguiente encarecimiento; aumentaron las trabas para ingresar y todos los centros estudiantiles quedaron prohibidos, eliminándose además la participación estudiantil en el gobierno de las universidades. Esa experiencia sería fundante de la radicalización estudiantil de la etapa y para una parte del movimiento estudiantil se conjugaría con otro proceso: el de la peronización. Si muchos de ellos provenían de familias connotadamente antiperonistas, en el nuevo contexto comenzarían a sostener que si el sistema había mantenido largamente la proscripción del movimiento y su líder mientras que la clase trabajadora conservaba fielmente esa identidad política, solo podía deberse a que el peronismo era, si no revolucionario en sí mismo, cuando menos la puerta de entrada al socialismo. De esa manera, ese ejercicio de comparación y rebelión ante las enseñanzas recibidas los conduciría a una lectura del peronismo y del propio Perón que comenzaba a rozar el extremo del total acriticismo, elemento que tendría más de una consecuencia posterior.

La dinámica de cambios que operaba en el movimiento estudiantil era el emergente de un fenómeno preexistente y más de fondo. En la década del sesenta una nueva experiencia de surgimiento de una contracultura surcaba todos los ámbitos, abarcando la música, la vestimenta, el cine, nuevas formas de relacionarse y de entender el sexo, pasando por el cine y la literatura. El descontento con el

84 Alejandro Agustín Lanusse: *Mi testimonio*, Buenos Aires, Lasserre Editores, 1977, p. 16.

mundo heredado, la búsqueda de renovadoras formas expresivas y la experiencia compartida de la represión del onganato le daban a ese multifacético mapa expresivo un lenguaje común, una cierta percepción y sensibilidad compartida que generaba un campo cultural propio y convergente. Por supuesto, la diversidad de experiencias de la que se nutría, necesariamente implicó clivajes distintos, surgiendo una “diferencia más sutil entre el joven comprometido con la política y el joven pelilargo del rock”⁸⁵, entre quienes argumentaban la necesidad de lanzarse a cambiar de raíz las estructuras del sistema y quienes centraban su acción en el plano de la estética o en todo caso ensayaban formas de socialización y convivencia distintas, apartándose de la sociedad de consumo, como lo intentó el movimiento *hippie*.

Para los que se hicieron cargo de la primera opción, el contexto represivo y el enfrentamiento social más agudo los lanzaron de lleno al plano del compromiso político. Dos ejemplos, de los centenares posibles, nos ubican en esa parábola de construcción de una subjetividad radicalizada. El primero tiene que ver con algunos de los participantes de la experiencia del Instituto Di Tella, centro que alcanzó larga fama en los sesenta por sus prácticas culturales modernistas, innovadoras y vanguardistas. Ante los nuevos dilemas que la dictadura militar imponía, una parte de sus participantes criticaba la praxis del Di Tella como la expresión de un mero diletantismo pequeñoburgués que finalmente contribuía a hacer olvidar y ocultar la situación de explotación de millones de argentinos. Cada vez más comprometidos con las organizaciones sociales emergentes, en conjunto con la CGTA, realizaron la muestra Tucumán Arde. Los artistas expusieron a través de fotos, grabaciones y testimonios la extrema pobreza vigente en la provincia, encabezándola con un cartel que señalaba “Visite Tucumán, jardín de la miseria”. Aunque prontamente clausurada por la dictadura, el hecho simbolizó claramente la concepción de entender como indisociable el hecho artístico de la denuncia y la propuesta de cambio de la sociedad.

El mismo camino se evidencia en el caso del periodista y escritor Rodolfo Walsh⁸⁶,

85 Sergio Pujol: “Rebeldes y modernos. Una cultura de los jóvenes”, en Daniel James (comp.), *Nueva Historia Argentina*, tomo 9, Buenos Aires, Sudamericana, pp. 311-312.

86 Rodolfo Walsh se transformó en el paradigma del intelectual comprometido políticamente con las clases populares, por lo que algunos lo denominaron “el anti Borges.” Excelente escritor, obtuvo el Premio Municipal de Literatura por sus cuentos policiales, pero se hizo masivamente conocido por sus investigaciones periodísticas como *Operación Masacre* – donde ponía al descubierto la trama de fusilamientos clandestinos en los basurales de José León Suárez, ordenados por la dictadura de Aramburu– pasando por *El caso Satanowsky* y *Quién mató a Rosendo*. Uniendo su oficio a la militancia política ayudó a fundar la agencia de noticias cubana Prensa Latina, fue director del semanario *CGT*, órgano de

quien prácticamente para la misma época anotaba en su diario personal reflexiones como “tiene que ser posible recuperar la revolución desde el arte (...) recuperar, entonces, la alegría creadora, sentirse y ser un escritor pero saltar desde esa perspectiva el cerco, denunciar, sacudir, inquietar, molestar (...) las normas de arte que he aceptado —un arte minoritario, refinado, etc.— son burguesas; tengo capacidad para pasar a un arte revolucionario, aunque no sea reconocido como tal por las revistas de moda. Debo hacerlo”⁸⁷. El dilema de Walsh no era individual, era colectivo y representativo de toda una franja de intelectuales que, acicateados por el refuerzo de las lógicas disciplinadoras del poder, iniciaban su tránsito hacia las primeras líneas del conflicto social.

A su vez, como vimos, la ofensiva del capital para aumentar la productividad, el deterioro de las condiciones de trabajo y el encarecimiento del costo de vida llevaban a potenciar una clase obrera cada vez más dispuesta al enfrentamiento que, como no sucedía desde hacía mucho tiempo, se conectaba con las percepciones de amplias franjas de la clase media.

De esta manera la acción de la dictadura contribuía a engendrar su propia oposición y, paradójicamente, a prestar legitimidad a las metodologías de acción directa que se propagarían en la etapa. El tópico común acerca de que la violencia engendra violencia pareció ser la divisa más acertada para graficar la dinámica de una época, aunque en el sentido inverso a como lo han querido los apologistas de la teoría de los dos demonios.

5.3 La situación internacional

Finalmente debemos mencionar un dinámico contexto internacional que se interrelacionaba con los procesos internos del país aportando unas veces influencias directas, otras, un clima de efervescencia y vientos de cambio que se dejaban oír en todas las latitudes.

El cada vez más perceptible agotamiento del modelo capitalista keynesiano de posguerra potenciaba que en el denominado “primer mundo” se instalara una ola de conflictos sin precedentes cercanos. Desde el insurreccional Mayo francés protagonizado en 1968 por los estudiantes de París, pasando por la prima-

prensa de la CGT de los Argentinos. Miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y, posteriormente, de Montoneros. Tras su denuncia pública en una carta abierta al gobierno dictatorial encabezado por Videla, un grupo de tareas de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) intentó secuestrarlo y Walsh murió combatiendo.

87 Citado en Martín Caparrós y Eduardo Anguita, *op. cit.*, pp. 254-255.

vera de Praga en Checoslovaquia, que desafió a la ortodoxia soviética, hasta los estudiantes mexicanos masacrados por el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en lo que se conoció como “la noche de Tlatelolco”, la insubordinación civil sacudía al mundo.

Mientras en África y Asia los movimientos de liberación dibujaban un nuevo mapa, el propio Estados Unidos se encontraba cada vez más empantanado en la guerra de Vietnam. Paralelamente, el establishment norteamericano se enfrentaba con un alto crecimiento de la protesta social al interior de sus fronteras, con epicentro en el rechazo a la guerra, la movilización de la población negra por la conquista de sus derechos civiles y el descontento de amplias capas de la población estudiantil universitaria, al tiempo que su propia hegemonía en América Latina se encontraba amenazada. Si el triunfo de la Revolución Cubana llevó al hecho inédito de un país socialista a kilómetros del Imperio, la posterior derrota y asesinato de Ernesto “Che” Guevara en su campaña boliviana de 1967 junto al fracaso de la primer oleada guerrillera en el continente, lejos de disminuir la simpatía hacia la experiencia caribeña, la había aumentado de manera exponencial, convirtiendo al Che en arquetipo moral de miles de jóvenes en todo el planeta.

En el cercano Uruguay, los Tupamaros sorprendían al mundo con sus primeras acciones armadas efectuadas con escaso derramamiento de sangre y una audacia innovadora. De manera mucho más inesperada, golpes de Estado llevados adelante por las Fuerzas Armadas de Panamá y Perú asumían a través de sus líderes –Omar Torrijos y Juan Velazco Alvarado respectivamente– un perfil nacionalista y visiblemente antinorteamericano. El año 1970 trajo otro ejemplo original. Una coalición de izquierdas triunfaba en las elecciones chilenas y Salvador Allende llegaba al gobierno con su proyecto de “vía pacífica al socialismo”.

Esa revuelta situación internacional aportaba ejemplos, figuras míticas, ideologías y estrategias a todos los que en el país habían agotado la paciencia con la dictadura potenciándoles la certeza de que el mundo había entrado en una etapa de cambios revolucionarios indetenibles.

De ese complejo entrelazamiento de causas internas y externas, políticas, económicas, sociales y culturales que hemos reseñado, surgía la subjetividad que construía distintas formas de lucha –huelgas, tomas, movilizaciones, insurrecciones, acciones armadas– que incluían diversas gradaciones de violencia, como un aspecto natural de las luchas populares y autolegitimado en la necesidad de respuesta a “la violencia de arriba”.

Comprender esto y adentrarse en las percepciones de la época, es un camino alternativo a la construcción de juicios de valor sobre la proble-

mática de la violencia, hechos desde una sociedad radicalmente diferente, como la que hoy nos toca vivir, y por lo tanto ajenos al tiempo que la engendró. No fue, por consiguiente, un producto importado por la “subversión mundial” ni ajeno y externo a la sociedad argentina. Había sido parido, lenta pero inexorablemente, por el propio proceso histórico y por las movilizaciones sociales que las clases dominantes del país contribuyeron como nadie a crear.

En este camino, el recurso a la fuerza no fue sino el desarrollo lógico e histórico de una herramienta válida en el marco de esa situación particular. Por lo tanto, creemos que la violencia setentista debe ser entendida como un acontecimiento social, efecto de la sociedad jerárquica y desigualitaria y signo visible del conflicto que, siempre existente en el marco del capitalismo, discurrió esta vez y para el horror posterior de las clases medias, sin falsos eufemismos. Teniendo esto en cuenta, creemos que la etapa debe ser revisada en una operación dialéctica de identificación y toma de distancia, sin que la crítica desaparezca para dejar lugar a la identidad, pero donde la “vindicación” no excluya la toma de partido⁸⁸.

Tercera parte: la retirada

Una vez analizadas las múltiples fracturas del régimen de junio y las alternativas que de sus propias contradicciones comenzaron a surgir, nos queda retomar la dinámica histórica de la Revolución Argentina para ver cuál fue el destino de ese proceso que tuvo su eclosión en los últimos años de la década del sesenta.

6. El fracaso de reflotar la dictadura

Desde la herida mortal que implicó el Cordobazo, el gobierno de Onganía asistió a un lento pero inexorable deterioro de su poder político que terminaría por provocar su caída.

En el plano económico los indicadores señalaban el desmejoramiento de la balanza de pagos, la caída de reservas del Banco Central, la interrupción de las inversiones de capital extranjero, la suba de las tasas de interés y la reaparición de las presiones inflacionarias, lo que ponía en evidencia que el problema de

88 Omar Acha: “La historia vindicadora en Osvaldo Bayer”, *Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política*, vol. 6, N° 16, julio de 2001.

fondo era que la gran burguesía monopolista había perdido su confianza en el gobierno y lo juzgaba incapaz de mantener el orden. Al mismo tiempo las organizaciones del campo, representativas de la burguesía agraria, hacían oír su voz de descontento de manera cada vez más intensa, tanto por su antiguo reclamo en contra de las retenciones a las exportaciones como por las nuevas medidas gubernamentales que, para intentar detener la acelerada suba de los precios de la carne, fijaban precios máximos y una periódica veda de venta de carne en el mercado interno. Las diferencias dentro de la clase dominante se agudizaban y, si Onganía pervivió por algún tiempo al derrumbe, esto se debió sin duda a la perplejidad del bloque dominante ante la situación de aceleramiento de las luchas populares.

En las Fuerzas Armadas se acentuaba cada vez más la contradicción ya señalada entre un Onganía cada vez más aferrado a su proyecto corporativista y la visión de los altos mandos, particularmente del jefe del Ejército Alejandro Agustín Lanusse, quien veía la necesidad impostergable de reconstruir un cierto grado de consenso. Ese tema avivaba la polémica interna centrada en si el control final de las decisiones gubernamentales residía en la Junta de Comandantes o exclusivamente en el propio Onganía.

A su vez las luchas sociales agregaban nuevas insurrecciones y puebladas⁸⁹, como la reedición del Rosariazo, en septiembre de 1969, mientras las acciones de las organizaciones guerrilleras crecían en cantidad y calidad. Por allí vendría el hecho que terminaría de catapultar a Onganía fuera del poder. El 29 de mayo de 1970, a un año exacto del Cordobazo, la organización político-militar Montoneros se daba a conocer públicamente a través del secuestro y posterior ejecución del ex presidente *de facto* Pedro Eugenio Aramburu. El hecho terminaría de acelerar los tiempos de un golpe interno, y en junio de 1970, los comandantes de las tres fuerzas derrocarían a quien ellas mismas habían entronizado en el poder.

La Junta Militar colocaba en la presidencia al desconocido general Roberto Marcelo Levingston, por entonces agregado militar en la embajada argentina en Estados Unidos. Su atractivo para los jefes militares residía en su carencia de

89 Pablo Pozzi y Alejandro Schneider: “El Cordobazo y el auge de masas”, en Juan Carlos Cena (comp.), *op. cit.*, p. 330. Los autores introducen en este trabajo una diferenciación entre las categorías de “pueblada” y de “insurrección”. La segunda se caracterizaría no sólo por cuestionar al régimen sino también al sistema capitalista en su conjunto. La primera, en cambio, parte de reivindicaciones locales, su eje está puesto en poner en tela de juicio el régimen y en términos de participación social cuenta con el protagonismo de los notables de la localidad y el pueblo en general, con una tendencia a que este último rebase a los primeros y éstos, a su vez, pongan límites a la movilización popular.

mando efectivo de tropas, por lo que calculaban —equivocadamente— que sería un simple “títere” de las decisiones tomadas por la cúpula militar.

De este modo, tras un período de reacomodamiento, Levingston llevó adelante un proyecto propio de poder a partir de la llegada de Aldo Ferrer al Ministerio de Economía. El mismo consistió en el intento de reestructurar la política de alianzas de la dictadura con el objetivo de conseguir una dosis de legitimidad mayor para su gobierno. En palabras de Portantiero, “así como las Fuerzas Armadas habían sido el eje del proyecto neodependiente, debían transformarse ahora en principal sostén de un proceso tendiente a permitir que la burguesía agraria y el capital nacional ganaran posiciones, en detrimento del capital monopolista, que debería dar un paso al costado, y, en algunos aspectos, sufrir las consecuencias de medidas económicas que los perjudicaban”.⁹⁰

Para hacer posible la recreación del bloque dominante, Ferrer lanzó una batería de medidas donde se ponía en marcha una redistribución del crédito bancario más favorable para los sectores pequeños y medianos del capital agrupados en la CGE (Confederación General Económica), al tiempo que retornaba al esquema proteccionista elevando los aranceles aduaneros a la importación. La nueva divisa de la política económica pasó a ser la del “compre argentino” en detrimento de la anterior internacionalización prevista por Krieger Vasena. Asimismo, para atraer a la burguesía agraria se dispuso suspender el impuesto a la exportación de carnes mientras que, buscando ampliar la base de sustentación a la burocracia sindical, se otorgaban módicos aumentos salariales y la promesa de un pronto retorno a la negociación paritaria.

El proyecto partía de la firme decisión de no llevar adelante ninguna apertura electoral y, el propio Levingston se encargó de remarcar públicamente que la Revolución Argentina se prolongaría al menos por cuatro o cinco años más. A cambio, se abogaba por la creación de un supuesto movimiento nacional que no era otra cosa que la búsqueda de articular una expresión política como sostén del régimen, intento que, dada la debilidad del gobierno, obtendría un escaso eco entre la clase política de Argentina.

La búsqueda de relanzar la dictadura muy pronto demostró su inviabilidad estructural y Levingston apenas prolongó su estadía en la Casa Rosada por nueve meses. Lejos de cerrar las brechas abiertas en las clases dominantes, el intento de articulación de un nuevo bloque de poder aceleraba las tensiones vigentes. La burguesía industrial monopólica reaccionó virulentamente ante lo que juzgaba como la dilapidación de todas las reformas llevadas adelante durante el período de Krieger Vasena. Ante esa reacción, Levingston se sintió tentado

90 Juan Carlos Portantiero: “Clases dominantes y crisis política...”, *op. cit.*, p. 108.

a redoblar la apuesta y muy pronto se encontró embarcado en un enfrentamiento con algunas de las grandes empresas asentadas en el país. Esa puja, más verbal que real, terminó de revelar la soledad del gobierno, ya que ni siquiera sus supuestos beneficiarios, particularmente el empresariado nacional, estaban dispuestos a embarcarse a fondo en el forcejeo con las fracciones más concentradas del capital industrial. O'Donnell explica esa actitud remisa de los sectores más débiles de la burguesía señalando que “su interés es fortalecer su posición de negociación ante el capital transnacional y sustraerle la explotación directa de algunas actividades estratégicas, pero de ninguna manera excluirlo del mercado interno. Su imbricación con aquel capital, y la del conjunto de esta sociedad, es tan profunda que esa exclusión provocaría lo que menos quiere como burguesía: el colapso de la economía y/o un gran salto adelante hacia una alternativa socialista (...) Ni los fabricantes de repuestos para automotores, ni los de productos de venta masiva elaborados con tecnología importada (...) querían ir más allá de conquistar una sólida cabecera de puente en el gobierno para desde allí renegociar con el capital transnacional las modalidades de su vinculación”⁹¹.

De este modo, al sobreactuar en su discusión con la burguesía monopólica, Levingston se convertía en un obstáculo de la renegociación pendiente entre las dos fracciones de la burguesía industrial, lo cual indudablemente acentuaba su aislamiento. En segundo lugar, la obcecación del gobierno en negar la posibilidad de elecciones profundizaba el descontento social y lo alejaba de toda negociación seria con los representantes de los principales partidos que, ante los nuevos tiempos, se apresuraban a retornar como actores protagónicos dada la probabilidad de reapertura democrática. Un síntoma de este clima fue la “Hora del Pueblo” constituida en noviembre de 1970, donde una junta interpartidaria compuesta por peronistas y radicales, junto a otros partidos menores, exigía públicamente un pronto llamado a elecciones generales con fecha precisa.

Por otra parte, el proyecto encarnado por Levingston necesitaba de un apoyo monolítico de las Fuerzas Armadas que a esa altura resultaba impensable. Desgaste por el ejercicio del poder y jaqueadas por la movilización popular, no podían ya jugar ese rol. La puja entre un presidente que pretendía imponer su voluntad por sobre la de la Junta de Comandantes en Jefe parecía reeditar la situación ya vivida con Onganía, situación que no sería tolerada por el alto mando del Ejército.

Por último y por sobre todo, los intentos de recomposición del bloque dominante se encontraban delimitados y condicionados por la insubordinación civil, que se hacía sentir de manera incansable. Ninguno de los ac-

91 Guillermo O'Donnell: *El Estado burocrático...*, op. cit., p. 339.

tores sociales que lideraban la protesta estaba dispuesto a comprar el espejismo de un régimen dictatorial súbitamente reconvertido a propuestas “populares”. Por el contrario, se reforzaban sus alas más radicales, como lo demostraría, en marzo de 1971, el estallido del segundo Cordobazo, conocido como el Viborazo⁹².

La jornada de lucha dispuesta por la CGT provincial el 12 de marzo culminó con la muerte del trabajador de Fiat Adolfo Cepeda, a manos de unidades policiales, para desembocar finalmente en los hechos del 15 de marzo, cuando una concentración masiva derivó en una insurrección aun más intensa que el primer Cordobazo. A diferencia de la experiencia anterior, esta vez el foco principal del conflicto se había instalado en los barrios obreros de la ciudad, rápidamente controlados por los manifestantes y con fuerte presencia de las organizaciones armadas junto al protagonismo de los sindicatos clasistas de Sitrac-Sitram. Mientras Camilo Uriburu renunciaba a la gobernación —según lo retrataban los medios gráficos de la época, “devorado por la víbora”— el gobierno asistía atónito a una sucesión de puebladas en otras ciudades del interior del país (Casilda en Santa Fe, Orán en Salta y Cipolletti en Río Negro). El episodio terminaría, como no podía ser de otra manera, con Levingston derrocado y Lanusse finalmente en la Presidencia.

7. Lanusse: el “Gran Acuerdista”

El ciclo de los “azos” se mostraba entonces como la punta del iceberg de un proceso mucho más complejo y profundo. A la movilización de la sociedad en su conjunto venía a sumarse, como vimos, el crecimiento exponencial de las organizaciones armadas, el estudiantado en pie de lucha y la experiencia del movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. En este contexto de agitación y ebullición —que algunos autores como Portantiero han calificado de “situación revolucionaria”⁹³ en referencia al concepto leninista⁹⁴—, la Revolución Argen-

92 El nombre tiene su origen en un discurso del gobernador de Córdoba Camilo Uriburu, quien a poco de asumir afirmó: “Declaro sí, que confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza, pido a Dios, me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo” (citado en Oscar Anzorena, *op. cit.*, p. 162). El anacrónico lenguaje medieval con que el funcionario se refería a la protesta social muy pronto encontraría su respuesta.

93 Juan Carlos Portantiero, *op. cit.*, p. 84.

94 Lenin describía una situación revolucionaria como aquella instancia en la cual los de arriba ya no podían gobernar mientras que los de abajo ya no aguantaban más.

tina estaba agotada. La cuestión que se planteaba ahora era la de encontrar una puerta de salida “digna” para las cabezas visibles del golpe de junio, y por otro lado establecer una agenda política que debía convocar a elecciones presidenciales para el año entrante, llamando a lo que se conoció como el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN). Sin embargo, este acuerdo ocultaba más de lo que mostraba. A través del mismo, Lanusse intentaba encolumnar a todos los sectores de la sociedad en un mismo frente que condenara las acciones armadas de los grupos más radicalizados, aislándolos, para luego proceder a su aniquilamiento. Para esto devolvió a la legalidad a los partidos políticos y se levantaron las sanciones impuestas a la CGT en un intento de normalización de la vida institucional.

Además, la lógica del GAN intentaba salvaguardar la unidad de las Fuerzas Armadas, asegurándose que, en el próximo gobierno, éstas conservarían un peso decisivo en el aparato del Estado. En este mismo sentido, se buscaba además evitar bajo todo concepto que el próximo gobierno investigara el accionar de los militares durante la dictadura de la Revolución Argentina. Como parte de la misma dinámica, se intentaba impedir que se llevara adelante la tan temida amnistía de los combatientes guerrilleros y los líderes obreros encarcelados en el período. Este último intento sería infructuoso.

Lanusse no ocultaba su intención de allanar el camino para ser ungido nuevamente presidente de los argentinos, pero esta vez con la legitimidad del voto popular. En su aspiración de máxima, él mismo debía ser el candidato de la unidad nacional, para lo cual se jugaría una carta riesgosa e inédita desde el año 55: convocar al peronismo a formar parte de las negociaciones buscando el aval del mismísimo Perón para el Gran Acuerdo. En una política de acercamiento y seducción hacia el viejo caudillo, Lanusse llevó a cabo algunos gestos por demás simbólicos, como la devolución del cadáver de Evita luego de su largo exilio forzado, el reintegro de su grado de general, así como la suma acumulada de todos sus salarios incautados desde 1955 hasta la fecha.

Lo que impidió este esquema fue, por un lado, que la ofensiva popular y el conflicto social no se detuvo, lo que dificultaba a los sectores más negociadores a acercarse demasiado al gobierno de Lanusse a riesgo de quedar atrapados en el repudio social. Por otra parte, Perón no fue tan fácilmente tentado, y hacia fines de 1972 rompió con las negociaciones y tomó distancia de Lanusse.

Evidentemente el líder pensaba que sólo él podía ubicarse al frente de la movilización social, por lo cual su posición de fuerza le permitía no tener que hacer concesiones de ningún tipo. Sin embargo, ni el mismo Perón controlaba a los sectores sociales que encarnaban la oleada revolucionaria. Lo que sí podía hacer— y así lo hizo— era integrar en su estrategia hechos que no dependían de su volun-

tad. De esa manera su juego político se articulaba sobre la base de dos patas: por un lado, buscaba acuerdos políticos sumamente amplios, incluyendo a sus viejos rivales radicales, para abrir la puerta de negociaciones que le permitieran conseguir las elecciones sin proscripciones. Por el otro, buscó golpear permanentemente a la dictadura, negándose en todo el período a cuestionar las acciones de la guerrilla y alentándola secretamente para que avanzara, integrándola como actores legítimos del movimiento peronista bajo el rótulo de “formaciones especiales”. De esa manera en un doble juego de pinzas se reservaba una vía pacífica que le permitiera retornar al poder, a la vez que utilizaba la carta de una revolución radicalizada para obligar a Lanusse y al establishment a negociar desde una posición de debilidad. Este carácter múltiple del diseño político del General hacía que los heterogéneos actores del movimiento peronista creyeran que la decisión final del líder se inclinaría hacia el término de la estrategia que más beneficiaba a cada una. Los políticos del movimiento y la burocracia sindical esperaban ser los protagonistas privilegiados de la salida institucional, mientras que las organizaciones armadas peronistas –particularmente Montoneros– veían al General Perón como el estratega de una salida revolucionaria que reemplazaría al sistema capitalista por su proclamado socialismo nacional.

Embarcado en esa respuesta al GAN, Perón endureció cada vez más su postura desplazando a su delegado personal en el país, Jorge Daniel Paladino –de evidentes y promiscuos contactos con el gobierno–, reemplazándolo por Héctor J. Cámpora, un viejo político cuyo principal capital era su lealtad personal total hacia el líder. Con Cámpora se reforzaban los sectores duros del peronismo mientras Lanusse se encontraba jaqueado, tanto por la oposición popular como por el rechazo de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a admitir la salida electoral y amenazaban con concretar un golpe que prolongaría la dictadura.

Ante la negativa de Perón de integrarse al GAN, Lanusse redobló la apuesta e introdujo las famosas cláusulas por las cuales él mismo quedaba imposibilitado para presentar su candidatura en las elecciones presidenciales del año entrante, pero Perón tampoco podría hacerlo en virtud de carecer de un mínimo tiempo estipulado de residencia en el país. Además, en lo que respecta al conflicto social, en el último tramo del año 1972 se acentuó la represión por parte del gobierno. En este marco, el 22 de agosto de ese año las Fuerzas Armadas asesinaron en Trelew a un grupo de activistas de las organizaciones ERP, Montoneros y FAR que habían ayudado en la fuga de seis de sus más altos jefes del penal de Rawson. Fue la tristemente célebre “masacre de Trelew”. En esta misma dirección se transformaron también los mecanismos de confrontación con la guerrilla y se comenzó a ensayar la estrategia de desaparición de personas –incluso antes de la masacre de Trelew–, la intensificación del uso de la tortura clandestina y la exterminación física del enemigo. Algunos analistas e historiadores han calificado certeramente

a este período como el laboratorio de lo que sería la represión y el terrorismo de Estado implantado brutalmente el 24 de marzo de 1976⁹⁵.

El 17 de noviembre de 1972 el avión que traía de vuelta a Perón tocaba suelo en el aeropuerto de Ezeiza. El líder llegaba a Argentina tras diecisiete años de exilio forzado, y lo hacía para ungir al candidato que lo representaría en las elecciones. Contra muchos pronósticos, Héctor J. Cámpora sería quien llevaría las insignias del justicialismo en el frente que se había conformado tras la divisa de “Cámpora al gobierno, Perón al poder” —el frente conocido como FREJULI (Frente Justicialista de Liberación). Perón imponía a su candidato por encima del propuesto por la CGT liderada por José Ignacio Rucci, el economista Antonio Cafiero. Nuevamente, como en las circunstancias de 1966 que rodearon el derrocamiento de Illia, las vísperas de elecciones presidenciales dirimían la lucha por el manejo del movimiento peronista entre el propio Perón y los líderes de la CGT y las 62 organizaciones, y al igual que en aquel año, el viejo General confirmaba una vez más su liderazgo indiscutible desplazando a la burocracia sindical del protagonismo en la campaña electoral.

Perón cimentaba de esta manera una alianza social sumamente heterogénea, apoyada en los sectores radicalizados de las organizaciones armadas peronistas, la burguesía ligada al capital nacional, obviamente el movimiento obrero, los sectores medios y parte de la intelectualidad recientemente —y no tanto— peronizada. Esa alianza ciertamente eficaz a la hora de los comicios no lo sería tanto una vez restaurado el justicialismo en el poder.

El gobierno de Lanusse, en un último manotazo de ahogado, modificó la ley electoral instaurando el mecanismo de segunda vuelta si la primera fuerza no alcanzaba el 50 por ciento de los votos, con la esperanza de contraponer una alianza que reuniera a todos los sectores antiperonistas en un hipotético *ballottage*. Un 49 por ciento de la población que votó por la fórmula Cámpora-Solano Lima el 11 de marzo del 73, contra un ínfimo 21 por ciento obtenido por los radicales Balbín-Gamond, dio por tierra con la estrategia de Lanusse.

Luego del interregno camporista y pasando por un efímero mandato provisional de Raúl Lastiri —en razón de la acefalía desatada por la renuncia conjunta de Cámpora y Lima—, el tan odiado por muchos pero siempre aclamado por las mayorías volvía triunfalmente a vestir la faja presidencial. Perón en el gobierno, lejos de cerrar viejas heridas, abriría una caja de Pandora de final —en ese momento— incierto. Este nuevo capítulo en la historia argentina, sin embargo, es para nosotros tema de otro trabajo.

95 Eduardo Luis Duhalde: *El Estado terrorista argentino. 15 años después, una mirada crítica*, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

Conclusiones

La Revolución Argentina se propuso reestructurar la sociedad en su totalidad. Detrás de un discurso integrista y autoritario se articularon los intereses de la burguesía más concentrada y del capital transnacional. Estos intereses, que por un largo tiempo habían buscado la vía para transformar la estructura económica y el modelo de acumulación, encontraron finalmente la puerta de entrada de la mano de la institución militar. Aquello que no se había logrado por el camino de la institucionalidad, se implantaba ahora por la fuerza. No obstante, la sociedad no permaneció impasible, y la presión que venía acumulándose desde el golpe de Estado de 1955 estalló finalmente en los años de la dictadura de Onganía. Aquella situación de “crisis de hegemonía” pasaba a ser ahora una “crisis orgánica”, en la cual no solamente la burguesía se hallaba fracturada como clase sino que a esa falta de homogeneidad se oponía un enemigo cada vez más organizado y decidido. Los últimos suspiros de la Revolución Argentina son entonces testigos de un marasmo social de apariencia incontenible por los sectores dominantes. Aquel proyecto que se mostraba contundente y sin fisuras, que se presentó como una autocracia refundadora de la Nación, no hizo más que avivar el fuego de la rebelión. Así, si bien la movilización de masas, tanto como las organizaciones armadas, no fueron hijos directos de la dictadura militar del 66, sí lo fueron la radicalización de la lucha, el crecimiento exponencial de la violencia política y la institución de un punto de no retorno. De allí en más, las cartas estaban echadas y la salida tenía sólo dos caminos posibles: la revolución o el genocidio. El final es hoy, para todos nosotros, tristemente conocido.

Bibliografía

- Acha, Omar, “La historia vindicadora en Osvaldo Bayer”, *Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política*, vol. 6, N° 16, julio de 2001.
- Ansaldi, Waldo *et al.*, *Argentina en la paz de dos guerras*, Buenos Aires, Biblos, 1994.
- Anzorena, Oscar, *Tiempos de violencia y utopía*, Buenos Aires, Contrapunto, 1998.
- Balvé, Beba, *et al.*, *Lucha de calles. Lucha de clases. Elementos para su análisis: Córdoba 1971-1969*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1973.
- Bonavena, Pablo *et al.*, *Orígenes y desarrollo de la guerra civil en la Argentina, 1966-1976*, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del CBC/UBA, 1995.

- Brennan, James, “El clasismo y los obreros. El contexto fabril del sindicalismo de liberación en la industria automotriz cordobesa, 1970-75”, *Desarrollo Económico*, vol. 32, N° 125, 1992.
- Brennan, James, *El Cordobazo: las guerras obreras en Córdoba 1955-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1996.
- Caparrós, Martín y Anguita, Eduardo, *La voluntad*, tomo 1, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.
- Castellano, Axel y Nicanoff, Sergio, *La Historia del “Vasco” Bengoechea y las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional*, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, Cuaderno de Trabajo Número 29, 2004.
- Cavarozzi, Marcelo, *Autoritarismo y democracia (1955-1983)*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.
- Collier, David (comp.), *El nuevo autoritarismo en América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
- CONADEP, *Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional para la Investigación de la Desaparición de Personas*, Buenos Aires, Eudeba, 1984.
- Debray, Régis, *Révolution dans la Révolution, et autres essais*, París, Maspero, 1969; *La crítica de las armas* (2 vols.), México, Siglo XXI, 1975; *La guerrilla del Che*, México, Siglo XXI, 1988.
- Del Campo, Hugo, *Sindicalismo y peronismo*, Buenos Aires, Clacso, 1983.
- Duhalde, Eduardo Luis, *El Estado terrorista argentino. 15 años después, una mirada crítica.*, Buenos Aires, Eudeba, 1999.
- Gasparini, Juan, *Montoneros. Final de cuentas*, Buenos Aires, Puntosur, 1988.
- Gerchunoff, Pablo y Llach, Lucas, *El ciclo de la ilusión y el desencanto*, Buenos Aires, Ariel, 1998.
- Gillespie, Richard, *Montoneros. Soldados de Perón*, Buenos Aires, Grijalbo, 1987.
- Gordillo, Mónica, “Hacia el Cordobazo”, en Cena, Juan Carlos (comp.), *El Cordobazo, una rebelión popular*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2000.
- Gramsci, Antonio, “Oleada de Materialismo y crisis de Autoridad”, en Thwaites Rey, Mabel et al., *Gramsci mirando al Sur*, s/d.
- Hobsbawm, Eric, *La era del capital, 1848-1875*, Buenos Aires, Crítica, 1999.
- Iñigo Carrera, Nicolás, “Apuntes sobre el Cordobazo”, en Cena, Juan Carlos (comp.), *El Cordobazo, una rebelión popular*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2000.
- James, Daniel, “La Izquierda peronista (1955-75)”, mimeo.
- James, Daniel, *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina. 1946-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1988.
- Lanusse, Alejandro Agustín, *Mi testimonio*, Buenos Aires, Lasserre Editores, 1977.
- Mallon, Richard y Sourrouille, Juan Vital, *La política económica en una sociedad conflictiva: El caso argentino*, Buenos Aires, Amorrortu, 1973.
- Mazzei, Daniel, *Los medios de comunicación y el golpismo. La caída de Illia 1966*, Buenos Aires, Grupo Editor Universitario, 1997.
- Murmis, Miguel y Portantiero, Juan Carlos, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972.
- O'Donnell, Guillermo, “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, *Desarrollo Económico*, vol. 16, N° 64, enero-marzo de 1977.

- O'Donnell, Guillermo, "Modernización y golpes militares", *Desarrollo Económico*, vol. 12, N° 47, octubre-diciembre de 1972.
- O'Donnell, Guillermo, *El Estado burocrático autoritario*, Buenos Aires, Ediciones de Belgrano, 1982.
- O'Donnell, Guillermo, *Modernización y autoritarismo*, Buenos Aires, Paidós, 1972.
- Peralta Ramos, Mónica, *Acumulación del capital y crisis política en Argentina (1930-1974)*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1985.
- Petras, James, "Córdoba y la revolución socialista", en Cena, Juan Carlos (comp.), *El Cordobazo. Una rebelión popular*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2000.
- Portantiero, Juan Carlos, "Economía y Política en la Crisis Argentina: 1958-1973" en *Revista Mexicana de Sociología*, N° 2, 1977.
- Portantiero, Juan Carlos, "Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual", en Braun, Oscar (comp.), *El capitalismo argentino en crisis*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.
- Pozzi, Pablo y Schneider, Alejandro, "El Cordobazo y el auge de masas", en Cena, Juan Carlos (comp.), *El Cordobazo, una rebelión popular*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2000.
- Pozzi, Pablo y Schneider, Alejandro, *Los setentistas*, Buenos Aires, Eudeba, 2000.
- Pucciarelli, Alfredo, "Dilemas irresueltos en la historia reciente de la sociedad argentina", *Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política*, vol. 2, N° 5, noviembre de 1997.
- Pujol, Sergio, "Rebeldes y modernos. Una cultura de los jóvenes" en James, Daniel (comp.), *Nueva Historia Argentina*, tomo 9, Buenos Aires, Sudamericana.
- Ramondetti, Miguel, conferencia citada en *Cuadernos del Centro de Estudios José Carlos Mariátegui: Los 70 en los 90*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1994.
- Rot, Gabriel, *La historia de Jorge Ricardo Massetti y el Ejército Guerrillero del Pueblo*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.
- Rouquié, Alain, "Hegemonía militar, Estado y dominación social", en Rouquié, Alain (comp.), *Argentina, hoy*, México, Siglo XXI, 1982.
- Rouquié, Alain, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, 2 vols., Buenos Aires, Emecé, 1982.
- Salas, Ernesto, *Uturuncos. La guerrilla olvidada de la Resistencia Peronista*, Buenos Aires, Biblos, 2003.
- Schvarzer, Jorge, *La industria que supimos conseguir*, Buenos Aires, Planeta, 1996.
- Smulovitz, Catalina, "La eficacia como crítica y utopía. Notas sobre la caída de Illia", *Desarrollo Económico*, vol. 33, N° 131, octubre-diciembre de 1993.
- Torre, Juan Carlos *Los sindicatos en el Gobierno. 1973-1976*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1989.
- Waldmann, Peter, "Anomia social y violencia", en Rouquié, Alain (comp.), *Argentina, hoy*, México, Siglo XXI, 1982.
- Zannatta, Loris, *Del Estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo, 1930-1943*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.

Regreso y fracaso en tres actos: el peronismo (1973-1976)

Sergio Nicanoff y Fernando Pita

Introducción

El presente trabajo se centra en los sucesos y procesos desarrollados durante el retorno del peronismo al gobierno en la etapa 1973-1976. Para poder abordar la complejidad y riqueza del período —momento histórico donde se suceden a un ritmo vertiginoso contradicciones y cambios políticos, sociales y económicos largamente gestados— partiremos de los siguientes ejes de análisis.

En primer lugar consideramos que el retorno del peronismo se enmarcó en un intento de clausurar la crisis orgánica abierta a partir del Cordobazo de 1969 y de recuperar el poder legitimador del Estado recreando un sistema político capaz de controlar la conflictividad social a partir de su institucionalización y cooptación. Se propuso eliminar (por represión y aislamiento) a los nuevos actores sociales no reabsorbibles por el sistema en la medida en que éstos representaban la continuidad de prácticas autónomas de las clases subalternas. La enorme paradoja del período es que ese intento de relegitimación partió de la fuerza política que había encarnado para las mayorías populares su anhelo de cambios y que durante 18 años había sido excluida del sistema político. La contradicción entre las expectativas de transformaciones revolucionarias de importantes franjas sociales que motorizaban el regreso del peronismo al poder y los objetivos reales de quienes lideraban ese proceso (empezando por el propio Perón) estallaría con toda virulencia marcando a fuego la etapa. Dentro de la heterogénea alianza, creada para hacer posible el regreso del peronismo al gobierno, se expresaría con toda intensidad el conflicto de clases, el enfrentamiento de proyectos antagónicos. La contradicción previa de una sociedad polarizada entre peronismo-antiperonismo dejaba lugar a una guerra entre peronistas que era la evidencia (más espectacular pero no única) de la continuidad de la crisis de dominación. Como veremos, lejos de cerrarse, la crisis orgánica se configuraría bajo nuevas formas en el trienio peronista.

En segundo lugar, veremos que el proyecto nodal del propio Perón consistía en la puesta en marcha de un modelo similar al que había impulsado a mediados de la década del 40. Su núcleo era la recreación del pacto tripartito entre el Estado, los empresarios y los sindicatos para controlar las principales variables de la economía y la renegociación de la dependencia de Argentina a partir del nuevo contexto internacional. Intentaremos demostrar que la profundidad de los cambios estructurales acaecidos desde el golpe de Estado de 1955 tornaba directamente inviable la posibilidad de la aplicación de ese modelo en la Argentina de los 70, por lo que su destino no podía ser otro que el fracaso.

En tercer lugar, veremos cómo se gestan en ese momento (particularmente durante la presidencia de Isabel Perón) nuevas lógicas que presuponen el abandono de los parámetros redistribucionistas del peronismo y el primer intento de adaptar el movimiento peronista a las políticas de ajuste reclamadas por los grandes grupos económicos. En ese sentido, las políticas neoliberales que implementaría la dictadura militar de 1976 tienen un verdadero antecedente en el denominado Rodrigazo¹.

Finalmente nos detendremos en la diversidad de caminos que recorrerán las distintas prácticas de ese torrente social impugnador nacido a fines de los 60. Aunque nunca homogéneo, como ya hemos analizado, el combate común contra la dictadura y el desarrollo de nuevos métodos de lucha fue creando, a grandes trazos, en sus diversos actores, una subjetividad convergente. Al llegar el peronismo al gobierno se configuró un nuevo escenario donde la discusión pasó a estar centrada en el grado de apoyo o no que se le daba al nuevo gobierno, en la caracterización del plan económico y en qué medida éste representaba una etapa de cambios reales o una reestructuración del sistema donde la variable de ajuste continuaban siendo los trabajadores. Las diferentes respuestas a esas preguntas acentuaron, en el trienio peronista, la separación y las divergencias dentro de ese campo potencialmente revolucionario constituido durante la dictadura.

Para el desarrollo de estos ejes analíticos subdividiremos el período en tres etapas, no por una distinción meramente cronológica sino porque entendemos que cada una de ellas tiene elementos que la diferencian de las otras². La prime-

1 En 1975, Celestino Rodrigo, ministro de Economía de Isabel Perón, aplicó un programa de ajuste brutal intentando readecuar el capitalismo argentino a los nuevos planteos de los sectores más concentrados del capital.

2 Tomamos aquí la caracterización elaborada por Maristella Svampa: *El populismo imposible y sus actores, 1973-1976*, en Daniel James (comp.), *Nueva Historia Argentina*, tomo 9, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

ra comienza con la asunción de Héctor J. Cámpora al gobierno y finaliza con su renuncia (del 25 de mayo de 1973 al 13 de julio de 1973). Esos breves días de gestión se enmarcan en una sociedad altamente movilizada que espera modificaciones de fondo y se clausura con el inicio de la depuración política dentro del peronismo.

El segundo momento abarca desde la llegada de Raúl Lastiri a la presidencia, pasando por el regreso de Perón al gobierno hasta su muerte (del 13 de julio de 1973 al 1 de julio de 1974). Implica el pleno despliegue del proyecto del líder, así como la demostración empírica de sus límites e inviabilidad estructural. En ese momento, se agudizan irreversiblemente tanto las contradicciones dentro del peronismo como la dicotomía entre el intento de relegitimación del Estado y del sistema político, por un lado, y la continuidad de la conflictividad social, por el otro.

El tercer período va desde la asunción de Isabel Perón a la presidencia hasta el golpe de Estado que la derroca (del 1 de julio de 1974 al 24 de marzo de 1976). Esta etapa estará marcada por el derrumbe total del proyecto original de Perón, por el intento de reformularlo en función de las necesidades estratégicas del gran capital y por la intensificación de la crisis de dominación abierta en 1969.

Primera parte:

El breve sueño de la “primavera” camporista

1. Nada es igual, todo cambió

El triunfo electoral del 11 de marzo posibilitó el regreso del peronismo al gobierno pero dejó en pie una anomalía heredada de la dictadura. Perón, al no poder ser candidato y delegar ese rol en Héctor J. Cámpora, se encontraba en la situación de que aunque era el líder político del proceso estaba alejado de la Casa de Gobierno. El nuevo presidente distaba de ser el conductor real del movimiento peronista y el suyo era un poder vicario que dependía totalmente del apoyo de Perón para legitimar su ejercicio del gobierno. Esa tensión no tardó en resolverse en detrimento del otrora odontólogo a través de su caída. Previo al desarrollo de ese final, el General desplegó todos sus esfuerzos para impulsar un proyecto político-económico que contaba con tres elementos fundamentales: 1) reinstalar como principal sostén de la economía un pacto social tripartito entre el capital, los sindicatos y el Estado desde donde mantener en caja, mediante la concertación, los precios y los salarios. El liderazgo de ese proceso lo tendría la fracción de la burguesía denominada nacional, a través de la Con-

federación General Económica, cuyo dirigente máximo era José Gelbard³.

2) Consolidar un sistema político relegitimado, para lo cual, a diferencia de su experiencia anterior, se proponía rehabilitar a los partidos políticos y al Parlamento como escenario de negociación y acuerdo. En ese esquema, ocupaba un lugar central el radicalismo, que como principal partido de la oposición debía tener una participación activa en las principales decisiones de gobierno. Para ello, era necesario abrir canales de diálogo y consulta permanentes. 3) Finalmente, y no por ello menos importante, Perón procuraba verticalizar el movimiento peronista desde su conducción, disciplinando (y si eso no sucedía, eliminando) a todas las corrientes internas. Buscaba con ello la institucionalización definitiva, no sólo del peronismo, sino centralmente de la conflictividad social heredada de la dictadura.

Todos esos objetivos tenían que ser implementados por Perón concentrando en su persona la capacidad de arbitraje entre los diversos grupos de poder y facciones mientras se encontraba fuera de la presidencia, en el marco de una sociedad fuertemente movilizada y profundamente distinta a la de la década del 40.

Perón no desconocía esos cambios, pero probablemente subestimaba su magnitud. La dirigencia sindical, tras el golpe de 1955, distaba de ser una fuerza fácilmente manejable desde el Estado. Por el contrario, sus líderes estaban acostumbrados a manejarse con independencia de los deseos de Perón durante su largo exilio y deseaban mantener su status de interlocutores con los restantes factores de poder en el país. Las nuevas corrientes sindicales antiburocráticas que les planteaban un desafío inédito a su conducción los obligaba, más que nunca, a conseguir conquistas concretas para mostrarlas a sus inquietas bases sociales. La contradicción era que para ello debían

3 José Gelbard, elegido directamente por Perón como ministro de Economía en la presidencia de Cámpora, representaba a los medianos y pequeños propietarios de la industria, el campo y la ciudad nucleados en la CGE. Auténtico arquitecto de ese agrupamiento empresarial desde el primer gobierno peronista, había mantenido su liderazgo y la pervivencia de la Confederación tras el golpe de Estado de 1955. El “ruso”, como lo designaban sus íntimos, era el dueño de un importante grupo económico que le permitió acumular una considerable fortuna. Su crecimiento personal iba de la mano de su conocimiento de los pasillos del poder y una multifacética personalidad política. Vinculado desde su juventud al Partido Comunista Argentino (PCA), Gelbard jamás rompió los vínculos que lo unían con esa estructura, a la vez que logró ser hombre de confianza de Perón y tejer estrechos lazos con Lanusse, beneficiándose durante su presidencia con jugosos contratos otorgados por el Estado a las empresas que controlaba. Para una interesante biografía del personaje, véase María Seoane: *El burgués maldito*, Buenos Aires, Planeta, 1998.

renegociar su lugar en el movimiento y su cercanía con el Estado, encontrando apoyo para combatir a sus enemigos; para ello tenían que pagar un precio: renunciar a su juego autónomo con el poder subordinándose a las directivas establecidas por Perón. A su vez, el pacto social diseñado por éste distaba, como veremos, de llenar las expectativas de mejora en el nivel de vida que albergaban muchos trabajadores, con lo que la contradicción permanecería latente, nunca resuelta, para finalmente estallar tras la muerte del líder.

Si en los años 40 Perón había contado inicialmente con el apoyo mayoritario de las Fuerzas Armadas y la Iglesia, muy distinta era la situación que se planteaba en la década de los 70. Ambas instituciones estaban pobladas en sus jerarquías de cuadros profundamente antiperonistas que, ante la nueva coyuntura, optaban por una estrategia de repliegue y reacomodamiento interno a la espera de los futuros tropiezos del nuevo gobierno. En particular para los militares, la preocupación principal pasaba por recuperarse de su fuerte desprestigio social, así como prepararse para los futuros enfrentamientos con lo que avizoraban como el núcleo duro del conflicto social: las organizaciones armadas y el sindicalismo clasista.

Con la llegada de Cámpora, los cambios en las cúpulas militares distaron de ser espectaculares. El nombramiento del general Jorge Carcagno en la jefatura del Ejército instaló en la cúpula de las Fuerzas Armadas a un grupo de oficiales dispuestos a romper con la Doctrina de Seguridad Nacional e imbuidos de un espíritu antinorteamericano⁴. Aun así no expresaban una corriente interna con peso determinante dentro de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, entre la nueva cúpula y el grueso de la oficialidad, existía un divorcio de concepciones que sólo se pudo sostener, por corto tiempo, dada la particular situación social en que asumió el gobierno de Cámpora.

Las bases materiales (divisas de posguerra) y políticas (situación internacional que permitía algún espacio de tibia autonomía para Argentina) que habían posibilitado el ascenso de Perón a mediados de la década del 40 sencillamente no existían en los años 70. Pero, sobre todo, era radicalmente distinto el peso

4 Carcagno pronunció un célebre discurso en la Conferencia de Ejércitos Americanos de Caracas, donde cuestionó las políticas norteamericanas para América Latina. Carcagno abogó por el retiro de las misiones militares estadounidenses y francesas instaladas en Argentina y autorizó la realización del Operativo Dorrego, un plan de reconstrucción de zonas inundadas, llevado adelante en 1973 a través de una acción conjunta entre la Juventud Peronista y las Fuerzas Armadas. En diciembre de 1973, Perón lo desplazó del cargo porque temía que la figura de Carcagno alcanzara dimensiones de liderazgo paralelo en una probable alianza con Montoneros.

social alcanzado (dentro y fuera del peronismo) por aquellos sectores que postulaban modificaciones estructurales de la sociedad. Después de un largo proceso de luchas, con un fuerte prestigio social en el marco de una sociedad altamente politizada, las nuevas organizaciones desarrolladas post-Cordobazo no estaban dispuestas fácilmente a renunciar a sus objetivos de cambios en aras de la gobernabilidad de un sistema al que repudiaban. Allí se encontraba uno de los nudos centrales de la etapa. Perón avaló a los sectores revolucionarios del movimiento en su enfrentamiento con la dictadura contribuyendo a su legitimación e impulsando redefiniciones ideológicas. Un ejemplo de esto era la idea de un socialismo nacional⁵ que suponía el acercamiento del peronismo al campo socialista mundial.

Alentando, como vimos, a la guerrilla tras el rótulo de formaciones especiales y jugando con la idea de un “trasvasamiento generacional” dentro del peronismo que llevaría a los jóvenes a los puestos de dirección, el viejo general ayudó, en esa coyuntura de enfrentamiento contra la dictadura, a que se consolidara la izquierda peronista, particularmente la liderada por Montoneros. Pero, para Perón, esas definiciones tenían un sentido meramente táctico. Las usaba para amenazar con una salida revolucionaria al poder instituido. Lo que realmente buscaba era conseguir un espacio de negociación que le permitiera retornar al gobierno y desplegar su verdadero proyecto: una suerte de capitalismo redistribucionista que renegociara la inserción de Argentina en el sistema capitalista mundial.

El gran equívoco del período es que para los miembros de la Tendencia Revolucionaria del peronismo esas redefiniciones no tenían un sentido táctico sino estratégico. Tras 18 años de proscripción, con una clase obrera mayoritariamente peronista y con altos niveles de combatividad, dueños de la mayor capacidad de movilización del país a través de las multitudinarias columnas de la Juventud Peronista, con simpatías sociales importantes en la población hacia las organi-

5 La formulación de la idea de socialismo nacional en el propio Perón siempre fue ambigua e imprecisa, factible de ser reinterpretada de formas antagónicas. Para los sectores revolucionarios del movimiento se trataba de redireccionar las definiciones ideológicas del peronismo hacia una definición por el socialismo en un sentido marxista. Implicaba romper, en un proceso que se desarrollaría por etapas, con las estructuras capitalistas predominantes en el país. Por el contrario, para los pequeños grupos de ultraderecha del peronismo, el socialismo nacional se asociaba directamente con la experiencia del nazismo o del fascismo italiano. Partían de definir como enemigo principal a la Sinarquía (un supuesto organismo supranacional que reunía a capitalistas, comunistas y judíos con el fin de dominar el mundo) que encarnaban en el país todos los sectores revolucionarios. La solución que proponían era la eliminación física de todos los oponentes.

zaciones armadas, en un contexto de alta conflictividad social, con un líder exiliado que apoyaba sus acciones y hablaba de socialismo, los jóvenes de la Tendencia creyeron que el retorno de Perón al gobierno abría una etapa de modificaciones estructurales. Perón era para ellos un líder que conduciría a la sociedad argentina hacia una revolución socialista. Tras el triunfo electoral en 1973 reclamaban un lugar de dirección en el movimiento que juzgaban suficientemente ganado por los enormes sacrificios de vidas y esfuerzos realizados en la resistencia a la dictadura. Si por una cuestión biológica la vida de Perón llegaba a su término, la dirección de Montoneros se veía a sí misma como su futura heredera bendecida en ese rol por el propio General. La desilusión no tardaría en llegar, pero en ese tránsito se resolvería la contradicción principal que signó al breve interregno camporista: el conflicto entre los que pugnaban por la restauración del sistema y los que se lanzaban a su ruptura. El primer escenario de esa batalla se dio en el interior del peronismo, dirimiéndose quiénes serían los ganadores reales del proceso. Los jóvenes de la Tendencia, para su sorpresa, descubrirían que Perón se encontraba en esa disputa en el polo opuesto al de sus aspiraciones revolucionarias.

2. La continuidad de la crisis de dominación

El gabinete designado por Cámpora reflejaba un reparto de poder dentro de los distintos segmentos del movimiento. Se prolongaba así la indefinición respecto de qué sectores tendrían la hegemonía del proceso político y, por lo tanto, no se conformaba plenamente a nadie; mucho menos a la izquierda peronista que tuvo el papel central en la campaña electoral.

El ministerio del Interior (Esteban Righi) y el de Relaciones Exteriores (Juan Carlos Puig) quedaron en manos de hombres de confianza del propio Cámpora. Aunque en la época se empezó a hablar de camporismo, es necesario aclarar que el mismo nunca se estructuró como corriente interna organizada. En realidad, se trataba de políticos progresistas —dentro del peronismo— vinculados personalmente al entonces presidente que, en muchos temas, podían converger con Montoneros pero no estaban encuadrados dentro de esa organización. Aunque casi excluidos del gabinete, los Montoneros alcanzaron un importante poder institucional, reflejado, sobre todo, en la cercanía política con varios gobernadores, algunos de ellos de distritos clave: Oscar Bidegain en la provincia de Buenos Aires, Ricardo Obregón Cano en Córdoba, Martínez Baca en Mendoza, Miguel Ragone en Salta, Jorge Cepernic en Santa Cruz, así como en el control de la Universidad de Buenos Aires con el nombramiento como rector de Rodolfo Puiggrós.

Las designaciones marcaban el peso que se otorgaba a las corporaciones en áreas clave del gobierno, dados los nombramientos del conductor de la CGE, José Gelbard, en Economía y el de un connotado miembro de la burocracia sindical, Ricardo Otero –hombre de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)–, en el Ministerio de Trabajo. Un alerta mayor para los sectores revolucionarios era la nominación del secretario privado de Perón, José López Rega, como ministro de Bienestar Social. El personaje, conocido como el “brujo” (por su pública vinculación con la astrología y el esoterismo), se había relacionado con la tercera esposa del líder, María Estela Martínez de Perón, en 1965, en el marco del conflicto entre Perón y Augusto Vandor. Desde ese momento, López Rega alcanzaría un enorme ascendiente en el entorno del ex presidente hasta tornarse insustituible. De sólidas relaciones con grupos de extrema derecha de todo el mundo, ligado a la logia secreta Propaganda Dos del empresario italiano Licio Gelli (un organismo con epicentro en Italia, que anudaba contactos con el Vaticano, empresarios, grupos fascistas, la mafia, políticos y jefes militares), el poder de López Rega y su aliada Isabel dependía, al no tener sólidas bases de sustento dentro del movimiento, casi exclusivamente del apoyo y la legitimidad que les otorgaba el propio Perón. La estrategia de ambos residía en hacerse con el control absoluto del peronismo y del gobierno. Conscientes de que la vida de Perón se acababa (aparentemente los informes médicos elaborados en febrero de 1973 adelantaban que al General le quedaba escaso tiempo de vida), ambos veían que si Cámpora quedaba en el gobierno, no tendrían ninguna posibilidad de ejercer su influencia⁶. Aterrados ante ese escenario, se lanzaron rápidamente a conspirar para lograr su caída, llevar a Perón al gobierno y luego colocarse como sus sucesores y preparar el exterminio de todos los sectores revolucionarios dentro (en primera instancia) y fuera del peronismo. Las acciones de este núcleo fascista dentro del peronismo no pueden entenderse desde la mera óptica de las luchas por el poder. Su proyecto expresaba intereses, tanto internacionales como locales, dispuestos a una escalada contrarrevolucionaria para cauterizar la herida abierta por la crisis de dominación.

El punto central del proceso político residía, mucho más que en las conspiraciones de palacio, en una sociedad civil altamente movilizada y con fuertes expectativas de cambio. El temor de los factores de poder frente al gobierno de Cámpora no estribaba en un programa económico-social que se destacaba por su moderación, sino en el clima político de luchas sociales que le daban su contexto.

El día de asunción del nuevo gobierno, el 25 de mayo de 1973, casi un millón

6 Para esta hipótesis y una detallada biografía de Cámpora, véase Miguel Bonasso: *El presidente que no fue*, Buenos Aires, Planeta, 1997.

de personas desbordaban las calles de Buenos Aires. Con su presencia impidieron que el representante del gobierno estadounidense asistiera a la ceremonia de traspaso de mando, obligaron a que los miembros de la Junta Militar abandonaran la Casa Rosada en helicóptero y superaron todo el operativo de seguridad diseñado por la saliente dictadura. En la jura de Cámpora, la ovacionada presencia de los presidentes de Cuba (Osvaldo Dorticós) y de Chile (Salvador Allende) terminó de otorgarle a la jornada un espíritu de ruptura con lo anterior y de imposición de un nuevo orden.

Por la noche, decenas de miles de manifestantes se desplazaron hacia la cárcel de Devoto. Alineados tras la consigna de “ni un solo día de gobierno popular con presos políticos”, exigieron la inmediata libertad de los miembros de las organizaciones armadas detenidos en el penal. Tras horas de tensión y febriles negociaciones, los presos fueron liberados. Se había llevado adelante lo que se conocería como el “Devotazo”. El hecho, horas después legalizado por el Parlamento con una ley de amnistía, marcó la tónica del momento. Socialmente, otorgaba legitimidad a todas las formas de resistencia, incluida la armada, desarrolladas durante la dictadura militar. De manera mucho más decisiva para el futuro inmediato, constituía un primer tropiezo para la idea de institucionalización de los conflictos, pergeñada por Perón, puesto que los poderes legales (Ejecutivo, Parlamento) sancionaron *post facto* —con la ley de amnistía— una situación que la movilización popular ya había arrancado por sí misma.

Para las Fuerzas Armadas significó el derrumbe de uno de los puntos fundamentales del Gran Acuerdo Nacional (GAN): la continuidad del encarcelamiento y represión de los combatientes guerrilleros. Aún no se habían apagado los ecos del Devotazo, cuando un nuevo fenómeno emergente de la ebullición social convocaba la atención. Una ola de ocupaciones de distintos establecimientos sacudía todo el país. Las tomas⁷ de hospitales, escuelas, diarios, canales, radios, fábricas, municipios, entre otros organismos, se multiplicaron con velocidad pasmosa en las primeras semanas de junio hasta acercarse al millar. La vertiginosidad del proceso —de crecimiento aritmético a partir del 4 de junio— y su metodología, basada en la acción directa, conmovían a todos los factores de poder que inmediatamente recurrieron a los clásicos fantasmas del caos y la anarquía.

Pretender explicar ese proceso como el producto exclusivo de un enfrentamiento dentro del peronismo entre Montoneros y los grupos de ultraderecha resultaría insuficiente. Sin duda, los sectores revolucionarios del peronismo tuvie-

7 Tomamos para el análisis de este fenómeno el trabajo de Fabián Nievas: “Cámpora: Primavera-Otoño, las tomas”, en Alfredo Pucciarelli (comp.), *La primacía de la política: Lanusse, Perón y la nueva izquierda en los tiempos del GAN*, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

ron una participación activa en buena parte de las tomas y, a su vez, la derecha peronista actuó realizando sus propias ocupaciones –particularmente de medios de comunicación– con el fin de controlar áreas clave en el nuevo gobierno. Aun así, el sentido más profundo de las tomas excedía el enfrentamiento dentro del peronismo. De manera mucho más determinante, expresaban la necesidad de amplias franjas sociales de impedir que al frente de diversos organismos continuaran funcionarios puestos por la dictadura. Las ocupaciones, lejos de atacar el nuevo gobierno, pretendían impedir el continuismo de la herencia del gobierno anterior.

Partiendo de asambleas masivas que involucraban a los diversos actores de cada área y de la percepción de quienes las motorizaban de que era necesario tomar su destino en sus propias manos, las tomas planteaban, de hecho, un escenario donde el sujeto de las transformaciones no era, centralmente, el gobierno ni las instituciones, sino la sociedad civil organizada y movilizada. Esa dinámica se inscribía en el marco de la disputa más general, ya explicitada, sobre el carácter y los contenidos del nuevo gobierno. El dilema era: transformaciones de fondo apoyadas en las luchas sociales o reinstitucionalización de la mano del acuerdo entre los partidos mayoritarios, la burocracia sindical y la fracción de la burguesía industrial de la CGE, alrededor del pacto social. Para la derecha peronista, Cámpora debía ser desplazado porque su llegada al gobierno era un fruto –incluso más allá de su propia voluntad– de lo primero más que de lo segundo. No podía –ni probablemente quería– llevar adelante el proyecto de depuración y control que, partiendo del propio Perón, se le exigía.

El 14 de junio el secretario general del Partido Justicialista, Juan Manuel Abal Medina, reclamó el cese de las tomas. Poco después, se le plegó la propia Juventud Peronista. En tal contexto, el proceso de tomas iniciaba su reflujo. Aun así, la decisión de terminar con el gobierno de Cámpora para, a su vez, acabar con la crisis de dominación, ya estaba tomada.

La “primavera”, el sueño del florecimiento de un nuevo orden, debía llegar a su fin.

3. Ezeiza: masacre y golpe

El 20 de junio de 1973 era el día fijado para el regreso definitivo de Perón al país. El escenario elegido para el acontecimiento era el puente El Trébol, ubicado a tres kilómetros del aeropuerto internacional de Ezeiza. Una enorme movilización popular nunca antes vista –los cálculos más conservadores hablan de más de dos millones de personas– acudiría a la cita largamente postergada en lo que se esperaba que fuera una fiesta de dimensiones gigantescas. Nada de eso ocurriría.

La fiesta se trocaría en masacre, iniciando un punto de inflexión en la aplicación del terror hacia las clases subalternas que, a partir de allí, crecería en una espiral indetenible. Para la ultraderecha peronista, había llegado la hora de hacer escarmentar a la izquierda. El gigantesco acto donde el viejo general dirigiría la palabra a su pueblo debía ser transformado en una masacre premeditada para culpabilizar a Montoneros, obligar inmediatamente a la renuncia de Cámpora y entronizarse en el poder⁸. Bajo la dirección en las sombras de López Rega y la del encargado de seguridad del acto, el teniente coronel Jorge Manuel Osinde, se inició el reclutamiento de grupos de choque compuestos por matones sindicales, ex miembros de las fuerzas de seguridad, delincuentes comunes y personal de los diversos servicios de inteligencia. Para el logro de sus objetivos, se desplazó de todos los aspectos organizativos del acto tanto a las fuerzas de la Tendencia como a los funcionarios del gobierno de Cámpora. El dispositivo se completó con el retiro de los efectivos de la Policía Federal de los alrededores del palco, que quedó bajo el absoluto control de los activistas de derecha, provistos de un verdadero arsenal de guerra.

En el otro polo del conflicto, no se preveía un escenario de enfrentamiento militar. Para la dirección de Montoneros, se trataba de lograr una enorme movilización encuadrada bajo sus banderas que haría que Perón, al observar esa capacidad organizativa, les otorgara un lugar de privilegio en la conducción del movimiento. Esa lectura tenía sus raíces en una visión mítica de la historia del peronismo que los jefes guerrilleros habían adoptado. Suponían que, en los actos masivos del peronismo, se producía una relación dialéctica potencialmente revolucionaria entre el líder y las masas, facilitando que los reclamos de éstas fueran siempre tomados en cuenta por Perón. Si en Ezeiza, Montoneros dirigía como vanguardia al pueblo peronista rodeando el palco, el General no tendría otra posibilidad que reconocer ese liderazgo⁹. Desde nuestra perspectiva, esta visión demostraba un escaso conocimiento de la historia del peronismo ya que el caudillo siempre había descabezado sin piedad cualquier intento de consolidación de un liderazgo alternativo al suyo. Los jóvenes revolucionarios no esperaban el grado brutal de respuesta que encontraron.

De esta manera, los hechos se alejan de los relatos contruidos posteriormente – anticipadores de la teoría de los dos demonios elaborada en los años 80– que

8 Para una detallada reconstrucción de la conspiración, véase Miguel Bonasso, *op. cit.* Y, en particular, el muy documentado trabajo de Horacio Verbitsky: *Ezeiza*, Buenos Aires, Contrapunto, 1985.

9 Para un relato de la existencia de esta hipótesis en las filas montoneras y una visión de su historia, véase Carlos Flaskamp: *Testimonio de la lucha armada en la Argentina*, Buenos Aires, Nuevos Tiempos, 2002.

presentan Ezeiza como un combate militar entre dos extremos ante un pueblo atónito que esperaba asistir a una fiesta. Cuando la columna sur de Montoneros se acercó al palco, desde éste se inició el fuego sobre los manifestantes. El saldo fue 13 muertos identificados y más de 365 heridos de bala. El avión que trajo a Perón fue desviado a la base militar de Morón. La multitud se retiró sumida en la más profunda desazón. El reencuentro no se había producido.

Aunque el objetivo final de la asonada —una suerte de ocupación de la Casa Rosada y la renuncia inmediata de Cámpora— no se concretó, por la magra convocatoria reunida ese día en Plaza de Mayo, la conspiración triunfaba en sus aspectos esenciales. Los días del presidente estaban contados. El 21 de junio Perón realizaba un discurso que legitimaba el golpe palaciego y anunciaba tiempos aciagos para la izquierda del movimiento. En sus propias palabras: “Nosotros somos justicialistas, levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes... No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina y nuestra ideología. Somos lo que las veinte verdades peronistas dicen...”. Se enterraban allí los proyectos de renovación del movimiento. Rápidamente y sin escalas, la “juventud maravillosa” de otrora pasaba a la categoría de “infiltrados marxistas”. Ezeiza simbolizó ese tránsito. El momento en el que las contradicciones que el peronismo había albergado largamente en su seno, estallaban con toda su virulencia. Se evidenciaba allí que la polarización peronismo-antiperonismo dejaba lugar a una lucha donde la derecha del peronismo se aliaría sin pudores con la derecha no peronista para llevar adelante el exterminio. Se comenzaba la demonización social de Montoneros para proceder al aislamiento de todas las organizaciones populares del conjunto de las clases subalternas. Un momento en que se cristalizaba un salto cualitativo en las dosis de terror a aplicar para terminar con la movilización social.

En el interior del peronismo se estructuraba una alianza para expurgar a la izquierda que reunía al lopezreguismo, la burocracia sindical y la fracción del empresariado representada por Gelbard. En este último caso, no participando directamente en el armado de la represión, pero avalando políticamente cada uno de los pasos de la depuración.

La respuesta de Montoneros a tamaño eje de poder consistió en elaborar una “teoría del cerco” que imaginaba un Perón neutral en el enfrentamiento interno, rodeado y desinformado por la camarilla dirigida por López Rega¹⁰. El eje

10 La tesis del cerco fue fuertemente criticada por la izquierda y por otras corrientes revolucionarias del peronismo. Alicia Eguren, vieja militante del peronismo y esposa del fallecido John William Cooke, sintetizó con sorna esa postura al afirmar: “Tengan cuidado, muchachos, que el día que salten el cerco el General los va a estar esperando con una metra”.

político pergeñado era continuar con la disputa de las estructuras del movimiento, evitar su marginación e intentar una negociación directa con el líder evitando el hipotético cerco. En sus supuestos, todavía no entraba la idea de que, en las nuevas circunstancias, Perón renegaba de ellos.

No menor fue el estupor del propio Cámpora ante los hechos. Siempre fiel, era plenamente consciente de que su estadía en la Rosada no podía prolongarse con Perón en el país. Imaginaba que su renuncia se haría en un marco de reconocimiento a sus esfuerzos y honradez. En lugar de ello, se encontró sacado a empujones del gobierno y marginado definitivamente del poder. El 13 de julio, junto al vicepresidente Solano Lima, presentaron sus renuncias indeclinables. Quedaban las puertas abiertas para la realización de nuevas elecciones con la candidatura de Perón. Para completar el golpe interno, el presidente del Senado, Alejandro Díaz Bialet, formalmente ubicado en la línea de sucesión institucional, se encontró con un pasaje en sus manos para un viaje que lo alejaba del país. Asumiría el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, cuyo principal mérito residía en ser yerno de José López Rega.

El 23 de septiembre de 1973, plebiscitado por una avalancha de votos del 62 por ciento del electorado, en una fórmula que llevaba como vicepresidenta a su esposa Isabel, el anciano general regresaba al lugar donde siempre había ansiado estar: la Presidencia de la Nación.

Segunda parte: el proyecto de Perón y su inviabilidad

1. El plan Gelbard

El nuevo ministro de Economía extendió su gestión desde el 25 de mayo de 1973 hasta su renuncia, el 21 de octubre de 1974. Ocupó ese cargo con cuatro presidentes diferentes (Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel), transformándose en pieza fundamental del proyecto de reconstitución del Estado diseñado por Perón. Las claves de ese programa se pueden sintetizar en cuatro aspectos esenciales: a) el pacto social; b) una nueva legislación sobre radicación de capitales extranjeros; c) una política agraria que permitiera la transferencia de recursos del agro a la industria, al mismo tiempo que mejorar la productividad del campo; d) la búsqueda de nuevos mercados para las exportaciones, no sólo primarias sino de manufacturas, particularmente en los países del área socialista y del Tercer Mundo. Todo esto combinado con un mayor papel del Estado y una serie de medidas tendientes a favorecer principalmente a las empresas de capital nacional.

El nudo estratégico del proyecto residía en el pacto social. Reeditando la concepción de pacto tripartito entre asociaciones empresarias, sindicatos y gobierno, su objetivo principal era controlar institucionalmente las luchas entre el trabajo y el capital, manejando las variables principales de distribución del ingreso –salarios y precios– para mantener en caja la inflación. Al realizarse, durante el gobierno de Cámpora, el acta de acuerdo entre la CGE y la CGT, se establecía un aumento salarial del 20 por ciento, se suspendían las negociaciones colectivas por espacio de dos años y, como contrapartida, se congelaba el valor de todos los artículos fijando mecanismos de control de precios. Semejantes medidas, presentadas bajo la retórica de un paulatino mejoramiento del poder adquisitivo de los sectores populares, lejos estaban de cubrir las expectativas de la clase obrera e, incluso, de la propia dirigencia sindical oficialista. A cambio de un aumento que apenas retrotraía los ingresos populares al último año de gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, el movimiento obrero renunciaba a las paritarias, una herramienta central en la puja distributiva. Para el propio Perón, una vez retornado a la presidencia, el pacto era la llave maestra de su arquitectura de poder; la forma de superar la ingobernabilidad y la crisis orgánica, de recrear el sistema político, su punto de partida. Consistía en el respeto total que obreros y empresarios debían prestarle a la concertación. Consciente de que la salud del plan dependía de que los dirigentes sindicales pudieran limitar los reclamos reivindicativos de sus bases y de que el proyecto recortaba su autonomía al colocarlos bajo su disciplina vertical, Perón intentó compensarlos reforzando su poder en los sindicatos. Otorgándoles nuevamente en su discurso el carácter de “columna vertebral del movimiento”¹¹, premió a la burocracia con la sanción de una Ley de Asociaciones

11 La reconciliación pública de Perón con los dirigentes sindicales que se produjo en octubre de 1973, estuvo enmarcada por el asesinato del secretario general de la CGT, José Rucci. La operación fue realizada por un comando montonero, aunque esa organización jamás asumió públicamente la autoría del hecho. Los motivos residieron en el creciente militarismo de Montoneros que respondían a la masacre de Ezeiza, que Rucci había avalado, utilizando las acciones armadas para la lucha interna del peronismo. Lanzaban un cadáver para demostrarle su poder a Perón. Rucci jugaba un papel clave para la consolidación del pacto social; era uno de los pocos dirigentes sindicales que lo apoyaban incondicionalmente, por lo que su muerte golpeaba directamente el proyecto político del líder. Para completar el cuadro, en ese mes el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) intentó sin éxito copar el Comando de Sanidad Militar, inaugurando así su estrategia de ataques directos al Ejército durante el gobierno peronista. Responder a la ofensiva de la derecha principalmente con acciones militares llevó rápidamente, como veremos, al aislamiento y la pérdida de legitimidad de todas las organizaciones guerrilleras.

Profesionales que consolidaba su poder ante las corrientes clasistas y combativas del movimiento obrero. Por esta norma, se afirmaba el modelo centralizado de un sindicato por rama de actividad; se elevaba el mandato de las conducciones sindicales de dos a cuatro años; se facultaba a las federaciones o confederaciones a intervenir las asociaciones inferiores —lo que sencillamente implicaba que seccionales o sindicatos locales rebeldes serían aplastados por las direcciones nacionales—; se permitía a los dirigentes sindicales anular la designación de delegados hecha por las bases en sus lugares de trabajo; se le otorgaba al Ministerio de Trabajo el poder de anular elecciones y resoluciones de asamblea; se equiparaban los fueros sindicales a las inmunidades otorgadas a los parlamentarios. En esencia, un verdadero programa de disciplinamiento de los conflictos en la base y de refuerzo de la autoridad de la burocracia como pago por su acatamiento del pacto social. Pronto se descubriría que no sería suficiente para frenar los conflictos sociales.

En ese marco, el poder económico adoptaría una actitud pragmática frente al pacto. La propia Unión Industrial Argentina (UIA) se fusionaría, posteriormente, con la CGE y la mayoría de las asociaciones empresarias —con mayor o menor entusiasmo— se acogerían a los acuerdos propugnados por el gobierno. En lo que respecta a la relación con el capital extranjero, la nueva ley de inversiones obligaba a que las futuras radicaciones de empresas tuvieran un mínimo del 51 por ciento de capital nacional. Paralelamente, se buscaba favorecer las exportaciones de manufacturas ofreciendo mayores ventajas a aquellas empresas que realizaran exportaciones con mayor valor agregado. En este punto, los cambios eran mucho más moderados de lo que la retórica nacionalista con la que se los presentaba hacía suponer. Las empresas transnacionales que, como vimos, habían alcanzado un papel preponderante en la estructura económica mantenían las ventajas previamente adquiridas. Su poder de financiamiento, mayor tecnología, superior productividad y tamaño, les permitían continuar ejerciendo su predominio en el mercado interno. Incluso la ofensiva de Gelbard para aumentar las exportaciones a los países socialistas los seguía ubicando como un actor privilegiado¹². En todo caso, el equipo económico mostraba una especial preocupación por atraer inversiones europeas antes que de Estados Unidos. Más que una búsqueda de mayor autonomía, se asimilaba a un intento de diversificar la dependencia, contrabalanceando el peso de las empresas norteamericanas con la llegada de capital europeo.

12 Un ejemplo de esto lo constituye la exportación de autos y camiones a Cuba acordada en el período. El bloqueo comercial norteamericano que sufría la isla se rompió con la venta de autos elaborados por las filiales de empresas transnacionales radicadas en Argentina.

Un aspecto especialmente conflictivo se perfilaba con el agro. El plan propiciaba la nacionalización parcial del comercio exterior previendo la creación de dos monopolios exportadores de carnes y granos. Al mismo tiempo se proponía avanzar en el disciplinamiento de la burguesía terrateniente. Para ello, se propugnaba la instalación de un impuesto a la renta potencial de la tierra¹³ y, a través de un anteproyecto de Ley Agraria, se amenazaba con la posibilidad de expropiar unidades agrarias improductivas. En esencia, nuevamente el Estado buscaba apropiarse de los beneficios de las exportaciones primarias controlando los canales de comercialización para volcar capitales hacia el sector industrial, al mismo tiempo que, compulsivamente, a través de penalizaciones tributarias inducía a la burguesía agraria a su modernización productiva. El bloque terrateniente demostraría una vez más su capacidad de bloquear cualquier intento reformista ya que, finalmente, el proyecto de ley jamás se concretaría. El peronismo repetía la misma conducta que en la década del 40: presionar sobre los niveles de ganancia del agro sin avanzar seriamente en una política que modificara de raíz la concentración de la propiedad de la tierra. Al no hacerlo, dejaba en manos de la burguesía agraria dos variables centrales: la situación de la balanza de pagos –por medio de las exportaciones agropecuarias– y el nivel de los salarios reales (a través del impacto de la oferta de alimentos sobre los precios de los mismos)¹⁴. Dejar intacto ese poder volvería a pagarse muy caro.

En resumen, el plan Gelbard recreaba el modelo capitalista dependiente de sustitución de importaciones, pretendía congelar la lucha de clases a través del pacto social, buscaba un mejor lugar bajo el sol para la denominada burguesía nacional, para lo que intentaba renegociar condiciones con el resto de las fracciones del bloque dominante, pretendía diversificar las exportaciones con más manufacturas a nuevos mercados y reorganizar el aparato estatal, recuperando para éste mayor capacidad de intervención y arbitraje¹⁵.

En los primeros meses de aplicación del plan, el éxito parecía sonreírle. Una coyuntura de altos precios de las exportaciones agropecuarias en el mercado mundial permitió un aumento sustancial de las reservas monetarias del país, al

13 Sencillamente establecía que aquellas tierras explotadas deficientemente, por debajo de lo que podían rendir, pagarían un impuesto especial.

14 Véase Liliana De Riz: *Retorno y derrumbe*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1987.

15 Otras posturas juzgan que la política económica beneficiaba directamente a las fracciones más poderosas de la burguesía industrial, sin ningún intento de renegociación de la dependencia de por medio, garantizando su hegemonía al interior del bloque dominante. Para su análisis, véase Mónica Peralta Ramos: *Acumulación del capital y crisis política en Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1978.

mismo tiempo que la inflación se desaceleraba notablemente y crecía el producto bruto interno. Muy pronto quedaría en evidencia que esos éxitos tenían los pies de barro.

2. El fracaso de Perón

¿Era posible la consolidación de ese modelo bajo las condiciones nacionales e internacionales existentes en la década de 1970? Nuestra respuesta es, decididamente, que no.

En primer lugar, como elemento determinante, el conflicto de clases había llegado a un grado de agudeza tal que se tornaba imposible su absorción por medio de la institucionalización. La disconformidad con los aumentos salariales otorgados por el pacto social, al no poder expresarse directamente por la vigencia del acuerdo, trasladó los reclamos hacia la renegociación de las condiciones de trabajo en las empresas, así como a la lucha por la reincorporación de los trabajadores despedidos (tanto los cesanteados por los anteriores gobiernos militares como los generados durante ese gobierno peronista). El estado de rebelión de la base obrera en las fábricas, nacido durante la dictadura en el interior del país, llegaba finalmente al conurbano bonaerense con su impronta de democracia de base y acción directa. Ese resurgir del protagonismo de los trabajadores conducía, irreversiblemente, al choque con la burocracia sindical dado su compromiso estructural con las patronales. De esa manera los conflictos se trasladaban al reconocimiento —por parte de las empresas y el Estado— de los representantes elegidos directamente por las bases, a espaldas de los representantes sindicales oficiales¹⁶.

Al llegar Perón a la presidencia, se lanzó una verdadera ofensiva sobre esta movilización obrera. Ese ataque no se limitó a la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales, que ya analizamos, sino que incluyó la reforma del Código Penal endureciendo sus normas; se restableció un decreto ley del gobierno de Juan Carlos Onganía que reglamentaba el arbitraje obligatorio de todos los conflictos laborales dándole al Estado la facultad de declarar ilegal cualquier huelga; se sancionó la Ley de Prescindibilidad por la que cualquier organismo del Estado podía dar de baja a su personal sin causa justificada, pagando sólo un mes de indemnización. Como es evidente, no se trataba tan sólo del enfrenta-

16 Véase un revelador cuadro de los motivos de los conflictos sindicales en la etapa 1973-1976 en Juan Carlos Torre: *Los sindicatos en el gobierno: 1973-1976*, Buenos Aires, CEAL, 1989, p. 64.

miento con las organizaciones guerrilleras sino de acometer contra toda manifestación de lucha que no encajara en el corset del pacto social. Como la base estructural del conflicto tenía sus raíces en las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo por el capital, que el proyecto económico no modificaba, la continuidad de la movilización obrera persistía. De manera mucho más ominosa, la ofensiva disciplinadora excedería, como veremos, los marcos legales para transformarse en terrorismo paraestatal. El espacio para la conciliación de clases se había reducido fuertemente en Argentina.

En segundo lugar, la estructura económica capitalista dependiente, configurada en los años 70, dejaba escaso lugar para cualquier intento de negociación dentro de la burguesía, encabezado por las fracciones mercadointernistas del empresariado nacional. Como se analiza en el artículo anterior¹⁷, desde los 50, el predominio del capital extranjero generó un comportamiento de asociación subordinada por parte de la burguesía industrial local, adaptándose a las nuevas condiciones del mercado. Por más que el discurso oficial del retornado peronismo hablara de “La Argentina Potencia”, aludiendo metafóricamente a una suerte de capitalismo independiente, el plan Gelbard consistía mucho más en intentar mejorar los vínculos de asociación con las transnacionales que en procurar la ruptura de esos lazos. Reflejaba los límites estructurales de esa burguesía local ya definitivamente atada a las condiciones fijadas por la reproducción del capitalismo a escala global. De manera más decisiva, el eje de acumulación del capital pasaba, como se indica en el artículo mencionado, por la lógica de intensificación de la plusvalía relativa sustituyendo mano de obra por capital. No existían posibilidades para que se gestara una alianza de clases, como la que había dado origen al peronismo, con el retorno –aunque fuera moderado– a un capitalismo redistribucionista. El salario era enfocado como un costo y no como un componente vital de la demanda. Los parámetros de reproducción del capital en los 70 poco tenían que ver con los existentes en los 40.

En tercer lugar –y estrechamente ligado con el punto anterior– el contexto internacional era radicalmente diferente. En 1973 la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentó los precios del barril de crudo. Los precios se cuadruplicaron, agravando una recesión económica mundial –por la suba de los costos de producción– que ya se venía anunciando. El trasfondo de la crisis era el agotamiento del Estado de bienestar keynesiano adoptado en los años 40 por los países capitalistas centrales¹⁸. El gran capital iniciaba una fase

17 Véase, en este mismo libro, Sebastián Rodríguez y Sergio Nicanoff, “La ‘Revolución Argentina’ y la crisis de la sociedad posperonista”.

18 Ya desde fines de los años 60 se vislumbraba un proceso a nivel mundial cuya dinámica se caracterizaba por lo siguiente: a) la mayor fortaleza de los sindicatos y del movimiento

de reorganización de la producción y de la explotación de la fuerza de trabajo abandonando, paulatinamente, el modelo taylorista-fordista.

La expansión económica llegaba a su fin, reemplazada por lo que se denominaría como estanflación —una devastadora combinación de recesión con inflación— mientras el desempleo crecía aceleradamente.

La nueva situación internacional impactó de lleno en la línea de flotación del plan Gelbard. Los precios agropecuarios se deterioraron rápidamente y se perdieron mercados clave —la Comunidad Económica Europea anunciaría, posteriormente, el cierre de sus mercados para la carne argentina— mientras el costo de los bienes importados crecía vertiginosamente. El aumento del precio de las importaciones fue la ocasión esperada por los empresarios para plantear la rediscusión del pacto social argumentando que la suba de sus costos tornaba imposible mantener congelados los precios. Esa presión del capital se tradujo en un paulatino desabastecimiento de productos esenciales y en la consiguiente aparición de un mercado negro donde se podían comprar los artículos faltantes pagando sobrepuestos. Al acaparamiento se agregaron el crecimiento del contrabando, eludiendo la acción fiscal del Estado, y la falta de inversión en el sector privado; elementos todos que demostraban la decisión del capital de mantener como fuera su tasa de ganancias. De manera recíproca, la burocracia sindical, sometida a un constante desgaste ante los reclamos obreros, no podía asistir impávida al lento deterioro salarial, por lo que se lanzó decididamente a presionar para lograr una renegociación del pacto social. La puja distributiva estaba abiertamente planteada y ninguno de los esfuerzos estatales por reencauzar el conflicto para mantener la concertación lograba disimularlo. El subsidio estatal, mediante un tipo de cambio preferencial, otorgado a las empresas para las compras de insumos importados, terminó por aumentar el déficit fiscal y disminuir las reservas monetarias existentes. Del mismo modo, el aumento del 13 por ciento de los salarios en marzo de 1974, con su contrapartida de autorización para los empresarios de aumentos de precios, suba de tarifas públicas y combustible, no conformaba a ninguna de las partes en pugna, de manera que, en los hechos, el acuerdo pasó a ser letra muerta.

Intensificación de la lucha de clases, lógica de acumulación del capital, contex-

obrero conducía a una caída en la tasa de ganancia del capital; b) aumentaban los déficits fiscales estatales; c) el sistema capitalista mundial sufría una crisis de legitimidad perdiendo niveles de consenso político. De ese modo se abría una etapa de replanteos para el capitalismo que llevó a terminar con el modelo de acumulación basado fuertemente en el Estado keynesiano y a aplicar nuevas políticas económicas para recuperar la tasa de ganancia.

to internacional modificado, eran aspectos que, articulados entre sí, tornaban inviable el plan económico.

Finalmente, la pretendida recuperación del poder estatal ensayada por Perón, requisito insoslayable para que el plan Gelbard se consolidara, fracasó rotundamente. Como hemos señalado, el ataque a los sectores díscolos del movimiento peronista y de la clase trabajadora no conocía pausas. El abortado ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al regimiento del Ejército de Azul, en la provincia de Buenos Aires, era utilizado para obligar a la renuncia del gobernador de ese distrito, Oscar Bidegain, aliado de Montoneros. Al poco tiempo, una asonada policial en la provincia de Córdoba, con copamiento de la Casa de Gobierno, culminaba con una intervención federal del distrito que avalaba la sedición al desplazar definitivamente a Ricardo Obregón Cano y Atilio López, gobernador y vice respectivamente, y conspícuos miembros de la izquierda del peronismo.

El disciplinamiento no se agotaba en lo institucional. Con una bomba conectada al encendido del auto del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, quien salvó milagrosamente su vida, hacía su aparición pública, en noviembre de 1973, la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como Triple A. Se trataba de una organización terrorista de ultraderecha organizada directamente desde el Estado, bajo la dirección efectiva de López Rega, que reclutaba bajo su paraguas a los grupos que ya habían actuado en Ezeiza. Las bandas parapoliciales se lanzaron a la caza y asesinato —por ahora sin firma— de decenas de activistas estudiantiles, sindicales, barriales, culturales ligados a las diversas organizaciones de base. El terrorismo de Estado comenzaba a estructurarse desde las propias entrañas del gobierno peronista. Su aparición era parte de una estrategia continental contrainsurgente apadrinada directamente por Estados Unidos¹⁹. Su esencia consistía en la generalización del terror en la población civil. El diseño de esta estrategia de aniquilamiento, aplicada por primera vez en el continente en Guatemala, tenía como blanco predilecto no a los núcleos clan-

19 Desde principios de la década de 1970 el Departamento de Estado norteamericano apoyó activamente la generalización de dictaduras militares en América Latina: asonada militar en Bolivia en 1971; disolución de las cámaras legislativas en Uruguay implementada por el presidente Juan María Bordaberry abriendo las puertas para un posterior gobierno militar; el golpe en Chile encabezado por Augusto Pinochet, con el asesinato del presidente constitucional Salvador Allende, en Septiembre de 1973, son algunas de las demostraciones empíricas de la alianza contrarrevolucionaria establecida entre las clases dominantes latinoamericanas y el país del norte. La Doctrina de Seguridad Nacional pasaba a una etapa de generalización del Terrorismo de Estado.

destinos de las organizaciones revolucionarias —que, justamente por estar ocultos, se hallaban más protegidos—, sino a quienes asumían algún tipo de militancia pública en agrupaciones masivas de base. A través de golpes sistemáticos dados en la base social, se buscaba el retraimiento y la desmovilización de la población para aislar a las organizaciones revolucionarias. Una vez logrado esto se podía pasar a la fase de destrucción total de las mismas²⁰. Esta nueva fase represiva la representaba en Argentina la Triple A. Su diseño operativo corría por cuenta de López Rega, pero difícilmente podría haberse desarrollado sin el aval político que Perón concedía permanentemente a su secretario privado. El viejo general, más allá de su deteriorado estado de salud, había demostrado su voluntad de proceder violentamente con quienes transgredían los límites fijados por su proyecto de poder, incluso “fuera de la ley y violentamente”²¹. La terrible contradicción era que su proyecto de recrear condiciones de consenso para el Estado y el sistema político, terminaba siendo sostenido por una brutal represión que excedía las leyes del propio Estado al que se pretendía relegitimar. Lejos de cicatrizar, la crisis orgánica se acentuaba. Las contradicciones sociales, al expresarse —de manera deformada— dentro del peronismo en sus batallas internas por el control del gobierno, terminaron por hacer pedazos los sueños de consolidación del poder estatal hasta poner en tela de juicio el enorme capital político del propio Perón.

3. Soledad y muerte

Para los Montoneros, la hipótesis del cerco había sido finalmente dejada de lado, al tornarse insostenible por las acciones del propio líder. El 1° de mayo de 1974 se dispusieron a expresar su frustración en la mítica Plaza en ocasión de los festejos por el día del trabajador. El tradicional discurso de mayo de Perón fue recibido con la consigna “¿Qué pasa, qué pasa General, que está lleno de gorilas el gobierno popular?”, al tiempo que la presencia de Isabel provocaba un contundente “No rompan más las bolas, Evita hay una sola”. Un desencajado Perón lanzó una violenta arenga donde calificó a las huestes juveniles de

20 Para un análisis de esta estrategia contrainsurgente, aunque más focalizado en Uruguay, véase Eleuterio Fernández Huidobro, *Historia de los Tupamaros*, Montevideo, En la Nuca, 2001.

21 Véase el discurso de Perón dirigido a los diputados de la Juventud Peronista en Oscar Anzorena: *Tiempo de violencia y utopía (1966-1976)*, Buenos Aires, Contrapunto, 1988, p. 296.

“estúpidos, imberbes e infiltrados”. Las columnas Montoneras comenzaron espontáneamente a retirarse de la concentración. La mitad de la Plaza de Mayo vacía se transformaba en una imagen contundente de la irreversible división del peronismo.

Atenazado por una dinámica de cuestionamiento al pacto social que desbordaba todas sus previsiones, el conductor puso en marcha su última jugada política. El 12 de junio la CGT convocó a una movilización para defender el gobierno tras la amenaza de Perón de renunciar a la presidencia. El jefe del peronismo ponía en juego todo su carisma para retomar las riendas de un proceso que se tornaba ingobernable. Detrás de ese gesto se encontraba la imposibilidad política y económica de aplicar un proyecto que sólo se mantenía en pie por el prestigio que aún conservaba su mentor en buena parte de la sociedad. No había tiempo para nada más. El 1 de julio, tras un paro cardíaco, fallecía Juan Domingo Perón. Una desolada multitud desfiló interminablemente frente a su ataúd para despedirlo. Eran parte de ese mismo pueblo que, en su último discurso, el General había sindicado como “su único heredero”.

La realidad era mucho más cruel: Isabel Perón asumía la Presidencia, acompañada de José López Rega.

Tercera parte: Transformación fallida y derrumbe

1. Las nuevas alianzas de Isabel Perón

Los primeros pasos del gobierno de Isabel se beneficiaron con el temor de los factores de poder ante la posibilidad de un vacío político de consecuencias imprevisibles. Por eso, tanto los grupos económicos como la dirigencia sindical, las Fuerzas Armadas, la Iglesia y el radicalismo prestaron su apoyo, circunstancial, a la nueva presidente.

Aprovechando esa circunstancia, el nuevo núcleo de poder se propuso, en primer lugar, terminar con la tarea de destruir las corrientes obreras clasistas y la izquierda peronista. Con un ritmo vertiginoso se sucedieron la intervención de los gremios de Gráficos, de Prensa de Buenos Aires, la FOTIA, las seccionales cordobesas de Luz y Fuerza y el SMATA. Raimundo Ongaro era encarcelado mientras se dictaba orden de captura sobre Agustín Tosco y René Salamanca. La generación de líderes sindicales protagonista de las luchas obreras desde el Cordobazo era finalmente desplazada de los gremios que lideraban.

En el plano educativo las designaciones de Oscar Ivanissevich en el Ministerio de Educación y de Alberto Ottalagano como interventor de la Universidad de Buenos Aires, instalaban una gestión abiertamente fascista, lanzada a depurar

los claustros de cualquier atisbo de oposición. En pocos meses, más de 4.000 docentes e investigadores fueron despedidos, más de 1.600 estudiantes se encontraban encarcelados y centenares partían al exilio ante las amenazas de muerte de los grupos parapoliciales. Una ola de clausuras de medios de comunicación ganaba las calles.

La Triple A dio un enorme salto en su acción terrorista multiplicando los asesinatos, ahora con comunicados que asumían su autoría, y en noviembre de 1974, se instrumentaba el Estado de Sitio para todo el país.

La brutal derechización del gobierno se enmarcaba en un intento de rediseñar las alianzas del partido gobernante acercándose a las Fuerzas Armadas y a los grupos más concentrados del poder económico. A los militares se les ofrecía un mayor protagonismo en la represión mientras los grupos parapoliciales realizaban clandestinamente las tareas de exterminio. Se partía del supuesto de que desaparecería cualquier posibilidad de golpe de Estado si la nueva administración asumía como propias todas las exigencias que reclamaban las cúpulas castrenses. Al gran capital se le brindaba todo el apoyo coercitivo del Estado para garantizarle la recuperación plena de su autoridad en el seno de las fábricas y un plan económico que tuviera directamente en cuenta sus necesidades.

El requisito para ese último objetivo era el desplazamiento de Gelbard del Ministerio de Economía. El otrora número dos de la gestión peronista, arquitecto de un plan que fenecía ante la puja distributiva y el salto inflacionario, adolecía de sustento político real tras la muerte de Perón y terminó renunciando en octubre de 1974. Su caída se produjo a manos de sus antiguos aliados con los que había combatido a la izquierda peronista: el lopezreguismo y la burocracia sindical. En esa recomposición de las relaciones de poder dentro del gobierno, tanto los gremialistas como el círculo de poder que rodeaba a Isabel se lanzaban a lo que denominaban la etapa de peronización del gobierno, lo que implicaba ubicar en el mando a funcionarios de insospechada ortodoxia doctrinaria. En ese incesante devenir de disputas e intrigas, donde los amigos de ayer pasaban a ser los enemigos de hoy, la defenestración de Gelbard no era más que el prolegómeno de la pelea de fondo entre esas dos facciones que habían sobrevivido con mayor fortaleza a las pugnas internas del peronismo.

Las cúpulas sindicales creían llegado el momento de recuperar la autonomía que, a regañadientes, habían cedido a Perón. Se trataba de presionar para lograr renegociar el pacto social, obteniendo, ahora sí, ventajas reivindicativas que reafirmaran su control de los sindicatos. Confiados en que el despliegue represivo había terminado por sepultar la movilización de base, se prepararon para quedarse con la dirección de los principales resortes del gobierno.

El grupo fascista que encabezaba López Rega —del que Isabel no era más que su mascarón de proa— estaba decidido a ocupar todos los espacios posibles abando-

nando la intención de Perón de recrear un sistema político consensuado parlamentariamente con el radicalismo. Repudiando la ingeniería de acuerdos diseñada por Perón, buscaron legitimarse mediante el uso del terror y, paralelamente, apropiándose de la simbología peronista para sus propios fines y presentando a Isabel como la auténtica heredera del caudillo y la única que podía garantizar la unidad del movimiento peronista, ya purgado de izquierdistas. Para ese fin, se montaron espectaculares operativos de propaganda como la repatriación de los restos de Eva Perón, traídos definitivamente de España, o la nacionalización de las bocas de expendio de las empresas petroleras Shell y Esso.

El camino asumido por el gobierno, para contar con el beneplácito del gran capital, debía ser capaz de demostrar su capacidad de disciplinar ya no sólo a las bases obreras, sino incluso a la propia burocracia sindical. La nueva etapa demandaba para el poder económico una reestructuración cuya piedra de toque era la caída del salario, por medio de un profundo ajuste, para recomponer su tasa de ganancia. Nada de eso se condecía con los devaneos redistribucionistas de la burocracia sindical. En la búsqueda de transmutar definitivamente al peronismo en garante político de los intereses de las fracciones más concentradas del capital, el lopezreguismo debía llevar adelante la batalla contra la dirigencia gremial, lo que implicaba el abandono del modelo de Perón basado nodalmente en los pactos tripartitos.

La llegada de Alfredo Gómez Morales en octubre de 1974 al timón de la economía, era el producto de una coyuntural transacción entre la burocracia sindical y el lopezreguismo, dado que la presidente y su consejero todavía no se sentían plenamente confiados en la fortaleza de su poder. El recién llegado comenzó un plan de ajuste cautelosamente administrado en grageas homeopáticas para no irritar a los sindicatos. Pretendía reformular la Ley de Inversiones Extranjeras para atraer capitales foráneos que compensaran la falta de inversiones del sector productivo local mientras devaluaba el peso para recuperar competitividad en las exportaciones. No lograría nada de esto por la lógica inexpugnable de la crisis. Los aumentos salariales concedidos eran automáticamente devorados por la inflación, ya que los empresarios los trasladaban directamente a los precios. Sin apoyos políticos de importancia, Gómez Morales renunció en junio de 1975. Se iniciaba un momento de inflexión determinante que marcaría uno de los picos más altos de la crisis de dominación.

Celestino Rodrigo –hombre de López Rega– fue el designado para reemplazar a Gómez Morales y llevar adelante el mayor plan de ajuste realizado en décadas. La reacción obrera no le iría en zaga.

2. El Rodrigazo y la insubordinación obrera

El nuevo ministro debutó aplicando una batería de drásticas medidas que convulsionaron a todo el país. El peso se devaluaba en más del 100 por ciento; las tarifas de los servicios públicos subían en un promedio cercano al 50 por ciento; el aumento de los combustibles elevaba el precio de la nafta en un 175 por ciento, consecuentemente se disparaban los precios de todos los bienes básicos de la canasta familiar, mientras los alquileres con contratos vencidos subían más de un 90 por ciento y los medicamentos, alrededor de un 100 por ciento. La lógica de “terapia de shock” remplazaba los intentos de ajuste gradual de Gómez Morales. El poder adquisitivo de los salarios terminó siendo pulverizado de un plumazo, y se produjo una brutal transferencia de ingresos hacia el gran capital, particularmente hacia los exportadores. Su significado político fue mucho más allá de la ortodoxia de los planes de ajuste que se aplicaron anteriormente. Era diferente cualitativamente, no sólo por la magnitud de los cambios planteados, sino porque su aplicación simbolizaba la muerte del peronismo tal como se lo conocía hasta ese momento²². Dinamitaba todo intento de conciliación, de arbitrar entre las clases en pugna, de concertación y acuerdo, de interés por el desarrollo del mercado interno para asumir, descarnadamente, los intereses de las fracciones más poderosas de la burguesía. Representaba el adiós a la utopía del capitalismo autónomo para abrazar la utopía del libre mercado, el reino desregulado de los ricos. Le volvía la espalda a su mayoritaria base obrera y ponía el rumbo, sin rubor ni disimulos, hacia la City, la UIA y la Sociedad Rural. En el plan Rodrigo estaban presentes —en germen, de manera aún imperfecta— los postulados que, poco después, haría suyos Martínez de Hoz desde la dirección económica de la dictadura militar. En la búsqueda de reemplazo de las alianzas sociales históricas (sindicatos, empresarios nacionales) por otras, que tenían como epicentro los grandes grupos económicos, el peronismo isabelino prefiguraba la silueta del peronismo menemista de la década del 90. Si ese nuevo rostro del peronismo no llegó a estructurarse plenamente en los años 70, fue porque su tiempo aún no había llegado. Para que lo hiciera debía ser capaz, antes que nada, de pulverizar la protesta obrera. En ese momento era, todavía, una tarea imposible.

La protesta social, aparentemente desgastada por la escalada represiva, demostró toda su potencia en los meses de junio-julio de 1975. En los meses anteriores al lanzamiento del plan Rodrigo, las formas de resistencia de la clase obrera

22 Para un análisis en este sentido, véase Alejandro Horowicz: *Los cuatro peronismos*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1985.

se habían expresado en acciones menos visibles pero demostrativas de la profundidad del descontento. La aprobación de la Ley de Contratos de Trabajo, que dificultaba los despidos y garantizaba la estabilidad en los empleos, inauguró una espectacular suba del ausentismo en las fábricas por parte de los trabajadores. Cerrados, momentáneamente, otros caminos, se recurría a canales inorgánicos de protesta que no por ello dejaban de preocupar profundamente a los empresarios. A su vez tomaban fuerza acciones colectivas como el trabajo a reglamento o el trabajo “a tristeza” que, al no asumir la forma de huelgas directas, dificultaban su represión a través de las nuevas leyes vigentes. En los establecimientos continuaba el proceso de recuperación de los organismos de representación de los trabajadores, como cuerpos de delegados y comisiones internas, que darían lugar al nacimiento de la expresión más organizada y radical del poder obrero en las fábricas: las coordinadoras fabriles²³. Se trataba de un movimiento surgido desde las bases que, partiendo de los lugares de trabajo, comenzaba a articular entre sí, por zonas geográficas, a los obreros de distintas fábricas y ramas de producción. Lo más dinámico del activismo sindical generó una nueva forma de organización autónoma basada en las asambleas masivas y en la participación directa de los trabajadores, heredando la experiencia del clasismo. Ponían especial énfasis en superar la dispersión articulando las luchas en organismos propios, al margen de las estructuras oficiales manejadas por la burocracia sindical. Partían de la cooperación y la solidaridad obrera, pero no se limitaban a la lucha salarial sino que cuestionaban, con su acción, la dominación del capital en las fábricas y la dominación global garantizada por el Estado. Configuraban un ámbito político de los obreros, de una democracia de base mucho más profunda en sus contenidos que la democracia parlamentaria, una instancia totalmente refractaria a su institucionalización por parte del Estado²⁴. Su momento de expansión se da en el contexto de la reacción popular al Rodrigazo.

Ante la magnitud de los aumentos de precios, los jerarcas sindicales advirtieron que su supervivencia política se encontraba puesta en juego. No querían la confrontación con el gobierno pero, entre el fuego cruzado de la inflexibilidad gubernamental y la insubordinación de base encabezada por las coordinadoras,

23 Para el análisis de este fenómeno tomamos en cuenta, especialmente, los trabajos de Yolanda Colom y Alicia Salomone: “Las Coordinadoras Interfabriles de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 1975-1976”, y de María Cotarelo y Fabián Fernández: “Lucha del movimiento obrero en un momento de crisis de la sociedad: Argentina, 1975-1976”, publicados en la revista *Razón y Revolución*, N° 4, otoño de 1998.

24 Véase Adolfo Gilly: “La anomalía argentina”, en Pablo González Casanova (comp.): *El Estado latinoamericano: teoría y práctica*, México, Siglo XXI, 1990.

consiguieron la libertad de negociación en paritarias para acordar nuevas escalas salariales con los empresarios. En ellas, gremios como la UOM o Textiles lograron aumentos que superaron cómodamente el 100 por ciento. El gobierno se resistió a homologar los acuerdos, consciente de que significaban la quiebra del plan de ajuste. La dirigencia gremial intentó la imposible empresa de canalizar la movilización obrera bajo su dirección, presionando al gobierno para que reconociera los aumentos salariales, al mismo tiempo que intentaban preservar a Isabel de toda crítica culpabilizando solamente al equipo económico. Ésa fue la estrategia que expresaron tanto la concentración de la UOM del 24 de junio como el paro con marcha diseñado por la CGT el 27 del mismo mes. La respuesta de Isabel consistió en anular por decreto las negociaciones paritarias y otorgar un aumento del 50 por ciento. La guerra estaba definitivamente declarada.

De manera progresiva, a lo largo de todo el país, estallaba por abajo la huelga obrera que iba paralizando toda la estructura productiva, al margen de las conducciones sindicales nacionales. Las coordinadoras, reunidas ahora en un Plenario de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha, demostraban su poder organizativo y capacidad de convocatoria. Su falencia residió en su dificultad para nacionalizar definitivamente la huelga, posibilidad que aún conservaba la dirección de la CGT. Puesta entre la espada y la pared, la dirigencia de la central obrera convocaba a un paro general de 48 horas para el 7 y 8 de julio que legalizaba la huelga de hecho impulsada desde abajo. Al reclamo de aprobación de los acuerdos salariales se sumaba el pedido de renuncia de Rodrigo y López Rega. Se producía así un acontecimiento histórico: por primera vez, la CGT declaraba una huelga general a un gobierno peronista. La magnitud de la protesta terminaría por doblarle el brazo al gobierno. Isabel aprobaba los contratos en litigio y López Rega abandonaba el país. Poco después, Rodrigo renunciaba. Las principales reivindicaciones planteadas por el movimiento obrero se habían logrado, pero distaban de ser un triunfo definitivo.

3. A modo de balance de las luchas del período

Las jornadas de mediados de 1975 significaron, para los actores del período, múltiples enseñanzas. La burocracia sindical lograba salvar, temporalmente, a Isabel de la debacle, especulando que a partir de allí el gobierno quedaría preso de sus decisiones, al tiempo que redoblaba esfuerzos para aniquilar el activismo combativo de las fábricas.

Para las cúpulas empresariales y militares, que habían seguido atentamente los

acontecimientos, la conclusión inequívoca era que el gobierno de Isabel estaba definitivamente muerto. Sólo un golpe de Estado que fuera capaz de emprender un genocidio sistemático contra la población estaría en condiciones de acometer el disciplinamiento definitivo de la clase obrera, primer requisito básico para reorganizar el bloque de clases dominante; establecer nuevos patrones de acumulación y reinsertar el capitalismo argentino en el mercado mundial. La preparación del golpe se tornó el afán principal de la totalidad de las fracciones de la burguesía argentina, ubicando como enemigo principal la rebelión obrera. Políticos siempre atentos a las necesidades del poder real, como el líder del radicalismo Ricardo Balbín, se apresuraron a hablar de la existencia de “una guerrilla industrial” proclamando, de hecho, la necesidad de un exterminio en las fábricas que acabara con las expresiones autónomas.

Los actores sociales surgidos en el seno de las clases subalternas, como reflejo de la generalizada impugnación social nacida tras el Cordobazo, se encontraban con la imposibilidad de generar nuevas relaciones de fuerza que torcieran el rumbo del anunciado golpe de Estado. La convergencia de trabajadores y clases medias que desveló a las clases dominantes durante largos años llegaba a su fin, fragmentada en diversas direcciones.

Por un lado, las coordinadoras fabriles representaban la expresión más alta del camino recorrido por la clase trabajadora para poner de pie un proyecto propio, alternativo, de sociedad. A su vez, simbolizaban su debilidad, sus límites. Como lo plantea Adolfo Gilly, “el espacio fabril proletario se niega a subordinarse al espacio mercantil burgués pero, a diferencia de éste, no está en capacidad de crear un metabolizador general de su política para el conjunto de la sociedad. Pone en crisis al sistema de dominación y al Estado, pero no puede resolver esa crisis a su favor”²⁵. Circunscriptas al ámbito fabril, no lograron consolidar formas organizativas permanentes a nivel nacional y plantarse como alternativa de cambio para el conjunto de las clases subalternas. Su insuficiente grado de desarrollo —que justamente el golpe de Estado venía a abortar— les impedía presentarse como el núcleo central de un bloque histórico de todos los explotados que quebraría, irreversiblemente, el sistema de dominación. Al no poder darse ese salto cualitativo, en los tiempos que la crisis de dominación imponía, se produjo el reflujo de las luchas y su consiguiente derrota.

De manera convergente, se reducía el espacio para una alianza de los trabajadores con las clases medias, en la medida en que franjas crecientes de éstas comenzaban a reclamar un golpe que pusiera orden en el país. Desesperadas por la inflación, la espiral de violencia, la corrupción y el espectáculo de descomposi-

25 Adolfo Gilly, *op. cit.*

ción del gobierno de Isabel, una vez más pusieron sus expectativas en las Fuerzas Armadas, olvidando lo sucedido en la dictadura anterior. Se transformaron en la –pasiva– base de masas que necesitaban las clases dominantes para efectivizar el golpe con el mayor consenso posible.

El accionar de las principales organizaciones armadas –Montoneros y ERP– terminó colaborando, a despecho de sus intenciones, con la estrategia elaborada por sus enemigos. Más allá de las evidentes diferencias políticas entre las dos formaciones guerrilleras, existían elementos ideológicos compartidos que las llevaron a respuestas similares ante las complejidades de la etapa. La ofensiva contrarrevolucionaria, que comenzó a desplegarse desde Ezeiza, marcó, como vimos, un cambio en la estrategia represiva que las fuerzas guerrilleras no alcanzaron a comprender en toda su magnitud. Presionados por su propia militancia de base, que todos los días veía caer compañeros asesinados por las balas de los escuadrones de la muerte, se refugiaron en su poder de fuego, multiplicando las actividades militares como forma principal de respuesta. Para buena parte de la población, la dinámica de acciones armadas pasó a ser vista como un enfrentamiento entre grupos violentos y, en consecuencia, fue perdiendo paulatinamente la legitimidad conseguida durante el enfrentamiento a la dictadura. De manera creciente, el eje de la política centrado en el plano militar hizo que las organizaciones armadas no advirtieran que lo que ganaban en capacidad operativa lo perdían en inserción social. Si ese proceso de creciente aislamiento no fue evaluado a tiempo se debió tanto a la autosuficiencia, el vanguardismo y el sectarismo de esas organizaciones, como a la persistencia de una concepción de guerra popular prolongada que llevaba al predominio del militarismo. Como otro elemento de peso hay que agregar el hecho –pocas veces remarcado– de que la crisis de dominación y los niveles de conflictividad existentes llevaban a que nuevos activistas se incorporaran a la guerrilla, sin darse cuenta de que, mientras se crecía en cuadros, se alejaban amplias franjas de la población²⁶. Lo cierto es que, con el pase a la clandestinidad de Montoneros –6 de septiembre de 1974– y la multiplicación de acciones contra los cuarteles del Ejército –acción de Formosa por Montoneros, Batallón de Arsenales de Monte Chingolo por el ERP, por mencionar las más recordadas–, se planteaba

26 Esa es una de las observaciones que remarca un ex miembro de la Dirección Nacional del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores)-ERP. La afirmación tiene, probablemente, más que ver –en lo que refiere al aumento de incorporaciones– con la experiencia del partido liderado por Mario Roberto Santucho que con la situación de Montoneros durante la etapa post-Ezeiza. Véase Luis Mattini: *Hombres y mujeres del PRT-ERP*, Buenos Aires, Campana de Palo, 1995.

un enfrentamiento de aparato militar contra aparato militar que, desde el inicio de la estrategia contrainsurgente, fue evaluado por las Fuerzas Armadas como el escenario más propicio para el aniquilamiento de la guerrilla. Las organizaciones armadas caerían en la trampa²⁷.

La apretada síntesis desarrollada con respecto al estado de las clases subalternas y las organizaciones revolucionarias a fines de 1975 —problema de una complejidad analítica que excede los límites de este trabajo— nos indica el grado de fragmentación y divergencia existente en ese momento en el seno de las clases populares.

A partir de las jornadas de junio-julio, se iniciaba un reflujo de las luchas sociales sobre el que se consolidaría el proyecto golpista.

4. Derrumbe y golpe

Las Fuerzas Armadas aprovecharon —y alentaron— la descomposición del gobierno de Isabel para recuperar la credibilidad y el consenso perdidos. Se presentaron como la única alternativa de salida al caos —mientras ayudaban a incrementarlo—, esperando el máximo desgaste posible del gobierno peronista para, recién entonces, proceder a lanzar el golpe. Frente a la guerrilla, eligieron exacerbar el carácter de su amenaza para legitimarse como los defensores de la patria que salvarían al país de la conspiración marxista mundial. Eligieron Tucumán, escudados en el intento del ERP de desarrollar un frente guerrillero rural en los montes de la provincia, como laboratorio para la aplicación en pequeña escala de lo que, tiempo después, implementarían en todo el territorio nacional. Al conseguir la decisión de Isabel de convocar al Ejército para combatir “los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”, desplegaron con total impunidad su estrategia a través del Operativo Independencia. Allí se instalaron los primeros centros clandestinos de detención donde se aplicaron los métodos de la tortura y la desaparición de personas. Antes de atacar directamente a la guerrilla, procedieron a establecer el terror sistemático sobre la población civil para quitarle a aquélla apoyatura social. Cuando el presidente

27 Vale aclarar que esta generalización no es válida para el conjunto del multifacético arco de la izquierda revolucionaria. Algunos grupos —tanto del peronismo como marxistas-leninistas— criticaron el militarismo e intentaron formas de inserción social que, sin renunciar al uso de la violencia, priorizaban el trabajo de base, sobre todo en las fábricas. Señalemos además que tanto el ERP como Montoneros mantuvieron un importante nivel de presencia en los conflictos obreros de la época. El problema es que ésta no era su estrategia principal.

en ejercicio Ítalo Lúder —que había asumido temporalmente, dado que Isabel solicitó un período de licencia por una supuesta enfermedad— les transfirió por decreto a las Fuerzas Armadas el control nacional de la represión para “aniquilar la subversión”, el golpe de Estado se acercó a pasos agigantados.

El general Jorge Rafael Videla ya se encontraba en la jefatura del Ejército tras el desplazamiento del general Alberto Numa Laplane. Todas las fichas estaban colocadas, sólo faltaba esperar el momento oportuno.

Paralelamente, el gran empresariado pasaba abiertamente a la oposición por medio de la creación de la APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), liderada por las corporaciones representativas de la gran burguesía agraria, pero que incluía también a las cámaras empresariales industriales y comerciales, de las cuales adherían sectores escindidos de la propia CGE, muchos de ellos cercanos a las concepciones “desarrollistas” expresadas por el ex presidente Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. Para el frente empresario, los culpables de la crisis eran la CGT y la CGE, y criticaba al gobierno por “entregar el país al sindicalismo continuando su camino hacia el marxismo”²⁸.

Por insólita que sonara la acusación, realizada a un gobierno claramente ubicado a la derecha del espectro político, es demostrativa de la voluntad empresarial de asociar cualquier reclamo sindical a un proyecto revolucionario. De manera más imaginativa, en febrero de 1976, realizaron un paro patronal de actividades por 24 horas sin pérdida de salarios para los trabajadores. Sembraban el terreno para el golpe, ansiosos por conseguir un régimen autoritario que estuviera realmente en condiciones de ejercer el control social y, a su vez, permitiera la más absoluta libertad de mercados.

Al coro golpista, se sumaron las afinadas voces de la cúpula eclesial, que, por medio del provicario castrense, monseñor Victorio Bonamín, indicaban: “¿Y no querrá (Dios) algo más de las Fuerzas Armadas... debe alzarse lo que está tan caído, y que bueno es que sean los primeros en alzarse los militares? Que se pueda decir de ellos que una falange de gente honesta, pura, hasta ha llegado a purificarse en el Jordán de la sangre para poder ponerse al frente de todo el país”²⁹.

El último paso hacia el golpe se dio cuando Washington, a través del secretario de Estado Henry Kissinger, les aseguró a los militares el inmediato reconocimiento diplomático del futuro gobierno y su apoyo al baño de sangre por venir. “Lo que tengan que hacer, háganlo rápido”, afirmaría, poco después, el funcionario norteamericano.

28 Citado en Ricardo Sidicaro: *Los tres peronismos*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

29 Citado en Pablo Kandel y Mario Monteverde: *Entorno y caída*, Buenos Aires, Planeta, 1976.

Mientras tanto, el partido gobernante continuaba con su disgregación política —el nuevo enfrentamiento interno era entre los denominados verticalistas, defensores de la permanencia de Isabel en el gobierno, y los antiverticalistas, que buscaban su desplazamiento del Poder Ejecutivo— y con su impotencia para controlar la desbocada crisis económica; tres ministros de economía se sucedieron desde la caída de Rodrigo: Pedro Bonanni, Antonio Cafiero y Emilio Mondelli.

Con este último, el gobierno intentó el recurso final para permanecer en el poder. Tras ofrecer un nuevo plan de ajuste, propuso cerrar el Parlamento, instalando una dictadura de hecho, como había sucedido en Uruguay. La propuesta ya no tenía ningún interés para las Fuerzas Armadas.

El 24 de marzo de 1976 los militares realizaron el último golpe de Estado de la historia argentina. Del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones surgió un proyecto que se propuso refundar estructuralmente la sociedad argentina. Lo haría en su sentido más perverso, muy lejos de los sueños revolucionarios con los que una generación recibió el retorno del peronismo al gobierno. Entre 1973 y 1976 mediaba una brecha mucho más grande que, simplemente, tres años.

Bibliografía

- Anzorena, Oscar, *Tiempo de violencia y utopía (1966-1976)*, Buenos Aires, Contrapunto, 1988.
- Bonasso, Miguel, *El presidente que no fue*, Buenos Aires, Planeta, 1997.
- Colom, Yolanda y Salomone, Alicia, “Las Coordinadoras Interfabriles de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 1975-1976”, *Razón y Revolución*, N° 4, otoño de 1998.
- Cotarelo, María Celia y Fernández, Fabián, “Lucha del movimiento obrero en un momento de crisis de la sociedad: Argentina, 1975-1976”, *Razón y Revolución*, N° 4, otoño de 1998.
- De Riz, Liliana, *Retorno y derrumbe*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1987.
- Fernández Huidobro, Eleuterio, *Historia de los Tupamaros*, Montevideo, En la Nuca, 2001.
- Flaskamp, Carlos, *Testimonio de la lucha armada en la Argentina*, Buenos Aires, Nuevos Tiempos, 2002.
- Gilly, Adolfo, “La anomalía argentina”, en González Casanova, Pablo (comp.), *El Estado latinoamericano: teoría y práctica*, México, Siglo XXI, 1990.
- Horowicz, Alejandro, *Los cuatro peronismos*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1985.
- Kandel, Pablo y Monteverde, Mario, *Entorno y caída*, Buenos Aires, Planeta, 1976.
- Mattini, Luis, *Hombres y mujeres del PRT-ERP*, Buenos Aires, Campana de Palo, 1995.

- Nievas, Flabián, *Cámpora: Primavera-Otoño, las tomas*, en Pucciarelli, Alfredo (comp.), *La primacía de la política: Lanusse, Perón y la nueva izquierda en los tiempos del GAN*, Buenos Aires, Eudeba, 1999.
- Peralta Ramos, Mónica. *Acumulación del capital y crisis política en Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1978.
- Seoane, María, *El burgués maldito*, Buenos Aires, Planeta, 1998.
- Sidicaro, Ricardo, *Los tres peronismos*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.
- Svampa, Maristella, “El populismo imposible y sus actores, 1973-1976”, en James, Daniel (comp.), *Nueva Historia Argentina*, tomo 9, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.
- Torre, Juan Carlos, *Los sindicatos en el gobierno: 1973-1976*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1989.
- Verbitsky, Horacio, *Ezeiza*, Buenos Aires, Contrapunto, 1985.



La globalización neoliberal. Algunas definiciones generales

Miguel Mazzeo

*Mediante la explotación del mercado mundial,
la burguesía dio un carácter cosmopolita a
la producción y al consumo de todos los países.*
Karl Marx y Friedrich Engels. *Manifiesto comunista.*

Cuando se habla de “globalización”, cosa que se hace desde la década de 1980, se suele hacer referencia tanto a la difusión internacional de las relaciones de intercambio y producción capitalistas como a un mundo supuestamente “unificado” en diversos planos. Recientemente –según se sostiene–, este mundo ha adquirido las características de un escenario único, entendido como un espacio de discernimiento y resolución de los problemas humanos sin grandes proposiciones disyuntivas, sobredeterminado por lo que, con cierto fatalismo, se considera una “fuerza inexorable”: el mercado global.

El término “globalización” deriva del inglés “global” y ha sido lo suficientemente difundido en los últimos años para quedar incorporado a nuestro vocabulario corriente; simplemente por ese motivo lo utilizamos, pero reconociendo que además de polisémico es un término ambiguo y por lo tanto polémico. De hecho ha funcionado como un vocablo “ortopédico”, utilizado indistintamente para designar procesos que remiten tanto a “causas” como a “efectos”. Quienes insisten en una estricta utilización del castellano nos sugieren utilizar el término “mundialización”, aunque en realidad este término está emparentado con la teoría francesa de la internacionalización del capital. Por ejemplo, François Chesnais considera que la mundialización es un momento de transición hacia un régimen de acumulación donde la esfera financiera se “autonomiza” y juega un papel fundamental. Según esta visión el capital-dinero goza de una autonomía relativa respecto del capital productivo¹.

1 François Chesnais, *La mondialisation du capital*, París, Suroy, 1997, pp. 23-25.

Para otros autores las políticas neoliberales no deberían ser analizadas como una ofensiva del capital financiero sobre el capital productivo, sino como una ofensiva sobre el trabajo. Desde esta perspectiva se suele criticar a las visiones centradas en la contradicción entre las distintas formas de capital (por ejemplo, capital financiero - capital productivo) que dejan de lado la contradicción principal entre capital y trabajo².

Para John Holloway la globalización se refiere al incremento en las velocidades y en las escalas de los flujos y fugas del capital en la forma dinero. Pero a diferencia de otros autores, niega que esto exprese un aumento del poder del capital. Para él la globalización refleja las limitaciones del capital para lograr una absoluta subordinación del trabajo³.

Más allá de estas precisiones, los términos “globalización” y “mundialización” suelen utilizarse como sinónimos, aunque sus implicancias semánticas y conceptuales no sean exactamente las mismas. La diferencia entre mundialización y globalización “radica en que la segunda tiene componentes tanto ideológicos como económicos, vinculados con pseudo utopías deformadoras de la realidad, tales como la ‘aldea global’, mientras que ‘mundialización’ –desde una perspectiva sistémica– da más ampliamente la visión de un mundo vinculado por un modo de producción dominante, el capitalismo mundial. La acumulación no se da en el nivel global, sino que existe en tanto acumulación mundializada, en esta etapa de expansión y crisis del capitalismo...”⁴.

Los orígenes más remotos de la globalización pueden rastrearse en el proceso de internacionalización económica que se inició hace más de 500 años con la expansión ultramarina europea y que en el siglo XIX –Revolución Industrial mediante– adquirió una dinámica avasalladora. La globalización refleja nítidamente la “doble tendencia” del modo de producción capitalista, ya que se reproduce en el seno de una determinada formación social y se extiende al exterior de esa formación. Asimismo, se caracteriza por el desarrollo desigual

2 Véase, por ejemplo, la crítica de Alberto R. Bonnet, “El fetichismo del capital-dinero: el debate Chesnais-Husson”, *Realidad Económica*, N° 186, del 16 de febrero al 31 de marzo de 2002, pp. 92-123.

3 John Holloway, *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy*, Buenos Aires, Universidad Autónoma de Puebla-Herramienta, 2002.

4 Raúl Bernal-Meza, “La mundialización. Orígenes y fundamentos de la nueva organización capitalista mundial”, *Realidad Económica*, N° 150, del 16 de agosto al 30 de septiembre de 1997, p. 35. La expresión “aldea global” fue introducida por Marshall McLuhan en su obra *La galaxia Gutenberg* en 1962. También se han utilizado otras metáforas para hacer referencia a la globalización, tales como “shopping center global”, “nueva Babel”, etc.

y por la diferenciación entre metrópolis imperialistas y formaciones sociales dependientes⁵.

Evidentemente no existen discontinuidades radicales en relación con el capitalismo tradicional. Desde este punto de vista, la globalización puede analizarse como “proceso objetivo” (varios procesos objetivos, por cierto, aunque incoherentes y no unidireccionales) que define una tendencia del desarrollo capitalista al reordenamiento estructural y funcional a los intereses de las corporaciones transnacionales y como “ideología” normativa y prescriptiva (denominada generalmente como neoliberalismo), ya que constituye una nueva visión del mundo del capital que, al presentarla como indiscutible y única vía del progreso de la humanidad, busca consolidar un consenso tácito en torno a la presunta “superioridad” de los mecanismos de mercado y en torno a la irreversible universalidad de la mundialización.

En el sentido neoliberal, globalización es el nombre de la ideología de los que han ganado en los últimos veinticinco años. Según Octavio Ianni el dato fundamental es que la reproducción ampliada del capital a escala global se convirtió en determinación predominante: “Uno de los signos principales de la globalización del capitalismo es el desarrollo del capital en general, que trasciende mercados y fronteras, regímenes políticos y proyectos nacionales, regionalismos y políticas geográficas, culturas y civilizaciones (...) Articula los más diversos subsistemas económicos nacionales y regionales de organización de la economía, las más diferentes formas de organización social y técnica del trabajo subsumiendo monedas, reservas monetarias, deudas internas y externas, tasas de cambio, tarjetas de crédito, y todas las otras monedas reales o imaginarias”⁶. Para este autor el capitalismo en la era del globalismo no sólo desarrolla y mundializa sus fuerzas productivas y sus relaciones de producción, sino también sus instituciones, sus moldes, valores y formas de pensamiento. De todos modos —destaca Ianni— hay que precaverse de cualquier asociación de la globalización con la homogeneización.

5 Nicos Poulantzas, *La internacionalización de las relaciones capitalistas y el Estado-nación*, Buenos Aires, Fichas (Ediciones Nueva Visión), 1974, pp. 13-14. Poulantzas, basándose en Manuel Castells, sostiene que una formación social es dependiente “cuando la articulación de su propia estructura económica, política, ideológica, expresa relaciones constitutivas y asimétricas con una o varias formaciones sociales que ocupan, respecto de la primera, una situación de poder” (p. 15).

6 Octavio Ianni, *La era del globalismo*, México, Siglo XXI, 1999, pp. 16-17. En este trabajo Ianni plantea que la globalización constituye la “emergencia de una configuración geohistórica original (...) de una realidad social, económica, política y cultural de ámbito transnacional”.

Para Ulrich Beck “globalización significa la perceptible pérdida de fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, la información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad civil, y, relacionado básicamente con todo esto, una cosa que es al mismo tiempo familiar e inasible —difícilmente captable—, que modifica a todas luces con perceptible violencia la vida cotidiana y que fuerza a todos a adaptarse y responder. El dinero, las tecnologías, las mercancías, las informaciones y las intoxicaciones “traspasan” las fronteras, como si éstas no existieran”⁷. Si bien son evidentes las tendencias a la “desterritorialización”, tal vez Beck exagere en cuanto al desdibujamiento de las fronteras, pues, como veremos, la globalización acaba con algunas pero traza otras. Beck también caracteriza a la globalización a partir de “la difusión de un capitalismo globalmente desorganizado, donde no existe ningún poder hegemónico ni ningún régimen internacional, ya sea de tipo económico o político”⁸. Pero se contradice, puesto que paralelamente afirma que “la distribución geográfica de las corporaciones refleja las habituales estructuras de poder en la sociedad global: 435 de las 500 transnacionales más importantes —el 87 por ciento— pertenecen a los países del grupo G-7. De ellas 151 son estadounidenses, 149 son japonesas, 44 alemanas, 40 francesas, 33 británicas, 11 italianas y 5 canadienses...”⁹. No hace falta ser muy perspicaz para percibir que sí existe un poder hegemónico, económico y político, a nivel mundial.

Joachim Hirsch, por su parte, sugiere ver todo lo relacionado con la globalización en la conciencia de la vida cotidiana; sostiene que: “evidentemente la globalización representa cosas muy variadas: internet, Coca Cola, televisión vía satélite, IBM, libre comercio, correo electrónico, triunfo de la ‘democracia’ sobre el ‘comunismo’, NAFTA, Mercosur, telenovelas de Hollywood, Microsoft, la catástrofe climática, acaso también la Organización de las Naciones Unidas y las intervenciones militares ‘humanitarias’ realizadas en su nombre...”¹⁰. Por lo general vemos que con el nombre de globalización se suelen designar una serie de variaciones y de procesos diferentes en:

El terreno económico, a través de la expansión del capital a nuevos dominios y la conversión de cada vez más sectores de reproducción simple de mercancías en espacios de producción capitalista; a través de la liberalización del tráfico de

7 Ulrich Beck, *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*, Barcelona, Paidós, 1998, p. 42.

8 Ulrich Beck, *op. cit.*, p. 32.

9 Ulrich Beck, *op. cit.*, p. 47.

10 Joachim Hirsch, “¿Qué es la globalización?”, *Realidad Económica*, N° 147, del 1 de abril al 15 de mayo de 1997, p. 8.

mercancías y capitales, la internacionalización de los procesos económicos (de las transacciones productivas y financieras), el dominio de las empresas transnacionales y la constitución de un mercado capitalista que abarca todo el mundo, pero que no sólo lo abarca en extensión, sino también en intensidad; finalmente a través de la crisis del taylorismo-fordismo (modelo automatizado de masas) y su reemplazo por la automatización flexible y programada, principalmente en los países centrales. Se amplían así las capacidades acumulativas del capital y se abren nuevos espacios de explotación de la fuerza de trabajo (o directamente se la sacrifica en el altar de la expansión). Se consuma el proceso de “subsunción real” del planeta al capital. Cabe destacar que el crecimiento en el sector industrial viene siendo más lento que en otros sectores; la desindustrialización, la “tercerización” de la economía y el crecimiento del sector financiero caracterizan los procesos de reestructuración económica de las últimas tres décadas. En cuanto a la liberalización del tráfico de capitales, es importante tener en cuenta el incremento de la velocidad y de las escalas de los flujos en su forma dinero, lo que ha generado un capitalismo sostenido en una estructura financiera altamente inestable basada en el crédito y la deuda¹¹. Estos flujos tienden a incluir en redes de producción, inversión e intercambio a regiones que en etapas anteriores quedaban excluidas; por otra parte nuevas regiones, incluso periféricas, comienzan a jugar el rol de inversoras.

El terreno político, a partir del fin de la Guerra Fría, del “triunfo” de la democracia liberal, de la crisis del Estado nacional (crisis de las prácticas estructurales tradicionales a través de las cuales se ejercían las funciones integradoras del Estado), del deterioro de la noción –legada por el Estado benefactor– de “condición pública” y de la imposición de programas denominados neoliberales o neoconservadores que incluyeron la reforma del Estado, la desestatización de la economía, la privatización de empresas públicas, etc., que permitieron al capitalismo la reformulación de su dominación social. En este plano también se ha destacado la tendencia “congénita” (las “afinidades electivas”) al despotismo político y a las distintas formas de autoritarismo del liberalismo económico, sobre todo en los países periféricos.

O sea que desde el punto de vista político, el fenómeno de la globalización implica una crisis de dominación en general y en particular una crisis de la democracia, sistema que queda reducido a la esfera de los procedimientos, perdiendo sus contenidos sociales y su esencia igualitaria (“democracia mínima”) junto con cualquier trazo de gobierno popular que exceda el ejercicio

11 Algunos autores sostienen que en los últimos años se viene profundizando la brecha entre la “acumulación real” y la “acumulación monetaria”.

periódico y pasivo del sufragio. En este sentido la evidencia histórica demuestra que el antagonismo entre mercado y democracia resulta más auténtico que la (falsa) contradicción entre mercado y Estado.

El terreno cultural e ideológico, a través de la imposición de un “pensamiento único”, tendiente a la legitimación de la primacía capitalista a través del supuesto que plantea que cualquier alternativa a este sistema es inviable. Esta noción de pensamiento único está lejos de ser para nosotros un concepto reduccionista.

Reconocemos la complejidad de los procesos de la globalización, sobre todo en el plano cultural. Pero no se puede negar la imposición a escala planetaria de la visión de los economistas y políticos neoliberales que, al decir de Néstor García Canclini, extendieron “sus precarios éxitos explicativos en una *zona* de la economía –las finanzas– al conjunto de la sociedad y la cultura. Todo se podría entender reduciéndolo a fenómenos de mercado y flujos de inversiones especulativas”¹². También a través de la “satanización” del Estado, la imposición de los “valores” liberales tales como el individualismo, la competencia (que es un mecanismo excluyente por definición), el consumismo, y a través de la monetización de las relaciones sociales y la mercantilización de la existencia. Finalmente, y en un plano específicamente cultural, a través de la imposición de un conjunto de objetos y prácticas no inscriptas en los metabolismos de las colectividades que defienden formas de convivencia más humanas. Esta imposición se ha visto acompañada por unos procesos de “transnacionalización en la producción de representaciones sociales”. Estos procesos de pluralización de signos y símbolos a escala global son sumamente contradictorios: por un lado, algunos grupos concentran el poder de incidir en la conformación de las identidades y las realidades sociales y manejan el circuito de circulación mediática (por ejemplo, la trilogía integrada por las cadenas televisivas CNN, MTV, HBO, que concentran un alta cuota del poder de transmisión de mensajes), imponen de este modo sus visiones e impulsan la unificación compulsiva de pautas, la “estandarización” cultural, pero, por el otro, cuando los mensajes son emitidos por grupos “alternativos”, pueden favorecer la constitución de actores globales críticos y contrahegemónicos.

El reverso de las tendencias homogeneizadoras ha sido el resurgimiento de nacionalismos, tribalismos, fundamentalismos nihilistas y el auge de una amplia gama de teologías antimodernas, que objetivamente cuestionan a la globalización

12 Néstor García Canclini, “Definiciones en transición”, en Daniel Mato (comp.), *Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización*, Buenos Aires, CLACSO, 2001, p. 58.

neoliberal pero sin plantear un orden superior. Un claro ejemplo fueron los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono en Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, una “forma” de decir que no se está de acuerdo con el liderazgo norteamericano del proceso de globalización y con su monopolio unilateral de la violencia. No fueron ataques a un supuesto “Estado global” o una abstracta “soberanía global”, sino una acometida irracional al poder global de Estados Unidos, distinguido por una irracionalidad aun mayor.

Considerando que la urbe es también un discurso y por consiguiente un instrumento de comunicación simbólica, vemos que Nueva York se convirtió en blanco no por su condición de capital de la “aldea global”, sino por ser el centro del poder del Estado norteamericano, Estado lanzado al exterminio de cualquier resistencia a la acción del capital y comprometido con la aceleración de su despliegue mundial.

De algún modo, esos jets haciendo impacto en las Torres Gemelas pueden verse a la luz del “efecto boomerang”, como una consecuencia de las políticas que Estados Unidos desarrolló directa o indirectamente. Una ironía del destino puede servirnos para explicar este efecto: los aviones civiles como los que se incrustaron en las Torres constituyen una de las principales exportaciones de Estados Unidos. Esta industria creció durante las guerras y el Pentágono (otro de los “blancos”) jugó en distintos momentos un papel clave tanto para sostenerla como para favorecer su expansión¹³.

Existe un elemento central compartido por la política imperialista de Estados Unidos (como expresión del proyecto del capital) y el fundamentalismo: su carácter igualmente anticivilizatorio. Posiblemente tengamos que buscar los embriones de una nueva civilización (pluralista, democrática, humana, solidaria, igualitaria) en las comunidades indígenas del sur mexicano, en los campamentos y asentamientos de los campesinos sin tierra de Brasil, en las comunidades campesinas de Argentina, Ecuador, Bolivia, etc., en las luchas y emprendimientos del movimiento de trabajadores desocupados y ocupados del Gran Buenos Aires y de algunas provincias del interior, en el arco iris formado por todos los sujetos que pugnan por su autoconstitución y por las prácticas (institucionalizadas o no) que nutren el movimiento antiglobalizador y se oponen consciente o inconscientemente al totalitarismo del mercado.

13 Podemos agregar otra “ironía del destino”. Un 11 de septiembre, pero de 1973, el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, era derrocado y asesinado por un golpe militar en el cual la participación de Estados Unidos (ya sea por la vía de la “instrucción” de militares chilenos, por las “gestiones” de sus lobbistas internacionales y las presiones de algunas empresas norteamericanas), está históricamente comprobada.

El terreno científico y técnico, a través del desarrollo de las nuevas tecnologías, en particular en el área de la informática, la biotecnología y las comunicaciones¹⁴, desarrollo que tuvo importantes derivaciones tanto en el terreno de la producción como en el de la organización y la gestión.

Las telecomunicaciones se han constituido en el sistema nervioso central de la economía global, reducen los costos de las transacciones, incrementan la productividad, e incluso, en algunas ramas, integran el proceso de producción. Por otra parte, contribuyen a la expansión de las capacidades de los bienes y servicios complementarios. Microelectrónica, fotónica, software de ordenador, arquitectura de redes, superconductividad, son los términos del nuevo lenguaje económico.

Aquí vale una aclaración: la imposición de las nuevas tecnologías no debe verse sólo como la causa de la globalización, sino también como su finalidad. Por ejemplo, las nuevas tecnologías les permiten a los “inversores” liberarse de la sujeción al espacio; cualquier plaza financiera del mundo les resulta vecina, lo que les permite incrementar sus beneficios.

La globalización de los mercados ha sido funcional a un marcado incremento del contenido tecnológico de los procesos productivos y organizacionales. El desarrollo informático ha provocado un cambio drástico en los modelos organizacionales; en el contexto de la economía informacional la clásica línea de montaje es reemplazada por la red o complementada por ella. Se alteran de este modo las formas de cooperación y comunicación en y entre los ámbitos productivos.

Las nuevas tecnologías también han aumentado la incertidumbre estratégica de los agentes económicos puesto que han favorecido el desarrollo de un proceso selectivo que tiende a eliminar a los agentes que no logran alcanzar el “umbral mínimo” y encumbra a otros agentes que se configuran en los marcos del patrón tecnológico dominante.

El conocimiento y la información han adquirido el carácter de bienes simbólicos ocupantes de un lugar estratégico en los procesos económicos. La globalización en el campo de la comunicación, por su parte, remite a un proceso de concentración de los medios de comunicación en unos pocos grupos (*multimedia*), lo que, por supuesto, favorece un proceso de universalización

14 Según Manuel Castells, “También la ciencia y la tecnología están globalizadas en redes de comunicación y cooperación, estructuradas en torno a los principales centros de investigación universitarios y empresariales. Como lo está el mercado global de trabajadores altamente especializados, tecnólogos, financieros, futbolistas y asesinos profesionales, por poner ejemplos...” Véase Manuel Castells, “Globalización y antiglobalización”, *Tesis 11*, N° 59, septiembre-octubre de 2001, p. 38.

compulsiva de pautas culturales y la proliferación de las más variadas formas de desarraigo. Este papel jugado por la tecnología, clave para el crecimiento del capital y la obtención de ganancias extraordinarias (“rentas tecnológicas”, resultantes del monopolio del progreso técnico), no deja de ser un componente característico del capitalismo desde sus orígenes, pero en la actualidad la revolución tecnológica puede analizarse como una dimensión que adquiere un peso relativo mayor en el marco de las nuevas modalidades de acumulación, lo que, de todos modos, nos parece insuficiente para atribuirle a la tecnología una dinámica propia.

El terreno social se ha visto alterado en buena parte de las pautas que parecían inamovibles al promediar el siglo XX. Esto se manifiesta en la crisis del mundo agrario y la tendencia a la desaparición del campesinado, la conformación de ciudades y fábricas globales, la subsunción del proceso de trabajo a los movimientos del capital global, el desempleo estructural¹⁵, la complejización, la heterogeneización y la desindicalización de la clase obrera, la constitución de una “subclase” de excluidos y condenados a existencias extrasociales, de una superpoblación absoluta, las distintas formas de discriminación (racial, de género, política, religiosa, etc.), la creciente criminalización de las clases subalternas y del conflicto social en particular, etc.¹⁶

Esto remite al cambio en el sentido del concepto de seguridad: de la seguridad social de hace tres décadas pasamos a la seguridad “definida estrechamente en términos físicos, de protección frente a la violencia delictiva y no de riesgos de la vida (salarial, social, médico, educativo, etc.)”¹⁷.

Asistimos a la globalización de una política de seguridad que, surgida en el Manhattan Institute y en la Heritage Foundation y expresada en figuras como William Bratton¹⁸ se fue expandiendo por todo el mundo. Esta política básica-

15 Según Octavio Ianni, el desempleo estructural es resultado de la dinámica de la reproducción ampliada del capital que “hace que el capital constante, invertido en máquinas y equipos, crezca en escala proporcionalmente mayor que el capital variable, destinado a la compra de fuerza de trabajo”. Véase Octavio Ianni, *La era del globalismo*, México, Siglo XXI, 1999, p. 132.

16 En este panorama se inscriben los efectos del flujo migratorio desde los países periféricos hacia los centrales. Ernest Mandel decía que “la fuerza de trabajo fluye de las áreas marginales menos desarrolladas hacia los centros industriales (...) por la sencilla razón de que el capital no fluye (o no lo hace en la cantidad suficiente) de estos centros hacia las regiones marginales”. Véase Ernest Mandel, *El capitalismo tardío*, México, Ediciones Era, 1980, p. 319.

17 Loïc Wacquant, *Las cárceles de la miseria*, Buenos Aires, Manantial, 2000, p. 22.

18 William Bratton se desempeñó como jefe de Policía en Nueva York, Boston y Los Angeles; aplicó y difundió la idea de “tolerancia cero” y las prácticas derivadas de ella.

mente consiste en la aplicación de las teorías del *management* y de la gestión por objetivos¹⁹ a lo estrictamente policial. Se mundializa la tolerancia cero (intolerancia selectiva) y junto con ella la gestión judicial, policial y carcelaria de la pobreza. Lo que se penaliza es la miseria.

Según Loïc Wacquant: “A partir del ámbito policial y penal, la noción de ‘tolerancia cero’ se difundió según un proceso de metástasis para designar la manera alterada, y sin distinción, la aplicación estricta de la disciplina parental dentro de las familias, la expulsión automática de los alumnos generadores de trastornos en sus establecimientos, la suspensión de los deportistas profesionales culpables de violencias fuera de los estadios, el control puntilloso del contrabando de droga en las cárceles (...) la sanción severa de los comportamientos descorteses de los pasajeros de avión...”²⁰. Para Wacquant, “así como la ideología neoliberal en materia económica se basa en la separación hermética entre lo económico (presuntamente regido por el mecanismo neutral, fluido y eficiente del mercado) y lo social (habitado por la arbitrariedad imprevisible de las pasiones y los poderes), la nueva *doxa* penal que hoy se difunde en Estados Unidos (...) postula una cesura neta y definitiva entre la circunstancias (sociales) y el acto (criminal), las causas y las consecuencias, la sociología (que explica) y el derecho (que regula y sanciona)...”²¹.

Esta cesura es el pilar de los planteos de derecha que abominan de cualquier explicación estructural. Margaret Thatcher, siendo Primer Ministro y en relación con el “problema de la vivienda” (que para ella era en realidad el problema del control del espacio urbano), se lamentaba de no poder “dispersar” por medio de la acción policial a las multitudes de “hombres borrachos y sucios” que dormían debajo de los puentes y en las calles y plazas de Londres, porque “desafortunadamente, existía la tendencia, persistente en los círculos educados, a considerar a todos los ‘sin techo’ víctimas de la clase media social, en lugar de considerar a la sociedad de la clase media víctimas de los ‘sin techo’...”²².

Noam Chomsky sostiene que la derecha no enfrenta nunca las verdaderas cau-

19 El *management* puede considerarse como una versión actualizada de la ideología tecnocrática, que se presenta como una superación de la burocracia tradicional caracterizada por el ejercicio de una gestión “por normas”, atada a reglamentos y por tanto más rígida y menos “creativa”.

20 Loïc Wacquant, *op. cit.*, p.36.

21 Loïc Wacquant, *op. cit.*, p. 60.

22 Loïc Wacquant, *op. cit.*, p. 514.

sas del crimen, sino que “el crimen es explotado de diferentes maneras como un método de control de la población”²³.

Lo cierto es que si estos “puntos de vista” que estigmatizan a las víctimas y las presentan como victimarios, tienden a naturalizarse, el riesgo para la sociedad es enorme. Se trata del camino que conduce a la barbarie y al genocidio. De este modo tiende a consolidarse un nuevo *ethos* punitivo. Modalidades como el “fichaje genético”, las detenciones preventivas ante comportamientos “protodelictivos”, el confinamiento en guetos, las prisiones para niños (como la de Kent, en Gran Bretaña), un lenguaje atroz adquirido en libros de sociobiología que pueblan las góndolas de los supermercados, los escuadrones de la muerte en los suburbios de algunas ciudades latinoamericanas, etc., son una clara señal de que el capital globalizado tiende a degradar la sociabilidad de la especie humana.

El sistema escinde al hombre del mundo. Los excluidos de la sociedad del discurso y el espectáculo se multiplican mientras que los incluidos se disciplinan bajo la amenaza de la exclusión.

“Globalización” remite entonces a un concepto descriptivo más que explicativo, un concepto que sin establecer relaciones causales funciona como “receptáculo” de una serie de fenómenos contemporáneos que están estrechamente interrelacionados; por lo tanto, se trata de un concepto que remite a “relaciones complejas entre factores técnicos, económicos, políticos e ideológico-culturales”²⁴, utilizado como medio para designar una amplia gama de fenómenos mundiales. Un aspecto al que remiten los distintos planos es el del reemplazo de los sectores que producen valores de uso por sectores productores de mercancías, la “mercantilización” universal, y en particular la mercantilización de la naturaleza que muestra con claridad la interacción de los elementos económicos, políticos, ideológicos, culturales, científicos y sociales.

Cabe destacar la relevancia de la contradicción capital-naturaleza y del papel del proceso de globalización en la degradación de los recursos naturales. La destrucción del medio ambiente es un componente de la globalización neoliberal. Poner la atención en la direccionalidad de las exportaciones de desechos tóxicos, o de especies animales y vegetales, en la modalidad del canje de deuda por naturaleza, sirve para demostrar la existencia de un intercambio ecológico desigual y otras asimetrías.

23 Noam Chomsky, “Democracia y mercados en el nuevo orden mundial”, en Noam Chomsky y Heinz Dietrich, *La sociedad global. Educación, mercado y democracia*, Buenos Aires, Liberarte / Oficina de Publicaciones CBC-UBA, 1996, p. 39.

24 Joachim Hirsch, *op. cit.*, p. 10.

Los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, impulsan la creación de derechos de propiedad y mercantilizan la utilización de distintos recursos. Junto con la naturaleza se mercantiliza el patrimonio cultural de los pueblos; la riqueza natural (la biodiversidad) y la riqueza cultural son presas codiciadas por el capital transnacional.

El hombre, por supuesto, es la principal víctima de la depredación mercantil de la tierra a través de la usurpación del conocimiento genético, de la erosión, de los pesticidas, de los fertilizantes y de la alteración del ciclo hidrológico.

Retomando lo antedicho y a modo de síntesis, podemos decir que la globalización puede analizarse como un momento de la internacionalización del capitalismo acompañada de privatización y mayor transnacionalización de los grupos financieros internacionales, que alude asimismo a la organización de la producción a escala planetaria, a un nuevo paradigma tecnológico y al conjunto de las respuestas del gran capital mundial para mantener la tasa de ganancia y hacer frente a los “rendimientos decrecientes”, para lo cual resultó clave la centralización de los medios de producción y de comunicación, como así también la desregulación laboral y la extensión inédita del desempleo y la pobreza.

La globalización es fundamentalmente una estrategia política que implica, por un lado, la creación de condiciones para que el capital internacional se traslade sin tener en cuenta las fronteras y, por el otro, la reformulación de las estructuras e instituciones tradicionales de la regulación fordista. Es, en última instancia, una nueva estrategia de sobreexplotación y también, para el caso de los países periféricos, de saqueo. Remite entonces a una ofensiva del capital en el terreno de la producción y a un conjunto de medidas protectoras de la propiedad privada.

Según Hirsch, la globalización es “la decisiva estrategia del capital como solución a la crisis del fordismo; es decir, que la liberalización radical del tránsito de mercancías, servicios, dinero y capital debe crear las condiciones para una renovada racionalización sistemática del proceso de producción capitalista y del trabajo y ello, a la vez, está vinculado con la destrucción de la conciliación fordista de clases y de sus bases institucionales”²⁵.

La globalización aparece como sinónimo de una modernización según los estrictos criterios de las economías avanzadas que son las que establecen las pautas de adaptación. La no subordinación a estos criterios conduciría a las economías periféricas a la exclusión y a la marginación, aunque, por ejemplo, la experiencia reciente de Argentina demuestra que las genuflexiones conducen al mismo destino.

25 Joachim Hirsch, *op. cit.*, pp. 13 y 14.

En el juego del “mundo globalizado” hay ganadores y perdedores pero las cartas están marcadas.

Globalización es entonces desterritorialización y desregulación (iniciativa privada sin control), liberalización y flexibilización, es la inédita presión de la competencia que diluye la cooperación y la solidaridad. Es también su reverso: la regionalización²⁶ y la fragmentación, la “glurbanización”: reestructuración del espacio urbano para obtener ventajas competitivas en espacios mundiales y, en términos de Roland Robertson²⁷, la “glocalización”: la búsqueda de ventajas competitivas en el ámbito mundial mediante el aprovechamiento de las diferencias locales o simplemente lo local entendido como “aspecto” de lo global.

Existe efectivamente una “dialéctica” de la globalización, una dialéctica global-local. Podemos identificar actores que conciben globalmente y ejecutan localmente. Ahora bien, muchos autores desde paradigmas eurocéntricos y/o desde el campo de los “estudios culturales” tienden a concebir situaciones que invariablemente se desarrollan en el mejor de los escenarios posibles, pero que precisamente es el menos real y el menos adecuado para la dialéctica de la globalización que proponen. No toman en cuenta que las conexiones que constituyen la red global suelen tener una alta especificidad, y a veces son casi corporativas.

La conexión entre las distintas plazas financieras del mundo, la existencia de redes globales de colegas académicos, de fanáticos del cine bizarro, de un determinado conjunto de rock, no hacen más homogéneo al mundo. Seguramente no más que la vieja y vigente trilogía de la Revolución Francesa –libertad, igualdad, fraternidad– o que la idea del desarrollo que hace 40 años supo proveer de un lenguaje común a los Estados nacionales de todo el planeta.

Asimismo, las visiones que cuestionamos suelen confundir los espacios sociales y culturales transnacionales con la globalización misma, recurren a ejemplos frívolos como los amores globales, la globalización de las biografías o las familias

26 Los sistemas regionales (formados por la integración de Estados nacionales) más importantes son: la Unión Europea (UE), la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) y el Mercado Común del Cono Sur (Mercosur). Existen otros sistemas como el Mercado Común de América Central, la Asociación de Libre Comercio del Caribe, la Comunidad Económica de África Occidental, etc. Según Octavio Ianni, “la regionalización puede ser vista como una necesidad de la globalización, aunque simultáneamente sea un movimiento de integración de los Estados-nación (...) En ciertos aspectos puede ser una técnica de preservación de los intereses ‘nacionales’...”. Véase Octavio Ianni, *op. cit.*, p. 15.

27 Roland Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture*, Londres, Sage, 1992.

multiculturales. Hablan de “acercamiento” o de “mutuo encuentro de las culturas locales”, sin tener en cuenta la raigambre profundamente asimétrica y por lo tanto contradictoria de estas relaciones. Ven adaptación y/o negociación donde hay imposición unidireccional, y diversidad donde predomina la desigualdad.

En el continente americano hace más de quinientos años que sospechamos cuando se habla de “encuentro de culturas”. Definitivamente este mundo no se caracteriza por la armonía y la homogeneidad. En todo caso, éstas se manifiestan “por arriba”, lo que significa que la riqueza sí tiende a tornarse globalmente homogénea mientras que la pobreza sigue siendo tozudamente local. Tampoco se caracteriza por el reconocimiento de la alteridad. La globalización neoliberal nos impone un adentro y un afuera. El límite es tajante.

Un ejemplo puede servir para ilustrar lo que sostenemos: en la puerta de los hipermercados (la mayoría de capital extranjero en Argentina) solemos encontrarnos con una modesta mujer de rasgos y atuendos del Altiplano que, con las manos apoyadas sobre sus rodillas, atiende un precario e informal puesto que ofrece ajos, limones, ajíes y otros productos que transportó desde el Mercado Central en recargadas bolsas. Estos productos abundan en las góndolas del súper y la mujer, evidentemente, aprovecha el movimiento que el gran comercio genera. Si bien existe una tendencia a descartar, de entrada, una actitud filantrópica de parte de los responsables del establecimiento hacia la subclase de los trabajadores, es lícito pensar que esa mujer permanece en su lugar sin ser corrida porque no constituye una competencia importante para una gran empresa que hasta podría considerarla estructuralmente superflua e incluso podría ver en su silenciosa presencia una consecuencia directa de la destrucción del pequeño comercio local, ocasionada por el mismo súper. Pero también podemos percibir un límite, una frontera invisible pero enorme, dos mundos, dos dimensiones y dos tiempos *aparentemente unidos* pero profundamente escindidos e incomunicados: un adentro global, pura temporalidad, a-tópico templo de la desorientación, sin identidad, exactamente igual a otros adentros, y un afuera local, de signo opuesto (tiempo agobiante, pura espacialidad) y objeto de indiferencia. Incluso, podríamos percibir algo mucho más perturbador: la invisibilidad del nexo entre la riqueza y la miseria, la invisibilidad de la polaridad entre la acumulación de una y de otra, la negación inconsciente de la estrecha dependencia entre los que ganan y los que pierden.

Si existe una red cuyos nodos se intercomunican, también hay espacios blancos (espacios de desconexión) en esa trama. La mayoría de los seres humanos, los pobres, ocupan esos espacios, la red los cubre pero no los toca. Como el espacio global de los nodos de la red, estos blancos son espacios de proximidad y afinidad cultural, social y potencialmente política, pero aquí resulta clave la dimensión

local. Las articulaciones entre lo local y lo global son sumamente complejas y generan tensiones en la organización del sistema capitalista.

Por ejemplo, la circulación del capital plantea la contradicción entre la movilidad y la fijación, entre el compromiso local y el interés global; las empresas multinacionales a pesar de sus horizontes globales deben integrarse a circunstancias locales. El concepto de lo “glocal” nos parece aceptable sólo si nos sirve para percibir el reflejo de la polarización y la estratificación jerárquica del mundo.

Lo antedicho no niega la posibilidad de que otras versiones de la globalización sean teóricamente factibles, ya sean “blandas” o “alternativas”. De hecho, uno de los objetivos de este capítulo es precisamente favorecer un debate en torno a las posibilidades no previstas por la ideología dominante, pero la experiencia histórica reciente y el “capitalismo realmente existente” nos plantean la necesidad de proponer esta aproximación genérica a la globalización neoliberal²⁸ (globalización de un sistema sin instrumentos de regulación y de un esquema basado en la asimetría), es decir, a su versión “fundamentalista”, “desde arriba” o “hiperglobalizadora”, la más dura y vigente.

Bibliografía

- Beck, Ulrich, *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*, Barcelona, Paidós, 1998.
- Bernal-Meza, Raúl, “La mundialización, orígenes y fundamentos de la nueva organización capitalista mundial”, *Realidad Económica* N° 150, del 16 de agosto al 30 de septiembre de 1997.
- Bonnet, Alberto R., “El fetichismo del capital-dinero: el debate Chesnais-Husson”, *Realidad Económica* N° 186, del 16 de febrero al 31 de marzo de 2002.
- Castells, Manuel, “Globalización y antiglobalización”, en *Tesis 11*, N° 59, septiembre-octubre de 2001.
- Chesnais, François, *La mondialisation du capital*, París, Suroy, 1997.
- Chomsky, Noam, “Democracia y mercados en el nuevo orden mundial”, en Chomsky, Noam y Heinz Dietrich, *La sociedad global. Educación, mercado y democracia*, Buenos Aires, Liberarte / Oficina de Publicaciones CBC-UBA, 1996.

28 El neoliberalismo propone un retorno al liberalismo puro de los orígenes, pureza que con el desarrollo histórico supuestamente se fue tergiversando por la “influencia corruptora” de las tendencias colectivizantes y estatistas. El neoliberalismo fue y es impulsado por fuerzas conservadoras, aunque hay que reconocer que ha impregnado a otras fuerzas.

- García Canclini, Néstor, “Definiciones en transición”, en Mato, Daniel (comp.), *Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización*, Buenos Aires, Clacso, 2001.
- Hirsch, Joachim, “¿Qué es la globalización?”, *Realidad Económica* N° 147, del 1 de abril al 15 de mayo de 1997.
- Holloway, John, *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy*, Buenos Aires, Universidad Autónoma de Puebla / Herramienta, 2002.
- Ianni, Octavio, *La era del globalismo*, México, Siglo XXI, 1999.
- Mandel Ernest, *El capitalismo tardío*, México, Ediciones Era, 1980.
- Poulantzas, Nicos, *La internacionalización de las relaciones capitalistas y el Estado-nación*, Buenos Aires, Fichas (Ediciones Nueva Visión), 1974.
- Robertson, Roland, *Globalization: Social Theory and Global Culture*, Londres, Sage, 1992.
- Wacquant, Loïc, *Las cárceles de la miseria*, Buenos Aires, Manantial, 2000.

La última dictadura: genocidio, desindustrialización y el recurso a la guerra (1976-1983)

Ezequiel Sirlin

1. Introducción

La última dictadura se bautizó a sí misma “Proceso de Reorganización Nacional”, proyectando que 1976 ocuparía en la historia un lugar equiparable a 1880 por la refundación de un capitalismo liberal firmemente asentado en sus bases de dominación. Al cumplirse veinticinco años del golpe, los analistas concedieron a 1976 un significado comparable a 1880 y a 1930, pero sólo en tanto tuvo lugar la instalación de un nuevo modelo de acumulación, que se diferenciaba de los anteriores por sus constantes destructivas: desindustrialización selectiva, desocupación estructural, descenso integral de las clases subalternas, desguace del patrimonio estatal, decadencia de las prestaciones sociales, endeudamiento extremo, fuga de capitales, primacía de las ganancias financieras, concentración del ingreso.

En 2001 este modelo condujo al país a una crisis abismal y para los analistas no podía explicarse el derrumbe económico y social más hondo de Argentina sin llevar la vista atrás y atender a lo que se había iniciado en 1976: un modo de apropiación de la riqueza que carcomía el aparato productivo y los niveles alcanzados de bienestar social, un sistema de valorización financiera que con tropiezos y recuperaciones había logrado sobrevivir a la dictadura para alcanzar una segunda fase de concentración vertiginosa del ingreso durante el régimen menemista, en los años 90.

La última dictadura también representa la embestida más terrorífica de cuanto se oponía al orden dominante. Las tradiciones reaccionarias nunca se habían aunado tan cruelmente contra sus enemigos dando lugar a un genocidio administrado y tecnificado, con rutinas de perversión diseñadas en el doble fondo de las instituciones más antiguas del Estado. La refundación del capitalismo liberal a partir de 1976 sólo ha sido equiparada por su violencia con el avance de la frontera blanca en 1879¹. La analogía

1 La dictadura rindió un intenso homenaje al centenario de la “conquista del desierto”, llegando a producir una miniserie televisiva, “Fortín Quieto”, destinada a afianzar el culto de esa “gesta civilizatoria”.

se ha trazado con cautela entre la “pacificación de los desiertos” y la aniquilación de la izquierda revolucionaria.

En el país del golpe de Estado intermitente, la última dictadura se diferenció de las anteriores por sus embestidas extremas no contempladas siquiera por la dictadura de 1966. En principio, pueden distinguirse tres ofensivas que conformaron una estrategia singular de perpetuación en el poder y de intervención penetrante sobre la sociedad:

- 1) Un despliegue represivo sin precedentes que incluyó la matanza metódica de una categoría de personas previamente definida por el discurso estatal (genocidio).
- 2) Una ofensiva contra las ISI (industrias sustitutivas de importaciones) livianas de capital nacional, en favor de la especulación financiera y del encumbramiento de burguesías concentradas, tanto locales como extranjeras. Un plan de dispersión obrera y desindustrialización selectiva tendiente a que la protesta social no renaciera en el futuro.
- 3) Un mecanismo para vincularse con la sociedad que tampoco había sido imaginado por las dictaduras anteriores: movilizar sin descanso a los argentinos contra enemigos supuestamente antinacionales (“subversión”, “Chile”, “campaña antiargentina”, “Inglaterra”), montar escenarios confrontativos y belicistas en el marco de la exaltación patriótica continuada.

Para abordar la significación histórica del último régimen militar, su origen, su desarrollo y principales consecuencias, proponemos tres ejes introductorios:

- 1) El primero consiste en pensar a esta dictadura como el resultado de los distintos conflictos examinados en los capítulos anteriores: capital/trabajo, peronismo/antiperonismo, socialismo revolucionario/capitalismo anticomunista, catolicismo integrista/culturas transgresoras, y el conflicto entre las burguesías empataadas.

La última dictadura fue una contraofensiva múltiple derivada de estas cinco grandes disputas que de manera entrelazada se agudizaban desde 1955, alcanzando su mayor desarrollo en el bienio 1974-1975. En este sentido, el régimen militar debiera ser contemplado como una acometida terrorífica del capitalismo y sus fuerzas represivas contra las fuerzas insurgentes del socialismo revolucionario y todo el arco de la protesta social post-Cordobazo. Un embate sin precedentes del antiperonismo y el peronismo de derecha contra el peronismo de izquierda y el campo popular unificado por la estructura de sentimientos peronistas. Del capital industrial concentrado y la burocracia de los grandes gremios contra el sindicalismo clasista de las industrias más modernas. De las burguesías agroexportadora, financiera y desarrollista contra la burguesía de industrias livianas dirigidas al mercado interno. Del capital privado asociado a la “patria contratista” contra el nacionalismo popular de posguerra. De la jerarquía eclesiástica contra los sacer-

dotes tercermundistas de base y militantes parroquiales que habían proyectado en Jesús la imagen de Camilo Torres o el Che Guevara. De profesores reaccionarios contra cátedras marxistas. De las fuerzas policiales contra marginales y transgresores de las calles. Del catolicismo integrista que celaba un estilo de vida rígido contra las manifestaciones de la cultura joven, las culturas modernas como el psicoanálisis y la revolución de las costumbres de los años 60.

En síntesis, la última dictadura constituye la más extrema de las contrarrevoluciones y contrarreformas habidas en Argentina, y esto no puede explicarse sin atender a la acumulación de conflictos en el período previo, a nivel nacional, continental y mundial. Cuando los analistas se preguntan si el genocidio y el desguace económico iniciado en 1976 pudo haber sido evitado por alguna circunstancia, la respuesta que subyace en sus trabajos es casi siempre fatalista porque consideran que rara vez las fuerzas conservadoras nacionales e internacionales convergieron tan radicalmente en una misma dirección: el recrudecimiento de la Guerra Fría se había potenciado con la humillante derrota de Estados Unidos en Vietnam (1975). El anticomunismo golpista en el Cono Sur alcanzaba su mayor radio a mediados de los 70 cuando las dictaduras militares promovidas por la CIA tuvieron de verde la región.

A esto hay que sumar la tradición golpista de la corporación militar argentina; la maquinaria autorreproductiva de escalafones y mandos enganchados en la proyección política de las Fuerzas Armadas, una posta activada en septiembre de 1930. Los primeros conductores de la última dictadura, Jorge Rafael Videla y Roberto Viola, habían participado como subalternos en el golpe de 1966, así como Juan Carlos Onganía lo había hecho el 4 de junio de 1943, y Perón no había permanecido al margen del movimiento de tropas del 6 de septiembre de 1930 comandado por José Félix Uriburu, general del Ejército que había integrado las filas de los revolucionarios del Parque, en 1890. Los nombres pudieron ser otros, por encima de ellos estaba la sucesión de ambiciones personales y corporativas que arraigaba en los cuarteles. El hecho de que Videla haya sido el primer conductor de la última dictadura es otra muestra del involucramiento orgánico del Ejército como institución en el golpe. Se trataba del militar equilibrista que siempre había manifestado un perfil más bien neutro, a medio camino entre el “profesionalismo” y el antiperonismo declarado, una media bastante aproximada del Ejército posperonista, un “colorado” encubierto (“violeta”) que había logrado permanecer inmune a las purgas producidas en los vaivenes de la politización de la fuerza².

2 María Seoane y Vicente Muleiro: *El dictador. Historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla*, Buenos Aires, Sudamericana, 2001, cap. 4.

¿Qué hubiera sucedido si en alguna de esas purgas previas al golpe, Videla, Viola o Emilio Eduardo Massera hubieran sido apartados de las Fuerzas Armadas? Como toda pregunta instalada en un escenario hipotético, no hay respuestas comprobables. Sin embargo, todo indica que a pesar de las diferencias que más tarde podrían establecerse entre el matiz neoliberal de Videla, el “terropopulista” de Massera, el “nacionalista” de Ramón Genaro Díaz Bessone, o el “belicista” de Leopoldo Fortunato Galtieri, los objetivos represivos del golpe estaban instalados con tal certidumbre en la corporación militar que cualquiera de los eventuales conductores hubiera asumido su ejecución.

2) El segundo eje consiste en comparar a esta dictadura con las anteriores de Argentina, y en particular con la dictadura de 1966. Sin duda que hay elementos comunes entre ellas: eran dos regímenes antiperonistas y anticomunistas, inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional, que pretendían disciplinar a la sociedad clausurando el espacio electoral por tiempo indeterminado, dos dictaduras que no se habían propuesto límites temporales para rediseñar la sociedad. Pero las diferencias fueron significativas, como veremos. En principio, la última dictadura se propuso vengar el fracaso del onganiato desplegando una ofensiva mucho más terrorífica y abarcadora. Fue heredera de las dictaduras del 55 y el 66 pero crítica del modo superficial de excluir el peronismo de la sociedad, sin erradicar definitivamente las bases materiales de la protesta obrera, ni de la revolución social que en ella latía.

3) El tercer eje repara en la relación dictadura/sociedad. En el modo en que el régimen intentó vincularse con los distintos sectores sociales y en las diferentes respuestas que encontró, desde el respaldo de la Iglesia y asociaciones empresarias, hasta muy diversos modos de resistencia civil, pasando por la adhesión ocasional y eufórica de millones de argentinos manipulados por la comunicación oficial que una y otra vez apeló al sentimiento nacional.

Finalizado lo que los militares llamaron la “lucha antisubversiva”, la dictadura creadora de atmósferas patrióticas dio a los festejos del Mundial de fútbol el significado de una reunión nacional “sin descontentos” de la misma sociedad a la que había fragmentado en su afán demonizador, represivo y antisindical. Lo mismo volvería a suceder en los preparativos de la guerra con Chile, y más intensamente durante la guerra de Malvinas. Se trató de una dictadura que a toda costa procuró evitar los tiempos muertos en su convocatoria a la sociedad. Por diversas razones no podía perder la iniciativa y el movimiento beligerante, aunque ese movimiento fuera una alocada huida hacia adelante que la condujera a la destrucción como sucedió en Malvinas.

¿Por qué la dictadura no podía prescindir de estos llamamientos “nacionales” contra enemigos por ella contruidos? Indagar acerca de esas razones puede llevarnos a descubrir aspectos esenciales no sólo del régimen militar sino de la

sociedad argentina que una y otra vez se vio envuelta en las empresas que sus “captadores/salvadores” le formularon. Las fantasías de éxito y de perduración en el poder que el “Proceso” fue concibiendo ni bien empezaron a proliferar las denuncias por sus crímenes, tuvieron buena acogida en vastos sectores de las clases medias: “los desaparecidos no existen, son un invento de la campaña antiargentina”, la “plata dulce” y la invasión de artículos importados como señal de una nueva prosperidad en Argentina, el triunfalismo de Malvinas, son las mayores ficciones de corta duración, pero de mucha intensidad, que el régimen logró instalar a través del control de los medios.

2. El proyecto

La conducción del 76 cuestionó más aspectos de la sociedad “peronista” que los dictadores anteriores³. No sólo se proponía modificar el desarrollo político-ideológico de Argentina, sino la estructura económica que a su entender lo había engendrado. Desde luego que las elecciones y el accionar de los partidos quedarían clausurados por tiempo indeterminado (*primera esfera de intervención*). A su vez, los altos mandos habían acordado aniquilar a las organizaciones armadas de izquierda y a quienes desde el Cordobazo lideraban la protesta social con miras revolucionarias. Intervenir los espacios transgresores de la cultura (*segunda esfera de intervención*). Pero también, y en esto radica la principal diferencia con la dictadura de Onganía, el objetivo era rediseñar el aparato productivo en desmedro de las industrias de sustitución fácil de importaciones a las que consideraban el hábitat primario de la indisciplina laboral. Ésta fue una *tercera esfera de intervención*, la desperonización más profunda que emprendieron los militares desde 1955, y es necesario que la examinemos con mayor detalle.

Para entender por qué el último régimen militar se proponía destruir o transformar esta industria eliminando subsidios y favoreciendo la invasión de artículos importados, hay que recordar de qué industria se trataba, cuál había sido su origen y qué era lo que para los liberales estaba en juego en caso de que sobreviviera.

El embate estaba dirigido contra las ISI livianas que habían nacido durante la Primera Guerra Mundial y las décadas del 20 y del 30, sin el apuntalamiento del Estado ni de la clase dominante tradicional. Esas industrias habían crecido

3 Véase Marcelo Cavarozzi, *Autoritarismo y democracia (1955-1966). La transición del Estado al mercado en la Argentina*, Buenos Aires, Ariel, 1997.

de un modo más bien “silvestre”, bajo el amparo de circunstancias proteccionistas “de hecho” como habían sido las mermas involuntarias de la capacidad exportadora-importadora del país debido a la contracción del mercado mundial. Luego, el Estado peronista había apoyado decididamente a las industrias sustitutivas en desmedro de la burguesía agropecuaria (primer IAPI). Como se trataba de industrias poco modernizadas que aprovechaban al máximo su capacidad instalada (tres turnos diarios), las nuevas fábricas contribuían fuertemente al pleno empleo sobre la base del cual mejoraba la capacidad de negociación de la clase obrera. Estas características genéticas de las ISI resultan fundamentales para comprender por qué el liberalismo económico que propugnaba la alianza cívico-militar de 1976 pretendía destruirlas o transformarlas.

Para esta decidida coalición, el pleno empleo, el arbitraje estatal y las redistribuciones secundarias del Estado de bienestar durante el peronismo habían corroído las bases mismas del “trabajo asalariado” en tanto relación de producción estructurante de la sociedad capitalista. Al garantizar el pleno empleo y fortalecer el poder sindical en las fábricas y en los tribunales del trabajo, el peronismo habría desvirtuado la coacción económica, alterando el disciplinamiento automático de la clase obrera por parte del mercado laboral, generando trabajadores pleitistas e improductivos. Los liberales representados en José Alfredo Martínez de Hoz consideraban que la insurrección se había cebado en esas fábricas porque la sobreprotección estatal no obligaba a que los patrones reconstituyeran su dominación en busca de una mayor productividad. Trabajadores díscolos y empresarios que cedían ante los reclamos, mientras que el Estado populista apañaba la relación por medio de aranceles y subsidios para sostener los aumentos salariales con recursos provenientes del campo y de otros sectores eficientes de la economía. Para los conductores del golpe éstas no eran las únicas causas de la desobediencia social en Argentina, pero sí las más profundas.

Para ellos, la búsqueda de un consenso entre el capital y el trabajo que el peronismo había iniciado reproduciendo la lógica keynesiana del pleno empleo y fortaleza de la demanda, no era más que un factor distorsivo de la dominación de una clase sobre otra, fundado en la falsa imagen de la armonía entre ellas. Los golpistas del 76 consideraban que los gobiernos antiperonistas, civiles o democráticos, que se habían sucedido después de 1955 no habían atacado el problema de raíz. Si bien, durante los shocks desarrollistas de Frondizi y Onganía, se había procurado debilitar las bases sindicales con represión y reformas a la Ley de Asociaciones Profesionales, los intentos habrían resultado fallidos porque militares y civiles antiperonistas no se habían propuesto llegar al fondo del problema. En la jerga higienista de la última dictadura, esta vez se trataba de eliminar no sólo al “virus de la subversión”,

sino al “caldo de cultivo”. Cuando los militares hablaban de ello, en gran medida se referían a la tercera esfera de intervención: desmontar lo que consideraban el ámbito más básico de la formación de la “guerrilla industrial”. Ello implicaba no sólo eliminar al sindicalismo combativo, sino reimponer la coacción económica mediante la apertura de los mercados y la llegada de la competencia extranjera. De este modo, los patrones se verían obligados a mejorar la productividad, poniendo en caja a sus trabajadores, restaurando el orden social en cada fábrica. La obediencia sería reimpuesta en todas sus dimensiones, comenzando por un aumento de la explotación.

Entonces, ¿hubo en Videla y Martínez de Hoz una intención de vuelta a la sociedad agraria y desmonte de la Argentina industrial? En todo caso, ¿cuál era el alcance del “proyecto antiindustrial” y en qué intereses se fundaban sus límites? La pregunta nos lleva a contemplar dos visiones recurrentes.

I) Para una primera interpretación, la dictadura apuntó a destruir integralmente a la industria con el objeto de regresar a la Argentina agrícola anterior al peronismo y al yrigoyenismo. Reducir a la clase obrera para equilibrar socialmente a Argentina en su estructura más tradicional. Restaurar la supremacía de los negocios agrícolas y potenciar los negocios financieros en desmedro de los industriales que debían reducirse drásticamente.

En la versión de Aldo Ferrer, la política económica de la dictadura estaba “explícitamente orientada a dismantelar la estructura productiva”. De esta manera se habría resuelto un conflicto planteado a fines del siglo XIX entre “dos proyectos de país”: el basado únicamente en la agroexportación y el que promovía la diversidad de actividades productivas, cuyos portavoces habían sido Vicente Fidel López, Miguel Cané y Carlos Pellegrini⁴. Un siglo más tarde, Videla y Martínez de Hoz habrían apuntado al desguace industrial debido a que los herederos de la burguesía terrateniente no habían encontrado la forma de “conducir al país por la senda del desarrollo”.

En palabras de Horacio Verbitsky, el proyecto consistía en que Argentina volviera “a sus tiempos de país preindustrial, que importa casi todo y paga —si puede— exportando carnes y granos”⁵. Y en los términos más enfáticos de Seoane y Muleiro: “El plan era un país con diez millones de habitantes, sobraba la tercera parte y, sobre todo, los obreros industriales”. “Videla había sido el elegido, el brazo armado de estos militares y civiles cuyo proyecto nacional corres-

4 Aldo Ferrer, “Economía Argentina y estrategia ‘preindustrial’”, en Alain Rouquié (comp.), *Argentina, hoy*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1983, p. 105.

5 Horacio Verbitsky, *Malvinas. La última batalla de la tercera guerra mundial*, Buenos Aires, Sudamericana (edición corregida y aumentada), 2002 p. 24.

pondría a una Argentina feudalizada (...) se trataba de retrotraer al país a un estadio previo a la existencia del peronismo y del yrigoyenismo”⁶.

El atractivo de esta interpretación basada en la vuelta al agro, consiste en que adjudica la destrucción industrial a un proyecto deliberado de la dictadura. Pero su punto flaco es que no contempla suficientemente que entre los ganadores de la última dictadura habría que contar a las industrias más avanzadas del país⁷, al mismo tiempo que la política de atraso cambiario de Martínez de Hoz no favoreció sostenidamente al agro pese a la empatía de clase que lo vinculaba al sector.

II) Estas objeciones nos llevan a una segunda visión, más reciente, para la cual la noción de “redimensionamiento industrial” o “*desindustrialización selectiva*” se ajusta en mayor medida a los planes del ex director de Acindar (Martínez de Hoz), de los grupos económicos que serían llamados “capitanes de la industria” en los años 80, y de las industrias multinacionales establecidas en Argentina, cuyo objetivo de largo plazo no era retroceder y abandonar un terreno que no podían dominar, sino imponerse en el terreno y crecer en su interior⁸. Reducir indiscriminadamente a la industria hubiera implicado la autodestrucción de un sector de la burguesía perteneciente al “bloque civil” de la dictadura. Tomemos como ejemplo a las industrias automotrices que desde el Cordobazo habían sido un ámbito neurálgico de la lucha de clases. No por eso el régimen se propondría destruirlas y, de haberlo hecho, no hubiera encontrado el beneplácito de las multinacionales implicadas. Lo cierto es que si bien algunas de ellas como General Motors decidieron irse del país, las automotrices fueron el sector más protegido por el Estado de la apertura económica que dispondría Martínez de Hoz, así como el lugar de mayor cooperación entre militares y empresarios en el secuestro y asesinato de delegados gremiales ligados al sindicalismo combativo.

Bloquear totalmente a la industria nunca habría sido el objetivo histórico de la burguesía más tradicional de Argentina. En rigor, la clase dominante de cuño agroexportador no se habría resistido a las nuevas oportunidades de ganancias, sino sólo en la medida en que la sustitución de importaciones pusiera en peligro las exportaciones agropecuarias. Esta había sido en realidad una clase capitalista multisectorial y no iba a despreciar la riqueza que pudieran depararle los

6 María Seoane y Vicente Muleiro, *op. cit.*, p. 25.

7 Las industrias que más crecieron fueron las de bienes intermedios y capital concentrado: celulosa, siderurgia, aluminio, petroquímica.

8 Véanse, por ejemplo, los trabajos recopilados por Alfredo Pucciarelli en *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Siglo XXI, Avellaneda, 2004.

nuevos rubros industriales sin perjuicio de los viejos negocios agrícolas. En concordancia con ello, lo que los liberales del 76 de algún modo se habrían propuesto era volver al curso industrial planteado por el Plan Pinedo de 1940: un crecimiento basado en industrias de bienes exportables que fijara límites a la sustitución de importaciones con el objeto de recuperar los mercados externos. Es decir, la continuidad del modelo de intercambio, ventajas comparativas y “crecimiento hacia afuera” en el mundo post-30. La conducción de la dictadura estaría dispuesta a desmontar o transformar, apertura económica mediante, todo lo que había crecido a contrapelo de esos principios, con el agregado de que esta vez la “naturalización” de la economía conllevaría más que nunca a reconstruir la dominación patronal en las fábricas. Más allá de algunas formulaciones romántico-agraristas centradas en la noción de clases obreras peligrosas y de sociedad industrial perniciosa y conflictiva, la meta de la conducción política y económica no habría sido reducir de cualquier modo el número de obreros, sino, en primer lugar, disciplinarlos mediante la coacción económica y extraeconómica. Las principales burguesías que impulsaban al régimen se parecían mucho menos a una nobleza nostálgica y perdidosa, que a una burguesía capitalista dispuesta a todos los triunfos sobre la clase obrera. La reducción del número de obreros ocupados en la economía se concretaría por un proceso selectivo al cabo del cual decrecerían las industrias de tecnología precaria basadas en la adición del trabajo, al mismo tiempo que se desarrollarían las industrias de capital intensivo y mano de obra escasa. El sometimiento del trabajo se lograría combinando un ataque represivo y un golpe de gracia tecnológico estimulado por la apertura económica. Al mismo tiempo, se fomentaría la dispersión geográfica de los polos industriales mediante regímenes de promoción impositiva que alentarán el traslado de las plantas hacia las provincias menos pobladas del territorio nacional.

Las diferencias con el programa desarrollista de Onganía eran por tanto significativas. En principio, la variante ideológica de Videla y Martínez de Hoz se inscribe, en cuanto a la filosofía esencial de su visión económica, dentro de lo que hoy llamamos neoliberalismo, en referencia a las ideas contrarreformistas del Estado de bienestar keynesiano de posguerra. En Argentina, estas ideas tendrían implicancias decisivas en la cuestión industrial. Allí donde en 1966 Onganía y Krieger Vasena contemplaban la industrialización y el desarrollo social para garantizar el orden y prevenir el avance del comunismo, Videla y Martínez de Hoz reformularon la Doctrina de la Seguridad Nacional pergeñando el desguace de lo que consideraban malformaciones industriales, y de ciertas instituciones características del Estado de bienestar keynesiano. Mientras el desarrollismo de 1966 se concentraba en provocar un salto cualitativo en la sustitución de importaciones mediante la atracción del capital extranjero para

el avance de la “industria difícil”, el énfasis de la política de Martínez de Hoz estaría puesto en destruir ciertas industrias que habían prosperado en la economía cerrada del Primer Plan Quinquenal.

Tomando en cuenta su plan desindicalizador, la apertura económica y la eliminación de subsidios e intervenciones estatales anticíclicas, el discurso de Martínez de Hoz estuvo inspirado en las ideas hostiles a la economía keynesiana formuladas por Friedrich von Hayek y Milton Friedman, los máximos ideólogos del neoliberalismo. Sin embargo, la dictadura argentina no alcanzaría a convertirse, después de Chile, en el segundo experimento integral de las ideas neoliberales antes de la llegada de Margaret Thatcher al poder en Gran Bretaña (1979). Distintos fueron los condicionamientos que la corporación militar le impuso a su ministro de Economía apartándolo de la naciente ortodoxia.

En primer lugar, la conducción militar era reticente a privatizar las empresas estatales; un punto de primer orden en cualquier agenda neoliberal-antikeynesiana. El gobierno militar promovería la filtración subterránea del capital privado en la esfera estatal (*privatización periférica*), pero no concretaría ventas ostensibles de los activos estatales. La conducción encabezada por Videla no estaba dispuesta a pagar el costo simbólico que significaba la enajenación de los patrimonios nacionales, ni el costo político de la desocupación que inevitablemente aumentaría con el traspaso de las empresas. Existen testimonios que indican que el desempleo masivo preocupaba a la conducción del golpe. Que Videla estaba dispuesto a promover la baja de salarios que el capital concentrado pretendía, pero no a la imposición de la “tasa natural de desempleo” que a puertas cerradas ya proponían los seguidores de Thatcher dentro del Partido Conservador inglés. A pesar de que se trataba de una dictadura, para la conducción militar no era sencillo asumir el costo simbólico de una pérdida tan visible del patrimonio nacional. Videla no se sentía en condiciones de poder asumirlo ni ante la sociedad, ni ante las propias Fuerzas Armadas, dentro de las cuales el pensamiento económico no era homogéneo, aun cuando los liberales se habían establecido en la cima del Ejército. Las privatizaciones chocarían con el matiz nacionalista y desarrollista que pervivía en buena parte de las Fuerzas Armadas, y particularmente Videla, cuyo liderazgo no era comparable al que había construido Augusto Pinochet en Chile, priorizaba la unidad del frente militar evitando fracturas que agravaran la competencia por el poder. Mantener las empresas en manos del Estado también le permitía al régimen sumar cargos para las tres fuerzas, lo que contribuía al involucramiento total de cada una de ellas con el “Proceso”.

En segundo término, la corporación militar tampoco constituía el instrumento más adecuado para la aplicación de un programa monetarista basado en fuertes ajustes del gasto público debido a que, lejos de reducir los gastos para desinflacionar la economía, necesitaba aumentarlos en rearme y obras públicas. Armas para satisfacer las inquietudes “profesionalistas” de las Fuerzas Arma-

das, y “autopistas y represas” para jactarse de su eficacia operativa ante la sociedad. Según el Instituto de Estocolmo de Investigaciones para la Paz, el gasto en armamentos de la dictadura argentina entre 1980 y 1982 superó los 15.000 millones de dólares⁹. A estos gastos se sumaron el peso deficitario de las empresas estatales que en muchos casos aumentaron por el auge de prebendas durante la privatización periférica.

2.1 Aspectos políticos del proyecto

Otra diferencia entre los planes dictatoriales de 1966 y 1976 gira en torno al rol de las Fuerzas Armadas. Onganía había decidido apartarlas del poder, replegarlas al ámbito profesional para que no perturbaran la gobernabilidad de la dictadura como había sucedido en los regímenes militares de 1930, de 1943 y durante el enfrentamiento entre “azules” y “colorados” en torno al golpe de 1962. También había pretendido con ello dar a la dictadura una imagen de gobierno civil. Pero el apartamiento previsto por Onganía no había funcionado. La caída humillante de aquel dictador, su soledad en el poder y la vista gorda del Ejército ante la eclosión popular iniciada con el Cordobazo eran imágenes grabadas en las retinas de la conducción golpista de 1976. Por eso fue desechado el modelo “presidencialista” de 1966 por un *gobierno pleno de las Fuerzas Armadas*. Como en 1943, los militares coparían integralmente la estructura del poder, desde los municipios hasta las gobernaciones, las instituciones educativas, sindicatos, medios de comunicación, etc. Recibirían la colaboración de civiles de extracción política conservadora (“amigos del Proceso”), y el involucramiento de las tres fuerzas estaría asegurado tanto por el diseño institucional en torno a la cúspide —una junta tripartita—, como por el reparto equitativo del botín burocrático que por lo general sobrerrepresentó a las dos armas menores, como en el caso de los canales de televisión: uno para cada fuerza (33 por ciento). Según Marta Castiglione, la militarización del Estado alcanzó niveles excepcionales. La presencia del personal militar en la administración pública durante el año 1976-1977 llegó al: 40,5 por ciento en la administración central de organismos, 32,4 por ciento en organismos descentralizados, 37,5 por ciento en provincias y municipalidades de Buenos Aires, y 44,5 por ciento en empresas del Estado¹⁰.

Por último, una tercera diferencia con el modelo de Onganía basado en el corporativismo nos permite abordar la imaginación política que el último régi-

9 Horacio Verbitsky, *op. cit.*, p. 235.

10 Marta Castiglione, *La militarización del Estado en la Argentina (1976-1981)*, Buenos Aires, CEAL, 1992, p. 55.

men militar puso en juego para figurarse y hacer figurar su continuidad. Como toda dictadura instalada en un mundo donde el horizonte de legitimidad era “democrático”, no podía afirmarse exclusivamente en su capacidad represiva, sin transmitir a la sociedad y a las propias Fuerzas Armadas el dibujo de un sistema de perduración en el poder que pareciera “legítimo”, “lógico”, “factible” y “necesario”.

En Argentina, los golpes de 1930, 1943 y 1966 habían recurrido a lo inventado por Mussolini en Italia: las corporaciones suplantarían a los partidos políticos y la competencia electoral en la tarea de transmitir las inquietudes de la sociedad civil al Estado. Pero la última dictadura, lejos de apelar a las corporaciones, planeaba reducirlas al mínimo, sobre todo a las dos corporaciones que estructuraban la “comunidad organizada” de la sociedad peronista: no sólo se intervendría la CGT sino también la CGE y otras organizaciones empresarias, donde se encontraba representada la burguesía industrial defensora de la “economía peronista”. Hasta una parte de los gremios conducidos por la burocracia sindical de derecha serían intervenidos y sus líderes en muchos casos encarcelados, si bien serían objeto de un tratamiento muy diferente al que recibirían los sindicalistas de izquierda.

Entonces, si no sólo se prohibiría por tiempo indeterminado la actividad de los partidos, sino que también se buscaría anular las corporaciones: ¿cómo planeaba la nueva dictadura conectarse con la sociedad? ¿De qué manera construiría su propia ficción de enlace con ella, si tampoco apelaría a los “plebiscitos del sí” implementados por la vecina dictadura de Pinochet?

La pregunta nos conduce al eje de las *convocatorias nacionales* que el régimen inventó una y otra vez para llegar sin intermediarios a esa sociedad; pero antes de abordarlo, debemos examinar dos hechos que incidirían plenamente en la dinámica conducente a Malvinas: el genocidio y la economía de Martínez de Hoz que llevaría al derrumbe de 1981-1982.

3. Genocidio y radicalidad del mal

Se ha estimado que 1 de cada 10 militares participaron en forma directa de los Grupos de Tareas que llevaron a cabo el exterminio¹¹. Pero aun cuando lo hayan hecho en formaciones “nocturnas”, son abrumadoras las evidencias de que todo respondía a los más altos mandos de las fuerzas “diurnas”, quienes finalmente disponían de las instalaciones y la colaboración del conjunto de las Fuerzas Armadas. Fueron los altos mandos quienes, siguiendo el consejo de los

11 María Seoane y Vicente Muleiro, *op. cit.*, p. 226.

represores franceses en Argelia, cuadrícularon al país en 19 subzonas y 117 áreas, acordaron la metodología y supervisaron su ejecución. Lo hicieron en reuniones orgánicas en las que participaron la totalidad de los generales, almirantes y brigadieres. De allí deriva el carácter estatal de la empresa de secuestro y exterminio, lo que constituye el primero de los agravantes que permiten categorizarla como *matanza administrada*.

En los 364 centros clandestinos de detención (“chupaderos”), la dictadura construyó el más absoluto espacio de dominación total sobre sus enemigos y fue allí donde se puso de manifiesto su radicalidad del mal¹². La frialdad de los perpetradores y la crueldad en las salas de tortura constituyen un mal superlativo y ultraideológico que nos obliga a tomar como marcos de referencia los hechos más aberrantes del siglo XX. La dictadura encabezada por Videla no sólo cometió crímenes masivos, sino que en los centros clandestinos construyó un infierno para cada una de sus víctimas en base a normas elaboradas. Posiblemente, el grado más alto de lo que Eduardo Luis Duhalde llamó la “perversión consciente del poder” no corresponda ni siquiera al momento de las ejecuciones clandestinas de prisioneros sino a las instancias previas de suplicio montadas por torturadores que se identificaban con un Dios sádico amante del sufrimiento¹³. La tortura de embarazadas o de hijos en presencia de sus padres no eran iniciativas de “perversos sueltos” sino que respondían a una perversión entrenada en las instituciones militares.

Frente a ello puede parecer trivial que en la empresa de exterminio se haya desplegado un conjunto de recursos burocráticos y técnicos. Sin embargo, esto distingue al “genocidio” de otro tipo de crímenes masivos en la medida en que la organización de una maquinaria para el exterminio de prisioneros corresponde al grado más alto de premeditación en circunstancias de racionalidad propicias para la conciencia y el arrepentimiento. Para el derecho occidental, esto constituye el peor de los agravantes. Allí se funda la diferencia que los códigos penales establecen entre el homicidio impulsado por un “estado de emoción

12 El número de centros clandestinos identificados sigue creciendo conforme se reconocen otros lugares de detención y tortura. Los organismos de derechos humanos estiman que el número fue superior a 500. Los más grandes fueron: la Escuela de Mecánica de la Armada (en Capital Federal, alrededor de 5.000 prisioneros), Campo de Mayo (funcionaron cuatro establecimientos dentro de la guarnición militar del Ejército, con alrededor de 4.000 prisioneros), La Perla (Córdoba, con más de 2.200 prisioneros hasta 1979), Vesubio (La Matanza, con alrededor de 2.000 prisioneros) y Club Atlético (Capital Federal, con más de 1.500 prisioneros).

13 Torturadores de la ESMA como el *Tigre* Acosta decían a sus prisioneros: “Aquí adentro el tiempo no existe”, “Esto no tiene límites”, María Seoane y Vicente Muleiro, *op. cit.*, p. 233.

violenta” y el secuestro –frío y planificado– seguido de muerte. El hecho de que la Armada haya previsto la fabricación en serie del narcótico “pentonaval” para dormir a los prisioneros que serían arrojados al mar desde los aviones permite categorizar la matanza como *genocidio tecnificado*.

Los estudiosos de este tipo de crímenes estatales que proliferaron en el siglo XX han tendido a identificar distintos factores intervinientes en las maquinarias de exterminio. Como señala Tzvetan Todorov, el fanatismo y la bestialidad no resultan suficientes para explicar el tamaño de los crímenes¹⁴. Lo difícil no es explicar el comportamiento de los sádicos-perversos sino el de los “hombres grises” que intervienen en la maquinaria de exterminio. Los hombres bestiales no necesitan despersonalizar a sus víctimas, pero los otros precisan deshumanizarlas siguiendo el camino trazado por los “ideólogos”. Éstos son los primeros artífices del genocidio en la medida en que conciben la “demonización” que lo precede, es decir, lo que Duhalde denomina “el asesinato nominal de las víctimas”¹⁵. Un genocidio no es sólo una matanza masiva, lo que termina de conformarlo es la inclusión de las víctimas dentro de una “categoría” establecida por el Estado a los efectos de su eliminación.

También en el caso argentino puede identificarse una variedad de elementos, objetivos, instancias y timbres pasionales que intervinieron en el exterminio. Comenzando por la *demonización de las víctimas*, los componentes ideológicos que contribuyeron a caracterizar al insurgente revolucionario como agente reproductible del mal no eran nuevos en Argentina, sino que pueden ser rastreados desde el “pánico rojo” de 1909 y la Semana Trágica de 1919, cuando las fuerzas estatales y paraestatales habían hecho de “anarquistas, rusos y catalanes” un enemigo pavoroso. Desde entonces la ideología antiinsurgente se había desarrollado en las imágenes de la amenaza comunista disolvente de la nacionalidad que compusieron los golpes de 1930, de 1943 y de Onganía interpretando la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Pero no es suficiente con detectar los antecedentes, es decir, los hechos e ideas que unidos en retrospectiva “bien podrían” conducir a un genocidio. Es necesario examinar las pulsiones extremas que condujeron a la concreción final del exterminio de miles de prisioneros en los años 75, 76, 77 y 78. La caracterización del “insurgente subversivo” como amenaza expansible no era nueva, pero el modo en que los genocidas internalizaron hasta el paroxismo las metáforas de la “manzana podrida”, del “cáncer” y del “tumor a extirpar”, constituye el factor agregado que condujo a la concreción del plan.

14 Tzvetan Todorov: *Frente al límite*, México, Siglo XXI, 1993.

15 Eduardo Luis Duhalde: *El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica*, Buenos Aires, Eudeba, 1999, p. 68.

La “demonización” de las víctimas se nutrió de diversos elementos. En primer término, el sobredimensionamiento del enemigo. Es cierto que la amenaza planteada por las formaciones armadas de ERP y Montoneros (entre 2.000 y 3.000 combatientes armados, disparmente entrenados¹⁶) superaba a cualquier otra que hubieran enfrentado las fuerzas de seguridad. El número de bajas militares ocasionadas por la guerrilla se acercaba a las setecientas. Sin embargo, los analistas concuerdan en que las dos organizaciones guerrilleras ya estaban desarticuladas y en desbandada bastante antes de que el régimen militar cumpliera un año en el poder, es decir antes de la gran matanza iniciada a fines de 1977, cuando miles de prisioneros serían ejecutados clandestinamente como luego veremos. En segundo término, el convencimiento de la “irrecuperabilidad” de los prisioneros contribuía a la construcción del “demonio absoluto”, en especial cuando se trataba de militantes pertenecientes al tronco del ERP-PRT. En las distintas instancias de exterminio (escritorios y salas de tortura) eran considerados marxistas absolutos que nunca se habían dirigido a Dios, apátridas irredimibles por haber carecido siempre de cualquier matiz nacional.

El cuadro demonizador terminaría de conformarse con el sostén religioso que brindaron los capellanes del Ejército y la jerarquía de la Iglesia que ofreció un argumento de consolación eficaz para la conciencia de los genocidas. El principio establecía que la culpa de la víctima estaba siendo expiada por su sangre y su dolor en la tortura, que su alma era limpiada de los demonios marxistas al momento de morir. Este recurso permitía que católicos practicantes como Videla compatibilizaran sus creencias religiosas incluso con el asesinato de monjas y de hijos de militares pertenecientes al “bando enemigo”¹⁷.

En la Masacre de Trelew (agosto de 1972) donde 16 detenidos habían sido acribillados clandestinamente se encuentran para Duhalde, a escala reducida, los principales elementos del genocidio que comenzaría cuatro años más tarde: política genocida, pedagogía del terror, no asunción de la autoría del hecho criminal, pacto de sangre y aplicación de ley de fugas¹⁸. Pero la gestación intelectual del Estado Terrorista Argentino se habría demorado hasta el 25 de mayo

16 Marcos Novaro y Vicente Palermo: *La dictadura militar 1976-1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática*, Buenos Aires, Paidós, 2003, p. 74.

17 “El Ejército está expiando la impureza de nuestro país, los militares han sido purificados en el Jordán de la sangre para ponerse al frente de nuestro país (...) Nuestra religión es terrible, se nutrió de la sangre de Cristo y se sigue alimentando de nuestra sangre, de la sangre de los hombres muertos. Esto quiere decir que Dios está redimiendo, mediante el Ejército nacional, a toda la Nación Argentina” (monseñor Victorio Bonamín, provicario castrense, 25 de septiembre de 1975).

18 Asesinato de prisioneros alegando fugas inexistentes.

de 1973, cuando los militares abandonaron el poder después de siete años, mientras el gobierno civil liberaba a los presos políticos, entre quienes se encontraban algunos militantes de las organizaciones guerrilleras. Fue entonces cuando en lo más alto de las Fuerzas Armadas se produjo el consenso en torno a la eliminación física de lo que llamarían “subversión”.

La primera escalada del terrorismo estatal y el genocidio se produjo con anterioridad al golpe. Desde febrero de 1975 el Ejército puso en marcha el Operativo Independencia en Tucumán, mientras parte del peronismo del gobierno colaboraba subrepticamente con la cacería de militantes de izquierda, promoviendo la persecución parapolicial.

Como revela la conocida declaración del general Ibérico Saint-Jean¹⁹, el plan de exterminio estaba dirigido no sólo contra los militantes de las organizaciones armadas. La composición de los desaparecidos que establece el informe de la CONADEP muestra que el arco era extenso y coincidente con el desarrollo de la protesta social con miras revolucionarias, posterior al Cordobazo: obreros 30,2 por ciento, estudiantes 21 por ciento, empleados 17,9 por ciento, profesionales 10,7 por ciento, docentes 5,7 por ciento, actores y artistas 1,3 por ciento²⁰. Un buen número de los desaparecidos pertenecientes a estas categorías intervenían en la militancia social sin participar de la lucha armada o del área armada de la organización a la cual pertenecían. También se registraron algunos casos de desaparecidos totalmente desvinculados con la lucha armada o social desarmada. Pero como señalan Novaro y Palermo, la versión vinculada al alfonsinismo que pretendió fundar la inocencia de los desaparecidos, no en su carácter de secuestrados y asesinados, como en el hecho de estar supuestamente desconectados con las organizaciones revolucionarias armadas o desarmadas, era un mito que respondía a la autojustificación de quienes en los años del exterminio habían preferido “el no saber”²¹.

Luego de las víctimas seleccionadas por los Grupos de Tareas, el destinatario del terror era la sociedad toda. De allí surge el juego de misterio y semiocultación que el régimen montó alrededor de un genocidio clandestino. De manera cifrada dio pistas de que era cierto lo que oficialmente negaba. Las piezas del rompecabezas eran exhibidas en forma dispersa por medio de un lenguaje de significación doble. Fragmentariamente, en las secciones policiales de ciertos periódicos, se informaba la aparición de cadáveres no identificados o de “subversivos” supuesta-

19 “Primero eliminaremos a los subversivos, después a sus cómplices, luego a sus simpatizantes, por último, a los indiferentes y a los tibios.”

20 CONADEP, *Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, Buenos Aires, Eudeba, 1984, p. 296.

21 Marcos Novaro y Vicente Palermo, *op. cit.*, pp. 487-488.

mente caídos en combates cuya descripción por medio del relato era suficientemente inverosímil. Para Ricardo Piglia el “decir todo y no decir nada” corresponde a la estructura del relato del terror²². Los servicios de información habrían manejado técnicas eficaces de transmisión. Los carteles “zona de detención” que reemplazaron las viejas paradas de colectivos sugerían la amenaza²³.

Hasta aquí las causas que hemos mencionado estaban relacionadas con el propósito de eliminar a los sectores de izquierda involucrados en prácticas tendencialmente revolucionarias y de atemorizar a quienes pudieran retomarla. Pero hubo otros factores que impulsaron la ejecución masiva de prisioneros a fines del año 1977, llevada a cabo cuando el régimen tenía a la sociedad de rodillas.

Entre diciembre de 1977 y los primeros meses de 1978, miles de prisioneros fueron arrojados al mar desde el aire, o fusilados y enterrados en fosas comunes. Era el comienzo de la “Fase 4” de la represión consistente en el exterminio de gran parte de los prisioneros, un genocidio dentro del genocidio. Los aviones de la Marina despegaban a razón de cinco veces por día. Para Seoane y Muleiro el objetivo era vaciar los centros clandestinos antes de que miles de extranjeros visitaran el país durante el Mundial de fútbol; una primera huida hacia adelante, un modo paradójico de “limpiar el bisturí” multiplicando los asesinatos. Ya en octubre de 1976, el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, había aconsejado personalmente a los militares argentinos: “Si tienen que matar, háganlo pero rápido”²⁴. Ahora, a fines de 1977, el tiempo presionaba más fuertemente a los genocidas. A su vez, jugaba en la decisión de apurar el exterminio un hecho relacionado con la interna política del régimen: la elección del “cuarto hombre”, es decir del presidente que gobernaría por encima de la Junta Militar tripartita.

La *competencia interna de poder* fue desde el comienzo un factor potenciador del genocidio. La acumulación de poder dentro del “partido militar” se medía por el número de muertos y detenidos que podían adjudicarse los jefes de la represión: “quien más reprimía, más poder tenía”²⁵. Massera, para ganarse el apoyo de los duros del Ejército (Carlos Guillermo Suárez Mason, Benjamín

22 Ricardo Piglia, *Crítica y ficción*, Buenos Aires, Seix Barral, 2000, p. 44, pp. 113-116 y p. 212.

23 Otro ejemplo fue el eslogan “El silencio es salud” que el intendente Osvaldo Cacciatore exhibió en el obelisco porteño con el supuesto propósito de disminuir el uso de las bocinas de los automóviles.

24 Seoane y Muleiro, *op. cit.*, p. 288.

25 Claudio Uriarte, *Almirante Cero. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera*, Buenos Aires, Planeta, 1991, p. 110.

Menéndez, Saint-Jean y Galtieri) tildaba a Videla y Viola de “blandos”, intentando mostrarse él mismo como el más “duro”.

No fue casual que la masiva matanza de fines de 1977 y principios de 1978 coincidiera con que los principales aspirantes a presidentes –Videla, Massera y Galtieri– enfrentaban una partida decisiva en la lucha por la conducción. Los tres jugaron la partida en función de la mirada del Cuerpo de Generales del Ejército donde la competencia por la conducción iría a resolverse. Los tres se mostraron incondicionales al pacto de sangre, es decir, al objetivo inicial de exterminio que desde el principio había amalgamado a las Fuerzas Armadas a pesar de las diferencias internas. Esta competencia permanente en función de la mirada corporativa explica la presencia de los altos mandos en las salas de tortura; para los militares significaba estar “al pie del cañón”. También explica por qué Suárez Mason se jactaba de tener en El Campito “todo un sótano lleno de hijos de militares” secuestrados por la vinculación con la guerrilla²⁶.

Hasta aquí hemos mencionado las causas más evidentes del genocidio. Pero un estudio minucioso del accionar de los grupos de tareas y de la experiencia de miles de desaparecidos y sobrevivientes serían reveladoras de otros aspectos y de impulsos adicionales de los artífices.

El secuestro de Héctor Aníbal Ratto (sobreviviente) en el interior de la planta de Mercedes Benz de González Catán es un ejemplo de cientos de casos de trabajadores entregados por las gerencias a los Grupos de Tareas. En la planta Ford Motors de General Pacheco casi todos los integrantes de las tres primeras comisiones internas fueron secuestrados y asesinados. En la planta de Mercedes Benz, las dos primeras comisiones fueron también desaparecidas. En algunos casos los trabajadores fueron incluso fusilados dentro de las fábricas. Desde el Cordobazo en adelante la industria automotriz había sido un ámbito particularmente intenso de la lucha de clases, razón por la cual se observa de un modo más patente lo que el genocidio implicó en cuanto a la ofensiva del capital contra el trabajo en el territorio de la producción capitalista más avanzada y conflictiva.

Otros casos prototípicos de secuestro y asesinato fueron la desaparición de Liliana Delfino y Carlos Hiber, entre otros familiares de Mario Roberto Santucho, lo que puso en evidencia un “plan de castigo familiar” que se repitió cientos de veces²⁷. También conformaron categorías significativas de víctimas los 500 niños y bebés raptados, los cerca de 800 adolescentes capturados –algunos de ellos en las casas de sus padres–, los más de 100 abogados secuestrados.

²⁶ María Seoane y Vicente Muleiro, *op. cit.*, p. 305.

²⁷ Eduardo Luis Duhalde, *op. cit.*, pp. 334-339.

Llegados a este punto es oportuna la pregunta que formuló la periodista Matilde Herrera en una carta que recorrió el mundo luego del secuestro de sus tres hijos: “¿Suponen acaso que no tendrán que rendir cuentas ante nadie sobre la suerte de tantos miles de desaparecidos?”.

La pregunta nos remite al *escenario de impunidad nacional y mundial* que imaginaron los genocidas. La forma en que muchos de ellos se referían a los desaparecidos traslucía la ilusión de que las víctimas habían pasado a un plano de inexistencia tan profunda que nadie reclamaría por ellas, o en su defecto, que los reclamos se difumarian debido a la ausencia de cadáveres como prueba elemental del delito. El propio Videla lo insinuó en un reportaje ante las cámaras, cuando dio a entender que no podía hablar de los desaparecidos por las mismas razones que no podía hablar de algo que no existía. En este caso y en otros, parecía que los militares no podían dejar de hablar sintomáticamente, pero también se trataba de una aceptación solapada, fundada en la pretensión de enterrar la cuestión para siempre. Benjamín Menéndez formuló esto de un modo más directo: “Se dice que hay una disposición de olvidarlo, mejor será entonces olvidar ahora. Los desaparecidos desaparecieron y nadie sabe dónde están”. “Ausentes para siempre”, los llamaría Viola después de que la Junta Militar los declarara muertos “a los efectos jurídicos y administrativos”.

Otro elemento muy frecuente en las declaraciones de los jefes militares se relaciona con la inmunidad que sentían por considerarse vencedores de una guerra a la que sólo ellos juzgarían imponiendo su visión de los hechos al mundo entero. “La guerra la juzga el que la gana”, declaraba el general Ramón Camps, y para los militares esto sería así más que nunca en la medida en que su guerra respondía a una cruzada universal en favor del Occidente cristiano y capitalista. “La guerra que perdió Estados Unidos en Vietnam la hemos ganado ahora, los argentinos, contra el marxismo apátrida”, dijo el general Cristino Nicolaides y aun los más nacionalistas del Ejército como Mohamed Alí Seineldín se identificaban plenamente con el internacionalismo anticomunista promovido por la CIA. La primera incursión de las fuerzas represivas argentinas en jurisdicciones extranjeras tuvo lugar en Bolivia, en apoyo al golpe militar liderado por Luis García Meza en junio de 1980 contra las fuerzas democráticas que habían renacido tras la dictadura de Hugo Banzer. La segunda, Operación Calipso, comenzó al año siguiente en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde militares argentinos participaron de la contrainsurgencia liderada por Estados Unidos de Ronald Reagan. Los militares del “Proceso” no sólo se sintieron la reserva moral de Argentina sino del mundo entero, sobre todo antes de 1980 cuando, según ellos, el “cartercomunismo” gobernaba al país del Norte (por el presidente demócrata, James Carter –1976-1980–). Luego se esperanzaron con la llegada de Reagan al poder hasta el punto de creer que el gobierno norteameri-

cano no intervendría en favor de Inglaterra en el caso de que Argentina intentara recuperar las islas Malvinas por la fuerza.

4. La política económica de Martínez de Hoz

José Alfredo Martínez de Hoz (h) estaba vinculado a las distintas burguesías que reclamaban “desperonizar” la economía. Descendía de una poderosa familia de terratenientes pampeanos y había sido secretario de Agricultura en 1961. Pero también había presidido la acería Acindar, y formado parte del directorio de empresas como la Italo Argentina (electricidad), ITT y Pan American Airways. En vísperas del golpe era el titular del Consejo Empresario Argentino donde convergían lo más concentrado de la burguesía rural e industrial, incluidas las empresas extranjeras radicadas en el país.

El contacto con la conducción militar se estableció por intermedio de dos grupos ultraliberales que meses antes del golpe acercaron materiales sobre las claves del plan económico a los jefes de las Fuerzas Armadas: el denominado “grupo Perriau”, reunido en torno al abogado Jaime Perriau, y el “grupo La Plata” vinculado a los generales Saint-Jean y Suárez Mason. Junto a dirigentes de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) que en febrero de 1976 habían organizado un *lock-out* al gobierno de Isabel Perón, estos nucleamientos de linaje antiperonista conformaban lo más encumbrado del bloque civil de la dictadura²⁸.

El respaldo se prolongó en el exterior a través de grandes desembolsos otorgados por consorcios de la banca mundial como el Chase Manhattan, y organismos internacionales como el FMI, que avaló la designación con el mayor préstamo otorgado hasta el momento a un país latinoamericano.

La mayor parte de los analistas sostienen que durante la gestión de Martínez de Hoz se produjo el implante de un modelo basado en la especulación financiera, el endeudamiento externo, el declive de la producción industrial, la concentración económica, y el hundimiento social de Argentina aunque éste haya terminado de concretarse en las décadas posteriores.

Sobre este punto, el de los “resultados”, no existen mayores discusiones. Las controversias surgen en torno a las “intenciones”, es decir, al momento de establecer en qué medida la destrucción económica se correspondía o no con los objetivos de la conducción. Algunos críticos centran sus explicacio-

28 Vicente Muleiro, “El golpe con traje y corbata. La conspiración civil”, *Clarín*, suplemento Zona, 18 de marzo de 2001, pp. 3-5.

nes en la “ineficacia” y el “descontrol”²⁹, mientras que otros como Eduardo Basualdo atribuyen la destrucción de la economía a un plan articulado en el tiempo, cuyos últimos objetivos habían sido las privatizaciones concretadas en los 90.

“Intencionalidad o error”, “destrucción deliberada o desmanejo de la economía”: así esbozadas, cada postura presenta atractivos y dificultades. Las tesis basadas en el “desacierto liberal” no logran explicar ni la persistencia de las políticas que condujeron al quebranto económico, ni por qué las consecuencias nocivas para el conjunto social beneficiaron casi siempre a los mismos sectores. Las tesis basadas en la idea de un “plan deliberado” enfrentan el desafío de responder de qué manera la conducción política y económica del régimen pensaba perdurar en el poder después de un “fracaso” tan rotundo en un rubro tan importante, aun cuando se trataba de una dictadura. Determinar con precisión qué destrucciones fueron deliberadas y cuáles no, aunque unas y otras hayan beneficiado a los mismos grupos y contribuido de todas formas al empobrecimiento de las clases subalternas, es relevante para conocer mejor las características de los poderes capitalistas de Argentina, habida cuenta de que incluso otras dictaduras contemporáneas del Cono Sur no produjeron destrucciones equivalentes de sus economías, y que el enriquecimiento de sus grupos dominantes deparó mayores inversiones industriales.

4.1 La conformación gradual del sistema especulativo

Un país que recibe una enorme masa de capitales y al mismo tiempo destruye una parte considerable de su capacidad productiva: en la historia del capitalismo, Argentina constituye un caso muy pronunciado de valorización financiera y desindustrialización selectiva.

Como si de un rompecabezas se tratara, explicaremos pieza por pieza cómo se fue erigiendo el circuito de especulación financiera con garantía estatal (*bicicleta financiera*) que llegó a su apogeo entre marzo de 1980 y marzo de 1981, produciendo el quebranto de buena parte de las industrias que no pudieron enfrentar la competencia extranjera en condiciones arancelarias y cambiarias muy desventajosas. Muchas quiebras tuvieron lugar cuando los industriales optaron por las oportunidades del circuito financiero, más protegido por el

29 Por ejemplo, Juan V. Sourrouille, Bernardo P. Kosacoff y Jorge Lucangeli, *Transnacionalización y política económica en la Argentina*, Buenos Aires, CEAL, 1985. Alberto R. Jordán: *El Proceso 1976-1983*, Buenos Aires, Emecé, 1993, pp. 222-223.

Estado que la actividad productiva enfrentada a una invasión de artículos importados muy abaratados por el tipo de cambio.

Afluencia de capitales extranjeros. La creación en nuestro país y en otros países de la región de circuitos inéditos de capitales tuvo sus orígenes en el aumento del ahorro mundial que saturó a los bancos del Primer Mundo en la segunda mitad de los 70. Como resultado de uno de los períodos más expansivos en la historia del capitalismo (la “onda larga” de posguerra 1950-1973), la acumulación de capitales financieros en las economías centrales había crecido a niveles muy altos. A esas reservas se sumaron los “petrodólares” de las burguesías árabes que habían cuatriplicado los precios del petróleo en 1973-1974. Estos capitales se trasladaron de inmediato a la banca occidental en busca de mayor seguridad. Pero la recesión que después de veinte años interrumpía el crecimiento del capitalismo central era un obstáculo para que tan importante masa de capitales líquidos pudiera reproducir el ciclo a través de un crecimiento productivo dentro de la región. De modo que, como otras veces en la historia de la economía-mundo, el sistema buscó exportar su contradicción de una región a otra. El capitalismo periférico sería receptor de préstamos masivos que lo endeudarían a niveles inéditos. La banca internacional necesitaba prestar a toda costa para reproducir el ciclo del capital bancario, evitando que el sistema financiero colapsara a causa del exceso de depósitos sin colocación ulterior. Los préstamos buscarían consolidarse preferentemente como deuda pública, sin importar que los Estados deudores del Cono Sur estuvieran gobernados por dictaduras terroríficas. Lo que los acreedores no ignoraban era que los Estados disponían de valiosos activos con que responder al endeudamiento más tarde o más temprano: las empresas estatales, algunas de las cuales eran potencialmente muy rentables. Sobre la base de estos puntos serían esgrimidos los planteamientos más sólidos de ilegitimidad de la deuda.

Ancla salarial. El primer plan procesista se propuso desinflacionar la economía mediante una brutal transferencia de ingresos en favor de los empleadores. Apoyada por la represión y el amordazamiento de los sindicatos, la carrera inflacionaria entre precios, salarios y tarifas de servicios públicos sería frenada por el “ancla salarial”. Es decir que sólo los salarios serían congelados y como los precios y las tarifas seguirían subiendo, el poder adquisitivo de los asalariados quedaría rezagado. En efecto, la caída de los salarios reales fue cercana al 40 por ciento con respecto al promedio de los primeros cinco años de la década del 70³⁰.

30 Jorge Schvarzer, *La política económica de Martínez de Hoz*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, pp. 45-46.

Privatización periférica. Las empresas del Estado más emblemáticas del nacionalismo de posguerra no fueron privatizadas. De las más de 700 que por entonces había, se liquidaron o vendieron las de pequeñas dimensiones, al tiempo que se estatizaron otras de grandes dimensiones como la Italo (electricidad) y Austral (aviación). La forma en que se compatibilizó el neoliberalismo del equipo económico con el nacionalismo que pervivía en las Fuerzas Armadas ha sido llamada “privatización periférica”: un mecanismo de infiltración selectiva del capital privado en las empresas estatales a través de concesiones y terciarización de actividades selectas. En el corto plazo, esta vinculación puntual del capital privado aseguraba una mayor rentabilidad a los adjudicatarios, considerando que las empresas de servicios eran por lo común deficitarias. Así, por ejemplo, la petrolera estatal (YPF) aumentaba su rentabilidad negativa de menos 17,8 a menos 68,47 por ciento entre 1976 y 1983, mientras que las petroleras locales (como Bidas, Pérez Companc, Astra) y extranjeras (como Shell, Esso) participaron en 37 licitaciones, duplicando su participación en la exploración y explotación, con altas tasas de ganancias. Los grupos locales se posicionaron con ventajas en la licitación de las obras públicas que fueron incrementadas notoriamente³¹. Según Alfredo Pucciarelli, esta expansión de la “patria contratista” encubierta por el discurso liberal fue la coronación de un entramado corporativo que se había establecido diez años antes, durante la dictadura de Onganía. Desde entonces, la privatización periférica bajo el imperio de la “ley de mayores costos” habría sido el atajo mediante el cual las fracciones más concentradas buscaron contrarrestar el “círculo vicioso de crecimiento inestable” que afectaba al capitalismo argentino. Según Pucciarelli se habría concretado de este modo un primer “desempate” entre burguesías rivales mediante la obtención de “cuasi rentas de privilegio”³².

Desregulación financiera. La reforma de 1977 consistió en: 1) liberar las tasas de interés que en lo sucesivo serían reguladas por la oferta y la demanda de créditos; 2) disminuir las exigencias estatales a las entidades financieras lo que llevó a una multiplicación de las mismas; 3) mayor permisividad a la entrada y salida de capitales de Argentina. El equipo económico aducía que así terminaría de configurarse un circuito lo suficientemente fluido para atraer a la liquidez mundial, facilitando el

31 Ana Castellani, “Gestión económica liberal-corporativa y transformaciones en el interior de los grandes agentes económicos de la Argentina durante la última dictadura militar”, en Alfredo Pucciarelli (comp.), *op. cit.*, pp. 173-218.

32 Alfredo Pucciarelli, “La patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura encubre una vieja práctica corporativa”, en Alfredo Pucciarelli (comp.), *op. cit.*, p. 116.

crédito mediante el cual la industria se equiparía con el fin de afrontar la competencia de productos importados.

Tasas de interés positivas. En el corto y mediano plazo, la multiplicación de entidades financieras y la masiva toma de crédito por parte del Estado dieron lugar a tasas de interés extraordinariamente positivas, es decir, muy superiores a la inflación y a las tasas de los bancos internacionales. Estas tasas ofrecidas por bancos locales poco confiables atrajeron de todos modos a los capitales especulativos una vez que el Estado argentino dio la señal de que él mismo devolvería los depósitos en el caso de que las entidades financieras quebraran.

Garantía estatal de los depósitos bancarios. Se instaló como expectativa luego de la liquidación del Banco de Intercambio Regional en marzo de 1980, cuando, ante el peligro de que se extendiera la corrida bancaria, el Estado terminó por garantizar la devolución del 100 por ciento de los depósitos a los 350.000 ahorristas del BIR.

Apertura económica. Después del disciplinamiento obrero, la apertura económica constituye la disposición de cuño neoliberal más intensivamente aplicada por Martínez de Hoz. Mediante la rebaja de aranceles proteccionistas se proponía que la competencia de productos extranjeros depurara a la industria sustitutiva sencilla (véase el segundo apartado).

Atraso cambiario o dólar barato. El segundo programa antiinflacionario, dado a conocer el 20 de diciembre de 1978, abandonó la pauta de “ancla salarial” por una estrategia basada en la desinflación concertada de cuatro variables, cuatro anclas simultáneas: salarios públicos, tarifas de servicios públicos, la sobreemisión monetaria que realizaba el Estado para solventar sus gastos, y la devaluación de la moneda. La disminución gradual del ritmo inflacionario de cada una de estas variables conllevaría, según el equipo económico, a disminuir la inflación general de precios. Con arreglo a estas pautas, se produjo el nacimiento de la primera “tablita” que anticipaba la cotización del peso respecto del dólar en los ocho meses siguientes, tal como el Estado se comprometía a cambiarlos en el mercado oficial. El atraso cambiario se produjo en el período 1979-1980 y principios de 1981 debido a que el Estado argentino se atuvo a lo que había pautado en materia cambiaria, vendiendo dólares al valor estipulado en la tablita, cuando los precios de la economía habían subido más de lo previsto debido al fracaso del segundo plan antiinflacionario. Esto condujo a la sobrevaluación del peso, o sea, a un dólar abaratado a la mitad de su paridad histórica que de diversas maneras incidiría en el derrumbe.

En lo concerniente a la industria, el atraso cambiario estimuló aun más la invasión de artículos extranjeros, muchos de ellos provenientes del sudeste asiático, con los cuales la producción nacional no podía competir. Martínez de Hoz sostenía que el dólar barato facilitaría la importación de maquinaria para el reequipamiento industrial, pero aun cuando los aranceles para bienes de capital fueron rebajados a cero, no resultó suficiente para soportar la caída de las ventas que sufrieron los productos nacionales.

Plata dulce. Otra derivación del dólar barato fue el fenómeno conocido como “plata dulce”, una corta fiesta de consumo para ciertos sectores de la clase media que accedieron a una variedad de artículos importados y al turismo internacional en el verano de 1981. Todo ello se daba en un clima de euforia y banalidad dentro del cual no se percibía que la supuesta prosperidad descansaba en un artificio cambiario subsidiado a futuro por el Estado y la comunidad. Muchos argentinos de clase media manifestaban creer que si por primera vez ellos podían acceder al turismo internacional debía ser porque la economía nacional estaba progresando.

Los elementos de la política económica que hemos considerado hicieron posible el mecanismo especulativo conocido como “bicicleta financiera”: el empresario volcado a la especulación pedía un crédito al extranjero, lo convertía en pesos y lo depositaba en bancos locales que ofrecían tasas de interés superiores a la inflación local y al interés del crédito contraído en el extranjero. La tablita y la garantía oficial de los depósitos le aseguraban que no sería perjudicado por una devaluación, ni por el quebranto del banco que pagaba intereses tan altos. El mecanismo no sólo resultó atractivo para los especuladores argentinos, sino también para capitales golondrinas que aprovecharon la oportunidad. El dólar barato también contribuyó a sobredimensionar el sector financiero incentivando la toma de préstamos del extranjero. Repasando, las piezas indispensables para la conformación del mecanismo especulativo fueron:

- 1) Las tasas de interés extraordinariamente positivas.
- 2) La garantía estatal de los depósitos bancarios ante cualquier quebranto.
- 3) La tablita que disipaba el temor de una devaluación abrupta.

Hasta que el sistema colapsó en marzo de 1981, dando lugar a una devaluación que a lo largo de la presidencia de Viola llegaría al 500 por ciento.

4.2 Los resultados

Cuando se derrumbó la ficticia estabilidad edificada sobre la base del atraso cambiario, la gestión de Martínez de Hoz había llegado a su fin y la sociedad comenzaba a percibir lo costosa que resultaría la fiesta especulativa a la gran mayoría de los argentinos que no habían participado de ella. La socialización de los costos se produjo en diversos momentos. Al principio, cuando el Estado se endeudaba en dólares para sostener la “tablita”. Y luego de la devaluación de 1981, cuando el Estado absorbió gran parte de la deuda privada (*estatización de la deuda*), al mismo tiempo que socorría a inversores de más de 80 bancos y financieras quebradas. Por último, cuando el Estado debió enfrentarse con su propia deuda contraída en dólares baratos para financiar las obras públicas, el déficit de las empresas estatales y la abultada compra de armamentos. Todo esto implicaría una quintuplicación de las obligaciones (de 9.000 millones de dólares a fines del gobierno de Isabel Perón a 45.000 en 1983). Era el inicio de la “bola de nieve” que, como nunca antes en la historia de un país deudor como Argentina, comprometía su futuro, al mismo tiempo que crecía el patrimonio financiero de grupos locales y extranjeros. Desde el inicio del proceso de endeudamiento masivo la relación entre la deuda externa y la fuga de capitales al exterior sería de uno a uno.

En cuanto al aparato productivo, más perjudicial que el descenso del 20 por ciento del PBI entre 1976 y 1981, resultarían las tendencias que continuarían desarrollándose en las décadas posteriores: concentración del ingreso, crisis del sistema provisional y de las prestaciones básicas del Estado de bienestar, quebrantos de industrias pequeñas que en muchos casos serían absorbidas por las grandes, inicio de la agonía de ISI que en algunas ramas como la textil, metalmecánica sencilla y eléctrica sería particularmente grave; preludio de la desaparición de ramas enteras en los años noventa. Precarización del empleo y el esbozo de una desocupación y subocupación sin antecedentes, aunque por unos años se verían parcialmente contenidas por el cuentapropismo precario. Entre los ganadores, además de los sectores financieros nacionales e internacionales – y del sector agroexportador antes del atraso cambiario de 1980–, las ramas industriales que más crecieron fueron las del sector de bienes intermedios con ventajas comparativas como celulosa, aluminio, petroquímica, plásticos, construcción, conductores y cemento³³. Muchas de estas industrias pertenecían a empresarios o grupos nacionales diversificados en la economía como Acindar a

33 Luis Alberto Romero, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 218.

Eduardo Acevedo, Loma Negra al grupo Fortabat, Alpargatas a Eduardo Oxenford, Celulosa Argentina a Edmundo Paul, Techint a Roberto Rocca³⁴.

El reciente estudio de Ana Castellani permite apreciar cómo se dirimió la competencia entre los grupos locales ligados a la industria de bienes intermedios y la construcción. El desarrollo fue notoriamente desparejo entre los grupos integrados al “complejo económico estatal-privado”, respecto de los “no integrados”. Mediante diversas formas de vinculación con el Estado (promoción industrial, obra pública o privatización periférica), “los integrados” duplicaron su rentabilidad mientras que los “no integrados” la vieron disminuir a la mitad. La obtención de *cuasi rentas de privilegio* fue el modo en que los más favorecidos incrementaron su participación relativa en el sector industrial mediante la absorción vertical y horizontal de las actividades en desmedro de las empresas no integradas de menores dimensiones³⁵.

De este modo el desempate entre burguesías que la economía del “Proceso” traía aparejado derivó en la reconfiguración de una clase dominante compuesta por sectores multiimplantados en las actividades bancarias, en industrias competitivas de bienes exportables dirigidos tanto al mercado interno como al externo, en servicios y en obra pública tercerizados por el Estado.

El nuevo encumbramiento de una clase dominante con las características esenciales de la burguesía pre-30, constituye uno de los legados restaurativos más reveladores de la última dictadura. Como en el capitalismo primigenio de Argentina, las actividades financieras volvían a ser el ámbito de las más rápidas ganancias. La capacidad de operar con bruscos cambios de inversiones que no comprometieran la disposición de buena parte del capital en estado líquido, volvía a ser la estrategia de una burguesía entrenada para moverse en un capitalismo de rentabilidades extremadamente fluctuantes. Su relación prebendaria con el Estado se mostraba otra vez escandalosa y condicionante del futuro nacional. Curiosamente, uno de los antecedentes más analógicos de lo sucedido en 1980 había tenido lugar en las décadas de 1870 y de 1880, cien años atrás, al ponerse en funcionamiento el procedimiento especulativo montado alrededor de las cédulas del Banco Hipotecario en 1872. Mediante este mecanismo las tierras obtenidas por la expansión militar hacia el Sur habían sido acaparadas por las clases terratenientes con la asistencia del Estado y el financiamiento por comunidad. Los créditos que el banco estatal había otorgado a los terratenien-

34 Un estudio exhaustivo de los grupos económicos locales que predominaban en 1983 puede encontrarse en Pierre Ostiguy, *Los capitanes de la industria. Grandes empresarios, política y economía en la Argentina de los años 80*, Buenos Aires, Legasa, 1990.

35 Ana Castellani, *op. cit.*, pp. 198-200.

tes para comprar las nuevas tierras resultaron abaratados por la devaluación del peso en los años sucesivos. Una clara homología del espejo de la historia. En 1880 como en 1980, se consolidaron las clases dominantes a través de una concentración de bienes productivos, adquiridos por migajas luego de un pellizco financiero auspiciado por el Estado. Los grupos domésticos mejor posicionados hacia el final de la dictadura llegarían en mejores condiciones al reparto del período Menem-Cavallo.

4.3 “Maquiavelismo o ingenuidad”, “deliberación o desmanejo”

A propósito de las “intenciones” del equipo económico y la conducción militar, Novaro y Palermo plantean que entre los cuatro destinos de la economía argentina —“una economía desarrollista y quebrada”, “una economía desarrollista y pujante”, “una economía abierta y quebrada”, “una economía abierta y pujante”—, la conducción política y económica del régimen habría preferido la última opción, aunque el resultado de la gestión haya sido claramente “una economía abierta y quebrada” en la cual sólo se habrían cumplido los objetivos disciplinarios³⁶. Para estos autores los resultados de la política económica sí pueden ser leídos en términos de “fracaso” y “desmanejo”. Sencillamente, no eran los resultados que la conducción se había propuesto sino derivaciones fallidas que se habrían originado en el descontrol y en las discusiones internas del régimen en torno a diversos puntos como las privatizaciones y la reducción del gasto estatal. Las improvisaciones que surgían de la necesidad de subsanar estas fricciones habrían creado una compleja cadena de contingencias y remedios inconsistentes que acabarían siendo letales para los planes procesistas de continuidad en el poder. El régimen no habría destruido voluntariamente sus medios de perpetuación, sólo habría fracasado en su intento de compatibilizar las visiones económicas tensionadas que pervivían en su seno.

Muy distinta resulta la visión de Basualdo, para quien la conducción cívico-militar de 1976 se propuso sentar las bases de un modelo de acumulación basado en la valorización del capital financiero. El objetivo consciente de la dictadura habría sido, entonces, una economía “financista y quebrada”. El declive económico de Argentina habría sido previsto por ella y ejecutado con unidad de criterio a lo largo de los últimos veinticinco años. Contraponiendo los enfoques de Basualdo y de Novaro y Palermo, podemos precisar más aun la cuestión a dilucidar en los siguientes términos: ¿por qué los grupos dominantes del

36 Marcos Novaro y Vicente Palermo, *op. cit.*, p. 339.

capitalismo argentino optaron o tuvieron que optar por una “economía concentrada, financiera y quebrada”, y no por “una economía concentrada, abierta y pujante”, tal como predicaban. ¿Era el camino antiproduktivo de las peripecias financieras, el endeudamiento y la fuga de capitales, potencialmente más rentable, cómodo o preferible a los ojos de dichas burguesías? En tal caso, ¿cómo lograrían recomponer su hegemonía sobre la base de resultados meramente destructivos para las clases subalternas? La pregunta es relevante aun teniendo en cuenta que no siempre las burguesías actúan conforme a una estrategia que lo contempla todo, y que no necesariamente la dominación de una clase sobre otra se edifica mediante construcciones asociadas a la imagen de progreso nacional. La destrucción de la economía puede implicar mecanismos extorsivos de sometimiento como el endeudamiento externo al momento de fijar políticas, o el disciplinamiento de los trabajadores por medio de la desocupación, la hiperinflación y el empobrecimiento general.

5. Sometimiento, resistencia, consenso y complicidad

Existe una perspectiva de los golpes militares de Argentina que sugiere la inocencia del “pueblo” y de su clase dirigente no conservadora. La película de Luis Gregorich y Enrique Vanoli, *La República perdida*, ha sido señalada como un exponente de esta operación de la memoria colectiva en la que se soslayan los apoyos partidarios y la pasividad o conformidad que los golpes encontraron en diversos sectores de la estructura social.

El reciente trabajo de Novaro y Palermo nos ofrece un mapa de los apoyos civiles que concitó la dictadura y de los proyectos del “Proceso” tendientes a ampliarlos. Sin caer en la distorsión opuesta de las afirmaciones que monocromáticamente componen la imagen de una “sociedad cómplice”, los autores encuentran múltiples formas de disidencia que les permiten complejizar la dicotomía apoyo/resistencia. Una amplia gama de actitudes mutantes fueron las respuestas que provocaron las distintas acciones y montajes del régimen, en circunstancias diferentes. El seguimiento contextualizado de Novaro y Palermo acerca de cómo se posicionaban un buen número de organizaciones y personalidades públicas nos permite distinguir los siguientes casos.

1) El apoyo “propositivo”, entusiasta y duradero de la Iglesia, los partidos conservadores provinciales, los medios de comunicación apologeticos, buena parte de las asociaciones empresarias y ejecutivos partícipes de la represión en las fábricas, un segmento significativo del peronismo de gobierno partícipe de la cacería estatal del año 1975, dirigentes territoriales del PJ y de la UCR que conformaron un buen porcentaje de los intendentes.

2) El respaldo condicional, oportunista, dosificado y negociador de figuras más relevantes de los partidos mayoritarios –UCR, PJ, Partido Intransigente (PI), Democracia Cristiana (DC)–, del Partido Comunista Argentino y de buena parte de los medios masivos de comunicación que coadyuvaron al “espejismo” de acompañamiento³⁷. De artistas e intelectuales asociados al “apagón cultural”.

3) El respaldo inicial de buena parte de la clase media angustiada por el escenario violento, que vio en la primera aparición televisiva de la Junta militar a “un gobierno de caballeros”³⁸. El respaldo ocasional y eufórico de millones de argentinos manipulados por la comunicación que apelaba al sentimiento nacional durante el Mundial 78 y Malvinas.

4) La “pasiva conformidad” o “pasivo discurrir” de buena parte de la sociedad doblemente condicionada por lo que Novaro y Palermo denominan “el mundo del temor” y el “mundo de la seguridad”; mundos superpuestos que propiciaron las “transacciones mentales” tendientes a “preferir no saber” o a “culpabilizar a las víctimas” (“por algo será”, “algo habrán hecho”).

5) La resistencia silenciosa o “molecular” de diversos sectores de la clase obrera, antes y después del hundimiento económico de 1981. Las protestas sociales en los barrios periféricos contra el deterioro de la economía a partir de 1980. La resistencia solapada de las agrupaciones de izquierda alejadas de la lucha armada, de ciertas formaciones y seguidores del rock nacional, y de lo que se ha dado en llamar la “cultura de las catacumbas” en referencia a los círculos artísticos e intelectuales que emergieron lentamente a la superficie a partir del aflojamiento de 1979-1980.

6) La resistencia pública de las agrupaciones de derechos humanos que surgieron en los años más duros de la represión y que perdurarían tras la caída del régimen.

7) La resistencia clandestina y armada de las organizaciones guerrilleras hasta que fueron definitivamente derrotadas.

8) Y sobre el final, el grito social reprobatorio que estalló tras la derrota de Malvinas y que en gran medida fue canalizado por la Multipartidaria.

Estos casos nos permiten visualizar los complejos umbrales de apoyo, pasividad y resistencia. Comenzando por el principio de la progresión, algunos hechos e imágenes ilustran que el consentimiento fue mayor de lo que la memoria colectiva preferiría recordar tras la caída del régimen. Los almuerzos mensuales de Videla con personalidades muy prestigiosas de la ciencia y la cultura, como René Favaloro, Federico Leloir, Ernesto Sabato y Jorge Luis Borges. Los aplausos que siguieron al discurso del presidente *de facto* en la ceremonia inaugural

37 Marcos Novaro y Vicente Palermo, *op. cit.*, p. 246.

38 La expresión pertenece a Jorge Luis Borges.

del Mundial 78, y a la presencia de la Junta Militar en la final del campeonato. El respaldo que, luego del informe condenatorio de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (1979), el régimen recibió por parte de 200 cámaras empresarias y de asociaciones civiles, y de figuras relevantes de los partidos mayoritarios; el proyecto de ley presentado por el Colegio de Abogados de la Capital Federal en favor de legalizar el “fusilamiento *in situ*”; la reivindicación de la lucha antisubversiva en el Coloquio Idea de 1982, constituyen una breve selección de hechos que ilustran una dictadura menos solitaria de lo que el imaginario histórico suele representarse, y que también exceden la figura de un consenso supuestamente acotado a los inicios como consecuencia del escenario violento de los años previos.

En su defensa al régimen, la Iglesia argentina mantuvo enfrentamientos con el Vaticano y, en general, los partidos mayoritarios tuvieron declaraciones y silencios funcionales con la “vuelta al orden” que proclamaban los sectores más sonoros de la opinión pública. De ese conjunto de voces surgió la sensación de “legitimidad de origen” que el régimen sentía a su favor. A principios de 1977, incluso las figuras más “progresistas” del arco político mayoritario que se declaraban preocupadas por las violaciones a los derechos humanos —Deolindo Bittel (PJ), Raúl Alfonsín (UCR), Oscar Alende (PI), Néstor Vicente (DC)— se expresaban en contra de toda salida política que no fuera consensuada con las Fuerzas Armadas. Por su parte, el Partido Comunista Argentino apoyaba al videlismo contra las denuncias del presidente Carter, aun antes de que Argentina y la Unión Soviética se transformaran en socios comerciales de primer orden luego del bloqueo norteamericano tras la invasión soviética a Afganistán, en 1979.

Estas demostraciones alentaron los proyectos procesistas tendientes a consolidar un frente militar-civil dentro del cual el primer elemento moldeara al segundo en función de lograr una herencia a imagen y semejanza suya. En este sentido, el Movimiento de Opinión Nacional (MON) impulsado por el titular de la CARNAB Jorge Aguado y por Saint-Jean desde la provincia de Buenos Aires, así como el Proyecto Nacional instruido por Genaro Díaz Bessone desde la Secretaría de Planeamiento, no fueron ilusiones delirantes de una dictadura descomunicada. Por el contrario, surgieron de la posibilidad de institucionalizar el diálogo fluido que existía entre el régimen y buena parte de la dirigencia política, religiosa y empresarial, más allá de la figura de Ricardo Balbín en quien la conducción videlista depositaba las mayores expectativas. Estos contactos eran más frecuentes y naturalizados de lo que nos permite recordar el anacronismo de ver esos años a la luz de la imagen pública que el “Proceso” adquirió después de 1981, del fracaso de Malvinas y del informe de la CONADEP. En los días de mayor consenso, por debajo de la comunicación ejercida desde la cúspide del régimen, los jefes militares “duros” y “blandos” que buscaban proyectarse en la sucesión de Videla, mul-

tipificaban los almuerzos y planes a futuro con políticos, gremialistas, asociaciones intermedias y personalidades públicas. Los periódicos y medios de comunicación solían estar de buen humor y una “atmósfera de normalidad” envolvía a la Argentina aislada, junto a las otras dictaduras del Cono Sur, de las denuncias que proliferaban en Europa y México.

De diversas maneras estos contactos se extendían a la sociedad a través de los medios de comunicación, especialmente los medios masivos que se cuidaban de alinearse explícitamente con el régimen pero que contribuían a crear un clima de optimismo. En su estudio sobre los medios gráficos del período, Eduardo Blaustein y Martín Zubieta procuraron reconstruir el “discurso promedio” de la “prensa gris”, es decir, el rol de los medios más populares y no específicamente apoloéticos como la revista *Gente*, ni denunciante como el *Buenos Aires Herald*. La prensa media contribuyó al enlace del régimen con la sociedad en la medida en que ocultó el horror, neutralizó sus editoriales, impersonalizó los verbos de las acciones represivas y, sobre todo, contribuyó a instalar la agenda de temas de administración que normalizaban la imagen del régimen³⁹.

En cuanto al segundo umbral de la progresión, la obediencia de la mayoría social nos lleva a recorrer los mecanismos complejos de sometimiento y consenso que en algunos casos eran anteriores al golpe. No todo lo que contribuyó a que la dominación fuese efectiva surgió de la iniciativa del régimen sino que existían procesos previos a marzo de 1976 que cooperaron con la subordinación general. Comenzando por la cultura del miedo, Juan Corradi señala que estaba profundamente vinculada a la sensación de caos que reinaba antes del golpe. La violencia desplegada por las organizaciones guerrilleras, los comandos sindicales y las fuerzas paraestatales antes de 1976, había reactivado el “escenario hobbesiano” en el cual “un ciudadano teme tan intensamente a los otros, que prefiere estar encadenado si también los otros lo están”⁴⁰. El “pacto implícito de seguridad” se habría desarrollado entre individuos privatizados en un proceso mediado por la comunicación deformada.

A su vez, la retirada al mundo privado se habría debido a una multiplicidad de factores. Para Guillermo O'Donnell, el desgaste y la sensación de “violencia caótica” habrían llevado a que muchos militantes sociales emprendieran la retirada hacia la esfera individual. A esto se sumó la clausura impuesta por el régimen que no sólo descansaba en métodos represivos sino también económicos,

39 Eduardo Blaustein y Martín Zubieta: *Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso*, Buenos Aires, Colihue, 1998, p. 49 y 55.

40 Juan Corradi: “La cultura del miedo en la sociedad civil: reflexiones y propuestas”, en Isidoro Cherensky (comp.): *Crisis y transformación de los regímenes autoritarios*, Buenos Aires, Eudeba, 1985, p. 173.

en la medida en que “la vuelta al mercado” reforzaba el individualismo más como instinto de supervivencia que como valor preeminente.

En este punto resta mencionar la sintonía que hubo entre el macro autoritarismo del régimen y el micro despotismo de miles de personas con autoridad civil en sus micro contextos. Como explica O'Donnell en su estudio del cotidiano durante la dictadura, sin la ayuda de los pequeños déspotas voluntarios el sometimiento no se hubiera establecido en los “rincones de la sociedad”. Utilizando las metáforas de este autor, el régimen “soltó los lobos”, “la sociedad se llenó de kapos” y “se patrulló a sí misma”⁴¹.

La imposición del silencio fue exitosa pero nunca absoluta. Incluso en los lugares más silenciosos, el control de la murmuración resultó imperfecto en la medida en que surgieron “voces oblicuas” dispuestas a saltar el cerco con gestos sutiles. Pero en líneas generales, durante los primeros cinco años (hasta el “deshielo” de 1980), el régimen consiguió impedir que resurgiera la deliberación en los ámbitos públicos y colectivos.

Ingresando al umbral de la resistencia, la visión de los analistas sobre la actitud global de la clase obrera varía de acuerdo a si se contempla lo suficiente que el mundo del trabajo fue el lugar más embestido por la dictadura. Los balances pueden resultar opuestos porque no todos contemplan en igual medida que “dominación” y “resistencia” son fuerzas interdependientes que deben medirse en relación recíproca: el trabajo a reglamento en tiempos de dictadura puede indicar una resistencia tan significativa como la toma de una fábrica en tiempos de legalidad democrática.

Así, para Francisco Delich, entre 1976 y 1980 se registró el período más extenso de “inmovilidad sindical” desde 1955, dentro del cual la burocracia de los gremios fue sustituida por la burocracia estatal, al tiempo que se desmoronaba la solidaridad obrera y el lugar de trabajo se convertía en un “ámbito de pura productividad y mecanización”⁴².

En cambio, para Pablo Pozzi las formas “huelguísticas” y “no huelguísticas” de la resistencia obrera como los sabotajes a la producción y otras formas de *resistencias moleculares*, impidieron que el régimen lograra someter a los trabajadores en función de la hegemonía del capital monopólico, lo que a la larga conllevaría al fracaso global de la dictadura⁴³.

41 Guillermo O'Donnell: “Democracia en Argentina: micro y macro”, en Oscar Oszlak (comp.), *“Proceso”, crisis y transición democrática*, tomo 1, Buenos Aires, CEAL, 1984, pp. 17-18.

42 Francisco Delich: “Después del diluvio, la clase obrera”, en Alain Rouquié (comp.), *Argentina, hoy*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1983.

43 Pablo Pozzi: *Oposición obrera a la dictadura*, Buenos Aires, Contrapunto, 1988, cap. 1.

Lo cierto es que sólo en 1980 los gremios llevaron adelante 188 conflictos en los que intervinieron cerca de 1.800.000 trabajadores. Por contenido que fuera el despertar de la protesta obrera a partir de ese momento, los analistas de la dinámica del régimen advierten que tuvo importantes efectos en la dictadura. Junto con el deshielo en ciertos ámbitos culturales de la sociedad, la primavera de los gremios recordó la pesadilla que los militares más temían y se transformó en otro motivo de presión que impulsó al régimen a la búsqueda de soluciones milagrosas como Malvinas.

Pero, sin duda la resistencia más frontal de los primeros años la encarnaron los militantes de las organizaciones armadas y los familiares de los desaparecidos. Los primeros alentados por la ética del coraje y una visión de futuro basada en la inminencia del triunfo revolucionario. Los segundos movidos en primera instancia por la desesperación.

Comenzando por los primeros, ¿de dónde provenía la audacia que llevó a Montoneros y al ERP a demorar un repliegue estratégico a un punto que resultaría letal para muchos de sus militantes y para las propias organizaciones? Las autocríticas posteriores que hicieron las propias conducciones dejan ver que la resistencia armada contra la dictadura se sostenía no sólo en el espíritu de lucha que caracterizaba a la subjetividad de “los setenta”, sino también en una visión distorsionada de la correlación de fuerzas. La sobrestimación de las posibilidades de éxito habría perdurado más de la cuenta debido a que las organizaciones se habían jerarquizado en férreas estructuras de mando conforme a su militarización. Los militantes de a pie se veían atados a la decisión de las conducciones cuyas autocríticas por demorar el repliegue resultarían tardías. Tanto los líderes montoneros como los erp-perretistas pensaron que la llegada de los militares al poder provocaría el surgimiento de un poderoso ejército popular, sin tomar nota del aislamiento que venían sufriendo a partir del repliegue “de las masas” y de un buen número de sus militantes periféricos. Aferrados a una mirada de la historia que vaticinaba el triunfo, apostaron ciegamente al voluntarismo al momento de creer, por ejemplo, que sus dirigidos podrían soportar indefinidamente la tortura o que la organización en células los protegería suficientemente de la cacería de los Grupos de Tareas.

Hasta la escalada represiva iniciada en mayo de 1977, el ERP-PRT resistió en diversos niveles, lanzando algunas pocas acciones selectivas pero sumamente audaces como la Operación Gaviota (febrero de 1977) en la que por poco no se logró destruir el avión presidencial en el que viajaban Videla y Martínez de Hoz. Por su lado, la organización Montoneros llevó adelante en 1977 más de 600 acciones, entre las que se destacaron el secuestro de empresarios vinculados con la represión, acciones de sabotaje a fábricas e infraestructura, la destruc-

ción de un cuartel general en La Plata, un atentado contra el Ministerio de Defensa y otro dirigido a Videla en octubre de 1977⁴⁴.

A diferencia de los militantes de las organizaciones armadas cuya capacidad de resistir se apoyaba en la experiencia previa, las Madres de Plaza de Mayo se constituyeron en sujetos de la resistencia durante los días más cruentos de la dictadura. Muchas de ellas eran amas de casa y sus relatos sobre el momento en que comenzaron a girar alrededor de la Pirámide de Mayo dan cuenta de la intemperie inicial. Al romper el silencio que observaban los partidos políticos y la Iglesia, las Madres de Plaza de Mayo quebraron el aislamiento que envolvía a la sociedad, y así se constituyeron en el sujeto político esencial de los años totalitarios. Como señala Héctor Leis, “la política como vida justa y buena tuvo que ir a buscar su voz al último rincón de lo privado”, “el espacio público de lo político fue así reconstruido desde lo biológico-ético”⁴⁵. Las Madres de Plaza de Mayo convocaron a la primera concentración pública desafiante de la clausura impuesta por el régimen y en su apelación al mundo enfrentaron la represión y el fervor nacionalista que los comunicadores del régimen direccionaban contra ellas.

¿De dónde provenía la fortaleza de quienes terminarían encarnando el sujeto de resistencia más persistente? Por obvio que parezca, todo partía de su condición de madres, razón por la cual no han faltado enfoques centrados en la cuestión del género. Pero, en cuanto a otros móviles que impulsaron su lucha, fue singular la “situación de búsqueda” que debieron afrontar. En 1981, Julio Cortázar advertía que la desaparición forzada de personas, más que cualquier otra forma de asesinato, producía “una presencia abstracta” resistente a la idea de ausencia final. Los militares no habrían previsto hasta qué punto el ocultamiento y la negación de los crímenes reforzarían la desesperación y el temple de los familiares de las víctimas, constituyendo un sujeto singular de lucha por la aparición, la verdad y la justicia. La presencia abstracta de los desaparecidos, expresada iconográficamente en “las siluetas”, revertiría en permanente reacción contra la impunidad, el pacto de silencio y la indiferencia inicial de la opinión pública y de buena parte del conjunto social.

Por lo visto hasta aquí, podemos acordar que fuera de la resistencia protagonizada por las víctimas más directas de la represión y del desguace económico que afectó inmediatamente a la clase trabajadora, el régimen acumuló, en los sectores me-

44 Richard Gillespie, *Soldados de Perón. Los Montoneros*, cap. 6: “La retirada hacia el exterior del país (1976-1981)”, Buenos Aires, Grijalbo, 1987.

45 Héctor Ricardo Leis, *El movimiento por los derechos humanos y la política argentina*/1, Buenos Aires, CEAL, 1989.

dios y altos, más consentimiento de lo que luego admitiría la sociedad en su rechazo a la dictadura. A medida que la democracia fue iluminando lo más oscuro del período, dos preguntas comenzarían a ser formuladas con mayor frecuencia: ¿en qué sentido podía afirmarse que la sociedad había sido “cómplice” o “responsable” ya no del golpe, sino del genocidio que el régimen había llevado a cabo? Dejando de lado la participación directa de empresarios, Iglesia, dirigencia conservadora y una parte del peronismo de gobierno nacional y provincial del año 75, ¿podía cuestionarse la alegada “inocencia” del conjunto social que había producido numerosas imágenes de acompañamiento al régimen?

Hugo Vezzetti afirma que si bien en Argentina no hubo un despotismo desde abajo, artífice del exterminio, existieron responsabilidades colectivas en la implantación de la dictadura que lo llevó a cabo⁴⁶. En su estudio de memoria social abocado a reconstruir los olvidos colectivos que permitieron argumentar la “inocencia del pueblo”, Vezzetti sostiene que la visión de guerra del Ejército fue compartida por diversos sectores de la sociedad cuyo llamado al orden habría estado más cerca del accionar de los verdugos de lo que la memoria del conjunto estaría dispuesta a admitir.

Más allá de las impresiones, hasta el momento han avanzado muy poco los estudios sobre las adherencias y rechazos de la sociedad. Apenas ha comenzado a desarrollarse una “historia desde abajo”, socialmente discriminada, que nos permita comprender los diversos modos en que la “gente corriente” de los diversos segmentos sociales interpretó la dictadura. La dicotomía inocencia/complacencia impide comprender la experiencia diversa, confusa y cambiante de los distintos sectores sociales que evaluaron los primeros años de la dictadura a la luz de una traumática experiencia previa. Los diversos modos de valorar al régimen no sólo se vinculaban con las “visibilidades” propias de cada lugar de la estructura social, sino también con la cercanía o lejanía de los circuitos de información alternativos que permitieran poner en duda la “desinformación organizada” de la propaganda oficial y los medios masivos. En otras palabras, la dicotomía entre “sociedad inocente” y “verdugos voluntarios” impide ver la variedad de matices existentes entre “el saber” y “el no saber”, lo que la gente observaba directamente a su alrededor e indirectamente a través del cristal de los medios manipulados, las diversas razones evasivas y no evasivas por las que el genocidio tardó en ser objetivado. “El anestesiamiento de las conciencias morales”, “el fantasma de la disolución nacional”, “la privatización de los individuos”, “el miedo”, “la culpa”, “la impotencia”, el “desconocimiento since-

46 Hugo Vezzetti, *Pasado y Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, p. 49.

ro” o el “preferir no saber”, constituyen sólo algunos de los ingredientes que interactuaron en diferentes proporciones sobre la conciencia de millones de argentinos que no dejaron de ser víctimas de aquella dictadura aunque tardaran en reconocerlo. Reconstruir de qué manera ellos procesaron mentalmente las ficciones que el régimen montaba, es instalarnos en la circunstancia de quienes se encontraban básicamente aislados de cualquier contradiscurso.

Algunos episodios ponen de manifiesto esta complejidad. En su libro sobre Malvinas, Horacio Verbitsky narra un hecho que ilustra a pequeña escala el proceso de conocimiento que debía atravesar buena parte de la sociedad.

Tras la llegada de la comisión inspectora de la OEA, el locutor de Radio Rivadavia José María Muñoz arengó a los hinchas de fútbol que habían ganado las calles para festejar el triunfo del seleccionado juvenil en Japón. Les propuso que fueran a la sede de la OEA para demostrar a los funcionarios extranjeros que los argentinos vivían en paz y en libertad, conformes con la autoridad militar. Cuando los hinchas llegaron al lugar, en la Avenida de Mayo, encontraron a cientos de personas que aguardaban en fila para presentar las denuncias por la desaparición de sus familiares. Cuenta Verbitsky: “Las columnas que, incitadas por el señor Muñoz y guiadas por un dispositivo policial, se acercaban a la OEA tomaron contacto con una realidad nueva que ignoraban y que los conmovió, al observar esas cuadras cubiertas de compactas colas de deudos silenciosos, casi todas personas mayores, mujeres y niños, que aguardaban turno para dejar constancia de su angustia en un formulario de la Comisión. Dos rostros del país se miraron a los ojos y a partir de allí ya nada volvería a ser igual. Los desaparecidos aparecían finalmente con un peso en la política argentina que no cesaría de crecer en los años siguientes”⁴⁷.

6. Las convocatorias nacionales de la última dictadura

A diferencia de las dictaduras anteriores y de sus contemporáneas del Cono Sur, el “Proceso” evitó el inmovilismo de una manera inédita en la historia del país y de la región: casi nunca dejó de proponer una empresa belicista de convocatoria nacional contra un enemigo por ella construido.

Primero fue la llamada “guerra contra la subversión”, el enemigo que había unificado a los militares en el pacto de sangre que los condujo al poder desde donde ese enemigo fue proyectado hacia la nación toda. La amenaza debía ser aniquilada mediante una acción mancomunada del Estado y la sociedad: “un

47 Horacio Verbitsky, *op. cit.*, pp. 111-112.

puesto de lucha para cada ciudadano”, había dicho Videla en su discurso inaugural. Luego fue instalada, de la noche a la mañana, la guerra con Chile que no llegó a concretarse pero que, a través de consignas y simulacros, el régimen instrumentó en 1978 para conectarse nuevamente con la sociedad mientras la preparaba para un conflicto armado. Al mismo tiempo y avanzando hacia 1979 y 1980, fueron llevados al primer plano de la enemistad nacional quienes supuestamente promovían la “campaña antiargentina”: familiares de desaparecidos y exiliados que denunciaban el genocidio desde el exterior, los jugadores de la selección holandesa que un día antes de la final habían visitado a las Madres de Plaza de Mayo, o los inspectores de la Comisión de la OEA que arribó al país en 1979. Por último, la reconquista de Malvinas en manos de los usurpadores ingleses. Las islas debían ser recuperadas sin dilación.

Es sabido que las dictaduras son más propicias a entablar conflictos bélicos que las democracias porque necesitan de las guerras más que aquéllas para resolver sus contradicciones con la sociedad unificando el frente interno al invocar la “unión sagrada”. Pero en Argentina ninguna de las dictaduras anteriores había arrastrado a la sociedad a una guerra, ni había estado cerca de hacerlo. La necesidad de presentar en todo momento un enemigo nacional frente al cual convocar a los argentinos debió ser particularmente perentoria en este caso porque el último régimen militar rara vez se privó de ello y porque estuvo dispuesto a construir a los “enemigos” en todo momento.

1) Un primer factor se relaciona con la necesidad que en general presentan los regímenes autoritarios de justificar su presencia en el poder aduciendo que “las amenazas contra la nación” no han cesado. Es decir que para presentarse como *regímenes de excepción* para tiempos de emergencia deben renovar el escenario de las supuestas “emergencias nacionales”.

2) Un segundo elemento para explicar las “guerras” de la dictadura fue, otra vez, la *competencia interna por el poder*. Como en la represión y el genocidio, a propósito de las guerras con otras naciones, los “duros” presionaban a los “blandos” para ganar posiciones, mientras éstos intentaban mostrarse no tan “blandos” con tal de conservar su liderazgo en las fuerzas. No es casual que la guerra con Chile y la reconquista militar de Malvinas hayan sido impulsadas por la Armada (Massera y Jorge Anaya) tanto como por los duros del Ejército que competían por el poder: Benjamín Menéndez, Suárez Mason, Santiago Omar Riveros y, más tarde, Galtieri. Quien más decidido se mostrara seduciendo a las fuerzas con promesas de triunfos históricos, ganancias patrióticas y suculentos aumentos en la compra de armamentos, ganaría apoyo en un lugar decisivo: el cuerpo de generales del Ejército, quienes reunidos constituían la instancia decisiva para la sucesión presidencial. De hecho, concitando el apoyo de este cuerpo fue como Galtieri logró la destitución de Viola para asumir la conducción.

Pero antes de que eso tuviera lugar, fue durante el conflicto con Chile cuando la competencia interna de poder puso de manifiesto lo precario que era el liderazgo militar de Videla y la falta de conformación institucional de un régimen determinado por internas aplazadas pero no resueltas. Dos cosas que contrastaban con la dictadura chilena. La estrategia de Massera desde que el conflicto con Chile quedó planteado cuando el gobierno argentino consideró nula la resolución del laudo inglés, consistió en promover a Suárez Mason a la jefatura del Ejército, emitiendo discursos belicistas en las bases militares del Sur con el objetivo de ganarse el apoyo de los jefes de los cuerpos y regimientos. Mientras Videla y Viola apostaban a una solución diplomática mediada por el Vaticano y Estados Unidos, Massera entablaba contactos con el Ejército de Bolivia en busca de un potencial aliado para la guerra. Presionando a la conducción, los cuerpos del Ejército argentino comenzaron sus aprestos para el combate. Lanzaron gritos de guerra y movilizaron tropas al tiempo que diseñaron el ataque argentino. Frente a ello, Videla evidenció su condición de mero *primus inter pares* entre los generales del Ejército cuando accedió a firmar el decreto que autorizaba la invasión argentina denominada Operativo Soberanía cuyo inicio se fijó para el 20 de septiembre de 1978. Entre las distintas hipótesis que contemplaba el alto mando argentino figuraba la regionalización de la guerra en el caso muy probable de que Bolivia y Perú intervinieran contra Chile, y en el caso menos probable de que Brasil lo hiciera contra Argentina buscando reconstituir el equilibrio regional⁴⁸.

¿Cuáles eran las principales motivaciones de los mandos que impulsaban una aventura de este calibre? Además del triunfalismo basado en una supuesta superioridad de la infantería argentina compuesta por “soldados invictos”, existían otros impulsos e ilusiones belicistas. Como señalan Seoane y Muleiro, “la guerra era necesaria para crear un escenario donde reinaran quienes mandaban en sus armas”. El oportunismo de los postulantes a la jefatura del Ejército que como Galtieri alternaron de una posición moderada a una belicista de acuerdo con las circunstancias de la interna militar, pone de manifiesto que la soberanía de las islas no era lo primordial.

3) En tercer lugar, la apelación a lo nacional permitía al régimen congraciarse de múltiples maneras con la sociedad y construir la imagen de una nación cohesionada por “intereses transversales” al conflicto entre las clases: “25 millones de argentinos jugaremos el Mundial”, “unidos es más fácil”, rezaban las consignas en uno y otro momento llamando a la confraternidad después del

48 Bruno Passarelli, *El delirio Armado. Argentina y Chile, la guerra que evitó el Papa*, Buenos Aires, Sudamericana, 1998, pp. 39-41.

“fratricidio”. Que el llamamiento tuviera éxito era vital para un régimen que, como vimos, había desechado por igual los “plebiscitos del sí” y el uso de las corporaciones, al tiempo que carecía por completo de recursos carismáticos aunque algunos jefes procesistas como Massera pretendieran tenerlo. La dictadura que había atomizado a la sociedad destruyendo asociaciones de base debía reunir a esos mismos individuos en otro tipo de convocatoria, en un reencuentro colectivo prefigurado por su voz rectora. El régimen terminó de descubrirlo durante el Mundial 78: en un contexto de exaltación triunfalista era posible dirigirse a una multitud modelada por discursos adulatorios sin que el alma colectiva notara la contradicción que existía entre esos elogios y el cercenamiento del derecho a voto. Cualquier triunfo que pudiera ser exhibido como un logro nacional, desde la consagración de una Miss Universo argentina, o el buen desempeño de un tenista o un automovilista en la competencia mundial, contribuía a dulcificar la relación sobre la base de ocultar lo más evidente⁴⁹.

A su vez, en cuanto a la guerra con Chile y de Malvinas, el Ejército “nocturno” encontraba la oportunidad de transfigurarse en “diurno”, cambiando “guerra sucia” por “guerra limpia”, buscando un acercamiento con la sociedad que no habían conseguido en su llamamiento contra la subversión. El caso del teniente de navío Alfredo Astiz lo ilustra claramente: guerra mediante, el alias “rubio” de la represión clandestina mutaba por unos días en conductor de los comandos “Lagartos Argentinos”, narrados como héroes de la resistencia nacional en las Georgias del Sur.

4) Un cuarto factor interviniente en el conflicto con Chile y más aun durante Malvinas refiere a los impulsos comúnmente denominados “huida hacia adelante”. Cuando los militares advirtieron que más tarde o más temprano buena parte de la opinión pública mundial y de la sociedad argentina los iba a obligar a rendir cuentas por sus crímenes, la necesidad de permanecer en el poder apelando al nacionalismo con su manto de confusiones se hizo más urgente que nunca. A esto se sumó el derrumbe económico de 1981, el resurgimiento de la protesta obrera y el agravamiento de la competencia interna de poder que amenazaba con fragmentar al régimen desde arriba.

En verdad, todos los caminos y los fracasos de la dictadura condujeron a una salida como Malvinas, tan ignorante de la historia del siglo XX como de la historia de las guerras: el fracaso para esconder el genocidio o consensuar su impunidad. El fracaso económico difícil de soslayar en una situación de bancarrota, y el fracaso político al momento de criar lo que Videla denominaba “una descendencia civil del Proceso que no fuera el antiproceso”. Durante la presidencia de Viola, en el año 1981, se evidenciaron estos fracasos justo en el

49 Alberto R. Jordán, *op. cit.*, p. 127.

momento en que la conducción militar se había quedado sin convocatorias nacionales para distraer a los argentinos. La desorientación política que el régimen sufrió cuando perdió la iniciativa de convocar, reveló lo necesarias que estas maniobras nacionalistas eran para su continuidad. El inmovilismo en el poder durante la presidencia de Viola coincidió con el fracaso de enmendar al “Proceso” a los ojos de la sociedad justo en el momento en que se producía el derrumbe económico y un deshielo social y cultural que los militares no lograban detener⁵⁰. Tan profunda fue la sensación de pérdida de rumbo que, por primera vez desde marzo de 1976, los “duros” del Ejército arrebataron el control a la conducción Videla-Viola, destituyendo a este último en favor de Galtieri: un general decidido a recuperar la iniciativa por medio del más audaz de los llamamientos nacionales. Galtieri asumía la presidencia con la idea fija de Malvinas. La corporación militar apostaba a un general decidido a romper la encrucijada mediante la reconquista de una parte del territorio nacional muy anhelada por la sociedad.

Los analistas no han terminado de explicar la irracionalidad de Malvinas; cómo la conducción militar se embarcó en una guerra tan desventajosa. Pero es evidente que el tamaño de la aventura que el régimen estaba dispuesto a emprender se correspondía con la magnitud de sus necesidades, de sus fracasos y también de las frustraciones golpistas anteriores a 1976 que el “Proceso” cargaba en sus espaldas. La pesadilla que empujaba a los militares a una acción desesperada como Malvinas estaba compuesta de las imágenes de 1969 y 1973: renacimientos de la protesta social que habían señalado el fracaso rotundo de los proyectos golpistas de 1955 y 1966. Esas imágenes eran nuevamente evocadas por el resurgir de la protesta en 1981 y 1982, y los militares estaban dispuestos a cualquier emprendimiento con tal de evitar su repetición.

De este modo, Argentina, que había atravesado la época de los nacionalismos sin enredarse en los conflictos mundiales más destructivos de la humanidad (Primera y Segunda Guerra Mundial), se veía envuelta en una elemental experiencia de distorsión nacionalista. Tardíamente había llegado la hora de lo que en 1948 José Luis Romero definía como la pesadilla nacionalista con todas sus confusiones entre “lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso”. Una confusión de estas dimensiones permitió que el 2 de abril de 1982, día del desembarco en las islas, Galtieri fuera aclamado por añadidura en las plazas del país, en las escuelas y en los cafés, en los estadios de fútbol y en las colas de los bancos. La ceguera fue compartida por los militares y buena parte

50 Véase un excelente análisis de este período en Marcos Novaro y Vicente Palermo, *op. cit.*, cap. V.

de la sociedad que se limitó a actuar como si ignorara los peligros que se avecinaban. Tomados de la mano, unos y otros se aferraron a las ilusiones que la corporación militar fabricaba, en primera instancia, para sí misma. Al principio, se mantenía la ilusión de que Inglaterra no respondería. No se percibía que para la refundación conservadora liderada por Margaret Thatcher la guerra significaba una oportunidad espléndida para superar sus propios fracasos después de tres años de tozudo neoliberalismo. Pero pronto se hizo evidente que Inglaterra sí respondería, que de hecho una de las armadas más poderosas del mundo estaba en camino, y con la asistencia de su aliado histórico, Estados Unidos. Entonces se renovaron ilusiones basadas en la leyenda del soldado criollo que nunca había perdido una guerra, o en el voluntarismo de los argentinos que si era necesario “volverían a tirar aceite hirviendo desde los balcones como en 1807”.

Las primeras víctimas de este lance político-belicista fueron los conscriptos muy jóvenes e inexpertos (muchos de ellos con pocos meses de instrucción) que formaron un alto porcentaje de los cerca de 10.000 soldados argentinos que combatieron en Malvinas. Mal equipados, debieron enfrentarse a dos enemigos que la geografía y el clima hicieron más temibles, dos enemigos que en la posguerra habitarían sus pesadillas simultáneamente: en el frente, la maquinaria militar inglesa que contaba con soldados expertos, bien pertrechados. En la retaguardia, la negligencia de los mandos argentinos, que en muchos casos descargaban sus temores maltratándolos con sadismo. Del lado argentino, el saldo humano de la guerra fue de 649 soldados muertos (323 murieron en el hundimiento del Crucero General Belgrano que fue atacado cuando navegaba fuera de la zona de exclusión militar declarada por Gran Bretaña), cerca de 1.300 heridos, y cerca de 350 ex combatientes (cifra estimada al 2006 por organizaciones de veteranos de guerra) que se suicidaron en la posguerra.

Si Malvinas implicó el colmo de la irracionalidad transmitida de arriba hacia abajo, es importante distinguir su nacimiento dentro de los cuarteles de su irradiación triunfalista a la sociedad a través del más penetrante operativo de comunicación⁵¹.

Una vez iniciados los aprestos para la guerra, correspondió a los medios instalar primero el optimismo y luego el triunfalismo cuando las acciones bélicas comenzaron. Lo narrado por los primeros comunicados de guerra impusieron el “estamos ganando” con la asistencia de operaciones de prensa que soslayaban o falsificaban hechos, y que inventaban la existencia de armas milagrosas y de circunstancias favorables, que supuestamente inclinarían las posibilidades del triunfo para Argentina. Sería la última fantasía impuesta por el régimen a la que

51 Horacio Verbitsky, *op. cit.*, cap.16.

gran parte de la sociedad se aferraría intensamente. De todas las falsedades y autoengaños que el “Proceso” había montado sería también la de más corta duración. Pero en los primeros tiempos gozó de un apoyo masivo porque era transmitida en un contexto de uniformidad pública sin precedentes, y porque se trataba de una población modelada infantilmente para escuchar los relatos del poder, sobre todo cuando el relato apelaba a un sentimiento nacional arraigado como el de Malvinas. Sin duda que cuanto más vuelo remontara el sueño triunfalista peor sería el impacto de la vuelta a la realidad. Eso sucedió repentinamente a partir de los comunicados 164 y 165 que para sorpresa de muchos anunciaron livianamente y con eufemismos la rendición argentina, desatando la reacción callejera más colérica hasta el momento.

El fracaso de Malvinas, junto a la crisis económica que renacía a la conciencia civil una vez apagada la euforia nacionalista, dio lugar a un estallido de protesta que fue encauzado por una Multipartidaria dispuesta a absorber la crisis del modo más cauto y controlado que le fuera posible. El poco tiempo que medió entre la rendición de Malvinas, el grito social reprobatorio y la autorrenuncia del régimen a seguir intentando alguna otra cosa que no fuera cubrirse las espaldas por las denuncias contra sus crímenes, hizo que fueran factibles dos interpretaciones sobre el final de la dictadura. Muchos de los partícipes creían que su propio grito era la causa del derrumbe al que asistían, es decir, que se trataba de un auténtico derrocamiento. Otros percibían que las movilizaciones crecientes no hacían otra cosa que leña de un árbol caído por sus propios fracasos, es decir que se había tratado de un “autoderrumbe”. La discusión tenía importancia porque era evidente que las diferencias entre una democracia “conquistada desde abajo” o “cedida desde arriba” por el corrimiento de una dictadura fracasada, se harían notar, para bien o para mal, en los años siguientes sin perjuicio del sincero sentimiento de liberación que los protagonistas tuvieran mientras durara la sensación de primavera política.

Los militares abandonaron el poder en un contexto de repudio y descrédito social que no tenía antecedentes en Argentina ni en América del Sur. El descrédito de la corporación militar alcanzaría niveles tan altos que el país del golpe de Estado intermitente dejaría de producirlos. Así, la dictadura que en materia de modelo de acumulación capitalista había abierto un ciclo, parecía cerrar otro en lo referente a los golpes de Estado. Esta ambivalente combinación de consecuencias – democracias socialmente valoradas que debían afrontar herencias económicas desastrosas – daría lugar a la Argentina más pobre y más democrática que había existido hasta el momento.

Comparada con el final de la dictadura chilena, que se fue imponiendo los tiempos y las formas de la transición, la dictadura argentina abandonó el poder velozmente, sin llegar a planificar su impunidad con la misma parsimonia, ni a

conseguir imponer su visión de los hechos sobre extensos sectores de la sociedad como sucedió en el país trasandino. Considerando que fueron dos dictaduras igualmente sanguinarias, el contraste de sus finales nos lleva a formular una última pregunta contraria a los hechos: ¿cómo hubiera procesado la sociedad argentina el genocidio si los militares no hubieran dejado una economía quebrada ni una frustración colectiva tan imborrable como Malvinas?

Bibliografía

- Basualdo, Eduardo Marcelo, *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2001.
- Blaustein, Eduardo y Zubieta, Martín, *Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso*, Buenos Aires, Colihue, 1998.
- Cardoso, Oscar, Kirschbaum, Eduardo y Van der Kooy, Eduardo, *Malvinas. La trama secreta*, Buenos Aires, Planeta, 1992.
- Castiglione, Marta, *La militarización del Estado en la Argentina (1976-1981)*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1992.
- Cavarozzi, Marcelo, *Autoritarismo y democracia (1955-1966). La transición del Estado al mercado en la Argentina*, Buenos Aires, Ariel, 1997.
- CONADEP, *Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, Buenos Aires, Eudeba, 1984.
- Corradi, Juan, "La cultura del miedo en la sociedad civil: reflexiones y propuestas", en Cherensky, Isidoro (comp.), *Crisis y transformación de los regímenes autoritarios*, Buenos Aires, Eudeba, 1985.
- Duhalde, Eduardo Luis, *El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica*, Buenos Aires, Eudeba, 1999.
- Gillespie, Richard, *Soldados de Perón. Los Montoneros*, Buenos Aires, Grijalbo, 1987.
- Leis, Héctor Ricardo, *El movimiento por los derechos humanos y la política argentina/1*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1989.
- López Jordán, Alberto, *El Proceso 1976-1983*, Buenos Aires, Emecé, 1993.
- Mattini, Luis (Arnol Kremer), *Hombres y mujeres del PRT-ERP de Tucumán a La Tablada*, La Plata, Ediciones de la Campana, 1995.
- Novaro, Marcos y Palermo, Vicente, *La dictadura militar 1976-1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática*, Buenos Aires, Paidós, 2003.
- Ostiguy, Pierre, *Los capitanes de la industria. Grandes empresarios, política y economía en la Argentina de los años 80*, Buenos Aires, Legasa, 1990.
- O'Donnell, Guillermo, *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Buenos Aires, Paidós, 1997.

- Passarelli, Bruno, *El delirio Armado. Argentina y Chile, la guerra que evitó el Papa*, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.
- Pozzi, Pablo, *Oposición obrera a la dictadura*, Buenos Aires, Contrapunto, 1988.
- Pucciarelli, Alfredo, *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Siglo XXI, Avellaneda, 2004.
- Quiroga, Hugo, *Estado, crisis económica y poder militar (1880-1981)*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1985.
- Sabato, Jorge y Schvarzer, Jorge, “Funcionamiento de la economía y poder político en la Argentina: trabajar para la democracia”, en Jorge Sabato, *La clase dominante en la Argentina moderna: formación y características*, Buenos Aires, Imago Mundi, 1991.
- Schvarzer, Jorge, *La política económica de Martínez de Hoz*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- Schvarzer, Jorge, *Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y 2000*, Buenos Aires, A-Z Editora, 1998.
- Seoane, María y Muleiro, Vicente, *El dictador. Historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla*, Buenos Aires, Sudamericana, 2001.
- Uriarte, Claudio, *Almirante Cero. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera*, Buenos Aires, Planeta, 1991.
- Verbitsky, Horacio, *Malvinas. La última batalla de la tercera guerra mundial*, Buenos Aires, Sudamericana (edición corregida y aumentada), 2002.
- Vezzetti, Hugo, *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.



El retorno a la democracia: la herencia de la dictadura y las ilusiones frustradas (1983-1989)

Ariel Filadoro, Alejandra Giuliani y Miguel Mazzeo

Creer que las palabras expresan los pensamientos, creer que los pensamientos rigen la voluntad, creer que la voluntad conduce a los acontecimientos y creer que los acontecimientos son controlados por el alcance de las leyes, tal es la síntesis de la confianza cívica radical.

Enrique Fogwill (1984)

1. Introducción

La derrota en la Guerra de Malvinas provocó un profundo descrédito del régimen militar. Tras la renuncia del general Leopoldo Fortunato Galtieri, las Fuerzas Armadas designaron como presidente al general Reinaldo Bignone, quien asumió el papel de “liquidador” de la experiencia de la dictadura militar. Se inició de ese modo el proceso de transición hacia un régimen político democrático, signado por la crisis económica, la desestructuración de la tradicional matriz sustitutiva de importaciones y el sostenimiento del régimen de acumulación de la valorización financiera, la crítica situación por la que atravesaban los trabajadores, la instalación del problema del desempleo, la creciente difusión pública de la verdad respecto del terrorismo de Estado y la movilización de los organismos de derechos humanos.

En abril de 1983 las Fuerzas Armadas redactaron un Acta Institucional. En ella asumían la responsabilidad en las “acciones antsubversivas” y declaraban fallecidos a los desaparecidos. Buscaban evitar a toda costa una revisión de lo actuado y borrar las secuelas del terrorismo estatal. Consideraban a las prácticas más características de este tipo de terrorismo —la desaparición de personas, el exterminio de prisioneros y la tortura— como “actos de servicio” o “gestos patrióticos”. En esa misma línea, impulsaron una ley de autoamnistía, por cual se libraba de toda responsabilidad a los ideólogos y ejecutores del mayor genocidio de nuestra historia.

El gobierno militar estableció un nuevo estatuto de los partidos políticos, que comenzaron a reorganizarse. A través de ellos se canalizaron las expectativas de

la sociedad argentina, como quedó demostrado por la afiliación masiva de ciudadanos. Este proceso tuvo lugar más allá de las limitaciones de los partidos y de la mayoría de los dirigentes políticos, muchos de ellos cómplices, en diversos grados, de la dictadura militar, o sencillamente obsoletos o visualizados como políticamente inadecuados para un proceso democrático, tolerante y respetuoso de los derechos.

Esto último ocurrió principalmente con el Partido Justicialista, dominado por la derecha política y sindical. Lorenzo Miguel, líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y heredero del sindicalismo vandorista, era además vicepresidente del Partido Justicialista, siendo de hecho la máxima autoridad del partido, ante la ausencia y el desprestigio de la titular, la ex presidente Isabel Perón. Los principales representantes del poder sindical peronista limitaron sus críticas a la dictadura y establecieron un diálogo con los militares. El pacto militar-sindical fue denunciado por el radicalismo durante la campaña electoral, principalmente por el candidato presidencial Raúl Ricardo Alfonsín, lo que contribuyó a que una parte del electorado, tradicionalmente peronista, votara la fórmula de la UCR.

Además, Alfonsín legitimaba su candidatura por el hecho de haber surgido de elecciones internas en la UCR. Durante la campaña electoral desplegó un discurso basado en la posibilidad de la construcción de un Estado de derecho y asumió personalmente el papel de garante de los valores republicanos. Alfonsín convocaba a la sociedad a realizar una “apuesta contractual”, tomando la figura del “pacto” como la forma principal de la política. Por todo esto, en las elecciones de 1983, el candidato de la Unión Cívica Radical obtuvo más del 50 por ciento de los votos y se impuso a la fórmula justicialista integrada por Ítalo Argentino Luder y Deolindo Bittel, que alcanzó el 40 por ciento. La primera derrota del justicialismo en elecciones libres y la instauración de un bipartidismo inexistente con anterioridad, marcaron el tono de los tiempos iniciales del nuevo gobierno. Se abrió un período que muchos de los contemporáneos interpretaron como de franca ruptura con el pasado dictatorial. La polisémica idea de “democracia” parecía actuar como un conjuro contra los años de plomo. Sin embargo, la herencia de la dictadura se manifestaría profunda y la sociedad que emergía de ella era muy distinta a la de los inicios de la década de 1970. Baste sólo observar uno de los datos más significativos que presentaba el escenario político en 1983: la menor incidencia relativa de fuerzas políticas “revolucionarias” y de izquierda, de grupos contestatarios y rebeldes en el campo sindical y estudiantil. El contraste con los años previos al golpe del 76 era evidente, una clara constatación de que los principales objetivos de la dictadura militar se habían cumplido.

La democracia representativa fue la forma que asumió la continuidad del proceso económico-social iniciado por Alfredo Martínez de Hoz. La democracia terminó

siendo “el liberalismo por otros medios”. Enrique Fogwill publicó, en mayo de 1984, un ensayo en la revista *El Porteño* titulado “La herencia cultural del Proceso”, donde destacaba una invariante histórica de largo plazo, que se inició con la dictadura y que continuó en el período abierto en 1983. Proponía, crudamente, buscar el Proceso en los “pasadizos progresistas de los contemporáneos”¹.

2. La política de derechos humanos y la cuestión militar: avances y retrocesos

Los organismos de derechos humanos, en particular las Madres de Plaza de Mayo², constituyeron una de las principales resistencias a la dictadura militar. El movimiento de derechos humanos fue creciendo y consolidándose a partir de la apertura política en 1982. Con el retorno de la democracia, una de las tareas de los organismos que lo conformaban, consistió en regularizar la situación jurídica de presos políticos, exiliados, niños nacidos en la clandestinidad, parientes de desaparecidos con causas penales pendientes y problemas patrimoniales, de documentación, etc.

Amplios sectores del movimiento de derechos humanos y partidos políticos opositores a la UCR reclamaron la formación de una comisión parlamentaria bicameral, con poderes para investigar los crímenes del terrorismo de Estado. Sin embargo, Alfonsín, en una de sus primeras medidas, creó un organismo ligado directamente al Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), dirigida por el escritor Ernesto Sabato y otras personalidades de la cultura y la política³. El objetivo de la comisión era investigar y acumular pruebas sobre las prácticas del terrorismo estatal durante la dictadura (desaparición de personas, torturas, asesinatos, etc.), sobre el destino de los detenidos-desaparecidos y sobre los campos de concentración. En menos de un año la comisión reunió gran cantidad de expedientes con testimonios de

1 Esteban Rodríguez: *La invariante de la época. Las formas de la cultura política en la Argentina contemporánea*, La Plata, Ediciones La Grieta, 2001, p. 10.

2 También cabe destacar la participación de: Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Servicio de Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Movimiento Ecuaménico por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, creada en 1984.

3 Entre otros, integraban la CONADEP René Favaloro, Jaime de Nevares, Gregorio Klimovsky y Magdalena Ruiz Guiñazú. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, rechazó el ofrecimiento a formar parte de la CONADEP por considerar que debía haberse creado una comisión parlamentaria.

sobrevivientes de los campos de concentración y de sus familiares y amigos. El miedo aún reinante en la sociedad argentina y la supervivencia parcial del aparato represivo de la dictadura, nunca embestido a fondo por el gobierno radical, hicieron que muchas personas se negaran a declarar ante la CONADEP. Los organismos de derechos humanos estimaron en 30.000 el número de personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura militar y en más de 500 los centros clandestinos de detención (campos de concentración).

Los militares pretendían ser juzgados por sus pares pero, ante la presión de los organismos de derechos humanos y de la sociedad así como por el compromiso demostrado por algunos sectores del propio gobierno, los casos de violación de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad fueron pasados a tribunales civiles después de una reforma introducida por el Congreso que establecía que el fallo de la justicia militar podía ser apelado ante la Cámara Federal con competencia en el lugar donde los hechos se habían producido.

En abril de 1985 comenzaron las audiencias del juicio a las tres primeras juntas militares. Desde ese mes hasta fin de año, la sociedad se conmovió ante los relatos de sobrevivientes que ponían en evidencia el grado de barbarie ejercido por la dictadura militar y el Estado argentino, que mató, torturó, violó, robó (bienes y personas) y que no dejó derecho por avasallar. A fin de año, los principales jerarcas del “Proceso” fueron condenados a cadena perpetua o a muchos años de prisión. Los procesos judiciales no se limitaron a los militares, en 1986 fue extraditado José López Rega, y acusado por su rol como jefe de la Triple A. Alfonsín estaba dispuesto a disminuir el poder de las Fuerzas Armadas, para lo cual pasó a retiro a un conjunto de oficiales de alto rango y redujo el presupuesto militar. Pero fueron los juicios los que generaron la reacción militar. Según la Cámara, había que avanzar en la investigación, no sólo teniendo en cuenta las responsabilidades de los oficiales superiores sino también las de los “ejecutores” de las órdenes de los jefes. Los hechos demostraron que, a pesar del descrédito, los militares aún eran un factor de poder.

En diciembre de 1986, el gobierno, a través de una ley, limitó a 60 días el plazo para presentar acciones penales contra representantes de las fuerzas de seguridad que hubieran participado en la represión. A pesar de los cuestionamientos de los organismos de derechos humanos y de una masiva movilización, la llamada Ley de Punto Final (ley 23.492) fue sancionada.

Los militares aprovecharon las señales de debilidad que daba el gobierno y avanzaron. En Semana Santa de 1987, un grupo de militares dirigidos por el coronel Aldo Rico (conocidos como “carapintadas”, por embadurnarse el rostro con inculcable predisposición bélica) se sublevaron en Campo de Mayo. El repudio popular hacia los sublevados fue contundente: cientos de miles de personas colmaron la Plaza de Mayo.

El gobierno de Alfonsín, coherente con su concepción verticalista de la toma de decisiones políticas, no estuvo a la altura de las circunstancias históricas. Lejos de presionar y cercar al poder militar, apoyándose en la importantísima movilización popular y en el formidable repudio que la sociedad estaba manifestando hacia los sublevados, decidió negociar y conceder. El presidente, un “liberal” más que un “demócrata”, había claudicado. Quedó demostrado que en su idea de la democracia, el énfasis estaba puesto en lo procedimental. No concebía la democracia como la lucha por más democracia. Carecía de la predisposición para difundir el poder estatal por todo el tejido social y, por lo tanto, no favoreció un proceso de expansión de los ámbitos estratégicos de la participación popular. Al contrario, impulsó la proliferación de circuitos mediatizadores que reproducían las desigualdades, ratificando el poder de los que tenían poder. Es decir, al mediatizar los puntos de vista y los intereses que entraban en colisión en un marco signado por la asimetrías, benefició a los grupos más poderosos.

Poco después de los sucesos de Semana Santa, en junio de 1987, el Congreso sancionó la Ley de Obediencia Debida (ley 23.521), por la cual los oficiales de menor graduación, los suboficiales y los cuadros subalternos en general, responsables inmediatos de un abanico de aberraciones, quedaban librados de toda responsabilidad en la represión, puesto que habían “obedecido” las órdenes de sus superiores. Estas leyes acabaron con las expectativas que una parte de la sociedad había depositado en el gobierno radical. Amplios sectores se sintieron profundamente frustrados. A partir de 1987, el consenso inicial del gobierno de Alfonsín se fue deteriorando a pasos agigantados.

De todos modos, durante 1988 hubo otras dos rebeliones. Aldo Rico, después de fugar, volvió a sublevarse en 1988, en Monte Caseros, en Corrientes. A fin de ese año, el coronel Mohamed Alí Seineldín, otro líder “carapintada”, se sublevó en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires. Seineldín exigía una amnistía para todos los militares juzgados y procesados y la renuncia del comandante en jefe del Ejército. Ambos terminaron en prisión, pero quedaba claro que la cuestión seguía abierta y que los responsables del genocidio podían seguir recuperando terreno.

En enero de 1989, un comando guerrillero del Movimiento Todos por la Patria (MTP) intentó copar el regimiento de La Tablada, con el fin de evitar un supuesto golpe militar carapintada⁴. Enrique Gorriarán Merlo, miembro del MTP, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) durante los años 60 y 70 y principal responsable de la operación, afirmaba que: “La idea era ganar la iniciativa, parar el golpe, lograr la

4 Se basaban en información de los organismos de inteligencia del Estado.

movilización popular y exigir al gobierno firmeza frente a los planteos militares. Pensábamos que con la gente en la calle y los militares aún no movilizados en conjunto se dificultaría mucho la represión posterior; claro que no descartábamos nuevos enfrentamientos, pero ya en mejores condiciones. En aquel momento el poder político estaba cada vez más condicionado, el pueblo se sentía cada vez más separado de ese poder político y los golpistas estaban cada vez más envalentonados. Con La Tablada intentábamos frenar ese proceso y ayudar a un cambio de rumbo que despejara el camino de la democracia”⁵.

La acción, por cierto, fue extemporánea, tanto por su metodología como por su concepción militarista y vanguardista.

El Ejército no dejó escapar la oportunidad de señalar la vigencia de la “guerrilla” y de reprimir salvajemente (hubo fusilados y desaparecidos) a un grupo de guerrilleros en situación de inferioridad numérica y técnica. A pesar de sus objetivos en contrario, los sucesos de La Tablada contribuyeron con la ofensiva militar y de los sectores más retrógrados.

3. La teoría de los dos demonios

La “teoría de los dos demonios” fue un fenómeno político-discursivo, uno de los principales paradigmas hegemónicos que, a partir del retorno de la democracia en 1983, se “interpone” y distorsiona la comprensión del pasado y del presente. Esta lectura del pasado inmediato puso a funcionar mecanismos de olvido que fueron el abono de crisis posteriores.

Esta “teoría” encontró su formulación más concreta en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), específicamente en el prólogo de Ernesto Sabato al *Nunca Más*, donde afirma lo siguiente: “A los delitos de los terroristas las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor, produciendo la más grande tragedia de nuestra historia”⁶.

Pero la equiparación de víctimas y victimarios no era precisamente el punto más falible de la teoría de los dos demonios. Uno de los pilares de esa teoría consiste en atribuir a los demonizados un supuesto “culto a los medios” y una concepción de los objetivos como “meras coartadas”. De este modo, el supuesto “culto a la violencia” negaría, por un lado, los anhelos de liberación, justicia y transformación social de toda una generación y, por el otro, los objetivos reaccionarios de

5 Enrique Gorriarán Merlo: *Memorias de Enrique Gorriarán Merlo, de los setenta a La Tablada*, Buenos Aires, Planeta, 2003, p. 501.

6 CONADEP, *Nunca más. Informe de la Comisión Nacional para la Investigación de la Desaparición de Personas*, Buenos Aires, EUDEBA, 1984.

quienes abogaban por la preservación de un ordenamiento social jerárquico —vía la redistribución desigual de la riqueza— y por la reproducción del sistema de dominación. ¿Se podrían explicar las atrocidades del nazismo, por ejemplo, sólo a partir del funcionamiento de sus instancias burocráticas? ¿Los métodos no fueron plenamente funcionales a los objetivos?

Para la “teoría” ambos demonios “violaron las leyes” y eso los equipararía. No se toma en cuenta el sentido de la supuesta “violación” ni las características de esa legislación, los intereses que afectaba y los que perpetuaba. Tampoco repara en una paradoja: los defensores de la teoría de los dos demonios no pueden dejar de reconocer que la violación sistemática de esa ley por parte de la dictadura militar condujo, en última instancia, a una renovada vigencia de la misma. Es decir, en algún punto deben reconocer que los militares violaron la ley porque la ley estaba en peligro y porque sus mecanismos usuales resultaban insuficientes para autodefenderse. Los sectores que apoyaron su sistemática violación se convirtieron luego, una vez erradicado el “mal” que atentaba contra ellas, en sus sostenedores. La teoría de los dos demonios, tras la fachada de la doble condena, oculta la justificación del terrorismo de Estado.

La teoría de los dos demonios generaliza retrospectivamente una situación. Sin hacer distinciones sociales, de clase o de grupo, afirma que en 1976 toda la sociedad estaba igual de aterrorizada por la guerrilla y la Triple A. Tras esta afirmación, que tiende a socializar la culpa, se oculta el supuesto, pocas veces explícito, que sostiene que la mayoría del país consintió “en los hechos” el golpe de Estado, aportando así a la fundamentación de la teoría autoritaria el consenso “tácito” o “pasivo” que supuestamente prestan los argentinos cuando reclaman orden.

Por otra parte la teoría escinde al pueblo de sus organizaciones a través de la noción de “masa vacante” y de sus esquemas binarios: pueblo-dirigentes, pueblo-agitadores, pueblo-infiltrados. Además reduce al sujeto social que impugnaba objetivamente al sistema a una de sus expresiones (la que por otra parte estaba en crisis y en retroceso): los grupos armados. ¿Y los trabajadores?

Se puede afirmar también que el documental *La República perdida*, difundido masivamente durante 1983 y 1984, se ajustaba a los lineamientos principales de esta teoría y además la aplicaba retrospectivamente. De este modo, la historia argentina mostraba al “pueblo” como sujeto pasivo (espectador del drama nacional) y víctima inocente de la sinrazón y la violencia de grupos minoritarios de signos diversos.

Finalmente la teoría de los dos demonios niega que los itinerarios de la dictadura militar permanezcan inconclusos. La reflexión sobre la dictadura ha girado muchas veces alrededor del tópico de su posible retorno y de la necesidad de generar los mecanismos idóneos que acoten esa posibilidad: la

apuesta fuerte a la consolidación del sistema institucional, la práctica activa de la memoria, una sana pedagogía que disponga a las nuevas generaciones a la posición del “nunca más”. De este modo, el problema se reduce a una cuestión de “educación cívica”. Tal fue la estrategia del radicalismo. El horror se congelaba y se transformaba en puro pasado. Sólo se trataba de garantizar su irrepetibilidad, ignorando una forma de dominio que sólo difiere de la anterior por sus atributos externos y formales. Existe una realidad siniestra que una sociedad por hipócrita o golpeada tiende a negar: la dictadura está con nosotros, aunque aparentemente el tiempo transcurrido la haya convertido en algo lejano y extraño. La principal certeza de la dictadura (el segundo demonio de don Ernesto Sabato) es la supervivencia de sus efectos. La pregunta en torno a las posibilidades de que regresen los tiempos del horror no tiene sentido. Vivimos en él aunque se nos presente con otros ropajes: miseria, descomposición social, corrupción, impunidad, destrucción del espacio público (sin dejar de reconocer la reedición en nuevos contextos de la violencia institucional y policial). Su aliento remite al espanto y es el espanto. La teoría de los dos demonios intenta convencernos de que la garantía del no-retorno al tiempo del “caos” y el “horror” implica aceptar el predominio de los sectores dominantes y aprender a convivir, resignados y promiscuos, con sus efectos.

4. El Estado condicionado y los límites de la democracia

Alfonsín intentó construir un Estado de derecho y fundar una ciudadanía basada exclusivamente en los derechos civiles y políticos. En otras palabras, se trató de una concepción donde el régimen político, al transitar de la dictadura a la democracia, garantizaría un orden con mayor bienestar para el conjunto de la sociedad. Fiel a la tradición radical, apostó, con gran ingenuidad política y sin atender a la relación de fuerzas, a que la “ética de los procedimientos” y el respeto de la Constitución y las leyes resolvieran los conflictos estructurales, limitaran el poder de las corporaciones y logaran el equilibrio social. Esta confianza se expresó en uno de los principales *slogans* de Alfonsín: “Con la democracia se come, se cura y se educa”. Todo se cargó a la cuenta de la democracia.

Por su parte, amplios sectores de la sociedad eligieron creer que los fundamentos del Estado de derecho, como la división de poderes, las leyes fielmente aplicadas por jueces “independientes”, la amplia vigencia de las libertades personales y políticas, serían garantías suficientes de un capitalismo más justo. En contraposición al terrorismo de Estado que venían de padecer —e incluso algu-

nos de avalar o de negar—, hicieron propio el discurso oficial en cuanto a la antinomia autoritarismo-democracia. A partir de esta dicotomía, proyectada retrospectivamente, adhirieron al nuevo orden como reaseguro de no retorno a las prácticas autoritarias de la dictadura. A la vez, el gobierno avivó la idea de que la sociedad estaba amenazada por un nuevo golpe de Estado. Ese hecho actuó como mecanismo de disciplinamiento respecto de las decisiones gubernamentales, y el temor limitó la libertad y el compromiso de participación en movimientos que se propusieran profundos cambios sociales.

Así y todo, buena parte de la ciudadanía, por lo menos durante un tiempo, se sintió protagonista de la construcción democrática, visualizó a los partidos políticos como representantes de sus intereses y confluyeron en ellos afiliándose o acompañándolos en propuestas y manifestaciones públicas.

Por otra parte, se hizo notorio que el nuevo régimen político democrático expresaba profundas transformaciones en relación con sus antecesores, pues los métodos de lucha y las formas de la acción popular característicos de la época anterior a 1976, si bien se mantuvieron durante los 80, habían perdido su antigua efectividad. Los inicios de la democracia evidenciaban durísimas herencias de la dictadura, como la desaparición de muchísimos de los mejores militantes populares y la formación individualista de tantos otros jóvenes que nacían a la vida política. Por otra parte, el proceso de despolitización de los sectores populares, lejos de detenerse, asumió nuevas formas a partir de 1983. Fueron sometidos a un proceso de “electoralización” y de dispersión que incrementó su fragmentación. La democracia, en la concepción limitada del radicalismo, se opuso al efectivo ejercicio de la política.

De todos modos, lenta e imperceptiblemente, nuevos actores (jóvenes y mujeres), nuevos ejes articuladores (derechos humanos, lo cultural-comunicacional, lo territorial o lo “barrial”) y nuevos métodos para la lucha y la protesta social aparecieron en la escena del conflicto y fueron conformando diversos tipos de movimientos que resistieron la despolitización.

El consenso inicial a la gestión alfonsinista, el apoyo masivo a un conjunto de iniciativas, dieron pie a que algunos políticos e intelectuales cercanos al gobierno hablaran de un “tercer movimiento histórico”, una especie de síntesis superadora de las dos grandes tradiciones populares de la historia argentina, el radicalismo yrigoyenista y el peronismo.

Pero la experiencia de gobierno, muy rápidamente, enfrentó al radicalismo con una realidad que demostraba las limitaciones de esos mecanismos (idealizados) a la hora de confrontar con intereses muy arraigados y con las conductas especulativas y abiertamente disociativas de los principales actores económicos y corporativos, por lo general poco proclives a hacer concesiones en beneficio del conjunto y a respetar la institucionalidad. El gobierno radical contribuyó activamente con

el proceso de despolitización al presentar esas limitaciones como inherentes a la política. Fue instalando gradualmente la idea de la imposibilidad de la política más allá de sus condicionamientos, idea que se consolidó en los 90.

La instauración del régimen de acumulación de la valorización financiera había dejado un pesado lastre: la deuda externa. Siendo uno de los mayores condicionantes del accionar del Estado, generaba situaciones totalmente nuevas, alterando el funcionamiento característico de la economía y la sociedad argentina de veinte o treinta años atrás. Las condiciones financieras internacionales habían cambiado desde mediados de los años 70 y ya no “operaban en un cuadro general de alza global de la tasa de ganancia en las economías avanzadas”⁷.

La forma de Estado neoliberal, por su parte, mostraba claramente que la capacidad de control del aparato estatal sobre la dinámica económica luego de la dictadura estaba seriamente disminuida. El aparato de gestión y administración se había deteriorado en un grado lo suficientemente alto para limitar las capacidades del Estado a la hora de trazar y ejecutar la política económica y disciplinar a los factores de poder. Un Estado desarticulado, herencia de la dictadura, era un poderoso condicionante para el gobierno radical ya que resultaba incapaz de imponer políticas a los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, al capital financiero y a la burocracia sindical.

Hacia 1984 se constituyó la corporación de empresarios conocida como Capitanes de la Industria, a partir de una convocatoria formal del canciller Dante Caputo. El gobierno declaraba estar interesado en crear un espacio de “debate de ideas” con ese sector. Se trataba de representantes de un conjunto de grupos económicos locales diversificados, consolidados al calor de la gestión de la dictadura militar⁸. Así, el Estado creaba un nivel extraparlamentario de relación con el sector empresario, que consistía en negociaciones directas llevadas a cabo por un conjunto de funcionarios centrales en la estructura del partido de gobierno. Los Capitanes de la Industria se fortalecieron como corporación, adquirieron un lugar central en las decisiones de Estado, tanto en las referidas a defender y acrecentar las prerrogativas económicas adquiridas durante la dictadura, como en decisiones políticas más abarcativas⁹. De modo

7 Claudio Katz, “El círculo vicioso de la crisis mundial y la deuda de América Latina”, *Realidad Económica*, N° 83-84, cuarto y quinto bimestre de 1988, pp. 32 y 55.

8 Véase Marcelo Luis Acuña, *Alfonsín y el poder económico*, Buenos Aires, Corregidor, 1995, p. 44-45.

9 Véase Eduardo Basualdo, *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2001, p. 44.

similar, el Ejecutivo abrió continuos espacios de “concertación”, negociaciones directas con otras corporaciones empresariales y con sectores de la burocracia sindical, en especial con el Grupo de los 15, liderado por Armando Cavalieri y Jorge Triaca.

¿Qué capacidad tendría el Poder Ejecutivo para conciliar y, llegado el caso, subordinar a las principales fracciones del capital? ¿Contaba el poder político con poder suficiente para “disciplinar” al capital que durante la dictadura había conseguido consolidar su poder económico? El gobierno radical obró, de algún modo, respondiendo afirmativamente a estos interrogantes.

Por su parte, la “transición a la democracia” mostraba sus límites. El gobierno estaba lejos de construir y legitimar mecanismos políticos por medio de los cuales los representantes electos fueran quienes definieran y decidieran la política económica y social. Y lejos estaba también de dinamizar instituciones estatales que canalizaran proyectos de las mayorías. Por cierto que no eran muy amplios los sectores de la sociedad (despolitizada) que demandaban la concreción de tales prácticas democráticas. Quizás uno de los mayores triunfos de la dictadura militar fue lograr subvertir en muchos la idea de “política”, en el sentido de que los dirigentes proponen y deciden, mientras que los proyectos colectivos quedan relegados, en todo caso, a decisiones puntuales y poco relevantes. La idea de que “la política es de los políticos” y la concepción de que el sujeto político es el individuo y no el colectivo social, había calado hondo, es decir, se habían naturalizado el posibilismo y el oportunismo.

Una característica central del régimen de la “transición a la democracia” fue la creciente participación de “operadores políticos”. Articuladores de acuerdos más o menos informales entre el radicalismo y los sectores dominantes, generaron espacios propicios para la concreción de negocios políticos y económicos. Teniendo en cuenta la continuación del proyecto económico-social que se había iniciado en la dictadura militar, las presiones de los sectores dominantes hacia el gobierno y la actividad de los operadores, Eduardo Basualdo ha situado en los años de Alfonsín los orígenes de un proceso de cooptación ideológica de militantes políticos, sindicales y otros intelectuales propios del campo popular por parte de la clase dominante, que dio en llamar “el transformismo argentino”. Basualdo considera que el transformismo responde a una estrategia global de la clase dominante para mantener y expandir “en democracia” el régimen de valorización financiera que había logrado implantar a través de la dictadura¹⁰.

10 Véase Eduardo Basualdo, *op. cit.*, p. 46.

En concordancia con las nuevas condiciones imperantes en el capitalismo mundial, el capital financiero pasó a ocupar un lugar cada vez más destacado entre los actores económicos de mayor poder relativo. De hecho, fue durante los años del gobierno de Raúl Alfonsín cuando la voz de los acreedores de la deuda externa comenzó a ser decisiva en el rumbo económico del país. Según el esquema de Basualdo, el conjunto de los representantes políticos perdieron autonomía relativa respecto del poder económico y, en pocos años, las medidas políticas fueron un fiel reflejo de los intereses de las distintas fracciones del capital. En poco tiempo, el entusiasmo inicial dio paso al reconocimiento de un hecho: la dictadura militar había creado nuevas condiciones estructurales y el radicalismo no tenía la fuerza social necesaria, la intención ni la capacidad para revertirlas.

En otros campos, el contraste con la dictadura era notorio. La democracia garantizó la libertad de pensamiento, expresión y creación, y en líneas generales el gobierno radical se mostró tolerante frente a los conflictos sociales. Las universidades públicas se normalizaron después de muchos años de intervenciones. La libertad de prensa se hizo efectiva, al igual que la participación ciudadana en algunos ámbitos. Esto generó la airada respuesta de los sectores ultramontanos, que cuestionaron el “libertinaje” sin disimular su añoranza por los tiempos de la dictadura. La sanción de la Ley de Divorcio Vincular, en 1987, apoyada por los no católicos y por muchos católicos, generó la reacción de la Iglesia, que después de mucho tiempo (desde 1955), recurrió a la movilización callejera. La actitud retrógrada de la Iglesia católica argentina reflejaba de algún modo las complicidades de la institución con la dictadura militar. Ese mismo año, se sancionó la Ley de Patria Potestad Compartida, complementando de este modo, aunque tardíamente, el proceso de modernización de las relaciones familiares. Como contraparte, la Iglesia obtuvo del gobierno y del Estado nacional un espacio clave en el Congreso Pedagógico y una influencia nada despreciable en el trazado de las políticas educativas y en la selección de los contenidos de la enseñanza. Pero, sin dudas, el juicio a los ex comandantes generó la reacción más cruda de la derecha, que utilizó todos los medios, incluyendo atentados públicos, para oponerse.

En sus empresas belicistas de convocatoria nacional, la dictadura militar había dejado pendiente la definición de nuevas estrategias estatales frente al triunfo británico en la Guerra de Malvinas y para la resolución del conflicto con Chile por la soberanía de la zona del Canal de Beagle. En ambos casos —en contraste con el régimen militar—, el gobierno de Alfonsín priorizó posturas antibelicistas, e intensificó las vías diplomáticas de diálogo. Ante Gran Bretaña intentó sin éxito reiniciar negociaciones bilaterales y luego optó por buscar apoyos en foros multilaterales, como las Naciones Unidas. En el caso del Beagle, la diplomacia radical decidió aceptar la propuesta formulada por el Vaticano, que había ac-

tuado de mediador entre ambos países durante la dictadura, aun cuando el fallo beneficiaba a Chile. Para avalar su posición, y para presionar al Parlamento, convocó a una consulta popular. En 1984, la población participó de un plebiscito y aprobó el tratado.

5. Economía y sociedad: la puja sectorial por la redistribución del ingreso

Al asumir el radicalismo el gobierno, los problemas económicos estaban vinculados a la puja redistributiva, la caída de la inversión y la deuda externa. El contexto mundial no se presentaba favorable: a una crisis de los precios de los productos agrícolas se sumaba el aumento por parte de Estados Unidos del tipo de interés que se debía pagar por la deuda. “La crisis financiera internacional (...) explota en agosto-septiembre de 1982. Esta crisis, originada en la aguda iliquidez que surge de la política monetaria de EUA y en la insolvencia generalizada de los deudores de América Latina, provoca una abrupta interrupción de los créditos de la banca privada mundial”¹¹.

El ministro de Economía Bernardo Grispun intentó un retorno a la matriz sustitutiva y distribucionista; de hecho, se ha dicho que su programa se inspiraba en la experiencia de Arturo Illia. Según el ministro y su equipo, los estímulos para el crecimiento económico debían provenir de la demanda interna y del poder adquisitivo de las clases populares. Por lo tanto, propició una mejora salarial, la protección arancelaria y un parcial control de precios. Además, trató de reactivar la actividad industrial a partir de créditos. Contradictoriamente, la política económica de Grispun no alteró la operatoria de los monopolios que se vieron claramente beneficiados. Esto hizo que fuera inevitable la explosión inflacionaria y tornó imposible contrarrestar las presiones de los distintos grupos de interés.

Frente a la deuda externa, el gobierno adoptó inicialmente una “línea dura”. Manifestó sus intenciones de determinar qué parte de la deuda era ilegítima. Pero esta disposición no duró mucho. Al poco tiempo, el pago de la deuda se convirtió en uno de los principales objetivos del gobierno.

Los intereses de la deuda externa se devoraban literalmente los excedentes de la balanza comercial, todos los recursos obtenidos a partir del superávit del comercio exterior. La transferencia de recursos tanto a los acreedores como a los

11 Aníbal Mayo: “El Plan Sourrouille”, *Realidad Económica*, N° 63, segundo bimestre de 1985, p. 6.

grupos económicos y los conglomerados externos atentaba contra la inversión, lo que imposibilitaba el crecimiento del producto y el descenso de los precios. Vale subrayar, siguiendo a Basualdo, que las transferencias de recursos a estos grupos económicos locales y conglomerados externos, muchas veces excedían a las transferencias hacia los acreedores¹². En efecto, fue este esquema de prioridades del gobierno el que, más adelante, condujo a los acreedores externos a impugnar el accionar del gobierno radical, desencadenando la corrida cambiaria, cuyo desenlace fue la hiperinflación.

Para atender a las urgentes necesidades de los sectores más postergados, el gobierno impulsó el Plan Alimentario Nacional (PAN), que distribuía cajas de alimentos. De hecho, siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, comenzaba a aplicarse un esquema de políticas asistencialistas que, lejos de discutir la redistribución de la riqueza, simplemente gestionaban la pobreza alimentando a los carenciados. De este modo, pasó a estar fuera de la discusión la distribución de los ingresos. Las cajas del PAN preanunciaron la suerte que sobrevino a los sectores que no consiguieron insertarse en la sociedad salarial. El problema de la pobreza fue crecientemente abordado como un problema de los pobres. Por otra parte, un conjunto de sectores políticos visualizaban las “posibilidades electorales” de la miseria. El asistencialismo, un eficaz factor de despolitización de las clases populares y de reproducción de la pobreza y de las élites políticas, se extendió y fue delineando una “patria asistencialista”.

El intento de Grispun no funcionó y, ante la presión de los acreedores externos y un rebrote inflacionario, renunció en febrero de 1985. La capacidad impugnadora de los acreedores comenzaba a mostrar su fuerza. De hecho, las relaciones con el FMI durante la gestión de Grinspun habían sido muy conflictivas.

Más allá de las intenciones keynesianas, el poder económico presionaba a favor de la continuidad de los procesos iniciados con la dictadura: la concentración y diversificación económicas. El gobierno radical no alteró en lo sustancial el mecanismo de subsidios hacia los sectores más concentrados de la industria ni las políticas de promoción industrial, es decir, no afectó a los sectores que se habían consolidado y expandido durante la dictadura y que no se caracterizaban precisamente por propiciar algún proyecto de desarrollo nacional.

Grispun fue reemplazado por Juan Vital Sourrouille, un economista con un perfil más académico que político, con orientación afín a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). El nuevo ministro implementó un plan económico que revertía las propuestas iniciales. El denominado Plan Austral,

12 Véase Eduardo Basualdo: *Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes-Flacso-Página/12, 1999.

nombre de la nueva moneda que reemplazaba al peso, tenía como objetivo prioritario bajar la inflación rápidamente. Se redujo el déficit fiscal y se aumentaron los impuestos a las exportaciones. Se frenó la emisión monetaria y se congelaron precios, tarifas públicas y salarios. Se devaluó un 15 por ciento y se congeló el tipo de cambio.

A diferencia del perfil distributivo de la gestión Grispun, el nuevo plan económico favorecía el aumento de las exportaciones agropecuarias y la reestructuración industrial (de las ramas más concentradas y vinculadas al mercado externo) a partir de la apertura de la economía. Se intentó mantener un tipo de cambio alto para favorecer las exportaciones y alejar el viejo fantasma de la escasez de divisas (típico rasgo del *stop and go*).

Además se impulsó la reestructuración del sector público mediante privatizaciones de algunas empresas públicas que venían operando como mecanismo de transferencia de subsidios a las empresas más concentradas, contratistas o clientes del Estado. De este modo, siguieron delineándose los rasgos de la forma del Estado neoliberal y, cada vez más, ésta pasó a atender las necesidades de los sectores dominantes. Si durante la dictadura habían sido beneficiados los grupos económicos como contratistas del Estado, ahora se planteaba que las empresas públicas pasaran directamente a manos privadas. Durante el gobierno radical, el esquema de privatizaciones no contó con el apoyo necesario en el Congreso, fundamentalmente debido a la oposición del peronismo. Pocos años después, hiperinflación mediante, el gobierno de Menem sería el encargado de articular los intereses de los sectores dominantes, efectuando las privatizaciones en los años 90.

El impacto inicial del Plan Austral fue positivo, la inflación cayó de manera pronunciada. Esto le permitió al radicalismo ganar las elecciones legislativas de 1985. Pero el fenómeno inflacionario retornó; los precios aumentaron y los salarios siguieron deteriorándose. Las modificaciones parciales del plan no consiguieron detener el proceso inflacionario. Como la productividad de la industria aumentaba, mientras que el costo de la fuerza de trabajo disminuía, difícilmente puede sostenerse que los salarios fueron responsables del aumento de precios. Por el contrario, las prácticas monopólicas (determinantes de los precios) de las grandes empresas operaron sistemáticamente impulsando el alza. Dos años más tarde el plan era insostenible. En las elecciones de 1987, que ponían en juego varias gobernaciones y que renovaban la Cámara de Diputados, el radicalismo fue derrotado y el peronismo salió fortalecido¹³.

13 De hecho, el oficialismo perdió en todos los distritos, salvo Córdoba, Río Negro y la Capital Federal.

La inflación pasó a funcionar como el termómetro de la economía. En un marco de puja distributiva, la marcha de los precios reflejaba las disputas tanto entre las distintas fracciones del capital, como entre el conjunto del capital y el trabajo. Sin embargo, es preciso apuntar que el perjuicio del aumento de precios es marcadamente asimétrico entre clases sociales. Mientras que las empresas miden el volumen de sus ganancias según la marcha de los precios, los asalariados —en particular los de menores ingresos— miden si alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos. Por añadidura, en esta etapa los alimentos básicos incrementaban sus precios en proporciones mayores al promedio inflacionario.

En agosto de 1988, una vez agotado el Plan Austral, el gobierno lanzó el Plan Primavera. Su principal objetivo era “ganar tiempo” para arribar a las elecciones presidenciales de 1989 con la inflación controlada, por eso el plan se basó en una concertación de precios con los sectores más concentrados de la industria. Ahora bien, su funcionamiento exigía garantizar un flujo constante de divisas en el mercado local para mantener el valor del dólar bajo. El plan no se diferenciaba en lo sustancial de los anteriores. Se trató de una nueva versión de los programas de ajuste ensayados previamente: negociar con los organismos de crédito, ampliar el superávit de la balanza comercial, aplicar políticas de ingresos recesivas que afectaban el consumo interno, etc. Lo distintivo fue, en todo caso, el énfasis puesto en las “reformas estructurales”, particularmente del sector público (reducir su participación en beneficio del capital monopólico), en la flexibilización de los regímenes legales con el objetivo de anular las restricciones al capital extranjero, en la aplicación de regímenes de “capitalización de la deuda”, etc.

En líneas generales, el plan comenzaba a mostrar crecientemente las apetencias de largo de plazo del capital financiero. En términos de Leonardo Blejer: “El equipo económico parece dispuesto a continuar el programa de reformas estructurales en el sistema financiero y el comercio exterior. Todas las medidas apuntan a consolidar el proceso de concentración y centralización de la economía, profundizando la inserción dependiente de nuestro país en una economía crecientemente transnacionalizada”¹⁴.

Por otro lado, se veía cómo el gobierno tenía cada vez menos apoyo por parte de las fracciones del capital excluidas de las prioridades del plan. En efecto, no contó con el aval de las principales entidades agropecuarias; la poderosa Sociedad Rural Argentina (SRA) se declaró en “estado de alerta”. El principal punto de discordia era el tipo de cambio. La SRA y otras entidades agropecuarias exigían un tipo de cambio único. La tensión tuvo su pico durante la Exposición Rural en agosto de 1988, cuando el presidente Alfonsín y otros representantes del gobierno fueron

14 Leonardo Blejer: “El Plan Primavera”, *Realidad Económica*, N° 83-84, cuarto y quinto bimestre de 1988, p. 32.

abucheados por sectores de la concurrencia que respondían a las entidades agropecuarias.

Muchos factores atentaron contra el plan; los que daban cuenta de la creciente crisis que se venía gestando hacia dentro del gobierno, al interior de los sectores dominantes, así como entre dominantes y dominados. Las crisis de hegemonía de las etapas anteriores volvían a reflejarse en la palestra política argentina. Los cuadros técnicos que representaban intereses de las distintas fracciones del capital operaban abiertamente en función de cada uno de los grupos. Entre este tipo de acciones, las gestiones poco “patrióticas” de Domingo Felipe Cavallo resultaron premonitorias de lo que sería la década del 90, pues había recomendado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial que limitaran sus créditos al gobierno argentino.

La relación con estos organismos multilaterales de crédito se tornó cada vez más conflictiva durante el último año y medio del gobierno radical. El ingreso de Nicholas Brady como secretario del Tesoro norteamericano de la gestión entrante de George Herbert Bush, señalaba un cambio en la política, aumentando las exigencias hacia los países deudores por parte de estos organismos. Hacia fines de 1988, bajo el Plan Brady, el rol del FMI en los planes económicos de los gobiernos latinoamericanos fue ganando importancia al operar como supervisor *ipso facto* de las políticas llevadas adelante por estos gobiernos. Las renegociaciones de la deuda externa argentina sólo se realizaban si el gobierno hacía los cambios exigidos por esta institución que, en última instancia, obra en consonancia con los intereses de Estados Unidos¹⁵. El Consenso de Washington, en los hechos, cristalizó durante la década de los 90 los lineamientos políticos que Estados Unidos propuso para América Latina: privatización de empresas públicas, leyes de flexibilización –precarización– laboral, liberalización del sistema financiero y apertura de la economía, entre otras medidas que fueron supervisadas por el FMI. En este contexto, a partir de mayo de 1988, el gobierno entró de hecho en cesación de pagos con los organismos multilaterales de crédito y se radicalizó la conflictividad entre las distintas fracciones del capital pues, tal como señala Basualdo¹⁶, paradójicamente, el gobierno venía desatendiendo los pedidos de

15 Si bien el FMI se presenta como una entidad multilateral, en los hechos, los votos que Estados Unidos tiene dentro de la misma hacen que ninguna decisión pueda tomarse sin el consenso norteamericano. En general, los votos de los países deudores son claramente minoritarios en la asamblea del FMI y la mayoría se compone de países desarrollados. De esta manera, la institución condensa los intereses de los países dominantes en el escenario internacional.

16 Eduardo Basualdo, *Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política*, *op. cit.*

los acreedores externos y convalidando la acumulación del capital concentrado interno.

En el transcurso de la primera quincena de febrero de 1989 el dólar trepó de 17 a 26 australes, y también subieron las tasas de interés. Los bancos nacionales y extranjeros —acreedores del Estado— fueron los responsables de la corrida del dólar. Al mes siguiente, el Banco Mundial suspendió la entrega de parte de un crédito otorgado con anterioridad y se radicalizó el enfrentamiento entre los acreedores externos y el gobierno.

La devaluación desató el aumento de precios y la economía, en un marco estructuralmente inflacionario, siguió más que proporcionalmente el aumento del dólar. El país ingresó en la hiperinflación. Los aumentos de precios, desquiciados y constantes, hicieron inviable el sostenimiento de la situación. La hiperinflación radicalizó la sensación de insostenibilidad del gobierno y la necesidad de cambios en las medidas de política económica. La disputa por la redistribución del ingreso entre los grupos económicos más poderosos pasó a dominar el escenario económico y político.

Los cambios que sobrevendrían a la “híper” sólo podían llevarse adelante en la medida en que tanto los grupos económicos locales como el capital extranjero y los acreedores externos acordaran su contenido. El resto de la población, ante la huella de pánico que fue marcando la híper, legitimaría este acuerdo entre los actores de mayor poder económico.

Entretanto, el ministro Sourrouille renunció y fue reemplazado por un dirigente político, Juan Carlos Pugliese. Su gestión estuvo signada por la impotencia frente a la voracidad de las distintas fracciones del capital en puja.

6. La crisis del gobierno radical, un final anticipado

Cuando el radicalismo asumió el gobierno y contribuyó a la restauración del régimen democrático en diciembre de 1983, no era plenamente consciente de los condicionamientos de la transición.

La puja entre el capital y el trabajo y la lucha intersectorial de grupos económicos por la apropiación de los ingresos en un contexto de recursos escasos, inflación descontrolada, exportación de divisas y fuga de capitales —a lo que debemos sumar las limitaciones de la estructura social y estatal—, hicieron que el gobierno radical, después de un inicio relativamente auspicioso, abjurara de sus mejores intenciones y asumiera el único objetivo de administrar la crisis política y económica del sistema.

La política económica del gobierno favoreció el reemplazo de la acumulación por los subsidios. A través de las empresas públicas, se transfirieron subsidios a

los sectores más concentrados de la industria. De este modo, el Estado asumió el costo de la acumulación de capital de tales grupos.

En este sentido, la experiencia se inscribe en la lógica del período iniciado en 1976. También por esto mismo, y no por simple cronología, puede considerarse como antesala de las políticas implementadas en los 90. De hecho, durante el gobierno de Alfonsín se impulsó la “reforma del Estado”, es decir, las privatizaciones (que avanzaron en su versión “periférica”). La hiperinflación, por su parte, se perfiló como otro momento del disciplinamiento social que venía a complementar el del terrorismo estatal.

El gobierno de Raúl Alfonsín no hizo más que profundizar la debilidad estatal. El resultado final fue una crisis económica que culminó en un proceso hiperinflacionario, paradójicamente presentada y asumida por buena parte de la población (los medios jugaron un rol clave en este aspecto) como consecuencia de una excesiva presencia del Estado en la economía y en la sociedad. Esta completa reversión del sentido común imperante hasta los años 70, marcó, en el terreno de la hegemonía, el triunfo estratégico de los sectores más concentrados del gran capital.

Por otra parte, durante esos años, el sindicalismo se constituyó como uno de los sectores opositores más importantes del gobierno radical. A poco de asumir, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de Reforma Sindical. La ley era contradictoria: por un lado, buscaba minar el poder de la burocracia sindical, modificando los estatutos gremiales, dando mayor participación a las bases y a la minorías, pero, al mismo tiempo, procuraba erosionar el poder político de los sindicatos. A pesar de las diferencias dentro del sindicalismo y del peronismo (después de la derrota del 83, se planteó una disputa por el control del justicialismo entre “ortodoxos” y “renovadores”), hubo un alto grado de cohesión en torno al cuestionamiento de la ley, la que por un voto no fue aprobada en el Senado. Este intento frustrado debilitó al gobierno, y el sindicalismo, en cambio, salió fortalecido. La Confederación General del Trabajo (CGT) conformó una conducción unificada. El líder del gremio cervecero, Saúl Ubaldini, se convirtió en secretario general a fines de 1986.

El sindicalismo remontó una situación de fraccionamiento y desprestigio y comenzó a recuperar cierta credibilidad en las bases peronistas. Se convirtió así en uno de los principales sectores opositores al gobierno radical, en particular a su política económica, realizando en total 13 paros generales. Por otra parte, después del inicial intento disciplinador, el gobierno radical impulsó leyes que beneficiaban abiertamente a la burocracia sindical, fundamentalmente la ley de Asociaciones Profesionales (que establecía la reelección, el sindicato único por actividad, etc.).

Después de la derrota en las elecciones de 1983, el peronismo se dividió, como

señaláramos, entre “ortodoxos” y “renovadores”. A partir de las elecciones de 1987, los segundos se consolidaron en la estructura partidaria. En las elecciones internas de 1988, se enfrentaron, para dirimir la candidatura presidencial, Antonio Cafiero y Carlos Saúl Menem. Si bien ambos tenían orígenes “renovadores”, el grueso de la estructura partidaria respondía al primero. Por eso, todos los grupos “marginales” del peronismo, tanto los sectores “ortodoxos” (la derecha política y sindical) como los sectores residuales de la izquierda peronista (Montoneros, concretamente) se encolumnaron detrás de la candidatura de Menem. Su estética de caudillo federal, anacrónica pero eficaz, su indiscutible carisma y un discurso que ponía el énfasis en la defensa de la soberanía nacional y en las políticas redistributivas, más el hecho de que su rival, Antonio Cafiero, aparecía como una versión muy cercana al alfonsinismo, le sirvieron para ganar las elecciones internas.

En las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989, se impuso la fórmula justicialista que postulaba a Carlos Menem y a Eduardo Duhalde como presidente y vice respectivamente. Éstos debían asumir en diciembre, pero la debilidad del gobierno radical y la posición del gobierno electo, profundizó la crisis. La deriva económica, los saqueos de los almacenes y supermercados por masas de hambreados, forzaron al gobierno a entregar el mando por anticipado. El 8 de julio, Menem asumió la presidencia en un contexto de grave recesión, alta inflación, exacerbada puja redistributiva y crisis social e institucional.

Bibliografía

- Acuña, Marcelo, *Alfonsín y el poder económico. El fracaso de la concertación y los pactos corporativos entre 1983 y 1989*, Buenos Aires, Corregidor, 1995.
- Aronskind, Ricardo, “El 89: la hiperinflación como síntoma y como oportunidad”, *La Escena Contemporánea* N° 2, mayo de 1999.
- Azpiaz, Daniel; Basualdo, Eduardo, y Khavisse, Miguel, *El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80*, Legasa, Buenos Aires, 1989.
- Basualdo, Eduardo, *Acercas de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes-Flacso-Página/12, 1999.
- Basualdo, Eduardo, *Sistema político y régimen de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes-Flacso-IDEP, 2000.
- Blejer, Leonardo, “El Plan Primavera”, *Realidad Económica*, N° 83-84, cuarto y quinto bimestre de 1988.

- CONADEP, *Nunca más. Informe de la Comisión Nacional para la Investigación de la Desaparición de Personas*, Buenos Aires, EUDEBA, 1984.
- Damill, Mario y Frenkel, Roberto, “Restauración democrática y política económica: Argentina, 1984-1991”, en Morales, Juan Antonio y McMahon, Gary (eds.), *La política económica en la transición a la democracia. Lecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay*, Santiago de Chile, Ediciones CIEPLAN, 1993.
- Katz, Claudio, “El círculo vicioso de la crisis mundial y la deuda de América Latina”, *Realidad Económica*, N° 83-84, cuarto y quinto bimestre de 1988.
- Levit, Cecilia y Ortiz, Ricardo, “La hiperinflación argentina: prehistoria de los años 90”, *Época. Revista Argentina de Economía Política*, año 1, N° 1, diciembre de 1999.
- Mayo, Aníbal, “El Plan Sourrouille”, *Realidad Económica*, N° 63, segundo bimestre de 1985.
- Portantiero, Juan Carlos, “La concertación que no fue: de la Ley Mucci al Plan Austral”, en Nun, José y Portantiero, Juan Carlos, *Ensayos sobre la transición democrática argentina*, Buenos Aires, Puntosur, 1987.
- Rapoport, Mario, *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)*, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2000.
- Rodríguez, Esteban, *La invariante de la época. Las formas de la cultura política en la Argentina contemporánea*, La Plata, Ediciones La Grieta, 2001.
- Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- Schvarzer, Jorge, *Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y 2000*, Buenos Aires, A-Z Editora, 1998.
- Schvarzer, Jorge, *La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina*, Buenos Aires, Planeta, 1996.
- Vitelli, Guillermo, *Cuarenta años de inflación en la Argentina 1945-1985*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1988.



Los noventa: del éxito al fracaso... ¿de quién?

Ariel Filadoro

*Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé
(...) pero que el siglo veinte es un despliegue
de maldá insolente
ya no hay quien lo niegue;
vivimos revolcaos en un merengue
y en un mismo lodo todos manoseaos.
Hoy resulta que es lo mismo
ser derecho que traidor,
ignorante, sabio, chorro,
generoso, estafador.
Todo es igual; nada es mejor;
lo mismo un burro que un gran profesor.
No hay aplazaos ni escalafón;
los inmorales nos han igualao (...)
Es lo mismo el que labura
noche y día como un buey
que el que vive de los otros,
que el que mata o el que cura
o está fuera de la ley.*
Enrique Santos Discépolo, tango *Cambalache* (1934)

1. Introducción

Las palabras de Discépolo escritas en los años 30 reafirmaron su vigencia durante la década del 90. Pues durante los 90 los cambios que han sobrevenido a la sociedad argentina han sido verdaderamente profundos: cambió la forma de Estado hasta convertirse en un Estado mínimo de corte neoliberal, se consolidó el régimen de acumulación de la valorización financiera y se reconfiguró el régimen político dando como resultado una democracia que plantea serias dudas de su condición.

Es por ello que surgen numerosas preguntas cuando nos adentramos en el período: ¿cómo pudieron llevarse adelante cambios tan drásticos en la estructura

económica, social y política tales como la venta de empresas públicas o el cambio de las leyes que protegían al trabajo? ¿Cómo fue que estas medidas fueron legitimadas? ¿Cómo se pasó de niveles de pobreza relativamente bajos a tener más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza? ¿Cómo fue posible que la destrucción de industrias, empleos y capacidad productiva haya alcanzado niveles devastadores? ¿En qué medida puede decirse que es democrático el régimen político de los 90?

En este trabajo nos referiremos a una década “larga” de los 90, con inicio en 1989 —año en que asume Carlos Menem su primer mandato presidencial— y finalización hacia 2001 —cuando Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia—, pues por las continuidades que se registran durante estos doce años los consideraremos en conjunto. En efecto, se analizarán distintas dimensiones de la realidad social, política y económica con el objeto de establecer relaciones entre ellas, de tal modo que estas continuidades que atravesaron toda la década resulten más claras y se comprenda mejor un período tan reciente como controvertido.

El contenido del trabajo es el siguiente. En un primer apartado se señalarán algunos aspectos relacionados con nuestra tarea, es decir, el estudio de la realidad. Luego se pretende bosquejar una selectiva recolección de procesos y hechos que tuvieron lugar tanto a nivel global —mundial— como local (en la Argentina de los 90). De algún modo, estos procesos serán los que tendremos que esclarecer en el resto del trabajo. Para ello, los apartados sucesivos analizarán los cambios y las relaciones entre las siguientes dimensiones de la realidad social: el régimen de acumulación, la forma de Estado, el régimen político y las lógicas de acción colectiva. El objetivo central del trabajo apunta a echar luz sobre lo ocurrido durante la década pasada, a partir de mostrar la interacción entre estas dimensiones de la realidad social.

1.1 Las dificultades que presenta el problema del estudio de la historia reciente

La década del 90 resulta un período particularmente difícil para estudiar, pues durante ella han tenido lugar fenómenos complejos y de signo contrario. Por ejemplo, se ha pasado de la desesperación hiperinflacionaria a su opuesto, la estabilidad de precios; de la euforia económica al estancamiento y el desempleo creciente; de un aparato del Estado con dificultades en su funcionamiento a una oleada de privatizaciones enmarcadas en una extendida corrupción.

Al tratarse de un período muy reciente, hablar de los 90 es prácticamente como hablar de hoy mismo. A diferencia de lo que sucede con el estudio de tiempos

más lejanos, abordar la historia reciente obliga a asumir el lugar que cada uno tiene dentro de la sociedad que le toca vivir, y esto tiene consecuencias inmediatas. Pues es fácil concluir que la práctica fraudulenta de la política hasta 1916 era una forma que tenían los sectores dominantes agropampeanos para manejar el Estado y las decisiones de gobierno. Lo que no es tan fácil, por ejemplo, es relacionar el poder económico actual con las medidas que toman los gobiernos en nuestros días. Es probable que discutir sobre las prácticas anarquistas de principios de siglo no genere mayores debates, e incluso provoque indiferencia. Lo que no es tan probable es que si discutimos sobre la práctica de los piqueteros nos resulte indiferente. Y así podríamos señalar numerosos ejemplos vinculados a la deuda externa, a la relación con las potencias extranjeras, a la participación de los obreros en la vida política, etcétera.

Sin embargo, es preciso destacar que lo que anima el estudio de la historia —reciente y más lejana— es precisamente el afán de comprender los problemas de la actualidad: pues cuando vamos al pasado buscamos entender la relación entre el poder económico y el poder político, la naturaleza y las características de las protestas sociales, el sentido de la democracia y, vale la pena enfatizarlo, nos preguntamos acerca de las posibilidades y formas de construir un orden social más justo y equitativo.

Estudiar la realidad histórica obliga a ir más allá de aprender qué pasó fácticamente, ciertamente implica establecer relaciones entre los acontecimientos y los grupos sociales apuntando, por ejemplo, lo que cada uno gana y pierde en determinado orden social; también implica realizar una jerarquización de aquello que nos ayuda a esclarecer la realidad, señalando qué elementos son los más importantes para la comprensión de los fenómenos. En tanto las esferas económica, política y social se encuentran en permanente interacción, será muy importante señalar cuál resulta determinante para el entendimiento de los procesos. Por ejemplo, nos podemos preguntar ¿qué problema es más importante: la búsqueda de ganancias por el poder económico o la corrupción de los políticos? ¿Qué relación existe entre ellos? ¿Fue efectivamente tan importante el menemismo para explicar lo sucedido durante los 90 o bien se trata de una problemática económica y política más profunda y compleja? Una adecuada articulación entre el régimen de acumulación, el régimen político y la forma de Estado contribuirá a dar respuesta a este tipo de interrogantes.

Asimismo, será imprescindible ser conscientes del lugar que cada uno ocupa en la sociedad y las limitaciones que se desprenden de ello; esto es, ser conscientes de la posición política frente a la realidad, conciencia que enriquecerá la capacidad para pensar el Estado, la política, la economía, etc. Por ejemplo, la misma realidad no será analizada de igual modo por un desempleado que por un integrante de los grupos económicos más ricos de Argentina. Recono-

cer estas diferencias es reconocer el lugar político, pues tanto el desempleado como el millonario tendrán deseos y objetivos distintos que conducen a distintas lecturas y explicaciones de la realidad. La consideración de estas asimetrías enriquecerá el estudio.

En este sentido, es preciso recordar que en el capitalismo la reproducción de la vida para los sectores asalariados —quienes son la mayoría de la población— se consigue a cambio de un empleo, es decir, de la venta de su propio trabajo a cambio de dinero. En cambio, la reproducción de la vida de los empresarios pasa por retirar dinero de los beneficios que consigue la empresa. Por lo tanto, cada uno tiene razones muy serias para mirar de diferente manera la realidad, pues la reproducción de la vida propia y la de su familia está condicionada de distinta forma en cada caso.

Y por supuesto que en los momentos de crisis económicas y políticas estas distintas clases sociales —obreros y empresarios capitalistas— sugieren y luchan por diferentes salidas, en la medida en que buscan estar mejor desde lugares distintos. Toda vez que, como sucedió en la década del 90, suba el desempleo como resultado de una crisis económica, para los obreros desocupados se tratará de una amenaza directa a su vida, mientras que para los empresarios más ricos no¹.

Pero reconocer el lugar político propio y las asimetrías entre clases sociales no es la única dificultad que enfrentaremos a la hora de estudiar la realidad. También debemos considerar otras cuestiones de distinta naturaleza.

Una cuestión que será particularmente importante para el estudio de los 90 es que el capitalismo argentino se encuentra articulado dependientemente con el capitalismo mundial, en particular con los países más desarrollados. En efecto, las dificultades que en el pasado ha atravesado el fallido proceso de industrialización por sustitución de importaciones se relaciona directamente con esta cuestión; del mismo modo que en la actualidad las presiones del capital financiero o de los gobiernos de países desarrollados también están asociadas a la condición dependiente de la economía argentina en relación con el mundo capitalista desarrollado.

1 Vale apuntar que no sólo se trata de reconocer el lugar propio de cada uno. También es preciso, a la hora de reflexionar en torno a la realidad social, reconocer el lugar de “los otros”, reconocer en los sectores sociales más perjudicados un “otro” que es un igual; de lo contrario se corre el riesgo de estudiar la realidad desde un reduccionismo individualista donde cada uno sólo mira su propio interés: los ricos se miran a sí mismos, los sectores medios también y los sectores populares a donde pueden. Pues cuando nos referimos a tomar conocimiento del lugar del otro, también nos referimos, simultáneamente, a ver a “los otros” como iguales.

Las economías dependientes se caracterizan por tener retraso tecnológico, escasa acumulación de capital, baja productividad, niveles salariales bajos con empleos precarios, exportaciones fundamentalmente de materias primas e importación de bienes industriales, y en algunos casos como el argentino, se encuentran fuertemente endeudadas. Todos estos factores refuerzan la dependencia respecto de los países que lideran en el mercado mundial.

1.2 Los 90: una serie de acontecimientos

*La memoria apunta hasta matar
A los pueblos que la callan
Y no la dejan volar
Libre como el viento...*
León Gieco, *La memoria*

1.2.1 Los cambios en el capitalismo mundial

Precisamente por lo señalado antes en relación con la dependencia del capitalismo argentino respecto de los países desarrollados, resulta necesario considerar la situación internacional hacia comienzos de la década que nos interesa.

A este nivel se rompe la lógica bipolar vigente durante casi todo el siglo XX —capitalismo *versus* comunismo— y se consolida el poder de Estados Unidos hacia fines de los años 80 y principios de los 90, en virtud de la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y el desmembramiento de la Unión Soviética hacia 1991². Esto significará el fin de la Guerra Fría y el comienzo de un mundo económica, política y militarmente hegemonizado por Estados Unidos, lo que implica un desbalanceo en las relaciones de fuerza a nivel internacional en la medida en que tanto Europa como Japón —las otras potencias capitalistas— no representarán amenaza ni interpondrán cuestionamientos al liderazgo norteamericano. Ejemplo de ello representa la ocupación norteamericana —durante la presidencia de George Bush (padre)— de Kuwait luego de la Guerra del Golfo durante 1990 hasta prin-

2 Comienzan, asimismo, los procesos de desmembramiento en Yugoslavia y Checoslovaquia. Estalla la violencia étnica en Sarajevo entre serbios, croatas y musulmanes. Los serbios comienzan su política de “limpieza étnica”. La ex Yugoslavia se separa luego de 45 años de mantenerse unida. Por su parte, Checoslovaquia se divide en dos Estados: la República Checa y Eslovaquia.

cipios de 1991. El expansionismo del imperialismo norteamericano estaba marcando sus líneas directrices³.

En términos económico-políticos, y vinculado con la hegemonía de Estados Unidos, los inicios de la década señalan el cenit del neoliberalismo. Según los preceptos del neoliberalismo, las políticas que deben llevar adelante los gobiernos para mejorar la trayectoria económica de los países tienen que favorecer el libre mercado y reducir la intervención del Estado. Como consecuencia existirán fuertes presiones sobre los gobiernos para que se privaticen empresas públicas, se liberen las tasas de interés, se disuelvan órganos reguladores de precios, y se establezcan condiciones para la libre entrada y salida del capital financiero⁴. Estas medidas, explícitamente, contenían el objetivo de mejorar los ingresos de los sectores de más altos recursos amputando las funciones del Estado de bienestar redistribucionista. En otras palabras, se trata de concentrar ingresos en los más ricos quitando recursos –redistribuidos por el Estado– a los pobres; se trata de inclinar la balanza a favor del capital.

Si bien los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido –durante los años 80– se señalan como ejemplos arquetípicos de gobiernos que llevaron adelante este tipo de medidas, los gobiernos de los países latinoamericanos de los 90 se vieron sujetos a fuertes presiones para realizar estas reformas pro-mercado. La ideología neoliberal prometía que la “liberalización” del mercado sería como romper las cadenas que estorbaban el funcionamiento económico y que, una vez rotas, las economías entrarían en una senda de crecimiento⁵. Resulta particularmente interesante –como indicador de la potencia y hegemonía del discurso– que toda vez que, ante las reformas de los gobiernos, la trayectoria económica no inicie esa senda de crecimiento, los sectores que defienden el discurso neoliberal redoblarán la apuesta: se dirá que serán necesarias más reformas para entrar en la buena senda... y así sucesivamente.

3 En la Operación Tormenta del Desierto mueren unos 200.000 iraquíes y 148 aliados, lo que da cuenta de “cierto desbalanceo de fuerzas”. Una década después, George Bush (hijo) ocuparía directamente Irak.

4 Hacia principios de los 90 se conformó lo que John Williamson denominó el Consenso de Washington, donde se precisaban los lineamientos de políticas que se buscaría imponer en América Latina. Argentina será el ejemplo paradigmático del “buen alumno” de Washington.

5 Aun suponiendo que se inicie una senda de crecimiento –cosa que difícilmente puede sostenerse– es preciso analizar, luego, quiénes son los beneficiarios del supuesto crecimiento.

Tal como se ha visto en el trabajo de Ezequiel Sirlin sobre la dictadura, este tipo de reformas habían tenido un antecedente directo durante la última dictadura militar. De todos modos, es preciso puntualizar que durante la década del 90 se radicalizarán estas reformas; de hecho, la lógica de los ajustes que tendrían lugar en Argentina para “seducir” a los mercados son prueba de un cambio radical en el modo de funcionamiento de la economía argentina.

En lugar de evaluar las políticas en virtud de su capacidad para atender las necesidades sociales, éstas serían evaluadas según su capacidad para satisfacer los requisitos del capital financiero. De algún modo, y salvando las distancias, la economía argentina volvería a un estadio pre-crisis del 30 a instancias de una fuerte dependencia del capital extranjero y escasa regulación del mercado.

La asociación entre neoliberalismo, corrupción y prácticas autoritarias no será patrimonio exclusivo de Argentina durante los 90; en Brasil y Ecuador son destituidos dos presidentes –Collor de Mello y Abdalá Bucaram– acusados por corrupción, mientras que en Perú, Alberto Fujimori da un autogolpe y disuelve el Parlamento en 1992. Estos elementos colorean el cariz que tomará la nueva política latinoamericana bajo el prisma neoliberal.

1.2.2 Los gobiernos de Menem y De la Rúa

Durante la campaña electoral, Menem expresa que su programa de gobierno se basaría en el “salarioazo” y la “revolución productiva” invocando la vieja iconografía peronista. Ya realizadas las elecciones y pautado el traspaso de mandato para diciembre, Menem asume el gobierno el 8 de julio de 1989, adelantándose cinco meses el paso de mando ante la crisis en que estaba sumido el gobierno de Alfonsín en medio del caos hiperinflacionario.

El gabinete de ministros menemista da cuenta de la voluntad del gobierno de alinear políticas con las intenciones de los sectores dominantes; Domingo Felipe Cavallo en Relaciones Exteriores y Álvaro Alsogaray como asesor presidencial, serán nombres que tranquilizarán al *establishment*. La designación del primer ministro de Economía, Miguel Roig, no resulta una señal que conforma a los acreedores externos que, tal como veremos, exigían medidas para atender sus demandas. Roig, tal como su inmediato sucesor Néstor Rapanelli⁶, provenía directamente de los cuadros gerenciales de Bunge y Born, uno de los grupos económicos locales. La nueva hiperinflación que se produce a los pocos meses de mandato menemista sella el golpe de timón de Menem radicalizando su giro hacia las recetas neoliberales.

6 Roig muere a los pocos días de asumir sus funciones.

Es así como, al poco tiempo de asumir el poder, Menem acuerda con los sectores dominantes las medidas de gobierno que estarán fuertemente alineadas con los intereses de estos grupos. El salarizado —medida que convocó a la clase obrera a las urnas— fue excluido de las prioridades.

En este contexto, las principales agrupaciones empresariales se acercaron al gobierno: el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio y la Unión Industrial Argentina (UIA). En cuanto a las organizaciones de trabajadores, tiene lugar la partición de la Confederación General de Trabajadores (CGT).

Se sancionan las leyes de Emergencia Económica (23.697) y la de Reforma del Estado (23.696). Estas leyes allanaron el camino para legislar por decreto —prescindiendo del Parlamento— y para privatizar las empresas públicas y reformular las bases del Estado. En medio de la crisis, estas medidas fueron aprobadas con carácter de urgencia y sin mayores debates. A su vez, a poco de ser designado presidente, Menem consigue la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de seis a nueve miembros. Logra así reforzar su poder político en la medida en que bajo los decretos de necesidad y urgencia sortea los debates parlamentarios y con la ampliación de los miembros de la corte tiene “mayoría automática”. El sistema representativo, que se basa en la división de poderes, quedaba así reducido al hiperpresidencialismo.

A los pocos días del levantamiento carapintado del 3 de diciembre de 1990 encabezado por Mohamed Alí Seineldín —dos años después de haber hecho lo propio durante el gobierno de Alfonsín—, Menem indulta a la cúpula militar que había sido encarcelada como resultado de los juicios por la desaparición y tortura de personas durante la última dictadura. El indulto alcanza a 120 militares y 22 ex guerrilleros.

En 1991 se sanciona la Ley de Convertibilidad, por medio de la cual se estableció que el Banco Central respaldaría con el 100 por ciento de reservas internacionales la emisión monetaria; esto es, que por cada peso emitido habría un dólar —u otro activo extranjero— en la caja fuerte del Central. Si bien no existen países desarrollados con este esquema cambiario desde hace décadas, se utilizó este patrón como forma de control estricto de la emisión de billetes⁷.

En 1993 tiene lugar el Pacto de Olivos entre los dos jerarcas partidarios —Menem y Alfonsín—, pacto del cual surge la reforma de la Constitución en

7 Vale apuntar que la convertibilidad amputó una de las posibilidades más extendidas de hacer política monetaria —la emisión—, la que quedó subordinada a los movimientos de capitales internacionales.

1994 y allana el camino para la reelección de Menem el 14 de mayo de 1995. Durante el gobierno menemista se conocerán flagrantes casos de corrupción y escándalo, entre los que se pueden citar los siguientes: María Julia Alsogaray y Roberto Dromi son denunciados por corrupción en el traspaso de empresas públicas. Monser Al Kasar, empresario sirio acusado de tráfico internacional de armas y drogas, consiguió pasaporte argentino por su relación con altos funcionarios del gobierno en 1992. Es asesinado el periodista José Luis Cabezas, y el empresario Alfredo Yabrán —vinculado al gobierno— se ve implicado en el mismo. Yabrán se suicidaría —aunque aún hoy hay quien duda de ello— tiempo después. Terence Todman —embajador norteamericano— denuncia que Emir Yoma le pide dinero a la empresa Swift para agilizar un trámite. Amira Yoma —cuñada y directora de Audiencias del presidente— es denunciada por transporte de dinero del narcotráfico. La justicia investiga coimas en el contrato entre IBM y el Banco Nación, la mafia del oro y la venta ilegal de armas. Esta venta de armas se destina a Ecuador, país que en 1995 estaba en guerra con Perú, donde Argentina tenía que oficiar de árbitro para que los países encontraran la paz; también se venden armas a Croacia. Los líderes sindicales de gremios como La Fraternidad o FOETRA —ferroviarios y telefónicos— son sospechados de haber sido comprados para permitir que se privaticen las empresas públicas desprotegiendo a los trabajadores. Cuestionado por el Concejo Deliberante y sospechado de corrupción, renuncia Carlos Grosso a la intendencia porteña, por entonces designado por el presidente. Tienen lugar acontecimientos que concentran la atención mediática en la figura de Menem: aparece como protagonista en eventos deportivos, vinculado a personajes de la farándula, su divorcio se da en medio de un escándalo del que su ex mujer Zulema Yoma es desalojada de la quinta presidencial con la policía, recorre con una Ferrari “obsequiada”, en muy poco tiempo el trayecto Buenos Aires-Pinamar, muere su hijo bajo la sospecha de ser asesinado.

Por otro lado, los indicadores económicos acusaron, sobre todo a principios de la década, una fuerte recuperación para luego estancarse y deteriorarse crecientemente. Desde que el Plan de Convertibilidad consiguió que descendiera el ritmo de aumento de los precios, se generó un repunte del consumo muy significativo, sobre todo a partir de la recuperación del mercado de crédito.

Sin embargo, detrás del auge del crecimiento comenzaban a verse los límites y la contracara del modelo económico. Una crisis iniciada en México hacia fines de 1994, donde existía un plan económico similar al argentino, inició lo que se conoció como el Efecto Tequila. Esta crisis rompió con el ritmo ascendente de

crecimiento de la producción y mostró la vulnerabilidad de la economía argentina a los problemas internacionales y volvió a marcar la dependencia en relación con el capital financiero⁸.

El proceso de desindustrialización –y su consecuente destrucción de empleos– junto con los despidos asociados a las privatizaciones tuvieron un efecto negativo y trajeron aparejado un mayor deterioro social. El desempleo se disparó de un 8 por ciento en 1989 a un 18 por ciento en 1995 y terminó la década con un 14,5 por ciento. Si bien el Producto Bruto Interno (PBI) se duplicó entre 1990 y 1999, la economía destruía empleos. Esta aparente contradicción se explica porque los rubros que más crecieron fueron aquellos con menor capacidad para generar empleo; mientras que aquellos que empleaban a gran cantidad de personas –como la industria textil, por ejemplo– se encontraron expuestos a un fuerte ajuste.

En un marco de relativo desprestigio público y de crisis económica se genera una oposición política que agrupa al Partido Radical con el Frepaso (el que nuclea sectores disidentes que provienen fundamentalmente del mismo peronismo). Las consignas de la Alianza –nombre que recibió la fórmula que llegaría al poder en 1999– se centraron en combatir a la corrupción y manejar prudentemente la economía.

Habiendo asumido el gobierno la fórmula presidencial De la Rúa-Álvarez, las condiciones económicas no cambiaron, en virtud de la vigencia de los mismos pilares sobre los que se sostenía el modelo económico, particularmente una fuerte dependencia del capital financiero.

No cambió el estilo de política mediática que había inaugurado Menem⁹; ni tampoco disminuyeron los casos de corrupción; por ejemplo, cabe señalar el escándalo por las coimas en el Senado para sancionar la nueva ley laboral que significó la renuncia del vicepresidente Carlos *Chacho* Álvarez.

Hacia fines del año 2001, las tensiones se hicieron insostenibles y desencadenaron la renuncia del presidente. Públicamente las medidas que anunciaba el gobierno insistían en el ajuste para sostener la convertibilidad, mientras que los indicadores precipitaban la catástrofe del “uno a uno”. Si bien para comprender la crisis pueden apuntarse indicadores tales como la confluencia de altos niveles de endeudamiento externo con la disminución de las reservas del Banco Central, lo más significativo para entender la caída del gobierno fue un

8 Desde el BCRA y los voceros oficiales se vitoreaba la presencia de bancos extranjeros en el mercado local puesto que serían quienes traerían fondos del exterior ante problemas locales. La crisis del Tequila comenzó a sugerir lo contrario, que luego se corroboraría con la crisis de 2001 y la fuga de divisas por medio de estos bancos.

9 A modo de ejemplo, los hijos del nuevo presidente también se mezclaron con personajes de la farándula.

cambio en las alianzas dentro de los sectores dominantes y un deterioro creciente en la condición económica de los sectores medios y populares. Las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 representaron una fuerte impugnación social a la dinámica económica, social y política de la década del 90. En lo que sigue de este trabajo nos dedicaremos a analizar las características del régimen de acumulación, la forma de Estado y el régimen político del período que se inicia en 1989 y finaliza en 2001, con la pretensión de explicar el curso de los acontecimientos que hemos introducido hasta aquí. Se trata, como decíamos antes, de comprender la dinámica social, de explicar por qué son posibles ciertas medidas, qué consecuencias traen aparejadas, cómo se deciden, a quién benefician y a quién perjudican.

2. Crisis y reconfiguración del régimen de acumulación de valorización financiera

Cuanto más reaccionaria es una clase dirigente, más evidente resulta que el orden social sobre el cual reina se transforma en un impedimento para la liberación humana, y más se aprecia que su ideología está contaminada por el antiintelectualismo, el irracionalismo y la superstición.

Paul Baran, *El compromiso del intelectual*

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Artículo 14 bis de la Constitución nacional

La década del 90 significó la consolidación del régimen de acumulación de la valorización financiera que se encontraba vigente en el país desde 1976. En efecto, la última dictadura había alterado drásticamente los pilares sobre los que se estaba industrializando —traumática y conflictivamente— la economía argentina desde 1930 en el marco de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

El proceso de desindustrialización resultó funcional al disciplinamiento social que emprendió la dictadura y calaría hondo en la estructura económica. Este

proceso, combinado con la pesada carga que significaría la deuda externa, implicó un nuevo tipo de inserción internacional del capitalismo argentino, que dio como resultado un reforzamiento de la dependencia respecto de los países centrales. Ahora, no sólo se trataba de dependencia tecnológica, en la medida en que la innovación en la producción de bienes de alto contenido tecnológico —como las computadoras, por ejemplo— no se producía en el país, sino también de dependencia financiera.

Este último tipo de dependencia tiene consecuencias distintas a las que provoca la primera en el funcionamiento económico. En el caso de la dependencia tecnológica, los países latinoamericanos, africanos, buena parte de los asiáticos, etc. —países subdesarrollados que suman holgadamente más de las dos terceras partes de la población y del territorio mundial— se ven condicionados por la dinámica del comercio internacional en la medida en que producen materias primas y bienes de bajo contenido tecnológico. En cambio, el condicionamiento financiero opera de manera directa sobre los gobiernos y fuerza transformaciones sobre los aparatos del Estado y productivos.

De este modo, la dependencia tecnológica aparecía como un obstáculo que resultaba posible sortear si los países subdesarrollados conseguían modernizar su aparato productivo. El principal escollo se daba en el marco productivo, del comercio y la competencia con las grandes corporaciones internacionales, donde los ciclos económicos de *stop and go* eran el emergente del problema¹⁰. Precisamente éste fue el gran desafío de la ISI y los esfuerzos de los Estados nacionales iban en esa dirección. Los primeros gobiernos peronistas o el desarrollismo de Frondizi son ejemplos de este tipo de intentos. Se trataba, fundamentalmente, de producir internamente aquello que era importado.

Con la dependencia financiera, tal como veremos en este apartado, la presión del capital financiero es capaz de decidir el signo y contenido de las leyes, así como de conseguir la capitulación de un gobierno o de diseñar (imponer) directamente la política económica de un país. Las decisiones productivas quedan fuertemente condicionadas por las exigencias financieras y esto, a su vez, retroalimenta la dependencia tecnológica al tiempo que los Estados nacionales pierden autonomía relativa.

De este modo, una de las características distintivas del régimen de acumulación de la valorización financiera consiste en que los objetivos de desarrollo industrial quedan subordinados a las obligaciones de pago de los compromisos financieros. Si analizamos la evolución de la producción argentina, vemos que a lo largo de las

10 Véase, en este mismo libro, “La ‘Revolución Argentina’ y la crisis de la sociedad posperonista”, por Sergio Nicanoff y Sebastián Rodríguez.

últimas tres décadas la industria se encuentra virtualmente estancada, corroborando lo que estamos diciendo. Incluso los rubros industriales que crecieron son aquellos que menos contribuyen al empleo, como la producción de acero y aluminio primario, por ejemplo. El producto bruto durante los 90 –tal como señalamos antes– creció traccionado por los aumentos en la producción de bienes agroganaderos, pesca, petróleo, minerales y servicios; sin más política económica que la disminución de funciones desempeñadas por el Estado.

La valorización financiera, aunque parezca contradictorio, “desatiende” aquello de lo que se nutre: el trabajo y la producción. Para ser más precisos digamos, en lugar de “desatiende”, que fuerza transformaciones en el aparato productivo: el pasaje de la producción fordista a la posfordista –que se analizan más adelante– da cuenta de este proceso. Pues es contradictorio; sobre todo en la medida en que expulsa trabajo y disminuye la producción. Vale decir que lo que a nosotros nos interesa precisar son las implicancias que la hegemonía del capital financiero tiene para el conjunto de la sociedad argentina; en particular para los sectores mayoritarios de la población (si crea empleo o no, si aumenta el bienestar o no, etc.).

2.1 Deuda externa, hiperinflación y neoliberalismo

Cada año, un nuevo déficit. Cada cuatro o cinco años, un nuevo empréstito. Y cada nuevo empréstito, una nueva ocasión de estafar a un Estado mantenido artificialmente al borde de la bancarrota.

Karl Marx, *Las luchas de clases en Francia*, Buenos Aires, Lautaro, 1946

Los débiles pilares que sostenían al gobierno radical de Raúl Alfonsín se desmoronaron cuando, en febrero de 1989, se desata el golpe de mercado que desencadena la hiperinflación. Esta escalada descontrolada de precios significaba el fin del Plan Primavera y del gobierno radical.

El desencadenamiento de “la híper” se da en el marco del conflicto distributivo entre distintas fracciones de los sectores dominantes. Ante la cesación de pagos de deuda externa, el capital financiero inicia una corrida cambiaria como forma de presionar al gobierno, no sólo para que retome los pagos de deuda sino también para que lleve adelante una serie de transformaciones en el funcionamiento global del régimen de acumulación, la forma de Estado e –incluso– del régimen político¹¹.

11 Véase Eduardo Basualdo, *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes-Flacso-IDEP, 2001.

En efecto, desde mediados del año 1988 el gobierno se encontraba en cesación de pagos ante los acreedores externos. Mientras las restantes fracciones de los sectores dominantes –los grupos económicos locales y los conglomerados extranjeros¹²– continuaban su ritmo de acumulación, el capital financiero era dejado a un lado de las prioridades del gobierno. En un contexto de alta inflación, “los bancos extranjeros inician, luego de las reiteradas advertencias del FMI al gobierno argentino para que retomara los pagos a los bancos acreedores, la “corrida” cambiaria de febrero de 1989, desatando la crisis hiperinflacionaria”¹³.

De hecho, el gobierno radical había privilegiado las demandas de los grupos económicos y los conglomerados extranjeros mediante diferentes mecanismos de traspaso de recursos, tales como regímenes de subsidios o exenciones impositivas, contribuyendo a saciar el apetito de recursos de estos sectores. Adicionalmente, vale decir que los grupos económicos locales contaban con una importante masa de dólares que habían fugado al exterior y que operaba tanto como pieza de negociación con el gobierno como de respaldo (o “colchón”). Estos dólares en el exterior –propiedad de los grupos económicos– eran la contraparte de casi la totalidad de la deuda externa del gobierno originada durante la última dictadura militar; eran (son) recursos que el Estado traspasó a los grupos económicos al estatizar su deuda.

En cuanto al resto de la sociedad –fundamentalmente los sectores medios y populares– es preciso apuntar que la hiperinflación impuso una sensación de pánico generalizado y dejó instalada la idea de fracaso económico rotundo del gobierno radical. La sensación de pánico social radicaba en el hecho de que la vida misma está puesta en juego cuando se pierden los parámetros de los precios de los bienes de la canasta básica. En un mundo donde a cambio de dinero se consiguen los bienes necesarios para la vida, cuando el dinero deja de funcionar como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor durante la hiperinflación, queda jaqueada la reproducción social de la población. Obviamente, este jaqueo es mayor cuanto más pobre es el estrato social considerado.

Ante la magnitud del problema, la receta neoliberal –a la medida de los sectores dominantes y, dentro de éstos, del capital financiero– propuso una salida simple y con un discurso convincente: para derrotar a la inflación había que

12 Para definirlos de manera sencilla, digamos que los acreedores externos son fundamentalmente bancos extranjeros que tienen deuda del gobierno; los grupos económicos son propietarios de diferentes empresas argentinas que operan en distintos rubros y los conglomerados extranjeros son las empresas extranjeras radicadas en el país.

13 Eduardo Basualdo, *op. cit.*, p. 52.

reducir el tamaño del Estado¹⁴; se utilizó como muestra de la incapacidad histórica de otras medidas y legitimó la “cirugía mayor” ante los sectores de menores recursos que, desesperados, estuvieron dispuestos a aceptar –e incluso apoyar– la receta neoliberal. Por su parte, a los sectores dominantes –grupos económicos, conglomerados extranjeros y acreedores externos– les tocaría una suculenta porción de la venta de las empresas públicas, cuestión que analizaremos más adelante.

Lo que aquí nos interesa puntualizar es que el período hiperinflacionario significó un punto de quiebre; resultó un mecanismo de disciplinamiento tanto para la sociedad como para las autoridades políticas. En efecto, la misma hiper que desplazó a Alfonsín “rebrotaría” –corrida cambiaría mediante– en los primeros meses del gobierno de Menem. Recién será controlada cuando Menem emprenda la reforma del Estado y enajene las empresas públicas, medidas que reclamaban los acreedores externos.

Incluso, tal como señala Eduardo Basualdo, la hiperinflación justificó las medidas que vendrían luego bajo la forma de conjunto indisociado, es decir, el Plan de Convertibilidad incluyó la reforma del Estado bajo el prisma neoliberal. “El Plan de Convertibilidad está conformado tanto por el nuevo esquema cambiario y monetario como por las reformas estructurales cuando, en realidad, se trata de dos políticas económicas que no se superponen entre sí, al menos desde el punto de vista del funcionamiento económico”. La caja de conversión –la convertibilidad de un peso por un dólar– está destinada a estabilizar el nivel de precios, mientras que la reforma del Estado responde “a la intención de satisfacer los diferentes intereses de las distintas fracciones que integran los sectores dominantes”¹⁵.

También nos interesa apuntar que a nivel del discurso público se impuso una suerte de chantaje: a cualquiera que quiera algo diferente de reformar el Estado, lo espera la catástrofe. Si se llevan adelante las “recetas que piden los mercados”, vendrán capitales, crecerá la economía y el empleo. Si no se llevan adelante: hiperinflación y caos social. La difusión y extensión del discurso neoliberal es preciso analizarla también desde su capacidad de producción simbólica, es decir, desde la capacidad de oponer a complejos problemas sociales y económi-

14 También la lucha contra la inflación había sido esgrimida como argumento por Martínez de Hoz durante la última dictadura para imponer la apertura financiera y comercial. Véase Jorge Schvarzer, *Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y 2000*, Buenos Aires, AZ Editora, 1998, p. 24.

15 Véase Eduardo Basualdo, “Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y crisis de la valorización financiera”, *Revista Realidad Económica*, N° 200, IADE, 2003, p. 44.

cos, soluciones unívocas: todo se resolvería a partir de reducir la intervención del Estado. Mediante efectivas campañas de propaganda durante fines de los años 80, el terreno quedó allanado para cuando Menem asumió el gobierno. En buena medida, y tal como había ocurrido durante la dictadura en relación con la “guerra nocturna” apuntada por Sirlin, buena parte de la sociedad absorbió la ideología neoliberal con una actitud pasiva y estuvo dispuesta a acompañar las transformaciones que sobrevendrían.

El poderoso capital financiero había logrado su objetivo: el gobierno de Menem inmediatamente puso en marcha las llamadas “reformas estructurales” (venta de empresas para pagar deuda, liberalización económica, etc.).

2.2 La política económica de los 90

Tal como mencionamos anteriormente, el primer equipo económico estaba encabezado por ex funcionarios de un grupo económico (Bunge y Born). El plan puesto en funcionamiento por éstos —denominado BB— fracasa a seis meses de iniciado el mandato de Menem ante la segunda corrida cambiaria que conduce al mencionado rebrote hiperinflacionario que sufre el gobierno.

La segunda etapa se inicia el 18 de diciembre de 1989 cuando es nombrado ministro de Economía Antonio Erman González, quien había desempeñado esa función en la provincia de La Rioja. El plan Erman I fracasa al poco tiempo y con el Erman II en enero del 90 se capturan compulsivamente los plazos fijos, cajas de ahorro y deuda interna del Estado, a cambio de títulos públicos en dólares a 10 años¹⁶. El plan Erman III reafirmó el rumbo neoliberal reformulando las bases en las que operaba el capitalismo argentino. En este sentido Mario Rapoport señala que se dispuso un severo control en las compras del Estado, se redujo el personal del sector público, se incrementó la presión tributaria, se acortaron los plazos de pago de los impuestos, y se inició el proceso de privatizaciones¹⁷. Estas medidas significaron una fuerte recesión y aumento de las exportaciones, baja de las importaciones y saldo positivo de divisas. A instancias del aumento de la emisión y recrudecimiento de la inflación, renuncia González.

Sin embargo, buena parte de las condiciones para apuntalar el redireccionamiento del régimen de acumulación de la valorización financiera ya habían cobrado lugar: saneó cuentas públicas, mantuvo superávit comercial, liberalizó merca-

16 Este fenómeno de captura compulsiva de los depósitos se repetiría nuevamente hacia el final de la década con el “corralito”.

17 Mario Rapoport: *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)*, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2000, p. 971.

do de cambios, renegoció deuda externa y puso en marcha el proceso privatizador. Una vez que se implementan los cambios exigidos por las distintas fracciones de los sectores dominantes, se renegocia la deuda externa en el Plan Brady y comienza un nuevo ciclo de endeudamiento externo¹⁸.

La tercera etapa se inicia con la llegada de Domingo Felipe Cavallo al ministerio. Su Plan de Convertibilidad se estructuró en torno a tres ejes:

1. La Ley de Convertibilidad con tipo de cambio fijo.
2. La apertura comercial para disciplinar al sector privado
3. La Reforma del Estado.

Vale decir que los primeros años de la convertibilidad parecen corroborar la veracidad del discurso neoliberal, en la medida en que luego de la reforma del Estado el capitalismo argentino mantuvo indicadores satisfactorios de crecimiento con baja inflación hasta principios de 1995. Será necesario analizar desde una perspectiva de largo plazo para encontrar que, siguiendo a Hugo Nochteff, “las mayores tasas de crecimiento se registraron respecto de 1990, el año de PBI más bajo –junto con 1989– desde 1980, y el de PBI per cápita más bajo desde 1969, entre 1990 y 1992, la tasa de crecimiento del PBI fue de 18,3%, o sea un promedio anual de 9,2%, muy superior al 6,5% de 1990 a 1997. En otras palabras, buena parte del crecimiento no fue sino la recuperación de las capacidades ociosas de 1990”¹⁹.

La apertura de la economía –combinada con el auge del consumo– significó un creciente flujo de importaciones mayor al de exportaciones; esto se consolidó cuando, hacia fines de la década, el tipo de cambio de “un peso-un dólar” acumulaba un persistente retraso. La suba en la cantidad de remesas (dólares) giradas al exterior, a su vez, comenzaron a “secar” la economía de dólares que resultaban imprescindibles para el sostenimiento de ese tipo de cambio.

A medida que los sectores dominantes visualizan estas tendencias, *pari passu*, aumenta la toma de deuda privada y deciden fugar estos capitales, pues ante los riesgos de devaluación, los “dueños del dinero” conocían la conveniencia de tener los dólares fuera del país. Una vez más, la valorización financiera es elegida por sobre la valorización productiva.

Otro factor que resultó crecientemente explosivo para la dinámica económica fue el aumento de la deuda contraída por el gobierno y el peso que el pago de

18 Ciclo que duró toda la década y que, ulteriormente, finalizó con la conocida fuga de capitales al exterior y nuevo aumento de la deuda pública hacia 2001.

19 Hugo Nochteff: “La política económica en la Argentina de los noventa. Una mirada de conjunto”, *Época. Revista Argentina de Economía Política*, año 1, N° 1, diciembre de 1999, p. 27.

los intereses —con tasas de interés crecientes— representaba para el presupuesto público. Esta tendencia impondría sucesivos ajustes fiscales para dar “señales” a los mercados de que se pagarían los intereses.

Ciertamente, ni los cambios en el Ministerio de Economía durante el gobierno de Menem —en agosto de 1996 Domingo Cavallo era reemplazado por Roque Fernández luego de permanecer más de cinco años al frente de ese ministerio— ni el cambio de gobierno —de Menem por De la Rúa— representaron alteración alguna en los principales ejes de la política económica.

Si bien todos los candidatos presidenciales se comprometían a mantener el uno a uno, ninguno ignoraba el atraso relativo del tipo de cambio y la conveniencia, desde un punto de vista cambiario, de la devaluación. Pero esta conveniencia chocaba con la clara noción de que aquel candidato que en su plataforma electoral hablara de salir de la convertibilidad, se vería inmediatamente excluido de las posibilidades de acceder al gobierno. Pues el terror del electorado a la hiperinflación —agitado por el capital financiero— resultaba funcional a la continuidad del modelo. Y así, en 1999, en las urnas, la población eligió continuar con el modelo.

Junto con Fernando de la Rúa como presidente, José Luis Machinea asumió como ministro y, al cabo de poco más de un año, fue suplantado por Ricardo López Murphy, quien no alcanzó a durar más de una quincena en el cargo ya que luego de anunciar un brutal ajuste fue inmediatamente desplazado. De la Rúa arribó a la conclusión de que sólo el “padre” de la convertibilidad, Domingo Cavallo, podría salvar a la criatura; a pesar de que durante la campaña electoral De la Rúa había procurado tomar distancia del menemismo, debía acudir a la misma persona que había sido presidente del Banco Central durante la dictadura y ministro durante cinco años en el gobierno de Menem²⁰.

Nuevamente en un marco de desesperación y sin mayores debates en el Congreso, a pedido de De la Rúa y Cavallo, se sancionó, en abril del 2001, la ley 25.414, que se conoció con el nombre de “Superpoderes”, por medio de la cual el Congreso cedía facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y, a través de éste, al capital financiero.

20 En la larga lista de ministros de Economía que tuvo Argentina, solamente Víctor Molina —ministro de Economía de Alvear entre 1923 y 1928— y Ramón Antonio Cereijo —ministro de Hacienda de Perón entre 1946 y 1952— habían llegado a permanecer cinco años (o más) en el cargo. Cabe preguntarse, entonces, en una economía tan fluctuante como la argentina, qué relación existe entre la llamativa continuidad de Martínez de Hoz y Cavallo en sus cargos (seis y cinco años respectivamente) y los capitales financieros, locales y extranjeros. En el caso de Cavallo perduró en tres escenarios aparentemente disímiles: un gobierno militar donde alcanzó a presidir el Banco Central, y dos gobiernos democráticos donde presidió el Ministerio de Economía —uno peronista y otro radical—.

La rápida sanción de la Ley de Déficit Cero –en julio de 2001– fue una manera de redoblar la apuesta para mantener la convertibilidad en vigencia. Se estipulaba que, luego de pagar los intereses de deuda al 100 por ciento de su valor, se ajustarían los sueldos y demás compras del Estado según se dispusiera de fondos. El resultado fue un ajuste del 13 por ciento sobre los sueldos de los empleados públicos; se pagaron los intereses al precio de disminuir el salario de los trabajadores.

Resulta útil detenernos un instante a visualizar cómo, a través del presupuesto público, se establecen las prioridades del gobierno. Pues la norma era clara: primero cobran los acreedores y luego se aplica el ajuste al resto de los componentes que atiende el gobierno en su presupuesto, sin discriminar si se trata de salud, educación, jubilaciones o planes de vivienda. Esto es hegemonía, es la capacidad de articular al conjunto de los sectores que conforman una sociedad en un proyecto económico, político y social.

Los acontecimientos económicos que siguieron hasta el fin de la convertibilidad y del gobierno de De la Rúa son conocidos: primero el intento de canjear la deuda para extender los plazos en junio de 2001 –conocido como el “Megacanje”–; luego, en agosto, la Ley de Intangibilidad de los depósitos que, por su carácter, no hizo más que despertar el pánico financiero, pues aclaraba que los depósitos no se podían incautar, ni alterar la moneda de origen. En diciembre del mismo año se establece el “corralito bancario” por decreto –superpoderes mediante– por medio del cual se restringía el retiro de fondos del sistema bancario. Luego llegarían las jornadas del 19 y 20 de diciembre que acabarían con el gobierno de De la Rúa.

2.3 La relación salarial: desindustrialización, posfordismo periférico y baja salarial

Las características que asumió la relación salarial²¹ durante los años 90 se inscriben dentro del mencionado proceso de desindustrialización. En efecto, la destrucción de gran cantidad de empleos limitó fuertemente la capacidad de acción por parte de los trabajadores y consolidó un pasaje de ingresos del trabajo al capital. A su vez, la privatización de empresas públicas –con los “retiros voluntarios” de trabajadores– contribuyó a reforzar la tendencia alcista en la tasa y número de desempleados.

21 La relación salarial se refiere al conjunto de regulaciones que alcanzan al trabajo y el tipo de remuneración que reciben los trabajadores. Si bien da cuenta básicamente de la relación entre el capital y el trabajo, también se vincula con la forma en que se relacionan las empresas.

Sin embargo, no se trató solamente de cambios en la cantidad de empleos —ni siquiera en el nivel de los salarios— que genera la economía; fueron reformulados términos más sustanciales de la relación entre el capital y el trabajo. Se sancionaron nuevas leyes que regulaban al trabajo (24.013 y 24.028 de Empleo y Accidentes de Trabajo, respectivamente) por medio de las cuales los asalariados cedieron derechos que habían sido conseguidos décadas atrás —en su mayoría durante el primer peronismo— y que, a instancias de su obstinada defensa, aún conservaban. Sin embargo, la nueva ley legalizaba la contratación temporaria de mano de obra, limitaba el derecho de huelga y reducía las indemnizaciones, entre otras modificaciones.

Este proceso se dio en consonancia con las tendencias que viene acusando el capitalismo desde los años 70, pues tuvo lugar una reformulación del modelo industrial a nivel internacional. Esta nueva relación salarial será conocida con el nombre de posfordismo o toyotismo. El avance del neoliberalismo en el plano ideológico fue acompañado por un retroceso de los derechos sociales de los trabajadores en favor del capital.

En general, el posfordismo consistió en una serie de cambios en la relación intracapitalista —entre empresas— por un lado y, por otro, entre el capital y el trabajo. En cuanto a la relación intracapitalista, vale decir que empresas de gran tamaño y avance tecnológico pasan a relacionarse de manera “flexible” con empresas proveedoras de menor tamaño. Para decirlo de otro modo, se desarrolla un esquema donde las grandes empresas tercerizan parte de su producción y se la compran a pequeñas y medianas empresas que pasan a proveerles insumos. El análisis de algunos ejemplos contribuirá a la comprensión del concepto de posfordismo. Durante la vigencia de YPF como empresa petrolera estatal hasta principios de los 90, la exploración, explotación y mantenimiento de los pozos de petróleo, en términos generales, eran realizados por distintas unidades de la empresa. Cuando se privatiza, la empresa “acuerda” con un gran número de trabajadores que dejen de formar parte de ella mediante planes de “retiro voluntario”; pero también acuerda que organicen pequeñas cooperativas para prestar servicios a la empresa. De este modo, estas nuevas empresas de menor tamaño formadas por ex empleados de YPF pasaron a vender servicios a la petrolera, como el servicio de mantenimiento de los pozos, la perforación, y demás. A esto llamamos tercerización. Otro ejemplo se puede observar con la privatización de ENTEL, la empresa de teléfonos del Estado. Luego de la privatización, la empresa pasó a contratar externamente a obreros para el cavado de pozos, la atención telefónica a clientes, etcétera. También esto sucedió dentro de las grandes empresas privadas; por ejemplo, cuando despidieron a empleados de limpieza, seguridad, reparación y cocina para contratar externamente nuevas empresas proveedoras de limpieza, seguridad, servicios de reparación, comida, etc.

El cambio es muy significativo, en la medida en que los trabajadores de las pe-

queñas empresas que proveen a las grandes, dejan de estar alcanzados por la protección de los gremios y las leyes laborales para estar sujetos a las fluctuaciones de las compras de las grandes empresas. Por lo tanto, este cambio en la configuración intracapitalista termina siendo un cambio en la relación capital-trabajo.

A instancias de la reconfiguración productiva se incrementó la precarización laboral, en la medida en que la mayor parte de los trabajadores se vieron obligados a aceptar las nuevas condiciones de trabajo. Y a su vez, el nivel creciente de desocupados presionó sobre los ocupados para aceptar estas condiciones de trabajo más precarizadas²².

Las razones que, hacia principios de la década, se esbozaron públicamente para cambiar la legislación laboral señalaban que las reformas y la “flexibilización” traerían aparejado un aumento en el empleo. Así formulados los principios legitimadores de raigambre neoliberal, la reforma de la Ley de Empleos a fines de 1991 terminó beneficiando fundamentalmente a las grandes empresas; puesto que los empleados de empresas de menor tamaño generalmente se encuentran flexibilizados *ipso facto*.

Basualdo —citando a Santacangelo y Schorr— apunta lo siguiente: “durante la década pasada aproximadamente un 25% de los trabajadores ocupados en las empresas de menor tamaño gozó de todos los beneficios sociales, lo cual contrasta marcadamente con lo que sucede en el nivel de las grandes y muy grandes firmas (donde dicha proporción siempre fue superior al 80% del total de asalariados empleados en las mismas)”²³. Por ello el autor argumenta que la ley laboral no se trata de una transferencia de ingresos al empresariado en su conjunto, sino a las grandes firmas.

En cuanto a las estrategias del movimiento obrero organizado en gremios frente a los cambios que se introdujeron en los 90, siguiendo la clasificación que propone Victoria Murillo²⁴, puede decirse que existieron tres tipos de estrategias: la resistencia, la subordinación y la supervivencia organizativa.

La resistencia, o línea dura del sindicalismo nucleada en la Central de Traba-

22 Adicionalmente, si se considera la condición de dependencia del capitalismo argentino, encontramos que las empresas transnacionales que implementaban modalidades posfordistas de organización en sus países de origen —el ejemplo paradigmático es la Toyota en Japón— tienden a expulsar hacia los países periféricos las actividades de menor especialización relativa donde existen, por lo general, peores condiciones de trabajo. Es decir, que las grandes empresas en países desarrollados tercerizan su producción en los países periféricos.

23 Eduardo Basualdo, *op. cit.*, 2003, p. 60.

24 Victoria Murillo: “La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la primera presidencia Menem”, *Desarrollo Económico*, vol. 37, N° 147, octubre/diciembre de 1997.

jadores Argentinos (CTA) –central escindida de la CGT luego de disidencias en 1991–, entabló acciones de lucha contra las reformas impulsadas por el gobierno. De todos modos, vale decir que esta estrategia fue minoritaria y generalmente perdió los conflictos. La estrategia de subordinación estuvo asociada a la cooptación de los sindicatos –mayoritariamente de la CGT– y los dirigentes mediante el otorgamiento de beneficios puntuales, por ejemplo, la posibilidad de adquirir y gestionar acciones de las empresas privatizadas. Fue la parte de la cúpula sindical “comprada” por el poder.

Por último, la estrategia de supervivencia organizativa estuvo asociada a los gremios que eligieron negociar con el gobierno reformas institucionales por medio de las cuales; por ejemplo, pasaron a gerenciar obras sociales. Aumentaron los recursos que manejaban, ya no por un número mayor de afiliados, sino porque montaron verdaderas empresas prestadoras de servicios, desvirtuando su razón de ser (organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores). En síntesis, a instancias de la pasividad y cooptación sindical, el efecto de la desocupación y la precarización laboral reforzaron el deterioro de los sectores asalariados. El desempleo desempeñó un rol funcional al disciplinamiento social, tal como había sido la represión durante la dictadura y la hiperinflación hacia fines de los años 80.

La contracara material de este proceso de desocupación creciente puede observarse siguiendo la participación de los sueldos en el PBI. Ésta se redujo de un 35 por ciento en el 1991 a un 26,6 por ciento en 2001²⁵. Esto significa un traspaso claro de recursos de los asalariados a las empresas.

2.4 La disputa por el aumento de las ganancias entre las distintas fracciones del capital

*Las penas y las vaquitas
se van por la misma senda
las penas son de nosotros
Las vaquitas son ajenas
Atahualpa Yupanqui, El arriero*

Tal como es de esperar, las estrategias y modalidades de acumulación por parte de las distintas fracciones del capital se transforman a lo largo del tiempo. Y las influencias que las diferentes fracciones tienen sobre el Estado contribuyen a

²⁵ Eduardo Basualdo, *op. cit.*, 2003.

moldear distintos escenarios. Por ejemplo, en la gestación de la deuda externa durante la última dictadura, claramente, la reforma financiera fue una medida conseguida e impulsada fundamentalmente por el capital financiero. Estas “reglas de juego” reconfiguraron buena parte de la estructura económica, moldeando el comportamiento de las demás fracciones del capital con las que se disputaron porciones del excedente económico.

En este marco, desde la perspectiva de un país dependiente, será importante establecer precisiones en cuanto a cómo se han reconfigurado las distintas fracciones de capital local y su relación con el capital internacional, tanto productivo como financiero. En otras palabras, podemos decir que analizaremos cómo respondió durante la década del 90 cada una de las fracciones capitalistas según sean grupos económicos²⁶, conglomerados externos, acreedores y entidades financieras, o pequeñas y medianas empresas (pymes).

La década del 90, en este sentido, se caracterizó por una dinámica económica que moldeó un proceso de concentración y centralización de capital, así como de extranjerización²⁷. Las nuevas condiciones generadas a principios de los 90 implicaron un clima propicio para que los acreedores externos, los grupos económicos y los conglomerados extranjeros articulen sus intereses mediante la participación en el proceso de privatizaciones. En palabras de Martín Abeles, las privatizaciones serán la “prenda de paz” de las distintas fracciones del capital²⁸. A los acreedores les permitiría reevaluar sus títulos, mientras que los grupos económicos y los conglomerados extranjeros podrían participar directamente en las nuevas actividades.

En el marco de desindustrialización que se daba en las ramas de actividad donde los pequeños empresarios no conseguían protección del Estado –por ejemplo, la industria textil– las fracciones del capital de mayor tamaño incrementaron

26 Algunos de los grupos económicos locales son: Bunge y Born, Macri-SOCMA, Perez Compagnon, Rocca-Techint, Astra-Grueneisen, Soldati, Zorraquín, Massuh, Fortabat, Acevedo-Acindar, Bemberg, Roggio y Richards, entre otros.

27 La concentración implica que dentro de una rama de actividad –por ejemplo el comercio minorista– desaparezcan las unidades de menor tamaño –siguiendo con el ejemplo, los almacenes– y se consoliden unidades económicas de mayor tamaño que absorben la porción de mercado de las pequeñas (en nuestro caso se trataría de los hipermercados). La centralización tiene lugar cuando empresas de distintas ramas de actividad pasan a pertenecer a un mismo dueño, por ejemplo, cuando el grupo Fortabat tiene empresas en ramas de actividad que van desde el cemento hasta los servicios de trenes de carga. La extranjerización corresponde a la venta de empresas locales a propietarios extranjeros.

28 Martín Abeles: “El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa. ¿Reforma estructural o consolidación hegemónica?”, *Época. Revista Argentina de Economía Política*, año 1, N° 1, diciembre de 1999.

su participación en la economía, tal como puede observarse siguiendo su trayectoria. Basualdo (2003) compara la evolución del PBI y las ventas de las empresas de mayor tamaño; allí se observa claramente la centralización del capital, pues mientras entre 1991 y 2001 la producción (el PBI) sólo subió un 31 por ciento, las ventas de las 200 empresas de mayor tamaño aumentaron en un 124 por ciento. Dentro de este grupo se encuentran las empresas de los grupos económicos y los conglomerados extranjeros; y entre estos últimos las empresas privatizadas que, al amparo de marcos regulatorios a su medida, aumentaron sus ingresos de manera considerable²⁹.

Las privatizaciones, en efecto, significaron una pieza clave en la marcha del acuerdo entre las distintas fracciones de los sectores dominantes, pues implicaron un significativo aumento de ganancias patrimoniales para los grupos económicos locales por dos motivos: por un lado, adquirieron las empresas a bajos precios a cambio de capitalización de bonos de deuda externa; por el otro, gozaron de alta rentabilidad garantizada por el Estado (ganancias corrientes).

A continuación, siguiendo el trabajo de Basualdo, se caracteriza el comportamiento de cada una de las fracciones del capital a lo largo de la década. Tal como veremos, pueden diferenciarse tres etapas donde los actores se comportan de manera diferencial, según el tipo de capital que detentan y su racionalidad:

Grupos económicos. En la primera etapa de la convertibilidad (1990-93) acrecientan su participación en la compra de empresas públicas (privatizaciones). En la segunda etapa (1994-97) venden estas empresas y fugan capitales. Este comportamiento obedece a la búsqueda de ganancias patrimoniales en la compra-venta y diferenciales en las tasas de interés. Hacia el final, en la tercera etapa (1998-2001), por un lado, presionan por la devaluación en tanto sus activos se encuentran en tenencias líquidas en el exterior, y por otro se concentran en actividades exportadoras —por las que se cobra en dólares— donde Argentina posee ventajas comparativas naturales tales como la producción agropecuaria. Esta estrategia les sirve para mejorar su posición ante la posible devaluación.

Bien vale mencionar aquí el comportamiento de fracciones de capital local que, si bien grandes, no forman parte de grupos económicos, tal como los propietarios de empresas del rubro alimenticio. Estos propietarios también consiguen ganancias patrimoniales puesto que venden sus empresas a propietarios del exterior. El hecho es que estas empresas, valuadas en dólares, tienen un precio significativamente mayor en comparación con los precios históricos.

Este elemento, considerado en combinación con la sobrevaluación del tipo de cambio, da cuenta de un marco que, a juzgar por las decisiones de los empresa-

29 Martín Abeles, *op. cit.*

rios, fue más un estímulo a la desindustrialización y extranjerización que a la producción.

Basualdo plantea que este comportamiento de comprar y vender con el objeto de obtener ganancias patrimoniales, debe comprenderse a la luz de los cambios en el régimen de acumulación y la consolidación de la valorización financiera; señala que no se trata de la clásica concentración de capital en el marco del modo de producción capitalista. Pues se trata de un comportamiento meramente especulativo que toma distancia de la producción. El capital se hace más volátil incrementando su velocidad de entrada y salida a las distintas actividades.

Conglomerados extranjeros. En la primera etapa compran activos en privatizaciones y en la segunda compran empresas productivas, reforzando el proceso de extranjerización de la economía. En la tercera etapa presionan por la dolarización en tanto es el mecanismo que les permite sostener sus tasas de ganancia.

A su vez, a lo largo de las distintas etapas reinvierten sus ingresos de manera decreciente. Vale aclarar que un indicador de la magnitud en que el capital extranjero contribuye al crecimiento de la economía puede observarse al considerar qué porción de las ganancias (utilidades) son reinvertidas en la economía local; pues no es lo mismo que el dinero fluya a las casas matrices en el exterior en relación con que ese dinero sea invertido dentro de la economía argentina ampliando capacidad productiva. Los valores de este indicador arrojan que el nivel de reinversión de las utilidades del capital extranjero es descendente a lo largo de la década comenzando por un 72 por ciento de las utilidades hacia 1992 —año en que ganaron 1.127 millones de dólares— para caer a un 32 por ciento en 1997 —cuando ganaron 2435 millones—. Es decir, que invierten proporciones menores cuanto más ganan.³⁰

El sector financiero. En la primera etapa recupera y valoriza títulos de deuda depreciados. Durante toda la segunda etapa consigue diferenciales de tasas de interés que representan una importante apropiación de recursos sin contraparte productiva. A partir de 1994, se amplía su tamaño con la reforma del sistema jubilatorio cuando se crean las Administradoras de Fondos y Pensiones (AFJP). En la tercera etapa, presionan por la dolarización (más aun la banca extranjera). El accionar de los organismos financieros internacionales, en particular del FMI, resultó decisivo durante toda la década y significó crecientes presiones a medida que aumentaban las demandas de dólares por parte del gobierno argentino. Presiones que a principios de la década dieron lugar a la reforma del Estado

30 Mario Rapoport, *op. cit.*

(privatizaciones y desregulación) y hacia el final apuntaban a modificar leyes como la ley laboral, la ley de Obras Sociales, o la ley de Subversión Económica que penalizaba delitos financieros³¹.

Los intereses que persigue cada uno de los sectores dominantes conduce a que hacia mediados de los años 90 –tal como vimos en el comportamiento a lo largo de las tres etapas– se produzca una diferenciación hacia dentro del empresariado en relación con la visión que tienen de la convertibilidad. Se van diferenciando crecientemente dos propuestas: la dolarización o la devaluación.

En efecto, se resquebraja la “comunidad de negocios” o “prenda de paz” entre fracciones que participaron de las privatizaciones. La lógica de acuerdo se rompe cuando comienza a alterarse el escenario internacional: suben las tasas de interés, bajan los precios de los productos que Argentina exporta; se restringe el crédito. Se reedita una puja por las ganancias y de allí surgen las dos alternativas que impulsan las distintas fracciones de los sectores dominantes.

Por un lado, se encuentra el sector financiero y una fracción del capital externo –particularmente los propietarios de empresas privatizadas proveedoras de servicios públicos–; éstos defienden la convertibilidad y plantean su radicalización: la dolarización. En particular, se trata de sectores que giran utilidades al exterior –en dólares– y entienden que una devaluación significaría que sus ganancias se reduzcan de manera proporcional a la depreciación de la moneda³². Por otro lado, se encuentra el capital productor de bienes transables³³ –grupos económicos y conglomerados extranjeros– que prefiere la devaluación. En efecto, con un tipo de cambio bajo están expuestos a una muy fuerte competencia internacional. Puesto que los bienes que ellos producen ante una devaluación aumentan su precio en pesos y así aumentan sus ingresos. Cabe destacar que la participación de los grupos económicos locales en esta “propuesta” radi-

31 A través del estudio de las características de estas exigencias se puede observar el creciente abandono por parte del FMI de los objetivos para los que fue creado hacia 1944 –asistir a los países en sus necesidades financieras– para pasar a constituirse como un agente que negocia los intereses del capital transnacional. Para graficar la posición del FMI, se puede citar la “sustentabilidad” en el plan económico que exigió al gobierno de De la Rúa; una sustentabilidad financiera –que significaba ajustar el presupuesto para pagar la deuda y sostener el modelo– que se encontraba en las antípodas de una sustentabilidad social –que requiere una redistribución del ingreso–.

32 Digamos a modo de ejemplo que con la paridad de un peso-un dólar, si ganaron 100 millones de pesos en un año, pueden comprar –y girar– 100 millones de dólares a la casa matriz. En cambio, con una paridad de tres pesos-un dólar, si ganan 100 millones de pesos, sólo pueden comprar 33 millones de dólares. El nivel de la devaluación regula el nivel de sus ganancias.

33 Se trata de los bienes que se pueden exportar e importar.

ca también en que acrecentarían su riqueza como producto de las tenencias de dólares que poseen en el exterior.

Los efectos de cualquiera de las dos alternativas –dolarización y devaluación– sobre los sectores populares resultan ser fuertemente regresivos en tanto, por diferentes mecanismos, no mejora su condición relativa, ya que los determinantes del modelo vienen dados por el régimen de acumulación de valorización financiera y trascienden un esquema cambiario. En efecto, ninguna de las dos alternativas incorpora elementos que signifiquen una mejora en el salario real de los trabajadores, pues el tipo de cambio fijo anclado al dólar (1 a 1, 3 a 1 o 17 a 1) no significa en absoluto –ni es correcto analíticamente considerar que lo sea– sinónimo de mayor o menor bienestar para la sociedad. Para pensar en ello tenemos índices de pobreza, coeficientes que miden si el reparto de la riqueza es equitativo o no, estadísticas de salarios, de acumulación de capital y reinversión de utilidades, etc.

2.5 El régimen monetario de los 90: la convertibilidad

El éxito del Plan de Convertibilidad en materia de descenso de la inflación hacia los primeros años de la década fue uno de los aspectos legitimadores del gobierno menemista hasta su retirada. Incluso durante los discursos electorales de De la Rúa este elemento –la estabilidad de precios– era puesto en primer término. Claramente, se trataba de defender el régimen convertible; lo que no estaba tan claro era cuál sería el precio que debía pagar la sociedad para defender aquello que, avanzada la década, comenzó a mostrar su contracara: el desempleo.

Los modelos de tipo de cambio que se utilizan en la mayor parte del mundo son modelos de paridad controlada, es decir, la autoridad monetaria –en el caso argentino sería el Banco Central– compra y vende divisas para mantener el tipo de cambio alrededor de un valor determinado. En cambio, los sistemas de tipo de cambio fijo como la convertibilidad obligan a la autoridad monetaria a cambiar las divisas a un valor fijo determinado. En el caso argentino se trataba de cambiar un peso por un dólar. Al fijar el valor del dólar no era posible modificar su precio ante una eventual escasez de los mismos.

El ancla del tipo de cambio fue utilizado como mecanismo para controlar la subida de los precios bajo la suposición de que, como la mayoría de los precios seguían la marcha del dólar, si éste permanecía fijo, los demás precios así lo harían. Complementariamente, la desregulación y la apertura comercial tenían como objetivo “disciplinar” al empresariado y elevar la eficiencia de la producción local frente a la importada puesto que si aumentaban los precios locales,

los precios de los productos importados serían cada vez más baratos y forzarían a los productores locales a bajar los niveles de precios.

El Plan de Convertibilidad comenzó con una paridad fija de un dólar por cada 10.000 australes luego de provocar una gran devaluación de aquella moneda vigente desde el gobierno de Alfonsín. La Ley de Convertibilidad se aprueba en el Congreso el 27 de marzo de 1991 y tiempo después —el 1° de enero de 1992— se lanzaría la nueva moneda, el peso, según la paridad vigente: 10.000 australes equivalían a un peso. Desde entonces quedaría sellada la idea de un peso-un dólar.

Una serie de determinantes convergieron hacia los inicios de la convertibilidad para condicionar un crecimiento del producto (PBI): consumo reprimido durante los años de hiper, alta capacidad ociosa, ingreso de capitales, aumento de la oferta monetaria y la reaparición del crédito (aunque las tasas de interés para el consumo nunca bajaron más allá del 20 por ciento).

Para sostener esta paridad cambiaria era necesario que se “inyectara” regularmente una determinada cantidad de dólares al circuito económico local. Para que el plan fuera exitoso en el largo plazo, era preciso que estas inyecciones se efectuaran por altos niveles de exportaciones o, en su defecto, por entrada de capitales. Sin embargo, la entrada de dólares a la economía comenzó con las privatizaciones y continuó con el endeudamiento externo. A mediados de la década ya aparecían los primeros signos de la insostenibilidad del modelo convertible³⁴, tal como había sucedido con todos los regímenes de este tipo a lo largo de la historia. Por ejemplo, el patrón oro —donde la libra esterlina estaba fija al oro— había colapsado en 1930, así como lo había hecho el patrón oro-dólar en 1971 cuando el presidente norteamericano Richard Nixon anunció que la divisa norteamericana dejaba de ser convertible. La moneda argentina dejaría de ser convertible con el dólar en enero de 2002.

Todas las decisiones de política económica quedaron atadas al eje directriz que era la convertibilidad, por lo que al tiempo que se acababan los dólares de las privatizaciones y la deuda, comenzaron los procesos de ajuste. El flujo de capitales externos representaba la condición de posibilidad de existencia del régimen monetario, por lo tanto, la idea de “seducir a los mercados” resultaba cada vez más “imprescindible”.

34 La crisis del Tequila que se desencadena por la devaluación del peso mexicano —el 20 de diciembre de 1994— repercute en Argentina y se teme que signifique el derrumbe de la convertibilidad. Se refuerza al sistema financiero y la crisis pasa, pero muestra la vulnerabilidad del esquema. En 1997 se desata una crisis en el sudeste asiático que repercute fuertemente en Argentina. La devaluación y crisis del real en Brasil hacia 1999 tendrá efectos similares.

Tal como señalamos, el conjunto de privatizaciones significó el ingreso de una importante cantidad de dólares. Como resultado de la venta y concesión de empresas públicas el Estado recibió cerca de 20.000 millones de dólares³⁵. Tal como se analizará en el próximo apartado, el aumento de la deuda externa será la otra fuente de dólares para el sostenimiento del modelo del “uno a uno”.

2.6 La deuda externa durante la convertibilidad

Tal como señalamos antes, las privatizaciones significaron la “prenda de paz” entre los acreedores externos, los grupos económicos locales y los conglomerados externos. Lo que aquí nos interesa es efectuar el seguimiento del endeudamiento externo y el rol que desempeñó a lo largo de la década hasta que estalló la crisis final en diciembre de 2001.

Poco después de ponerse en marcha el Plan de Convertibilidad, en 1992, Argentina ingresa al Plan Brady y, por medio de ello, reestructura su deuda con los bancos que, por fin, consiguen aquello por lo que venían presionando desde fines de 1988. En este acuerdo Argentina se comprometía a pagar los intereses y se reprogramaba la deuda con el sector bancario a 20 años —para el caso de los intereses atrasados— y a 30 años —para el capital—. A cambio, el Estado recibía una quita parcial³⁶.

La reestructuración de la deuda se consigue a cambio de la ejecución de las reformas estructurales a las que se había comprometido el gobierno (donde las privatizaciones eran uno de los pilares). La venta de empresas públicas, en este sentido, significó la obtención de importantes recursos para el presupuesto público que contribuían a la implementación de las medidas económicas por cuanto relajaban problemas presupuestarios del Estado.

Pero fue el ingreso de capitales como resultado de la venta de empresas públicas hacia el circuito económico local lo que permitió apuntalar los inicios de la convertibilidad y, es preciso señalarlo, relajar el peso de la deuda hacia 1993. Cuando, avanzada la década, estos recursos comienzan a escasear —en la medida en que se habían vendido o concesionado prácticamente todas las empresas— el endeudamiento externo será la manera que encuentre el gobierno para garantizar el ingreso de dólares necesarios para mantener el “uno a uno”. A partir de entonces la deuda retomará un sostenido ritmo de crecimiento hasta el fin de 2001.

35 Mario Rapoport, *op. cit.*, p. 993.

36 Mario Rapoport, *op. cit.*

En el marco de las transformaciones en el capitalismo mundial donde el sector financiero consolida su hegemonía, en Argentina se establecen las condiciones para que el gobierno pueda contraer deuda mediante la emisión de bonos. La diferencia con el pasado es que ahora el endeudamiento ya no es sólo con los bancos comerciales u organismos de crédito (FMI, Banco Mundial, etc.) sino que la emisión de bonos de deuda pública pasará a concentrar la mayor parte de la toma de deuda.

La deuda externa total³⁷ terminó la década más que duplicando los valores de 1991; de 61.337 millones de dólares ascendió a 139.894 millones. Tal como señalamos, entre 1991 y 1993 —como resultado de las privatizaciones— se detiene el crecimiento de la deuda del sector público —el Estado— y luego continúa creciendo hasta alcanzar los 87.911 millones de dólares. Sin embargo, lo más llamativo de la serie es el crecimiento de la deuda privada que se multiplica por diez saltando de 3.524 millones de dólares a 35.261 millones. El sector privado, en efecto, es el que a fines de la dictadura militar había transferido deuda privada al gobierno y se encontraba prácticamente libre de compromisos con el exterior. Durante toda la década decide retomar la estrategia de endeudamiento sostenido para valorizar capital.

Basualdo apunta que la contracara de este endeudamiento del sector privado es la fuga de capitales al exterior. En efecto, muestra la alta relación existente entre la toma de crédito por parte de los grupos económicos —y los conglomerados externos— y el ritmo de la fuga de capitales³⁸. El Estado no se endeuda para paliar el déficit público, sino que se endeuda para garantizar la acumulación ampliada de las distintas fracciones del capital. En este juego de actores el Estado actúa como redistribuidor del excedente económico, pues se endeuda para sostener el régimen de la valorización del sector privado.

Se reproduce así el proceso de valorización financiera que tuvo lugar durante la dictadura militar. El capital privado toma deudas en el mercado internacional para valorizar esos capitales en el circuito financiero local. Mientras las tasas de interés en el mercado local resulten satisfactoriamente superiores, traer dólares, reciclarlos y fugarlos representa un excelente negocio para el capital privado. En particular si las consecuencias luego son asumidas por el Estado. La fuga de capitales se trata de una masa de recursos que son extraídos del circuito de acumulación local y apropiados mediante instrumentos financieros. El peso de la deuda y la fuga caerá sobre los sectores mayoritarios de la población cuando, vía impuestos y ajustes, se vean obligados a financiar el círculo vicioso de valorización financiera.

37 Incluye la deuda que toma el gobierno (incluido el Banco Central), las empresas privadas y el sector financiero.

38 Véase Eduardo Basualdo, *op. cit.*, 2001 y 2003.

La deuda externa consolidará la dependencia de las decisiones del gobierno en relación con el extranjero. Las presiones para el pago de la misma son llevadas a cabo, fundamentalmente, por el FMI. En efecto, a medida que aumentan los compromisos financieros, *pari passu*, aumentarían las presiones del FMI para continuar con reformas económicas que permitan atender el pago de los intereses de la deuda³⁹. Años más tarde se cuestionará al FMI por la corresponsabilidad en la implementación del modelo de los 90 en Argentina. Pues vale apuntar que durante los primeros años de la década, el “ejemplo” argentino era promocionado desde el FMI en el escenario internacional como modelo a seguir para los países subdesarrollados. De hecho, la lógica del capital financiero había moldeado desde los orígenes de la década los cimientos del modelo económico. Lo que no quedó claro fue si aquello que resultaba del molde era en beneficio de los sectores mayoritarios de la población.

La misma deuda que hacia principios de la década forzó la venta de las empresas públicas para “resolver el problema de una vez”, hacia el final de la misma década había vuelto a crecer vigorosamente. Del mismo modo que la experiencia radical de los 80 había colapsado, el final de los 90 también colapsaría por problemas vinculados con el endeudamiento externo. Para entonces la negociación debería ser diferente, pues ya habían sido transferidas las empresas públicas; las “joyas de la abuela” no resultarían una opción.

El peso de la deuda externa agrava el viejo problema estructural de la economía argentina vinculado con el balance de pagos. Si el *stop and go* de los años cincuenta a los setenta tenía sus raíces en la escasez de dólares como resultado de las demandas de la industria, desde 1976 a esta parte las fluctuaciones de la producción nacional incorporarían un nuevo factor: la necesidad de dólares para atender los compromisos financieros externos.

3. La forma de Estado neoliberal: etapa superior del desguace del Estado

Vigente desde la llegada de la última dictadura, la forma de Estado neoliberal se caracteriza por una sistemática reducción del tamaño y modalidades de

39 Resulta importante apuntar la modalidad en que se toman las decisiones del FMI. Son necesarios el 85 por ciento de los votos y Estados Unidos tiene 17 por ciento de los mismos, por lo que ninguna decisión puede tomarse contra su voluntad. Véase Julio C. Gambina y Daniel Campione, *Los años de Menem. Cirugía mayor*, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 2003, p. 73.

intervención del Estado. A partir de entonces, los mismos argumentos que desde la crisis de 1930 en adelante habían sido esbozados para incrementar la intervención del Estado, son invertidos y se convierten en su contrario. Si durante casi cinco décadas —desde inicios de la década del 30 hasta mediados de los 70— se creía en la necesidad de catapultar el desarrollo capitalista a partir de los impulsos y la acción del Estado, desde la óptica neoliberal se sostendrá que el Estado es un aparato que, lejos de impulsar el desarrollo, lo detiene y obstruye. Lo mismo sucede cuando se considera la intervención del Estado en ámbitos como la salud, la educación o la seguridad social.

Esta tendencia hacia el achicamiento del Estado en el ámbito productivo puede analizarse con numerosos ejemplos. Tal como señalamos en el caso del petróleo, la exploración y explotación había sido emprendida —y monopolizada— por el Estado; su rol era considerado de sumo valor estratégico hasta que se decidió vender la petrolera estatal, y lo único que resultó estratégico fue el valor de los activos que se vendían. En el caso de la siderurgia, el Estado levantó los Altos Hornos Zapla en la provincia de Jujuy, así como la empresa SOMISA en San Nicolás —dos productoras de acero—, hasta que se juzgó que resultaba innecesario que el Estado fuera su tenedor. La liquidación del complejo de Fabricaciones Militares y la privatización de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) fueron otros de los casos significativos en los que el Estado dejó de producir bienes cediendo tales funciones a empresas privadas.

Lo mismo ha sucedido en otros ámbitos de injerencia pública con las juntas reguladoras y con la jubilación pública, con la educación y con la salud. Todas reforzadas y erigidas durante décadas, sufrieron un redireccionamiento saliendo de la órbita estatal para pasar a manos privadas.

Lo que resulta importante enfatizar es que la forma de Estado, con estos cambios, ha sido radicalmente modificada. Este aparato institucional, capaz de regular e imponer acciones y comportamientos al conjunto de la sociedad, ha ido sufriendo transformaciones al compás de los cambios en el capitalismo mundial y local⁴⁰.

Por ello, es preciso abordar el estudio de estas transformaciones de manera integral e individualizar los factores tanto internos como externos que permitieron un cambio tan radical en las funciones del Estado como los experimentados en Argentina durante los 90.

40 En efecto, el Estado intervencionista fue un modelo que se aplicó en todo el mundo capitalista desde 1930 en adelante. Y los ajustes neoliberales, si bien con diferencias de aplicación en cada país, también se aplicaron de manera extendida desde mediados de los 70.

A nivel internacional, desde las experiencias de Ronald Reagan y Margaret Thatcher apuntadas anteriormente, se inician importantes presiones hacia los gobiernos para que reduzcan los gastos y reconfiguren su rol redistribucionista con el objeto de fortalecer la ganancia de los sectores empresarios. Un capitalismo mundial que arroja bajos niveles de crecimiento – un virtual estancamiento– e inflación, encuentra como salida la redistribución de ingresos para relanzar la valorización del capital.

A su vez, el crecimiento vertiginoso de los fondos financieros –el mercado financiero– actuará como acelerador de las reformas y condicionará el accionar de los distintos gobiernos. En el caso argentino, el descontrolado crecimiento de la deuda externa es un indicador inequívoco de este tipo de dinámica.

El crecimiento y la movilidad del capital financiero será el componente más distintivo de la globalización neoliberal y operará –a nivel discursivo– mediante una falsa dicotomía: o bien se hacen las reformas necesarias para “seducir” a los mercados o bien se sufren las consecuencias. Si se decide por el camino de la seducción será necesario reducir la operatoria del Estado a una del tipo Estado-gendarme con determinadas funciones mínimas, básicamente aquellas vinculadas al mantenimiento del orden, tal como las legales –garantizando, fundamentalmente, la propiedad privada– y las represivas –fortaleciendo el poder de policía–; en segundo orden podría asumir aquellas vinculadas a la regulación de ciertos servicios públicos que deberían ser provistos por empresas privadas (electricidad, gas, agua, etc.). Si se opta por caminos alternativos, será cuestión de sufrir las consecuencias de la inevitable ineficiencia del Estado y los disciplinamientos del mercado.

A nivel local, la hiperinflación –tal como señalamos– terminó de moldear un escenario fuertemente conflictivo; significó la eclosión del conflicto distributivo. De esta forma quedó allanado el camino para que los sectores beneficiarios de las funciones redistributivas del Estado aceptaran –e incluso aclamaran– la necesidad de su desmantelamiento. En efecto, el discurso que se extendía en los medios de comunicación y en buena parte de los sectores medios y populares, señalaba abiertamente la necesidad de privatizar las empresas públicas como única salida del caos hiperinflacionario.

No es posible comprender la magnitud de la transformación del Estado sin enfatizar este doble componente: por una parte, la desesperación de los sectores populares que veían pulverizados sus ingresos al ritmo del aumento de precios; aparecían de este modo dispuestos a pagar lo que fuera necesario para salir de esta crisis. Y, por otra parte, los sectores dominantes sin un acuerdo estable y con chances de “compartir” los beneficios que resultarían del reparto de las empresas públicas.

A fines de la década del 80, nos encontramos con una crisis que se manifiesta en distintos niveles. Siguiendo a Guillermo O'Donnell⁴¹, se trata de una crisis de gobierno —en la que el presidente tiene que abandonar el cargo—; una crisis de régimen, donde se superponen grupos y élites que intentan imponerse por sobre los demás; crisis política, donde nuevos actores en la arena política deciden interpelar a los viejos; crisis de acumulación, donde las clases dominantes encuentran obstaculizada la marcha de la economía; y crisis de dominación, donde son las mismas relaciones sociales primarias las que son puestas en cuestión. Es necesario añadir que desde mediados de los años 70 tanto las empresas públicas como los distintos espacios de acción del Estado venían sufriendo un cuadro de deterioro y desfinanciamiento. Por lo tanto, existían numerosos déficits en cuanto a la prestación de servicios que reforzaban la necesidad de un cambio en el sector público. Entre la reconstrucción del Estado y su destrucción, se optó por el desmantelamiento; bajo el precepto de que si determinadas funciones pueden ser ejecutadas por empresas privadas, entonces será mejor que el Estado se desprenda de ellas. Este argumento se sostuvo sin más justificaciones ni argumentaciones; sin importar si se trataba de agua, electricidad, servicios aéreos o teléfonos.

El ordenamiento social del capitalismo regulado por el Estado de bienestar dejaba definitivamente de lado criterios como la equidad y la justicia distributiva para la toma de decisiones —por cierto bastante olvidados desde los años 70— y son reemplazados en un capitalismo lanzado sobre sí mismo por la maximización del beneficio privado, la eficiencia y el abaratamiento de costos como únicos criterios para juzgar la conveniencia de las reformas. Esta compleja relación existente en el capitalismo entre la capacidad de intervención del Estado y la “autorregulación” del mercado, vuelve así a inclinar la balanza hacia el mercado. La modernización del Estado acarrea el abandono de las funciones redistributivas a favor de los desposeídos para transmutarlas a favor de los sectores dominantes.

Ante las presiones por ajustes en el presupuesto y redireccionamiento de las partidas, el Estado cede ámbitos que en décadas anteriores conformaban espacios de legitimación vía políticas redistributivas, de ingresos, créditos, etc. Las reformas implicarán que el Estado sea rediseñado en pos de la acumulación relegando las acciones tendientes a generar legitimidad en el sistema.

La percepción generalizada —abonada por comunicadores sociales— era que el Estado era imprevisible e ineficiente y que tanto mejor cuanto menor Estado subsistía. En efecto, no sólo se vendieron las empresas públicas sino que se

41 Citado por Basualdo, *op. cit.*, p. 56.

alcanzó un extremo donde el Estado se autocensuró la posibilidad de realizar, como dijimos, política económica (monetaria, ya que estaba prohibido emitir dinero sin dólares en el Banco Central; cambiaria, ya que la paridad con el dólar estaba fija por la Ley de Convertibilidad, y de ingresos, que realizaba mediante esquemas tarifarios a través de las empresas públicas).

3.1 Ley de Emergencia Económica y de Reforma del Estado

La llegada de Menem al gobierno se da “libre” de la discusión en torno a la necesidad de reestructurar el Estado, pues las tensiones típicas del gobierno radical ya no están presentes. Existe el camino allanado para ejecutar las grandes reformas. De hecho, el plan económico de Eduardo Angeloz⁴² —candidato radical que en 1989 pierde en los comicios— iba en la misma línea de lo que, a la postre, ejecutó Menem.

Al poco tiempo de llegar al poder, el gobierno que encabeza Menem cuenta con el aval del Congreso y, en medio del caos hiperinflacionario y con gran celeridad, se sancionan dos leyes trascendentales para la transformación de la forma de Estado: la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma del Estado. La primera suspende por 180 días los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones —aunque luego serían reimplantados—, deroga el “compre nacional”, modifica el régimen salarial del empleo público y abre las puertas al capital extranjero en determinadas actividades donde sólo podía operar el capital nacional.

La Ley de Reforma del Estado habilita el traspaso de las empresas públicas a manos privadas y se abre así, “legalmente”, el camino a las privatizaciones. De este modo vertiginoso, la reforma del Estado nunca incorporó elementos de cambio para mejorar la estructura existente, sino que, al amparo del discurso neoliberal, siempre se asumió la reforma como sinónimo de achicamiento.

Si se evalúa la magnitud de las reformas y se las evalúa considerando el tiempo en que fueron sancionadas las leyes, aparecen elementos que conducen a poner en duda el funcionamiento de la democracia contemporánea. Existen razones para ello, pues estas decisiones fueron tomadas en un marco de desesperación social y con presiones muy claras respecto de la dirección de los cambios. Si bien los fundamentos de la democracia representativa suponen un debate parla-

⁴² Incluso entre sus diseñadores se encontraban Ricardo López Murphy y Adolfo Sturzenegger, quienes años más tarde serían funcionarios del gobierno de De la Rúa antes de la debacle de 2001.

mentario para la sanción de las leyes y, a su vez, suponen que las decisiones se tomen en beneficio de las mayorías, ante las presiones de los acreedores estos supuestos son dejados de lado, tal como vimos anteriormente.

Considerando que estas leyes se sancionaron en una semana —tiempo récord—, que los servicios públicos aumentaron los precios y las presiones de pago sobre los usuarios, y que los sectores dominantes se beneficiaron con el negocio que se les presentó, la democracia aparece, al menos, condicionada y direccionada por los grupos de mayor poder económico relativo⁴³.

En efecto, las tareas del Estado nacional son crecientemente monitoreadas no sólo por los grupos económicos, sino también por los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Interamericano de Desarrollo —BID—, Banco Mundial) que condicionan los préstamos a la aplicación de las políticas tendientes a favorecer las posibilidades de repago de los mismos. En el caso del FMI, se ha registrado una creciente participación en las decisiones de política nacional como las privatizaciones, la ley de Obras Sociales, el nivel tarifario de empresas, etc.

3.2 Desregulación del mercado

El conjunto de medidas de desregulación económica alcanzó dimensiones muy diferentes; aunque siempre tuvieron como denominador común reducir el control del Estado sobre los ámbitos del mercado.

En efecto, se disolvieron los organismos reguladores de los mercados de productos agrícolas y ganaderos (Junta Nacional de Granos, Carnes, Yerba, etc.) creadas luego de la crisis del 30 durante la gestión de Federico Pinedo. Las políticas de precio sostén para balancear los ingresos de los productores primarios de distintas producciones del interior del país fueron eliminadas junto con los organismos reguladores de precios.

Se llevó a cabo una fuerte apertura comercial (reduciendo aranceles y eliminando cupos a la importación). Por medio de esta medida, se aceleró y aumentó el ingreso de producción importada que pasó a competir con la producción local a precios inferiores. Si bien nuevamente se argumentó que esta medida era llevada adelante para “disciplinar” al capital local y bajar los precios de los bienes sujetos a la competencia extranjera, en la práctica implicó un fuerte ajuste al sector productivo y el cierre de numerosas empresas con aumento del desempleo.

43 Tal como se señaló reiteradamente, durante este proceso quien presidía el Ministerio de Economía provenía directamente del cuadro gerencial del grupo económico Bunge y Born.

Se permitió el libre ingreso y egreso del capital financiero, en consonancia con los aires neoliberales y el desarrollo que este tipo de capital había logrado a nivel internacional. En efecto, la apertura y liberalización del sistema financiero era exigida por parte de los bancos y empresas extranjeras que operaban en el circuito local para girar divisas al exterior. Esta exigencia iba a la par del crecimiento de la deuda y de la participación del capital extranjero en las privatizaciones. Se autorizó la salida irrestricta de *royalties*, intereses y dividendos.

3.3 El Estado mínimo: privatizaciones y deuda externa

Tal como ya hemos señalado, la venta de las empresas públicas era una exigencia que venía desde los acreedores externos. Estos esperaban cobrar sus acreencias con el Estado a partir del dinero que éste obtuviera en el proceso privatizador. Efectivamente, en el traspaso de empresas el Estado iba a aceptar como medio de pago la deuda que había contraído. Así, para adquirir las empresas, en muchos casos el Estado aceptó que se le entregaran bonos de deuda a cambio de las empresas.

El caso de la privatización de ENTel —la empresa de teléfonos del Estado— fue un caso testigo de la modalidad con que se llevaría adelante el proceso privatizador⁴⁴. Tal como apunta Schvarzer, se establecieron plazos muy reducidos para llevar adelante la privatización y se cuidó la participación de los distintos sectores dominantes en el proceso. Incluso, se previó un porcentaje accionario para los gremios, como forma de constituirlos en “socios” del negocio. “Los acreedores fueron incluidos de modo claro pero implícito porque se estableció que el pago de ENTel se haría con títulos de deuda a quien ofreciera una mayor cantidad de ellos. (...) Los consorcios ganadores ofrecieron títulos por 5.000 millones de dólares de valor nominal, que en ese momento se cotizaban a sólo el 15% en el mercado internacional. (...) Esta operación permitió que los acreedores cambiaran títulos de deuda de cobro dudoso (como sugería la reducida cotización de éstos en el mercado secundario), por acciones de una empresa monopólica cuyos beneficios eran seguros”⁴⁵. Los participantes explícitos eran los operadores de teléfonos (conglomerados extranjeros) —que resultarían la Telefónica de España y Telecom— y socios locales (grupos económicos).

44 Cabe señalar que una de las primeras medidas tomadas por Menem en este sentido fue designar a María Julia Alsogaray interventora de ENTel, como forma de brindar otra señal al *establishment* económico.

45 Jorge Schvarzer, *op. cit.*, p. 134.

También el caso de Aerolíneas Argentinas fue indicador de lo que vendría, pues se llevó a cabo de manera tan perentoria como dudosa.

En el caso de los ferrocarriles, fueron cerrados numerosos ramales. El presidente venía advirtiendo “ramal que para, ramal que cierra” y así el 10 de marzo de 1993 dejan de ser prestados servicios ferroviarios de pasajeros en la mayor parte del país. El criterio de permanencia o cierre no se basó en la planificación de la infraestructura pública, sino en minimizar la resistencia social a los cambios que habían sido tomados con antelación.

El universo de empresas que fueron privatizadas es muy vasto si se consideran las nacionales y provinciales que fueron concesionadas y vendidas. Aparte de los mencionados anteriormente, entre los casos más importantes se encuentran: la empresa nacional de petróleo (YPF) y sus áreas de explotación, los subterráneos, las rutas, las terminales portuarias, el hipódromo, las Obras Sanitarias de la Nación (hoy Aguas Argentinas), los canales de televisión, las vías navegables, la producción y distribución de energía eléctrica, las siderurgias del Estado, las petroquímicas, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, la naviera estatal, y fábricas militares varias.

Tal como señalamos con anterioridad, el Estado obtuvo alrededor de 20.000 millones de dólares en títulos y efectivo por estas empresas. Los valores de venta, en términos generales, se encontraron muy por debajo del valor al que estas empresas cotizan internacionalmente.

Una vez traspasadas las empresas a manos privadas, surgió el problema de generar marcos regulatorios para la operación de las mismas; sobre todo en el caso de los servicios públicos. Para garantizar los ingresos de los operadores, se aumentaron drásticamente los precios de los servicios antes de ser traspasados⁴⁶. Se crearon entes reguladores de los servicios públicos, pero acusaron fuertes problemas de funcionamiento. En efecto, estos organismos sin experiencia previa pasaron a atender más las necesidades de las empresas que de los consumidores.

Adicionalmente, Julio Gambina y Daniel Campione⁴⁷ destacan la existencia no sólo de la privatización de empresas –lo que denominan privatización ex-

46 Schvarzer apunta que, luego de las privatizaciones, el Estado pasó a tener gastos muy importantes por concepto de pago de teléfonos, pasajes aéreos, gastos de combustible, etc., y que muchas veces superó los déficits que habían sido esbozados como argumento para la venta de las empresas. Para el tema de entes reguladores, véase Daniel Azpiazú y Eduardo Basualdo, “Concentración económica y regulación de los servicios públicos”, *Enoikos*, año IX, N° 15, 2001; o Daniel Azpiazú y Martín Schorr, “Privatizaciones, rentas de privilegio, subordinación estatal y acumulación de capital en la Argentina contemporánea”, Instituto de Estudios y Formación de la CTA, 2001.

47 Julio C. Gambina y Daniel Campione: *Los años de Menem. Cirugía mayor*, op. cit.

terna del Estado—, sino de una privatización interna en las estructuras públicas: tecnocratización de gerentes que vienen del sector privado y que, aun desempeñando cargos públicos, defienden sin mayores reparos los intereses de distintos sectores de la burguesía. Se intentó brindar al Estado, de este modo, un aire de especialización tecnocrática, esto es, de funcionarios técnicamente capacitados “despolitizados”. Sin embargo, tampoco se destinaron recursos para consolidar la capacitación y especialización. En efecto, en el marco del empleo público pasan a proliferar los contratos de personal temporario por fuera de las estructuras tradicionales. Estos contratos a término no atentan contra la posibilidad de capacitar funcionarios de carrera⁴⁸.

3.4 La reforma de la seguridad social

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Artículo 14 bis de la Constitución nacional

La reformulación del sistema de seguridad social fue otro de los grandes golpes de timón en relación con las funciones del Estado. En efecto, el sistema jubilatorio público de reparto que se encontraba vigente fue reemplazado por el sistema privado de capitalización individual gerenciado por las AFJP. En los sistemas de reparto, los aportes de los trabajadores se destinaban al pago de los jubilados, de modo tal que se trata de un modelo de solidaridad intergeneracional, es decir, una generación financia a la otra. Los fondos eran gerenciados por el Estado y estas sumas representaban importantes fondos cobrados y pagados dentro de las cuentas públicas.

El nuevo sistema de capitalización individual fue creado mediante la ley 24.241 del año 1993 y entró en vigencia al año siguiente. Las AFJP fueron conformadas por los bancos privados y públicos más importantes. En el

48 Si bien se constituyó el SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa) para capacitar empleados públicos, la mayor cantidad de los empleos del Estado pasaron a generarse por contrato y sin protección legal alguna.

marco de la reforma se establecía que ahora los aportes de los trabajadores irían a una cuenta individual y que, al jubilarse, cada aportante se llevaría el fruto de su ahorro. Las comisiones que se estipularon para el capital financiero –las AFJP– oscilaron entre un 30 y un 35 por ciento de lo que aportaban los trabajadores, lo que implicó otra modalidad de redistribución del ingreso a favor del capital. Estas comisiones siguen vigentes en la actualidad, de modo que uno de cada tres pesos de aportes individuales son apropiados por las AFJP.

También el fisco sufrió consecuencias como resultado de este cambio en el sistema jubilatorio, pues los jubilados del viejo sistema deberían ser sostenidos por el Estado, a pesar de que los ingresos del nuevo sistema ya no pasaban por él. El resultado fue que el gobierno comenzó a tomar prestados los fondos que tenían las AFJP; y terminó pagando intereses por el mismo dinero que antes recibía directamente⁴⁹.

3.5 Federalización y traspaso de funciones a las provincias

Otro componente de las reformas estructurales del Estado consistió en el achicamiento del Estado nacional traspasando funciones a las provincias. De hecho, distintas dimensiones del Estado en materia de salud, educación, infraestructura y aspectos fiscales que eran concentradas en el Estado nacional fueron delegadas a los gobiernos provinciales. Así, los hospitales públicos, las escuelas primarias y secundarias y parte de la red vial y ferroviaria dejaron de ser competencia del Estado nacional, el cual se reservó para sí funciones regulatorias y normativas.

El traspaso de estas funciones resultó problemático, pues se trató de un gran número de cuestiones que las provincias no se encontraban en condiciones de asumir. En efecto, los resultados de esta compulsiva aplicación de federalismo trajo aparejado un deterioro en la prestación de muchos de los servicios implicados.

3.6 El sistema impositivo

A través del análisis del sistema impositivo, es posible ver en qué medida el Estado redistribuye ingresos y en qué sentido; del mismo modo que analizando

49 En la actualidad coexisten los dos sistemas jubilatorios.

sus gastos es posible establecer las prioridades del Estado. De este análisis combinado, se puede visualizar cómo reasigna ingresos el aparato público y en favor de qué sector (grupos económicos, conglomerados, sector financiero, sectores populares, etc.).

El sistema impositivo sufrió sucesivas modificaciones que implicaron la consolidación de un esquema marcadamente regresivo, basado en la extensión del IVA al conjunto de los bienes que componen la canasta básica alimentaria. La regresividad consiste en que los sectores más humildes, proporcionalmente, aportan más. En cambio, los sistemas impositivos progresivos son aquellos donde quienes más pagan son quienes más tienen. En este sentido, cabe apuntar que en los países centrales los sistemas impositivos se caracterizan por tener esquemas de progresividad.

Generalmente, se asume que los impuestos al consumo, como el IVA, son característicos de esquemas regresivos y que los impuestos a los ingresos, como el impuesto a las ganancias, son característicos de los esquemas progresivos.

Tal como señalamos, a lo largo de la década del 90 el IVA sufrió una serie de modificaciones. En primer término, se aumentó la alícuota de un 16 por ciento a un 18 por ciento; luego se aumentó a un 21 por ciento. Finalmente, se estableció que sería aplicable a otros bienes hasta entonces no alcanzados por el IVA, como la enseñanza privada, la televisión por cable y la medicina prepaga.

3.7 La naturaleza del Estado: las dimensiones estructural, política e instrumental

A esta altura resulta importante enfatizar la naturaleza histórica de la forma de Estado, pues a lo largo del siglo XX ha registrado transformaciones muy marcadas que resultan tanto mayores cuanto más nos remontamos en la historia. Bien vale, entonces, enfatizar —siguiendo a José Nun⁵⁰— el carácter del Estado como institución que se construye —o destruye— a lo largo del tiempo. Nun prefiere pensar en el Estado no como un dato o una figura estática, sino como un espacio donde se cristalizan relaciones sociales y que va cambiando a lo largo del tiempo.

Pues bien, el análisis de las transformaciones del Estado durante la década del

50 José Nun: *Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.

90 enriquece la reflexión en torno a cuál es la naturaleza de esa forma llamada Estado. Recuperando las dimensiones instrumental, estructural y política⁵¹ desde las que es posible estudiar el Estado, se observa que, en términos estructurales, el corrimiento y disminución de sus funciones significó, al menos, la pretensión de que la reproducción de la sociedad era viable a partir de ampliar los espacios en los que operan relaciones de mercado.

Esto implica un modelo de sociedad donde los principales bienes y servicios necesarios para la vida son, de un lado, provistos por empresas privadas y, de otro, adquiridos por consumidores que ampliarán sus capacidades de vida cuanto mayor sea su capacidad de apropiación de recursos económicos. Resulta obvio que la reproducción social aparece fuertemente comprometida en la medida en que una parte de la sociedad se vea imposibilitada de adquirir recursos económicos mediante los mecanismos de mercado. Dicho más claramente, no parece viable un modelo social de mercado capitalista con niveles de desempleo de casi el 20 por ciento de la población.

Al margen de la discusión en torno a si la mercantilización de la vida es elegible o no y en qué medida, lo cierto es que existe una relación al menos problemática entre la elección del mercado como regulador social y la inequidad en la distribución de los recursos.

Pensando el Estado desde la dimensión política, es decir, atravesado por los conflictos que llevan adelante las distintas clases sociales, la década del 90 representa un rediseño del Estado moldeado por los sectores dominantes. Como contraparte, los sectores mayoritarios de la población aparecen como testigos del cambio en las funciones y mecanismos de intervención del Estado, cambio en el cual no deciden ni participan.

Para decirlo en otras palabras, las luchas y conflictos entre los sectores dominantes y las clases subalternas inclinan la balanza en favor de los primeros y el Estado acusa este reposicionamiento del capital en relación con el trabajo.

En cuanto a la dimensión instrumental, los 90 refuerzan la impresión de que el aparato del Estado se encuentra “determinado en última instancia” por los intereses de las clases dominantes. Esto puede observarse, por ejemplo, en los diseños de marcos regulatorios a la medida de las empresas que fueron privatizadas en los primeros años del gobierno de Menem. O en la subordinación de objetivos presupuestarios como la educación o la salud al pago de intereses al capital financiero. La manera en que se han establecido

51 Véase, en este mismo libro, Susana de Luque y Miguel Mazzeo, “Estado y Sociedad, régimen político y régimen de acumulación. Algunos conceptos para la comprensión de la historia argentina”.

las prioridades del gobierno señala los intereses que se encuentran articulando sus acciones.

4. La democracia y un régimen político poco democrático

El peor de los analfabetos es el analfabeto político. Él no escucha, no habla, ni participa de los acontecimientos políticos. Él no sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos y el de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan bruto que se enorgullece inflando el pecho diciendo que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nacen las prostitutas, el menor abandonado, y el peor de todos los bandidos, que es el político embustero, el corrupto lacayo de los explotadores del pueblo.

Bertolt Brecht

El régimen político de los 90 interpela, indudablemente, la noción de democracia. Pues resulta que el más largo período de continuidad institucional de la democracia en la historia argentina se caracteriza por un profundo descreimiento de las instituciones, los políticos e, incluso, de la democracia misma.

Es preciso, entonces, adentrarnos y analizar la forma que asume esta democracia de los años 90. Durante la década, se produce un creciente deterioro y una desvalorización de la política y los espacios públicos; se viven percepciones de corrupción generalizada y se asocia la figura del político, el funcionario público o el dirigente gremial, con la corrupción. Estas funciones eminentemente públicas y articuladas con el bien común pasan a estar regidas por los intereses individuales. Se trata de una sensación extendida de que quien dispone de poder, lo capitalizará en beneficios propio, sin considerar el interés colectivo.

Esta sensación de decadencia, a su vez, actúa opresivamente para el cambio político progresista en la medida en que se reproduce la sensación de que “todo es igual, nada es mejor”. La década del 90 significó, de algún modo, la naturalización del espacio público con el espacio corrupto. La contracara de esta pervisión de lo público y de lo político pasa a ser la sacralización del espacio privado: la sociedad de consumo, el individualismo, la competencia.

En este apartado nos interesa caracterizar y abordar este fenómeno de una manera integral donde se articule la dinámica de lo político y lo público en el marco de los intereses y el poder económico. Esto, vale aclararlo, no significa reducir lo político a un mero reflejo de lo económico, sino establecer vasos comunicantes que permitan echar luz sobre la oscura relación entre el poder político y el poder económico.

En efecto, las relaciones entre el orden político y los distintos actores sociales condicionarán la marcha del conjunto social en la medida en que registran desiguales motivaciones económicas y, fundamentalmente, desigual poder para llevar adelante sus acciones. Los empresarios representantes del capital más concentrado se preocupan por la valorización de sus activos mucho más que por la desigualdad. Los sectores medios, ante el temor de seguir cediendo bienestar económico conseguido a lo largo del siglo, legitiman acciones fuertemente regresivas. El capital financiero que reclama por sus deudas presta atención a los recursos del Estado para tal fin, sin importar las consecuencias sociales de los ajustes.

De algún modo, estas tensiones entre los distintos actores socioeconómicos van delineando diferentes regímenes políticos, en órdenes donde el poder se ejerce de distinta forma e, incluso, muestra diferente contenido. Sin embargo, es preciso apuntar que, en el capitalismo, en la medida en que la dinámica de la acumulación económica funcione, las condiciones de reproducción del sistema tienden a gozar de mejor salud. Surgirán tensiones toda vez que esta dinámica de acumulación coexista con exclusión social creciente. La crisis económica acarrea crisis políticas.

La experiencia argentina, en este sentido, tiene gran significación. Pues muestra claras oscilaciones entre la inclusión social —por ejemplo en tiempos del primer peronismo— y la exclusión social —en el tercero—⁵²; entre el crecimiento industrial y el estancamiento y destrucción industriales. En efecto, las formas que asumió el régimen político —sus vaivenes— tampoco son comprensibles por fuera de la situación estructural por la que transitaba la economía y su capacidad de poner en movimiento una dinámica incluyente.

Un sistema donde las condiciones de reproducción de las personas depende, para una parte del salario —los trabajadores— y, para otra, de la obtención de beneficios —los capitalistas—, las disputas van a verse desarrolladas en el ámbito político de manera fuertemente correlacionada con la racionalidad económica de cada uno. Ejemplo de ello es cómo la hiperinflación —donde queda claramente desplegada toda la “violencia de la moneda”— genera un cambio en todas las dimensiones de la vida social argentina (desde el régimen de acumulación hasta el régimen político, pasando por la forma de Estado). El despliegue de estas contradicciones mostró sucesivos reordenamientos a lo largo de la década donde, mientras los distintos grupos conseguían una reproducción relativamente alineada con sus expectativas, no se acusaban mayores disonancias.

52 Sidicaro compara la práctica política de los tres gobiernos peronistas desde Perón hasta Menem. Ricardo Sidicaro, *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

El problema surgirá hacia el final de la década, cuando las distintas clases y, dentro de ellas, los distintos actores económicos, no encuentren en el orden satisfacción a sus expectativas. En el extremo, tendremos a sectores populares desocupados que no encontrarán ni siquiera la reproducción material. Indudablemente, accionarán para modificar el orden.

4.1 La posibilidad de la democracia

La democracia aparece reducida, sobre todo hacia fines de los 90, a un mero procedimiento donde el voto es el factor distintivo que la caracteriza y se diluyen otras cuestiones más profundas de la vida democrática, tales como aquellas que fundan la idea misma de la democracia, esto es, que la toma de decisiones del conjunto se corresponda con los deseos de las mayorías que estamos considerando.

La diferenciación entre distintas nociones de democracia puede contribuir a echar luz sobre la problemática. Efectivamente, el concepto de democracia remite a ideas muy distintas según quién sea el que la considera. Desde la noción meramente procedimental —donde la democracia se alcanzaría con el acto de votar— hasta las nociones más sustanciales de democracia (donde se trataría de conseguir un orden en el cual el conjunto social se regula por su propio querer). José Nun⁵³, precisamente, señala que desde los orígenes el concepto de democracia fue problemático, pues en la misma Grecia antigua designaba tanto al conjunto de los ciudadanos como a la multitud, a los pobres y a los malvados. En efecto, en Grecia aparecieron dos modalidades de organización del poder que estarían desde entonces en permanente tensión: la democracia ateniense entendida como pueblo que se autogobierna (*gobierno del pueblo*) en contraposición con el modelo espartano de *gobierno de los políticos* donde el lugar que le toca al pueblo es legitimar el gobierno, y donde queda explícitamente claro que el poder es ocupado por grupos minoritarios, en el mejor de los casos, sujeto a la legitimación popular.

En relación con las democracias modernas, señala la tensión que existe entre la democracia y el capitalismo, pues afirma que “el capitalismo y la democracia no son, por definición, sistemas necesariamente complementarios: el primero se sustenta en el derecho de propiedad y parte de una situación de desigualdad para reproducirla a escala ampliada; la segunda, en cambio, da prioridad a los derechos de ciudadanía para todos y reconoce a la libertad y a la igualdad como sus dos piedras angulares. Por eso, la dominación capitalista

53 José Nun, *op. cit.*

afronta una tensión inevitable cuando debe articularse con un régimen político democrático; y no logra hacerlo si no se establece un *compromiso*⁵⁴.

Alfredo Pucciarelli⁵⁵ señala que se trata del viejo dilema histórico de la democracia: o la igualdad política trasciende su propio ámbito y genera igualdad económica; o la creciente desigualdad económica expone la desigualdad política y genera reclamos dentro y fuera del orden social capitalista.

En este sentido, Nun apunta la existencia del compromiso de los Estados de bienestar keynesianos como condición de posibilidad —a lo largo del siglo XX— para que hayan coexistido capitalismo y democracia. Sólo ante una relativa igualdad en términos económicos, ha sido posible pensar la igualdad civil y política; de lo contrario, estas últimas aparecen como meras formalidades. Si no existe autonomía material, económica, entonces la libertad política es un simulacro. Nun, adicionalmente, señala que los cambios a favor de órdenes sociales con mayor equidad económica han venido siempre como resultado del accionar de la clase obrera y no de la burguesía, ni de los sectores medios.

Ahora bien, si consideramos que, en la medida en que en el capitalismo el poder se concentra en el poder económico, esta tensión se hace cada vez más fuerte y la discusión en torno a la posibilidad de democracia y capitalismo remite a la posibilidad que tiene el poder político de subordinar al poder económico.

Pues en la medida en que el ejercicio del voto no condicione la marcha del orden económico —en el sentido más íntimamente relacionado con la condición de vida material de las personas que forman parte de la sociedad en su conjunto— votar puede seguir siendo una práctica que el poder más concentrado tolera, e incluso estimula. En este sentido, bien puede argumentarse acerca de la existencia de una sociedad conflictivamente democrática hacia los años 60 y principios de los 70, en la medida en que distintos proyectos políticos competían en el escenario público, aun sin considerar el régimen político vigente por entonces. Resulta paradójico, pero actualmente, luego de treinta años de continuidad democrática, se han debilitado proyectos políticos alternativos al hegemónico y, así, la democracia ha perdido contenido democrático. Y el poder económico ha aumentado su capacidad de subordinar —hasta el punto de neutralizar— a la “autonomía de lo político”.

54 José Nun, *op. cit.*, p. 49.

55 Alfredo Pucciarelli: “El régimen político argentino a fines de la década. ¿Democracia impotente o cómplice?”, *Revista Sociedad* N° 16, noviembre de 2000.

4.2 Orden, poder, libertad y democracia

Basta de juegos de palabras, de artificios de sintaxis, de malabarismos formales; hay que encontrar —ahora— la gran Ley del corazón, la Ley que no sea una ley, una prisión, sino una guía para el espíritu perdido en su propio laberinto.

Antonin Artaud, *Carta a los poderes*.

A los efectos de pensar la posibilidad de la democracia, es útil reflexionar un instante acerca del orden, el poder y la libertad.

Todas las sociedades reposan en ciertas pautas institucionales que constituyen un orden. Esta noción de orden no remite a “tranquilidad” sino a la existencia de patrones de comportamiento: pautas sociales que habilitan y sancionan según se sigan los lineamientos o se decida desafiarlos. El modo de producción capitalista es, ciertamente, un tipo de orden donde las instituciones centrales que lo constituyen son la propiedad privada, el mercado, el trabajo asalariado, el Estado y la familia. Diariamente, se reproduce el orden a través de las prácticas de las personas. De este modo, el orden aparece como marco para las acciones y, a su vez, es el resultado de las acciones.

En todos los órdenes sociales existe una determinada distribución del poder. La concentración de poder, de todas maneras, va cambiando en las distintas sociedades y en los distintos ámbitos, pues no es lo mismo la capacidad de imponer normas que han tenido los emperadores en comparación con las que tiene un presidente o el Congreso. También esto sucede en ámbitos como una fábrica cuando el dueño ordena a los empleados que realicen determinada tarea, o bien cuando una madre ordena a un hijo que realice determinada acción. Digamos que el poder viene dado, entonces, por la posibilidad de que otros hagan lo que la persona con poder decide.

Ahora bien, si pensamos en el concepto de libertad, aparecen tensiones, o incluso potenciales antagonismos con las nociones de orden y poder. En la medida en que la libertad está relacionada con la posibilidad de desplegar los deseos, surgirán problemas cuando estos deseos vayan en sentido contrario al orden y a quienes ejercen poder en este orden. Por ejemplo, si un trabajador quiere no asistir al trabajo un determinado día, puesto que sus deseos así lo dictaminan, es libre de hacerlo. Sin embargo, en tanto está rompiendo con una norma, es probable que desde el poder reciba alguna sanción; incluso puede perder el empleo. No siempre los deseos van contra el orden; muchas veces hacer libremente lo que uno quiere puede estar habilitado por el orden y por el poder.

En este sentido, vale decir que la libertad, desde el punto de vista de las personas deseantes, tiene que ver con una práctica, con el ejercicio de la libertad. Y

los órdenes y los poderes pueden ser o bien más represores de la libertad o bien más habilitantes. De todos modos, vale enfatizar que la libertad sólo puede ser ejercida por el que quiere ser libre; ningún poder externo puede forzar la libertad, tan sólo puede habilitarla o restringirla.

Lo mismo sucede con la democracia; un orden puede llamarse democrático, sin que ello garantice que se haga lo que el pueblo quiere. El orden será más o menos democrático, en la medida en que habilite más o menos los deseos de las mayorías. Si los habilita más, tanto mejor, pues habrá mayor libertad. Si los habilita menos, entonces habrá mayor represión social. Lo importante es tener claro que no es suficiente la *forma* institucional “democracia” para que el *contenido* de determinado orden sea democrático.

Al igual que la libertad, la democracia tiene que ver con la práctica, con el ejercicio real del querer, con la construcción permanente de un orden habilitante. Y aquí es donde, reflexionando desde el plano de lo político, vuelve a aparecer el plano de lo económico. La equidad económica forma parte de las condiciones que habilitan la posibilidad del ejercicio de la libertad y la democracia. Dificultosamente puede ser libre aquella persona que no puede adquirir los bienes necesarios para su vida.

Para decirlo en otras palabras –a *grosso modo*–, así como en el plano individual la posesión de dinero aumenta la probabilidad de conseguir medios y bienes y, de algún modo, de hacer lo que los poseedores de dinero quieren, del mismo modo, la privación total o parcial de dinero –tal es el caso de los desempleados– disminuye la posibilidad de tener garantizada la reproducción material de la vida y disminuye así las probabilidades de ejercer la libertad.

Así está constituido el orden, con pautas, normas y leyes que lo regulan. En el capitalismo el dinero confiere poder y a través de él se puede acumular poder. Y si el poder del dinero está concentrado en pocas manos, es decir, pocas personas han acumulado grandes cantidades, entonces tienen mayor poder y estarán más interesadas en la reproducción del orden.

Como contraparte, los desposeídos –aquellos que no tienen dinero– es probable que cuestionen el orden en la medida en que están excluidos. Estas mayorías ven limitada la posibilidad de ser libres y, al mismo tiempo, un orden *formalmente* democrático se constituye en *prácticamente* antidemocrático. La inequidad económica concentra el poder económico y condiciona al poder democrático, al poder político.

La igualdad de los hombres ante la Ley, en este sentido, puede redundar en una mera formalidad a instancias de la existencia de desigualdad económica.

4.3 El funcionamiento de la forma democrática expropiatoria de los 90

Decimos “forma democrática” con el ánimo de enfatizar la separación que en la Argentina de los 90 ha tenido lugar entre el marco institucional de la democracia representativa y los sectores mayoritarios de la población. Separación que obtura y, cuando se lleva al extremo, invalida la misma idea de un funcionamiento democrático. El término “expropiatoria”, siguiendo a Pucciarelli, “no se refiere a la ganancia que surge de la explotación del trabajo ajeno, propia de la organización social de la producción capitalista, ni a ninguna otra forma de apropiación ‘tradicional’ asociada a ella, sino al ‘despojo’, es decir a la exacción de bienes ya obtenidos y a la eliminación de conquistas sociales ya consagradas, consideradas una parte del sistema de pertenencias de los sectores sociales expropiados, los ‘despojados’”⁵⁶. Se trata entonces de caracterizar el funcionamiento del aparato institucional democrático que posibilitó de manera legal, y dentro de los cánones formales de la democracia, la expropiación.

En este sentido, vale apuntar que la década del 90 significó la consolidación de una forma presidencialista de democracia, al tiempo que ha tenido lugar un rebalanceo dentro del régimen político democrático entre los tres poderes que representan el aparato institucional de la democracia representativa argentina. De hecho, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se reconfiguran posicionando al primero en la cima, rompiendo con el “equilibrio de poderes”. Se concentra en el presidente la toma de decisiones, toda vez que se trate de decisiones estratégicas, en particular en relación con los sectores dominantes.

Los “decretos de necesidad y urgencia” cobran cada vez mayor importancia y el Ejecutivo presiona sistemáticamente al Legislativo para que convalide las decisiones; en caso contrario, las medidas “salen” por decreto. Éste fue el caso de numerosas decisiones como las privatizaciones —donde el Ejecutivo presionó fuertemente a las Cámaras de Diputados y Senadores⁵⁷—, o bien el caso del involucramiento del Ejército argentino en la Guerra del Golfo (decisión decretada por el Ejecutivo).

En cuanto al funcionamiento del Parlamento, se conocerán casos de corrupción abierta, tal como las coimas que, durante el gobierno de De la Rúa, recibieron distintos senadores nacionales para la aprobación de la nueva Ley de Empleo.

56 Alfredo Pucciarelli: *La democracia que tenemos*, Buenos Aires, Serie Extramuros N° 4, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, 2002, p. 11.

57 Incluso, en medio de la sesión de la Ley de Reforma del Estado, se llegó a registrar la existencia de un “diputado trucho” en el bloque justicialista para sumar votos a favor de la aprobación de la ley.

De este modo, es preciso tener presente que el descreimiento y desprestigio de “los políticos” alcanza hasta los diputados y senadores nacionales.

En cuanto al Poder Judicial, ya hemos mencionado la ampliación de la Corte de seis a nueve miembros para conseguir la “mayoría automática” del menemismo. Esto significa que, ante casos judiciales controvertidos, cuando éstos alcanzaban la máxima autoridad judicial –la Corte Suprema de Justicia– los fallos convalidaban la voluntad del Ejecutivo.

Si bien el traspaso del poder de Menem a De la Rúa consolidó el período democrático más largo del siglo, las instituciones quedaron fuertemente desprestigiadas por casos de corrupción y falta de credibilidad en el sistema en general.

De modo tal que, recapitulando, es preciso apuntar lo siguiente: en un marco estructural en el que el poder político quedó subordinado al poder económico, dentro de las instituciones democráticas, las pautas de funcionamiento presidencialistas no hicieron otra cosa que catalizar esta subordinación.

4.4 Los partidos políticos durante los 90

Que se vayan todos.

Vox populi el 19 y 20 de diciembre de 2001

Las modalidades discursivas y de práctica política por parte de los dos partidos mayoritarios en Argentina, el peronismo y el radicalismo, acusarán un cambio en relación con la tradición de cada uno y, a su vez, asumirán características comunes. El peronismo, históricamente, se construyó como un partido donde la justicia y la equidad social eran parte central de su doctrina. Se caracterizó, a su vez, por la transmisión de una simbología donde los trabajadores y las mayorías conseguían mejorar su condición social. Sidicaro sostiene que “las argumentaciones sobre la sociedad y las soluciones de sus problemas se formularon hasta 1989 a partir de la existencia de una división tajante entre los intereses de la mayoría de los integrantes de la población, en su lenguaje el ‘pueblo’ o los trabajadores, que se hallaban enfrentados a minorías económicas, designados como el ‘capital’ o la ‘oligarquía’, vinculados a los intereses de las potencias extranjeras”⁵⁸. Estos intereses funcionaban como adversario político. La adhesión de las mayorías se articulaba en la construcción de este adversario foráneo contra los intereses naciona-

58 Véase Ricardo Sidicaro: *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)*, Buenos Aires, Serie Extramuros N° 1, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, 2001.

les. Las dos presidencias de Menem rompen con este tipo de discursividad y convocatoria, acercándose a la ideología neoliberal y a un pragmatismo “despolitizante”.

El radicalismo, por su parte, ha basado históricamente su plataforma en los derechos cívicos y la ciudadanía política. El adversario político radical históricamente ha sido el que atenta contra la democracia, originalmente lo era “el régimen” o “la oligarquía”. Sin embargo, debilitados por el fin del gobierno de Alfonsín, tienen poco margen de maniobra para oponer argumentos y resistencia a las transformaciones que venía ejecutando el peronismo desde los inicios de la década.

El elenco político conforma así un lenguaje posibilista donde la política se reduce al arte de lo posible, y el adversario se construye en el pasado, pues se argumenta desde el poder que hay que evitar repetir los errores que condujeron a la hiperinflación. Se trata de un enemigo versátil que habilitará y sellará el posibilismo político. La perdurabilidad y defensa de la convertibilidad fue sostenida durante más de diez años a instancias de un escenario político que buscaba evitar los males del pasado. Este discurso fue terriblemente efectivo para reducir los márgenes de maniobra de los gobiernos y los reclamos de las mayorías.

Los primeros años del gobierno peronista fueron acompañados, en efecto, por “éxitos” en materia económica, por lo que la reelección se da en medio de una relativa legitimidad de este partido. Al mismo tiempo comenzaban a sellarse estos cambios en la modalidad de hacer política. Una política que implicó innovaciones respecto de la tradición peronista y radical en relación con los adversarios mencionados, pues la política se fue constituyendo crecientemente en una gestión mediática, abandonando la movilización y reduciendo sus propios márgenes de maniobra.

Ante los problemas que comienzan a sucederse en la segunda presidencia —fundamentalmente asociados al desempleo y a la corrupción—, la oposición se aglutinará conformando la Alianza, resultado de un pacto entre la Unión Cívica Radical y el Frente por un País Solidario (FREPASO) que, a su vez, agrupaba sectores peronistas disidentes y de izquierda moderada.

Las sucesivas crisis de 1995, 1997 y 1999 apuntalan la necesidad de un cambio. De este modo, la Alianza enfatiza como base de su programa la lucha contra la corrupción política, sin presentar grandes innovaciones en materia económica. Los tiempos que siguieron mostrarían que los problemas trascendían la forma y los contenidos menemistas, puesto que el cambio de partido en el gobierno no trajo aparejado un cambio en ninguno de los componentes más importantes del modelo económico, político ni social.

En este sentido, es interesante analizar el vaciamiento del discurso político de la campaña electoral de la que resultó ganador De la Rúa, pues, al compa-

rar las “opciones electorales” se advierte que los candidatos no muestran mayores diferencias. En efecto, tal como señalamos, la principal bandera de la Alianza enfatizaba la necesidad de atacar la corrupción, pero omitía programas de reformulación de la política económica en un sentido más sustancial como la redistribución del ingreso, la reformulación de los gastos del Estado o el esquema impositivo. Tampoco contemplaba programas de salud, educación o políticas sociales. Esto es, se optó por intentar diferenciarse del menemismo dentro del mismo universo del modelo desestatalista.

En efecto, los pilares del funcionamiento de la sociedad no sufrieron mayores modificaciones y el modelo económico fue sostenido hasta que se derrumbó por sí solo (o por la protesta social). Y esto formaba parte del problema, es decir, la reducción de la política a los márgenes que dejaba el modelo —en este caso asociado a la convertibilidad— “intocable”. El posibilismo alcanzó el límite de lo imposible.

4.5 La democracia y el poder económico en los 90

Surgen, de esta manera, una serie de interrogantes que apuntan a la relación existente entre el régimen político y el poder económico más concentrado. ¿Qué nivel de autonomía han tenido las instituciones democráticas durante los 90 frente al capital más concentrado?, ¿es el poder económico el que reguló la toma de decisiones?, ¿en qué medida?, ¿cómo se han tomado estas decisiones?, ¿qué relación existe entre el poder del dinero y el régimen democrático?, ¿qué rol les queda a las mayorías en las decisiones dentro de la democracia actual?

En la medida en que la crisis hiperinflacionaria estalló como resultado de un conflicto distributivo por arriba —ante la exclusión del capital financiero de los planes del gobierno—, y que sólo se consiguió salir de ella a partir de una articulación de intereses entre las distintas fracciones del capital, la autonomía de la política aparece, al menos, fuertemente restringida y condicionada.

Si se consideran las grandes decisiones políticas de la década, tales como la desregulación de la economía y la reforma del Estado, y dentro de ella fundamentalmente las privatizaciones, los cambios en la educación, la salud, así como el universo de intervenciones estatales que aún seguía vigente hasta los años 80, la matriz reformista muestra claramente efectos que, lejos de contribuir al bienestar social, han significado la satisfacción de los intereses de los grupos de poder más concentrado. Los efectos de estas reformas sobre la estructura productiva significaron un aumento explosivo en la cantidad de desempleados. Desde este punto de vista, las reformas no sólo no contribuyeron al bienestar

social sino que, para esta porción muy significativa de la población, implicó la exclusión social⁵⁹.

En efecto, leyes tan controvertidas, complejas y discutibles como la Ley de Reforma del Estado o la Ley Laboral han sido sancionadas en tiempos muy reducidos y bajo fuertes presiones y maniobras de todo tipo por parte del poder económico. Vale decir también que el “acuerdo social” con los sectores mayoritarios de la población durante la hiperinflación de 1989-90 estaba más vinculado a que se tomen decisiones para cambiar—sin detenerse a analizar el contenido de los cambios— que a luchar y presionar por un cambio más progresista. Para decirlo en otras palabras: la mayor parte de la población legitimó las medidas de los primeros años del gobierno de Menem que, por cierto, fueron las más drásticas.

Y esta modalidad de funcionamiento subordinada al poder económico no fue patrimonio exclusivo del gobierno de Menem, pues el conocido caso de las coimas en el Senado tuvo lugar durante el gobierno de De la Rúa. Para graficar la manera en que se han ido moldeando las decisiones en los 90, resulta enriquecedor el análisis del comportamiento de los candidatos a suceder a Menem en las elecciones de 1999.

Estos candidatos, en tiempos preelectorales, envían a sus respectivos postulantes a ministro de Economía a Washington, donde se comprometen con el capital financiero a aplicar programas políticos que poco difieren entre sí. La sucesión al gobierno de Menem no encontró alternativas reales, sino meras variantes de un mismo modelo. Al respecto, Pucciarelli señala que “la clase política ha construido durante la última gran elección presidencial [se refiere a la de 1999], por primera vez en la Argentina, un escenario asombrosamente simplificado, un tipo de espectáculo mediático que responde, a su vez, a la reorganización audiovisual de la esfera política, donde el rol dominante lo desempeña la ‘imagen’ física, y también simbólica, de los candidatos y se excluye, deliberadamente, no sólo la confrontación de propuestas sino la propia identificación de las grandes cuestiones del momento”⁶⁰.

Y en cuanto a las exigencias del capital financiero hacia el gobierno que sucedería a Menem, Pucciarelli extracta titulares muy aleccionadores de los principales periódicos durante el período preelectoral que contribuyen a mostrar este

59 Hablamos de exclusión a partir del desempleo, puesto que en una sociedad salarial —donde, insistimos, los medios para la reproducción de la vida de las mayorías se adquieren a través del salario—, la desocupación prolongada sin cobertura social implica la privación de la vida individual y familiar, así como la exclusión de las pautas o normas sociales que fijan las modalidades de supervivencia en el capitalismo.

60 Alfredo Pucciarelli, *op. cit.*, p. 85.

rasgo: “Acaba de verse en Buenos Aires a los economistas de los principales candidatos presidenciales rindiendo examen ante los banqueros (*Página 12*, 5/6/99)”, “El mercado vota primero (...) los empresarios apoyan los planteos del Fondo (*Clarín*, 17/6/99)”; “El FMI les toma examen a Duhalde y De la Rúa (*Clarín*, 21/04/99)”⁶¹.

Este tipo de relación entre el poder económico y el sistema político que se consolida en los 90 es llamado por Basualdo *transformismo argentino*. Según el autor, “se consolida un sistema político basado en el *transformismo argentino* como sistema de dominación. (...) La autonomía relativa del sistema político desaparece, quedando férreamente subordinado a los sectores dominantes. (...) se puede afirmar que se trata de la etapa en que los dos partidos centrales que conforman el sistema político se incorporan a la órbita de los sectores dominantes, descabezando, de esta manera, al resto de los sectores sociales”⁶². El modelo de partidos políticos con formato empresario que resulta del transformismo tiene como contrapartida una gran cantidad de recursos que los sectores dominantes transfieren a las cajas partidarias, donde los sobornos, coimas y “peajes” son las modalidades de corrupción generalizada del período. Aumentó, de este modo, la capacidad del poder económico de disciplinar al conjunto de la sociedad política sin valerse ya de la necesidad de la represión física que rigió en los años de la última dictadura.

En efecto, el análisis de Basualdo permite comprender la lógica que moviliza a la corrupción del sistema político. Pues no se trata simplemente de personas que actúan de “mala fe” sino que aparecen esclarecidos los móviles y la dirección de las decisiones que se desprenden de una práctica política atravesada por la corrupción y subordinada al poder económico.

5. Las lógicas de acción colectiva de las clases subalternas

La ciudad del colono es una ciudad fuerte, toda de piedra y de hierro. Es una ciudad iluminada, asfaltada, donde los cubos de basura están siempre llenos de restos desconocidos, nunca vistos, ni siquiera soñados. Los pies del colono no se ven nunca, salvo quizá en el mar, pero jamás se está muy cerca de ellos. Pies protegidos por zapatos fuertes, mientras las calles de su ciudad son limpias, lisas, sin hoyos, sin piedras. La ciudad del colono es una ciudad barta, perezosa; su vientre está lleno de cosas buenas permanentemente. La ciudad del colono es una ciudad de blancos, de extranjeros.

61 Alfredo Pucciarelli, *op. cit.*, p. 87.

62 Véase Eduardo Basualdo, *op. cit.*, pp. 64-65.

La ciudad del colonizado, o al menos la ciudad indígena, la ciudad negra, la “medina” o barrio árabe, la reserva, es un lugar de mala fama, poblado por hombres de mala fama; allí se nace en cualquier parte, de cualquier manera; se muere en cualquier parte, de cualquier cosa. Es un mundo sin intervalos, los hombres están unos sobre otros, las casuchas unas sobre otras. La ciudad del colonizado es una ciudad hambrienta, hambrienta de pan, de carne, de zapatos, de carbón, de luz. La ciudad del colonizado es una ciudad agachada, una ciudad de rodillas, una ciudad revolcada en el fango. Es una ciudad de negros, una ciudad de bicots. La mirada que el colonizado lanza sobre la ciudad del colono es una mirada de lujuria, una mirada de deseo...

Frantz Fanon, *Los condenados de la tierra*, México, Fondo de Cultura Económica, 1963

Tal como ya hemos dicho, el conjunto de transformaciones que tuvo lugar durante la década del 90 consolidó una sociedad fuertemente polarizada. Por un lado, las minorías que se beneficiaron con las privatizaciones, la especulación financiera y la reforma del Estado —es decir, el poder económico más concentrado— vieron realizadas las expectativas de valorizar su capital y aumentar sus ingresos. Pero, por otro lado, detrás del proceso de desindustrialización y destrucción de empleos que generaron estas transformaciones, sectores mayoritarios de la población sufrieron las consecuencias del modelo neoliberal. En este apartado se analizarán, precisamente, las distintas modalidades de resistencia y lucha que desplegaron los sectores populares ante el retroceso en sus condiciones de vida.

5.1 Nuevos movimientos sociales en otros países

En la medida en que los parámetros del modelo neoliberal atravesaron a los distintos países, también las consecuencias y luchas de resistencia se extendieron por diferentes partes del mundo. De hecho, en Latinoamérica —al igual que en Argentina—, se generan nuevos movimientos sociales que cuestionan las modificaciones por las que atraviesa la sociedad moldeada según el prisma neoliberal.

En México, a principios de 1994 —el día en que entraba en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, conocido como NAFTA—, se produce un levantamiento indígena y campesino en Chiapas y nace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que reclamará por la posesión de tierras e innovará en materia de luchas políti-

cas, pues cuestiona no sólo la distribución sino la forma misma del poder. En Brasil, por su parte, más de 60.000 personas llegan a la capital desde el interior luego de una larga marcha organizada por el Movimiento de los Sin Tierra (MST). Su reclamo es por la redistribución de tierras en manos de grandes hacendados brasileños. Estos movimientos dan cuenta de las nuevas formas de lucha en sectores campesinos de Latinoamérica⁶³.

Hacia fines de la década del 90 proliferan los movimientos antiglobalización en distintas partes del mundo desarrollado que, desde diferentes perspectivas, cuestionan la realidad por la que atraviesa el capitalismo en la actualidad. En general, visualizan problemáticamente la hegemonía y el poder del capital financiero.

5.2. Las nuevas lógicas de acción colectiva en Argentina

La implementación de las medidas de los 90 generó, desde los primeros años de la década, reacciones de los sectores directamente perjudicados. En esta primera etapa, las acciones contra las privatizaciones por parte de los trabajadores del Estado son una muestra acabada de la resistencia al proceso de cambio. Sin embargo, estas movilizaciones no consiguen impedir el paso de las empresas a manos privadas. En efecto, el transformismo del sistema político también alcanzó a la cúpula sindical de las principales empresas a privatizar, proceso que debilitó las capacidades de buena parte de los trabajadores que estaban dispuestos a enfrentar la venta de las empresas y la defensa de sus empleos. Pues en los pliegos de las licitaciones se acordaron porcentajes accionarios para ser entregados a los gremios y estos recursos en buena medida fueron el “precio” que recibió la cúpula sindical para atenuar la resistencia a las privatizaciones.

La lógica de la protesta sindical tradicional sufrió de este modo un retroceso significativo en tanto el gobierno de Menem consiguió neutralizar las acciones de los principales dirigentes sindicales. Si hacia los primeros años la cooptación de los líderes moderó las acciones reivindicativas de los asalariados, a partir de 1995 la tasa de desocupación inéditamente alta cerrará un escenario de desmovilización casi generalizado⁶⁴. Ante la destrucción sistemática de empleos y la abundante cantidad de personas sin trabajo, aquellos trabajadores empleados optan por mantener el empleo, y las acciones reivindicativas o de defensa de los derechos quedan subordinadas al miedo a quedar sin trabajo.

63 En Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) emprenderá luchas similares.

64 Es preciso destacar el accionar de la CTA que, escindida de la CGT, va aglutinando gremios opositores al gobierno y lleva adelante medidas de protesta.

Este comportamiento de la clase trabajadora significó un cambio sustantivo en el escenario de conflicto entre los sectores populares y el poder económico. Se trataba de una doble novedad histórica para las acciones de “los de abajo” en Argentina: por un lado, trabajadores desmovilizados –con dirigencias gremiales mayoritariamente comprometidas con el poder– y temerosos de perder el empleo y, por otro, aquellos que habían perdido efectivamente sus empleos. Se trata de nuevos “desempleados” que ni siquiera cuentan con un espacio de organización desde donde articular las protestas, pues ya no están en una fábrica o un establecimiento sino en su hogar, diseminados por los barrios. De este modo, una gran cantidad de trabajadores pasan a estar desprovistos de medios de subsistencia y sin capacidad de hacer uso de las herramientas tradicionales de protesta.

Es en este marco en el que es preciso analizar el surgimiento del movimiento piquetero. En efecto, los piqueteros –que cobrarán protagonismo desde 1997– surgirán de sectores desocupados de distintos espacios del país: Cutral-Có y Plaza Huincul en Neuquén, Tartagal y General Mosconi en Salta, así como en el conurbano bonaerense; luego, esta modalidad de acción colectiva se extenderá por casi todos los rincones del país.

Para comprender este nuevo tipo de acción colectiva, el piquete o corte de ruta, es necesario atender a la condición económica, social y política de quienes lo llevan adelante. Se trata, por una parte, de personas que están fuera del circuito económico de manera permanente. Para decirlo en otras palabras, la acumulación y reproducción del capital ya no necesita de ellas. Es materia de discusión si esta situación es estructural o transitoria. Sin embargo, en tanto se consolidan como desempleados durante la década, se trata de grandes masas de personas que están virtualmente fuera de la sociedad salarial. Este elemento los distinguirá sustancialmente de los trabajadores que cuentan con empleo, pues la reproducción del sistema necesita de sus trabajos diariamente y esto fortalece su condición frente al poder económico, en particular frente a sus empleadores. Por otra parte, se trata de sectores con tradición de organización y lucha políticas, ya sea sindical o militante. Las organizaciones y movimientos de trabajadores desocupados surgen en espacios donde anteriormente la dinámica económica había consolidado trabajadores asalariados y donde luego se vieron expulsados de la dinámica productiva.

Para corroborar esta aseveración, basta visualizar los entornos productivos de las localidades arriba mencionadas, de las localidades donde surgen y se consolidan los cortes de ruta como herramienta de protesta. Cutral-Có y Plaza Huincul son dos pueblos neuquinos que se fundaron por y para el desempeño de la actividad petrolera, que por entonces era conducida por el Estado a través de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). En efecto, todas las activida-

des económicas desarrolladas en la zona aún hoy están subordinadas a la marcha del negocio petrolero. De modo tal que desde que se privatiza la empresa y comienza un proceso de expulsión de mano de obra asalariada, a los pocos años los efectos sobre el conjunto de las economías locales es devastador. Estos obreros expulsados del proceso cuentan con una tradición organizativa; fundamentalmente, se piensan trabajadores. El mismo caso es el de Tartagal y General Mosconi, pues si bien están localizadas casi en el otro extremo del país —en Salta— también allí existen yacimientos de petróleo y la empresa estatal contribuyó al desarrollo de estas localidades a lo largo de todo el siglo XX.

Por su parte, la especialización productiva histórica del conurbano bonaerense ha sido la industria; particularmente ha sido el núcleo del desarrollo industrial argentino durante casi cinco décadas. En efecto, el proceso de sustitución de importaciones que atraía mano de obra del interior, ampliaba los horizontes de urbanización del entorno de la Ciudad de Buenos Aires al tiempo que aumentaba el número de establecimientos productivos y la cantidad de mano de obra empleada. Tradicionalmente peronistas, los nuevos desempleados del conurbano bonaerense —desde La Matanza hasta La Plata, pasando por Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y un largo etcétera— y del sur de la Capital Federal —Barracas, Pompeya, Lugano— apelarán al corte del tránsito como medida de fuerza ante la imposibilidad de alterar las “reglas de juego” políticas⁶⁵.

A partir de la breve caracterización de la historia de estos tres escenarios fuertemente asociados a los piquetes, nos interesa formular una serie de reflexiones en torno a la extensión de nuevas formas de protesta social.

El corte de ruta aparece como alternativa ante la imposibilidad de disponer de herramientas tradicionales de protesta, tal como la huelga en los espacios de trabajo. Tal como señalamos, la cooptación de los líderes sindicales y el desempleo atentan contra el uso de la huelga. A su vez, los problemas de funcionamiento del régimen político democrático —subordinación al poder económico, falta de representatividad, corrupción, etc.— refuerzan racionalidades de protesta innovadoras.

A la luz de las consideraciones vinculadas a la dinámica de la valorización financiera realizadas anteriormente, puede sostenerse que los desocupados difícilmente sean la contracara de un proceso de modernización, sino más bien un efecto lógico y necesario de las medidas políticas tomadas en el período. Basta mencionar el ejemplo de la apertura a la importación impulsada a principios de

65 De hecho, el espacio urbano va acusando la marcha de las relaciones sociales; las localidades donde más se sienten los efectos del cierre de fábricas registran aumentos muy significativos en la desnutrición, descenso de la escolaridad, precarización en las condiciones de vida, así como aumento de los delitos contra la propiedad.

la década y los cierres de empresas que trajo aparejada para comprender que el sostenimiento de los puestos de trabajo no era prioridad del gobierno. En efecto, a instancias de los negocios de los actores más poderosos, “los de abajo” perdieron sus puestos de trabajo; es muy difícil sostener que su suerte no fue echada de antemano.

Los cortes de ruta son llevados adelante por personas que cuentan con una tradición de lucha política, modalidades organizativas mínimas y que visualizan, en general, al Estado como un interlocutor. Vale decir que dentro de los movimientos existen distintas prácticas políticas y formas de concebir el cambio social. Existen desde organizaciones cuyo accionar no trasciende la pretensión de conseguir planes sociales hasta otras cuyo objetivo es generar nuevos modelos de relación social no capitalista⁶⁶.

El surgimiento de nuevas modalidades de protesta y lucha se encuentra directamente relacionado con las transformaciones en el entramado productivo y social. En efecto, el proceso de concentración del ingreso, de valorización financiera, de destrucción de empleos, de reformulación de la forma de Estado y de languidecimiento de la democracia representativa fuerza a distintos sectores a buscar nuevos canales de participación. Estas modalidades representan una innovación en relación con el pasado y presionan por cambios en un orden social predominantemente excluyente. En pos de la vigencia de un proyecto político incluyente, las nuevas formas de protesta fuerzan a la repolitización de una sociedad donde las prácticas políticas están casi exclusivamente asociadas a los políticos y, por lo tanto, desprestigiadas.

Si se evalúa el accionar de los piqueteros considerando cómo cuestionan el orden reinante, resulta interesante constatar que se interponen en la circulación de mercancías y personas. De hecho, se trata de la crítica de los cuerpos de aquellos cuya fuerza de trabajo ya no es requerida para la reproducción del capital.

Dentro del espectro de las nuevas modalidades organizativas y de protesta, es preciso apuntar también el surgimiento de asambleas barriales hacia finales de 2001. En el marco del desprestigio de los políticos profesionales, han reaparecido prácticas que apuntan a resignificar modalidades de democracia directa. En distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, así como en otros centros

66 En tanto existe una gran porción de la población excluida de la posibilidad de acceder a un salario y, por lo tanto, a la reproducción de su vida, existirán también prácticas que subvierten el orden pero sin pretensión de construir un orden social superador. En efecto, desde que se dispararon los niveles de desempleo y pobreza han surgido nuevas estrategias de supervivencia por parte de los sectores más pobres de la población como la mendicidad o el delito.

urbanos, estas prácticas intentan recuperar terreno cedido a los mandatarios. En este marco de nuevas prácticas políticas, vale mencionar, entre otros, los escraches —realizados por las agrupaciones de hijos de desaparecidos durante la última dictadura—, el asentamiento de la “carpa blanca” —por parte de los docentes de nivel primario para protestar frente al Congreso—, el Santiagazo de 1993 —donde una masiva movilización popular incendia edificios públicos y residencias de políticos— y, finalmente, las jornadas del 19 y 20 de diciembre del año 2001, cuando miles de personas salen a las calles y, como resultado de la protesta, tiene lugar la renuncia del presidente.

6. Entre la recuperación de la historia y la construcción de una alternativa

El final de la década del 90 con los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 da cuenta de un punto de saturación y explosión por parte de distintos sectores de la población, en particular sectores medios y populares. La crisis financiera desatada por la fuga de dólares, el “corralito”, la tasa exorbitante de desempleo y los sucesivos ajustes encendieron la mecha de los desmovilizados estratos medios de la población, quienes, de hecho, tuvieron mayor presencia en la jornada del 19 de diciembre. Por su parte, los sectores populares terminaron de sellar el proceso cuando, al día siguiente, se movilizaron y cerraron la conformación de un escenario de impugnación al poder.

Sin embargo, en consonancia con el análisis que se ha presentado en este trabajo, es preciso dar cuenta de la situación por la que atraviesan los sectores que concentran mayor poder económico: el capital financiero, los grupos económicos y los conglomerados externos. Evidentemente, estas distintas fracciones de los grupos dominantes rompieron la alianza que sostuvo tanto al gobierno de Menem como al de De la Rúa. La devaluación, de hecho, convalidó las expectativas de los grupos económicos y de los sectores exportadores.

Las preguntas siguen aún vigentes: ¿es posible un acuerdo entre las distintas fracciones del capital que redunde en una dinámica incluyente?, ¿quién lidera el proceso de acumulación?, o bien, ¿quién es el que fija los criterios desde los cuales las distintas medidas de gobierno aparecen como elegibles?, ¿cómo y quién toma las decisiones que afectan al conjunto de la población?, ¿cuál es el espacio para disciplinar al capital financiero que alteró las lógicas de acumulación durante las últimas décadas?, ¿cuáles son las chances que atañen a los intentos de reconstrucción de un nuevo Estado de bienestar?, ¿hasta dónde debe permitirse que operen las lógicas de lucro y maximización de ingreso mediante los mecanismos de mercado?, ¿qué espacio existe para la constitución

de un régimen político verdaderamente democrático?, ¿qué cursos de acción pueden permitir la participación de los sectores populares en la vida política?, ¿cuáles son las probabilidades de éxito de la coexistencia entre capitalismo y democracia?

En este trabajo esperamos haber contribuido a enriquecer estos interrogantes.

Bibliografía

- Abeles, Martín, “El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa. ¿Reforma estructural o consolidación hegemónica?”, *Época. Revista Argentina de Economía Política*, año 1, N° 1, diciembre de 1999.
- Altimir, Oscar y Beccaria, Luis, “El persistente deterioro de la distribución del ingreso en la Argentina”, *Desarrollo Económico*, vol. 40, N° 160, enero-marzo de 2001.
- Argumedo, Alcira, “Pobreza y desigualdad social en el Mercosur”, intervención completa de la profesora Argumedo en el seminario “Pobreza y desigualdad social en el Mercosur”, realizado en el Microcine de la Biblioteca del Congreso, el 4 de agosto de 2000.
- Aronskind, Ricardo, *¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformaciones económicas en los noventa*, Buenos Aires, Serie Extramuros N° 2, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, 2001.
- Aronskind, Ricardo, “El 89: la hiperinflación como síntoma y como oportunidad”, *La Escena Contemporánea* N° 2, mayo de 1999.
- Aronskind, Ricardo, “Argentina en los 90, o la pulsión cortoplacista del capital”, *Herramienta* N° 12, 2000.
- Astarita, Rolando, “Plan Cavallo y ciclo de acumulación capitalista”, en *Cuadernos del Sur*, Buenos Aires, octubre de 1993.
- Auyero, Javier, *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática*, Buenos Aires, Serie Extramuros N° 5, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, 2002.
- Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Schorr, Martín, “La reestructuración y el redimensionamiento de la producción industrial argentina durante las últimas décadas”, Documento FETIA e Instituto de Estudios y Formación de la CTA, agosto de 2000.
- Baczko, Bronislaw, *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1991.
- Basualdo, Eduardo Marcelo, “Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y crisis de la valorización financiera”, *Realidad Económica*, N° 200, IADE, 2003.
- Basualdo, Eduardo Marcelo, *Acercar de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes-Flacso-Página/12, 1999.

- Basualdo, Eduardo, *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes-Flacso-IDEP, 2001.
- Basualdo, Eduardo Marcelo; Lozano, Claudio; Schorr, Martín, “Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la administración Duhalde. El nuevo plan social del gobierno”, Buenos Aires, Instituto de Estudios y Formación de la CTA, 2002.
- Basualdo, Eduardo, *Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década de los noventa*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2000.
- Bresser Pereira, Luiz, “La crisis de América Latina: ¿Consenso de Washington o crisis fiscal?”, *Pensamiento Iberoamericano*, N° 19, Madrid, 1991.
- Canelo, Paula, “La construcción de lo posible: identidades y política durante el menemismo. Argentina, 1989-1995”. Próxima publicación en la Colección de Becas de Investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
- Castel, Robert, *La metamorfosis de la cuestión social*, Buenos Aires, Paidós, 1997.
- Castellani, Ana Gabriela, “Implementación del modelo neoliberal y restricciones al desarrollo en la Argentina contemporánea”, en AA.VV., *Más allá del pensamiento único. Hacia una renovación de las ideas económicas en América Latina*, Buenos Aires, Clacso, septiembre de 2002.
- Coriati, Benjamín, *Pensar al revés*, México, Siglo XXI, 2000.
- Farinetti, Marina, “¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas de reclamo laboral en la nueva democracia argentina”, *Trabajo y Sociedad*, julio-septiembre de 1999.
- Gambina, Julio C. y Campione, Daniel, *Los años de Menem. Cirugía mayor*, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 2003.
- Gerchunoff Pablo y Torre, Juan Carlos, “La política de liberalización económica en la administración de Menem”, *Desarrollo Económico* N° 36, octubre-diciembre de 1996.
- Giosa Zuazúa, Noemí, “Desempleo y precariedad laboral en la Argentina de los años 90”, *Época. Revista Argentina de Economía Política*, año 1, N° 1, diciembre de 1999.
- Gorz, André, *Miserias del presente, riqueza de lo posible*, Buenos Aires, Paidós, 1998.
- Grüner, Eduardo, “La parte y los Todos, Universalismo vs. Particularismos: las aporías ideológicas de la globalización (post)moderna”, *Ciclos*, año VII, vol. VII, N° 12, primer semestre de 1997.
- Hobsbawm, Eric, *Historia del Siglo XX*, Buenos Aires, Crítica, 1997.
- Iñigo Carrera, Juan, “La acumulación de capital en la Argentina”, Buenos Aires, Centro para la Investigación como Crítica Práctica (CICP), agosto de 1998.
- Matellanes, Marcelo, *Del maltrato social. Conceptos son afectos*, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2003.
- Merklen, Denis, “Frente a las ideas de pobreza y exclusión: Marginalidad”, *Relaciones* N° 167, Buenos Aires, abril de 1998.
- Monza, Alfredo, “La teoría del cambio tecnológico y las economías dependientes”, *Desarrollo Económico*, vol. 12, N° 46, Buenos Aires, 1972.
- Murillo, María Victoria, “La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la primera presidencia Menem”, *Desarrollo Económico*, vol. 37, N° 147, octubre-diciembre de 1997.
- Nochteff, Hugo, “La política económica en la Argentina de los noventa. Una mirada de conjunto”, *Época. Revista Argentina de Economía Política*, año 1, N° 1, diciembre de 1999.

- Nun, José, *Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.
- Pucciarelli, Alfredo, “¿Crisis o decadencia? Hipótesis sobre el significado de algunas transformaciones recientes de la sociedad argentina”, *Sociedad*, N° 13, octubre de 1998.
- Pucciarelli, Alfredo, “El régimen político argentino a fines de la década. ¿Democracia impotente o cómplice?”, *Sociedad* N° 16, noviembre de 2000.
- Pucciarelli, Alfredo, *La democracia que tenemos*, Buenos Aires, Serie Extramuros N° 4, Libros del Rojas, UBA, 2002.
- Rapoport, Mario, “La globalización económica: ideologías, realidad, historia”, *Ciclos*, N° 12, primer semestre 1997.
- Rapoport, Mario, *Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)*, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2000.
- Romero, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- Schvarzer, Jorge, *Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y 2000*, Buenos Aires, A-Z Editora, 1998.
- Schvarzer, Jorge, *La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina*, Buenos Aires, Planeta, 1996.
- Sidicaro, Ricardo, “Identidades políticas y adversarios sociales”, *Relato de Hechos e Ideas* 1: 77-84, 1990.
- Sidicaro, Ricardo, “Poder político, liberalismo económico y sectores populares, 1989-1995”, en AA.VV., *Peronismo y menemismo*, Buenos Aires, Ediciones El Cielo por Asalto, 1995.
- Sidicaro, Ricardo, *La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001)*, Buenos Aires, Serie Extramuros N° 1, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, 2001.
- Sidicaro, Ricardo, *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.
- Tarcus, Horacio: “La crisis del Estado populista en la Argentina, 1976 - 1990”, *Realidad Económica*, N° 107, del 1 de abril al 15 de mayo de 1992.
- Torre, Juan Carlos y Gerchunoff, Pablo, “La política de liberalización económica en la administración de Menem”, *Desarrollo Económico*, N° 143, octubre-diciembre de 1996.
- Vezzetti, Hugo; Sidicaro, Ricardo y Sabato, Hilda, “Sociedad, Estado, nación, democracia: la cuestión argentina”, *Punto de Vista* N° 72, abril de 2002.
- Williamson John, “Revisión del Consenso de Washington”, en Emmerij, Louis y Núñez del Arco, José (comps.), *El desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI*, Washington DC, BID, 1998.



A modo de epílogo: la crisis de 2001 en el espejo de la historia

Según Eric Hobsbawm, la herramienta más ventajosa con que cuentan los historiadores es la visión panorámica del pasado, es decir, la perspectiva global a la que van accediendo cuando el tiempo ha transcurrido, y es más sencillo determinar cómo los procesos de cambio produjeron resultados contundentes que clarifican las transformaciones silenciosas que venían ocurriendo. Pero a veces sucede que el momento en que se elabora esta visión retrospectiva coincide con cimbronazos históricos que obligan a revisarlo todo en función de lo que revelan los últimos sucesos.

La crisis de 2001 estimuló un nuevo ciclo de interrogaciones al pasado, formuladas con la angustia y la esperanza de esos días. Como buen acontecimiento de dimensiones históricas indujo a que el presente, el pasado y el futuro se conjugaran en la mente de los protagonistas para comprender qué era lo que estaba sucediendo. La sociedad volvía la vista atrás en busca de explicaciones, de responsables en el tiempo, y lo hacía en un momento que muchos percibían como el inicio de un nuevo ciclo. Poco después, avanzado el hundimiento social más profundo de 2002, la situación planteaba cristales aumentativos a través de los cuales observar la parábola completa del “sueño argentino”. Esto era perceptible en el campo popular, académico, periodístico, artístico, y en todo lugar donde la crisis convocaba a los imaginarios históricos dominantes para explicar el derrumbe. Desde el pozo de 2002, tomaba dimensiones hiperbólicas la figura de una curva nacional conducente a la ruina económica y moral, se agigantaban las imágenes de una expoliación permanente, o bien, de un país rico que lo había desperdiciado todo. La crisis convocaba a viejas interpretaciones del “fracaso argentino” para explicar –bien o mal– lo que estaba sucediendo. Algunas culpaban a la clase dominante o dirigente local, otras a la sociedad toda. Las explicaciones más sistémicas no creían que hubiera un “factor argentino” en el fracaso, en tanto concebían la crisis como el destino que el capitalismo central había determinado para el capitalismo periférico.

Los éxitos editoriales de Jorge Lanata, *Argentinos* (2002) y *Argentinos II* (2003),

y de Felipe Pigna, *Los mitos de la Historia Argentina 1* (2004) y 2 (2005), pueden ser tomados como reflejos de los movimientos más comunes en la imaginación histórica predominante fuera de los círculos intelectuales. Estos autores proyectaban las indignaciones colectivas del presente a los orígenes de Argentina, y lo hacían con las formas y los guiños de la narración periodística vigente. De algún modo, todo el arco del pasado desde los tiempos virreinales era visto a la luz de la corrupción que el menemismo había puesto en primerísimo plano; los honestos y deshonestos protagonizaban buena parte del conflicto en la trama narrada, dejando poco espacio a las estructuras y procesos de cambios en el orden político, económico, ideológico, no atribuibles a pocos artífices. La fructífera tarea de señalar invariantes en la historia de un país se veía empobrecida al quedar a un lado las constantes más densas, en favor de epifenómenos como la corrupción, tal como sucedía en la visión mediática predominante sobre el menemismo. En cuanto a lograr empatía con el imaginario histórico más extendido en la sociedad, estos autores fueron tan exitosos como los revisionistas de los años 30 y 40 al momento de cuestionar la versión estatal del pasado, durante la primera “década infame”.

Quienes participamos en la escritura de este libro, también nos vimos en la obligación de preguntarnos si el cimbronazo histórico al que asistíamos planteaba modificaciones a los estudios del pasado que ya habíamos empezado a elaborar con miras a esta publicación. Por ejemplo, ¿qué episodios o nudos relevantes de la trama histórica podían ser reformulados o confirmados en su interpretación, por las potentes luces y sombras que los años 2001 y 2002 proyectaban sobre el pasado de Argentina? De las interpretaciones clásicas de la Argentina post-55 –Portantiero (1973), O’Donnell (1977), Sabato-Schvarzer (1991), Cavarozzi (1997)–, ¿cuál explicaba mejor lo que ahora sucedía en torno a los reacomodamientos interburgueses de 2001, y a los que comenzaban a definirse durante el gobierno de Eduardo Duhalde, tras la devaluación? Y sobre todo, la crisis vista en una línea de tiempo más extensa, ¿reforzaba o planteaba matices a los esquemas que nosotros mismos, los autores de este libro, habíamos discutido para abordar el derrotero histórico de Argentina?

Hasta ese momento, el ordenador más básico que habíamos consensuado seguía a grandes rasgos un texto muy panorámico de Horacio Tarcus, donde a vuelo de pájaro se periodizaba la historia argentina tomando como criterio de corte los momentos de ruptura y recomposición de la dominación social¹. Es decir, los cambios en el orden dominante producidos por la interacción dinámica entre el

1 Horacio Tarcus, “La crisis del Estado Populista en la Argentina, 1976-1990”, *Revista Realidad Económica*, N° 107, 1992.

modelo de acumulación, la forma de Estado, el régimen político, y más implícitamente, las luchas populares como motor del cambio. En las reuniones del equipo autoral para actualizar bibliografía, afinar conceptos e intercambiar criterios de abordaje de los temas, encontrábamos que allí había un punto de partida para reorganizar nuestra mirada en función de una mejor iluminación recíproca entre el pasado y el presente. Entonces sobrevino la crisis, y el trabajo de Eduardo Basualdo (publicado en agosto de 2001) acerca del desarrollo de la valorización financiera fue un aporte a nuestra visión de los últimos 25 años². Lo que valorábamos de este libro era el modo en que reconstruía un mecanismo tan complejo de acumulación y circulación de capitales en fuga. También era relevante la pregunta que cruzaba el texto: ¿cómo había sido posible que el modelo económico destructivo y antipopular instalado durante la dictadura, lejos de retroceder en tiempos democráticos, lograra desarrollarse más acabadamente, alcanzando durante el menemismo una fase de concreciones muy ambicionadas por las burguesías locales y extranjeras que habían dominado durante el régimen militar? Los acontecimientos de finales de 2001 planteaban nuevas preguntas al texto de Basualdo: ¿por qué el modelo neoliberal y el capital financiero habían agotado en ese momento su capacidad de inmovilizar a los sectores populares mediante la cooptación de dirigentes? ¿Por qué no antes ni después? ¿Qué sucedía ahora con los disciplinadores sociales que el modelo había desplegado en distintas etapas de su desarrollo: genocidio, hiperinflación, desocupación estructural? ¿Lograría sobrevivir a esta crisis el modelo instalado durante la dictadura, o esta vez sí se conformaría una alianza política anti-valorización financiera capaz de resistir la cooptación?

*

Perfilando el espejo de la historia hacia un pasado más lejano, la crisis de 2001 puede ser contrastada, en tanto “primavera de los pueblos”, con el 17 de octubre de 1945 y el 29 de mayo de 1969, en busca de elementos comunes y diferenciales que permitan apreciar lo particular de cada episodio. A grandes rasgos, los tres consistieron en levantamientos populares que, luego de un período de acumulación intensa de conflictos, impugnaron al régimen político y al modelo de acumulación vigente. Los trabajadores del 17 de octubre cuestionaban la corrupción de la Década Infame y el carácter no redistributivo del modelo de sustitución de

2 Eduardo Basualdo, *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina. Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2001.

importaciones en su etapa defensiva. La protesta social que disparó el Cordobazo resistía, entre otras cosas, a la dictadura antiperonista de Onganía y la privación relativa que para los trabajadores implicaba el proyecto desarrollista.

Algo análogo sucedió en 2001. El despertar popular de diciembre señalaba no sólo la crisis del patrón de acumulación que había impuesto la dictadura, sino la crisis de un régimen político y de una cultura que asignaba a los sectores populares el rol de espectadores y sujetos pasivos de la historia. En el inicio de las jornadas del 19 y 20, la multitud en cada barrio sentía encarnar un “pueblo” que, después de acumular quebrantamientos y derrotas, asumía de nuevo el protagonismo para producir hechos irreversibles. Las movilizaciones masivas en distintos espacios simbólicos, fundamentalmente la Plaza de Mayo, retomaban una tradición que muchos daban por enterrada. Es decir, la lógica que el peronismo había inaugurado el 17 de octubre (el pueblo deliberando, asumiéndose portador del interés nacional, y de algún modo gobernando directamente a través de la movilización masiva) recobraba vigencia. Con esto se ponía en crisis la estrategia de disciplinamiento social basada en la represión y en los efectos de la hiperinflación y el desempleo masivo. En más de un aspecto se puede afirmar que el 19 y 20 de diciembre ponían en evidencia los procesos de recomposición del campo popular que habían comenzado antes, pero que a partir de allí adquirirían visibilidad pública, a medida que avanzaba el proceso de conversión de la “multitud” (informe, sin objetivos proclamados colectivamente) en “pueblo” (encaminado hacia propósitos más definidos)³.

Hasta aquí el año 2001, visto a grandes rasgos, presentaba una fisonomía análoga a los acontecimientos de 1945 y 1969, pero contrastada en forma menos superficial con aquellas irrupciones, tuvo desde luego un buen número de aspectos singulares. No sólo ocurrió en medio de la crisis social más honda de Argentina, sino que fue la primera reacción popular que hizo caer a un gobierno elegido en elecciones transparentes sin proscripciones, lo que señalaba un nivel de descrédito sin precedentes de la clase política posdictadura y del sistema democrático-representativo entendido como un dispositivo escenográfico, estratégico, destinado a conservar el *statu quo* social. La “multitud rumbo al pueblo” de 2001 comenzó a visualizar al régimen político inaugurado en 1983 como la encarnación de la opresión general legitimada en mecanismos engañosos, como un obstáculo que le impedía a la sociedad coincidir con ella misma. Las desigualdades sociales sancionadas por el mercado tenían un correlato exacto en la política. La “democracia” no había funcionado como sistema de corrección de las desigualdades, por el contrario, las había agravado fuertemente,

3 Nos permitimos utilizar el término “multitud”, con independencia del significado novedoso que le confieren Antonio Negri y Michael Hardt en *Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio*, Madrid, Debate, 2004.

como nunca antes. El período más extenso de la democracia formal no fraudulenta había coincidido con el período de mayor concentración del ingreso, empobrecimiento y descomposición social. Entre Menem y la Alianza no parecía haber sino continuidades. El “impuestazo” de fines de 1999, el *affaire* de las Banelco (pago de coimas a los senadores por parte del gobierno para aprobar una nueva ley que completara el proceso de flexibilización laboral), un recorte a los sueldos del sector público hacia mediados del año 2000, un recorte de gastos para el presupuesto de 2001, y finalmente, la vuelta de Domingo Cavallo, eran evidencias de continuidad para las clases subalternas que se hundían en la pobreza más profunda. La fuga masiva de capitales y el endeudamiento de 2001 permitían una comprensión más cabal de los circuitos de valorización financiera que ya habían sido denunciados durante la última dictadura y el menemismo.

Ya en las elecciones legislativas de octubre de 2001, para muchos argentinos, no votar, votar en blanco o impugnar el voto había significado ejercer el derecho de oponerse a la propia denigración, lo que ya había reflejado el reclamo por una democracia menos virtual en los procesos, en las formas y en las estructuras, un fuerte cuestionamiento a la democracia concebida como una mera excursión bianual a las urnas. El “voto bronca” (blanco o anulado) había llegado al 27 por ciento, y la abstención había trepado del 20 por ciento que promediaba en los años 90 a un 32 por ciento. Pero el “voto bronca”, representado por ejemplo en las boletas de Clemente u otros personajes de historieta o series de TV, expresaba un malestar muy variado. El discurso “antipolítico” también era impulsado por sectores de la derecha, como Radio 10, que en el fondo anhelaban un gobierno directo de los mercados sin la mediación política⁴.

Donde sí el cuestionamiento al régimen político tenía proyección de izquierda, era en las asambleas barriales del verano de 2002. Allí existieron planteamientos de impugnación al sistema representativo, con tanteos de autogestión comunal que hacían recordar a la militancia *sans-culotte* de la Revolución Francesa al declarar la soberanía de las secciones de París dentro de sus muros, recelando del espacio parlamentario controlado por la burguesía. En boca de muchos oradores barriales, “que se vayan todos” implicaba mucho más que un recambio de las figuras políticas, aunque esos oradores no terminaran de sugerir un sistema de democracia directa sin representación que pareciera viable para una nación de grandes dimensiones.

La columna vertebral de la conversión de la “multitud” en “pueblo” estuvo conformada por el movimiento piquetero, el movimiento de fábricas recuperadas y el movimiento asambleario. A esto hay que sumar el auge de una cultura

4 De hecho la campaña por incluir a Clemente en el sobre electoral fue impulsada por Radio Mega, perteneciente al empresario Daniel Hadad.

de comunicación alternativa articulada por Internet y otras tecnologías. Ninguna eclosión popular en Argentina había sido cubierta en cada rincón por pequeñas agencias de noticias autogestionadas, grupo de fotógrafos o documentalistas autónomos como en 2001.

Pero la eclosión de 2001 fue una “primavera de los pueblos” más efímera si se la compara con los estados de movilización que siguieron a 1945 y a 1969. Sus bases sociales se separaron rápidamente, y dos años más tarde, el sector conservador de la clase media apostaba fuertemente a la desmovilización, reclamando al Estado que reprimiera los piquetes en los accesos metropolitanos. La “multitud rumbo al pueblo” de 2001 había sido más heterogénea y desarticulada desde el comienzo, por debajo de su aparente mancomunidad. Es cierto que en diciembre los ahorristas y pequeños comerciantes afectados por el corralito aplaudieron a las columnas piqueteras y escracharon cerca de ellas a los políticos más identificados con la reciente Década infame. Incluso arribaban sus reclamos a los nuevos espacios deliberativos donde militantes y ex militantes de izquierda proponían redoblar la apuesta popular en dirección a un horizonte social más igualitario. Pero la unidad entre “piquetes y cacerolas”, “vecinos y militantes”, no duró mucho, y pronto se hizo perceptible que “la multitud rumbo al pueblo” de 2001 no tenía la uniformidad de clase, ni de intereses y perspectivas, de quienes habían colmado la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945. Tampoco estaba unida por una estructura de sentimientos y de la experiencia identitaria con alto poder aglutinante. Ni por el enlace múltiple (laboral, sindical, barrial, experiencial) de los obreros colectivos automotrices de la ciudad de Córdoba en 1969. Menos por el convencimiento ideológico, basado en la inminencia del triunfo revolucionario, que motorizaba al torrente social post-Cordobazo.

El “Argentinazo” de 2001, a diferencia del 17 de octubre y el Cordobazo, tuvo lugar en el mundo jalonado por la crisis de la izquierda mundial luego del derrumbe del sistema soviético en 1989-1991 y del pronunciado giro capitalista de China comunista. Sin embargo, en octubre de 2001 los partidos de izquierda habían hecho una muy buena elección en las grandes ciudades del país, y conservaban prestigio entre las multitudes de diciembre. Pero privilegiaron el trabajo de cooptación en los nuevos espacios, desestimando la posibilidad de conformar una alianza electoral que canalizara el circunstancial giro a la izquierda de buena parte de la sociedad. Al lado de los militantes trotskistas, también se hacía oír el relativismo de la época aplicado al “qué hacer” político, y nociones de resistencia como “cambiar el mundo sin tomar el poder”⁵. En

5 La expresión pertenece a John Holloway, *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy*, segunda edición, editora Revista Herramienta, Buenos Aires, y Universidad Autónoma de Puebla, México, 2002.

muchos de los miles de espacios colectivos que surgieron –huertas y comedores comunitarios, centros culturales– reaparecieron también nociones del viejo anarquismo, recelosas de todo liderazgo. La “multitud rumbo al pueblo” del 19 y 20 de diciembre fue más dispersa en varios sentidos, comenzando por el recorrido espacial-urbano, más repartido que en 1945, si bien un buen número de los manifestantes buscó confluir en la Plaza de Mayo. El ideario compartido de 2001, el denominador común, era más estrecho y difuso en cuanto a cómo seguir; “que se vayan todos” era impreciso y limitado en sus líneas de continuidad.

Lo que unía al último sector incorporado a la protesta social (buena parte de los sectores medios) era la indignación, el hartazgo, la sensación de que el colapso económico con que amenazaba el índice de riesgo país iba a suceder de cualquier modo, y valía la pena precipitar la caída de un gobierno que sólo agravaría los problemas. Además pronto se tejió una red de sentimientos comunes propios de las experiencias de este tipo de acontecimientos. Como en 1945, las movilizaciones de diciembre exhibían elementos de mentalidad característicos de las “primaveras de los pueblos”: optimismo con respecto al cambio luego de una larga fase de resignación, fraternidad, convencimiento de la fortaleza y la bondad del pueblo, anhelo de felicidad “aquí y ahora”. Pero también pesaba en este caso una dosis de sentimiento de fracaso colectivo, de autoinculpación que los estudiosos del 17 de octubre no han registrado que haya existido en aquel momento. Daniel James sí ha captado la recuperación de la autoestima que vivieron los trabajadores peronistas al ponerse en movimiento desde extramuros de la ciudad, pero aquel pasaje del miedo al valor, del complejo al orgullo, no incluía el sentimiento de culpa de quienes en 2001 reaccionaban por primera vez; muchos de ellos debían procesar de algún modo la reelección de Menem en 1995, y la elección de De la Rúa en 1999. Distinta era la situación de los más jóvenes que protagonizaron el enfrentamiento más duro con las fuerzas represivas el 20 de diciembre⁶.

Otro rasgo singular de 2001 se relaciona con el sector social y sujeto colectivo más radical y persistente de ese año y los sucesivos: el movimiento de trabajadores desocupados o piqueteros⁷. En contraste con los trabajadores ocupados de 1945, y más aun con los obreros calificados de la industria automotriz cordobe-

6 La batalla callejera por la ocupación de la Plaza de Mayo tuvo un saldo de 7 muertos en el centro de Buenos Aires. Los muertos en todo el país fueron 37, la mayoría jóvenes. Hubo 3.500 detenidos.

7 Véase Miguel Mazzeo, *Piqueteros. Notas para una tipología*, Buenos Aires, Manuel Suárez Editor, 2004.

sa de 1969, el movimiento piquetero estaba compuesto por las capas más pobres y marginadas de la clase trabajadora. Este sector había asumido el protagonismo a fines de los años 90 frente a la inmovilidad relativa del grueso de los trabajadores ocupados. Por tratarse del sector más marginado de la clase obrera, sus recursos organizativos, materiales y políticos eran de una pobreza muy visible. Sin embargo, pese a tratarse de un movimiento que se definía por su carencia, en poco tiempo, la acumulación de experiencia hizo de las organizaciones piqueteras no sólo parte de un movimiento reactivo ante la miseria y la falta de trabajo, sino proactivo, en tanto fue capaz de instalar propuestas universales en el horizonte de reclamos sociales que incluían a los trabajadores ocupados. Lejos de un “milagro sociológico”, las organizaciones piqueteras tenían profundas raíces territoriales que en algunos casos habían sobrevivido en estado de larva para reactivarse a fines de los años 90. Crecieron fuertemente en partidos bonaerenses como Quilmes y La Matanza, donde en los años 80 se habían desarrollado movimientos de tomas de tierra para asentamientos populares, con un componente antidictatorial. Los analistas señalan que en Argentina no hubiera surgido una movilización tan importante de trabajadores desocupados sin la experiencia previa del sindicalismo combativo. La herencia ideológica a partir de la cual el movimiento piquetero comenzó a interpelar directamente al Estado era densa y compleja. Sin embargo, la situación de despojo desde la cual los trabajadores desocupados se vieron obligados a pensarlo todo nuevamente, en la intemperie, dio lugar a una fresca ideológica que muchos han resaltado en las figuras de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki: dos exponentes de una nueva generación de militantes, tan dispuestos a “poner el cuerpo” como la militancia de los 60 y 70, menos proclives a la aprobación o reprobación del otro por su fama política.

Como había sucedido con la guerrilla entre 1969 y 1973, desde fines de 2001 y mediados de 2002, el movimiento piquetero, junto al movimiento asambleario y al movimiento de fábricas recuperadas, se constituyó en un “atractor social”, una experiencia valorada por las clases populares, sectores medios y extranjeros en busca de modelos asociativos alternativos. Pero, conforme avanzó la recomposición política y económica a partir de 2003, esta condición se deterioró aceleradamente.

La descomposición del “pueblo de 2001” fue tan rápida que para muchos analistas echó por tierra las ilusiones de diciembre, excitadas por las luces del acontecimiento y sus paisajes. Muchos que al principio vieron en diciembre más de lo que era, volcaron sus ilusiones perdidas en ver menos de lo que realmente había sido. Así, el análisis del 2001 volvía a estar afectado por la desmesura. Aún hoy los historiadores discuten el legado del 45 y del 69. El sentido que se le confiere a estos acontecimientos está lejos de ser unánime. Pero el peso de cada uno en la

trama argentina –para quienes los reivindican o para quienes los deploran– está transitoriamente establecido. No ocurre lo mismo con el legado de 2001, es menos lo que hoy se puede asegurar del sentido histórico de diciembre en el largo hilo temporal; qué cambió y qué permaneció inalterado para los sectores populares que lo llevaron adelante, será interpretado en función de lo que suceda en el futuro.

Con todo, dos tendencias parecieron afirmarse entre 2003 y 2005. En lo alto de la sociedad, la crisis derivó en una recomposición de los sectores dominantes consistente en el declive de la hegemonía de la valorización financiera, en favor de sectores ligados al capital productivo (exportadores e industria sustitutiva). Devaluación mediante, estos sectores lograron compartir beneficios que el capital financiero y empresas de servicios privatizadas concentraban en el último tiempo. En lo bajo de la estructura social, el movimiento de protesta que afloró en diciembre de 2001 sigue en desarrollo, aunque su cauce es más subterráneo, como antes de diciembre, pero redoblado en organización y experiencia. Muchos espacios deliberativos adquirieron consistencia al “materializarse” en emprendimientos cooperativos. Al mismo tiempo, el crecimiento del empleo fortaleció la capacidad de reclamo de los trabajadores ocupados.

La pregunta que el espejo de la historia nos devuelve a propósito del legado de 2001, está vinculada a estas dos tendencias: el movimiento popular que emergió en 2001, ¿logrará que la recomposición capitalista en lo alto implique un avance en la redistribución como sucedió luego del 17 de octubre? ¿Es posible un avance de esa naturaleza en el estadio actual del capitalismo periférico, un mejor reparto de la riqueza sin afectar los pilares de la sociedad capitalista? Luego del 17 de octubre, los cambios en la distribución del ingreso habían sido afines a la estrategia de una burguesía victoriosa en su alianza electoral con sectores clave de la sociedad, al tiempo que la intervención del Estado estaba a tono con la economía de bienestar keynesiana de posguerra. Estos cambios se habían dado en el marco de un capitalismo central presionado a la igualdad por el socialismo fronterizo que en 1949 concretaba su expansión territorial más extraordinaria. Ninguna presión semejante existe en el presente global. Sin embargo, en Latinoamérica, no cesan de llegar al poder gobiernos con promesas de equidad y de integración regional más vinculados a las luchas sociales. Aunque al día de hoy estos gobiernos no hayan concretado esas promesas, se fue instalando en el continente más desigual del planeta, una expectativa popular por la igualdad, una presión desde abajo más articulada que en los años 90.

*Los autores
Febrero de 2006*





